



Memoria Anual del Secretario General sobre la Labor de la Organización

16 de junio de 1966—15 de junio de 1967

ASAMBLEA GENERAL

DOCUMENTOS OFICIALES: VIGESIMO SEGUNDO PERIODO DE SESIONES
SUPLEMENTO No. 1 (A/6701)

NACIONES UNIDAS

Memoria Anual del Secretario General sobre la Labor de la Organización

16 de junio de 1966—15 de junio de 1967

ASAMBLEA GENERAL

DOCUMENTOS OFICIALES: VIGESIMO SEGUNDO PERIODO DE SESIONES

SUPLEMENTO No. 1 (A/6701)



NACIONES UNIDAS

Nueva York, 1967

NOTA

Las firmas de los documentos de las Naciones Unidas se componen de letras mayúsculas y cifras. La mención de una de tales firmas indica que se hace referencia a un documento de las Naciones Unidas.

Indice

	<i>Página</i>
PRÓLOGO	ix
SIGLAS	x
I. LA SITUACIÓN EN EL ORIENTE MEDIO	1
II. LA OPERACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN CHIPRE	19
III. OTROS ASUNTOS POLÍTICOS Y DE SEGURIDAD	
A. <i>El desarme y otros asuntos conexos</i>	21
B. <i>Efectos de las radiaciones atómicas</i>	28
C. <i>Utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos</i>	30
D. <i>Admisión de nuevos Miembros</i>	33
E. <i>Examen de la situación en Rhodesia del Sur por el Consejo de Seguridad</i>	33
F. <i>La política de apartheid del Gobierno de la República de Sudáfrica</i> ..	37
G. <i>Denuncia de la República Democrática del Congo contra Portugal</i> ..	40
H. <i>La situación en la República Dominicana</i>	42
I. <i>Representación de China en las Naciones Unidas</i>	43
J. <i>La cuestión de Corea</i>	45
K. <i>Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas</i>	48
L. <i>La cuestión de Palestina</i>	48
M. <i>Asistencia a los refugiados de Palestina</i>	54
N. <i>Reclamación del Reino Unido contra el Yemen</i>	57
O. <i>Observancia estricta de la prohibición de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en las relaciones internacionales y del derecho de los pueblos a la libre determinación</i>	59
P. <i>Arreglo pacífico de controversias</i>	60
Q. <i>Estado de la aplicación de la Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de los Estados y protección de su independencia y soberanía</i>	61
R. <i>Cooperación entre las Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana</i>	62
S. <i>Año de la Cooperación Internacional</i>	62
T. <i>Nombramiento del Secretario General de las Naciones Unidas</i>	63
IV. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y ASUNTOS CONEXOS	
A. <i>Tercer informe del Comité Especial</i>	67
B. <i>Consideración por la Asamblea General en su vigésimo primer período de sesiones</i>	67
C. <i>Continuación de los trabajos del Comité Especial</i>	70
D. <i>Consideración por la Asamblea General en su quinto período extraordinario de sesiones</i>	70

V. I.A SITUACIÓN CON RESPECTO A LA APLICACIÓN DE LA DECLARACIÓN SOBRE LA CONCESIÓN DE LA INDEPENDENCIA A LOS PAÍSES Y PUEBLOS COLONIALES

A. Aspectos generales	73
B. Decisiones sobre distintos territorios	75
1. Rhodesia del Sur	75
2. Africa Sudoccidental	76
3. Territorios bajo administración portuguesa	78
4. Adén	79
5. Basutolandia, Bechuania y Swazilandia	80
6. Somalia Francesa	80
7. Guinea Ecuatorial	81
8. Ifni y Sahara Español	81
9. Gibraltar	81
10. Islas Viti	82
11. Islas Malvinas (Falkland Islands)	82
12. Antigua, Bahamas, Bermudas, Dominica, Granada, Guam, Isla Mauricio, Isla Pitcairn, Islas Caimán, Islas Cocos (Keeling), Islas Gilbert y Ellice, Islas Salomón, Islas Sevchelles, Islas Tokelau, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos de América, Montserrat, Niue, Nuevas Hébridas, Samoa Americana, San Cristóbal-Nieves-Anguila, San Vicente, Santa Elena y Santa Lucía	82
13. Omán	83

VI. ASUNTOS RELATIVOS A LOS TERRITORIOS EN FIDEICOMISO Y A LOS TERRITORIOS NO AUTÓNOMOS

A. Territorios en fideicomiso	85
1. Trabajos del Consejo de Administración Fiduciaria	85
2. Decisiones relativas a los territorios en fideicomiso	85
B. Territorios no autónomos	86
1. Transmisión de información en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas	86
2. Estudio de la información transmitida por los Estados Miembros administradores	86
3. Becas y programas especiales de capacitación	87

VII. CUESTIONES DE DERECHOS HUMANOS

A. Derechos Humanos	89
1. Instrumentos internacionales	89
2. Año Internacional de los Derechos Humanos	91
3. Informes periódicos sobre derechos humanos	92
4. Castigo de los criminales de guerra y de las personas que hayan cometido crimen de lesa humanidad	94
5. La cuestión de las violaciones de los derechos humanos	94
6. Cuestión de hacer cumplir las disposiciones sobre derechos humanos por conducto de un Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos o de algún organismo internacional apropiado	96
7. Esclavitud	97
8. Estudios de derechos específicos o grupos de derechos	97
9. Prevención de discriminaciones y protección a las minorías	97
10. Comunicaciones relativas a los derechos humanos	98
11. Anuario de los Derechos Humanos	99
12. Servicios de asesoramiento	99

	<i>Página</i>
B. <i>Condición jurídica y social de la mujer</i>	99
1. Proyecto de declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer	99
2. Asistencia de las Naciones Unidas para el adelanto de la mujer ..	100
3. Derechos políticos de la mujer	100
4. Condición de la mujer en el derecho privado	101
5. Repercusiones de las resoluciones y recomendaciones de la Co- misión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en las le- gislaciones nacionales	101
6. Posibilidades de instrucción para la mujer	101
7. Derechos económicos y participación de la mujer en la vida económica	101
 VIII. ASUNTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES	
A. <i>Cuestiones generales y métodos relativos al desarrollo</i>	103
1. La situación económica y social en el mundo	103
2. La situación demográfica en el mundo	105
3. Asistencia económica internacional a los países menos desarrollados	106
4. Planificación y proyecciones para el desarrollo	109
5. El presupuesto como instrumento de programación del des- arrollo económico	110
6. Aplicación de la ciencia y la tecnología en beneficio de las regiones menos desarrolladas	110
7. Patentes y transmisión de la tecnología	112
8. Consecuencias económicas y sociales del desarme	112
9. Preparación y suministro de información estadística básicas	112
B. <i>Preparación y utilización de recursos humanos</i>	113
1. Reforma agraria	113
2. Desarrollo regional y de la comunidad	114
3. Aspectos sociales de la industrialización y de la urbanización	114
4. Servicios de bienestar social	115
5. Defensa social	116
6. Examen de las actividades de cooperación técnica en materia de de desarrollo social	117
C. <i>Aprovechamiento y utilización de los recursos naturales</i>	117
D. <i>Vivienda, construcción y planificación</i>	119
1. Actividades de asistencia técnica	119
2. Comité de Vivienda, Construcción y Planificación	119
E. <i>Creación de servicios básicos</i>	120
1. Viajes, transportes y comunicaciones	120
2. Agrimensura y cartografía	121
F. <i>Administración pública</i>	121
1. Servicios de asesoramiento, formación e investigación	121
2. Prestación de servicios de personal de dirección, ejecución y ad- ministración	123
G. <i>Coordinación y relaciones con los organismos especializados y con el Organismo Internacional de Energía Atómica</i>	123
H. <i>Cuestiones especiales</i>	124
1. Asistencia en caso de desastres naturales	124
2. Fiscalización de estupefacientes	125
3. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados	127
4. Sistemas de consultas con las organizaciones no gubernamentales	133
5. Hermanamiento de ciudades	133

IX.	COMISIONES ECONÓMICAS REGIONALES	
A.	<i>Comisión Económica para Europa</i>	138
B.	<i>Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente</i>	140
C.	<i>Comisión Económica para América Latina</i>	142
D.	<i>Comisión Económica para África</i>	144
X.	CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO	
A.	<i>Examen de las actividades</i>	147
B.	<i>Problemas de productos básicos</i>	149
C.	<i>Manufacturas</i>	152
D.	<i>Comercio invisible y financiación relacionada con el comercio</i>	153
E.	<i>Transporte marítimo</i>	155
F.	<i>Comercio de tránsito de los países sin litoral</i>	156
G.	<i>Medidas tomadas por la Asamblea General</i>	156
XI.	ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL	159
A.	<i>Simposio Internacional sobre Desarrollo Industrial</i>	160
B.	<i>Actividades operacionales sobre el terreno</i>	160
C.	<i>Actividades por sectores industriales</i>	161
1.	Industrias metalúrgicas y metálicas	161
2.	Industrias químicas	162
3.	Industrias de consumo	162
D.	<i>Programación y políticas industriales</i>	
1.	Desarrollo de las industrias de exportación	162
2.	Políticas de fomento industrial	163
3.	Programación de industrias y formulación de proyectos	163
E.	<i>Formación y dirección industriales</i>	164
F.	<i>Aspectos institucionales del desarrollo industrial</i>	
1.	Organización e información industriales	165
2.	Normalización	165
3.	Pequeña industria	166
XII.	PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y PROGRAMAS DE OTRA ÍNDOLE	
A.	<i>Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo</i>	169
1.	Sector Asistencia Técnica	169
2.	Sector Fondo Especial	170
3.	Financiación	172
4.	Administración	173
B.	<i>Actividades operacionales de las Naciones Unidas</i>	
1.	Programas de cooperación técnica de las Naciones Unidas	174
2.	Proyectos del sector Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ejecutados por las Naciones Unidas ..	178
C.	<i>Evaluación de los programas</i>	179
D.	<i>Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia</i>	180
E.	<i>Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas</i>	183
F.	<i>Programa Mundial de Alimentos</i>	187

XIII. ASUNTOS JURÍDICOS

A. Corte Internacional de Justicia	189
B. Comisión de Derecho Internacional	194
C. Conferencia Internacional de Plenipotenciarios sobre el Derecho de los Tratados	195
D. Examen de los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas	196
E. Cuestión de los métodos para la determinación de hechos	196
F. Proyecto de declaración sobre el derecho de asilo	196
G. Programa de asistencia de las Naciones Unidas para la enseñanza, el estudio, la difusión y una comprensión más amplia del derecho internacional	196
H. Establecimiento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional	197
I. Arbitraje de litigios de derecho privado surgidos en el comercio internacional	198
J. Tratados y convenciones multilaterales	199
K. Privilegios e inmunidades	200
L. Reglamentos de órganos de las Naciones Unidas	201
M. Estatuto de la soberanía permanente de los pueblos y las naciones sobre sus riquezas y recursos naturales	202
N. Aspectos jurídicos de la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos	203
O. Cuestión de la definición de la agresión	205
P. Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas	205

XIV. ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN PÚBLICA

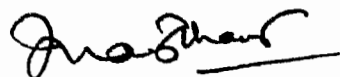
XV. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

A. Administración del personal	215
B. Servicios de reuniones y documentos	218
C. Asuntos financieros	219
1. Aspectos presupuestarios y conexos	219
2. Procedimientos administrativos y presupuestarios de las Naciones Unidas	221
D. Servicios generales	221

Prólogo

Tengo el honor de presentar a la Asamblea General la vigésima segunda memoria anual del Secretario General sobre la labor realizada por la Organización desde el 16 de junio de 1966 hasta el 15 de junio de 1967.

La introducción a la memoria anual se presentará, lo mismo que en años anteriores, en una fecha más próxima a la apertura del vigésimo segundo período de sesiones como adición a este documento.



U THANT
Secretario General

9 de agosto de 1967

SIGLAS

ACNUR	Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
BIRF	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
CAC	Comité Administrativo de Coordinación
CEPA	Comisión Económica para África
CEPAL	Comisión Económica para América Latina
CEPALO	Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente
CEPE	Comisión Económica para Europa
CNUURC	Comisión de las Naciones Unidas para la Unificación y Rehabilitación de Corea
COSPAR	Comité de Investigaciones del Espacio del Consejo Internacional de Uniones Científicas
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FENU	Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas
FMI	Fondo Monetario Internacional
GATT	Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
JCAPI	Junta Consultiva de Administración Pública Internacional
OACI	Organización de Aviación Civil Internacional
OCDE	Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
OCMI	Organización Consultiva Marítima Intergubernamental
OIEA	Organismo Internacional de Energía Atómica
OIT	Organización Internacional del Trabajo
OMM	Organización Meteorológica Mundial
OMS	Organización Mundial de la Salud
OOPS	Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente
OTAN	Organización del Tratado del Atlántico del Norte
OUA	Organización de la Unidad Africana
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
UIT	Unión Internacional de Telecomunicaciones
UNCTAD	Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
UNESCO	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNICEF	Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UNITAR	Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas

CAPITULO I

La situación en el Oriente Medio

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL, DE FECHA 19 DE MAYO DE 1967

Después de la presentación, el 18 de mayo de 1967, de su informe especial a la Asamblea General, sobre el retiro de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas, el Secretario General presentó un informe al Consejo de Seguridad el 19 de mayo en el que expresaba su profunda inquietud por los últimos acontecimientos del Oriente Medio y el peligroso y creciente empeoramiento de las relaciones entre los Estados árabes e Israel. A su parecer, la situación actual era más inquietante, e incluso más amenazadora, que en cualquier otro momento desde el otoño de 1956.

Desde enero de 1967 se había empeorado constantemente la situación a lo largo de la línea entre Israel y Siria, sobre todo respecto a controversias sobre el derecho de cultivar tierras en la zona desmilitarizada. A fines de enero de 1967, el general Odd Bull, Jefe de Estado Mayor del Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua, había logrado que Israel y Siria acordaran asistir a una sesión extraordinaria de emergencia de la Comisión Mixta de Armisticio Sirio-Israelí para considerar un orden del día convenido respecto a los problemas de cultivo. Aunque se celebraron tres reuniones, el tema del programa no fue examinado porque ambas partes insistieron en plantar primero cuestiones más amplias. No había sido posible reanudar las reuniones debido a un estancamiento respecto a una posición adoptada firmemente por Siria. Era en un esfuerzo por evitar graves encuentros armados como el ocurrido el 7 de abril de 1967 que el Jefe de Estado Mayor del Organismo de Vigilancia de la Tregua había insistido tanto en la necesidad de discutir y llegar a un acuerdo sobre el cultivo de tierras, se lograra dentro o fuera de la Comisión Mixta de Armisticio Sirio-Israelí. Por falta de ese acuerdo seguía habiendo gran tirantez a lo largo de la línea y existía siempre la posibilidad de que se produjeran nuevos encuentros armados en las zonas en disputa.

Diversos factores habían agravado la situación hasta un punto inusitado. Un importante factor era el sabotaje y el terrorismo de El-Fatah, que provocaban una reacción enérgica de parte del Gobierno y la población de Israel y que los recursos y las funciones del Organismo no le habían permitido detener. A ambos lados de la línea, eran cosa corriente las expresiones inmoderadas y belicosas de funcionarios y particulares. Pero en las últimas semanas, en despachos procedentes de Israel se atribuían a algunos altos funcionarios declaraciones tan amenazantes que resultaban particularmente enardecedoras puesto que sólo podían intensificar las pasiones y agravar el estado de tirantez del otro lado. En los últimos días había habido informaciones de r

vimientos y concentración de tropas, sobre todo en el lado israelí de la frontera siria. El Gobierno de Israel le había asegurado que no había ni se producirían concentraciones ni movimientos extraordinarios de tropas israelíes a lo largo de la línea siria y que las fuerzas armadas de Israel no emprenderían acciones militares a menos que lo hicieran primero del otro lado. Las informaciones de los observadores del Organismo habían confirmado que no había concentraciones ni movimientos importantes de tropas a ambos lados de la frontera.

A continuación, el Secretario General declaraba que la decisión de la República Árabe Unida, de dar por terminado su consentimiento para que continuara la presencia de la FENU, había sido repentina e inesperada. No se habían dado oficialmente las razones de la decisión, pero sin duda no tenían nada que ver con el comportamiento de la FENU, que había cumplido sus obligaciones con notable eficacia y distinción. Ninguna operación de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas podía considerarse permanente. La FENU había estado funcionando durante diez años y medio, que era un tiempo muy largo para que un país tuviera tropas extranjeras actuando autónomamente en su territorio, incluso bajo un pabellón internacional. Por otro lado, a causa del estado de tensión y los peligros existentes en la zona, el momento del retiro de la FENU era poco satisfactorio. Ese retiro venía a agregar una frontera más en que había una confrontación directa entre fuerzas militares de Israel y de sus vecinos árabes.

El Secretario General observaba que estaba bastante difundida una idea errónea acerca del carácter de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, en general, y de la FENU, en particular. Conforme había señalado en su informe especial del 18 de mayo a la Asamblea General, la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas era una operación de mantenimiento de la paz y no una operación coercitiva. Se fundaba enteramente en el consentimiento de la autoridad gobernante en el territorio en que operaba y no se relacionaba en modo alguno con lo previsto en el Capítulo VII de la Carta. Ni a la FENU ni a ninguna otra fuerza de una operación de mantenimiento de la paz emprendida hasta entonces por las Naciones Unidas se le habría permitido penetrar en un territorio si se hubiera sugerido que tenía derecho a permanecer en él contra la voluntad de la autoridad gobernante. Además, la presencia y eficacia de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, como la FENU, dependían no sólo del consentimiento de las autoridades de la zona de despliegue sino también de su buena voluntad y cooperación. Cuando la República Árabe Unida decidió llevar sus tropas a la línea fronteriza, quedó eliminada la función amortiguadora de la FENU; así, pues, la continuación de su presencia re-

sultaba inútil y su posición insostenible, y su retiro se hizo virtualmente inevitable.

Observaba que la presencia de la FENU había constituido una influencia disuasiva y moderadora a ambos lados de la frontera, sobre todo en puntos críticos como Sharm El Sheikh y Gaza, y que en gran medida había permitido que la Organización pasara por alto durante diez años algunas realidades innegables del conflicto fundamental. Los gobiernos interesados y las Naciones Unidas se hallaban ahora ante la realidad brutal de una situación peligrosa.

Respecto a la Comisión Mixta de Armisticio Egipcio-Israelí, establecida por el Acuerdo de Armisticio General entre Egipto e Israel, el Secretario General decía que aún existía y tenía su cuartel general en Gaza y podía, como lo había hecho antes del establecimiento de la FENU, constituir una forma limitada de presencia de las Naciones Unidas en la zona, como en el caso de otras comisiones mixtas de armisticio a las que prestaba servicios el Organismo de Vigilancia de la Tregua. Sin embargo, el Gobierno de Israel había denunciado a la Comisión Mixta de Armisticio Egipcio-Israelí y durante años se había negado a participar en ella. Las Naciones Unidas nunca habían aceptado la validez de esa acción unilateral de Israel. Sería muy útil que el Gobierno de Israel reconsiderara su posición y reanudara su participación en la Comisión. Sería igualmente útil para el mantenimiento de la calma a lo largo de la frontera sirio-israelí que las dos partes reanudaran su participación en la Comisión Mixta de Armisticio Sirio-Israelí.

Finalmente, el Secretario General declaraba que, aunque se habían observado movimientos de tropas a ambos lados de la frontera entre la República Árabe Unida e Israel después de la decisión de la República Árabe Unida respecto a la FENU hasta las primeras horas de la noche del 19 de mayo no parecían haber alcanzado proporciones alarmantes ni había indicios de que fuera a emprenderse una gran ofensiva. Sin embargo, el enfrentamiento a lo largo de la línea, de las fuerzas armadas de ambos países pronto se reanudaría y, a menos que a ambos lados de la frontera hubiera gran moderación, no era difícil prever que habría encuentros locales que podrían fácilmente llegar a convertirse en grave conflicto.

EXAMEN DE LA CUESTIÓN POR EL CONSEJO DE SEGURIDAD EL 24 DE MAYO

Para tratar de la situación y, especialmente, para examinar con el Gobierno de la República Árabe Unida la situación creada por el retiro de la FENU, el Secretario General se trasladó a El Cairo, donde permaneció del 23 al 25 de mayo. Hallándose el Secretario General en El Cairo, el Consejo de Seguridad se reunió para considerar la situación en el Oriente Medio.

Por carta del 23 de mayo, el Canadá y Dinamarca pidieron que se convocara con urgencia al Consejo de Seguridad para que considerara la gravísima situación del Oriente Medio, que amenazaba a la paz y la seguridad internacionales. Manifestaban que después de la presentación del informe del Secretario General de fecha 19 de mayo se habían producido en el Oriente Medio acontecimientos que habían empeorado la situación y que había llegado el momento de que el Consejo desempeñara sus funciones en lo relativo al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Las medidas que

tomare el Consejo consolidarían los esfuerzos del Secretario General para mantener la paz de la región. El 24 de mayo el Consejo incluyó la cuestión en su orden del día.

Durante las deliberaciones sobre la situación en el Oriente Medio, que se realizaron en veintiuna sesiones, celebradas entre el 24 de mayo y el 14 de junio de 1967, el Consejo invitó a los representantes de Israel, la República Árabe Unida, Siria, Jordania, el Líbano, el Irak, Marruecos, la Arabia Saudita, Kuwait, Túnez, Libia y el Paquistán a participar en el debate sin derecho de voto.

Durante las dos sesiones que el Consejo de Seguridad celebró el 24 de mayo, los representantes del Canadá y Dinamarca manifestaron que, desde que comenzó el retiro de la FENU, la situación en la frontera entre Israel y la República Árabe Unida había empeorado con alarmante celeridad. Había una concentración militar a lo largo de la frontera de los dos países, lo que acrecentaba el peligro de un gran choque militar. Además, el Presidente de la República Árabe Unida había anunciado el 22 de mayo que se impediría el paso por el estrecho de Tirán de barcos israelíes y de otras matrículas que llevaran determinada carga a Israel; el Gobierno de Israel, por otro lado, había declarado que consideraría que tal medida constituía un ataque. La situación había llegado al punto en que el más ligero error de cálculo de uno u otro lado podía conducir a las hostilidades en gran escala. La misión que en esos momentos cumplía el Secretario General en la zona, y que ambas delegaciones apoyaban enteramente, no eximía al Consejo de sus obligaciones. A su parecer, la contribución más útil que podría hacer el Consejo era respaldar los esfuerzos del Secretario General para mantener la paz en la región.

El Canadá y Dinamarca presentaron un proyecto conjunto de resolución por el cual el Consejo de Seguridad: 1) expresaría su pleno apoyo a los esfuerzos del Secretario General para pacificar la situación; 2) pediría a todos los Estados Miembros que se abstuvieran de adoptar cualquier medida que pudiera empeorar la situación, y 3) invitaría al Secretario General a informar al Consejo de Seguridad a su regreso para que el Consejo continuara su consideración del asunto.

El representante de Estados Unidos dijo, en apoyo de la iniciativa del Canadá y Dinamarca, que el Consejo estaría cerrando los ojos ante la realidad si no reconocía la amenaza a la paz que entrañaban los acontecimientos del Oriente Medio después de la partida del Secretario General de El Cairo. La situación de la región había adquirido un giro aún más alarmante debido a la amenaza a derechos internacionales consuetudinarios que hacía mucho ejercían diversas naciones en el Golfo de Akaba. Estaba perfectamente enterado de los problemas de fondo de la región, que eran muy antiguos y no podían resolverse mediante actos bélicos. Constaba que los Estados Unidos se oponían al recurso a la violencia y la agresión por alguna de las partes en las circunstancias existentes y que se habían comprometido firmemente a apoyar la independencia política e integridad territorial de todas las naciones de la región. Las grandes Potencias tenían a la vez intereses y obligaciones en cuanto al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, y los Estados Unidos, tanto dentro como fuera de las Naciones Unidas, estaban dispuestos a unirse a otras grandes Potencias — la Unión Soviética, el Reino Unido y Francia — en un esfuerzo

común por establecer y mantener la paz en el Oriente Medio.

El representante del Reino Unido también instó al Consejo a respaldar los esfuerzos del Secretario General y dijo que el primer objetivo de ese órgano debía ser el de aconsejar moderación y de mantener la paz hasta que se trazaran nuevos planes a este efecto. Respecto a la cuestión del Golfo de Akaba, su Gobierno había reafirmado su posición de que había que considerar al estrecho de Tirán como una vía marítima internacional por la que tenían derecho de paso las naves de todas las naciones.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dijo que ciertas Potencias occidentales daban carácter dramático a la situación del Oriente Medio por razones que no tenían que ver con una preocupación genuina por la paz de la región. Si Washington y Londres querían realmente aliviar el estado de tensión del Oriente Medio, podían comenzar por retirar del Mediterráneo sus flotas, que eran la causa principal de la tirantez en la región. Señaló la declaración hecha por el Gobierno soviético el 23 de mayo en la que se decía, entre otras cosas, que después del ataque armado por fuerzas israelíes en territorio sirio el 7 de abril las esferas gobernantes de Israel habían seguido agravando el ambiente de histeria de guerra y habían amenazado con realizar operaciones punitivas contra Siria. Israel no podría haber actuado de esa manera sin el estímulo directo e indirecto de ciertos círculos imperialistas que procuraban restablecer el dominio colonial sobre las tierras árabes, pero los Estados árabes mostraban su solidaridad con los sirios, que defendían su independencia; y la República Árabe Unida, en cumplimiento de sus obligaciones de aliada en la defensa común de Siria, había tomado medidas para contener la agresión. En la declaración se advertía que cualquier agresión en el Oriente Medio no sólo se encontraría con las fuerzas unidas de los países árabes sino también con la firme oposición de la Unión Soviética y todos los países amantes de la paz.

El representante de la República Árabe Unida dijo que era sorprendente que su país, que cumplía con su deber de proteger su seguridad, defender a sus habitantes y ratificar sus obligaciones para con la nación árabe, fuera objeto de una campaña vil de tergiversación y vilipendio, mientras otras Potencias — precisamente las que realizaban esa campaña calumniosa — llevaban a cabo una política intensiva y brutal fuera de sus fronteras y lejos de su territorio, contra la Carta de las Naciones Unidas y las normas de comportamiento humano. Era lamentable que el Canadá y Dinamarca hubieran estimado conveniente actuar en nombre de los Estados Unidos y el Reino Unido; empeoraban mucho la situación al hacer deliberadamente caso omiso de las provocaciones reiteradas de Israel. No era necesario recordar al Consejo las violaciones, desacatos y menosprecio, por parte de Israel de las muchas resoluciones y decisiones adoptadas por las Naciones Unidas. Todos tenían aún presente la tragedia de Palestina, el desarraigo y expulsión de sus legítimos habitantes. Israel no habría podido cometer tantas agresiones sin apoyo y estímulo exteriores, los cuales, en el caso presente, procedían del Reino Unido y los Estados Unidos. El proyecto de resolución del Canadá y Dinamarca era una tentativa de sabotear la misión del Secretario General.

El representante de Israel manifestó que en los últimos meses su Gobierno había señalado al Consejo su

creciente inquietud ante la situación en el Oriente Medio. Se libraba contra Israel una campaña de violencia y cada vez más intensa, organizada, apoyada y costeada por Estados vecinos, y se la reforzaba con amenazas constantes a la integridad territorial, la independencia política y la existencia misma de Israel. No tenían fundamento las afirmaciones de que Israel había concentrado grandes fuerzas a lo largo de la frontera sirio-israelí, según lo indicaba el informe del Secretario General de fecha 19 de mayo. En cambio, en la península de Sinaí, a lo largo de la frontera meridional de Israel, había grandes concentraciones de tropas, y acababa de desalojarse perentoriamente a la FENU, que hacía 10 años contribuía a mantener la estabilidad allí. Esas medidas formaban parte de un plan general que culminaba en las amenazas del Presidente Nasser de estorbar la navegación por el golfo de Akaba. Como lo había declarado el Primer Ministro de Israel el 23 de mayo, el impedir la libertad de navegación en el golfo de Akaba y el estrecho de Tirán era una violación notoria del derecho internacional y una agresión a Israel.

El representante de Francia declaró que su país tenía profundo interés en el mantenimiento de la paz en el Oriente Medio y que desde el primer momento de la crisis había aconsejado moderación a todas las partes interesadas. Mientras las grandes Potencias no estuvieran de acuerdo, el Consejo de Seguridad no podría tomar medidas y tenía que limitarse a exhortar a las partes a abstenerse de toda iniciativa que pudiera poner en peligro la paz.

Los representantes de Malí y la India consideraron inoportuna la sesión del Consejo y estimaron que una medida precipitada de este órgano no haría más que complicar la misión del Secretario General. Los representantes de Etiopía y Nigeria, aunque no se oponían a que el Consejo discutiese la cuestión, opinó que antes de adoptar medida alguna era mejor esperar a que llegara el informe del Secretario General sobre su misión.

El Consejo levantó la sesión sin tomar una decisión.

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL, DE FECHA 26 DE MAYO DE 1967

Después de regresar a la Sede, el Secretario General presentó el 26 de mayo un informe al Consejo de Seguridad acerca de su visita a El Cairo.

En su informe, el Secretario General declaró que sólo podía reiterar la apreciación que hizo en su informe del 19 de mayo en el sentido de que la situación general en el Oriente Medio era actualmente más intranquilizadora, e incluso más amenazadora, de lo que había sido en cualquier momento desde el otoño de 1956. Añadió que la afirmación de que el retiro de la FENU había sido la causa primordial de la crisis en el Oriente Medio pasaba por alto el hecho de que la base fundamental de ésta y de otras situaciones críticas de la zona era el continuo conflicto árabe-israelí, que había estado presente desde el comienzo.

El Secretario General declaró que la decisión de la República Árabe Unida de restringir la navegación en el Estrecho de Tirán había creado una nueva situación. El libre paso por el Estrecho era una de las cuestiones que Israel consideraba más vitales para sus intereses. Según la posición de la República Árabe Unida, el Estrecho formaba parte de sus aguas territoriales, en las que tenía derecho a controlar la navegación; Israel rebatió esta posición y afirmó su derecho al paso ino-

cente de barcos por el Estrecho. Además Israel había declarado que consideraría como un *casus belli* el cierre del Estrecho de Tirán a los buques bajo pabellón israelí y cualquier restricción impuesta a los fletes de los barcos de otras nacionalidades que se dirigieran a Israel.

Durante su permanencia en El Cairo, dijo el Secretario General, había señalado a la atención del Gobierno de la República Árabe Unida las peligrosas consecuencias que podrían tener la restricción del paso inocente de barcos por el Estrecho de Tirán, y había expresado la esperanza de que no se emprendería ninguna acción precipitada. Había recibido seguridades del Presidente Nasser y del Sr. Mahmoud Riad, Ministro de Relaciones Exteriores, de que la República Árabe Unida no iniciaría una acción ofensiva contra Israel. Según se le expresó, su objetivo general era el de volver a las condiciones existentes antes de 1956 y a la plena observancia por ambas partes de las disposiciones del Acuerdo de Armisticio General entre Egipto e Israel.

El Secretario General señaló que con anterioridad a 1956 había existido una controversia jurídica respecto al alcance del derecho de paso inocente de navíos comerciales por el Estrecho de Tirán y al Golfo de Akaba. Desde marzo de 1957, cuando se destacaron efectivos de la FENU en Sharm El Sheikh y Ras Nasrani, a la entrada del Golfo de Akaba, no se había estorbado la navegación en el Estrecho de Tirán. Sin embargo, no tocaría los aspectos jurídicos de la controversia ni discutiría el fondo del caso. Su máxima preocupación en ese crítico momento era la de tratar de ganar tiempo con el fin de sentar la base para una reducción de la tirantez. El hecho era que, dadas las posiciones antagónicas adoptadas por la República Árabe Unida y por Israel, la situación en el Estrecho de Tirán constituía una seria amenaza potencial a la paz. Temía que un choque armado entre los dos países a causa de la libertad de navegación por el Estrecho desencadenaría inevitablemente un conflicto general en el Oriente Medio. Sin embargo, no era ésta la única cuestión inmediata que estaba poniendo en peligro la paz en la zona; otros problemas, tales como el sabotaje y las actividades terroristas y el derecho a cultivar las tierras en sectores disputados de la zona desmilitarizada entre Israel y Siria podrían también conducir a nuevas y graves luchas.

En su opinión, para hallar un desenlace pacífico de la crisis presente sería necesario un compás de espera que permitiese reducir la tensión, que había alcanzado un nivel explosivo. Por consiguiente, encareció a todas las partes interesadas a que ejercieran particular moderación, que renunciaran a la beligerancia y que evitaran cualquier otra acción que pudiera aumentar la tensión, con objeto de permitir que el Consejo se ocupara de las causas fundamentales de la presente crisis y buscara soluciones. Existían otras líneas posibles de acción que podrían contribuir de forma importante a reducir la tensión en la zona. Conforme ha sugerido en su informe del 19 de mayo, sería conveniente que se reactivasen las Comisiones Mixtas de Armisticio Sirio-Israelí y Egipto-Israelí. Sería también útil que el Consejo recordase que en su resolución 73 (1949), de 11 de agosto de 1949, había declarado que los acuerdos de armisticio general constituían un importante paso hacia el establecimiento de una paz permanente en Palestina y había ratificado a las partes interesadas la orden contenida en su resolución 54 (1948) de conformidad con el Artículo 40 de la Carta, de observar una cesación in-

condicional de las hostilidades y de tener presente que los diversos acuerdos de armisticio prohibían actos de hostilidad entre las partes.

Para concluir, el Secretario General dijo que pese a las dificultades extremas de la situación, las Naciones Unidas habían desempeñado un papel importante durante más de dieciocho años en el mantenimiento de cierta medida de paz en el Oriente Medio. Creía que, con la cooperación de todas las partes interesadas, las Naciones Unidas, y el Consejo de Seguridad en particular, debían buscar y llegar a encontrar soluciones pacíficas y justas a los problemas.

EXAMEN POR EL CONSEJO, ENTRE EL 29 DE MAYO Y EL 3 DE JUNIO

Por carta del 27 de mayo, el representante de la República Árabe Unida solicitó la inclusión en el orden del día del Consejo de Seguridad de un tema titulado "Política agresiva de Israel, su repetida agresión que amenaza a la paz y la seguridad en el Oriente Medio y pone en peligro la paz y la seguridad internacionales". Por carta del 29 de mayo, el representante del Reino Unido pidió que el informe del Secretario General del 26 de mayo de 1967 se incluyese también en el orden del día del Consejo.

En su reunión del 29 de mayo, el Consejo decidió considerar conjuntamente los tres temas del orden del día.

El Presidente, en nombre del Consejo, expresó su reconocimiento por los esfuerzos realizados por el Secretario General en favor de la paz en el Oriente Medio. El informe que el Secretario General había presentado al Consejo era un documento sumamente importante, basándose en el cual el Consejo debería actuar en forma urgente y constructiva a fin de evitar un desastre en el Oriente Medio.

El representante de los Estados Unidos declaró que el Consejo debiera, como medida provisional y sin demora, respaldar el llamamiento del Secretario General en favor de un compás de espera que permitiese reducir el nivel explosivo que había alcanzado la tensión, y su encarecimiento de que las partes interesadas actuaran con particular moderación y renunciaran a la beligerancia, a fin de que el Consejo pudiera ocuparse del asunto y buscar soluciones a las causas fundamentales de la crisis actual. En una escala más amplia, el Consejo debe ocuparse también de los puntos mencionados en el informe del Secretario General, es decir, del Golfo de Akaba, del enfrentamiento en la zona de Gaza y en la frontera sirio-israelí y del problema del terrorismo. Los Estados Unidos consideraban que el Golfo de Akaba era una vía marítima internacional y creían que el bloqueo de la navegación israelí era ilegal y potencialmente peligrosa para la causa de la paz. No sólo se hallaban en juego los derechos de las partes inmediatamente afectadas, sino también los derechos de todas las naciones comerciales en virtud del derecho internacional. Era especialmente importante, a la luz de lo declarado por el Secretario General en su informe, que la práctica establecida desde hacía tiempo en el Golfo de Akaba no fuera perturbada unilateralmente mientras se realizaban esfuerzos en virtud del Artículo 33 de la Carta para resolver las reclamaciones planteadas. Este era el significado específico que su Gobierno atribuía, respecto al problema de Akaba, al llamamiento del Secretario General para que las partes actuaran con especial mo-

deración y renunciaran a la beligerancia. El Consejo debería también hallar procedimientos prácticos, sirviéndose de cualquier mecanismo disponible de las Naciones Unidas, para reducir al mínimo el peligro de un choque armado y para ayudar a las fuerzas antagónicas a romper el contacto. Por lo que se refería al sabotaje, al terrorismo y a los derechos de cultivo en las zonas disputadas de la zona desmilitarizada entre Israel y Siria, el Consejo de Seguridad debía adoptar medidas eficaces para reafirmar los Acuerdos de Armisticio General y revitalizar el mecanismo del armisticio.

El representante del Reino Unido afirmó que el informe del Secretario General confirmaba los peligros inmediatos de la situación y señaló de qué modo debería actuar el Consejo. En primer lugar, era necesario hallar una solución al problema crítico del Golfo de Akaba, solución que debiera tener en cuenta no sólo las exigencias normales de los Estados que lindaban con el Golfo, sino también el interés de todas las Potencias marítimas. En cuanto a las demás cuestiones que causaban tensión en la zona, el Secretario General había hecho en su informe varias proposiciones prácticas, que debían ser estudiadas urgentemente por el Consejo para reducir la tensión, mantener la paz y lograr una solución justa del problema en el ámbito de las Naciones Unidas.

El representante de la República Árabe Unida observó que el problema fundamental que tenía ante sí el Consejo actualmente era el de la política agresiva de Israel y su repetida agresión contra los Estados árabes. Dijo que Israel, que había sido instalado en el Oriente Medio para servir a los intereses colonialistas, había seguido una política de expansión territorial y eliminación de la población indígena que había culminado con la agresión contra Egipto en el otoño de 1956. Más recientemente, se habían intensificado y ampliado los repetidos ataques de Israel contra los Estados árabes. La República Árabe Unida tenía toda justificación para creer que el 17 de mayo las autoridades israelíes habían previsto seriamente la posibilidad de atacar a Siria. Su Gobierno, en colaboración con otros países árabes, había decidido defender a la nación árabe por todos los medios. Dado que la presencia de la FENU habría sido incompatible con esa decisión, y también para salvaguardar a dicha Fuerza, su Gobierno, en ejercicio de sus derechos soberanos, había pedido al Secretario General retirara la Fuerza, volviéndose de este modo pacíficamente a la situación que existía con anterioridad a la agresión de Israel contra su país en 1956. El Golfo de Akaba había sido siempre una vía de navegación interior, sujeta a la soberanía árabe. Como los tres únicos Estados legítimos con litoral en el Golfo — la Arabia Saudita, Jordania y la República Árabe Unida — estaban en estado de guerra con Israel, su derecho a cerrar el paso a los navíos enemigos estaba reconocido por el derecho internacional. La afirmación de que Israel tenía un puerto en el Golfo no era válida, ya que Israel había ocupado ilegalmente siete millas de la costa del Golfo, con inclusión de Umm Rashrash, violando las resoluciones del Consejo de Seguridad de 1948 y el Acuerdo de Armisticio General entre Egipto e Israel. Los Acuerdos de Armisticio no invalidaban los derechos de su Gobierno a imponer restricciones a la navegación en el Estrecho, como tampoco la agresión de 1956 había cambiado la situación jurídica del Golfo de Akaba o los derechos de la República Árabe Unida sobre sus aguas territoriales. Además, el Secretario General había declarado en su informe del 26 de febrero

de 1957 que el estacionamiento de la FENU no podía utilizarse para imponer una solución a una cuestión política o jurídica que era objeto de controversias, puesto que su función era la de evitar las hostilidades. Nada de lo que Israel u otras delegaciones habían dicho en la Asamblea General podía afectar a los derechos legítimos de la República Árabe Unida.

Para concluir, el representante de la República Árabe Unida declaró que, si bien su Gobierno no se proponía realizar acción ofensiva alguna, no vacilaría en ejercer su derecho de legítima defensa para rechazar cualquier agresión. La búsqueda de la paz en el Oriente Medio debería basarse, sobre todo, en el respeto pleno y total de los derechos inalienables del pueblo árabe palestino.

El representante de Israel confirmó la posición de su Gobierno de que la interferencia a la libertad de navegación en el Golfo de Akaba y en el Estrecho de Tirán constituían una acción ofensiva contra Israel, una violación de los derechos de todas las naciones al uso sin trabas de esa vía de navegación internacional y una notoria violación del derecho internacional. Recordó que el carácter internacional del Estrecho de Tirán había sido reconocido por muchos países en la Asamblea General en marzo de 1957 y que, respondiendo a la reciente acción unilateral del Gobierno de la República Árabe Unida, muchos otros gobiernos habían apoyado los derechos vitales de Israel y sus intereses en el Estrecho. La política de beligerancia seguida por la República Árabe Unida era la causa fundamental de las crisis pasadas y la crisis actual y había convertido en letra muerta el Acuerdo de Armisticio General entre Egipto e Israel. Las dos violaciones centrales de dicho Acuerdo eran la negación de libre paso por el Canal de Suez y la denegación del libre paso por el Golfo de Akaba. Las Naciones Unidas habían estipulado que la beligerancia era incompatible con el régimen de armisticio, pero Egipto deseaba utilizar los Acuerdos de Armisticio y el mecanismo de las Naciones Unidas como mampara para continuar su beligerancia. Este era el significado de las seguridades dadas por el Presidente Nasser, según se citaban en el informe del Secretario General, de que todo lo que él deseaba era "volver a las condiciones existentes antes de 1956". Israel no permitiría el restablecimiento de dichas condiciones. En 1948, Egipto y otros Estados árabes habían atacado a Israel con la finalidad declarada de destruirlo. Los objetivos actuales de Egipto eran los mismos. Todavía no era demasiado tarde para que prevaleciera la razón. Pidió que se pusiera término a las declaraciones incendiarias y a las amenazas contra la integridad territorial y la independencia de Israel; que se cumpliera la obligación de no beligerancia estipulada en la Carta; que se efectuara el retiro de las fuerzas armadas a las posiciones que ocupaban al comenzar el mes; y que se pusiera fin al sabotaje, al terrorismo y a la interferencia con la navegación en el Golfo de Akaba.

El representante de la URSS dijo que el verdadero culpable de la peligrosa agravación de la tirantez en el Oriente Medio era Israel, que no deseaba abandonar su política de provocación y aventuras militares contra los Estados árabes vecinos, actos que iban acompañados de la intención declarada de resolver las diferencias árabe-israelíes por la fuerza de las armas. Acusó a los Estados Unidos de dar muestras de parcialidad y de defender a los círculos extremistas de Israel, a los que ayudaba generosamente al mismo tiempo que hacía pia-

dosos llamamientos a ambos bandos. Advirtió que los que empujaban a Israel al borde de la guerra deberían de percatarse de los peligros que entrañaba el atizar el fuego de un conflicto militar. La URSS, en unión de todos los Estados amantes de la paz, condenaba los designios de las fuerzas del imperialismo contra la independencia de los pueblos árabes y apoyaba decisivamente su lucha para proteger su seguridad y sus derechos inalienables. El Gobierno soviético consideraba que el mantenimiento de la paz y de la seguridad en el Oriente Medio, situado en posición colindante con las costas de la Unión Soviética, era vital para los intereses de su propio pueblo. Consideraba que el Consejo de Seguridad debía condenar decisivamente las provocaciones y amenazas de Israel contra los Estados árabes.

El representante de Etiopía encomió al Secretario General por su informe prudente y equilibrado y por la objetividad de que había dado muestras al enfocar la totalidad del problema, y declaró que su delegación estaba dispuesta a cooperar en la formulación de un llamamiento urgente a la moderación a las partes interesadas, siempre que dicho llamamiento contara con el apoyo unánime de todos los miembros del Consejo.

Los representantes de la Argentina y el Brasil expresaron que apoyaban sin reservas el llamamiento a la moderación hecho por el Secretario General.

El representante de la India dijo que su delegación apoyaba las sugerencias del Secretario General sobre la reactivación de las Comisiones Mixtas de Armisticio Sirio-Israelí y Egipcio-Israelí, y que alentaría los esfuerzos en favor de una reducción de la tirantez que condujera a la consolidación de la paz en el oeste de Asia. Dijo que la República Árabe Unida únicamente ejercía su soberanía al solicitar el retiro de la FENU, y que el Secretario General había actuado prudentemente al acceder a esta solicitud. Su Gobierno comprendía los motivos que habían inducido a la República Árabe Unida a tomar ciertas medidas de seguridad, que eran de índole defensiva. En opinión de su Gobierno, expresada desde 1957, el Golfo de Akaba era un mar interior y su entrada se hallaba situada dentro de las aguas territoriales de la República Árabe Unida. Ningún Estado o grupo de Estados debía tratar de desafiar por la fuerza la soberanía de la República Árabe Unida sobre el Estrecho de Tirán. Sería sumamente conveniente hallar un *modus vivendi*, pero la elaboración de cualquier acuerdo debería realizarse dentro del marco de soberanía de la República Árabe Unida.

Los representantes del Canadá y Dinamarca subrayaron la necesidad de que todos los interesados dieran muestras de moderación a fin de que hubiera un compás de espera para la búsqueda de una solución pacífica. Sería sumamente conveniente que el Consejo adoptase alguna medida provisional como preludio para una medida posterior más concreta. Expresaron la esperanza de que se pudiera llegar rápidamente a un acuerdo sobre la redacción que se daría al llamamiento.

El representante de Nigeria opinó que el informe del Secretario General podía constituir en gran parte la base de la acción del Consejo y de todos los interesados. Como primer paso, el Consejo debía hacer un llamamiento a la prudencia y su gobierno no apoyaría ninguna medida que implicase injerencias en la soberanía de los países.

El representante del Líbano declaró que su Gobierno se sumaba a la República Árabe Unida en la defensa de

sus derechos de soberanía sobre la entrada al Golfo de Akaba. Advirtió que si Israel cometía una agresión, la guerra resultante sería total y agruparía a todos los Estados árabes contra Israel. El Gobierno y el pueblo del Líbano cumplirían el compromiso contraído en la Carta de la Liga de Estados Árabes y en el Tratado árabe de Defensa Mutua reafirmado unánimemente por el Parlamento del Líbano el 23 de mayo de 1967.

El representante de Siria manifestó que la crisis del Oriente Medio era resultado directo del ataque en masa perpetrado el 7 de abril de 1967, sin previa provocación, por fuerzas israelíes que invadieron aldeas sirias, matando a civiles y destruyendo objetivos no militares. Esa agresión había ocurrido en relación con el problema de los derechos de cultivo en los territorios en litigio de la zona desmilitarizada, utilizada por Israel, a lo largo de los años, como instrumento para su expansión gradual y sus provocaciones contra Siria. En contravención del Acuerdo de Armisticio General entre Israel y Siria y de las resoluciones del Consejo de Seguridad, Israel había aplicado una política de invasión paulatina de las zonas desmilitarizadas a lo largo de las líneas de demarcación del armisticio entre Siria e Israel, expulsando a centenares de civiles árabes y construyendo fortificaciones militares. La razón básica de la tragedia con que se ocupaba el Consejo era que se había hecho caso omiso, completa y constantemente, del pueblo árabe de Palestina. No podría haber paz duradera mientras no se reconociesen plenamente los derechos de los pueblos árabes de Palestina a su patria.

El Presidente, haciendo uso de la palabra como representante de China, dijo que su delegación apoyaba el llamamiento del Secretario General y esperaba que las Naciones Unidas, que habían desempeñado una función vital en el mantenimiento de la paz en el Oriente Medio, podrían hacer uso una vez más de su influencia moderadora, de conformidad con las directrices sugeridas en el informe del Secretario General.

El 31 de mayo, los Estados Unidos presentaron un proyecto de resolución en el cual el Consejo pedía a todas las partes interesadas, como primera medida, que actuaran de conformidad con el llamamiento del Secretario General; daba estímulo a la prosecución inmediata de la diplomacia internacional en el interés de pacificar la situación y de lograr soluciones razonables, pacíficas y justas; y decidía mantener la cuestión bajo consideración urgente y constante a fin de determinar qué otras medidas podría adoptar en el ejercicio de sus funciones de mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

Al presentar este proyecto de resolución, el representante de los Estados Unidos subrayó que se trataba de una medida provisional destinada a hallar tiempo para un ordenamiento más claro de los problemas básicos, sin perjudicar los derechos ni las reivindicaciones fundamentales de las partes.

También el 31 de mayo la República Árabe Unida presentó un proyecto de resolución en el cual el Consejo de Seguridad decidía que el Acuerdo de Armisticio General entre Egipto e Israel seguiría siendo válido y reiteraba que el mecanismo de las Naciones Unidas que de él emanaba debía ser plenamente operante; instaba al Gobierno de Israel a que respetase y cumpliera sus responsabilidades, según lo estipulado en ese acuerdo; y ordenaba al Jefe de Estado Mayor del Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua que reestableciera, en el plazo de dos semanas, el cuar-

tel general de la Comisión Mixta de Armisticio egipcio-israelí en El Auja, de donde había sido expulsada por la acción unilateral de Israel; decidía tomar las medidas adicionales necesarias para la plena aplicación de esta resolución en caso de que el Gobierno de Israel no cumpliera con sus disposiciones; pedía al Secretario General que se pusiera en contacto con las partes en el Acuerdo de Armisticio General entre Egipto e Israel con miras a aplicar inmediatamente esta decisión y que presentara su informe al Consejo en un plazo de quince días para que éste aprobase dichas medidas adicionales; y decidía volver a reunirse para examinar el informe del Secretario General inmediatamente después que hubiese sido presentado.

El representante de Irak indicó que la crisis del Oriente Medio había sido causada por la amenaza de Israel de dar comienzo a la guerra si no se satisfacían sus peticiones con respecto a la navegación en el Golfo de Akaba. El Gobierno de la República Árabe Unida había declarado que no iniciaría ninguna acción ofensiva, pero el Gobierno de Israel no había dado seguridades de esa índole. El orador apoyaba plenamente el punto de vista del representante de la República Árabe Unida en cuanto al derecho de este país a controlar la navegación en sus aguas territoriales siempre que pensara que su seguridad estaba en peligro. Antes de 1956 ningún usuario del Golfo había impugnado este control; todo lo que había hecho la República Árabe Unida había sido restablecer la situación que existía antes de la agresión israelí de 1956, cuyos frutos, según el deseo de algunas Potencias, Israel debía seguir aprovechando. Las Potencias que pedían una solución inmediata del problema secundario de la navegación en el Golfo de Akaba, sobre el cual las Naciones Unidas no habían tomado posición alguna, no sentían la misma urgencia con respecto al problema fundamental de Palestina y del millón y cuarto de árabes cuyo derecho a la repatriación se había proclamado y reafirmado en no menos de dieciocho resoluciones de la Asamblea General. Tampoco les inquietaban las repetidas violaciones israelíes de los Acuerdos Generales de Armisticio. El problema sometido al Consejo era el de impedir que Israel, el único país que amenazaba con iniciar la guerra, cumpliera su amenaza. El Consejo no debía resolverlo por el camino más fácil de ceder a las exigencias y dejarse transformar en un instrumento de consolidación de la agresión. Debía abordar los verdaderos problemas que constituían la causa de la crisis, porque si éstos no se resolvían no podría haber paz en la zona.

El representante de Jordania declaró que su delegación había hecho presente al Consejo una y otra vez la determinación de las autoridades israelíes de crear una situación que conveniese a sus planes expansionistas, y que recientemente había sometido al Consejo graves incidentes y actos de agresión cometidos por Israel, los cuales establecían, sin lugar a dudas la realidad de las repetidas violaciones israelíes de la zona desmilitarizada, de la "tierra de nadie" y de la línea de demarcación del armisticio. La situación había alcanzado dimensiones graves. Correspondía al Consejo impedir la repetición de tales actos de agresión, sobre todo porque Israel estaba boicoteando dos de las cuatro Comisiones Mixtas de Armisticio de la zona, a pesar de que el Consejo de Seguridad le había encarecido en repetidas ocasiones que cooperase con ellas. Algunos miembros del Consejo habían hablado de sabotaje y terrorismo, pero ¿podía llamarse intruso a un árabe en su propia tierra o llamársele extranjero en su propio país? El pueblo de

Palestina se impacientaba. Había esperado durante diecinueve años que las Naciones Unidas propusieran una solución justa y su actividad actual era el resultado de la inactividad del Consejo. Era víctima de la injusticia y estaba decidido a recobrar su patria.

El representante de Bulgaria dijo que los preparativos y las medidas del Gobierno de Israel no eran sino la manifestación externa de la política de intervención practicada por algunos círculos imperialistas para restablecer su control y explotar los enormes recursos naturales de la región. En respuesta a las provocaciones israelíes, los Estados árabes se habían visto obligados a adoptar medidas para su defensa. El hecho de que la presencia de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas en territorio de la República Árabe Unida se hubiese considerado una medida extraordinaria, de naturaleza provisional, y el que el consentimiento de la República Árabe Unida constituyera la base jurídica de aquella presencia no parecía molestar a ciertos círculos que sostenían que el retiro de la Fuerza había contribuido a la crisis actual. El Consejo tenía el deber de exhortar a la más estricta moderación y de hacer todo lo posible para garantizar la observancia, por Israel de los Acuerdos Generales de Armisticio y su participación en el mecanismo de vigilancia de la Tregua establecido por las Naciones Unidas. Su delegación apoyaba plenamente el proyecto de resolución de la República Árabe Unida.

Los representantes de Marruecos, la Arabia Saudita y Malí sostuvieron que las persistentes violaciones de los Acuerdos Generales de Armisticio por Israel, sus agresivos planes de expansión y su continuo desprecio de las decisiones de las Naciones Unidas eran parte esencial de la crisis actual. Lo que sucedía ahora en el Oriente Medio no era un incidente aislado, sino uno de los aspectos de un problema más amplio y más grave, cuya esencia era la agresión sionista en Palestina. Por lo tanto, correspondía al Consejo, en su misión de paz para el Oriente Medio, atacar las causas fundamentales del problema. Al aprobar una resolución, dijo el representante de Arabia Saudita, que no llegara a tratar el problema de la restitución de una Palestina unida al pueblo indígena, el Consejo eludiría las responsabilidades que le confería la Carta para el Consejo. En cuanto al Golfo de Akaba, los representantes árabes sostenían que el Golfo era y siempre había sido árabe, que la presencia de Israel en el Mar Rojo era resultado de una ocupación israelí ilegal, en violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad; que los Estados árabes se hallaban en estado de guerra contra Israel y que, por lo tanto, la República Árabe Unida estaba actuando dentro de sus prerrogativas soberanas al excluir los barcos de Israel o cualesquiera otros barcos extranjeros con cargamento destinado a Israel.

El representante de Francia observó que el objetivo inmediato del Consejo debía ser el de llegar a un acuerdo sobre los términos de un llamamiento que se haría a las partes para que se abstuvieran de apoyar sus reivindicaciones por algún tipo de fuerza. En opinión de su delegación, el llamamiento debía expresarse de manera que no aprobase ni desaprobaba la posición de las partes. Exhortó a los demás miembros permanentes del Consejo a que se sumaran a los esfuerzos destinados a llevar la crisis al único camino que, a juicio de su Gobierno, podía conducir a la paz: la reducción de la tirantez y después la celebración de negociaciones. Su delegación pensaba que sería inútil continuar el exa-

men de proyectos de resolución sobre los cuales era sumamente difícil llegar a un consenso.

ESTALLIDO DE LAS HOSTILIDADES Y EXAMEN REALIZADO POR EL CONSEJO ENTRE EL 5 Y EL 15 DE JUNIO

En la mañana del 5 de junio el Consejo de Seguridad se reunió en sesión de emergencia luego de que Israel y la República Árabe Unida formularan acusaciones al Presidente del Consejo sobre el estallido de las hostilidades en el Oriente Medio. Al explicar las circunstancias de la reunión, el Presidente indicó que a las 3.10, hora de Nueva York, el representante de Israel le había informado de que fuerzas egipcias de tierra y aire habían iniciado movimientos contra Israel, cuyas fuerzas armadas estaban rechazando el ataque. A las 3.30 horas el representante de la República Árabe Unida le había informado de que Israel había lanzado una agresión traicionera y premeditada contra la República Árabe Unida, atacando puntos de la faja de Gaza y del Sinaí, aeropuertos de El Cairo y de la zona del Canal de Suez y varios otros aeropuertos de la República Árabe Unida. Las informaciones recibidas por el Secretario General habían confirmado intercambios de fuego y acciones aéreas en esa zona a partir de las primeras horas de la madrugada.

El Secretario General comunicó al Consejo de Seguridad que las fuentes de las Naciones Unidas no tenían medios de averiguar la manera cómo se habían iniciado las hostilidades, sobre todo porque la FENU estaba concentrada en sus campamentos preparando su partida. Sin embargo, todos los informes concordaban en que en numerosos lugares se desarrollaban serias acciones militares y aéreas y que dichas acciones se extendían. El General Indarjit Rikhye, Comandante de la FENU, había informado de que dos aviones de Israel habían violado el espacio aéreo de la República Árabe Unida sobre Gaza y El Arish a las 8.00, hora local. El personal de la FENU en el campamento de Rafah había dado noticia de violentos combates entre fuerzas de la República Árabe Unida y de Israel en la frontera, a las 8 de la mañana, hora local. Las autoridades de la República Árabe Unida en Gaza habían informado al General Rikhye de incursiones aéreas en gran escala en toda la República Árabe Unida y de ataques efectuados por fuerzas israelíes contra El Qusaima en el Sinaí, a las 8, hora local. La artillería de la República Árabe Unida en Gaza había comenzado a disparar contra el territorio controlado por Israel a las 9.15 horas. El General Rikhye había informado también de que aviones israelíes habían ametrallado un convoy de la FENU al sur de Khan Yunis, en la carretera de Gaza a Rafah, matando a tres soldados indios e hiriendo a varios otros. El General Odd Bull, Jefe del Estado Mayor del Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua en Palestina, había comunicado que en Jerusalén los disparos habían comenzado a las 11.25, hora local. Los observadores de las Naciones Unidas en la frontera siria habían informado de que los combates aéreos entre aviones israelíes y sirios habían comenzado a las 11.55 horas. A pesar de las garantías dadas al Jefe de Estado Mayor por Israel y Jordania en el sentido de que respetarían la inviolabilidad del cuartel general del Organismo en Jerusalén, soldados jordanios habían ocupado la Casa de Gobierno en la mañana del 5 de junio. El Secretario General dijo que había dirigido un llamamiento urgente al Rey de

Jordania a fin de que las tropas jordanias evacuaran inmediatamente la Casa de Gobierno.

El representante de Israel alegó que en las primeras horas del 5 de junio, columnas blindadas egipcias habían realizado un movimiento ofensivo contra las fronteras de Israel, a la vez que aviones egipcios procedentes de aeródromos del Sinaí habían salido hacia Israel. La artillería egipcia en la faja de Gaza había bombardeado varias aldeas israelíes de la zona. Israel estaba actuando en legítima defensa, y, de conformidad con la Carta, había presentado el asunto al Consejo de Seguridad.

El representante de la República Árabe Unida alegó que Israel había, una vez más, cometido una agresión a traición contra su país. Afirmó que el ataque realizado en las primeras horas de la madrugada indicaba, sin lugar a dudas, que los israelíes, como de costumbre, habían preparado y planeado esta agresión en violación de la Carta. Frente a la agresión, su país no tenía más remedio que defenderse, según el Artículo 51 de la Carta. Exhortó a que el Consejo condenara severamente la agresión israelí.

En un informe suplementario publicado en la noche del 5 de junio, el Secretario General indicó que se oía un violento tiroteo en Jerusalén y sus alrededores. El Comandante de la FENU había comunicado que, a raíz de disparos de artillería contra el campamento principal del batallón indio, cerca del cual había posiciones militares de la República Árabe Unida, un oficial y un soldado indios habían resultado muertos y nueve soldados habían sido heridos. El Jefe de Estado Mayor del Organismo había relatado que fuerzas israelíes habían ocupado la Casa de Gobierno y que tanto él como su estado mayor habían sido llevados bajo escolta a Israel. El informe contenía los textos de los mensajes enviados por el Secretario General al Gobierno de Israel para protestar por el ametrallamiento del convoy de las Naciones Unidas y la ocupación de la Casa de Gobierno, y pedir a Israel que devolviera la Casa de Gobierno al control exclusivo de las Naciones Unidas.

En una adición publicada el 6 de junio, el Secretario General transmitió al Consejo de Seguridad nuevas informaciones recibidas del Jefe de Estado Mayor del Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua en Palestina y de observadores de las Naciones Unidas sobre el terreno con respecto a la continuación de los combates en Jerusalén, Siria, Gaza, y El Arish, así como sobre el fracaso de los esfuerzos desplegados por los observadores de las Naciones Unidas para lograr la cesación del fuego. La Sede de la FENU en Gaza había estado expuesta al fuego directo de artillería israelí durante la noche del 5 al 6 de junio, por lo cual el Comandante de la FENU se vio obligado a trasladar dicha Sede al Campamento Tre Kroner cerca de la playa de Gaza. Durante el bombardeo resultaron muertos tres soldados indios y otros tres fueron heridos.

En la tarde del 6 de junio el Consejo aprobó por unanimidad, como resolución 233 (1967), un proyecto presentado por el Presidente en el que: 1) instó a los Gobiernos interesados a que, como primer paso, adoptasen sin demora todas las medidas para que cesasen inmediatamente el fuego y todas las actividades militares en la zona; y 2) pidió al Secretario General que mantuviese al Consejo al corriente de la situación y le informase rápidamente sobre cualquier acontecimiento.

El representante de los Estados Unidos señaló que la resolución era el primer paso hacia la paz en el Medio Oriente y expresó la ferviente esperanza de que el llamamiento del Consejo se cumpliera plenamente y de inmediato.

A continuación el representante de los Estados Unidos negó categóricamente las que llamó fantásticas alegaciones formuladas durante las últimas veinticuatro horas, según las cuales aviones norteamericanos habían intervenido en las hostilidades en el Cercano Oriente. Para impedir una mayor difusión de estas peligrosas falsedades, su Gobierno estaba dispuesto a cooperar en una inmediata investigación imparcial de tales cargos por las Naciones Unidas, y a invitar a funcionarios de las Naciones Unidas a bordo de sus portaviones en el Mediterráneo en cualquier momento para investigar las actividades pasadas y presentes de sus aviones en la zona.

El representante del Reino Unido también rechazó en forma categórica cargos análogos, según los cuales aviones británicos habían participado en los combates del lado de Israel. Como afirmó en una carta dirigida al Presidente del Consejo el 6 de junio, la política del Gobierno de Su Majestad era evitar tomar partido en el conflicto y hacer todo lo posible para lograr una cesación del fuego. Después dijo que vería con satisfacción una inmediata investigación imparcial de tales cargos por las Naciones Unidas.

El representante de la URSS señaló una declaración publicada por su Gobierno el 5 de junio, en la que afirmaba, entre otras cosas, que Israel había cometido una agresión contra la República Árabe Unida y otros Estados vecinos, en flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y de reglas elementales del derecho internacional. El conflicto había estallado por la temeridad de los dirigentes de Israel, quienes se veían alentados por ciertos círculos imperialistas. El Gobierno soviético apoyaba resueltamente a los Gobiernos y pueblos de los Estados árabes en su justa lucha por su independencia y sus derechos soberanos y exigía que el Gobierno de Israel, como primer paso urgente, cesara inmediatamente e incondicionalmente sus actividades militares contra la República Árabe Unida, Siria y Jordania y retirase sus tropas tras la línea de demarcación de armisticio. Las Naciones Unidas debían condenar las acciones del Gobierno de Israel y tomar medidas urgentes para restablecer la paz en el Oriente Medio. La resolución sobre cesación del fuego aprobada por el Consejo de Seguridad era lo mínimo que podía hacer el Consejo. La delegación soviética consideraba que el Consejo debía aprobar sin más demora una decisión relativa al retiro inmediato e incondicional de las fuerzas del agresor.

El representante de Israel dijo ante el Consejo que su país, gracias a sus esfuerzos independientes, había pasado de una situación de grave peligro a una resistencia victoriosa contra las fuerzas combinadas de la República Árabe Unida, Jordania, Siria y el Irak. Habló de la política y de los preparativos militares de los árabes en los días que precedieron al estallido de las hostilidades y dijo que de una manera sistemática y abierta se habían combinado la política, las armas y los hombres para amenazar a Israel con el asalto colectivo y el exterminio. Después del ataque lanzado por las fuerzas egipcias el 5 de junio, Israel se había defendido de conformidad con el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. De los esfuerzos desplegados por el Gobierno de Israel para impedir la am-

pliación del conflicto nadie había hecho caso, ni Jordania, que había abierto fuego de artillería a través de toda la frontera, incluso en Jerusalén, ni Siria, que había iniciado bombardeos y ataques de artillería contra aldeas israelíes. El representante de Israel se refirió a continuación al retiro de la FENU y alegó que no había sido acompañado por las deliberaciones internacionales correspondientes y que no se había hecho ningún intento de ayudar a Israel a superar el grave perjuicio que para sus intereses vitales significaba tal retiro. Cuando las Naciones Unidas aceptaban desempeñar una función, tenían derecho a pedir que su terminación no se verificase en circunstancias que condujeran a situaciones contrarias a la Carta. Refiriéndose a los principales elementos de tirantez que llevaron al conflicto, afirmó que el bloqueo del Golfo de Akaba, el retiro de la FENU y la anormal concentración de tropas en la península del Sinaí habían perturbado de hecho, el *status quo* que durante diez años había asegurado una estabilidad relativa en la frontera egipcio-israelí. Los gobiernos interesados tenían ahora que dedicarse a implantar entre sí un nuevo sistema de relaciones basado en la aceptación de Israel como Estado profundamente arraigado en el Oriente Medio y en el principio del arreglo pacífico de las controversias. Otro factor que promovería la armonía en el Oriente Medio se relacionaba con las Potencias externas. Resultaba importante que los Estados ajenos a la región, y sobre todo las grandes Potencias, adoptaran una actitud ecuaníme con respecto a los problemas de la zona y prestaran un apoyo imparcial a la integridad e independencia de los Estados y a los derechos de los Estados. Israel recibía con satisfacción el llamamiento del Consejo para una cesación del fuego, pero su puesta en la práctica dependía de la aceptación y cooperación de los gobiernos responsables de la actual situación.

El representante de la India afirmó que en tanto que su delegación y otras celebraban la decisión unánime del Consejo, hubiera preferido una resolución que vinculase la cesación del fuego con un retiro de las fuerzas armadas a las posiciones ocupadas antes del estallido de las hostilidades. Tal decisión hubiera estado en conformidad con la práctica anterior del Consejo, basada en el principio de que el agresor no debe gozar del fruto de la agresión. Protestó enérgicamente contra los ataques israelíes sobre las fuerzas indias de la FENU, que se estaban retirando, y pidió garantías respecto de la protección y seguridad de los elementos de la FENU que continuaban en la zona.

El representante del Irak declaró que la resolución 233 (1967) era una entrega completa a Israel. El Consejo, en lugar de condenar al agresor, de hecho había permitido a Israel conservar el fruto de la agresión. Afirmó que las negociaciones encaminadas a redactar una resolución sobre la cesación del fuego, que sería acompañada por una exhortación a retirar las fuerzas a las posiciones ocupadas antes de las hostilidades, habían fracasado porque ciertos Estados, en especial los Estados Unidos, se habían negado a apoyar tal resolución.

El representante de Siria denunció a Israel como agresor y afirmó que los Estados Unidos y el Reino Unido habían sido cómplices de Israel al unirse al ataque aéreo contra poblaciones árabes y al dar protección aérea a las fuerzas armadas israelíes. Anunció que su país, junto con Argelia, la República Árabe Unida y el Irak, había roto las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos.

El representante de Marruecos sostuvo que el deber primordial del Consejo al tratar la denuncia de la agresión israelí, debía haber consistido en definir la agresión y condenar al agresor. Al adoptar su resolución, el Consejo había creado un precedente que tendría peligrosas consecuencias. En lo futuro, cualquier país que se sintiese seguro de su propio poderío o que tuviese el apoyo o la promesa de apoyo de cualquier otro país, podría realizar acciones agresivas con la certeza de que el Consejo de Seguridad examinaría la cuestión durante cuarenta y ocho horas y luego, a fin de garantizar la paz, adoptaría una resolución sobre cesación del fuego sin nombrar al país responsable de haber tomado la iniciativa.

El representante de Bulgaria exigió que el Consejo condenase la agresión de Israel contra los Estados árabes y pidió el inmediato retiro de sus fuerzas tras las treguas de armisticio.

El representante de Mali dijo que su delegación condenaba la agresión de Israel y expresó pleno apoyo a la República Árabe Unida y a los demás pueblos árabes.

Los representantes de Francia, Etiopía, China, Argentina, Brasil, Canadá y Dinamarca insistieron en la necesidad de llevar inmediatamente a la práctica la cesación del fuego y expresaron la esperanza de que la resolución sería un primer paso efectivo y constructivo hacia el restablecimiento de la paz en la zona y la solución de los problemas que habían provocado la crisis.

El 7 de junio, el Consejo se reunió a petición del representante de la URSS, quien afirmó durante la sesión que las fuerzas agresoras continuaban sus operaciones militares, sin acatar la resolución 233 (1967) aprobada por el Consejo de Seguridad el 6 de junio. Por consiguiente, era esencial que el Consejo actuase sin demora para renovar su llamamiento a la cesación del fuego. Presentó un proyecto de resolución por el cual el Consejo: 1) instaba a los gobiernos interesados a que, como primer paso, cesasen el fuego y todas las actividades militares a las 20 horas del meridiano de Greenwich del 7 de junio de 1967; y 2) pedía al Secretario General que mantuviese al Consejo al corriente de la situación y le informase rápidamente sobre cualquier acontecimiento. El representante de la URSS pidió una votación inmediata sobre el proyecto de resolución.

En la misma sesión el Secretario General informó al Consejo de que había recibido un cablegrama de 7 de junio, en el que el Ministro de Relaciones Exteriores de Jordania afirmaba que su Gobierno aceptaba la cesación del fuego y había ordenado a sus fuerzas armadas que lo observasen, excepto en caso de legítima defensa. El Secretario General también anunció que, según la información transmitida por el Jefe de Estado Mayor del Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua en Palestina, la sede de la Comisión Mixta de Armisticio jordano-israelí había sido ocupada por tropas israelíes en la mañana del 7 de junio. En vista de la ocupación de la sede del Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua en Palestina en Jerusalén y de la sede de la FENU en Gaza por las tropas israelíes, se había dirigido al Gobierno de Israel solicitándole seguridades de que los archivos y documentos de ambas sedes serían conservados y protegidos. El Secretario General informó al Consejo de las hajas sufridas por la FENU y de los esfuerzos encaminados a hallar medios de evacuar a las tropas restantes.

En la sesión del Consejo celebrada en la tarde del 7 de junio, el proyecto de resolución soviético fue aprobado por unanimidad como resolución 234 (1967).

El representante del Canadá presentó un proyecto de resolución en que el Consejo de Seguridad pedía al Presidente que, con la asistencia del Secretario General, tomase las medidas necesarias para lograr el cumplimiento pleno y efectivo de sus resoluciones de 6 y 7 de junio.

Al presentar el proyecto de resolución, el representante del Canadá afirmó que tenía por objeto llenar una laguna en la definición de la responsabilidad con respecto a la aplicación de las resoluciones del Consejo sobre la cesación del fuego. Era preciso hacer algo más que mantener simplemente informado al Consejo de la situación.

En el curso del debate el representante de la República Árabe Unida repitió cargos formulados anteriormente de que los Estados Unidos y el Reino Unido habían intervenido en las hostilidades del lado de Israel. Afirmó que en tanto que Jordania había aceptado la cesación del fuego, Israel continuaba su agresión y ocupaba territorio jordano; Israel también continuaba su agresión contra el territorio de la República Árabe Unida. Pidió al Consejo que condenase a Israel, le ordenase que cesase el fuego de inmediato y que se retirase a las posiciones ocupadas antes del estallido de las hostilidades.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel negó que su país fuera el agresor y destacó que Israel no había recibido la menor ayuda de los Estados Unidos ni del Reino Unido al rechazar la agresión árabe. Señaló que mientras su país había recibido con satisfacción y aceptado la resolución sobre cesación del fuego, la República Árabe Unida, Siria e Irak no habían aún aprovechado la oportunidad de aceptar tal llamamiento. Por lo demás, la aceptación de la cesación del fuego por Jordania estaba condicionada por el hecho de que sus fuerzas se hallaban bajo el mando de la República Árabe Unida y que unidades de asalto egipcias estacionadas en Jordania llevaban a cabo operaciones militares contra Israel. Por consiguiente, la aceptación de la cesación del fuego por parte de la República Árabe Unida resultaba decisiva no sólo para lo que ocurriese en el frente egipcio-israelí, sino también respecto de lo que ocurriese en el frente jordano-israelí.

Los representantes de los Estados Unidos y del Reino Unido nuevamente rechazaron los cargos formulados por el representante de la República Árabe Unida y repitieron propuestas para que las Naciones Unidas efectuasen una investigación sobre el terreno.

El Secretario General comunicó al Consejo que, según informaciones recibidas del Jefe de Estado Mayor del Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua en Palestina, la cesación del fuego en la zona de Jerusalén no era efectiva. En la noche del 6 al 7 de junio, las fuerzas israelíes habían bombardeado y ocupado la cima del monte Scopus, que domina la ciudad de Jerusalén. Un sector de la ciudad había recibido fuego de morteros jordanos durante un breve período a media mañana del 7 de junio, y aproximadamente a las 10.30 horas del meridiano de Greenwich había comenzado un intenso bombardeo israelí en las cercanías de Belén.

En un telegrama de 7 de junio el Ministro de Relaciones Exteriores de Israel informó al Presidente del

Consejo de Seguridad de que a las 16.45, hora de Nueva York, había comunicado al Secretario General que el Gobierno de Israel aceptaba el llamamiento del Consejo de Seguridad para una inmediata cesación del fuego, siempre que las demás partes también lo aceptasen.

En un telegrama de 8 de junio el Ministro de Relaciones Exteriores de Jordania informó al Secretario General de que el Gobierno de Jordania aceptaba la aplicación de la resolución del Consejo de Seguridad el 7 de junio.

En un telegrama de 8 de junio el Ministro de Relaciones Exteriores de Kuwait informó al Secretario General de que el Gobierno de Kuwait no observaría ni aceptaría las resoluciones sobre cesación del fuego del Consejo de Seguridad.

El 8 de junio se reunió el Consejo a petición de los Estados Unidos y la URSS, en vista de la continuación de los combates en el Oriente Medio.

Los Estados Unidos presentaron un proyecto de resolución según el cual el Consejo de Seguridad, advirtiendo que Israel, Jordania y la República Árabe Unida habían indicado su mutua aceptación del requerimiento del Consejo de cesación del fuego, y que Israel había manifestado, con respecto a todas las partes, que aceptaba la cesación del fuego siempre que las otras partes la aceptaran: 1) pediría a Israel y Jordania que observarían estrictamente el acuerdo sobre cesación del fuego a que habían llegado; 2) insistiría en que todas las partes interesadas cumplieran inmediatamente los repetidos requerimientos del Consejo de cesación del fuego y de todas las actividades militares como primer paso urgente para el establecimiento de una paz duradera en el Oriente Medio; 3) requeriría que las partes interesadas que iniciaran luego, prontamente, discusiones utilizando la asistencia de las Naciones Unidas o de una tercera parte, según desearan, tendientes a establecer acuerdos viables conducentes al retiro de las fuerzas armadas y al rompimiento del contacto entre ellas, a la renuncia al uso de la fuerza en todas sus formas, el mantenimiento de los derechos internacionales esenciales y el establecimiento de una paz estable y duradera en el Oriente Medio; 4) pediría al Presidente del Consejo de Seguridad y al Secretario General que adoptaran medidas inmediatas a fin de asegurar la observancia de la cesación del fuego y que informaran al Consejo sobre el particular dentro de las 24 horas siguientes, y 5) pediría también al Secretario General que proporcionara la asistencia que pudiese requerirse para facilitar las discusiones pedidas en el párrafo 3.

Al presentar el proyecto de resolución, el representante de los Estados Unidos señaló que el propósito de éste era cesar los combates y abrir la vía para la solución definitiva de todas las cuestiones pendientes entre las partes. El objetivo debía ser que las Potencias beligerantes tomaran la decisión de vivir en paz y de establecer relaciones normales, según se prevé y promete en la Carta de las Naciones Unidas.

El representante de la URSS formuló el cargo de que los círculos extremistas de Tel-Aviv, embriagados por su éxito temporal, continuaban su agresión contra los Estados árabes e incluso fijando condiciones para la aceptación de lo estipulado en las resoluciones del Consejo sobre la cesación del fuego. En efecto, Israel había lanzado un desafío a las Naciones Unidas y a todos los Estados amantes de la paz, creando una si-

tuación preñada de peligrosas consecuencias. Israel era el único responsable de la agresión y debía ser sancionado severamente por los crímenes cometidos.

El representante de la URSS presentó un proyecto de resolución en virtud del cual el Consejo de Seguridad, comprobando que Israel había hecho caso omiso de las resoluciones del Consejo sobre la cesación de las actividades bélicas de 6 y 7 de junio, y que Israel no sólo no había cesado las actividades bélicas, sino que incluso había aprovechado el tiempo transcurrido para apoderarse de nuevos territorios: 1) condenaría enérgicamente las actividades agresivas de Israel y su violación de las resoluciones 233 (1967) y 234 (1967) del Consejo de la Carta de las Naciones Unidas y de los principios de la Organización, y 2) exigiría que Israel pusiera fin inmediatamente a las actividades bélicas contra los Estados árabes vecinos y retirara todas sus tropas de los territorios de esos Estados al otro lado de las líneas de armisticio.

En el curso de la sesión, el Secretario General informó al Consejo que había recibido una carta del Representante Permanente de la República Árabe Unida en la que declaraba que su Gobierno había decidido aceptar el requerimiento de cesación del fuego hecho en las resoluciones del Consejo de 6 y 7 de junio, si la otra parte también cesaba el fuego. El Secretario General dijo además al Consejo que el Jefe de Estado Mayor del Organismo de las Naciones Unidas encargado de la Vigilancia de la Tregua en Palestina le había informado que en la mañana del 8 de junio, el Ministro de Relaciones Exteriores de Jordania le había comunicado que Israel estaba bombardeando Al Mafraq y que las fuerzas de Israel estaban concentrándose en la ribera occidental del río Jordán. El General Bull había comunicado esta información al Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, que había indicado que tropas y aviones iraquíes se encontraban en la región de Al Mafraq. El Secretario General señaló que las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre cesación del fuego también habían sido transmitidas al Gobierno del Irak, pero que no se había recibido respuesta alguna. Observadores de las Naciones Unidas en Tiberiades habían comunicado que en la mañana del 8 de junio había intenso fuego aéreo y terrestre en la zona general del sector central de la zona desmilitarizada entre Israel y Siria.

El representante de Israel declaró que, debido a que ciertos Estados árabes no observaban la cesación del fuego, continuaban en el Oriente Medio los combates y el derramamiento de sangre. El único acuerdo establecido y efectivo sobre cesación del fuego era el concluido entre Israel y Jordania. La aceptación de la cesación del fuego por la República Árabe Unida creaba la perspectiva inmediata del fin de las hostilidades, salvo en el caso de Siria. El Gobierno de Siria no había aceptado la cesación del fuego, y los combates en la frontera entre Israel y Siria ganaban en intensidad. Se refirió al proyecto de resolución de la URSS y dijo que su objeción fundamental era que estaba basado en premisas inexactas y en responsabilidades inequitativamente distribuidas. Israel había sido el primero en aceptar las resoluciones sobre cesación del fuego y había suspendido las actividades bélicas tan pronto como se había conseguido la cesación del fuego con uno de sus países vecinos. En cuanto al proyecto de resolución presentado por los Estados Unidos, observó que había que insistir no en volver a la beligerancia, sino

en avanzar hacia la paz, y que en el proyecto se proponía la conclusión de acuerdos de las fuerzas armadas en el rompimiento del contacto entre el marco de negociaciones de paz. Añadió que el criterio de Israel era insistir no tanto en la autoridad de órganos internacionales, como en el establecimiento de contactos bilaterales directos entre los gobiernos interesados.

El representante de los Estados Unidos acogió con satisfacción la aceptación de la cesación del fuego por la República Árabe Unida, y revisó su proyecto de resolución con objeto de incluir a este país entre los que habían aceptado el requerimiento de cesación del fuego.

El representante de Bulgaria declaró que el proyecto de resolución de los Estados Unidos era inaceptable porque colocaba a Jordania y la República Árabe Unida en el mismo plano con el agresor. Esto equivalía a permitir que las tropas de Israel permanecieran donde se encontraban para asegurar que se diera satisfacción a las peticiones de Israel sobre concesiones territoriales y de otra índole por los Estados árabes.

El Consejo celebró una sesión urgente el 9 de junio a petición de Siria. Al abrir la sesión, el Presidente informó al Consejo que había recibido del Gobierno de Siria un telegrama de fecha 9 de junio, en que anunciaba su aceptación de los dos requerimientos del Consejo para la cesación del fuego, siempre que la otra parte la aceptara. El Presidente también informó al Consejo de las acusaciones hechas por Israel y luego por Siria de que las hostilidades continuaban.

El Secretario General manifestó al Consejo que en las primeras horas de la mañana el Presidente de la Comisión Mixta de Armisticio Israelí-Siria le había comunicado que había recibido un mensaje del Ministro de Relaciones Exteriores de Siria en que afirmaba que su país era objeto de un ataque israelí a lo largo de toda la Línea de Demarcación del Armisticio entre Israel y Siria. El Jefe del Estado Mayor del Organismo de las Naciones Unidas encargado de la Vigilancia de la Tregua en Palestina, General Bull, había informado que en el sector central de la zona desmilitarizada había habido un bombardeo aéreo a las 0745 y 0755 horas GMT. El General Bull había informado también que las autoridades israelíes le habían comunicado que había habido intensos bombardeos cerca de Siria, inclusive la ciudad de Safed, y que anteriormente unas 16 aldeas israelíes habían sido sometidas a intenso fuego por la artillería siria. El Presidente de la Comisión había confirmado más tarde que la aviación israelí había bombardeado el norte y el este del Lago Tiberiades en la mañana del 9 de junio.

Después de las acusaciones y contraacusaciones de violaciones de cesación del fuego hechas por los representantes de Siria e Israel, el Consejo aprobó por unanimidad un proyecto de resolución presentado por el Presidente, como resolución 235 (1967). En esta resolución, el Consejo: 1) confirmó sus resoluciones 233 (1967) y 234 (1967) sobre la inmediata cesación del fuego y de toda acción militar; 2) requirió que cesaran sin dilación las hostilidades, y 3) pidió al Secretario General que se pusiera inmediatamente en relación con los Gobiernos de Israel y de Siria para disponer el cumplimiento de inmediato de las resoluciones citadas y que informara al Consejo en un plazo máximo de dos horas.

Los representantes de la URSS, Bulgaria y la India condenaron severamente a Israel por continuar los

combates y ocupar por la fuerza nuevos territorios árabes. El representante de la India sugirió que se pidiera al Secretario General que enviara un representante personal a la región para contribuir a reestablecer condiciones pacíficas y garantizar la seguridad de la población civil árabe en los territorios ocupados.

Posteriormente, el Secretario General dio lectura a una comunicación del representante de Siria en que notificaba la aceptación por su Gobierno de la resolución 235 (1967) del 9 de junio, y una comunicación del representante de Israel en que declaraba que su Gobierno aceptaba la resolución del 9 de junio siempre que Siria la aceptara y aplicara la cesación del fuego.

El representante de Siria, en una nueva declaración hecha al Consejo, afirmó que fuerzas israelíes seguían avanzando en territorio sirio y que aviones israelíes habían atacado a Damasco.

El representante de Israel negó las acusaciones y dijo que la artillería siria continuaba bombardeando aldeas fronterizas israelíes.

Después de algunas discusiones sobre la aplicación de la resolución por los jefes de las fuerzas armadas sobre el terreno, el Consejo aplazó su sesión hasta recibir confirmación de haberse dado a ambas partes órdenes de cesar el fuego y de que los combates habían cesado.

Cuando el Consejo volvió a reunirse en la noche del 9 de junio, el Secretario General informó que Siria había contestado que había ordenado sus fuerzas que cesaran inmediatamente las operaciones militares, pero que Israel seguía las actividades bélicas contra Siria, incluidos los ataques aéreos. Israel contestó que había dado orden de cesar las hostilidades y que por su parte todos los combates habían cesado, salvo las medidas de legítima defensa.

En el curso del debate, el representante de Siria repitió las acusaciones de que Israel seguía realizando vastas operaciones terrestres y aéreas con creciente intensidad, lo que no dejaba lugar a dudas respecto a que su objetivo era la invasión total de Siria. El representante de la República Árabe Unida manifestó al Consejo que muchas partes de su país habían sido bombardeadas por Israel después de la aceptación de la cesación del fuego por su Gobierno. El representante de Israel negó ambas acusaciones y acusó a Siria de continuar sus bombardeos a las aldeas israelíes.

En respuesta a peticiones hechas por algunos miembros del Consejo de que los observadores de las Naciones Unidas en la región reunieran más información sobre las acusaciones de violaciones de la cesación del fuego, el Secretario General declaró que si se obtuvieran ciertas condiciones en cuanto a la cooperación por las partes interesadas con los Observadores de las Naciones Unidas, inclusive la restauración del uso de la Casa de Gobierno en Jerusalén, con sus instalaciones de comunicaciones, por el Jefe de Estado Mayor del Organismo de las Naciones Unidas encargado de la Vigilancia de la Tregua en Palestina, así como la libertad de desplazamiento de los Observadores Militares de las Naciones Unidas en los territorios de ambas partes, podría informar prontamente al Consejo sobre la observancia de la cesación del fuego.

El Consejo acordó a continuación pedir a las partes interesadas que prestaran toda la cooperación posible a los Observadores de las Naciones Unidas en el cumplimiento de sus funciones, solicitar al Gobierno de Is-

rael que restableciera el uso de la Casa de Gobierno por el Jefe de Estado Mayor del Organismo de las Naciones Unidas encargado de la Vigilancia de la Tregua en Palestina y pedir a las partes que volvieran a dar plena libertad de movimiento a los Observadores de las Naciones Unidas.

El 10 de junio, antes de romper el alba, el Consejo de Seguridad celebró una sesión de urgencia a petición del representante de Siria, quien declaró que la situación había empeorado gravemente porque las fuerzas israelíes habían ocupado la ciudad siria de Kuneitra y avanzaban hacia Damasco. La URSS había solicitado, en una carta de fecha 9 de junio, que se incluyera en el orden del día del Consejo el punto "Cesación de las actividades militares de Israel y retiro de las fuerzas israelíes de las partes del territorio de la República Árabe Unida, Jordania y Siria de que se han apoderado como resultado de una agresión". El Consejo acordó incluir en su orden del día el punto propuesto por la URSS y examinar simultáneamente los cuatro temas que ante sí tenía.

En el curso de la sesión, el Secretario General dio al Consejo informes orales sobre la evolución de la situación militar, según la información que había recibido del Jefe de Estado Mayor del Organismo de las Naciones Unidas encargado de la Vigilancia de la Tregua en Palestina y del Presidente de la Comisión Mixta de Armisticio Israelí-Siria. Esos informes incluían, entre otras cosas, una evaluación de la situación hecha por el General Bull, según la cual los Observadores de las Naciones Unidas habían comunicado que los bombardeos y las hostilidades continuaban en Siria, a lo largo de las colinas que dominan la orilla oriental del Lago Tiberíades y en la ribera oriental del río Jordán, y que el aeropuerto y los suburbios de Damasco habían sido bombardeados por las fuerzas aéreas israelíes. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel negó el ataque aéreo sobre Damasco o su aeropuerto, afirmando que los aviones israelíes sólo sobrevolaban Siria para dar protección a las fuerzas israelíes. El Secretario General observó que los informes eran fragmentarios, reflejando así las extremas dificultades en que tenían que operar el General Bull y los Observadores de las Naciones Unidas en la región.

En el debate sobre la responsabilidad por las violaciones de la cesación del fuego, Siria afirmó que el representante de Israel intentaba deliberadamente engañar al Consejo en sus aseveraciones de que Israel cumplía la cesación del fuego, y pidió al Consejo de Seguridad que aplicara sanciones contra Israel por sus flagrantes violaciones de las resoluciones sobre cesación del fuego.

Los representantes de la URSS, Bulgaria, Malí y la India hicieron declaraciones similares y pidieron al Consejo que adoptara medidas inmediatas para detener la agresión de Israel.

El representante de Israel negó las acusaciones y declaró que, pese a la aceptación de dos resoluciones sobre cesación del fuego, Siria no había interrumpido el bombardeo de aldeas israelíes. Sostuvo que fuerzas israelíes operaban para reducir al silencio los emplazamientos de artillería situados en Siria.

El representante de los Estados Unidos declaró que su Gobierno no condonaría ninguna violación de la cesación del fuego por cualquiera de las partes, y dijo que ambas estaban obligadas a dar cumplimiento a la cesación del fuego. Sin embargo, su Gobierno no emi-

tiría juicio sobre cuál de las partes era responsable, basándose en las afirmaciones hechas por ellas.

Cuando el Consejo volvió a reunirse horas más tarde la misma mañana, el Secretario General informó que el Presidente de la Comisión Mixta de Armisticio Israelí-Siria había confirmado los ataques aéreos en las vecindades de Damasco. El General Bull había comunicado que Israel estaba dispuesto a adoptar medidas para la cesación del fuego. El Secretario General añadió que se había concertado una reunión entre el General Bull y el Ministro de Defensa de Israel.

El representante de la URSS señaló a la atención del Consejo una declaración hecha por su Gobierno el día 10 de junio, en la que se decía que si Israel no ponía fin inmediatamente a sus actividades bélicas, la Unión Soviética, junto con todos los Estados amantes de la paz, tendría que aplicar sanciones contra Israel. En la declaración se añadía que, en vista de la continuación de la agresión por Israel, el Gobierno soviético había decidido romper las relaciones diplomáticas con ese país.

El representante de Jordania afirmó que millares de jordanos eran expulsados de sus hogares en el territorio invadido por Israel en la ribera occidental del río Jordán, y huían a Amman. Pidió al Consejo, como cuestión de suma urgencia, que adoptara medidas para impedir que se cometieran nuevas atrocidades contra la población civil.

Varios miembros del Consejo expresaron su preocupación por la suerte de los refugiados e instaron a las partes a que dieran la consideración más humanitaria a los civiles víctimas de la guerra y a los prisioneros de guerra.

El representante de Siria señaló que el informe del Organismo de las Naciones Unidas encargado de la Vigilancia de la Tregua en Palestina había confirmado informes anteriores según los cuales el aeropuerto de Damasco y los suburbios de dicha ciudad eran sometidos a continuos ataques aéreos por parte de Israel.

El representante de Francia declaró que las informaciones que el Consejo tenía ante sí bastaban para justificar un urgente llamamiento a las partes para que diesen cumplimiento a la cesación del fuego, que seguía siendo violada con frecuencia.

El representante de Israel declaró que, en la reunión celebrada entre el Ministro de Defensa de Israel y el Jefe de Estado Mayor del Organismo encargado de la Vigilancia de la Tregua, el Ministro de Defensa había declarado que Israel aceptaría toda propuesta que el Jefe de Estado Mayor hiciera para dar cumplimiento a las resoluciones del Consejo de Seguridad relativas a la cesación del fuego y a los arreglos para la vigilancia de la cesación del fuego. Subrayó que esos arreglos no formarían parte del Acuerdo de Armisticio General.

El representante de los Estados Unidos dijo que, a juicio de su Gobierno, era de suma importancia que Israel y los países árabes dieran cumplimiento a las resoluciones del Consejo de Seguridad, tanto en su letra como en su espíritu.

El Secretario General informó al Consejo de que el General Bull había propuesto una cesación del fuego entre Israel y Siria que entraría en vigor el 10 de junio a las 16.30 GMT. Israel había comunicado al General Bull que estaba dispuesto a aceptar la propuesta, siempre que también fuese aceptada por Siria y que, en el

momento de la cesación del fuego, se estacionaran en ambos lados observadores de las Naciones Unidas.

En un informe suplementario publicado posteriormente por el Secretario General se indicó que Israel y Siria habían aceptado las disposiciones propuestas por el General Bull para la cesación del fuego. Según dichas disposiciones, el 10 de junio a las 16.30 GMT cesarían por completo el fuego y los movimientos de tropas y, en la mañana del 11 de junio, se destacaría a observadores de las Naciones Unidas desde Kuneitra, en el lado de Siria, y desde Tiberiades en el lado de Israel.

El 10 de junio, la Argentina, Brasil y Etiopía presentaron un proyecto de resolución en virtud del cual, según fue posteriormente revisado, el Consejo: 1) instaría al Gobierno de Israel a que garantizara la protección, el bienestar y la seguridad de los habitantes de las zonas donde se habían llevado a cabo operaciones militares, y a que diese facilidades para el regreso de los habitantes que habían huido de esas zonas desde que comenzaron las hostilidades; 2) recomendaría a los gobiernos interesados que respetaran escrupulosamente los principios humanitarios que rigen el trato de los prisioneros de guerra y la protección de personas civiles en tiempo de guerra, que figuran en los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, y 3) instaría al Secretario General a que aplicase de una manera efectiva esa resolución y a que informase al Consejo de Seguridad.

El 10 de junio por la noche el Consejo se reunió a solicitud del representante de la URSS para que examinase la cuestión de la flagrante violación por Israel de las decisiones del Consejo que prescribían la cesación de las actividades militares.

El representante de la URSS dijo que, pese a la decisión del Consejo de Seguridad, Israel no había desistido de su intención de continuar tratando de lograr sus objetivos militares en el territorio de Siria. Subrayó que el Consejo de Seguridad no tenía derecho a aplazar la condena resuelta de los agresores israelíes por la flagrante violación de sus decisiones.

El Secretario General manifestó que, como resultado de las preguntas que había hecho al General Bull acerca de la situación militar imperante, había recibido confirmación de que se había efectuado un bombardeo al sur de Damasco y de que se había hecho fuego de artillería desde Siria contra Israel; ambos incidentes se habían registrado después de la hora fijada para la cesación del fuego. Israel y Siria habían confirmado la ocupación de Kuneitra por fuerzas israelíes, e Israel afirmaba que ella había ocurrido antes de la cesación del fuego.

El representante de la India declaró que, a su juicio, el Consejo debía adoptar rápidas medidas no sólo para reafirmar su autoridad sino, también, para poner fin a las pérdidas de vidas y garantizar que una de las partes no continuase desafiando sus decisiones.

El representante de los Estados Unidos declaró que, desde un principio, su Gobierno había sustentado la opinión de que el Consejo debía perseguir un solo objetivo, a saber: sofocar la conflagración en el Oriente Medio e iniciar las acciones necesarias para pacificar la zona. Presentó otro proyecto de resolución en virtud del cual el Consejo: 1) condenaría cualquier violación y todas las violaciones de la cesación del fuego; 2) pediría al Secretario General que ordenase una investigación a fondo de todos los informes sobre violaciones y

comunicarse sus resultados al Consejo de Seguridad lo antes posible; 3) pediría a las partes que respetasen escrupulosamente sus llamamientos en favor de la cesación del fuego contenidos en las resoluciones 233 (1967), 234 (1967), y 235 (1967), y 4) invitaría a los gobiernos interesados a que emitiesen instrucciones categóricas a todas las fuerzas militares para que hicieran cesar el fuego y todas las actividades militares, como se pedía en esas resoluciones.

En respuesta a las preguntas hechas por el representante de Francia acerca del informe presentado el 10 de junio por el Secretario General, éste manifestó, entre otras cosas, que Israel afirmaba que sus fuerzas habían ocupado Kuneitra con anterioridad a la cesación del fuego.

Refiriéndose al proyecto de resolución presentado por los Estados Unidos, el representante de la URSS dijo que aquél tenía por finalidad ayudar a Israel en su agresión y legalizar la ocupación del territorio árabe por medios violentos.

En otro informe verbal, el Secretario General informó al Consejo que, según la información recibida del Jefe de Estado Mayor del Organismo encargado de la Vigilancia de la Tregua, 1) era exacto que se habían lanzado bombas al sur de Damasco; 2) no había habido violaciones de la cesación del fuego por parte del lado árabe; 3) un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel había negado categóricamente el bombardeo por aviones israelíes, y 4) se había informado acerca de la adopción, por ambas partes, de medidas para dar cumplimiento a la cesación del fuego.

En las últimas horas de la noche del 11 de junio, el Consejo se reunió, a pedido de Siria, para examinar el constante empeoramiento de la situación resultante de la nueva penetración militar israelí en territorio de Siria.

El Secretario General informó verbalmente al Consejo que esa misma noche había recibido tres mensajes del Jefe de Estado Mayor del Organismo encargado de la Vigilancia de la Tregua cerca de la cuestión de la columna de tanques israelíes que se desplazaba desde Rafid. El Secretario General declaró que había procurado obtener, a título urgente, información del Jefe de Estado Mayor acerca de si las tropas israelíes se encontraban en Rafid y sus alrededores antes de la cesación del fuego, el 10 de junio, o si habían avanzado sobre ese sector después de la hora fijada para que entrase en vigor la cesación del fuego.

El representante de Siria afirmó que a las 18.00, hora local, una columna de vehículos blindados y tanques israelíes apoyada por helicópteros militares se había desplazado hacia el este y el sur desde Rafid — que había sido ocupada tres horas y diecisiete minutos después de la entrada en vigor de la cesación del fuego — y había ocupado nuevos lugares y localidades donde no se había combatido anteriormente. El nuevo avance tenía por objetivo el río Yarmuk y sus cabeceras.

Refiriéndose a la zona de Rafid, el representante de Israel dijo que no había habido ningún avance que rebasara las líneas de tregua establecidas para la cesación del fuego. Declaró además que a lo largo del frente no se estaba desarrollando lucha alguna y que la cesación de fuego se observaba escrupulosamente.

El representante de la URSS pidió que el Consejo adoptase medidas decisivas e inmediatas para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones por parte de Israel.

Algunos miembros del Consejo se inclinaron a favor de que éste adoptase medidas para hacer cesar por completo las hostilidades y exhortaron a las partes a dar cumplimiento a las resoluciones anteriores sobre cesación del fuego y a volver al ambiente de calma que facilitaría el examen de los problemas creados por la guerra.

El representante del Reino Unido sugirió que lo que el Consejo debía hacer era poner absolutamente en claro que insistía en que no debía haber ninguna violación de la cesación del fuego.

Después de una breve suspensión de la sesión, el Consejo la reanudó y aprobó por unanimidad, como resolución 236 (1967), un proyecto que había sido presentado por el Presidente. En virtud de dicha resolución, el Consejo: 1) condenaba todas y cada una de las violaciones de la cesación del fuego; 2) pedía al Secretario General que prosiguiese sus investigaciones e informase al Consejo cuanto antes; 3) afirmaba que su requerimiento de cesación de fuego y de suspensión de todas las actividades militares comprendía la prohibición de todo movimiento militar de avance con posterioridad a la cesación del fuego; 4) instaba al pronto retorno a las posiciones ocupadas al cesar el fuego, de todas las tropas que pudieran haber avanzado con posterioridad a las 16.30 horas del meridiano de Greenwich del 10 de junio de 1967, y 5) instaba a la plena cooperación con el Jefe de Estado Mayor del Organismo de las Naciones Unidas encargado de la Vigilancia de la Tregua en Palestina y los observadores para el cumplimiento de la cesación del fuego, incluso la libertad de movimiento y medios adecuados de comunicaciones.

Mientras tanto, el Secretario General, en un informe suplementario, indicó que se estaban cumpliendo las disposiciones de cesación del fuego del 10 de junio, tal como las había propuesto y negociado el Jefe de Estado Mayor del Organismo encargado de la Vigilancia de la Tregua y que, hasta el 11 de junio a las 15, hora de Nueva York, no se había comunicado ninguna violación grave.

Entre el 12 y el 13 de junio, el Secretario General presentó otros tres informes relativos al cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre la cesación del fuego, así como a la colocación de observadores de las Naciones Unidas tanto del lado de Israel como del de Siria. En cuanto a la cuestión planteada anteriormente, acerca del emplazamiento de tropas de Israel en Rafid o sus alrededores, el Secretario General comunicó al Consejo que el General Bull no tenía información respecto de si las tropas de Israel se encontraban en Rafid y sus alrededores antes de la hora fijada para que entrase en vigor la cesación del fuego o si habían avanzado hacia ese sector después de esa hora.

El Secretario General se refirió también al hecho de que continuara faltando acceso a la sede del Organismo encargado de la Vigilancia de la Tregua, establecida en la Casa de Gobierno, en Jerusalén, lo que planteaba una seria desventaja al Jefe de Estado Mayor y a sus observadores. A este respecto, había dirigido al Primer Ministro de Israel un telegrama en que insistía en que se permitiese el regreso del Organismo de las Naciones Unidas encargado de la Vigilancia de la Tregua a su sede en la Casa de Gobierno. Además, había dirigido una comunicación al Representante Permanente de Israel pidiéndole garantías de su Gobierno respecto de la

seguridad y el bienestar de las poblaciones civiles de las regiones que se encontraban bajo ocupación militar, así como la protección de los derechos e intereses de esas poblaciones.

El 13 de junio, el Consejo de Seguridad se reunió a pedido del representante de la URSS, que había presentado un texto revisado de su proyecto de resolución del 8 de junio. Con arreglo al proyecto de resolución revisado, el Consejo de Seguridad: 1) condenaría enérgicamente las actividades agresivas de Israel así como la prosecución de su ocupación de parte de los territorios de la República Árabe Unida, Siria y Jordania, que consideraba como un acto de agresión y una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y de los principios aceptados del derecho internacional, y 2) exigiría que Israel retirase inmediata e incondicionalmente sus tropas de los territorios de esos Estados al otro lado de las líneas de armisticio y que respetase el estatuto de las zonas desmilitarizadas, tal como lo prescriben los Acuerdos de Armisticio General.

El representante de la URSS declaró que todas las decisiones adoptadas hasta entonces por el Consejo de Seguridad eran únicamente medidas iniciales que podían ser aceptadas en breve plazo. El Consejo ya no podían repetir ni confirmar resoluciones anteriores que eran totalmente inadecuadas, y debía insistir en el retiro inmediato e incondicional de las fuerzas que ocupaban territorios de los Estados árabes vecinos. En su resolución 236 (1967), del 12 de junio, el Consejo había dado el primer paso hacia la condena de las acciones de Israel. El orador manifestó que rechazaba toda tentativa de vincular el retiro de las fuerzas de Israel con un arreglo de la situación general en el Oriente Medio, y que pedía que su proyecto de resolución fuese sometido a votación inmediatamente.

El representante de Jordania acusó a Israel de ejecutar un plan bien calculado para expulsar a más árabes con miras a repetir lo que había ocurrido en 1948. También dijo que agradecía al Secretario General sus constructivos esfuerzos por aliviar la situación de la población civil y expresó la esperanza de que el Secretario General podría presentar al Consejo un informe sobre ese asunto tan importante y urgente. A su juicio, la cuestión más grave e importante era la de condenar a los invasores y exigir su inmediato retiro.

El representante de los Estados Unidos declaró que, a su juicio, el proyecto de resolución de la URSS equivalía a una fórmula para reanudar las hostilidades y constituía un retroceso hacia otra guerra. A su modo de ver, era necesario iniciar cuanto antes una acción tendiente a arreglar por completo todas las cuestiones pendientes entre las partes, tal como se había previsto en resoluciones de las Naciones Unidas a lo largo de casi veinte años. En la penosa situación resultante de la contienda, el Consejo tenía la apremiante responsabilidad de adoptar medidas para proteger a las víctimas de la guerra, en conformidad con las Convenciones de Ginebra de 1949. El orador expresó además la esperanza de que se permitiría que los civiles regresaran a los mismos lugares en que habían vivido antes del conflicto.

El representante de Arabia Saudita, defendiendo los derechos de los árabes de Palestina, manifestó que los árabes nunca aceptarían que se creara un estado artificial en medio de ellos.

El representante de Israel señaló que a pesar de que la cesación del fuego estaba en pleno vigor con res-

pecto a la República Árabe Unida, Jordania y Siria, los Gobiernos de Argelia, Irak y Yemen habían proclamado abiertamente su intención de proseguir las hostilidades contra su país. Hasta el momento en que todos los gobiernos interesados no aceptasen las resoluciones del Consejo, Israel no consideraría que la cesación del fuego estaba plenamente en vigor. Respecto de la situación de la población civil, expresó que había habido un movimiento de civiles, pero afirmó que se había iniciado ya un movimiento en gran escala de retorno de este a oeste, y que las autoridades israelíes no hacían nada para impedirlo. Aseguró al Consejo que su Gobierno respetaba las disposiciones de la Convención de Ginebra de 1949, relativas al Trato de los Prisioneros de Guerra. El proyecto de resolución de la URSS era negativo y parcial, y estaba concebido con el propósito de restablecer las condiciones de beligerancia árabe contra Israel.

El representante de Túnez afirmó que las autoridades israelíes estaban ejerciendo una presión intolerable sobre los habitantes de la ribera occidental del Jordán para que abandonaran sus hogares y exhortó al Consejo a que adoptase una resolución bien definida para poner fin a esas acciones inhumanas.

El representante de Marruecos pidió al Secretario General y a los organismos especializados que prestasen de inmediato toda la ayuda humanitaria posible a los refugiados y a la población civil. Hizo una reseña de los sucesos que provocaron el conflicto y preguntó cómo era posible que se dijera a los árabes que se restablecería la paz, cuando se habían ocupado las dos terceras partes de Jordania, la Faja de Gaza y Elat, y se ejercía control sobre el Canal de Suez. Advirtió que si no se restablecían las condiciones reinantes antes del 5 de junio, de conformidad con el Acuerdo de Armisticio General de 1949, habría consecuencias de gravedad incalculables en la zona.

El representante de Bulgaria declaró que el proyecto de resolución presentado por los Estados Unidos tenía por objeto servir a los designios de Israel y legalizar su agresión. Apoyó el proyecto de resolución de la URSS y pidió que se sometiera a votación sin demora.

El representante de la República Árabe Unida recordó al Consejo que las fuerzas de Israel estaban todavía estacionadas en territorio árabe, y que el Consejo debía condenar sin vacilar la agresión israelí, y exhortar al agresor a que retirase sus fuerzas inmediatamente detrás de las líneas de demarcación del Armisticio y en forma incondicional. Refiriéndose al párrafo del proyecto de resolución revisado que presentaran los Estados Unidos, en que se pedía a las partes que iniciaran conversaciones, señaló que esto claramente equivaldría a legalizar la agresión de Israel.

El representante de Canadá se refirió a la trágica pérdida de vidas humanas que había habido en el conflicto y expresó que este hecho debía ser objeto de la más seria consideración del Consejo. A su juicio, las responsabilidades y la acción del Consejo estaban claramente definidas y orientadas en el párrafo 3 del Artículo 2 de la Carta. Señaló que el llamamiento del Consejo para la cesación del fuego era sólo el primer paso, y que otros debían seguir, incluyendo, primero un acuerdo para el rompimiento del contacto entre las fuerzas y el retiro de ellas; segundo, la atención inmediata de los problemas humanos, y tercero, el progreso hacia un entendimiento que garantizara los intereses esenciales de los Estados de esa región. Se adhirió a la idea

de enviar a la zona del conflicto a un representante especial del Secretario General.

El representante de Mali advirtió que Israel no podría ejercer indefinidamente control sobre la zona que ocupaba en ese momento. La primera acción positiva en pro de la paz sería el retiro incondicional de las tropas israelíes a las posiciones que ocupaban el 4 de junio.

El Secretario General en un informe suplementario expedido el 14 de junio, declaró que la situación continuaba en calma.

En la sesión que el Consejo celebró el 14 de junio, el representante del Reino Unido declaró que el Consejo debería ahora dedicar su atención a los problemas del rompimiento del contacto entre las tropas y el retiro de éstas y al establecimiento de una paz justa y duradera. Observó que el rompimiento del contacto entre las tropas y el retiro de éstas no se podría llevar a cabo en la práctica sin que hubiera negociaciones y acción allí mismo. Dijo que el Consejo debería nombrar a un Mediador que pudiera iniciar de inmediato conversaciones con los gobiernos interesados. Al mismo tiempo, el Consejo debería adoptar medidas sin demora para hacer todo lo que estuviera a su alcance a fin de mitigar el sufrimiento causado a la población civil y evitar que surgiera un problema de refugiados.

El representante del Paquistán expresó que para remediar la situación el Consejo de Seguridad no tenía otra solución que la adopción de tres medidas: primero, condenar la agresión cometida por Israel; segundo, requerir de conformidad con el Artículo 39 de la Carta el retiro inmediato de las fuerzas israelíes a las líneas de demarcación del Armisticio, y tercero, una vez se hubiese efectuado el retiro, participar activamente en la búsqueda de los medios para aplicar las resoluciones fundamentales de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad sobre la cuestión de Palestina.

El representante de la Argentina declaró que su delegación, desde el comienzo de las deliberaciones, había manifestado la necesidad de llegar, una vez creado el clima de tranquilidad necesario, a establecer las condiciones para poder encontrar una solución permanente. Nadie debía verse obligado a negociar bajo la amenaza de coacción. Empero, no creía que esas condiciones se lograsen a menos que se retiraran tropas por una parte y de la otra se dieran seguridades de libre tránsito por las vías marítimas de comunicación internacional. Ello significaba, terminar con el ánimo de beligerancia. Por esas razones, no estaba en condiciones de apoyar el segundo párrafo de la parte dispositiva del proyecto de resolución revisado de la URSS.

El representante de Francia declaró que el derecho de ocupación de un territorio no podía basarse en la conquista por la fuerza de las armas. En el plano de los principios, sólo podía apoyar el proyecto de resolución de la URSS. Consideraba que los miembros del Consejo debían aunar sus esfuerzos para facilitar las conversaciones, a fin de que se pudiera llegar a un acuerdo aceptable para todas las partes.

El representante de Etiopía insistió en el pronto retiro de las tropas y en la creación de condiciones justas para negociar un arreglo de las causas que habían provocado la crisis actual. Se pronunció a favor de que se renovara la presencia de las Naciones Unidas en esa región y manifestó que su delegación se abstendría de votar sobre los proyectos de resolución revisados de la URSS y los Estados Unidos.

El representante de Nigeria reiteró su firme convicción de que la primera cuestión que requería la atención urgente del Consejo era el retiro de las fuerzas a sus territorios respectivos, según estaban antes del comienzo de las hostilidades. Al referirse al proyecto de resolución revisado de la URSS expresó que éste se refería a varias cuestiones de muy amplio alcance, cuyas consecuencias hubiera querido considerar más cuidadosamente. Por esas razones, sugirió que se votara por separado cada párrafo del proyecto de resolución.

El representante de la URSS declaró que el proyecto de resolución del Canadá era confuso y falto de claridad. Si se aprobase, tendría consecuencias trascendentes. La aplicación de esa resolución podía tener como resultado la violación de la Carta de las Naciones Unidas y, por consiguiente, votaría en contra. Respecto del proyecto de resolución revisado de las tres Potencias, observó que se limitaba a un aspecto del problema. A fin de poner término inmediatamente al sufrimiento humano era necesario adoptar enérgicas medidas para el retiro de las tropas israelíes.

El representante de China expresó su deseo de aclarar que su Gobierno se oponía al uso de la fuerza. No olvidaba las declaraciones que Israel había hecho repetidamente, de que no tenía intenciones de ocupar el territorio de sus vecinos. Por esos motivos, se abstendría de votar sobre el proyecto de resolución de la URSS.

El representante del Japón declaró que era necesario que el Consejo contara con la perfecta unidad de sus miembros para actuar, a fin de llegar a la solución de los problemas inmediatos resultantes del conflicto, y establecer una paz definitiva y duradera. Su delegación dudaba de que el proyecto de resolución de la URSS facilitara esa labor, y por lo tanto se abstendría de votar.

El representante de Israel aseguró al Consejo que su Gobierno había hecho grandes esfuerzos para restablecer la normalidad en la vida de la población civil en la zona del reciente conflicto. Anunció que su Gobierno y el Comisionado General del OOPS habían llegado a un acuerdo relativo a la labor que llevaba a cabo en la ribera occidental del Jordán y en la zona de la Faja de Gaza. Con respecto al tratamiento de los prisioneros de guerra, aseguró que Israel tenía plenamente en cuenta sus derechos jurídicos y humanos con arreglo a las convenciones internacionales.

El representante de Brasil, al referirse al proyecto de resolución revisado de la URSS, manifestó que no estaba en condiciones de declarar categóricamente cuál de las partes comprometidas en el conflicto había sido la primera en violar las resoluciones de la cesación del fuego. Señaló además que el hecho de que Israel ocupara el territorio de los Estados árabes vecinos había sido una consecuencia de la guerra. Tomó nota de una declaración del Ministro de Defensa de Israel, de que su país no tenía "ánimo de conquista", y dijo que su Gobierno se había opuesto sistemáticamente a toda conquista territorial por medios militares; no obstante, no se podía considerar al problema del retiro de las tropas como una medida aislada. Por consiguiente, no podía apoyar el proyecto de resolución revisado de la URSS, y se abstendría cuando se lo sometiera a votación.

El representante de Canadá declaró que retiraba el proyecto de resolución presentado por Canadá y Dinamarca el 24 de mayo, en vista de que, debido a los he-

chos que habían ocurrido ya no era oportuno. Indicó su deseo de que se postergara la votación del proyecto de resolución canadiense del 7 de junio.

El representante de los Estados Unidos presentó otra revisión de su proyecto de resolución, según el cual el Consejo de Seguridad: 1) insistiría en que todas las partes interesadas siguieran aplicando escrupulosamente los repetidos requerimientos del Consejo para la cesación del fuego y de todas las actividades militares como primer paso urgente para la implantación de una paz estable en el Oriente Medio; 2) pediría al Secretario General que continuase informando al Consejo de la observancia de la cesación del fuego; 3) requeriría de las partes interesadas que iniciasen prontamente conversaciones, utilizando la asistencia de las Naciones Unidas o de una tercera parte, según desearan, tendientes a establecer acuerdos viables conducentes al retiro de las fuerzas armadas, y al rompimiento del contacto entre ellas, a la renuncia al uso de la fuerza en todas sus formas, el mantenimiento de los derechos internacionales esenciales y la implantación de una paz estable y duradera en el Oriente Medio, y 4) pediría también al Secretario General que proporcionase la asistencia que se requiriera para facilitar las conversaciones pedidas en el párrafo 3. Indicó que su delegación se complacería en considerar sugerencias constructivas para mejorar ese texto.

El representante de los Estados Unidos agregó que no insistiría en que se sometieran a votación los otros dos proyectos de resolución de los Estados Unidos que habían sido presentados el 31 de mayo y el 8 de junio.

En la misma sesión se sometió a votación el proyecto de resolución revisado de la URSS; cada uno de los párrafos de la parte dispositiva fue sometido a votación por separado. Hubo 4 votos a favor del párrafo 1, ninguno en contra y 11 abstenciones; 6 votos a favor del párrafo 2, ninguno en contra y 9 abstenciones. No habiendo obtenido la mayoría necesaria, el proyecto de resolución no fue aprobado.

El representante de la URSS declaró que, como consecuencia de la votación, se había creado una situación extrema que exigía que las Naciones Unidas y todos los Estados amantes de la paz adoptaran medidas igualmente extremas para la cesación inmediata y decidida de la agresión continuada en el Oriente Medio. Siendo ése el caso, era necesario buscar otros medios para eliminar toda secuela de la agresión y asegurar el retiro inmediato de todas las fuerzas israelíes.

Los representantes de la República Árabe Unida e Irak declararon que el resultado de la votación sobre el proyecto de resolución de la URSS constituía una injusticia más de las muchas que se habían perpetrado contra los árabes.

En una comunicación subsiguiente, de fecha 15 de junio, el Representante Permanente de Irak declaró que la posición de su Gobierno con respecto a la cesación del fuego era que las fuerzas iraquíes estaban bajo el mando conjunto en Jordania, cuya posición había sido ya definida por los Gobiernos de Jordania y de la República Árabe Unida.

En la sesión que el Consejo celebró la tarde del 14 de junio, varios representantes, entre los que figuraban los de la Argentina, Malí, la India, Canadá, Francia y Bulgaria, hablaron sobre el proyecto de resolución de las tres Potencias, de fecha 10 de junio, relativo a los

aspectos humanitarios del problema e insistieron en la necesidad de que fuera aprobado. A continuación el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad, como resolución 237 (1967).

El representante de la República Árabe Unida, refiriéndose al proyecto de resolución que había presentado el 31 de mayo, declaró que, por el momento, no insistiría en que se sometiera a votación.

REFERENCIAS

Para los documentos y sesiones pertinentes, véanse:

- a) *Documentos Oficiales del Consejo de Seguridad, Vigésimo Segundo Año, Suplemento de abril, mayo y junio de 1967;*
- b) *Documentos Oficiales del Consejo de Seguridad, Vigésimo Segundo Año, 1341a. a 1361a. sesiones;*
- c) A/6669 (véanse *Documentos Oficiales de la Asamblea General, Quinto período extraordinario de sesiones de emergencia, Anexos*, tema 5 del programa, documento A/6730).

CAPITULO II

La operación de las Naciones Unidas en Chipre

Durante el año pasado, el Consejo de Seguridad, mediante decisiones unánimes, prorrogó dos veces, por períodos de seis meses, la presencia de la Fuerza de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz en Chipre.

INFORMES DEL SECRETARIO GENERAL DESDE EL 16 DE JUNIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1966

El 21 de junio de 1966, el Secretario General hizo una vez más un llamamiento a todos los gobiernos a fin de que aportaran contribuciones voluntarias para financiar la Fuerza de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas en Chipre. El Secretario General indicó que serían necesarios aproximadamente 11.200.000 dólares para cumplir las obligaciones financieras relacionadas con la Fuerza hasta fines de 1966.

El 20 de julio de 1966, el Secretario General informó al Consejo de Seguridad de los acontecimientos recientes en la zona de Trypimeni-Chatos, donde los chipriotas turcos habían tenido una reacción hostil contra un proyecto gubernamental de construcción de caminos, que, según afirmaban, pondría en peligro su seguridad. El Representante Especial del Secretario General y el Comandante de la Fuerza habían efectuado intensas negociaciones a fin de evitar un aumento de la tirantez y habían presentado un plan de desfortificación de la zona. El Secretario General instó a las partes a actuar con la mayor moderación y atender las sugerencias en favor de la desfortificación.

El 4 de octubre de 1966, el Secretario General informó al Consejo de Seguridad de que, en respuesta a su llamamiento del 21 de junio, varios gobiernos habían prometido contribuciones por valor de 5.100.000 dólares con destino al mantenimiento de la Fuerza de las Naciones Unidas. Sin embargo, a pesar de esas contribuciones, la Organización necesitaba todavía 6.100.000 dólares aproximadamente para cubrir los gastos vinculados con el mantenimiento de la Fuerza hasta el 26 de diciembre de 1966.

En su informe del 8 de diciembre de 1966 sobre la operación de las Naciones Unidas en Chipre correspondiente al período comprendido entre el 11 de junio y el 5 de diciembre de 1966, el Secretario General dijo que había habido muy poco cambio significativo en la situación; habían persistido las conocidas modalidades de una tregua sin sosiego y la situación había seguido siendo precaria. No obstante, dos problemas habían cedido ante los intentos de resolverlos: el registro de la propiedad rural, conservado hasta entonces en el sector turco de Nicosia, había sido puesto a disposición de la Oficina de la Propiedad Rural del Distrito, y los servicios postales habían vuelto a funcionar en el

sector turco de Nicosia y en Lefka. Aparte de este éxito, la actitud dominante con respecto a la normalización seguía siendo una actitud de precaución generalizada y de aprensión, provocada por el temor de que cualquier concesión influyera desfavorablemente en las condiciones del acuerdo final.

Las delegaciones interesadas habían comunicado al Secretario General que el diálogo entre Grecia y Turquía continuaba, pero sin transmitirle ninguna información sobre lo tratado en las conversaciones. Por tal razón, el Secretario General no podía dar al Consejo indicación alguna sobre si se había hecho algún progreso en las negociaciones secretas. El Secretario General opinaba que, a fin de no poner en peligro el éxito de las conversaciones debían suspenderse todos los demás esfuerzos en el nivel local, y, por lo tanto, su Representante Especial había interrumpido sus gestiones momentáneamente. Empero, en interés de la solución definitiva, los esfuerzos de las Naciones Unidas no debían suspenderse durante demasiado tiempo.

En una adición a su informe, el Secretario General también informó a los miembros del Consejo de que el 10 de diciembre de 1966 el Presidente Makarios había comunicado al Representante Especial del Secretario General y al Comandante de la Fuerza que las nuevas armas que el Gobierno había importado de Checoslovaquia para uso de la policía de Chipre estaban almacenadas y no serían distribuidas hasta dentro de dos meses. El 13 de diciembre de 1966, el Presidente Makarios había aceptado la sugerencia de que las nuevas armas fueran inspeccionadas por el Comandante de la Fuerza.

CONSIDERACIÓN POR EL CONSEJO DE SEGURIDAD EL 15 DE DICIEMBRE DE 1966

El 15 de diciembre de 1966, el Consejo de Seguridad consideró el informe del Secretario General presentado el 8 de diciembre. El Consejo tuvo ante sí un proyecto de resolución de siete potencias, que aprobó por unanimidad. En la resolución, el Consejo reafirmó sus resoluciones anteriores sobre Chipre, así como el consenso expresado por el Presidente del Consejo el 11 de agosto de 1964, y prorrogó una vez más el estacionamiento de la Fuerza de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas por un nuevo período de seis meses, que expiraría el 26 de junio de 1967.

RENUNCIA DEL REPRESENTANTE ESPECIAL

El 20 de diciembre de 1966, el Secretario General informó a los miembros del Consejo de que había aceptado con pesar la renuncia, efectiva a partir del 5 de enero de 1967, del Sr. Carlos A. Bernardes, Re-

presentante Especial del Secretario General en Chipre, que dejaba el puesto por poderosas razones personales. El Secretario General elogió los servicios que el Sr. Bernardes había prestado a las Naciones Unidas en el cumplimiento de sus funciones.

A pedido del Secretario General, el Sr. Pier P. Spinnelli, Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, aceptó desempeñarse temporalmente como Representante Especial, tras la partida del Sr. Bernardes. El 26 de enero, el Secretario General anunció que el Sr. B. F. Osorio-Tafall había sido nombrado su Representante Especial en Chipre. El Sr. Osorio-Tafall se hizo cargo de sus nuevas funciones el 20 de febrero de 1967.

INFORMES DEL SECRETARIO GENERAL DESDE EL 1º DE ENERO HASTA EL 15 DE JUNIO DE 1967

En dos ocasiones durante el primer semestre de 1967 — el 5 de enero y el 8 de mayo — el Secretario General volvió a solicitar nuevas contribuciones voluntarias. El Secretario General expresó la opinión de que este método de financiación distaba de ser satisfactorio y también señaló que sus cálculos de los gastos de la Fuerza no incluían aquellos que los gobiernos que aportaban contingentes habían aceptado costear. Al 8 de mayo, se necesitaban nuevas promesas por un total de 6.600.000 dólares aproximadamente para que la Organización pudiera sufragar totalmente los gastos de mantenimiento de la Fuerza hasta el 26 de junio de 1967.

El 13 de junio de 1967, el Secretario General presentó su décimo informe sobre la operación de las Naciones Unidas en Chipre, correspondiente al período comprendido entre el 6 de diciembre de 1966 y el 12 de junio de 1967. Se había hecho poco o ningún progreso en la tarea de lograr el retorno a la normalidad y en la de superar el punto muerto al que se había llegado respecto de las cuestiones más importantes.

El Secretario General hizo notar con preocupación que, si bien la situación general en Chipre había seguido siendo de paz intranquila, existían corrientes subterráneas de tensión en la mayoría de las zonas, había más puntos de conflicto potencial que nunca, y en algunos niveles jerárquicos de la Guardia Nacional y en algunos líderes locales chipriotas turcos se observaba renuencia a colaborar con la UNFICYP. El Secretario General dio informes detallados de varios incidentes graves, principalmente en el distrito de Larnaca, que habían obligado a la Fuerza a recurrir a veces a medidas enérgicas para evitar la reanudación de la lucha. El Secretario General mencionó asimismo con preocupación los actos terroristas que habían producido víctimas civiles, y la construcción de nuevas y provocativas posiciones fortificadas en diversas partes de la isla.

Aunque carecía de información oficial al respecto, el Secretario General indicó que el diálogo entre Grecia y Turquía sobre la cuestión de Chipre se había mantenido en suspenso desde diciembre de 1966. Sin embargo, la resolución 186 (1964) del Consejo de Seguridad del 4 de marzo de 1964 había instado a buscar constantemente una solución al problema de Chipre. Así, pues, resultaba evidente que no se podía dejar la cuestión en suspenso indefinidamente.

Por último, el Secretario General señaló, como lo había hecho anteriormente, que una confianza excesiva en la presencia de la Fuerza de las Naciones Unidas quizás hubiera disminuido, en las partes contedientes, la conciencia de la necesidad urgente de encontrar soluciones a las diferencias que originalmente ocasionaron el estallido de la violencia en 1963 y 1964, y expresó la esperanza de que todas las partes interesadas tuvieran presente la conclusión ineludible de que la Fuerza no permanecería en Chipre indefinidamente. En las circunstancias del momento, el Secretario General no veía otra posibilidad que recomendar al Consejo que prorrogara el mandato de la Fuerza por un nuevo período de seis meses.

REFERENCIAS

Véanse documentos y sesiones pertinentes en:

- a) *Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, Vigésimo Primer Año, Suplemento de abril, mayo y junio de 1966, Suplemento de julio, agosto y septiembre de 1966 y Suplemento de octubre, noviembre y diciembre de 1966; e ibid., Vigésimo Segundo Año, Suplemento de enero, febrero y marzo de 1967 y Suplemento de abril, mayo y junio de 1967;*
- b) *Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, Vigésimo Primer Año, sesiones 1286a. y 1338a.*

CAPITULO III

Otros asuntos políticos y de seguridad

A. *El desarme y otros asuntos conexos*

SESIONES DE LA CONFERENCIA DEL COMITÉ DE DESARME DE DIECIOCHO NACIONES, 1966

En el segundo de los períodos de sesiones celebrados en 1966, del 14 de junio al 25 de agosto, la Conferencia del Comité de Desarme de Dieciocho Naciones renovó sus esfuerzos para elaborar un tratado sobre el desarme general y completo bajo un control internacional eficaz y, como medio de lograr acuerdos limitados lo antes posible, prosiguió considerando con carácter urgente diversas medidas colaterales de desarme, en particular la cuestión de un tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares.

Aunque el Comité de Dieciocho Naciones no llegó a un acuerdo concreto, informó a la Comisión de Desarme y a la Asamblea General que los debates e intercambios de opiniones efectuados en 1966 habían sido útiles y expresó la esperanza de que contribuirán a facilitar un acuerdo en una etapa ulterior.

En sus debates relacionados con la negociación de un tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, el Comité de Dieciocho Naciones se guió por los principios establecidos en la resolución 2028 (XX) de la Asamblea General. El Comité tuvo también ante sí un proyecto de tratado presentado por los Estados Unidos de América al Comité el 17 de agosto de 1965, y enmendado el 21 de marzo de 1966, y un proyecto de tratado presentado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a la Asamblea General el 24 de septiembre de 1965.

Durante el examen de estos proyectos los Estados Unidos y la URSS, así como los países que generalmente apoyan sus respectivas posiciones, adoptaron enfoques diferentes en lo relativo a las obligaciones que han de incluirse en un tratado sobre no proliferación, particularmente con respecto a la cuestión de los arreglos de defensa nuclear dentro de las alianzas militares.

La URSS sostuvo que el concepto de proliferación de los Estados Unidos era demasiado estrecho y que, como resultado de ello, el proyecto de tratado presentado por los Estados Unidos, aun en su forma enmendada, tenía muchos puntos débiles que permitían eludir sus disposiciones. Los Estados Unidos, por su parte, objetaron el proyecto de tratado presentado por la URSS aduciendo que sus términos eran tan amplios que impedirían las prácticas existentes para el despliegue de armas nucleares de los Estados Unidos bajo la fiscalización de dicho país en el territorio de sus aliados de la OTAN, y tal vez hasta las consultas entre los miembros de la OTAN, como preparativos para la defensa contra un ataque nuclear.

Los ocho miembros no alineados del Comité de Dieciocho Naciones, en el memorando conjunto sobre no proliferación de las armas nucleares que presentaron el 19 de agosto de 1966, a la vez que hacían hincapié en que el tratado no debía dejar a las Potencias nucleares o no nucleares posibilidad alguna que permitiera la proliferación de las armas nucleares, hacían notar que las diferencias respecto de los armamentos nucleares en el seno de las alianzas — problema este que había sido principalmente debatido entre las principales Potencias y sus aliados — constituían un obstáculo considerable para el acuerdo. Por su parte, dichas delegaciones subrayaron especialmente la importancia que tenían para todos los países, pero en particular para las Potencias no nucleares, los principios siguientes: 1) el tratado debía establecer un equilibrio aceptable de responsabilidades y obligaciones mutuas para las Potencias nucleares y las no nucleares; 2) el tratado debía ser un paso hacia la consecución del desarme general y completo y, más particularmente, del desarme nuclear. Con respecto a este último punto, afirmaron que el tratado debía ir acompañado o seguido de medidas tangibles para detener la carrera de armamentos nucleares y limitar, reducir y eliminar las existencias de armas nucleares y los vehículos portadores. Por lo que respecta a dichas medidas tangibles, los miembros no alineados del Comité presentaron individualmente varias sugerencias, incluida la prohibición global de los ensayos con armas nucleares, la cesación completa de la producción de material fisible con destino a armamentos, la congelación y reducción gradual de las existencias de armas nucleares y de los vehículos portadores, la prohibición del empleo de armas nucleares y la garantía de la seguridad a los Estados no poseedores de armas nucleares. Declararon que esas diversas medidas podrían incluirse en un tratado como parte de sus disposiciones o como una declaración de intenciones. Además, deben incluirse disposiciones viables para garantizar la efectividad del tratado. Una de esas medidas consistiría en someter el tratado a revisiones periódicas.

Con respecto a las garantías de seguridad antes mencionadas, los Estados Unidos aclararon que los países que no tuvieran el propósito de convertirse en Potencias nucleares recibirían firme apoyo de los Estados Unidos contra las amenazas de chantaje nuclear. La URSS expresó que estaba dispuesta a incluir en el proyecto de tratado una cláusula sobre la prohibición del uso de armas nucleares contra las Potencias no nucleares que fueran partes en el tratado y no tuvieran armas nucleares en su territorio. La URSS sugirió posteriormente que se redactara un proyecto de artículo en ese sentido a fin de incluirlo en el tratado.

En relación con otro aspecto de la no proliferación, los Estados Unidos sugirieron que, como no resultaría

posible que un Estado adquiriera la capacidad de elaborar y detonar artefactos nucleares con fines pacíficos sin adquirir, al hacerlo, la capacidad de fabricar armas nucleares, los Estados poseedores de armas nucleares debían poner a disposición de los demás Estados servicios de explosión nuclear con fines pacíficos, siempre y cuando dichas aplicaciones resultaran viables desde los puntos de vista técnico y económico. Tal servicio, en opinión de los Estados Unidos, consistiría en llevar a cabo la detonación nuclear requerida bajo la observación internacional apropiada, permaneciendo el artefacto nuclear bajo la custodia y el control del Estado que prestara el servicio.

Con respecto a un tratado de prohibición general de los ensayos nucleares, los Estados Unidos y la URSS continuaron en desacuerdo sobre lo que sería un sistema adecuado de verificación para el tratado. La URSS insistió en que los sistemas nacionales de detección e identificación de los movimientos sísmicos subterráneos eran adecuados, pero los Estados Unidos sostuvieron que los adelantos en materia de detección e identificación de fenómenos sísmicos no habían llegado al punto que permitiera prescindir completamente de las inspecciones sobre el terreno.

El 17 de agosto de 1966, los ocho miembros no alineados del Comité de Dieciocho Naciones presentaron un memorando conjunto sobre un tratado de prohibición general y completa de los ensayos nucleares en el cual destacaban su opinión de que un tratado que prohibiera los ensayos subterráneos de armas nucleares constituiría por sí mismo una medida efectiva para impedir la proliferación de las armas nucleares. Afirmaban que un tratado de ese tipo, complementario de la prohibición incluida en el tratado de 1963 por el que se prohibían los ensayos con armas nucleares en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y debajo del agua, haría prácticamente imposible el desarrollo de armas nucleares en países no poseedores de dichas armas e impediría el ulterior perfeccionamiento de las armas nucleares por las Potencias nucleares. Las ocho delegaciones expresaban en el memorando su convicción de que las Potencias poseedoras de armas nucleares debían examinar la posibilidad de adoptar las diversas sugerencias que les habían presentado los países no alineados individualmente con miras a facilitar la verificación de la observancia de un tratado de prohibición general y completa. Entre las sugerencias hechas figuraban las siguientes: 1) la idea de que deberían prohibirse, mediante un tratado, los ensayos nucleares que sobrepasaran de cierto límite, hasta tanto se suspendieran todos los ensayos subterráneos, lo cual estaba subordinado a la conclusión de un tratado general y completo; 2) la mejora, a través de la cooperación internacional entre instituciones nacionales de los datos sísmicos de que se disponía en general, a fin de crear una base científica más precisa utilizable en la evaluación de los fenómenos sísmicos; 3) la idea de "verificación mediante reto", que suponía un procedimiento con arreglo al cual una parte de la que se sospechara que había llevado a cabo ensayos nucleares subterráneos consideraría preferible para sus intereses proporcionar toda la información tranquilizadora de que dispusiera, incluyendo posiblemente una invitación a la inspección; este procedimiento debía estar ligado a disposiciones referentes al derecho de denuncia del tratado, si las explicaciones suministradas una vez formuladas las alegaciones oficiales no resultaban satisfactorias; 4) la idea de que, en caso de que se llegara a un acuerdo con respecto a las inspecciones

sobre el terreno, una lista de inspectores imparciales, depositada ante el Secretario General de las Naciones Unidas, podía constituir un instrumento útil; 5) la idea de que debía pedirse a un organismo imparcial, formado por científicos, contratados en países neutrales y de acuerdo con sus méritos personales, que diera su opinión sobre el problema general de la identificación de los ensayos subterráneos.

La URSS manifestó estar dispuesta a aceptar la propuesta de cesación de los ensayos subterráneos que sobrepasaran de cierto límite, que iría acompañada de una moratoria voluntaria sobre los ensayos por debajo de esa magnitud. Los Estados Unidos dijeron que no podían aceptar una moratoria que no fuese acompañada de verificación. Declararon que estaban estudiando una sugerencia oficiosa sobre suspensión de los ensayos subterráneos por un periodo de prueba, con "verificación mediante reto", a fin de observar si eso podía resultar provechoso para lograr un acuerdo de duración indefinida. La URSS manifestó que no podía aceptar la "verificación mediante reto", la cual era, en su opinión, una forma disimulada de inspección internacional.

Tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética propusieron otras medidas colaterales de desarme importantes. Sin embargo, no se realizaron progresos considerables con respecto a ninguna medida en particular. Los Estados Unidos encarecieron especialmente lo siguiente: 1) la suspensión, verificada, de la producción de materiales fisibles destinados a armamentos, acompañada de la transferencia de cantidades importantes de dichos materiales a la utilización con fines pacíficos, bajo salvaguardias internacionales; 2) la congelación de la producción de bombarderos estratégicos ofensivos y defensivos y de proyectiles destinados a transportar armas nucleares, seguida, de ser posible, por reducciones del número de tales vehículos; 3) iniciativas regionales encaminadas a limitar la adquisición de armamento militar de tipo corriente. La Unión Soviética, por su parte, hizo hincapié en las siguientes medidas: 1) eliminación de las bases militares extranjeras y retiro de las tropas extranjeras; 2) prohibición del uso de armas nucleares y, como primera medida, declaraciones de los Estados en el sentido de que no serían los primeros en utilizar dichas armas; 3) establecimiento de zonas desnuclearizadas en diversas partes del mundo, especialmente en la Europa central, región en la cual tal vez fuera también posible una congelación de los armamentos nucleares; 4) convocatoria de una conferencia sobre seguridad europea.

El debate sobre el desarme general y completo no logró solucionar el prolongado estancamiento en la cuestión de la eliminación de los vehículos para el transporte de armas nucleares y en las cuestiones generales de equilibrio, control y mantenimiento de la paz.

EXAMEN DE LA CUESTIÓN POR LA ASAMBLEA GENERAL

En el programa del vigésimo primer período de sesiones de la Asamblea General se incluyeron seis temas relacionados con el desarme. Cuatro de ellos — la no proliferación de las armas nucleares, la urgente necesidad de suspender los ensayos nucleares y termonucleares, la cuestión del desarme general y completo y la cuestión de la reunión de una conferencia para firmar un convenio sobre la prohibición del uso de las armas nucleares y termonucleares — fueron incluidos en el programa en virtud de resoluciones y decisiones ante-

riores de la Asamblea General. Los otros dos — la renuncia por los Estados a las actividades que dificulten la conclusión de un acuerdo para la no proliferación de las armas nucleares y la eliminación de las bases militares extranjeras en los países de Asia, África y América Latina — fueron temas nuevos presentados por la URSS.

Se aprobaron resoluciones sobre todos los temas: dos sobre la cuestión de la no proliferación de las armas nucleares, tres sobre la cuestión del desarme general y completo y una sobre cada uno de los otros cuatro temas.

La no proliferación de las armas nucleares

El tema "Renuncia por los Estados a las actividades que dificulten la conclusión de un acuerdo para la no proliferación de las armas nucleares" fue considerado por la Primera Comisión entre el 20 de octubre y el 2 de noviembre de 1966. La Comisión tuvo ante sí un proyecto de resolución presentado por la URSS el 23 de septiembre de 1966, copatrocinado posteriormente por otros 19 Estados, por el cual la Asamblea General pediría encarecidamente a los Estados: 1) que, hasta la conclusión de un tratado para la no proliferación de las armas nucleares, se abstuvieran de cualquier actividad que pudiera dificultar el acuerdo para la no proliferación de las armas nucleares; 2) que adoptaran todas las medidas necesarias a fin de concertar lo antes posible un tratado para la no proliferación de las armas nucleares.

El 25 de octubre, 45 países presentaron un texto revisado de este proyecto de resolución por el cual la Asamblea General pediría encarecidamente a todos los Estados que, hasta la conclusión de un tratado para la no proliferación de las armas nucleares: 1) tomaran todas las medidas necesarias para facilitar y concluir lo antes posible un tratado para la no proliferación de las armas nucleares en conformidad con los principios enunciados en la resolución 2028 (XX), de 19 de noviembre de 1965; 2) se abstuvieran de cualquier actividad que contribuyera a la proliferación de las armas nucleares o que pudiera dificultar la conclusión de un acuerdo para la no proliferación de dichas armas.

El 2 de noviembre, la Primera Comisión aprobó, por 100 votos contra 1 y 1 abstención, el proyecto de resolución revisado. Albania votó en contra del proyecto de resolución y Cuba se abstuvo.

La Asamblea General aprobó el proyecto de resolución recomendado por la Primera Comisión como resolución 2149 (XXI), por 110 votos contra 1 y 1 abstención.

El tema "La no proliferación de las armas nucleares: informe de la Conferencia del Comité de Desarme de Dieciocho Naciones", fue examinado por la Primera Comisión entre el 3 y el 10 de noviembre. Sobre este tema se presentaron dos proyectos de resolución.

El 27 de octubre se presentó un proyecto de resolución, y el 9 de noviembre 47 países presentaron un texto revisado del mismo. En virtud del proyecto de resolución revisado, la Asamblea General: 1) reafirmaría su resolución 2028 (XX), de 19 de noviembre de 1965; 2) encarecería a todos los Estados que tomaran las medidas necesarias para que se concertara lo antes posible un tratado sobre la no proliferación de las armas nu-

cleares; 3) pediría a todas las Potencias que poseyeran armas nucleares que se abstuvieran de emplear, o de amenazar con emplear, armas nucleares contra Estados que concertaran tratados tales como los definidos en el inciso e) del párr. 2 de la resolución 2028 (XX) de la Asamblea General; 4) pediría la Conferencia del Comité de Desarme de Dieciocho Naciones que examinara con carácter de urgencia la propuesta de que las Potencias que poseyeran armas nucleares debían dar la seguridad de que no emplearían, ni amenazarían con emplear, armas nucleares contra Estados que no poseyeran armas nucleares y que no contarán con las mismas en sus territorios, así como cualesquiera otras propuestas que se hubieran formulado o que pudieran formularse para la solución de este problema; 5) pediría a todos los Estados que se ajustaran estrictamente a los principios estipulados en su resolución 2023 (XX) para la negociación del tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares; 6) pediría a la Conferencia del Comité de Desarme de Dieciocho Naciones que concediera gran prioridad a la cuestión de la no proliferación de las armas nucleares de conformidad con el mandato de la Asamblea General contenido en la resolución 2028 (XX); 7) transmitiría las actas de la Primera Comisión relativas al examen del tema titulado "La no proliferación de las armas nucleares", junto con todos los documentos pertinentes, a la Conferencia del Comité de Desarme de Dieciocho Naciones; y 8) pediría al Comité de Desarme de Dieciocho Naciones que presentara a la Asamblea General en fecha temprana un informe acerca de los resultados de sus trabajos sobre la cuestión de la no proliferación de las armas nucleares.

En el curso del debate, muchas delegaciones expresaron la opinión de que ninguna otra cuestión podía merecer una prioridad más alta que la de la no proliferación de las armas nucleares.

Varias delegaciones continuaron considerando que el problema de los arreglos nucleares dentro de las alianzas militares era el principal obstáculo a la celebración de un tratado sobre la no proliferación. Sin embargo, se estimó en general que no había problemas insuperables que impidieran el acuerdo.

Muchos países subrayaron la importancia de que se incluyera en el tratado un equilibrio de obligaciones mutuas para las Potencias nucleares y las no nucleares, y de que el tratado fuese una primera etapa de un proceso continuado de desarme nuclear. Varios países se adhuyeron a la fórmula propuesta por los miembros no alineados del Comité de Dieciocho Naciones, de que el tratado debía ir "acompañado" o "seguido" de otras medidas de desarme. Estimaron también que una "declaración de intenciones" de las Potencias nucleares proporcionaría una solución aceptable.

Tanto los Estados Unidos como la URSS subrayaron que no consideraban el tratado sobre la no proliferación como un medio de imponer obligaciones desiguales a las Potencias no nucleares. La URSS recordó sus propuestas de desarme nuclear, en las que se preveían tanto la prohibición completa de las armas nucleares como la liquidación de todos los arsenales nucleares, y sus propuestas acerca de una serie de medidas colaterales tales como la prohibición del empleo de armas nucleares, el establecimiento de zonas desnuclearizadas, la prohibición de vuelos más allá de las fronteras nacionales por aeronaves que transportaran armas nucleares y la prohibición de todos los ensayos de armas nucleares. Los Estados Unidos sostuvieron que, además

de la celebración de un tratado sobre la no proliferación, debían adoptarse medidas urgentes para detener, y en verdad para invertir, el incremento de los arsenales de armas nucleares y de vehículos para su transporte, para lograr la prohibición completa de los ensayos subterráneos, y para contener las carreras regionales en materia de armamentos de tipo corriente.

Sin embargo, tanto los Estados Unidos como la URSS estimaron que si la celebración de un tratado sobre la no proliferación se hacía depender de la solución de otros problemas podría resultar que se impidiera la solución no sólo de la cuestión de la no proliferación, sino también de otras cuestiones de desarme. Esta opinión fue apoyada por muchos países no nucleares.

La India declaró que un tratado equilibrado exigiría no sólo que ningún país proporcionara armas nucleares a otro y que ningún país recibiera armas nucleares de otro, sino también que ningún país, ya fuese una Potencia nuclear o no nuclear, produjera armas nucleares.

Varios países destacaron la importancia de las garantías de seguridad para los países no nucleares. La URSS recordó que estaba dispuesta a incluir en el tratado sobre la no proliferación una cláusula relativa a la prohibición del uso de armas nucleares contra Estados no nucleares que fueran partes en el tratado y no poseyeran armas nucleares en su territorio. Los Estados Unidos, reafirmando que los países que no trataran de convertirse en Potencias nucleares recibirían apoyo firme de los Estados Unidos contra las amenazas de chantaje nuclear, manifestaron que continuaban dispuestos a estudiar con todas las delegaciones la cuestión de las medidas que podía adoptar la Asamblea General. Algunos países no alineados hicieron hincapié en que cualesquiera garantías que se establecieran debían ser preferentemente dadas por todas las Potencias nucleares. Otros estimaron que las garantías debían ser dadas por intermedio de las Naciones Unidas. Algunos Miembros opinaron que la verdadera seguridad sólo se obtendría con el desarme completo o, por lo menos, con el desarme nuclear.

Muchas delegaciones subrayaron la creciente necesidad de salvaguardias internacionales en relación con el cumplimiento de las obligaciones emanadas de un tratado sobre la no proliferación.

Fueron objeto de amplio estudio los ofrecimientos de Checoslovaquia y Polonia, presentados en la décima Conferencia General del OIEA, en el sentido de poner sus instalaciones atómicas bajo el control del OIEA si hacían lo mismo los miembros no nucleares de la OTAN, en primer término la República Federal de Alemania.

Hubo cierto debate acerca de las explosiones nucleares con fines pacíficos. Los Estados Unidos hicieron nuevamente hincapié en que la tecnología de los explosivos nucleares para fines pacíficos era inseparable de la de las armas nucleares. Por lo tanto, siempre y cuando las explosiones nucleares con fines pacíficos comprendidas dentro de las limitaciones del tratado de prohibición resultaran técnica y económicamente viables, los Estados nucleares debían prestar a los demás Estados servicios de explosiones nucleares con fines pacíficos. La explosión requerida podría ejecutarse bajo una observación internacional apropiada y el artefacto

nuclear quedaría bajo la custodia y el control del Estado que prestara el servicio. El Canadá y otros países se manifestaron en favor de un arreglo mediante el cual un órgano internacional, tal como el OIEA, establecería un mecanismo para examinar la viabilidad de los proyectos propuestos, para determinar el precio apropiado de una explosión nuclear con fines pacíficos, para actuar como intermediario entre el país usuario y el país nuclear que proporcionara el artefacto nuclear y para supervisar el proyecto a fin de garantizar que fuese destinado a lograr sólo fines pacíficos.

La India estimó que la posición de los Estados Unidos significaba, en la práctica, que no sólo no debía haber proliferación de las armas nucleares, sino que tampoco debía haber difusión de la ciencia y la tecnología. Eso resultaba inaceptable para la India.

El 10 de noviembre se puso a votación el proyecto de resolución de 47 Potencias, el cual fue aprobado por la Primera Comisión por 103 votos contra 1 y 2 abstenciones.

El 17 de noviembre, la Asamblea General aprobó, como resolución 2153 A (XXI), por 97 votos contra 2 y 3 abstenciones, el proyecto de resolución recomendado por la Primera Comisión.

Se presentó a la Primera Comisión otro proyecto de resolución sobre la no proliferación, copatrocinado por cinco países. En virtud de dicho proyecto de resolución, la Asamblea General: 1) decidiría convocar una conferencia de Estados que no poseyeran armas nucleares, que se reuniría en julio de 1967 a más tardar, con objeto de examinar las siguientes cuestiones y otras relacionadas con ella: a) ¿Cómo puede garantizarse del mejor modo posible la seguridad de los Estados no nucleares? b) ¿Cómo pueden colaborar entre sí las Potencias no nucleares para prevenir la proliferación de las armas nucleares? c) ¿Cómo pueden utilizarse los artefactos nucleares para fines exclusivamente pacíficos?; 2) pediría al Presidente de la Asamblea General que estableciera inmediatamente un comité preparatorio que representase ampliamente los Estados que no poseyeran armas nucleares, con objeto de adoptar disposiciones adecuadas para convocar la Conferencia.

Sierra Leona y Kuwait presentaron enmiendas a este proyecto de resolución. Según las enmiendas propuestas por Kuwait, la fecha de reunión de la conferencia se cambiaría de julio de 1967 a julio de 1968, y se pediría también al comité preparatorio propuesto que examinara la cuestión de asociar a los Estados nucleares con los trabajos de la conferencia e informara al respecto a la Asamblea General en su vigésimo segundo período de sesiones. Las enmiendas propuestas por Kuwait fueron aceptadas por los autores del proyecto de resolución. Las enmiendas presentadas por Sierra Leona fueron retiradas.

Durante el debate sobre el proyecto de resolución, el Paquistán, uno de los autores, subrayó que el objeto de la conferencia sería lograr un punto de vista común de los países no nucleares, el cual les permitiría entablar un diálogo provechoso con las Potencias nucleares. Los esfuerzos de las Potencias no nucleares complementarían los de las Potencias nucleares, los de la Conferencia del Comité de Desarme de Dieciocho Naciones y, oportunamente, los de una conferencia mundial de desarme.

El 10 de noviembre, la Primera Comisión aprobó el proyecto de resolución de las cinco Potencias, por 46 votos contra 1 y 56 abstenciones.

El 17 de noviembre, la Asamblea General aprobó, como resolución 2153 B (XXI), por 48 votos contra 1 y 59 abstenciones, el proyecto de resolución recomendado por la Primera Comisión.

El Presidente de la Asamblea General designó miembros del Comité Preparatorio pedido en la resolución 2153 B (XXI) a los países siguientes: Chile, Dohomey, España, Kenia, Kuwait, Malasia, Malta, Nigeria, Paquistán, Perú y la República Unida de Tanzania.

Urgente necesidad de suspender los ensayos nucleares y termonucleares

El tema titulado "Urgente necesidad de suspender los ensayos nucleares y termonucleares: informe de la Conferencia del Comité de Desarme de Dieciocho Naciones", fue examinado por la Primera Comisión el 17 y el 24 de noviembre.

El Comité tuvo ante sí un proyecto de resolución patrocinado por 12 países. En virtud de ese proyecto de resolución, la Asamblea General: 1) exhortaría a todos los Estados que aún no lo hubieran hecho a que se adhirieran al Tratado por el que se prohibían los ensayos con armas nucleares en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y debajo del agua, firmado en Moscú el 5 de agosto de 1963; 2) instaría a todos los Estados que poseyeran armas nucleares a que suspendieran los ensayos con dichas armas en todos los medios; 3) expresaría la esperanza de que los Estados contribuirían a un intercambio internacional eficaz de datos sísmológicos; y 4) pediría a la Conferencia del Comité de Desarme de Dieciocho Naciones que elaborara sin más demora un tratado por el que se prohibieran los ensayos subterráneos con armas nucleares.

Durante el debate, varias delegaciones subrayaron el nexo existente entre una prohibición general de ensayos nucleares y un tratado sobre la no proliferación, e insistieron en que la prohibición de los ensayos subterráneos debía ser el paso siguiente a un tratado sobre la no proliferación.

Muchas delegaciones observaron con pesar la continuación de los ensayos con armas nucleares en general, y algunas de ellas lamentaron especialmente el hecho de que la República Popular de China y Francia continuaran realizando ensayos en la atmósfera.

La URSS reafirmó su deseo de concluir un acuerdo sobre la prohibición general de ensayos sobre la base de la utilización de medios nacionales de detección, los cuales, según afirmó, eran adecuados para verificar una prohibición de ensayos nucleares subterráneos. Los Estados Unidos reiteraron su opinión de que los medios científicos actuales todavía eran inadecuados y que, por lo tanto, serían necesarias algunas inspecciones sobre el terreno para verificar tal prohibición de ensayos.

Hubo considerable apoyo a varias de las ideas presentadas por los países no alineados en el Comité de Dieciocho Naciones, en particular a la idea de un "club de detección" para facilitar por medio de la colaboración internacional entre instituciones nacionales, la evaluación de los fenómenos sísmicos. También fue recibida

con entusiasmo entre algunas delegaciones la sugerencia de la "verificación mediante reto".

La URSS, por su parte, reiteró su aceptación de la sugerencia en favor de una prohibición de los ensayos subterráneos que excedieran de cierto límite, acompañada de una moratoria respecto a los ensayos por debajo de ese límite.

El 24 de noviembre, la Primera Comisión aprobó el proyecto de resolución de las 12 Potencias por 72 votos contra ninguno y 1 abstención.

El 5 de diciembre, la Asamblea General aprobó como resolución 2163 (XXI), por 100 votos contra 1 y 2 abstenciones, el proyecto de resolución recomendado por la Primera Comisión.

Desarme general y completo

El tema titulado "Cuestión del desarme general y completo: informe de la Conferencia del Comité de Desarme de Dieciocho Naciones", fue examinado por la Primera Comisión entre el 10 y el 23 de noviembre de 1966. Se presentaron proyectos de resolución sobre los siguientes asuntos: un informe del Secretario General sobre las armas nucleares; la guerra química y bacteriológica; los vuelos de aviones que lleven a bordo armas nucleares más allá de las fronteras nacionales; consideración de la cuestión del desarme general y completo por la Conferencia del Comité de Desarme de Dieciocho Naciones; y transferencia de los recursos liberados por el desarme a las necesidades del desarrollo económico.

El 25 de octubre Polonia presentó un proyecto de resolución en virtud del cual la Asamblea General: 1) pediría al Secretario General que preparase un breve informe sobre los efectos del empleo de las armas nucleares; 2) recomendaría que el informe se basase en los datos accesibles y se elaborase con la cooperación de los expertos; consultores apropiados que designase el Secretario General; 3) instaría a los gobiernos y a las instituciones y organizaciones nacionales e internacionales científicas y de otra índole a colaborar con el Secretario General en la preparación del informe; 4) pediría que el informe se publicase y se enviase a los gobiernos de los Estados Miembros de las Naciones Unidas a más tardar el 1º de junio de 1967; 5) instaría a los gobiernos de todos los Estados a que diesen la más amplia difusión posible al informe en sus respectivos idiomas, y que también diesen a conocer su contenido a la opinión pública a través de otros medios de comunicación; 6) decidiría que el informe del Secretario General se incluyese para su examen en el programa del vigésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General.

Un texto revisado del proyecto de resolución de Polonia fue presentado posteriormente y patrocinado por 33 países. Con arreglo a ese texto, la Asamblea General: 1) pediría al Secretario General que preparase un breve informe sobre los efectos del posible empleo de las armas nucleares y sobre las consecuencias que, para la seguridad y los sistemas económicos de los Estados, tuviesen la adquisición y el ulterior desarrollo de esas armas; 2) recomendaría que el informe se basase en datos accesibles y se elaborase con la colaboración de los expertos; consultores calificados que designase el Secretario General; 3) pediría que el informe se publicase y se transmitiese a los gobiernos

de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, a tiempo para que se lo pudiese considerar en el vigésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General; 4) recomendaría que los gobiernos de todos los Estados Miembros diesen amplia difusión al informe en sus respectivos idiomas por conducto de diversos medios de comunicación, a fin de dar a conocer su contenido a la opinión pública.

El 23 de noviembre, la Primera Comisión aprobó por unanimidad el proyecto de resolución revisado. El 5 de diciembre, la Asamblea General aprobó como resolución 2162 A (XXI), también por unanimidad, el proyecto de resolución recomendado por la Primera Comisión.

El 7 de noviembre Hungría presentó un proyecto de resolución en virtud del cual la Asamblea General: 1) reclamaría el estricto y absoluto cumplimiento por todos los Estados de los principios y normas establecidos por el Protocolo de Ginebra del 17 de junio de 1925, que prohíbe el uso de armas químicas y bacteriológicas; 2) condenaría todo acto encaminado a la utilización de armas químicas y bacteriológicas; 3) declararía que el uso de armas químicas y bacteriológicas con objeto de aniquilar seres humanos y los medios de su subsistencia constituye un crimen internacional.

El Canadá, los Estados Unidos, Italia y el Reino Unido presentaron enmiendas tendientes, entre otras cosas, a sustituir los párrafos 1, 2 y 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución de Hungría por un párrafo único en el cual la Asamblea General pediría el estricto cumplimiento por todos los Estados de los principios y objetivos del Protocolo de Ginebra del 17 de junio de 1925 y condenaría todos los actos contrarios a dichos objetivos.

Kenia, la República Unida de Tanzania y Uganda presentaron otra serie de enmiendas al proyecto de resolución de Hungría. Posteriormente fueron revisadas y también patrocinadas por el Alto Volta, Burundi, Guinea, Mauritania y Somalia. En virtud de estas enmiendas revisadas, los párrafos 2 y 3 del proyecto de resolución de Hungría quedarían reemplazados por nuevos párrafos en virtud de los cuales la Asamblea General: 1) deploraría el uso de armas químicas y bacteriológicas con objeto de aniquilar seres humanos y los medios de su subsistencia; y 2) invitaría a todos los Estados a adherirse al Protocolo de Ginebra del 17 de junio de 1925.

Hungría aceptó las enmiendas revisadas presentadas por los ocho países africanos, y luego se presentó un proyecto de resolución revisado en el que se incorporaron esas enmiendas, patrocinado por Hungría, los ocho países que habían sometido las enmiendas, y Nigeria y Siria.

El Canadá, los Estados Unidos, Italia y el Reino Unido presentaron nuevamente sus enmiendas a fin de aplicarlas al proyecto de resolución revisado. Posteriormente revisaron estas enmiendas a fin de que el párrafo único de la parte dispositiva solamente reemplazara los párrafos 1 y 2 del proyecto de resolución revisado.

El 23 de noviembre, la Primera Comisión votó sobre las enmiendas revisadas de las cuatro Potencias, habiéndolas aprobado. El proyecto de resolución revisado, en su forma enmendada, fue luego aprobado por 101 votos contra ninguno y 3 abstenciones. El 5 de

diciembre de 1966, la Asamblea General lo aprobó como resolución 2162 B (XXI) por 91 votos contra ninguno y 4 abstenciones.

El 11 de noviembre, Polonia y la República Socialista Soviética de Ucrania presentaron un proyecto de resolución por el cual la Asamblea General: 1) consideraría que los vuelos realizados más allá de las fronteras nacionales por aviones que llevaran a bordo armas nucleares y otro tipo de armas de destrucción en masa aumentaban la tensión, podían producir la contaminación del ambiente humano, amenazar la vida de los seres humanos y provocar serios incidentes peligrosos para la causa de la paz; y 2) instaría a todos los Estados a que se abstuvieran de realizar vuelos con aviones que llevaran a bordo armas nucleares y otro tipo de armas de destrucción en masa, más allá de las fronteras nacionales.

El 23 de noviembre, Polonia y la República Socialista Soviética de Ucrania declararon que no insistirían en que se votase sobre su proyecto de resolución pero que volverían a presentarlo más adelante.

El 14 de noviembre, 10 países presentaron un proyecto de resolución. En virtud de este proyecto de resolución, la Asamblea General: 1) pediría a la Conferencia del Comité de Desarme de Dieciocho Naciones que continuase haciendo nuevos esfuerzos para conseguir firmes progresos en el logro de un acuerdo sobre la cuestión del desarme general y completo bajo un control internacional eficaz, así como en las medidas conexas, y particularmente sobre un tratado internacional para prevenir la proliferación de las armas nucleares y para que se completase el tratado de prohibición de ensayos nucleares de forma que comprendiese los ensayos subterráneos con armas nucleares; 2) decidiría remitir a la Conferencia del Comité de Desarme de Dieciocho Naciones todos los documentos y actas de la Primera Comisión relativos a cualquier cuestión relacionada con la del desarme; 3) pediría a la Conferencia del Comité de Desarme de Dieciocho Naciones que reanudase cuanto antes sus trabajos e informase oportunamente a la Asamblea General sobre los progresos logrados.

El 23 de noviembre, la Primera Comisión aprobó la resolución de las 10 Potencias por 102 votos contra ninguno y 2 abstenciones.

El 5 de diciembre, la Asamblea General aprobó por 98 votos contra ninguno y 2 abstenciones, como resolución 2162 C (XXI), el proyecto de resolución recomendado por la Primera Comisión.

El 16 de noviembre, el Irán, Marruecos, la República Unida de Tanzania y Túnez presentaron un proyecto de resolución. El 17 de noviembre, los autores, a los que se unió la Costa de Marfil, presentaron un texto revisado según el cual la Asamblea General: 1) instaría a los gobiernos de todos los Estados a que intensificaran sus esfuerzos a fin de llegar a un acuerdo sobre el desarme general y completo bajo control internacional eficaz, para apresurar de esta manera el logro de los beneficios a la humanidad a los que se refería la Declaración sobre la transferencia para uso con fines pacíficos de los medios y recursos liberados por el desarme, que figuraba en la resolución 1837 (XVII), de 18 de diciembre de 1962; 2) exhortaría a los gobiernos de todos los Estados a que consideraran la posibilidad de asignar una pequeña proporción de sus

gastos militares anuales a la campaña mundial contra el analfabetismo que se llevaba a cabo bajo los auspicios de la UNESCO dentro del Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo; 3) invitaría a los gobiernos de todos los Estados a que, como primer paso hacia el desarme general y completo bajo control internacional, estudiaran la posibilidad de comprometerse a no efectuar ningún aumento en sus gastos militares por encima de su nivel actual y más adelante a reducirlos cada año en una suma o porcentaje determinados, con miras a asignar los ahorros así logrados anualmente a los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo; 4) invitaría a los gobiernos de los países desarrollados a que llevaran a cabo los estudios necesarios sobre los aspectos detallados de las consecuencias económicas de las medidas colaterales y parciales de desarme, a fin de preparar la información, los planes y las políticas para la transferencia de los ahorros logrados con tales medidas a actividades de apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los países en desarrollo; 5) pediría al Secretario General que transmitiera esta resolución a la conferencia mundial de desarme para que, al reunirse conforme a lo dispuesto en la resolución 2030 (XX), la incluyera en su programa; 6) pediría a los Estados Miembros que consignaran al Secretario General las medidas que hubieran adoptado con arreglo a la recomendación que figuraba en la resolución, y pediría al Secretario General que informara a la Asamblea General en su vigésimo segundo período de sesiones.

El 23 de noviembre, a solicitud de los autores, la Primera Comisión decidió aplazar indefinidamente la votación sobre el proyecto de resolución, hasta que el Presidente hubiese celebrado las consultas del caso. El 17 de diciembre, el Presidente informó a la Comisión que los autores del proyecto de resolución habían convenido en no insistir en que se pusiera a votación.

Cuestión de la reunión de una conferencia para firmar un convenio sobre la prohibición del uso de las armas nucleares y termonucleares

El tema titulado "Cuestión de la reunión de una conferencia para firmar un convenio sobre la prohibición del uso de las armas nucleares y termonucleares: informe de la Conferencia del Comité de Desarme de Dieciocho Naciones", fue examinado por la Primera Comisión entre el 24 y el 28 de noviembre.

El 22 de noviembre, Etiopía, la India, Nigeria, la República Árabe Unida y Yugoslavia presentaron un proyecto de resolución y luego, el 25 de noviembre, prometieron un texto revisado del proyecto. Según ese proyecto de resolución revisado la Asamblea General, estimando que la firma de un convenio sobre la prohibición del uso de las armas nucleares y termonucleares facilitaría mucho las negociaciones relativas al desarme general y completo bajo un efectivo control internacional y daría nuevo impulso a la búsqueda de una solución del urgente problema del desarme nuclear, y estimando además que la concurrencia más amplia posible a una conferencia con el fin de firmar tal convenio sería de vital importancia para la observancia efectiva y universal de sus disposiciones, pediría que la Conferencia Mundial de Desarme que había de celebrarse próximamente considerase seriamente la cuestión de la firma de un convenio sobre la prohibición del uso de las armas nucleares y termonucleares.

Durante el debate, Etiopía expresó la opinión de que quizás no fuera oportuno pedir la inmediata celebración de una conferencia para firmar un convenio sobre la prohibición del uso de las armas nucleares, y que la conferencia mundial de desarme sería un foro conveniente para esa finalidad. El Paquistán apoyó la idea de que el tema debería ser considerado en la conferencia mundial de desarme, pues creía que no podría emprenderse ninguna medida efectiva de desarme sin el apoyo de todas las Potencias nucleares, inclusive la República Popular de China. Albania recordó la propuesta hecha por la República Popular de China para que la cuestión de la prohibición completa y la destrucción total de las armas nucleares fuera discutida en una conferencia mundial en la cumbre. En cambio, el Canadá declaró que, aunque simpatizaba con los motivos a que obedecía el proyecto de resolución, creía que el remitir la cuestión a una conferencia mundial de desarme no aumentaría las posibilidades de éxito. Tanto el Canadá como Irlanda consideraron que no era realista confiar en simples declaraciones de no utilización de las armas nucleares.

La Unión Soviética sugirió que, hasta tanto se concluyese un convenio por el que se prohibiese el uso de las armas nucleares, los Estados nucleares "individualmente o en conjunto" deberían prometer no ser los primeros en utilizar las armas nucleares.

El 28 de noviembre, el Comité aprobó el proyecto de resolución revisado por 58 votos contra ninguno y 22 abstenciones.

El 5 de diciembre, la Asamblea General aprobó el proyecto de resolución como resolución 2164 (XXI), por 80 votos contra ninguno y 23 abstenciones.

Eliminación de las bases militares extranjeras en los países de Asia, África y América Latina

Este tema fue estudiado por la Primera Comisión del 24 de noviembre al 2 de diciembre.

El Comité tuvo ante sí un proyecto de resolución presentado por la URSS el 23 de septiembre de 1966 por medio del cual la Asamblea General, tomando nota con inquietud de que las bases militares extranjeras instaladas en los territorios de Estados independientes de Asia, África y América Latina se utilizaban para la intervención militar directa en los asuntos internos de los pueblos, la represión de su lucha por la independencia y la libertad, y también para peligrosas actividades que amenazaban la paz mundial; y teniendo en cuenta que la existencia de bases militares en territorios dependientes era incompatible con la resolución de la Asamblea General relativa a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales (resolución 2105 (XX)): 1) pediría a los Estados que tenían bases militares en los territorios de Estados independientes o en territorios dependientes de Asia, África y América Latina, que las desmantelasen inmediatamente y que se abstuviesen de establecer otras en el futuro; y 2) pediría al Secretario General de las Naciones Unidas que verificase el cumplimiento de esa resolución e informase sobre los resultados de su verificación a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su vigésimo segundo período de sesiones.

Respondiendo a las preguntas hechas acerca de la exclusión de bases en Europa y América del Norte en

la redacción del proyecto de resolución, el representante de la URSS dijo que su país siempre había estado firmemente en favor del desmantelamiento de todas las bases militares extranjeras en los territorios de otros países de cualquier parte del mundo en que se hallaran situadas, pero que el proyecto de resolución había sido redactado teniendo en cuenta la oposición de las Potencias occidentales a la eliminación de las bases en Europa.

En el curso del debate sobre el proyecto de resolución, los Estados Unidos y otras delegaciones occidentales declararon que consideraban que el proyecto de resolución de la URSS era primordialmente un documento de propaganda. El representante de los Estados Unidos dijo que la resolución tenía por objeto justificar las llamadas guerras de liberación nacional y obtener una ventaja militar para la URSS debido a su posición geográfica. Agregó que el estacionamiento de fuerzas de los Estados Unidos y el mantenimiento de bases militares en el extranjero eran respuesta directa a las amenazas y acciones soviéticas de tiempos anteriores y a las amenazas y acciones continuas de China; tales bases servían a los intereses tanto de los países huéspedes como de los otros países. Los Estados Unidos y algunos de sus aliados sostuvieron también que la tesis soviética relativa a las bases militares en el extranjero era contraria al principio de seguridad colectiva previsto en la Carta de las Naciones Unidas.

Entre los países en desarrollo hubo oposición general a las bases militares extranjeras por cuanto se consideraron primordialmente como manifestaciones de colonialismo y perjudiciales al desarrollo libre e independiente de las naciones. Sin embargo, algunos de los países en desarrollo trazaron una distinción clara entre las bases como manifestación de colonialismo y las bases que eran consecuencia de tratados libremente concertados. Manifestaron que estas últimas bases podían desempeñar un papel importante en la defensa del país, y que esta cuestión correspondía a la soberanía de los Estados.

El 30 de noviembre, la India, la República Árabe Unida y Yugoslavia presentaron un proyecto de resolución en virtud del cual la Asamblea General decidiría transmitir a la Conferencia del Comité de Desarme de Dieciocho Naciones todos los documentos y actas de la Primera Comisión y de las sesiones plenarios de la Asamblea General relativos a este tema para que los examinara e informara al respecto.

El 2 de diciembre, la Primera Comisión aprobó el proyecto de resolución de las tres Potencias por 99 votos contra ninguno y 10 abstenciones, y luego decidió, por 99 votos contra 1 y 8 abstenciones, no votar sobre el proyecto de resolución de la URSS ni sobre las enmiendas del mismo.

El 5 de diciembre de 1966, la Asamblea General aprobó como resolución 2165 (XXI), por 94 votos contra ninguno y 10 abstenciones, el proyecto de resolución recomendado por la Primera Comisión.

CUARTO PERÍODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN PREPARATORIA PARA LA DESNUCLEARIZACIÓN DE LA AMÉRICA LATINA

La Comisión Preparatoria para la Desnuclearización de la América Latina celebró su cuarto período de se-

siones el 30 de agosto de 1966 y del 31 de enero al 14 de febrero de 1967. Estas negociaciones culminaron el 14 de febrero de 1967 con la firma, en México, D. F., del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina. El acta Final del Cuarto Período de Sesiones de la Comisión Preparatoria, que contiene el texto del Tratado, fue distribuido entre todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas como documento de la Asamblea General.

REUNIONES DEL COMITÉ PREPARATORIO DE LA CONFERENCIA DE ESTADOS QUE NO POSEEN ARMAS NUCLEARES

Con arreglo a la resolución 2153 B (XXI), el Comité Preparatorio de la Conferencia de Estados que no Poseen Armas Nucleares se reunió el 2 de febrero y el 9 de marzo de 1967.

REUNIONES DE LA CONFERENCIA DEL COMITÉ DE DESARME DE DIECIOCHO NACIONES EN 1967

La Conferencia del Comité de Desarme de Dieciocho Naciones se reunió nuevamente en Ginebra el 21 de febrero y suspendió su período de sesiones el 23 de marzo de 1967. Los trabajos se reanudaron el 18 de mayo y continúan actualmente. Durante este período se concedió alta prioridad a la cuestión de un tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares.

B. Efectos de las radiaciones atómicas

DECIMOSEXTO PERÍODO DE SESIONES DEL COMITÉ CIENTÍFICO

El Comité Científico para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas celebró su 16º período de sesiones en la Sede del 6 al 17 de junio de 1966. El Dr. A. R. Gopal-Ayengar, de la India, y el Dr. Gordon C. Butler, del Canadá, desempeñaron los cargos de Presidente y Vicepresidente respectivamente. El Comité todavía proseguía sus deliberaciones al cerrarse el período considerado en la anterior memoria anual del Secretario General sobre la labor de la Organización. En el curso de dicho período de sesiones, el Comité aprobó un informe a la Asamblea General que contenía los resultados de sus deliberaciones sobre las radiaciones naturales, sobre la contaminación radiactiva del medio ambiente y sobre los efectos genéticos de las radiaciones ionizantes.

INFORME DEL COMITÉ CIENTÍFICO

A continuación se resumen las principales conclusiones a que llegó el Comité.

Radiaciones procedentes de fuentes naturales

Las dosis medias de radiaciones procedentes de fuentes naturales recibidas en los tejidos reproductivos, la médula ósea y las células que tapizan las superficies óseas, cuya irradiación puede dar lugar a efectos hereditarios, leucemias y tumores óseos, respectivamente, ascienden a aproximadamente 100 milirads por año, estando los valores reales muy cerca de los obtenidos por el Comité en informes anteriores. La radiación es emitida de manera continua con muy baja intensidad.

Las dosis reales recibidas por diversos individuos en un período determinado varían según las zonas en que viven. La altura, la latitud, la composición de los suelos y rocas subyacentes y de las estructuras de los edificios, así como el tiempo pasado dentro de estos últimos, afectan la cantidad de radiación absorbida por las personas. En algunas zonas, en virtud de la presencia de cantidades excepcionalmente altas de sustancias radiactivas en el suelo y las rocas, hay poblaciones considerables que están expuestas a niveles constantes de radiación natural que llegan a ser hasta veinte veces superior al promedio.

El tejido pulmonar parece ser la parte del cuerpo humano que recibe las mayores dosis de radiación natural a consecuencia de la inhalación de gases y polvos radiactivos presentes en la atmósfera. Sin embargo, no se conocen todavía las consecuencias biológicas de la radiación así recibida.

Contaminación del medio ambiente

Los ensayos nucleares son la fuente principal de la actual contaminación radiactiva del medio ambiente en todo el mundo. Sin embargo, los ensayos atmosféricos efectuado en Asia central en 1964 y 1965 y las filtraciones de los ensayos subterráneos efectuados durante el mismo período no han contribuido de manera notable a las dosis mundiales medias. Aunque el Comité no disponía aún de información suficiente para realizar una evaluación detallada, parece que la radiactividad liberada como consecuencia del ensayo atmosférico efectuado en Asia central en mayo de 1966 fue muy pequeña en comparación con la cantidad total producida por todos los ensayos anteriores.

Los cálculos de las dosis totales recibidas y por recibir de todos los ensayos no difieren mucho de los dados por el Comité en su informe de 1964. Se estima que la cantidad total de radiación procedente de residuos radiactivos que se habrá recibido para el año 2000 será equivalente a la cantidad que los tejidos reproductivos, la médula ósea y las células que recubren las superficies óseas reciben de fuentes naturales en aproximadamente nueve meses, dos años y medio y un año y medio respectivamente. Las dosis procedentes de los niveles actuales de contaminación del medio ambiente se emiten con una intensidad sumamente baja.

Riesgos genéticos de las radiaciones ionizantes

Un nuevo estudio de los efectos genéticos de las radiaciones, que el Comité ya había considerado en informes presentados a la Asamblea General en sus períodos de sesiones decimotercero y decimoséptimo, condujo a una revisión de las estimaciones de las tasas de mutación genética, tanto espontánea (frecuencia de mutaciones por generación) como inducida (frecuencia de mutaciones por unidad de dosis), en las poblaciones humanas. Sin embargo, el Comité subrayó que, si bien era probable que las dosis más bajas de radiación produjeran mutaciones y que éstas fueran en general perjudiciales, no se sabía qué proporción de las mutaciones se manifiesta a través de mecanismos que causen trastornos, tales como deformaciones físicas o defectos mentales, y qué proporción pasa prácticamente inadvertida porque el huevo fecundado muere antes de la implantación.

Se sabe que las anomalías cromosómicas se producen espontáneamente con una frecuencia bastante elevada y son responsables de varias enfermedades muy graves, entre ellas el síndrome de Down (mongolismo), y de alrededor de una cuarta parte de todos los abortos espontáneos. Los datos tanto sobre los animales como sobre los seres humanos permiten obtener estimaciones de las tasas de inducción de muy pocos tipos de anomalías cromosómicas después de altas dosis de radiación. Con dosis bajas, las tasas de inducción pueden ser sumamente bajas. No obstante, en el caso de la mayoría de las anomalías no es posible actualmente estimar las tasas de inducción, aunque hay razón para creer que pueden ser inducidas por dosis altas agudas de radiación.

Las tasas de inducción de anomalías cromosómicas y de mutaciones génicas dependen en gran medida de la forma en que se reciben las radiaciones. La información disponible es particularmente amplia con respecto a las mutaciones génicas e indica que el riesgo genético por unidad de dosis de radiación es menor cuando las dosis son bajas, cuando la exposición se distribuye a lo largo de un período prolongado y cuando hay un intervalo largo entre la irradiación de las células reproductivas femeninas y la concepción.

CONSIDERACIÓN POR LA ASAMBLEA GENERAL

El informe del Comité Científico fue estudiado por la Asamblea General en su vigésimo primer período de sesiones. La Comisión Política Especial tuvo ante sí un proyecto de resolución patrocinado por dieciséis países. Al presentar el proyecto de resolución en nombre de los patrocinadores, el representante del Canadá dijo que el propósito del mismo era reafirmar la importancia que la Asamblea General atribuye al estudio de los efectos de las radiaciones ionizantes y pedir al Comité Científico que continuara su labor. Aunque el ritmo de la contaminación radiactiva en todo el mundo había disminuido, los niveles de radiactividad eran todavía lo bastante altos como para justificar su estudio, especialmente teniendo en cuenta que probablemente se efectuarían pronto nuevos ensayos nucleares. El 15 de diciembre de 1966, la Comisión Política Especial aprobó por unanimidad el proyecto de resolución.

El 17 de diciembre, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad por la Asamblea General como resolución 2213 (XXI). Por esta resolución la Asamblea General, 1) elogió al Comité Científico por las útiles contribuciones que había aportado desde sus comienzos para un conocimiento y comprensión más amplios de los efectos y niveles de las radiaciones atómicas; 2) pidió al Comité Científico que continuara su programa, incluidas sus actividades de coordinación, para ampliar el conocimiento de los niveles y efectos de las radiaciones atómicas procedentes de todas las fuentes; 3) tomó nota de que el Comité Científico pensaba celebrar su próximo período de sesiones en 1967 e informar nuevamente a la Asamblea General; 4) felicitó a la Organización Meteorológica Mundial por sus trabajos al aplicar el sistema de observación de los niveles de radiactividad en la atmósfera; 5) agradeció la ayuda que habían prestado al Comité Científico los organismos especializados, el Organismo Internacional de Energía Atómica y las organizaciones no gubernamentales interesadas; 6) recomendó que

todas las partes interesadas continuaran colaborando con el Comité Científico; y 7) pidió al Secretario General que continuara prestando al Comité Científico la ayuda necesaria para que realice sus trabajos y divulgar sus conclusiones entre el público.

C. Utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos

OCTAVO PERÍODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN SOBRE LA UTILIZACIÓN DEL ESPACIO ULTRATERRESTRE CON FINES PACÍFICOS

La Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos celebró su octavo periodo de sesiones en la Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, el 19 de septiembre de 1966. En sus deliberaciones participaron, en calidad de observadores, representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, de la Organización de Aviación Civil Internacional, de la Organización Mundial de la Salud, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de la Organización Meteorológica Mundial, del Organismo Internacional de Energía Atómica y del Comité de Investigaciones del Espacio (COSPAR) del Consejo Internacional de Uniones Científicas. La Comisión aprobó por unanimidad el nombramiento del Sr. Gheorghe Diaconescu (Rumania) como Vicepresidente, en sustitución del Sr. Haseganu, que había renunciado a su puesto en la Misión de Rumania ante las Naciones Unidas.

Además de los informes de su Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos y de su Subcomisión de Asuntos Jurídicos, la Comisión tuvo ante sí para examinarlo el informe del Grupo de Trabajo Plenario que había sido creado para estudiar la propuesta conferencia internacional sobre la exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, el quinto informe de la UIT sobre las telecomunicaciones en relación con la utilización del espacio ultraatmosférico con fines pacíficos, y el quinto informe de la OMM sobre los progresos de las ciencias que estudian la atmósfera y su aplicación a la vista de la evolución de las actividades del espacio ultraterrestre.

La Comisión examinó también los siguientes documentos, preparados en cumplimiento de la resolución 2130 (XX) de la Asamblea General, que habían sido examinados por la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos en su cuarto periodo de sesiones: 1) informe del Secretario General sobre el material para divulgar los propósitos y las posibilidades de las actividades espaciales; 2) una nota de la Secretaría en la que se hacían sugerencias para la elaboración de programas de enseñanza y formación de especialistas en los usos pacíficos del espacio ultraterrestre a fin de prestar ayuda a los países en desarrollo; 3) una reseña de las actividades nacionales y de cooperación internacional relativas al espacio ultraterrestre; 4) un informe del Grupo Especial de enseñanza y formación en cuestiones espaciales del COSPAR; 5) un informe facilitado por el COSPAR sobre la distribución mundial de las instalaciones de lanzamiento de cohetes-sonda; 6) un examen de las actividades y los recursos de las Naciones Unidas, sus organismos especializados y otras organizaciones internacionales competentes en la esfera de la utilización del espacio ultraterrestre con

fines pacíficos; 7) un informe del Grupo Consultivo para la Estación Ecuatorial de Lanzamiento de Cohetes-Sonda de Thumba; y 8) una exposición del Secretario General acerca de las consecuencias financieras de la propuesta conferencia internacional sobre la exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos.

Informe de la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos

A petición de la Comisión, la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos examinó en su cuarto periodo de sesiones la posibilidad de establecer un sistema civil mundial de navegación. La Subcomisión llegó a la conclusión de que semejante sistema sería muy útil y de que en el momento actual era técnicamente factible. Sin embargo, en vista de la gran complejidad de este problema, la Subcomisión recomendó la creación de un grupo de trabajo que estudiara la necesidad, viabilidad y aplicación de un sistema de servicios de navegación por medio de satélites.

La Subcomisión, reconociendo el problema del aumento de la población y el problema de proporcionar alimentos a gran número de gentes en las diversas partes del mundo, pidió a los países y organismos especializados interesados que prosiguieran estudiando las aplicaciones de la tecnología espacial a la meteorología y al mejoramiento de los medios de información para las masas por televisión, todo lo cual podría a la postre contribuir a mitigar estos problemas.

En lo concerniente a la divulgación de los objetivos y posibilidades de las actividades espaciales, la Subcomisión recomendó que se recogiera periódicamente en una guía impresa el material contenido en los documentos de las Naciones Unidas relacionados con programas nacionales e internacionales y con las disponibilidades de medios de educación y capacitación y de becas. También aprobó recomendaciones sobre el intercambio de información, fomento de los programas internacionales, instalaciones internacionales de lanzamiento de cohetes-sonda, y educación y capacitación.

En el debate de la Comisión sobre el informe de la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos, se indicó que una de las medidas más importantes y avanzadas recomendadas por la Subcomisión era el establecimiento de un grupo de trabajo que estudiara la necesidad, viabilidad y aplicación de un sistema de servicios de navegación y por medio de satélites. Se expresó la esperanza de que tal grupo de trabajo pudiera servir de modelo en el porvenir para una importante actividad espacial internacional. Sin embargo, algunas delegaciones deploraron que la Subcomisión no hubiera aprobado una propuesta presentada por tres países en desarrollo en relación con la educación y capacitación en materia de utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos.

La Comisión hizo suyas las recomendaciones contenidas en el informe de la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos, las cuales anexó a su informe a la Asamblea General en su vigésimo primer periodo de sesiones.

Informe de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos

La Comisión examinó el informe de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos sobre los trabajos de su quinto

período de sesiones, tomó nota del mismo y lo unió como anexo al informe de la Comisión a la Asamblea General. (En el capítulo XIII del presente informe se incluye un resumen de los debates sobre el informe de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos.)

Informe del Grupo de Trabajo Plenario

En enero y septiembre de 1966, celebró dos períodos de sesiones en Nueva York el Grupo de Trabajo Plenario establecido en octubre de 1965 por la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos para que estudiara la conveniencia, organización y objetivos de una conferencia o reunión internacional sobre la exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos que habría de celebrarse en 1967.

El Grupo de Trabajo recomendó que en el segundo semestre de 1967 se celebrara una conferencia internacional de unas dos semanas de duración, y que sus objetivos consistieran en examinar, sobre la base de las realizaciones científicas y técnicas, los beneficios prácticos que podrían obtenerse de la investigación y exploración espaciales y la medida en que los países no espaciales, especialmente los países en desarrollo, podrían disfrutar de tales beneficios además de cooperar en las actividades espaciales internacionales. El informe daba un proyecto de programa para la conferencia en el que se incluía un examen de los resultados de las investigaciones espaciales durante los diez años de la era espacial, y recomendaba que se estableciera un grupo de expertos para que se ocupara de los preparativos referentes a la organización de la conferencia, en cooperación con el Presidente de la Comisión y la Secretaría.

El Grupo de Trabajo también debatió la cuestión de dónde había de celebrarse la conferencia. Algunos miembros opinaron que debía celebrarse en Europa. Otros eran del parecer de que debía celebrarse en la Sede de las Naciones Unidas o, si había de ser en otro sitio, que había que atenerse a lo dispuesto por la resolución 2116 (XX) de la Asamblea General. El Grupo de Trabajo tomó nota con agradecimiento de las generosas ofertas de los Gobiernos de Francia y de Austria de invitar a la conferencia a reunirse en París o Viena, pero convino en que en su informe no debía formularse recomendación alguna sobre este punto y en que se sometiera la cuestión a la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos. También se suscitó la cuestión de qué países habrían de participar en la conferencia. Algunas delegaciones propusieron que todos los Estados interesados tuvieran la posibilidad de participar. El Grupo de Trabajo convino en dejar este asunto a la Comisión y de no hacer tampoco ninguna recomendación sobre el mismo.

En su octavo período de sesiones, la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos hizo suyas las recomendaciones contenidas en el informe del Grupo de Trabajo y las anexó a su informe a la Asamblea General. La Comisión decidió recomendar que la conferencia se reuniera en Viena. Antes de adoptarse esta decisión, Francia retiró su oferta de invitar a la conferencia a reunirse en París con objeto de facilitar la decisión. La Comisión convino en remitir la cuestión de qué Estados habrían de participar en

la conferencia a la Asamblea General en su vigésimo primer período de sesiones.

Informes de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y de la Organización Meteorológica Mundial

La Comisión tomó nota de que la UIT y la OMM estaban prosiguiendo su valiosa labor de desarrollo y fomento de la cooperación entre muchos países, con el objeto de mejorar los medios de comunicación en todo el mundo mediante el empleo de satélites artificiales, así como de mejorar los pronósticos meteorológicos y desarrollar las ciencias meteorológicas.

La Comisión tomó nota con satisfacción de los informes sobre la marcha de los trabajos presentados por la UIT y la OMM y pidió a ambos organismos que presentaran nuevos informes en 1967.

EXAMEN POR LA ASAMBLEA GENERAL

Durante el vigésimo primer período de sesiones de la Asamblea General, la Primera Comisión examinó el informe de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos. En el debate de la Primera Comisión se expresó la satisfacción general ante el notable progreso en la cooperación en varios aspectos de la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos. Se dio especial importancia a este respecto al acuerdo alcanzado sobre el texto de un tratado que debe regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización con fines pacíficos del espacio ultraterrestre, y a la decisión de convocar una conferencia internacional para que estudiara los beneficios que pueden obtenerse de la exploración del espacio ultraterrestre.

El 16 de diciembre se presentó a la Primera Comisión un proyecto de resolución, patrocinado por diecisiete países, que trataba del informe de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos. Durante el examen de este proyecto de resolución, ciertas delegaciones pusieron de relieve la importancia de la enseñanza y la formación para asegurar el disfrute de los beneficios de la tecnología espacial a los países que no desarrollan actividades espaciales, especialmente los países en desarrollo. Recordaron que la Asamblea General, en su vigésimo período de sesiones, había pedido a la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos que preparara sugerencias relativas a un programa de formación, y lamentaron que no se hubiera presentado informe alguno a la Asamblea en su vigésimo primer período de sesiones. Por lo tanto, esta petición fue reiterada en el proyecto de resolución. También se destacó la importancia del intercambio de información y documentación y de los programas de investigación conjuntos.

La Primera Comisión recomendó el proyecto de resolución a la Asamblea General, la cual lo aprobó por unanimidad el 19 de diciembre de 1966 como resolución 2223 (XXI). Por esta resolución, la Asamblea: 1) hacía suyas las recomendaciones contenidas en el informe de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos sobre el intercambio de información, el fomento de los programas internacionales, las estaciones internacionales de lanzamiento de cohetes-sonda, y la enseñanza y la capacitación; 2) acogía con beneplácito la intención de la Comisión de hacer más útiles sus actividades en el intercambio de in-

formación relativa al espacio ultraterrestre mediante la preparación de informes ampliados anuales a partir de una fecha determinada; 3) observaba con agrado que varios Estados Miembros habían prestado ayuda al programa de información de la Comisión al proporcionarle amplio material descriptivo sobre sus programas espaciales nacionales, e instaba a todos los Estados Miembros a proporcionar esta información en la medida posible y practicable; 4) acogía con beneplácito la decisión de la Comisión de establecer un grupo de trabajo que estudiara la necesidad; viabilidad y aplicación de una red de satélites para prestar servicios a la navegación; 5) pedía a la Comisión que continuara la preparación y el examen de sugerencias para la elaboración de programas de enseñanza y formación de especialistas, a fin de prestar ayuda a los países en desarrollo, y que informara sobre estas cuestiones a la Asamblea General en su siguiente período de sesiones; 6) hacía suyas las directrices adoptadas por la Comisión que debían aplicarse en los casos en que se solicitara apoyo o patrocinio internacionales para la formación técnica de especialistas; 7) pedía encarecidamente que las actividades espaciales se realizaran de tal manera que todos los Estados pudieran participar en la aventura y en los beneficios de la exploración del espacio, cualquiera que fuese su grado de desarrollo económico o científico; 8) observaba con agrado que algunos Estados Miembros habían establecido y fortalecido programas de enseñanza y formación profesional e instaba a los demás a que hicieran lo mismo; 9) recomendaba que las Naciones Unidas continuaran patrocinando la estación ecuatorial de lanzamiento de cohetes de Thumba, en la India; 10) sugería que la Comisión estudiara los medios de ampliar su utilidad como centro de información para los Estados Miembros, y 11) tomaba nota con agrado de los informes presentados por la OMM y la UIT sobre los progresos de sus actividades relacionadas con el espacio ultraterrestre.

En la Primera Comisión, veintiocho países presentaron un proyecto de resolución relativo a la conferencia internacional sobre la exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos.

Todos los oradores manifestaron su apoyo a la conferencia. Hubo acuerdo en que la exploración y utilización del espacio ultraterrestre debían realizarse en beneficio de todos y en que se precisaba una mayor difusión de los conocimientos y logros de la ciencia y la tecnología espaciales y el fomento de sus aplicaciones prácticas.

Durante el debate se presentó una enmienda tendiente a limitar la participación en la conferencia a los Estados Miembros de las Naciones Unidas, Estados miembros de los organismos especializados, Estados Partes en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y Estados invitados especialmente por la Asamblea General. También fue presentada una subenmienda en virtud de la cual todos los Estados serían invitados a participar en la conferencia.

En lo relativo a la participación en la conferencia, cuestión que había sido sometida a la Asamblea por la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos, ciertas delegaciones opinaron que debería limitarse a los países especificados en la enmienda, a la cual denominaron "fórmula de Viena", y sostuvieron que esta fórmula había sido empleada ya para otras conferencias de las Naciones Unidas y ha-

bía sido afirmada para conferencias futuras en el actual período de sesiones de la Asamblea.

Otras delegaciones apoyaron la subenmienda en que se disponía que participaran "todos los Estados" y arguyeron que la investigación espacial era de la incumbencia de todos los Estados, que el enfocar la cuestión de los Estados participantes desde un punto de vista discriminatorio era contrario a los principios enunciados en el proyecto de tratado sobre el espacio ultraterrestre y, por lo tanto, que la Asamblea debería atenerse al principio aplicado en lo concerniente a la convocación de una conferencia mundial de desarme.

La Primera Comisión rechazó la subenmienda y aprobó la enmienda. El proyecto de resolución, en su forma enmendada, fue aprobado por unanimidad. El 19 de diciembre de 1966 la Asamblea General aprobó por unanimidad este proyecto como resolución 2221 (XXI). Por esta resolución, la Asamblea: 1) decidía que se celebrase una Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos en Viena en septiembre de 1967; 2) hacía suyas las recomendaciones del Grupo de Trabajo contenidas en el informe de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos relativas a las atribuciones, los objetivos, el programa y la organización de la Conferencia; y 3) pedía a la Comisión que presentara a la Asamblea, en su vigésimo segundo período de sesiones, un informe sobre los preparativos para la Conferencia.

En la Primera Comisión fue presentado también un tercer proyecto de resolución relativo al Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. La Asamblea General, por recomendación de la Primera Comisión, aprobó por unanimidad dicho proyecto como resolución 2222 (XXI) (véase la sección N del capítulo XIII).

APLAZAMIENTO DE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA EXPLORACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL ESPACIO ULTRATERRESTRE CON FINES PACÍFICOS

El 13 de febrero de 1967, la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos se reunió para examinar una sugerencia, formulada en el Grupo de Expertos al que se había encomendado la preparación técnica de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos, en el sentido de que se aplazara la Conferencia por un año aproximadamente para que pudiera prepararse mejor.

Algunas delegaciones expresaron el parecer de que en el escaso tiempo de que se disponía sería prácticamente imposible hacer los preparativos para acontecimiento tan importante, y dijeron que sus hombres de ciencia no podrían presentar antes de la fecha fijada para la Conferencia la documentación científica detallada que se requiera.

Otros representantes manifestaron que les sorprendía que en una fase tan avanzada se hubiera hecho una propuesta de aplazamiento. Recordaron que, si bien durante los debates que precedieron a la aprobación de la resolución 2221 (XXI) de la Asamblea General habían expresado el parecer de que se dejaba un tiempo insuficiente para la preparación de la Conferencia, sin

embargo habían hecho todo lo posible para que los preparativos se terminaran a tiempo y estaban dispuestos a atenerse a la fecha fijada en un principio.

Algunas delegaciones declararon que, en el caso de que se considerara necesario un aplazamiento con objeto de asegurar una preparación adecuada, aceptarían con renuencia un aplazamiento de la Conferencia hasta 1968.

La Comisión convino en que la Conferencia se aplazara por un año aproximadamente a partir de la fecha prevista, septiembre de 1967. Se sugirió como más adecuado el período comprendido entre abril y septiembre de 1968. Se decidió que la fecha exacta sería convenida en consulta con los Estados Miembros y con el país huésped. La Comisión autorizó al Secretario General a señalar esta cuestión para su decisión definitiva a la atención de la Asamblea General en su quinto período extraordinario de sesiones.

El 23 de mayo la Asamblea General examinó un proyecto de resolución que había sido presentado por veintidós países respecto de la cuestión del aplazamiento de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos.

Durante el debate sobre el proyecto de resolución, muchas delegaciones destacaron la importancia de la Conferencia y reafirmaron su creencia de que beneficiaría por igual a las Potencias espaciales y a las no espaciales. También expresaron la esperanza de que se observase estrictamente la fecha dada en el proyecto de resolución y de que el Grupo de Expertos realizase sin demora todos los preparativos necesarios en cooperación con la Secretaría.

Este proyecto de resolución fue aprobado el mismo día como resolución 2250 (S-V). En esta resolución la Asamblea General reafirmaba la gran importancia que concedía a la Conferencia, decidía aceptar la recomendación unánime de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos y, de acuerdo con la misma, aplazar la fecha prevista de la Conferencia de septiembre de 1967. Reafirmando la orientación contenida en su resolución 2221 (XXI), la Asamblea decidía que la Conferencia se celebrara en Viena del 14 al 27 de agosto de 1968 e instaba a todos los Estados participantes a que dedicaran sus mayores esfuerzos para asegurar su éxito. También pedía a la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos que presentara a la Asamblea General, en su vigésimo tercer período de sesiones, un informe sobre los preparativos para la Conferencia, así como sobre la organización y actas de la misma.

COOPERACIÓN ENTRE LOS ORGANISMOS

Las cuestiones de cooperación entre los organismos en lo relativo al espacio ultraterrestre fueron estudiadas nuevamente por el Comité Administrativo de Coordinación y por su grupo de trabajo entre organismos sobre programas y actividades relacionados con la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos. Las organizaciones directamente interesadas en programas espaciales — las Naciones Unidas, la OIT, la UNESCO, la OACI, la OMS, la UIT, la OMM, la OCMI y el OIEA — han estudiado conjuntamente sus actividades a la vista de los preparativos para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos y del programa ampliado de trabajo de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos. Estas organizaciones confirmaron su deseo de cooperar con el Secretario General y con el grupo de expertos en la Organización de la Conferencia.

Se advirtió que el programa de trabajo de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos contenía algunos temas de interés para varios organismos. Así por ejemplo, la UNESCO estaba emprendiendo, en estrecha cooperación con las Naciones Unidas y la UIT, un estudio a escala internacional de los problemas que se presentan en el desarrollo de las comunicaciones por satélites. Los posibles usos de satélites para la navegación, así como la aplicación de satélites meteorológicos y de comunicaciones para atender a las necesidades de los países en desarrollo, estaban siendo ya examinados activamente por los organismos, los cuales mantendrían informada a la Comisión de los progresos de sus trabajos.

En cuanto a la enseñanza y la formación, el CAC acogió con satisfacción las recomendaciones de la Asamblea General y subrayó nuevamente la importancia que concede a tales programas y el papel que a su juicio pueden desempeñar en relación con ellos las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. En opinión del CAC, las actividades de capacitación desarrolladas por la UNESCO, la UIT y la OMS debían recibir el más completo apoyo, y debía explorarse la posibilidad de organizar actividades de formación o ayudar a las mismas en otras esferas.

D. Admisión de nuevos Miembros

En su vigésimo primer período de sesiones, la Asamblea General, en conformidad con las recomendaciones del Consejo de Seguridad, admitió a los cuatro Estados siguientes como Miembros de las Naciones Unidas:

Estado	Fecha de la recomendación del Consejo	Fecha de admisión	Resolución No.
Guyana	21 de junio de 1966	20 de septiembre de 1966	2133 (XXI)
Botswana	14 de octubre de 1966	17 de octubre de 1966	2135 (XXI)
Lesotho	14 de octubre de 1966	17 de octubre de 1966	2137 (XXI)
Barbados	7 de diciembre de 1966	9 de diciembre de 1966	2175 (XXI)

E. Examen de la situación en Rhodesia del Sur por el Consejo de Seguridad

Por carta de fecha 18 de noviembre de 1966, el Secretario General transmitió al Presidente del Consejo

de Seguridad el texto de la resolución 2151 (XXI), aprobada por la Asamblea General el 17 de noviembre de 1966. En esa resolución, nuevamente se señalaba a la atención del Consejo la grave situación predominante en Rhodesia del Sur a fin de que pudiera decidir

sobre la aplicación de las medidas coercitivas necesarias contempladas en el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

Por carta del 5 de diciembre de 1966, el representante del Reino Unido declaró que, como no se había puesto fin a la rebelión en Rhodesia, y a raíz de consultas efectuadas con otros Gobiernos de países del Commonwealth, había recibido instrucciones de pedir la convocatoria inmediata de una reunión del Consejo de Seguridad, en la que su Gobierno deseaba proponer la adopción de medidas adicionales contra el régimen ilegal de Rhodesia del Sur.

Por carta de fecha 7 de diciembre de 1966, el Subsecretario General de la Organización de la Unidad Africana transmitió al Secretario General, para información del Consejo de Seguridad, el texto de una resolución relativa a Rhodesia del Sur aprobada por la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno en su tercer período ordinario de sesiones, celebrado en Addis Abeba del 5 al 9 de noviembre de 1966.

El 8 de diciembre, el Consejo de Seguridad, sin que se formulara objeción alguna, incluyó el tema en su orden del día. De acuerdo con sus solicitudes, los representantes de Argelia, India, Paquistán, Senegal y Zambia fueron invitados a participar en la discusión, sin derecho a voto.

El representante del Reino Unido presentó un proyecto de resolución en virtud del cual el Consejo de Seguridad, actuando de conformidad con los Artículos 39 y 41 de la Carta de las Naciones Unidas, 1) decidía que todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, no obstante los contratos concertados o las licencias concedidas antes de la fecha de la resolución, deberían impedir: a) la importación a su territorio de asbesto, mineral de hierro, cromo, hierro en bruto, azúcar, tabaco, cobre, carne y productos elaborados de carne, y cueros y pieles procedentes de Rhodesia del Sur y exportados de ese país después de la fecha de la resolución; b) todas las actividades desarrolladas por sus nacionales o en su territorio que promovieran o tendieran a promover la exportación de dichos productos desde Rhodesia del Sur, y todas las transacciones efectuadas por sus nacionales o en su territorio respecto de cualquiera de dichos productos procedentes de Rhodesia del Sur y exportados de ese país después de la fecha de la resolución, incluyendo en especial cualquier transferencia de fondos a Rhodesia del Sur para los fines de tales actividades o transacciones; c) el transporte en barcos o aeronaves de su matrícula de cualquiera de estos productos procedente de Rhodesia del Sur y exportado de ese país después de la fecha de la resolución; y d) todas las actividades desarrolladas por sus nacionales o en su territorio que promuevan o tiendan a promover la venta o envío a Rhodesia del Sur de armas, municiones de todas clases, aviones militares, vehículos militares y equipo y materiales para la fabricación de armas y municiones en Rhodesia del Sur; 2) instaba a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas a que cumplieran la decisión del Consejo de Seguridad, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25 de la Carta de las Naciones Unidas; 3) invitaba, habida cuenta de los principios enunciados en el Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, a los Estados no Miembros de las Naciones Unidas a que actuaran de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la resolución; y 4) instaba a los Estados Miem-

bros de las Naciones Unidas o de los organismos especializados a comunicar al Secretario General las medidas que cada uno adoptara de conformidad con lo dispuesto en la resolución.

Al presentar el proyecto de resolución, el representante del Reino Unido declaró que los sucesos de la semana anterior habían marcado un punto crucial en la historia del problema de Rhodesia del Sur, que Gran Bretaña estaba decidida a resolver por medios pacíficos. Aunque las predicciones anteriores no habían resultado ciertas, las repercusiones de las sanciones económicas habían sido significativas para la economía del Territorio, la cual se había visto reducida aproximadamente en un 40%. Reinaba preocupación en Rhodesia acerca del futuro. El representante del Reino Unido examinó el documento de trabajo preparado durante las conversaciones entre el Primer Ministro del Reino Unido y el Sr. Smith y dijo que tal documento habría producido un adelanto político inmediato para los africanos de Rhodesia y habría establecido garantías de progreso sin obstáculos hacia un régimen de mayoría y en contra de las tendencias regresivas a la Constitución. Asimismo, se habría contado con disposiciones para retornar a la legalidad por medio de un gobierno representativo de todos los sectores de la comunidad de Rhodesia. El Sr. Smith, sin embargo, había rehusado aceptar el documento o recomendarlo a sus colegas. El régimen del Frente Rhodesiano había demostrado de manera concluyente que intentaba persistir no solamente en su rebelión, sino también en su desafío a la opinión civilizada de todo el mundo. Los peligros para la paz y la estabilidad en África central y meridional eran agudos. Refiriéndose a las medidas económicas propuestas en el proyecto de resolución del Reino Unido, el orador dijo que ofrecían mayores seguridades de éxito y se prestaban más a un control adecuado, al paso que a menudo resultaba muy difícil ver exactamente adónde llevaría el uso de la fuerza o cómo se la podría dominar o detener. Si algún país no se avenía a la decisión del Consejo, ello crearía una situación nueva que se plantearía a su debido tiempo. En caso de que se presentara una enmienda en términos aceptables a fin de incluir el petróleo, su delegación no se opondría a ella. No debía permitirse que las sanciones crecieran hasta llegar a producir una confrontación económica con terceros países. De ser aprobado el proyecto de resolución, su Gobierno retiraría todas las propuestas anteriores hechas a Rhodesia y, de allí en adelante, no aceptaría convenir en la independencia antes del establecimiento de un régimen de mayoría.

Los representantes de Zambia y Senegal criticaron la actuación del Gobierno del Reino Unido y observaron que las sanciones económicas tomadas hasta ese momento habían fracasado. El Reino Unido proponía entonces otra fórmula ineficaz, que no podría dar resultados, puesto que era dable esperar que Sudáfrica y Portugal no aplicarían las sanciones. El representante de Zambia afirmó que la política británica en África carecía de honradez y dijo que, en lo sucesivo, Zambia solamente admitiría sanciones económicas generales obligatorias. Ambos representantes expresaron la opinión de que el uso de la fuerza era la única manera de resolver el problema de Rhodesia.

Los representantes de Argentina, Estados Unidos y Japón brindaron su apoyo a las medidas solicitadas por el Reino Unido y se declararon partidarios de la inclusión del petróleo entre los productos enumerados.

El 13 de diciembre, Malí, Nigeria y Uganda presentaron enmiendas, luego revisadas el 15 de diciembre, al proyecto de resolución del Reino Unido. Según dichas enmiendas, entre otras cosas, se agregarían dos párrafos nuevos al comienzo de la parte dispositiva. Por el primero, el Consejo resolvía que la continuación del régimen racista e ilegal de Rhodesia del Sur constituía una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Por el segundo, el Consejo deploraba, *a*) la negativa del Reino Unido a utilizar todos los medios, incluso la fuerza, para conseguir la inmediata caída del régimen de Ian Smith en Rhodesia del Sur, y *b*) la actuación de los Estados, especialmente Portugal y Sudáfrica, que habían estado prestando apoyo al régimen rebelde, contraviniendo la resolución 217 (1965), del 20 de noviembre de 1965. Otras enmiendas a la parte dispositiva disponían la adición del carbón y de todos los artículos manufacturados a la lista de productos procedentes de Rhodesia del Sur que los Estados Miembros no debían importar. Según un inciso nuevo, los Estados Miembros prohibían igualmente la participación en su territorio o en territorios bajo su administración o en instalaciones de transporte terrestre o aéreo o por sus nacionales o barcos de su matrícula en el abastecimiento de petróleo o de productos del petróleo a Rhodesia del Sur.

En una serie de párrafos dispositivos adicionales, el Consejo de Seguridad pedía al Reino Unido que retirara toda oferta anteriormente hecha al régimen ilegal y que formulara una declaración categórica de que sólo concedería la independencia a Rhodesia del Sur bajo un régimen mayoritario; invitaba al Gobierno del Reino Unido a que impidiera por todos los medios el transporte del petróleo o productos del petróleo a Rhodesia del Sur; recordaba a los Estados Miembros que el incumplimiento de la resolución por cualquiera de ellos, o su negativa a cumplirla, constituiría una violación del Artículo 25 de la Carta; reafirmaba el derecho inalienable del pueblo de Rhodesia del Sur a la libertad y a la independencia, de conformidad con la declaración contenida en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, y reconocía la legitimidad de su lucha para lograr el disfrute de sus derechos; pedía a todos los Estados que no prestaran ayuda financiera ni ayuda económica de otra índole al régimen racista ilegal de Rhodesia del Sur y pedía al Secretario General que informara al Consejo sobre el progreso del cumplimiento de la resolución, debiendo presentarse el primer informe a más tardar el 1º de marzo.

Los representantes de Argelia, India, Paquistán y la URSS expresaron su apoyo a las enmiendas, si bien varios de ellos consideraron que se necesitaban medidas más fuertes. El representante de Zambia dijo que, aun en el caso de que la propuesta incluyera el petróleo, las sanciones no serían eficaces sin el uso de la fuerza y expresó fuertes críticas contra lo que denominó "la entrega" preparada entre Ian Smith y el Primer Ministro del Reino Unido en Gibraltar. La propuesta del Reino Unido constituía tan sólo una cortina de humo.

El representante del Reino Unido declaró que algunas de las enmiendas africanas originaban nuevos y difíciles problemas, por lo cual su delegación deseaba celebrar consultas al respecto con otros miembros del Consejo. Por lo demás, rechazó las acusaciones del representante de Zambia.

El representante de los Países Bajos brindó apoyo a las propuestas del Reino Unido y destacó los sacrificios

que representaban para el Reino Unido y para otros Gobiernos.

El 14 de diciembre, el Reino Unido presentó una revisión de su proyecto de resolución a fin de que incluyera el suministro a Rhodesia del Sur de cualesquiera otros aviones o vehículos de motor, así como de equipo o materiales para la manufactura, montaje o mantenimiento de aviones o vehículos de motor en Rhodesia del Sur; el envío de cualesquiera artículos especiales a Rhodesia del Sur y otras actividades que promovieran o tendieran a promover la manufactura o el montaje de aviones o vehículos de motor en Rhodesia del Sur.

El representante de Francia, reiterando la posición de su Gobierno, condenó la toma del poder en Rhodesia del Sur por una minoría blanca y declaró que su Gobierno no consideraría los nexos constitucionales entre el Reino Unido y Rhodesia afectados por la llamada declaración de independencia. Las medidas propuestas se aplicarían a un territorio británico y Francia haría todo lo que estuviera en su poder para ayudar al Reino Unido. Francia ya había respondido al llamamiento del Reino Unido con la adopción de algunas medidas económicas. Fuera cual fuese la decisión del Consejo, y aunque se viese imposibilitada de adherirse a ella, Francia habría respondido así al llamamiento formulado por el Reino Unido a la comunidad internacional.

El representante del Reino Unido dijo que muchas de las enmiendas presentadas por las tres Potencias resultaban aceptables para su delegación, especialmente la relativa al petróleo.

El 16 de diciembre, el Consejo procedió a votar sobre las diversas enmiendas y sobre el proyecto de resolución revisado del Reino Unido. Se llevaron a cabo votaciones separadas sobre las diversas enmiendas y sobre los dos incisos del nuevo párrafo 2 de la parte dispositiva. Una enmienda al preámbulo, la enmienda para incorporar un nuevo párrafo 1 de la parte dispositiva, la enmienda para incluir un inciso relativo al suministro de petróleo, la enmienda para insertar un nuevo párrafo en la parte dispositiva con referencia al Artículo 25 de la Carta, la enmienda para incluir un nuevo párrafo en la parte dispositiva sobre la prestación de ayuda financiera y ayuda económica de otra índole y otros dos párrafos adicionales fueron aprobados por 14 votos contra ninguno, y 1 abstención (Francia). La enmienda para intercalar un nuevo párrafo en la parte dispositiva encaminado a reafirmar los derechos inalienables del pueblo de Rhodesia del Sur y reconocer la legitimidad de su lucha para lograr el goce de sus derechos fue aprobada por 12 votos contra ninguno, y 3 abstenciones (Estados Unidos, Francia y el Reino Unido).

Las restantes enmiendas no lograron obtener la mayoría necesaria. El proyecto de resolución del Reino Unido, en su forma enmendada, fue aprobado por 11 votos contra ninguno, y 4 abstenciones (Bulgaria, Francia, Malí, y la URSS), como resolución 232 (1966).

Los representantes de Jordania, Nigeria y Malí expresaron su pesar por el hecho de que sus enmiendas no hubieran sido aprobadas. El representante de Nigeria dijo que en tal forma se había fortalecido la posición del régimen racista. Los representantes de Bulgaria y la URSS consideraron que el texto aprobado era inadecuado. El representante del Reino Unido declaró que

la medida sin precedentes tomada por el Consejo era justa y necesaria.

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL

El 21 de febrero de 1967, el Secretario General presentó un informe sobre el cumplimiento de la resolución 232 (1966) del Consejo de Seguridad. Hasta el 21 de febrero de 1967, había recibido respuestas de 72 Estados a sus notas del 17 de diciembre de 1966 y del 13 de enero de 1967 dirigidas a los Estados Miembros de las Naciones Unidas o miembros de organismos especializados. Las partes substanciales de esas respuestas se reproducían en un anexo al informe.

El informe indicaba que, como podría observarse, la gran mayoría de los Estados respondientes comunicaban la adopción de las medidas que habían estimado necesarias para cumplir las disposiciones de la resolución del Consejo de Seguridad. Varios Estados manifestaban que no tenían relaciones comerciales ni de otro tipo con Rhodesia del Sur y que se abstendrían de tenerlas. Casi todos los demás Estados informaban acerca de las providencias que habían tomado e indicaban que habían iniciado o estaban por iniciar la acción legislativa requerida para garantizar el cumplimiento cabal de la resolución.

Suiza comunicaba que, aunque no podría aceptar por razones de principio, como Estado neutral, las sanciones obligatorias de las Naciones Unidas, había decidido fortalecer las restricciones sobre las importaciones procedentes de Rhodesia del Sur y mantener algunas otras medidas que ya había establecido, de manera que el comercio de Rhodesia del Sur no tendría oportunidad de eludir la política de sanciones de las Naciones Unidas a través del territorio suizo.

Un número considerable de Estados no había enviado aún informes de conformidad con el párrafo 8 de la resolución 232 (1966) del Consejo de Seguridad, según el cual los Estados Miembros de las Naciones Unidas o miembros de organismos especializados deberían informar al Secretario General sobre las medidas que cada uno hubiera tomado de acuerdo con las disposiciones del párrafo 2 de la resolución. Entre ellos se contaban algunos Estados que mantenían un importante comercio con Rhodesia del Sur.

Aunque varios Estados se habían comprometido a suministrar las estadísticas de comercio solicitadas por el Secretario General en su nota del 13 de enero de 1967, no se disponía de información completa sobre el efecto de la aplicación de la resolución 232 (1966) del Consejo de Seguridad sobre el comercio de Rhodesia del Sur, y tal vez no se contara con ella durante algún tiempo. El Secretario General se proponía utilizar los datos proporcionados hasta ese momento por los Estados Miembros de las Naciones Unidas y miembros de los organismos especializados como base para calcular el efecto de las medidas. El documento pertinente sería presentado al Consejo en futura oportunidad.

Como el Secretario General ya había informado al Consejo de Seguridad en su nota del 6 de febrero de 1967, el Ministro de Relaciones Exteriores y el Ministro de Finanzas de Zambia lo habían visitado el 27 de enero y le habían explicado las graves dificultades que experimentaría Zambia como consecuencia del cumplimiento de la resolución. Las dificultades se referían especialmente a los transportes, las comunicaciones, el almacenamiento de combustibles y las posibles y nuevas

fuentes de suministros de algunos productos. Los ministros habían indicado que Zambia recibiría con agrado una misión técnica que estudiara todo el problema sobre el terreno con los diversos ministerios interesados.

En respuesta a dicha solicitud, que había sido discutida en detalle por el Ministro de Finanzas de Zambia con el Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y su personal y con el Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para África, el Administrador del PNUD, con la aprobación del Secretario General, había enviado un grupo de consultores técnicos a Zambia.

El Secretario General señaló especialmente a la atención del Consejo la nota de fecha 15 de febrero de 1967 enviada por el Representante Permanente de Malawi en la que se declaraba que el Gobierno de ese país se sentía obligado a informar al Consejo de Seguridad de que, en virtud de ciertos problemas económicos especiales que Malawi enfrentaba por su situación geográfica, era posible que hubiera que continuar adquiriendo cantidades muy pequeñas de azúcar, carne y productos elaborados de la carne durante un lapso limitado de Rhodesia del Sur. El Gobierno de Malawi preveía que las importaciones de azúcar terminarían hacia el mes de abril de 1967. Las licencias de importación relativas a la carne y a productos elaborados de la carne, especialmente ciertas calidades de carne vacuna, se restringirían al mínimo absoluto necesario. El Gobierno de Malawi había indicado que, aunque no había sido factible en esos momentos prohibir en forma total las importaciones de azúcar, carne y productos elaborados de la carne de Rhodesia del Sur, por la imposibilidad de disponer inmediatamente de otras fuentes de abastecimiento, estaba dispuesto a celebrar consultas según lo previsto en el Artículo 50 de la Carta, si ello se juzgaba apropiado.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Portugal, en su comunicación de fecha 3 de febrero de 1967, no había informado acerca de ninguna medida tomada o sometida a estudio por parte de su Gobierno en cumplimiento de la resolución. Había declarado, en cambio, que su respuesta referente a tales medidas tendría que considerarse a la luz de las respuestas a ciertas preguntas o "puntos de duda" que enunciaba en la comunicación. En una nueva comunicación de la misma fecha, el Ministro había dicho que, como resultado de la puesta en vigor de ciertas medidas mencionadas en las resoluciones 221 (1966) y 232 (1966) del Consejo de Seguridad, la economía de "la provincia portuguesa de Mozambique" estaba sufriendo graves pérdidas financieras y económicas. Había agregado que, "de acuerdo con los términos y los fines del Artículo 50 de la Carta", el Gobierno portugués deseaba que se iniciaran consultas entre el Consejo de Seguridad y las autoridades portuguesas a fin de que pudieran convenirse las modalidades del pago de una indemnización a "la provincia de Mozambique". A tales efectos, había solicitado que el asunto fuera presentado al Consejo de Seguridad para su examen.

En una adición a su informe, presentada el 9 de marzo de 1967, el Secretario General reprodujo las partes sustanciales de otras respuestas.

En especial, señaló a la atención del Consejo una nota de fecha 27 de febrero de 1967 enviada por el Representante Permanente de Botswana, por la cual transmitía un memorando de su Gobierno que expresaba que

ese Gobierno opinaba que, si cumplía la resolución 232 (1966) en forma más amplia de lo que ya lo había venido haciendo, y si el régimen ilegal tomaba represalias, a) prohibiendo toda exportación de Rhodesia del Sur a Botswana; b) prohibiendo la exportación de productos de Botswana a Rhodesia del Sur o a través de ella, y c) impidiendo el suministro a Botswana de gasolina, petróleo y lubricantes procedentes de Lourenço Marques a través de Rhodesia del Sur, sobrevendrían consecuencias económicas perjudiciales para Botswana debido al hecho de que el pueblo de Botswana se vería obligado a soportar un aumento considerable del costo de la vida. Si, además, el régimen ilegal tomaba medidas que redujeran apreciablemente el funcionamiento del ferrocarril dentro de Botswana, su Gobierno enfrentaría una amenaza económica de gravedad máxima. En tales circunstancias, el Gobierno de Botswana consideraba que la aplicación por su parte de cualesquiera sanciones adicionales contra Rhodesia del Sur en virtud de la resolución 232 (1966) plantearía, según los términos del Artículo 50 de la Carta, problemas económicos especiales a Botswana.

F. La política de apartheid del Gobierno de la República de Sudáfrica

INFORMES DEL COMITÉ ESPECIAL

El 27 de junio de 1966, el Comité Especial encargado de estudiar la política de apartheid del Gobierno de la República de Sudáfrica presentó a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad un informe especial sobre la no aplicación del párrafo 3 de la resolución 2054 A (XX) de la Asamblea General, en virtud del cual la Asamblea había decidido ampliar la composición del Comité Especial añadiéndole seis miembros, que serían designados por el Presidente de la Asamblea en conformidad con determinados criterios. De los 19 Estados Miembros a los que se había dirigido el Presidente, 15 indicaron que no estaban dispuestos a participar en la labor del Comité. Sólo un Estado Miembro, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, declaró que estaba dispuesta a participar en la labor del Comité Especial, en tanto que Dinamarca e Italia manifestaron que estarían dispuestas a integrar el Comité si se lograba ampliarlo de conformidad con los criterios enunciados en la resolución de la Asamblea General. El Comité Especial, después de elogiar a la URSS por su respuesta positiva, señaló que la negativa de los otros Estados Miembros, en particular la de los principales asociados comerciales de Sudáfrica, incluidos tres miembros permanentes del Consejo de Seguridad, constituía un precedente inquietante y de graves derivaciones.

El 21 de octubre de 1966, el Comité Especial presentó a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad un informe en el que se hacía una reseña de los acontecimientos ocurridos durante el año precedente y se formulaban algunas recomendaciones. En el mismo se reafirmaba que la aplicación universal de sanciones económicas continuaba siendo el único medio eficaz de lograr una solución específica de la situación creada por la política de apartheid del Gobierno de la República de Sudáfrica. Asimismo, se recomendaba que la Asamblea General reafirmase sus anteriores resoluciones sobre el problema del apartheid, deplorase que los principales asociados comerciales de Sudáfrica, incluidos tres miembros permanentes del Consejo de Seguridad, no hubie-

sen atendido los llamamientos y las peticiones que figuraban en la resolución 2054 A (XX); señalase el agravamiento de la situación en Sudáfrica principalmente como consecuencia de la actitud de dichas Potencias, e hiciese hincapié en la urgencia de resolver el problema del apartheid mediante una acción decisiva efectuada bajo los auspicios del Consejo de Seguridad, vista la situación cada vez más explosiva imperante en el África Meridional. También se recomendaba que se inaugurase, con el patrocinio de las Naciones Unidas, una campaña internacional contra el apartheid, como prueba de la decisión de adoptar todas las medidas adecuadas para lograr la eliminación del apartheid.

En otras recomendaciones, el Comité Especial sugería que se pidiese al Secretario General que organizase una conferencia o un seminario internacional sobre los problemas del apartheid, la discriminación racial y el colonialismo en el África Meridional; que adoptase medidas, en consulta con el Comité Especial, para la oportuna publicación de estadísticas sobre el comercio internacional de Sudáfrica, y que estableciese un centro o una dependencia especial en la Secretaría a efectos de brindar asistencia a los órganos de las Naciones Unidas en la campaña internacional contra el apartheid.

INFORME DEL SEMINARIO SOBRE APARTHEID

El informe del Seminario de las Naciones Unidas sobre el Apartheid, celebrado en Brasilia del 23 de agosto al 4 de septiembre de 1966, de conformidad con la resolución 2060 (XX) de la Asamblea General, de 16 de diciembre de 1965, se presentó a la Asamblea en su vigésimo primer período de sesiones. Además de los participantes de Estados Miembros, asistieron al Seminario siete expertos en apartheid, invitados de acuerdo con los arreglos convenidos entre el Comité Especial encargado de estudiar la política de apartheid del Gobierno de la República de Sudáfrica y la Comisión de Derechos Humanos.

En sus conclusiones, los participantes en el Seminario condenaron unánimemente la política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica y declararon que las Naciones Unidas tenían un interés fundamental en combatir la doctrina del apartheid y debían encontrar con urgencia los medios para conseguir su eliminación. La abrumadora mayoría de los participantes afirmaron también que el apartheid constituía una amenaza para la paz y la seguridad internacionales; que el Consejo de Seguridad debía conceder atención urgente al problema, y que convenía que el Consejo de Seguridad se ocupara del problema "siguiendo procedimientos análogos a los que había aplicado cuando aprobó una resolución sobre Rhodesia del Sur en virtud del Capítulo VII de la Carta". Sin embargo, los participantes de la Argentina, los Estados Unidos de América, el Japón, Nueva Zelanda y el Reino Unido no pudieron admitir que en ese momento existiera una amenaza para la paz internacional en el sentido del Capítulo VII de la Carta.

Entre otras recomendaciones del Seminario, figuró un llamamiento a los Estados Miembros para que aportaran contribuciones al Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Sudáfrica, así como al *Defence and Aid Fund International*, y brindaran su apoyo al programa de las Naciones Unidas de educación y capacitación de sudafricanos, y para que se diesen facilidades de viaje a los refugiados políticos de Sudáfrica y se les proporcionase un empleo adecuado una vez terminada su

educación y capacitación. El Seminario recomendó asimismo la conmemoración anual de la matanza de Sharpeville, con ocasión de la cual podrían recaudarse fondos para ayuda al movimiento contra el apartheid. Sugirió además que se estableciese un centro de información en la Secretaría de las Naciones Unidas destinado a difundir información sobre el apartheid para que el público tuviese mayores conocimientos sobre el problema. El Seminario consideró que sería necesario y útil celebrar en breve plazo una conferencia sobre el Africa Meridional y recomendó que los Estados Miembros, en cooperación con la Organización de la Unidad Africana, organizaran dicha conferencia.

EXAMEN POR LA ASAMBLEA GENERAL

El tema relativo a la política del apartheid del Gobierno de la República de Sudáfrica se incluyó en el programa del vigésimo primer período de sesiones de la Asamblea General por recomendación de la Mesa de la Asamblea. Durante el debate en el seno de la Mesa, el representante de la República de Sudáfrica reiteró la posición de su Gobierno en el sentido de que la inclusión del tema en el programa y su debate en la Asamblea General constituirían una violación del párrafo 7 del Artículo 2 de la Carta.

La discusión del tema en la Comisión Política Especial se inició con las declaraciones iniciales del Relator y del Presidente del Comité Especial. El Relator (representante de Nepal) dijo que el Comité Especial había considerado necesario presentar un informe especial, fechado el 27 de junio de 1966, sobre la no aplicación del párrafo 3 de la resolución 2054 A (XX) de la Asamblea General, en la que se disponía ampliar la composición del Comité mediante la adición de seis miembros, a fin de permitir que los Estados Miembros prestasen la consideración debida al problema. Los detalles que figuraban en el informe del Comité fechado el 21 de octubre indicaban claramente que la política de segregación y discriminación del Gobierno de Sudáfrica se aplicaba con mayor vigor que nunca y que la solución del problema del apartheid seguía distante.

El Presidente del Comité Especial (representante de Guinea) declaró que la situación de Sudáfrica se caracterizaba por cuatro constantes: primero, la persistencia y la rigidez de la política de represión y explotación de las autoridades de Pretoria; segundo, la indiferencia de las Potencias occidentales, que estimulaban a Sudáfrica a continuar su política de apartheid; tercero, la incapacidad de las Naciones Unidas de hallar una solución pacífica del problema, sobre todo por la negativa de los principales asociados comerciales de Sudáfrica a cooperar, y, cuarto, la decisión de los sudafricanos oprimidos de liberarse a todo trance y a cualquier precio. El peligro de un conflicto racial sangriento en la parte meridional de Africa se había agravado en virtud de la actitud de no cooperación adoptada por los principales asociados comerciales de Sudáfrica en la búsqueda de una solución pacífica.

En el debate ulterior, los representantes que usaron de la palabra condenaron la política de apartheid del Gobierno de la República de Sudáfrica como violación de los principios fundamentales de la Carta, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Muchos

de los representantes declararon que las Naciones Unidas no habían podido adoptar medidas eficaces contra la política de apartheid de Sudáfrica debido a la sistemática falta de cooperación de los principales asociados comerciales de Sudáfrica. En tal sentido, afirmaron que, a pesar de la sucesión de resoluciones de la Asamblea General, el comercio de dichos países con Sudáfrica había continuado aumentando, hecho que había permitido a Sudáfrica seguir desafiando a las Naciones Unidas.

El representante de la URSS añadió que los Estados Unidos, el Reino Unido, la República Federal de Alemania y otros miembros de la OTAN habían hecho caso omiso de las resoluciones de la Asamblea General en las que se pedía la adopción de medidas contra Sudáfrica porque su política estaba determinada por sus inversiones y su comercio.

El representante de Italia declaró que el comercio de los países descritos como principales asociados comerciales de Sudáfrica no se limitaba únicamente a las transacciones con ese país. Tales asociados comerciales también eran las principales Potencias comerciales del mundo, y la situación se evaluaría con mayor exactitud si se expresara el comercio de cada país con Sudáfrica como porcentaje de su comercio exterior total.

La mayoría de los miembros, apoyando las recomendaciones del Seminario sobre Apartheid y las del Comité Especial, declararon que debía iniciarse bajo los auspicios de las Naciones Unidas una campaña internacional destinada a combatir la doctrina del apartheid. Sostuvieron además que las Naciones Unidas se hallaban directamente interesadas en la lucha contra el apartheid y debían encontrar urgentemente el medio de eliminarlo.

Algunos representantes afirmaron asimismo que la política de apartheid constituía una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, y que era indispensable que el Consejo de Seguridad adoptase medidas con arreglo a las disposiciones del Capítulo VII de la Carta. Los representantes de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia apoyaron la recomendación del Comité Especial de que la Asamblea General señalase a la atención del Consejo de Seguridad el hecho de que la situación imperante en Sudáfrica constituía una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, que era indispensable tomar providencias de acuerdo con el Capítulo VII de la Carta a fin de resolver el problema y que las sanciones económicas universalmente aplicadas constituirían el único medio de lograr una solución pacífica.

El representante de Irlanda declaró que la política de sanciones no era apropiada en todos los casos y que debía examinarse la posibilidad de aplicar sanciones económicas con sumo cuidado, teniendo en cuenta su efectividad, los sacrificios que podrían suponer y las consecuencias de su posible fracaso. Si el Consejo de Seguridad había de adoptar medidas obligatorias con arreglo al Capítulo VII de la Carta, sería menester que estudiase, de conformidad con el Artículo 48, si se requeriría de todos los Estados Miembros que participasen y, de conformidad con el Artículo 49, si se requeriría de los Miembros de las Naciones Unidas que se prestasen mutua ayuda, financiera o de otra índole, a efectos de llevar a cabo dichas sanciones. En consecuencia, toda sanción impuesta por las Naciones Unidas tendría

que ser planeada cuidadosamente, para poder alcanzar el éxito.

El representante de los Estados Unidos declaró que su Gobierno albergaba serias reservas en cuanto a la imposición de sanciones económicas en las circunstancias del caso y agregó que todavía no se habían agotado las posibilidades de una solución pacífica, y que no se deberían orientar los esfuerzos hacia la repetición estéril de soluciones simplistas. Declaró además que los Estados Unidos continuaban rechazando la conclusión de que no había otra posibilidad que la marcha hacia el desastre en Sudáfrica y siempre estarían dispuestos a adherirse a una acción eficaz y adecuada dentro de los términos de la Carta destinada a asegurar la observancia de las obligaciones asumidas por todos los Estados Miembros.

El 8 de diciembre, el representante de Guinea presentó, en nombre de 43 Estados Miembros, un proyecto de resolución con arreglo al cual la Asamblea General: 1) condenaba la política de apartheid practicada por el Gobierno de Sudáfrica como un delito contra la humanidad; 2) reafirmaba que la situación en Sudáfrica y la situación explosiva resultante del África Meridional seguían constituyendo una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales; 3) deploraba la actitud de los principales países que comerciaban con África, tres de los cuales eran miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que, por negarse a cooperar en la aplicación de las resoluciones de la Asamblea y a integrar el Comité Especial, y por su creciente colaboración con el Gobierno sudafricano, estimulaban a éste a persistir en su política racial; 4) señalaba a la atención de los principales países que comerciaban con Sudáfrica el hecho de que su creciente colaboración con el Gobierno sudafricano, a pesar de los llamamientos repetidos de la Asamblea General, había agravado el peligro de un conflicto violento, y los invitaba a adoptar urgentes medidas para poner fin a su colaboración con Sudáfrica y a facilitar una acción eficaz bajo los auspicios de las Naciones Unidas con objeto de eliminar el apartheid; 5) exhortaba a todos los Estados: a) a que acataran por entero las decisiones debidamente adoptadas por el Consejo de Seguridad que los invitaban solemnemente a poner fin de inmediato a la venta y entrega a Sudáfrica de armas, municiones de todas clases y vehículos militares, así como de equipo y materiales destinados a su fabricación y conservación; b) a que desalentaran inmediatamente el establecimiento de relaciones económicas y financieras más estrechas con Sudáfrica, en particular en lo referente a las inversiones y el comercio, así como a la concesión de préstamos por sus bancos al Gobierno de Sudáfrica o a empresas sudafricanas, y a que notificasen de las medidas adoptadas a este respecto al Secretario General y al Comité Especial; c) a que considerasen la posibilidad de prestar apoyo político, moral y material a todos los que combatían la política de apartheid, de conformidad con las recomendaciones del Seminario sobre apartheid; d) a que contribuyesen adecuada y generosamente a los programas humanitarios que tenían por objeto ayudar a las víctimas del apartheid; e) a que se esforzasen por dar asilo, facilidades de viaje y acceso a la enseñanza, así como posibilidades de empleo, a los refugiados de Sudáfrica; 6) pedía al Secretario General: a) que organizase lo antes posible, en consulta con el Comité Especial encargado de estudiar la política de apartheid del Gobierno de la República de Sudáfrica y con el

Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, una conferencia o seminario internacional para examinar los problemas del apartheid, la discriminación racial y el colonialismo en África Meridional, y que presentase el informe de tal conferencia o seminario a la Asamblea General en su vigésimo segundo período de sesiones; b) que adoptase medidas, en consulta con el Comité Especial, para asegurar la publicación periódica de estadísticas relativas al comercio internacional de Sudáfrica; c) que prestase al Comité Especial toda la asistencia necesaria para que pudiese llevar a conocimiento del público cualquier estrechamiento de los vínculos económicos y financieros entre otros Estados y Sudáfrica y que informase al respecto; d) que entablase consultas con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento con miras a lograr que esa institución se ajustara a las disposiciones de las resoluciones 2105 (XX) y 2107 (XX) de la Asamblea General, así como de la nueva resolución, y que informase a la Asamblea General en su vigésimo segundo período de sesiones; e) que proporcionase al Comité Especial todos los medios necesarios para cumplir eficazmente su tarea, incluso medios financieros adecuados; 7) señalaba una vez más a la atención del Consejo de Seguridad el hecho de que la situación en Sudáfrica constituía una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, de que para resolver el problema del apartheid era indispensable adoptar las medidas previstas en el Capítulo VII de la Carta, y de que el único medio de lograr una solución pacífica eran las sanciones económicas universales obligatorias; 8) invitaba al Comité Especial a que siguiese adoptando todas las medidas necesarias para ejecutar más eficazmente su mandato y, a tal fin, lo autorizaba a: a) reunirse fuera de la Sede o a enviar en misión a un subcomité, para entablar consultas con los organismos especializados, las organizaciones regionales, los Estados y las organizaciones no gubernamentales sobre los medios de promover la campaña internacional contra el apartheid, y para examinar los distintos aspectos del problema del apartheid; b) a proseguir e intensificar la cooperación con el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, con miras a examinar las actividades de los grupos económicos extranjeros en Sudáfrica que obstaculizaban los esfuerzos desplegados para poner fin al apartheid, a la discriminación racial y al colonialismo en dicha región; 9) pedía al Secretario General y a los organismos especializados que prestasen la ayuda apropiada para que las personas competentes de nacionalidad sudafricana que eran víctimas del apartheid fuesen empleadas en sus secretarías y sus programas, y 10) invitaba a los organismos especializados, a las organizaciones regionales, a los Estados y a las organizaciones no gubernamentales a cooperar con el Secretario General y con el Comité Especial en el cumplimiento de la tarea que se les asignaba en virtud de la nueva resolución.

La Comisión Política Especial aprobó el proyecto de resolución por 87 votos contra 1 (Portugal), y 12 abstenciones. El 16 de diciembre, la Asamblea General, por 84 votos contra 2 (Portugal y Sudáfrica), y 13 abstenciones, aprobó como resolución 2202 A (XXI) el texto recomendado por la Comisión Política Especial.

Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Sudáfrica

En cumplimiento de la resolución 2054 B (XX) de la Asamblea General, de 15 de diciembre de 1965, se estableció el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Sudáfrica para conceder subvenciones a organizaciones benéficas, gobiernos de países que hubieran acogido a refugiados de Sudáfrica y otros órganos competentes, a fin de: prestar asistencia jurídica a personas acusadas en virtud de leyes discriminatorias y represivas de Sudáfrica; socorrer a los familiares a cargo de personas perseguidas por el Gobierno de Sudáfrica por actos resultantes de su oposición a la política del apartheid; instruir a presos, a sus hijos y a otros familiares a cargo, y socorrer a refugiados procedentes de Sudáfrica.

El 1º de diciembre de 1966, el Secretario General presentó a la Asamblea General un informe sobre las operaciones del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Sudáfrica y transmitió un informe del Comité de Síndicos del Fondo. El Comité de Síndicos declaró que el Fondo Fiduciario había recibido hasta esa fecha contribuciones por valor de 145.910 dólares y promesas de contribuciones por un importe de 10.500 dólares procedentes de 22 gobiernos, y contribuciones por la suma de 363 dólares procedentes de organizaciones no gubernamentales y de particulares. Se habían concedido siete subvenciones, por un total de 110.400 dólares, con cargo al Fondo. El Comité había recibido asimismo comunicaciones de gobiernos en las que se le informaba de contribuciones por 111.000 dólares efectuadas directamente a las organizaciones no gubernamentales dedicadas a prestar socorro y asistencia.

El Presidente del Comité de Síndicos, hablando en la Comisión Política Especial de la Asamblea General, reiteró su llamamiento en favor de contribuciones generosas al Fondo Fiduciario. Dijo que la finalidad del Fondo no era resolver problemas políticos y sociales, que competían a otros órganos de las Naciones Unidas, sino satisfacer necesidades humanitarias limitadas, claras y urgentes. Sin embargo, la asistencia prestada a las víctimas del apartheid mediante los esfuerzos combinados de la comunidad internacional era sin duda un apoyo moral para todos los que se esforzaban por lograr la igualdad racial y la justicia social, tanto dentro como fuera de Sudáfrica.

El 9 de diciembre de 1966, Argelia, Bolivia, Dinamarca, Etiopía, Malasia y Yugoslavia presentaron un proyecto de resolución con arreglo al cual la Asamblea General: 1) felicitaba al Secretario General y al Comité de Síndicos por sus esfuerzos en acrecentar el Fondo; 2) expresaba su agradecimiento a los gobiernos, organizaciones y particulares que habían contribuido al Fondo; y 3) reiteraba su exhortación a los gobiernos, organizaciones y particulares a que contribuyesen generosamente al Fondo.

El 12 de diciembre, la Comisión Política Especial aprobó el proyecto de resolución por 99 votos contra ninguno, y 2 abstenciones, y el 16 de diciembre lo aprobó la Asamblea General por 99 votos contra 1, y 1 abstención, como resolución 2202 B (XXI).

Al 15 de junio de 1967, un total de 28 Estados Miembros y otros donantes habían aportado al Fondo más de 387.500 dólares. Además, nueve Estados Miembros habían prometido contribuciones por un total de 87.000 dólares. Por recomendación del Comité de Síndicos,

se han concedido ocho subsidios, por un valor de 138.400 dólares.

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE APARTHEID, DISCRIMINACIÓN RACIAL Y COLONIALISMO EN EL AFRICA MERIDIONAL

En cumplimiento del inciso a) del párrafo 6 de la resolución 2202 A (XXI) de la Asamblea General, el Secretario General celebró consultas con el Comité Especial encargado de estudiar la política de apartheid del Gobierno de la República de Sudáfrica y con el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales respecto de la organización de una conferencia o seminario internacional para examinar los problemas del apartheid, de la discriminación racial y del colonialismo en el Africa meridional.

Por recomendación de los dos Comités, el Secretario General anunció que el seminario se celebraría en julio de 1967.

PROGRAMA DE ENSEÑANZA Y CAPACITACIÓN PARA SUDAFRICANOS

El programa de enseñanza y capacitación para sudafricanos, establecido en cumplimiento del párrafo 11 de la resolución 191 (1964) del Consejo de Seguridad, ha recibido hasta la fecha contribuciones voluntarias por un total de más de 376.000 dólares procedentes de 13 Estados Miembros, además de la suma de 237.000 dólares que aportaron cinco Estados Miembros para un programa provisional en 1965. Otros tres Estados Miembros han prometido contribuciones por casi 113.000 dólares. Se concedieron 100 becas para el año lectivo 1966-1967.

En cumplimiento de las disposiciones de la resolución 2235 (XXI) de la Asamblea General, de 20 de diciembre de 1966, el Secretario General tiene en estudio la cuestión de la consolidación e integración de este programa con los programas especiales de enseñanza y capacitación para el Africa Sudoccidental del programa especial de capacitación para los Territorios bajo administración portuguesa.

G. Denuncia de la República Democrática del Congo contra Portugal

En una carta de 21 de septiembre de 1966, dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad, la República Democrática del Congo denunciaba que Portugal favorecía la utilización de sus territorios africanos de Angola y Cabinda como bases de operaciones para los mercenarios reclutados en países europeos por la oposición con el fin de derrocar a las autoridades legítimas del Congo. La República Democrática del Congo pedía al Consejo de Seguridad se reuniera y exhortara a Portugal a poner término a su agresión.

El 24 de septiembre Portugal se quejó de que ese día unas cuatrocientas personas habían atacado su embajada en Kinshasa y habían prendido y herido al encargado de negocios, llevándolo luego a un lugar desconocido. Se había incendiado la embajada y se habían saqueado sus archivos. En los días precedentes las emisoras de radio y otros órganos de información congoleños habían

lanzado llamamientos e incitaciones a la violencia contra Portugal y la comunidad portuguesa residente en el Congo. El Gobierno portugués había decidido señalar estos hechos al Consejo de Seguridad y le pedía que exhortara al Gobierno congolés a tomar todas las medidas necesarias para proteger la vida y los bienes de los nacionales portugueses y liberar al personal de la embajada secuestrado en territorio congoleño.

El 30 de septiembre el Consejo de Seguridad decidió incluir el punto en el orden del día. Invitó a los representantes de Portugal, de la República Democrática del Congo, de la República Unida de Tanzania, de la República Centroafricana, de Burundi y del Congo (Brazzaville) a participar sin voto en las deliberaciones. El Consejo estudió el asunto en cuatro sesiones, celebradas entre el 30 de septiembre y el 14 de octubre de 1966.

Durante las deliberaciones del Consejo el representante de la República Democrática del Congo acusó a Portugal de haberse injerido en los asuntos internos de su país al autorizar la utilización de Angola como base de operaciones contra su país. El ex Primer Ministro, Moise Tshombé, reclutaba mercenarios para dar otro golpe en Katanga, y los adiestraba en las bases de Angola cerca de la frontera congoleña. Se habían recibido informes a este respecto de distintas fuentes, principalmente de los gobiernos de algunos países amigos de Europa occidental y de antiguos mercenarios del Congo. El descubrimiento de un campamento de mercenarios en el Ardèche por las autoridades francesas había confirmado esas informaciones. Se sabía también que grupos de hombres-ranas se adiestraban en otros campamentos de Francia para entrar en acción en el Congo. Del testimonio de los mercenarios detenidos en Francia se desprendía que se había elegido a Angola para establecer una base de mercenarios. Portugal ayudaba a los mercenarios porque el Gobierno congoleño había reconocido *de jure* al Gobierno revolucionario de Angola en el exilio. El Gobierno del Congo venía al Consejo de Seguridad a señalar a la atención mundial la amenaza a la paz y la seguridad que constituía la injerencia de Portugal en sus asuntos internos.

El representante de Portugal declaró que en Angola no había mercenarios, campamentos ni material bélico destinados a perturbar el orden en la República Democrática del Congo ni en ninguna otra parte. Acusar a Portugal de hostilidad y mala voluntad representaba una gran injusticia que procedía, irónicamente, de un gobierno que permitía en su territorio la existencia de bases para operaciones contra Portugal. Cualesquiera que fueran las opiniones políticas del Congo, no tenía derecho a perturbar el orden de Angola, en la que la soberanía de Portugal era un hecho. En cuanto se había presentado la demanda congoleña, la radio y otros medios de información de Kinshasa habían iniciado una campaña de odio contra Portugal, que condujo a los lamentables acontecimientos del 24 de septiembre, durante los cuales fue atacada la embajada portuguesa. El Gobierno portugués consideraba prudente presentar la cuestión al Consejo de Seguridad y pedir que se recordara al Gobierno congoleño su obligación de proteger la vida y los bienes de los nacionales portugueses que viven en el Congo. Portugal estaba dispuesto a permitir una investigación del cargo según el cual había bases de mercenarios en Angola, si la República Democrática del Congo estaba dispuesta a demostrar igual buena voluntad y cooperación y permitía que se

realizara una investigación semejante de las bases anti-portuguesas en su territorio.

El representante de la República Democrática del Congo replicó que los nacionales portugueses del Congo vivían en paz y que no habían sido objeto de ninguna amenaza. El Gobierno congolés había advertido que la aventura en que participaban los mercenarios de Angola era peligrosa, que amenazaba con desatar la furia del pueblo y podía impedir que el Gobierno cumpliera su obligación de proteger a los ciudadanos extranjeros. Declaró también que era evidente que su país nunca llegaría a un acuerdo con Portugal sobre la ayuda prestada a los patriotas angolanos. Sólo cuando Portugal iniciara el proceso de descolonización estarían en condiciones de entenderse.

El 13 de octubre Jordania, Mali, Nigeria y Uganda presentaron un proyecto de resolución en el cual el Consejo de Seguridad, entre otras cosas, 1) encarecía al Gobierno de Portugal que, de conformidad con su propia declaración, no permitiera que mercenarios extranjeros utilizaran a Angola como base de operaciones para inmiscuirse en los asuntos internos de la República Democrática del Congo; 2) exhortaba a todos los Estados a que se abstuvieran o desistieran de intervenir en los asuntos internos de la República Democrática del Congo; y 3) pedía al Secretario General que siguiera atentamente el cumplimiento de esa resolución.

Al presentar el proyecto de resolución, el representante de Malí dijo que había sido preparado por el grupo africano de las Naciones Unidas y contaba con el apoyo de los colegas asiáticos. Dijo que debía condenarse y proscribirse el reclutamiento de expatriados para atentar contra la ley y el orden.

El representante de Nigeria dijo que su delegación no tenía dificultad en aceptar los alegatos congoleños. Era dudoso que una investigación llegase a aclarar exactamente la situación de las bases. Pedía excusa a las naciones africanas por la moderación del primer párrafo de la parte dispositiva del proyecto de resolución. Por deferencia hacia ciertos miembros que no estaban dispuestos a condenar a Portugal sin pruebas de que tenía bases y mercenarios en Angola, los autores no habían incluido un párrafo que condenara a Portugal; ello no quedaba decir que no consideraran justificadas las acusaciones.

El representante de Portugal dijo que el proyecto de resolución no obedecía al fondo de la reclamación congoleña, sino a otras razones. Tratábase en él de premiar al Congo en términos que eran discriminatorios contra Portugal; dirigía instrucciones a Portugal para que no proporcionara a los mercenarios de Angola bases que pudieran ser utilizadas en acciones contra el Congo y hablaba en su preámbulo de "Angola bajo administración portuguesa", expresión que Portugal impugnaba categóricamente. No se trataba de la soberanía portuguesa en Angola. Aunque el proyecto tomaba nota de su declaración en el sentido de que no había mercenarios, campamentos ni material de guerra en Angola destinados a perturbar el orden del Congo, pedía a Portugal que no hiciera lo que este país ya había declarado que no hacía. El proyecto invertía los hechos y exhortaba a la parte agraviada a que no agravara al delincuente. No se trataba de armonizar y conciliar las relaciones entre los dos países,

sino que se juzgaba a Portugal con parcialidad. El proyecto de resolución hacía caso omiso de toda justicia y equidad y tenía el único propósito de prestar un apoyo injustificado a los acusadores. El Gobierno de Portugal no podía aceptar ese proyecto de resolución, que, si se aprobaba, tendría graves consecuencias, de las que Portugal declinaba toda responsabilidad.

Los representantes de Burundi, el Congo (Brazzaville), la República Centroafricana y la República Unida de Tanzania suscribieron todas las acusaciones de la República Democrática del Congo contra Portugal. El representante de Tanzania dijo que una agresión injustificada de Portugal contra el territorio congoleño era un ataque a su país y a todos los demás Estados africanos independientes.

Los representantes de Bulgaria y de la URSS suscribieron la opinión de que ciertos aliados de Portugal, y la OTAN misma, desempeñaban un papel en la formulación y ejecución de la política de crear divisiones internas y luchas fratricidas en los Estados africanos recién emancipados.

Los representantes de los Países Bajos y del Reino Unido manifestaron que lo mejor y más prudente, para tomar una decisión, era investigar imparcialmente los hechos aducidos.

Los representantes de Francia, el Reino Unido y Nueva Zelandia dijeron que no apoyarían el proyecto de resolución si no se votaba por separado sobre el primer párrafo de la parte dispositiva.

Los representantes del Japón, Nueva Zelandia, los Países Bajos y Francia lamentaron el ataque contra la embajada portuguesa en Kinshasa.

El 14 de octubre de 1966 el Consejo de Seguridad votó sobre el primer párrafo de la parte dispositiva del proyecto de resolución. El párrafo quedó aprobado por 11 votos contra ninguno y 4 abstenciones. Luego el proyecto de resolución en conjunto fue aprobado por unanimidad como resolución 226 (1966).

H. La situación en la República Dominicana

En 1966 el Secretario General, de conformidad con las resoluciones que el Consejo de Seguridad tomó el 14 y 22 de mayo de 1966, siguió informando al Consejo de la situación de la República Dominicana, basándose en la información recibida de la Oficina de su Representante Especial en la República Dominicana. Los informes se referían, durante el período del 16 de junio al 21 de septiembre de 1966, a los resultados definitivos de las elecciones nacionales celebradas en la República Dominicana el 1° de junio de 1966; la toma de posesión del nuevo gobierno y el retiro de la Fuerza Interamericana de Paz, que quedó concluido el 21 de septiembre de 1966. El Consejo recibió también de la Organización de los Estados Americanos varias comunicaciones al respecto.

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL

En un informe publicado el 22 de junio de 1966 el Secretario General comunicó al Consejo de Seguridad los resultados definitivos de las elecciones nacionales del 1° de junio de 1966, según datos de la Junta Electoral Central de Santo Domingo, del 21 de junio. Eran los

siguientes: Sr. Joaquín Balaguer, 769.265 votos; Sr. Juan Bosch, 525.230 y Sr. Rafael Bonnelly, 39.535 votos.

En una declaración publicada ese día, el Presidente de la Junta Electoral Central señalaba que el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Revolucionario Social Cristiano impugnaban los resultados de las elecciones en 189 colegios electorales, que sumaban 68.919 votos. La declaración añadía que, como el total de votos impugnados no modificaba sustancialmente los resultados de la elección, la Junta declaraba elegidos al Sr. Balaguer y al Sr. Francisco Augusto Lora para los cargos de Presidente y Vicepresidente. En las elecciones para el Congreso, el Partido Reformista había obtenido veintidós puestos en el Senado y cuarenta y siete en la Cámara de Diputados y el Partido Revolucionario Dominicano cinco puestos en el Senado y veintiséis en la Cámara de Diputados.

En una adición publicada el 25 de junio el Secretario General anunció que el 22 de junio la Junta Electoral Central había entregado al Sr. Balaguer y al Sr. Lora los necesarios certificados de confirmación de la elección.

COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, DE 24 DE JUNIO DE 1966

El 24 de junio el Secretario General de la OEA transmitió al Consejo de Seguridad el texto de una resolución aprobada ese día por la Décima Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Americanos. La resolución consideraba que los propósitos fundamentales de la Décima Reunión de Consulta se habían cumplido plenamente al celebrarse las elecciones populares en la República Dominicana, cuyos resultados habían dado al país un gobierno constitucional y democrático, y disponía que el retiro de la Fuerza Interamericana de Paz se iniciaría antes del 1° de julio de 1966 y se efectuaría en 90 días. En la resolución también se pedía la Comisión *Ad Hoc* que, de acuerdo con el Gobierno Dominicano, diera a la Fuerza las instrucciones necesarias concernientes a las fechas y a las formas de llevar a efecto su retiro.

OTROS INFORMES DEL SECRETARIO GENERAL

En una adición a su informe, publicada el 30 de junio, el Secretario General hizo saber al Consejo que, de conformidad con la resolución aprobada el 24 de junio por la Décima Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos, el 28 de junio habían comenzado a retirarse de la República Dominicana contingentes de la Fuerza Interamericana de Paz. Según un parte de 28 de junio, del Cuartel General de la Fuerza de Paz en Santo Domingo, las siguientes retiradas de tropas y pertrechos se escalonaban en un período de tres meses. En el parte se señalaba que, desde mayo de 1965, los números de la Fuerza se habían reducido de 23.000 hombres a unos 8.000 hombres.

El Secretario General informó al Consejo de que el Gobierno Provisional había decretado el 29 de junio que se reintegraran a las fuerzas armadas de la República los oficiales y soldados en activo el 24 de abril de 1965, con el grado que tenían en esa fecha. La reincorporación tenía que efectuarse con arreglo a la lista oficial de tropas acantonadas en el "Campamento 27 de Febrero".

El 2 de julio el Secretario General comunicó al Consejo que la víspera el Sr. Balaguer y el Sr. Lora habían prestado juramento, como Presidente y Vicepresidente de la República Dominicana, ante el Presidente de la Asamblea Nacional. En el discurso inaugural el Sr. Balaguer declaró que el país volvía a un régimen de derecho y que no se permitiría a nadie vivir fuera de la legalidad. Presentó una política de austeridad, destinada a dar bases más firmes a la estructura económica, administrativa y financiera de la República. Su Gobierno apoyaría a la OEA y trabajaría dentro de ella para cuidar de que nunca se volviera a violar la soberanía por tropas extranjeras. El Gobierno, aunque tenía la intención de actuar energicamente contra los extremistas que trataran perturbar el orden, protegería a los opositores contra la persecución y cuidaría de que los símbolos de la pasada opresión desaparecieran para siempre de la vida dominicana.

En el período del 3 de agosto al 21 de septiembre de 1966 el Secretario General, basándose en información recibida de la oficina de su Representante en Santo Domingo, presentó al Consejo diez informes con datos detallados sobre el retiro de la Fuerza Interamericana de Paz de la República Dominicana. En los informes se indicaba que el retiro de contingentes y de otro personal militar y pertrechos de la Fuerza se escalonaba en el período de 90 días dispuesto por la OEA en la resolución de 24 de junio.

El 21 de septiembre de 1966, el Secretario General informó al Consejo de que con la partida, en esa fecha, de las restantes tropas y del Comandante de la Fuerza Interamericana de Paz, General Alvaro Alves da Silva Braga, del Brasil, y del Segundo Comandante de la Fuerza, General Robert Linvill, de los Estados Unidos de América, había quedado concluido el retiro de la Fuerza.

COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 1966

El 20 de septiembre de 1966 el Secretario General Adjunto de la OEA transmitió, para información del Consejo de Seguridad, el texto del informe de la Comisión *Ad Hoc* de la OEA a la Décima Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, relativo al cumplimiento de la resolución aprobada el 24 de junio por la OEA sobre el retiro de la Fuerza Interamericana de Paz de la República Dominicana. En el informe se expresaba, entre otras cosas, la opinión que le merecía a la Comisión el papel desempeñado por la Fuerza en los acontecimientos de la República Dominicana.

COMUNICACIÓN DEL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

En carta de 13 de octubre de 1966 el Sr. Gilberto Herrera Báez, Ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, expresaba el reconocimiento de su país a las Naciones Unidas por el empeño en que se lograra la paz y la concordia en la República Dominicana y manifestaba que su Gobierno estimaba que se habían alcanzado los objetivos señalados por el Consejo de Seguridad en la resolución 203 (1965), del 14 de mayo de 1965, y que, por tanto, era aconsejable el retiro de la misión de las Naciones Unidas en la República Dominicana.

OTRO INFORME DEL SECRETARIO GENERAL

En un informe al Consejo de Seguridad, de 14 de octubre de 1966, el Secretario General señaló diversos acontecimientos ocurridos en la República Dominicana y, entre ellos, la toma de posesión, el 1° de julio de 1966, del Gobierno recientemente elegido, del Sr. Joaquín Balaguer, y la terminación, el 21 de septiembre, del retiro de la Fuerza Interamericana de Paz, y declaraba que, en vista de esas circunstancias, empezaba a tomar disposiciones para el retiro de la misión de las Naciones Unidas en la República Dominicana, que esperaba se concluyera en breve plazo.

El 22 de octubre de 1966 la misión de las Naciones Unidas en la República Dominicana, establecida de conformidad con la resolución 203 (1965) del Consejo de Seguridad, dio fin a sus actividades y se retiró de Santo Domingo.

I. Representación de China en las Naciones Unidas

A solicitud de Albania, Argelia, Camboya, el Congo (Brazzaville), Cuba, Guinea, Malí, Rumania y Siria se incluyó en el programa del vigésimo primer período de sesiones de la Asamblea General un tema titulado "Restitución de los legítimos derechos de la República Popular de China en las Naciones Unidas".

En el memorando explicativo adjunto a su carta de 29 de agosto de 1966, los representantes de esos países indicaban que la cuestión de la restitución de los legítimos derechos de la República Popular de China en las Naciones Unidas era vital para el futuro de la Organización. La negativa a restablecerlos, basada en consideraciones de carácter exclusivamente político, constituía una gravísima denegación de justicia y era incompatible con uno de los principios fundamentales de las Naciones Unidas, el de la universalidad; la República Popular de China deseaba con todas sus fuerzas la paz y la coexistencia pacífica con todos los países, y siempre había manifestado su apoyo a los pueblos en lucha contra el colonialismo. Aunque los Estados Unidos acusaban continuamente a la República Popular de China de rechazar la cooperación internacional y la presentaban como enemiga irreconciliable de aquellos países que no compartían su ideología, los hechos demostraban sin lugar a dudas que la República Popular de China siempre había respetado la independencia y la dignidad de los demás países. No podía resolverse ningún problema internacional importante sin la participación de China, hecho que quedaba confirmado por haber adquirido ese país la categoría de Potencia nuclear. Por tales motivos, la única actitud justa y realista sería abandonar la política de "cuarentena" que ciertas Potencias habían seguido durante más de 16 años con la República Popular de China. La restitución de los legítimos derechos de ese país en las Naciones Unidas y en todos sus órganos auxiliares y el reconocimiento de sus representantes como únicos representantes legítimos de China en las Naciones Unidas eran absolutamente necesarios para robustecer la autoridad y el prestigio de la Organización. Esto implicaba la expulsión inmediata de los representantes de Chiang Kai-shek del lugar que ocupaban ilegalmente. El aplazamiento de tal medida sólo

serviría para debilitar aún más la autoridad de las Naciones Unidas.

La Asamblea General examinó el tema en doce sesiones plenarias, del 18 al 29 de noviembre de 1966.

Se le presentaron tres proyectos de resolución sobre el tema. El primero un texto sobre procedimiento que sometieron Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Colombia, Estados Unidos de América, Filipinas, Gabón, Italia, Japón, Madagascar, Nicaragua, Nueva Zelanda, Tailandia y Togo, establecía que la Asamblea afirmaría nuevamente la validez de la decisión adoptada por resolución 1668 (XVI), de 15 de diciembre de 1961, en el sentido de que, conforme al Artículo 18 de la Carta de las Naciones Unidas, toda propuesta destinada a modificar la representación de China era una cuestión importante.

El segundo proyecto fue presentado por Albania, Argelia, Camboya, Congo (Brazzaville), Cuba, Guinea, Malí, Mauritania, Paquistán, Rumania y Siria. Por este proyecto, la Asamblea General decidía restituir a la República Popular de China todos sus derechos y reconocer a los representantes de su Gobierno como únicos representantes legítimos de China en las Naciones Unidas y expulsar inmediatamente a los representantes de Chiang Kai-shek del puesto que ocupaban ilegalmente en las Naciones Unidas y en todos los organismos relacionados con ellas.

Por el tercer proyecto de resolución, que fue presentado por Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, Italia y Trinidad y Tabago, la Asamblea decidiría: 1) establecer un comité de Estados Miembros que sería nombrado por la Asamblea General, con el mandato de investigar y estudiar la situación en todos sus aspectos, a fin de presentar a la Asamblea General, en su vigésimo segundo período de sesiones, las recomendaciones pertinentes para lograr una solución equitativa y práctica de la cuestión de la representación de China en las Naciones Unidas, de conformidad con los principios y propósitos de la Carta, y 2) hacer un llamamiento a todos los gobiernos interesados para que ayudaran al Comité en su búsqueda de tal solución.

En el debate general y en la explicación de voto tomaron parte los representantes de sesenta y nueve Estados. En el caso de la cuestión de procedimiento, los autores del proyecto de resolución de las quince Potencias presentaron, entre otros, los siguientes argumentos: que la cuestión de la admisión de la República Popular de China en las Naciones Unidas era de carácter político y evidentemente de importancia trascendental y, por lo tanto, en virtud de la Carta era necesaria una mayoría de dos tercios para decidirla; que la Asamblea ya había adoptado una decisión explícita a tal efecto en su resolución 1668 (XVI), aprobada en 1961, y había afirmado que tal decisión seguía siendo válida en 1965 al adoptar la resolución 2025 (XX); que la cuestión era importantísima porque entrañaba el cambio de la representación de un miembro permanente del Consejo de Seguridad, uno de los cinco Miembros de las Naciones Unidas a los cuales se les reconocían responsabilidades especiales en virtud de la Carta, y que la distinción entre "cuestiones de procedimiento" y "todas las demás cuestiones" hecha por quienes opinaban que la cuestión de la representación de China era de procedimiento y, por lo tanto, no era cuestión importante al tenor del Artículo 18 de la

Carta, sólo era pertinente para el Consejo de Seguridad, mientras que en la Asamblea la distinción era entre "cuestiones importantes" y "otras cuestiones", y una cuestión de procedimiento no era necesariamente una cuestión sin importancia. También se aludió a la resolución 396 (V), de 14 de diciembre de 1950, por la cual la Asamblea decidió que siempre que más de una autoridad afirmara ser el gobierno con derecho a representar a un Estado Miembro, y la cuestión llegase a originar divergencias en las Naciones Unidas, se consideraría teniendo en cuenta los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y las circunstancias de cada caso.

Los representantes que se oponían al proyecto de resolución sobre procedimiento alegaban que sólo era una maniobra para demorar la restitución de los derechos de la República Popular de China en las Naciones Unidas; que la cuestión no era la admisión de un nuevo Miembro, sino lograr que se acreditase a los auténticos representantes de un Estado que ya era Miembro de las Naciones Unidas, y, por lo tanto, no podía considerarse como importante dentro del significado del Artículo 18 de la Carta, y que en todos los demás casos en que un Estado Miembro había tenido un cambio de gobierno y el nuevo gobierno ejercía una autoridad efectiva, se había acordado la representación según el reglamento para aprobar las credenciales de los representantes.

Los argumentos esgrimidos por los que apoyaban el proyecto de resolución de las once Potencias, en que se pedía la admisión de los representantes de la República Popular de China, incluían los siguientes puntos: que el Gobierno de la República Popular de China tenía y había tenido durante mucho tiempo el control efectivo de todo el país, salvo Taiwan, y, por lo tanto, era el único que podía pretender representar al pueblo chino; que había solamente una China, que sólo podía ser representada en las Naciones Unidas por un gobierno, y que mantener lo contrario sería crear un precedente peligroso; que la República Popular de China era un Estado democrático y pacífico, que seguía una política de cooperación internacional, mientras que la República de China representaba un régimen residual mantenido artificialmente en el poder en la provincia china de Taiwan por los Estados Unidos; que ninguna medida válida de desarme podía aplicarse sin la participación de la República Popular de China, especialmente desde que se había convertido en una Potencia nuclear, y que la ausencia de los representantes de una cuarta parte de la población del mundo constituía un grave golpe contra el principio de la universalidad de las Naciones Unidas y reducía su autoridad y su eficacia. Varios representantes destacaron también que no se podía tratar de lograr con un criterio realista la paz en el Viet-Nam y un acuerdo estable en el Asia sudoriental sin la participación de la República Popular de China.

Los argumentos en contra del proyecto de resolución incluían los siguientes puntos: el régimen comunista chino no era adecuado para ser Miembro de las Naciones Unidas, debido a que se había burlado de los propósitos y principios de la Carta y se dedicaba a la subversión y la agresión en escala mundial; había planteado condiciones para su ingreso en las Naciones Unidas que ponían en evidencia que su deseo real no era colaborar en la labor de la Organización, sino

hacerla fracasar. Votar por su admisión en las Naciones Unidas sería favorecer la agresión y negar los principios básicos de la Carta. La presencia del régimen comunista chino en las Naciones Unidas no podía ayudar a resolver los problemas con que se enfrentaba la Organización en la esfera del desarme o en otras esferas, ni coincidía con los auténticos intereses de las naciones no alineadas ni de la propia Organización. Varios representantes, aunque indicaron que estaban más o menos dispuestos a considerar la admisión de la República Popular de China, también se opusieron al proyecto de resolución porque significaría la expulsión automática de la República de China, uno de los Miembros fundadores de las Naciones Unidas y que ejercía un control efectivo sobre un territorio y una población mayores que los de muchos Estados Miembros. Muchos de estos representantes manifestaron que debía buscarse una forma de proporcionar la representación de ambos Gobiernos en las Naciones Unidas.

El proyecto de resolución de las seis Potencias, en que se pedía el establecimiento de un comité de estudio, fue sometido por el representante de Italia, quien dijo que la intención de los autores era buscar un enfoque nuevo para un problema que la Asamblea no había podido solucionar durante dieciséis años. Mientras no se hiciese una tentativa para establecer las verdaderas intenciones del Gobierno de la República Popular de China respecto de las Naciones Unidas, el debate sobre la representación de China continuaría siendo inconcluyente y poco satisfactorio. El mandato del comité propuesto consistiría esencialmente en hacer un estudio realista y completo de la situación en China, incluidas las intenciones oficiales del Gobierno de Pekín, y formular conclusiones y propuestas para una solución que se presentaría a la Asamblea en su vigésimo segundo período de sesiones. La propuesta ofrecía un medio de sacar a la Asamblea del callejón sin salida y de enfocar todo el problema sobre una base nueva. Si el proyecto de resolución de las once Potencias era rechazado, no votar a favor del proyecto de las seis Potencias equivaldría a no hacer nada para preparar una decisión constructiva en el siguiente período de sesiones de la Asamblea.

Los defensores del proyecto de resolución alegaron que era una útil tentativa para aclarar las intenciones del Gobierno de Pekín y poner fin al callejón sin salida que existía. Otros señalaron que constituía un avance hacia una solución negociada del problema; las atribuciones del propuesto comité eran más amplias que las de una comisión análoga nombrada en 1950 y de todas formas la situación había variado mucho desde entonces.

El representante del Canadá apoyó el proyecto de resolución, pero le pareció que no tenía alcance suficiente para establecer directrices concretas. Su Gobierno creía que la solución provisional del problema podía basarse en las normas siguientes: la participación de la República de China y de la República Popular de China en la Asamblea General como Miembros representantes de los territorios sobre los cuales ejercían una jurisdicción efectiva, y la participación de la República Popular de China en el Consejo de Seguridad como miembro permanente.

Los adversarios del proyecto de resolución manifestaron que constituía una tentativa innecesaria e injustificada de demorar la restitución de los legítimos

derechos de la República Popular de China, pues la cuestión era absolutamente clara y no había necesidad de comités de estudio ni de investigaciones de ninguna especie. Otros representantes calificaron la propuesta de tentativa de preparar el camino para una solución basada en "dos Chinas", que consideraban absolutamente inaceptable por diversos motivos, entre los cuales figuraba el que así se perpetuaría la ocupación militar por los Estados Unidos de la isla de Taiwan, que era parte integrante de China. También se dijo que en 1950 se había aprobado una respuesta análoga y que la comisión nombrada en aquella ocasión no había logrado ningún resultado; que la propuesta, tal como se hacía, tendía a prejuzgar de la cuestión e implicaba un trato discriminatorio, pues constituía un esfuerzo por soslayar el procedimiento que seguían normalmente las Naciones Unidas para resolver problemas de representación y establecía nuevos métodos para decidir la cuestión de la representación de China. El representante de China manifestó que su Gobierno se oponía categóricamente a la propuesta. Creía que pese a su pretendida objetividad el proyecto de resolución tenía el evidente objetivo de preparar el camino para la eventual admisión de Pekín, que resultaría desastrosa no sólo para el pueblo chino, sino para todos los países libres de Asia y, desde luego, para el mundo entero.

El 29 de noviembre, la Asamblea General aprobó por 66 votos contra 48 y 7 abstenciones el proyecto de resolución sobre cuestiones de procedimiento presentado por las 15 Potencias. Después de anunciar el Presidente que, como consecuencia de esta aprobación, se requeriría una mayoría de dos tercios para adoptar el texto presentado por las 11 Potencias, la Asamblea rechazó el proyecto de resolución de las 11 Potencias por 57 votos contra 46 y 17 abstenciones, quedando sin modificar la representación de China. Una propuesta que presentó Siria, para que también se aplicase la norma de la mayoría de dos tercios al proyecto de resolución de las seis Potencias en virtud del cual se establecería un comité de estudio, fue aprobada por 51 votos contra 37 y 30 abstenciones. A continuación, la Asamblea rechazó por 62 votos contra 34 y 25 abstenciones el proyecto de resolución de las seis Potencias.

J. La cuestión de Corea

La Asamblea General incluyó en el programa de su vigésimo primer período de sesiones dos temas relativos a Corea: el tema 31, titulado "Cuestión de Corea: informe de la Comisión de las Naciones Unidas para la Unificación y Rehabilitación de Corea", y el tema 93, titulado "Retiro de todas las fuerzas estadounidenses y demás fuerzas extranjeras que ocupan Corea del Sur bajo la bandera de las Naciones Unidas y disolución de la Comisión de las Naciones Unidas para la Unificación y Rehabilitación de Corea". Este último tema fue propuesto por diez Estados Miembros.

En un memorando explicativo los diez Estados Miembros dijeron, entre otras cosas, que si la unificación de Corea no se había realizado hasta la fecha y la nación coreana seguía dividida, la causa principal de ello era la grave injerencia exterior en los asuntos internos del pueblo coreano. Dicha injerencia consistía ante todo en la continuada ocupación de Corea del Sur

por las fuerzas militares de los Estados Unidos de América. Al someter esta cuestión a la Asamblea General, los gobiernos interesados expresaron la esperanza de que su examen contribuiría a reparar la injusticia cometida con el pueblo coreano y a que todas las tropas extranjeras se retiraran de Corea del Sur, de que se procedería a la disolución de la CNUURC y de que se eliminaría del programa de las Naciones Unidas la llamada cuestión de Corea.

Los dos temas fueron examinados por la Primera Comisión en doce sesiones, del 1º al 5 y del 12 al 16 de diciembre de 1966.

La Primera Comisión tuvo ante sí el decimosexto informe anual de la Comisión de las Naciones Unidas para la Rehabilitación y Unificación de Corea, que abarcaba el período comprendido entre el 3 de septiembre de 1965 y el 19 de agosto de 1966. Respecto de la unificación y los métodos para alcanzarla, la Comisión advirtió que el Gobierno de la República de Corea había afirmado repetidas veces que no había alterado su política básica de adhesión a la fórmula de las Naciones Unidas para la unificación nacional. A este respecto la Comisión declaró que sus esfuerzos por llevar a cabo los objetivos de las Naciones Unidas en Corea y lograr una solución del problema de este país conforme a su mandato habían sido limitados por la constante negativa de las autoridades de Corea del Norte a aceptar las recomendaciones de la Asamblea General y a reconocer la autoridad y la competencia de las Naciones Unidas en la solución de la cuestión de Corea. La Primera Comisión también examinó comunicaciones, memorandos y otros documentos de la República de Corea y de la República Popular Democrática de Corea.

Al igual que en períodos de sesiones anteriores de la Asamblea, la primera cuestión debatida por la Primera Comisión fue la de enviar invitaciones a la República de Corea y a la República Popular Democrática de Corea para que participasen en el debate sin voto. Sobre este particular se presentaron tres proyectos de resolución.

En la parte dispositiva del primero, presentado por doce Potencias, se resolvía que la Asamblea General invitase sin reservas y simultáneamente a los representantes de la República Popular Democrática de Corea y de la República de Corea, partes directamente interesadas, a que participasen en el debate sobre la cuestión de Corea.

El segundo proyecto de resolución, propuesto por la Arabia Saudita, disponía que la Asamblea General adoptase una de las dos soluciones siguientes: 1) enviar inmediatamente una invitación a las dos partes, sin que ello prejuzgara en absoluto el fondo de los dos temas del programa relativos a Corea, o 2) debatir alternadamente la cuestión de las invitaciones y el tema siguiente del programa de la Comisión.

En el tercer proyecto de resolución, patrocinado por nueve Potencias, se proponía que la Asamblea: 1) decidiese invitar a un representante de la República de Corea a participar sin voto en el debate sobre la cuestión de Corea; 2) reafirmara que estaba dispuesta a invitar a un representante de la República Popular Democrática de Corea a participar sin voto en el debate sobre la cuestión de Corea, siempre que aquélla aceptara

primero inequívocamente la competencia y autoridad de las Naciones Unidas, de conformidad con lo dispuesto en la Carta, para adoptar medidas con respecto a la cuestión de Corea.

En apoyo del proyecto de resolución patrocinado por las doce Potencias se afirmó que tenía como objetivo preciso invitar a las partes interesadas en la cuestión de Corea a participar sin condiciones previas en el examen de dicho problema. Se expresó la esperanza de que los miembros de la Comisión dejarían de lado esta vez sus consideraciones de "guerra fría" y sus estrechas preocupaciones nacionales para adoptar decisiones que estuviesen en consonancia con el espíritu de las Naciones Unidas.

En apoyo de la propuesta de la Arabia Saudita se alegó que el proyecto de resolución iba dirigido a dar satisfacción a quienes deseaban oír a ambas partes para poder abordar en forma constructiva el examen general de la cuestión.

A favor del proyecto de resolución de las nueve Potencias se afirmó que la República de Corea había aceptado en todo momento la competencia y autoridad de las Naciones Unidas para tratar la cuestión de Corea. La República Popular Democrática de Corea, en cambio, había rechazado siempre la competencia y la autoridad de la Organización con respecto a la cuestión. En estas circunstancias sería ilógico, injusto y discriminatorio enviar invitaciones a ambas partes exactamente en los mismos términos y sin condiciones.

El 2 de diciembre el representante de Guinea propuso que la Comisión adoptara inmediatamente una decisión sobre el proyecto de resolución de las doce Potencias. A continuación hubo un debate de procedimiento, pues se alegó que ello entrañaría un cambio en el orden de prioridad de los temas del programa establecido por la Comisión y haría necesaria, por lo tanto, la aplicación del artículo 124 del reglamento, referente al nuevo examen de las proposiciones.

Por sugerencia del Presidente, la Comisión aceptó que se sometiera a votación la propuesta de Guinea y que, una vez anunciado el resultado numérico de la votación, la Comisión considerara la procedencia de la aplicación del artículo 124. El resultado de la votación fue de 38 votos a favor, 37 en contra y 26 abstenciones. Tras otro debate sobre la aplicabilidad del artículo 124, el representante de Guinea, en nombre de los coautores del proyecto de resolución de las doce Potencias, declaró que, a pesar del resultado de la votación sobre su moción de procedimiento, no insistiría en que se considerase de inmediato el proyecto de resolución de las doce Potencias, en la inteligencia de que la cuestión de las invitaciones sería estudiada en cuanto quedase terminado el examen del tema siguiente del programa de la Comisión. Esta aceptó la sugerencia del Presidente de examinar el tema siguiente, sin cambiar la situación con respecto a la votación sobre la propuesta de Guinea.

El 13 de diciembre la Primera Comisión rechazó el proyecto de resolución de las doce Potencias por 53 votos contra 34 y 20 abstenciones.

El proyecto de resolución de la Arabia Saudita no se puso a votación.

El proyecto de resolución de las nueve Potencias fue aprobado por 63 votos contra 24 y 21 abstenciones.

El 13 de diciembre, cuando la Primera Comisión comenzó a debatir el fondo de la cuestión de Corea, tuvo ante sí dos proyectos de resolución. En el primero, sometido con arreglo al tema 93 del programa por catorce países, la Asamblea General decidía: 1) que el personal militar norteamericano y demás personal militar extranjero, desplegado en Corea del Sur al amparo del nombre de Naciones Unidas o en otra forma, fuese retirado totalmente, junto con su armamento y equipo, en un plazo de (seis) meses a partir de la fecha de aprobación de la resolución; 2) que se disolviese inmediatamente la Comisión de las Naciones Unidas para la Unificación y Rehabilitación de Corea; y 3) que no se examinase la cuestión de Corea en las Naciones Unidas.

El segundo proyecto de resolución, sometido por quince países en relación con el tema 31 del programa, disponía que la Asamblea General: 1) reafirmara que los objetivos de las Naciones Unidas en Corea consistían en establecer, por medios pacíficos, una Corea unida, independiente y democrática, dotada de una forma representativa de gobierno, y restablecer totalmente la paz y la seguridad internacionales en la región; 2) expresara la convicción de que debían tomarse medidas a fin de lograr estos objetivos mediante elecciones auténticamente libres celebradas de conformidad con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General; 3) pidiese a la CNUURC que intensificara sus esfuerzos a fin de lograr tales objetivos y que continuara llevando a cabo las tareas que le fueron encomendadas anteriormente por la Asamblea General; y 4) tomara nota de que la mayor parte de las fuerzas de las Naciones Unidas enviadas a Corea en cumplimiento de resoluciones de las Naciones Unidas ya habían sido retiradas; de que el único objetivo de las fuerzas de las Naciones Unidas que se hallaban en Corea era mantener la paz y la seguridad en la región; y de que los gobiernos interesados estaban dispuestos a retirar las fuerzas que mantenían en Corea cuando tal medida fuese solicitada por la República de Corea o cuando se hubiesen cumplido las condiciones fijadas por la Asamblea General para lograr una solución duradera.

En apoyo del proyecto de resolución de las catorce Potencias, el representante de la URSS afirmó que las medidas propuestas serían propicias para la implantación de condiciones que permitiesen a los mismos coreanos, sin ningún género de injerencia extranjera, crear una Corea única, democrática y amante de la paz. El principal obstáculo a la unificación pacífica y democrática de Corea era la continuada y criminal ocupación de la parte sur de Corea por las fuerzas de los Estados Unidos. En consecuencia, si las Naciones Unidas realmente deseaban desempeñar un papel positivo en la solución de la cuestión de Corea y fortalecer la paz y la seguridad en el Lejano Oriente, primero debían pedir el inmediato retiro de todas las fuerzas norteamericanas de ocupación de Corea del Sur. La llamada cuestión de Corea debía ser eliminada de una vez para siempre del programa de las Naciones Unidas y la CNUURC, que sólo obstaculizaba y demoraba la unificación de Corea, debía ser disuelta.

El 16 de diciembre la Primera Comisión rechazó el proyecto de resolución de las catorce Potencias por 61 votos contra 21 y 25 abstenciones.

Después de la votación, el representante de Cuba presentó con arreglo al tema 93 una propuesta por la

cual la Asamblea General decidiría retirar del programa la cuestión de Corea y no examinarlo nuevamente en las Naciones Unidas. En apoyo de su propuesta, señaló que la votación que se había realizado sobre el proyecto de resolución de las catorce Potencias no había dado fin al examen del tema 93. Tras un breve debate, la Comisión decidió, por 65 votos contra 16 y 13 abstenciones, que había terminado el estudio del tema 93.

El representante de los Estados Unidos dijo que la finalidad del proyecto de resolución de las quince Potencias era que la Organización continuase desempeñando un papel en Corea, procurando remediar lo que todo el mundo consideraba como un atropello internacional: la antinatural división de este desdichado país. El tenor del proyecto de resolución no sugería ningún deseo ni intención de provocar la derrota o humillación de la República de Corea ni de las autoridades que gobernaban al Norte. Antes bien, las actuales autoridades políticas de la parte Norte de Corea debían permitir que su pueblo se uniera a sus compatriotas del Sur a fin de que toda la población coreana pudiera expresarse libremente sobre la unificación y el tipo de sistema político y social que había de adoptarse para toda Corea.

El representante de la República de Corea, invitado a ocupar un asiento a la mesa de la Comisión, afirmó que durante casi veinte años las Naciones Unidas habían trabajado con dedicación en pro de la unificación de Corea promoviendo el principio de la autodeterminación por medio de elecciones libres, universales y democráticas. Las Naciones Unidas estaban en Corea en virtud de decisiones tomadas por la Organización y a petición del Gobierno de la República de Corea.

Entre los que posteriormente se abstuvieron en la votación sobre el proyecto de resolución de las quince Potencias, varios representantes sostuvieron que sin el requisito previo fundamental de la participación activa de Corea del Norte y Corea del Sur en el debate, no podía haber ningún examen valedero y serio de la cuestión de Corea, ni lograrse ningún progreso hacia la creación de una Corea unificada, representativa e independiente.

El 16 de diciembre el proyecto de resolución de las quince Potencias quedó aprobado por 66 votos contra 19 y 24 abstenciones.

El 19 de diciembre la Asamblea General examinó y puso a votación varias enmiendas presentadas por diez países respecto al proyecto de resolución recomendado por la Primera Comisión. Además de proponer varias modificaciones en el preámbulo, las enmiendas tenían por objeto sustituir la parte dispositiva por un párrafo único en que se pedía el retiro de la cuestión de Corea del programa.

Los patrocinadores de las enmiendas dijeron, entre otras cosas, que las deliberaciones sobre la cuestión de Corea en las Naciones Unidas eran ilegales y tendenciosas; que el principal motivo de la continuada división de Corea era la injerencia extranjera; que los Estados Unidos habían conseguido que se adoptase una resolución contraria a la Carta y a las aspiraciones del pueblo coreano; que no había tropas extranjeras estacionadas en Corea del Norte en tanto que el Sur continuaba ocupado por los Estados Unidos, lo que hacía imposible la reunificación de Corea; que los re-

presentantes de la República Popular Democrática de Corea habían sido excluidos del debate y que por ello no se podía esperar una solución realista.

Los que hablaron en contra de las enmiendas afirmaron, entre otras cosas, que sólo podían ser interpretadas como una tentativa de última hora para anular todo lo que las Naciones Unidas habían hecho y lo que representaban respecto de la cuestión de Corea. Los países comunistas y algunos otros habían realizado tenaces esfuerzos en el vigésimo primer período de sesiones para poner punto final al papel y la responsabilidad de las Naciones Unidas en la búsqueda de una solución justa del problema coreano.

La Asamblea General, después de rechazar las enmiendas propuestas por las diez Potencias, aprobó por 67 votos contra 19 y 32 abstenciones el proyecto de resolución recomendado por la Primera Comisión, que pasó a ser la resolución 2224 (XXI).

K. *Fuerza de emergencia de las Naciones Unidas*

La Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas en el Oriente Medio fue creada en virtud de las resoluciones 998 (ES-I), 1000 (ES-I) y 1001 (ES-I), de 4, 5 y 7 de noviembre de 1956. Desde entonces, de conformidad con la resolución 1127 (XI), de 2 de febrero de 1957, el Secretario General ha venido presentando un informe anual sobre la organización y financiación de la Fuerza.

En su vigésimo período de sesiones la Asamblea General tuvo ante sí el décimo informe provisional de la FENU, que abarcaba el período comprendido entre el 1º de agosto de 1965 y el 31 de julio de 1966. El Secretario General indicó que durante ese período la Fuerza había continuado sus funciones de vigilancia y patrulla a lo largo de la línea de demarcación del armisticio en la zona de Gaza y a lo largo de la frontera internacional en la Península del Sinaí, y que la situación en la zona había continuado sin incidentes de importancia. Señaló que a pesar de haber transcurrido casi un decenio en relativa calma a lo largo de la línea en que la FENU había desplegado sus tropas, las relaciones entre los pueblos a ambos lados de esa línea eran tales, que si se retirara el elemento neutralizador constituido por las Naciones Unidas, era muy probable que pronto volviesen a producirse encuentros graves.

La situación en la zona de la FENU continuó tranquila y no mostró signos de deterioro hasta el 16 de mayo de 1967, fecha en que el Comandante de la Fuerza recibió un mensaje en el cual el Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la República Árabe Unida pedía el retiro de todas las tropas destacadas en puestos de observación de la Fuerza en el Sinaí. El 18 de mayo de 1967 el Secretario General recibió una comunicación oficial en que el Gobierno de la República Árabe Unida pedía el retiro de la FENU y ese mismo día el Secretario General envió al Comandante de la FENU instrucciones formales sobre el retiro de la Fuerza. La FENU cesó todas sus actividades operacionales el 19 de mayo de 1967.

Las circunstancias del subsiguiente retiro de la Fuerza se describen en el capítulo I.

L. *La cuestión de Palestina*

DENUNCIAS PRESENTADAS POR ISRAEL Y SIRIA

En julio de 1966 tuvo lugar una serie de incidentes entre Israel y Siria, a lo largo de la línea de demarcación de armisticio, que culminaron con el bombardeo aéreo por Israel de zonas sirias situadas en el emplazamiento del plan de aprovechamiento del río Jordán. Siria e Israel solicitaron el 21 y el 22 de julio, respectivamente, una reunión urgente del Consejo de Seguridad, acusándose mutuamente de agresión.

El 25 de julio, después de un breve debate sobre cuestiones de procedimiento, el Consejo decidió examinar la denuncia hecha por Siria, y luego decidir si examinaría la denuncia de Israel. Además, decidió pedir al Jefe de Estado Mayor del Organismo de Vigilancia de la Tregua que investigase los incidentes mencionados en las denuncias de Israel y Siria y que informase por separado sobre los mismos. Los representantes de Siria, Israel y el Irak fueron invitados, a su solicitud, a participar sin derecho a voto en los debates sostenidos durante las ocho sesiones celebradas entre el 25 de julio y el 3 de agosto.

El representante de Siria abrió el debate declarando que Israel había citado una serie de incidentes supuestamente provocados por sirios el 13 y el 14 de julio como la causa del ataque aéreo. Sin embargo, las denuncias de cualquiera de las partes debían ser presentadas a la Comisión Mixta de Armisticio, sobre la cual el Consejo debía basarse, a su vez, para adoptar su decisión. Israel había boicoteado la Comisión desde 1951 porque las decisiones de ese órgano no eran de su agrado, y decidía acerca de la veracidad de sus propias alegaciones y sobre su propio curso de acción. Su política de represalias era prueba de su completo desprecio al Acuerdo de Armisticio General entre Israel y Siria, que prohibía la comisión de actos bélicos u hostiles por parte de fuerzas militares o paramilitares de cualquiera de las partes contra la otra.

El ataque israelí se había dirigido contra un proyecto de aprovechamiento de recursos hidráulicos en Siria, y era parte de un plan premeditado. Ya anteriormente las fuerzas israelíes habían atacado en el mismo lugar varias veces, y el Primer Ministro de Israel, el Jefe de Estado Mayor y otros ministros no habían ocultado que se proponían impedir por la fuerza la realización de los trabajos. Las alegaciones de Israel eran sólo una cortina de humo para disfrazar sus designios expansionistas y colonialistas con respecto a Siria y a sus vecinos. Independientemente de los motivos alegados para la agresión, las autoridades israelíes admitían su responsabilidad por ella. Siria no tenía la obligación de actuar como guardián de lo que Israel consideraba como sus fronteras.

Ese ataque aéreo no era sino un eslabón en la cadena de ataques israelíes contra los países árabes vecinos, realizados todos en menos de un año. Siria citó además casos de penetración israelí en el Líbano, en octubre de 1965, y un ataque de Israel contra Jordania en abril de 1966 a consecuencia del cual habían muerto 11 civiles. El 16 de mayo de 1966, la Comisión Mixta de Armisticio había censurado a Israel por esa agresión desembozada.

Prosiguiendo su exposición, el representante de Siria declaró que las decisiones de la Comisión Mixta de

Armisticio demostraban claramente que el Gobierno de Israel había planificado y organizado operaciones militares contra los Estados árabes vecinos. Pero la Comisión no había comprobado que ningún Gobierno árabe fuese culpable de organizar una incursión contra Israel. Más aún, cuando Israel cometía agresiones, sus portavoces a menudo afirmaban que los ataques constituían represalias por las infiltraciones aisladas de árabes. La frecuencia de esos actos de agresión por parte de Israel, el momento en que los hacían y sus tácticas ponían de manifiesto la política fundamental de Israel, que era condición inherente a su existencia y surgía de la ideología sionista, basada en una política de constante agresión contra los Estados árabes vecinos y de obstrucción contra el desarrollo de los países árabes. Ya no podía esperarse que Siria continuase tolerando la imposición de esta ley de la selva por Israel.

En respuesta, el representante de Israel declaró que únicamente recurriendo a la aviación su país podía superar su gran desventaja topográfica y reducir las bajas al mínimo. En realidad, toda la acción se había realizado en 15 minutos y había sido localizada y cuidadosamente limitada. Los recientes incidentes y la reacción de Israel ante ellos no podían considerarse aisladamente de sus antecedentes. Durante largo tiempo, el fuego de artillería dirigido contra las actividades civiles de Israel desde posiciones militares sirias, y los grupos de sabotadores y terroristas que cruzaban hacia el territorio de Israel, habían mantenido a la región fronteriza en un estado de agitación. Durante este constante hostigamiento, Israel había sufrido 16 bajas, entre ellas cuatro muertos. Esto no era sino la fase más reciente de la guerra fronteriza, que había venido desarrollándose durante 18 años.

El Gobierno de Israel no tenía la intención de empeñarse en choques armados o acciones militares en sus fronteras. La acción del 14 de julio se había emprendido tras cierta vacilación, después de que Israel se hubo convencido de que todos sus esfuerzos por conducto de las Naciones Unidas y las vías diplomáticas habían sido inútiles para evitar la agresión siria.

No sería posible mantener la calma en la frontera a menos que el Gobierno de Siria aceptase el hecho de que la calma favorecería a sus intereses, además de los de Israel. No podría haber dificultades si se establecía una cesación del fuego incondicional y efectiva y se ponía fin por completo a las incursiones armadas en el territorio de Israel. Este estaba dispuesto a enviar representantes para reunirse con representantes sirios en cualquier momento y lugar que Siria estimase convenientes.

Citando una serie de disposiciones del Acuerdo de Armisticio, el representante de Israel dijo que la política y la conducta sirias equivalían a un repudio de su letra y su espíritu. Los dirigentes sirios habían declarado abiertamente que Israel debía ser destruido y habían anunciado que estaban empeñados en lo que llamaban una "guerra popular de liberación". Habían manifestado que esos objetivos no podían lograrse mediante debates en las Naciones Unidas ni declaraciones verbales de los gobiernos árabes, sino mediante acciones armadas destinadas a preparar el camino para un encuentro decisivo con Israel. La política proclamaba era la de beligerancia, y las medidas prácticas para aplicarla consistían en armar y adiestrar de cinco a seis mil pa-

lestinos en Siria como punta de lanza para la próxima guerra contra Israel; tratar de perturbar la vida civil normal en la región fronteriza; llevar a cabo un proyecto ilícito para escatimar el suministro normal y vital de agua a Israel; y promover el sabotaje por medio de la organización El-Fatah.

En los últimos 18 meses, dicha organización había hecho 53 incursiones en el territorio de Israel. Desde un principio, Israel había visto claramente que Siria respaldaba las actividades de El-Fatah, que, al parecer, no era más que un frente para las actividades clandestinas del Gobierno de Siria.

Si el Consejo consideraba conveniente aprobar alguna resolución, era evidentemente imperioso que condenase los actos de agresión y amenazas de guerra de Siria, y que exigiese del Gobierno sirio que pusiese fin inmediatamente a esas actividades. Lo más importante era mantener una completa cesación del fuego, aliviar la tirantez y hacer arreglos locales a base de discusiones y acuerdos. Siria había impedido que la Comisión Mixta de Armisticio funcionase plenamente, al insistir en incluir en su orden del día cuestiones acerca de la zona desmilitarizada, pese al hecho de que, en virtud del Acuerdo de Armisticio General, correspondía al Presidente de dicha Comisión entender en estas cuestiones.

En cumplimiento de lo solicitado por el Consejo de Seguridad, el Secretario General presentó dos informes por separado el 26 y el 27 de julio. Ambos informes contenían datos relativos a los hechos concretos a que se hacía referencia en las cartas dirigidas al Presidente del Consejo por Siria e Israel el 21 y el 22 de julio, respectivamente, y se basaban íntegramente en información transmitida por el Jefe de Estado Mayor del Organismo de Vigilancia de la Tregua en Palestina. Además, el 27 de julio, el Secretario General hizo distribuir una nota sobre los esfuerzos realizados por el Organismo para aliviar la tirantez a lo largo de la línea entre Israel y Siria, entre los que figuraban visitas a la zona desmilitarizada y las zonas defensivas, así como propuestas para facilitar las conversaciones relativas a la antigua controversia sobre el cultivo de ciertas zonas y al restablecimiento de la cesación incondicional del fuego que ambos países habían acordado en junio. En opinión del Jefe de Estado Mayor, la solución del problema del cultivo contribuiría mucho a disminuir la actual tirantez entre los dos países.

Jordania y Malí presentaron un proyecto de resolución en virtud del cual el Consejo de Seguridad, entre otras cosas: 1) condenaría el injustificable ataque cometido por Israel el 14 de julio de 1966 como violación flagrante de las disposiciones sobre cesación de las hostilidades contenidas en su resolución 54 (1948), de 15 de julio de 1948, de los términos del Acuerdo de Armisticio General entre Israel y Siria, y de las obligaciones contraídas por Israel en virtud de la Carta; 2) lamentaría las pérdidas, humanas y de toda índole, causadas por el ataque aéreo israelí, por las cuales debía Israel aceptar plena responsabilidad; 3) reafirmaría sus resoluciones 111 (1956), de 19 de enero de 1956 y 171 (1962), de 9 de abril de 1962, y lamentaría que Israel hubiese vuelto a cometer actos agresivos que se condenaban en forma inequívoca en dichas resoluciones; 4) recordaría a Israel que el Consejo había condenado ya las operaciones militares en contravención del Acuerdo de Armisticio General y había pedido a Israel que adoptase medidas eficaces para impedir que se realizaran operaciones de esa índole; 5) reiteraría su exhortación a Israel a que se atuviese a las obligaciones

que había contraído en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, pues en caso contrario el Consejo tendría que considerar qué nuevas medidas deberían invocarse; y 5) exhortaría a los Gobiernos de Israel y de Siria a cooperar con el Jefe de Estado Mayor en el desempeño de las responsabilidades que le atribuían el Acuerdo de Armisticio General y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, y pediría que se adoptaran cuanto antes todas las medidas necesarias para reactivar la Comisión Mixta de Armisticio y utilizar plenamente los servicios de ésta.

Al presentar el proyecto de resolución en nombre de sus patrocinadores, el representante de Jordania dijo que sus disposiciones eran lo menos que el Consejo podía hacer para afrontar el reto de Israel a la autoridad de las Naciones Unidas. El proyecto no se apartaba de medidas similares adoptadas por el Consejo en casos análogos, y se basaba en anteriores resoluciones del Consejo acerca de las violaciones del Acuerdo de Armisticio por Israel. El presente texto no podía ser aislado de las decisiones adoptadas anteriormente por el Consejo sobre la cuestión.

Los representantes de la Argentina, China, los Estados Unidos, Francia, el Japón, Nueva Zelandia, los Países Bajos y el Reino Unido dijeron que, a la vez que lamentaban el ataque aéreo de represalia efectuado por Israel el 14 de julio contra Siria, apoyaban los constantes esfuerzos del Jefe de Estado Mayor, instaban a que se reactivase el mecanismo de la Comisión Mixta de Armisticio y se lo utilizara plenamente en la zona, y pedían que se resolviera el problema del cultivo de las tierras en la zona desmilitarizada.

Los representantes de Bulgaria, Jordania, Malí, Nigeria y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declararon que condenaban el ataque aéreo efectuado por Israel y exhortaban a dicho país a cumplir las obligaciones y responsabilidades que le incumbían en virtud de la Carta y del Acuerdo de Armisticio. El representante del Irak hizo una declaración análoga en apoyo de la denuncia hecha por Siria.

Los representantes de Uganda y del Uruguay subrayaron que no consideraban justificada ninguna represalia por ninguna de las partes y sostuvieron que el Consejo, al examinar la denuncia de Siria, debía además tratar de llegar al fondo del problema teniendo en cuenta el amplio contexto de la cuestión de Palestina.

El 3 de agosto, el Consejo sometió a votación el proyecto de resolución con el siguiente resultado: 6 votos a favor (Bulgaria, Jordania, Malí, Nigeria, Uganda y la URSS), ninguno en contra y 9 abstenciones. No habiendo obtenido la mayoría necesaria, el proyecto de resolución quedó desechado.

DENUNCIA DE ISRAEL CONTRA SIRIA

El 12 de octubre de 1966, Israel solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad para examinar su denuncia contra Siria en relación con actos de agresión que, según afirmaba, habían sido cometidos por grupos armados procedentes de territorio sirio contra los ciudadanos y el territorio de Israel, habían culminado con los incidentes registrados entre el 7 y el 9 de octubre, cuando un jeep ocupado por seis miembros de la policía de frontera que iban a investigar una explosión ocurrida cerca de la aldea de Sha'ar HaGolan, al sur del Mar de Galilea, había sido volado por una mina co-

locada en la carretera. Cuatro de sus ocupantes habían resultado muertos y los otros dos heridos.

En respuesta a esas acusaciones, el representante de Siria manifestó que las alegaciones contra Siria eran falsas y carentes de todo fundamento. Rechazó, por considerar totalmente infundada, la tentativa de Israel de atribuir a Siria la responsabilidad por los incidentes del 8 y el 9 de octubre, así como otros incidentes análogos, y manifestó que Israel utilizaba esas supuestas incursiones como pretexto para emprender nuevos actos de agresión contra Siria.

El 14 de octubre, el Consejo de Seguridad decidió examinar la denuncia de Israel e invitó a los representantes de Israel, Siria y la República Árabe Unida a tomar parte en los debates. También se invitó a la Arabia Saudita a tomar parte en una sesión posterior. El Consejo examinó el asunto en 11 sesiones celebradas entre el 14 de octubre y el 4 de noviembre.

En el curso de los debates del Consejo, el Secretario General presentó cuatro informes. En el primero, de fecha 17 de octubre, describía la investigación hecha por los observadores militares de las Naciones Unidas de los dos incidentes mencionados en la denuncia presentada por Israel. En el segundo informe, de fecha 23 de octubre, el Secretario General enumeraba los resultados de las inspecciones efectuadas el 19 de octubre en la zona desmilitarizada y en las zonas de defensa por el Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua en Palestina. En este informe se indicaba que las violaciones del Acuerdo de Armisticio General por parte de Israel incluían el personal militar y paramilitar y las armas observados en la zona desmilitarizada y en la zona de defensa. Las violaciones por parte de Siria incluían personal militar y armas observados en la zona desmilitarizada y la zona de defensa. Además, se había observado que después de las visitas hechas en junio había aumentado el número de emplazamientos de tanques y complejos de fortificaciones defensivas en las zonas de defensa del lado sirio. No se había observado ningún aumento de los efectivos en la zona desmilitarizada ni en las zonas defensivas de ambos lados.

En el tercer informe se decía que, desde 1951, Israel había adoptado la posición de que la Comisión Mixta de Armisticio no tenía competencia para ocuparse de los asuntos relativos a la zona desmilitarizada, afirmando que esos asuntos debían ser tratados por el Presidente de la Comisión Mixta de Armisticio; esta aserción era rechazada por Siria. La Comisión no había podido celebrar reuniones ordinarias desde 1951. A partir de ese año, había celebrado 17 reuniones de urgencia, a dos de las cuales no había acudido Israel. En relación con las reuniones de urgencia, Israel había sostenido el mismo principio que para las reuniones ordinarias. Desde febrero de 1960 no se había celebrado ninguna otra reunión ordinaria ni de urgencia. El Secretario General manifestaba en su informe que el hecho de que la Comisión Mixta de Armisticio no pudiera actuar indudablemente debilitaba los esfuerzos encaminados a mantener la paz a lo largo de la línea entre Israel y Siria. En consecuencia, los asuntos que normalmente deberían ser examinados en primer lugar por la Comisión, y que a menudo podrían resolverse allí, se sometían directamente al Consejo de Seguridad, donde sólo podían estudiarse en un contexto y un ambiente políticos. La efectividad de la Comisión Mixta de Armisticio depen-

día de la disposición de ambas partes de ajustarse al Acuerdo de Armisticio General y de participar plenamente en él y colaborar con él. Los llamamientos generales que les había dirigido a las partes el Consejo de Seguridad a estos efectos habían sido infructuosos hasta entonces. Era posible que hubiese llegado la hora de considerar seriamente si no habría alguna otra forma más fructífera de lograr la finalidad de que la Comisión actuase con efectividad.

En su cuarto informe, de fecha 2 de noviembre, el Secretario General manifestaba que durante varios años tanto Israel como Siria habían presentado diariamente quejas de que la otra parte había cometido intrusiones en la zona desmilitarizada, pero que los observadores militares de las Naciones Unidas no habían podido hacer investigación alguna. Israel no había solicitado que se investigaran sus denuncias y había negado acceso a ciertas partes de la zona a los observadores que trataban de investigar las quejas presentadas por Siria. Las inspecciones simultáneas de la zona desmilitarizada y de las zonas defensivas organizadas de tiempo en tiempo por el Jefe de Estado Mayor del Organismo para la Vigilancia de la Tregua no permitían visitar en forma adecuada las fortificaciones que, según se afirmaba, había en la zona. Por último, en el informe se indicaba que el problema de la utilización de las tierras en la zona desmilitarizada seguía constituyendo una de las principales preocupaciones del Jefe de Estado Mayor del Organismo y del Presidente de la Comisión Mixta de Armisticio.

Al iniciar el debate, el representante de Israel, refiriéndose a varios actos de violencia que afirmó haber sido perpetrados en la región septentrional de Israel, cerca de la frontera siria, expresó que estos incidentes constituían un sistema de violencia único y organizado. Las autoridades sirias movilizaban y adiestraban saboteadores y los enviaban a Israel con el fin de destruir un Estado soberano. La afirmación de que Siria no tenía la responsabilidad de impedir actos hostiles contra Israel dirigidos desde su territorio era incompatible con las obligaciones de Siria en virtud de la Carta y del Acuerdo de Armisticio General de 1949.

Israel no tenía reivindicaciones contra la soberanía o integridad de Siria, no codiciaba parte alguna de su territorio y no le interesaba el carácter de su régimen, su filosofía social o su política internacional. Israel había manifestado formalmente al Jefe de Estado Mayor del Organismo de Vigilancia de la Tregua que estaba conforme en que él emprendiese una inspección inmediata y libre de las zonas fronterizas. El representante de Israel dijo también que el Consejo debía apoyar el derecho de Israel a su defensa territorial y condenar los actos hostiles, infiltraciones ilícitas e instigación a la guerra imputables al Gobierno sirio. Su país proponía que cada una de las partes reafirmase su intención de abstenerse del uso o la amenaza de la fuerza contra la independencia política y la integridad territorial de la otra, y que ambas se comprometiesen de modo específico ante el Consejo a trabajar activamente a fin de evitar cualquier acto de hostilidad desde el territorio de una de las partes contra la otra.

En respuesta, el representante de Siria sostuvo que su Gobierno había rechazado repetidamente las acusaciones israelíes de que era responsable de las actividades de los grupos palestinos esparcidos por la zona. Existían más de 1.250.000 refugiados árabes que vivían en la miseria al otro lado de las líneas de demarcación de

Israel, a la vista de sus hogares, sus granjas y viñedos, que les habían sido usurpados. Sabían que Israel pasaba por alto sus derechos, que con tanta frecuencia habían sido reafirmados en resoluciones de las Naciones Unidas. Entonces, ¿por qué había que hacer responsable a Siria por la conducta de más de 1 millón y cuarto de refugiados árabes? Israel había dicho que no tenía designios contra el régimen de Siria, pero el general Rabin, Jefe de Estado Mayor de Israel, había afirmado lo contrario. Era irónico oír a Israel acusar a Siria de intenciones agresivas. Siria recordaba el ataque aéreo efectuado por Israel el 14 de julio, cuando resultaron heridos nueve hombres y murieron una mujer y un niño. El historial de Israel en las Naciones Unidas demostraba que era un Estado colonial agresivo, un custodio de monopolios imperialistas creado para destruir el progreso económico y social de la zona. Siria estaba resuelta a no quebrantar la paz, pero estaba igualmente resuelta a detener al agresor. Siria confirmaba una vez más que estaba dispuesta a colaborar plenamente con la Comisión Mixta de Armisticio, mientras que Israel había boicoteado a esa Comisión por temor a su censura. En tanto que Israel había mantenido una política agresiva de ataques militares a través de la línea de demarcación del armisticio, ni Siria ni ningún otro Estado árabe habían sido condenados jamás por las Naciones Unidas por haber cometido ataques militares contra Israel o contra algún otro Estado.

La Arabia Saudita, Jordania y la República Árabe Unida también hicieron declaraciones en apoyo de la posición de Siria en el Consejo.

El 27 de octubre, el Reino Unido y los Estados Unidos presentaron un proyecto de resolución en virtud del cual el Consejo, entre otras cosas, deploraría los incidentes objeto de ese debate, así como las pérdidas de vidas humanas y las bajas causadas por los mismos; recordaría al Gobierno de Siria que debía cumplir sus obligaciones adoptando toda clase de medidas para impedir que se utilizara su territorio como base de operaciones para la comisión de actos que constituían una violación del Acuerdo de Armisticio General; pediría que se observase rigurosamente lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo III del Acuerdo de Armisticio General Sirio-Israelí, en el que se disponía que no se cometerían actos bélicos o de hostilidad desde el territorio de una de las partes contra las otras partes; pediría a los Gobiernos de Siria e Israel que, en vista de sus declaraciones ante el Consejo, cooperasen plenamente con el sistema de las Naciones Unidas — inclusive la Comisión Mixta de Armisticio Sirio-Israelí establecida en virtud del artículo VII del Acuerdo de Armisticio General — para la aplicación efectiva de ese Acuerdo, con objeto de evitar incidentes y con el mismo propósito facilitar al personal del Organismo de Vigilancia de la Tregua en Palestina sus tareas de observación e investigación a ambos lados de la línea de demarcación del armisticio; expresaría su intención de seguir estudiando cuanto antes, en interés del fomento de una paz duradera en el Oriente Medio, las medidas que podrían adoptarse acerca de la cuestión más amplia de las relaciones árabe-israelíes; y pediría al Secretario General que siguiese de cerca la aplicación de la resolución y adontase las medidas que resultasen necesarias para garantizar a la Comisión Mixta de Armisticio y al Organismo de Vigilancia de la Tregua el desempeño eficaz de las funciones que les habían sido asignadas.

Al presentar el proyecto de resolución, el representante de los Estados Unidos dijo que, con su hincapié en

la medida, con su preocupación por la paz y su reconocimiento del problema más amplio y aún no resuelto que en esos momentos estaban explotando las fuerzas de la violencia, dicho proyecto era una importante y adecuada expresión de lo que el Consejo debía decir pronta y resolutamente.

Los representantes de la Argentina, China, los Estados Unidos, Francia, el Japón, Nueva Zelandia, los Países Bajos, el Reino Unido y el Uruguay dijeron que acogían con beneplácito la decisión de Israel de someter la cuestión al Consejo sin recurrir a medidas de represalia. Expresaron la opinión de que Siria no podía negarse a aceptar su responsabilidad por actos que tuviesen origen en su territorio; exhortaron a Siria y a Israel a obrar con la mayor cautela y prudencia; elogiaron al Secretario General por su rápido y objetivo informe sobre las cuestiones concretas planteadas en el Consejo; e instaron a las partes interesadas a cumplir estrictamente las disposiciones del Acuerdo de Armisticio General Sirio-Israelí y a cooperar plenamente con la Comisión Mixta de Armisticio.

Los representantes de Bulgaria y la URSS dijeron que, al recurrir al Consejo, Israel realizaba una maniobra precipitada, artificial y táctica con el fin de distraer la atención de las verdaderas fuentes de tirantez en el Oriente Medio, así como para disimular los preparativos militares que se hacían contra Siria en los círculos extremistas de Israel. Ambos oradores culparon a Israel de la incapacidad de la Comisión Mixta de Armisticio para funcionar adecuadamente.

Los representantes de Jordania, Malí, Nigeria y Uganda expresaron la convicción de que para lograr una paz duradera en el Oriente Medio el Consejo debía ocuparse de la médula del problema de Palestina en su conjunto. Mientras tanto, era indispensable insistir en que se cumpliesen todas las disposiciones del Acuerdo de Armisticio.

El 28 de octubre, el Consejo aprobó la sugerencia hecha por el representante de Malí en nombre de su propia delegación y de las de Nigeria y Uganda, y apoyada por los representantes de Francia, el Japón y la URSS, de que se suspendieran los debates sobre la cuestión de manera que pudieran celebrarse consultas a fin de evitar la aprobación de resolución alguna y recurrir en cambio al método del consenso para aportar una contribución eficaz a la labor del Consejo.

El 3 de noviembre, habiendo fracasado los esfuerzos del Consejo por llegar a un consenso sobre la cuestión, los representantes de la Argentina, el Japón, Nueva Zelandia, Nigeria, los Países Bajos y Uganda, presentaron otro proyecto de resolución en virtud del cual el Consejo: 1) deploraría los incidentes objeto del debate, así como la pérdida de vidas humanas y las bajas causadas por los mismos; 2) invitaría al Gobierno de Siria a reafirmar las medidas adoptadas para impedir todo incidente que constituyera una violación del Acuerdo de Armisticio General; 3) invitaría al Gobierno de Israel a que cooperase plenamente con la Comisión Mixta de Armisticio Sirio-Israelí; 4) exhortaría a los Gobiernos de Siria y de Israel a que facilitasen la labor del personal del Organismo de Vigilancia de la Tregua en Palestina en sus tareas de observación e investigación a ambos lados de la línea de demarcación del armisticio; 5) instaría a los Gobiernos de Siria y de Israel a que se abstuvieran de todo acto que pudiese agudizar la tirantez en la zona; y 6) pediría al Secretario

General que mantuviera informado al Consejo de Seguridad según procediera.

Al presentar el proyecto de resolución de las seis Potencias, el representante de Uganda declaró que aquél tenía su origen en un proyecto de documento que había estado destinado anteriormente a expresar un consenso pero no había sido aceptado por todos los miembros. En vista del rápido empeoramiento de la situación en el Oriente Medio, los copatrocinadores consideraban absolutamente necesario que el Consejo de Seguridad adoptase una posición que tuviera repercusiones en esa región y mejorase las relaciones entre Israel y Siria. En vista de las circunstancias, tanto inmediatas como remotas, que habían precedido a los incidentes denunciados por Israel, los patrocinadores consideraban también que los mejores resultados no se obtendrían condenando a una u otra de las dos partes, sino dirigiendo un llamamiento a ambas.

Los representantes de Bulgaria, Jordania, Malí y la URSS expresaron dudas acerca del proyecto de resolución de las seis Potencias e indicaron que si sus patrocinadores accedían a que se eliminara el párrafo 2 de la parte dispositiva o aceptaban que se le sometiera a votación por separado, entonces podrían votar a favor del proyecto. En respuesta, el representante de Uganda, hablando en nombre de los patrocinadores, declaró que sería difícil acceder a lo pedido puesto que de esa manera se perturbaría el equilibrio que se había buscado en un principio.

El 4 de noviembre, el proyecto de resolución de las seis Potencias fue sometido a votación y recibió 10 votos a favor, 4 en contra (Bulgaria, Jordania, Malí y la URSS) y 1 abstención (China), pero no fue aprobado por haber votado en contra del mismo un miembro permanente del Consejo. Los representantes de los Estados Unidos y el Reino Unido manifestaron que no insistirían en que su proyecto de resolución fuese sometido a votación.

DENUNCIAS PRESENTADAS POR ISRAEL Y JORDANIA

El 12 de noviembre de 1966, el representante de Israel denunció que en la noche del 11 de noviembre un vehículo del ejército israelí que realizaba una patrulla ordinaria había sido volado por una mina terrestre, resultando muertos tres de sus ocupantes y heridos los otros seis. El incidente había ocurrido en la zona Hebron-Mar Muerto, a unos 2 kilómetros de la frontera entre Israel y Jordania y aproximadamente a 11 kilómetros al norte de la población Arad.

El 14 de noviembre, el representante de Jordania señaló a la atención la grave situación resultante de un acto patente de agresión cometido el 13 de noviembre, cuando la línea de demarcación del armisticio había sido cruzada por fuerzas armadas israelíes constituidas por una brigada apoyada por un escuadrón de aviones a chorro Mirage, artillería pesada, gran número de vehículos de transporte de tropas y más de 20 tanques. Las fuerzas invasoras habían tratado de destruir aldeas y caseríos árabes al sur de Hebron, sometiendo a fuego de artillería pesada a las aldeas de As Samu y Rafaat y al puesto de policía y la aldea de Tawawani.

Al día siguiente, el representante de Jordania solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad para examinar los actos de agresión cometidos el 13 de noviembre por las fuerzas armadas israelíes contra los ciudadanos y el territorio de Jordania.

El 16 de noviembre, el Consejo decidió examinar la denuncia presentada por Jordania e invitó al representante de Israel a participar en el debate. El Consejo discutió el asunto durante nueve reuniones celebradas entre el 16 y el 25 de noviembre. Al principiarse la primera reunión el Secretario General hizo una declaración verbal preliminar basada en algunos de los primeros informes que había recibido de los observadores de las Naciones Unidas destacados en la zona. Manifestó que el Organismo de Vigilancia de la Tregua había recibido de Jordania la denuncia de que el 13 de noviembre, a las 0615 hora local, vehículos blindados israelíes habían hecho fuego con artillería y ametralladoras pesadas desde el lado israelí de la línea de demarcación del armisticio contra un puesto de policía jordano situado en Rujm el Madfa, en la región meridional de Hebrón. El Presidente de la Comisión Mixta de Armisticio había tratado inmediatamente, en vano, de conseguir que cesara el fuego, y emprendido en Jordania una investigación que aún continuaba. Posteriormente se había recibido información de Jordania en el sentido de que las tropas israelíes se habían retirado y que había cesado el fuego. Los observadores militares de las Naciones Unidas que efectuaban la investigación habían interrogado a ocho testigos y observado daños y destrucción en As Samu, Jinba, Rafaat y el puesto de policía de Rujm el Madfa. Tan pronto como quedara terminada la investigación se presentaría al Consejo un informe completo sobre el incidente.

El 18 de noviembre, el Secretario General presentó al Consejo, a petición de éste, un informe del Jefe de Estado Mayor del Organismo para la Vigilancia de la Tregua relativo al incidente del 13 de noviembre, junto con un mapa topográfico de la zona en la que se había producido el incidente. En el informe, que se basaba en las investigaciones realizadas en Jordania por los observadores militares de las Naciones Unidas, se indicaba que el total de bajas parecía ser tres civiles y quince militares muertos y diez y siete civiles y treinta y siete militares heridos. En la zona encontraron fragmentos al parecer de depósitos de alas de aviones, gran cantidad de munición gastada, equipo y muchos cráteres. Había también muchas huellas de tanques y vehículos blindados de transporte de tropas. En la aldea de As Samu y en sus proximidades, los observadores militares observaron que habían quedado completamente destruidas 125 casas, el dispensario médico, una escuela de seis aulas y un taller. Además, habían sido dañadas una mezquita y 28 casas. Habían sido totalmente destruidos 20 camiones militares jordanios, dos jeeps y un autobús de transporte civil.

En la zona de Kh. Jinba había 15 chozas de piedra totalmente destruidas y siete dañadas, y un pozo destruido con explosivos. Se habían visto numerosas huellas de tanques y camiones-oruja que cruzaban la línea de demarcación de armisticio en dirección a la aldea y en sentido contrario. Se habían observado muchos cráteres al parecer causados por granadas de alto explosivo o por bombas de mortero. En el suelo se habían encontrado fragmentos de granada de un calibre indeterminado y un saqueto de alto explosivo. El puesto de policía de Rujm el Madfa había quedado casi totalmente destruido, y en la zona se habían observado muchos cráteres.

En el debate, el representante de Jordania recordó al Consejo que el representante de Israel había dicho reiteradamente ante el Consejo que su Gobierno no tenía

ninguna queja contra Jordania, la cual no había intervenido en ninguno de los incidentes ocurridos en el territorio ocupado por Israel. El representante de Jordania recordó además que, pese a las negativas de Israel, el orador había prevenido al Consejo en su primera serie de reuniones de que Israel estaba planeando una agresión. Según los primeros informes, las pérdidas de vidas y la destrucción de bienes eran grandes. A consecuencia de ese ataque, en Jordania había habido manifestaciones y la situación se estaba tornando extremadamente tirante. En vista de la gravedad del crimen, Jordania había esperado que los miembros permanentes del Consejo pronunciaran enérgicas declaraciones de condena. En lugar de ello, los Estados Unidos habían intentado justificar el ataque y seguían tratando la cuestión de Palestina como un problema interno; su política no había servido para disuadir a los criminales sionistas. Jordania había esperado que el Consejo actuaría con firmeza, no sólo a causa de la gravedad del crimen, sino porque ya había adoptado una posición acerca de las medidas que tomaría si Israel repetía su agresión. En el pasado, el Consejo había condenado repetidamente a Israel por actos de agresión.

Sólo seis meses antes, Jordania había comunicado al Consejo una decisión de la Comisión Mixta de Armisticio, que había censurado un acto hostil y bélico oficialmente planeado por las autoridades israelíes y emprendido por fuerzas israelíes contra Jordania, como una violación gravísima y notoria de los párrafos 2 y 3 del artículo III del Acuerdo de Armisticio General, y había deplorado los daños y la destrucción resultantes de la misma. Además, la Comisión había exhortado con la mayor energía a las autoridades de Israel a desistir de una actitud que constituía una grave amenaza a la paz y la seguridad. En vez de atender a esa exhortación, Israel había cometido otros actos de guerra, terrorismo y derramamiento de sangre, desafiando nuevamente a la Carta y al Consejo. El nuevo ataque contra Jordania era una nueva manifestación de desprecio y de absoluto desafío a la autoridad del Consejo. Dadas las circunstancias, el único recurso consistía en aplicar el Capítulo VII de la Carta.

Para concluir, el representante de Jordania instó al Consejo a adoptar las siguientes medidas: condenar a Israel por el inexcusable ataque del 13 de noviembre de 1966 ejecutado por sus fuerzas militares regulares contra el territorio y el pueblo de Jordania; expresar su grave preocupación ante el incumplimiento, por Israel, de sus obligaciones; decidir que el ataque armado era una violación notoria de la Carta y del Acuerdo de Armisticio General y constituía una agresión según las disposiciones del Artículo 39 de la Carta; y aplicar sanciones económicas contra Israel.

En respuesta, el representante de Israel dijo que no serviría a ningún propósito constructivo el desaprobador una acción determinada sin tener en cuenta las circunstancias que la habían provocado. Contrariamente a lo dispuesto en la Carta y en los Acuerdos de Armisticio, los cuatro Gobiernos árabes de los países lindantes con Israel, luego de haber tratado de aplastar a este país en 1948, se negaban a aceptar su independencia política y su integridad territorial y propugnaban su extinción como Estado y la dispersión de su pueblo por la fuerza de las armas. Desde enero de 1965 había habido 71 incursiones, algunas a través de la frontera siria y otras a través de las fronteras con otros países árabes vecinos. Israel siempre había puesto en claro

ante el Consejo que, si bien Siria era la fuente principal de las dificultades, el gobierno de cada Estado vecino debía cumplir plenamente su obligación de impedir ataques o incursiones desde sus territorios contra Israel. Recientemente, las operaciones de terrorismo y sabotaje a través de la frontera con Jordania se habían tornado más audaces y frecuentes, con la intervención de ciertas aldeas de Jordania que servían como bases de operaciones y zonas de tránsito militar. Los habitantes de esas aldeas habían dado asilo a los saboteadores y les habían prestado ayuda sin que las autoridades de seguridad de Jordania interviniesen seriamente. Israel, después de soportar durante largo tiempo esa situación, y como último recurso, había emprendido, con renuencia, ciertas acciones locales limitadas contra las aldeas de que se trataba. Su acción defensiva había sido ejecutada por una fuerza de tarea relativamente reducida que había recibido instrucciones directas de adoptar todas las medidas posibles para evitar bajas. Su Gobierno lamentaba cualesquiera bajas resultantes de esa acción, de la misma manera que lamentaba las bajas resultantes de los ataques efectuados contra Israel que habían precedido a la misma.

En el contexto de su problema de seguridad, Israel no podía permitir que se hicieran incursiones de guerrilla con impunidad. Se había sugerido que Israel, al ser atacada, debía limitarse a recurrir al mecanismo de las Naciones Unidas destacado en la zona, y particularmente a la Comisión Mixta de Armisticio. No obstante, lo que estaba en juego no era el mecanismo de las Naciones Unidas, sino la política de los gobiernos. Los Estados árabes eran los únicos que podían resolver el problema poniendo fin a los ataques desde sus territorios y a su incitación a la guerra.

El 24 de noviembre, los representantes de Nigeria y Malí presentaron un proyecto de resolución en virtud del cual, el Consejo: 1) deploraría la pérdida de vidas humanas y los graves daños materiales que habían sido consecuencia de la acción del Gobierno de Israel llevada a cabo el 13 de noviembre de 1966; 2) censuraría a Israel por esta acción militar en gran escala efectuada en violación de la Carta de las Naciones Unidas y del Acuerdo de Armisticio General entre Israel y Jordania; 3) llamaría la atención de Israel sobre el hecho de que las acciones de represalia militar no podían tolerarse y de que, si se repetían, el Consejo de Seguridad tendría que estudiar nuevas y más eficaces medidas, como se preveía en la Carta, para asegurar que tales actos no habrían de repetirse; y 4) pediría al Secretario General que mantuviese la situación bajo estudio y que informase al Consejo de Seguridad cuando fuese conveniente.

Al presentar el proyecto de resolución, el representante de Nigeria manifestó en nombre de los patrocinadores que éstos no esperaban que ninguna de las partes aplaudiese su proyecto de resolución; en cambio, esperaban que, si el Consejo lo aprobaba, lo aceptarían como una expresión del interés del Consejo y de su genuina preocupación acerca de la situación de tirantez existente entre Jordania e Israel y de su deseo de que la paz se restableciera y mantuviera en esa zona sobre la base de la coexistencia pacífica.

Los representantes de China, los Estados Unidos, Francia, el Japón, los Países Bajos y el Reino Unido declararon que deploraban y censuraban la acción militar, planeada y ejecutada por las autoridades de Israel contra un país que respetaba sus obligaciones internacionales; elogiaron a Jordania por haber presentado su

queja al Consejo en vez de recurrir al uso de las fuerzas armadas; opinaron que la acción de Israel era injustificada y desproporcionada a los incidentes que la habían precedido y constituía una clara violación del Acuerdo de Armisticio; e instaron a todos los gobiernos interesados a atenerse estrictamente al Acuerdo de Armisticio.

Los representantes de Bulgaria y la URSS manifestaron que condenaban la acción como un acto patente de agresión militar no provocada perpetrado por Israel contra el territorio de un país árabe vecino; pidieron al Consejo que condenase enérgicamente a Israel como agresor que había violado el Acuerdo de Armisticio, las muchas resoluciones del Consejo de Seguridad y los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas; e instaron al Consejo a adoptar medidas eficaces para asegurar la cesación, para siempre, de los actos agresivos realizados contra los países árabes por los círculos extremistas de Tel Aviv.

El representante de Nueva Zelandia manifestó que, aunque comprendía las frustraciones causadas por los constantes incidentes — inclusive las pérdidas de vidas originadas por las actividades terroristas ejecutadas a través de las fronteras de Israel — y reconocía el carácter del dilema estratégico en que se veía Israel, no podía condenar un acto deliberado de represalia que era diferente de la serie de actos terroristas que lo habían precedido y que no guardaba proporción con los mismos.

El representante del Uruguay consideró que los acontecimientos censurados por Jordania constituían actos ilegítimos de agresión, y dijo que apoyaría toda medida que promoviese una paz justa y condujese a tranquilizar el Oriente Medio.

El representante de Uganda declaró que cualesquiera que fuesen los motivos aducidos para justificarla, la operación ejecutada por Israel el 13 de noviembre de 1966 estaba absolutamente desproporcionada al total acumulativo de los diversos actos de terrorismo realizados contra dicho país. Uganda condenaba sin reservas y sin equívocos esa acción deplorable y deliberada. A juicio de ese representante, era importante concentrar la atención en las verdaderas causas de esos estallidos y establecer como cuestión de urgencia el mecanismo necesario para llegar a la raíz del problema.

Los representantes de Nigeria y Malí manifestaron que deploraban y condenaban la acción de Israel contra Jordania e instaron al Consejo a insistir en que se acatasen las disposiciones de los Acuerdos de Armisticio General y a estudiar las medidas necesarias para disminuir la tirantez en la zona.

El 25 de noviembre, el Consejo de Seguridad aprobó el proyecto de resolución por 14 votos contra ninguno y 1 abstención (Nueva Zelandia), como resolución 228 (1966).

[Para una reseña del examen por el Consejo de Seguridad de la situación en Oriente Medio en mayo y junio de 1967, véase el capítulo I *supra*.]

M. Asistencia a los refugiados de Palestina

INFORME DEL COMISIONADO GENERAL DEL ORGANISMO DE OBRAS PÚBLICAS Y SOCORRO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS DE PALESTINA EN EL CERCAÑO ORIENTE

En su informe anual a la Asamblea General, presentado el 31 de agosto de 1966, el Comisionado General del

OOPS subrayó la crítica situación financiera que seguía amenazando todo el futuro de los servicios que el Organismo prestaba a los refugiados; esbozó la política que éste desearía seguir en caso de recibir ingresos suficientes; analizó los problemas actuales relacionados con la rectificación de las nóminas de raciones; y recabó la orientación de la Asamblea General sobre las medidas que deberían adoptarse en la eventualidad de que no pudieran obtenerse ingresos suficientes.

No había habido indicios de ningún cambio en las circunstancias fundamentales que originaron la necesidad de asistencia internacional a los refugiados, cuyo número aumentaba constantemente y que seguían acudiendo al OOPS para que les proporcionase servicios educativos y sanitarios, alojamiento y alimentación. Además, los refugiados seguían manteniendo lo que consideraban su derecho legítimo a regresar a sus antiguos hogares e insistiendo en que las Naciones Unidas les habían dado reiteradamente garantías, que seguían sin cumplirse, en materia de repatriación y de indemnizaciones. A medida que pasaban los años, no había indicio alguno de que disminuyese la amargura que en los refugiados provocaba el convencimiento de que eran víctimas de una grave injusticia por la pérdida de sus hogares y de su patria y por la constante pérdida de todos los frutos producidos por los bienes que habían dejado atrás. Por consiguiente, seguían siendo tan graves como siempre las consecuencias que para la paz y la estabilidad en el Oriente Medio tenía la persistencia del problema de los refugiados de Palestina.

Aunque había logrado conjurarse la bancarrota del Organismo que había predicho el Comisionado General en su informe anterior, era todavía necesario contar con fondos adicionales para que el Organismo pudiese continuar su labor. Por ello, el Comisionado General solicitó encarecidamente a todos los gobiernos que facilitasen los fondos necesarios para satisfacer las crecientes necesidades de la comunidad de refugiados. También pidió que la cuestión de la ayuda a los refugiados se considerase como un problema humanitario, dejando a un lado consideraciones políticas que tendían a deformar los problemas y a apartar la atención de las necesidades urgentes de los refugiados como seres humanos.

Consideración por la Asamblea General

La Comisión Política Especial dedicó al examen del informe anual del Comisionado General diecinueve sesiones, entre el 17 de octubre y el 14 de noviembre de 1966.

Al presentar su informe, el Comisionado General destacó que las necesidades de los servicios del OOPS y los gastos totales habían continuado aumentando, y señaló que cabía esperar que esta tendencia continuase en los años venideros. Se refirió a los nuevos esfuerzos realizados en cooperación con los Gobiernos interesados para rectificar la lista de personas con derecho a ración, señalando que se había conseguido algún progreso, aunque limitado, e indicó también que se habían adoptado medidas para hacer donaciones adicionales especiales destinadas a cubrir el costo total de las raciones consumidas por los jóvenes sujetos a instrucción militar bajo los auspicios de la Organización de Liberación de Palestina. Al destacar algunas de las realizaciones más importantes del OOPS, en particular el sistema de enseñanza y los programas de formación profesional que llevaba a cabo el Organismo, el Comisio-

nado General reiteró la esperanza de que se encontrase la forma de que el OOPS continuase desempeñando su función satisfactoriamente.

El 17 de octubre, la Comisión Política Especial recibió una carta de doce Estados árabes en que se le solicitaba que se diese audiencia a una delegación de la "Organización de Liberación de Palestina"; el 24 de octubre, la Comisión decidió acceder a lo solicitado, sin que esta autorización significase el reconocimiento de esa Organización. El 18 de octubre, la Comisión recibió una solicitud del Paquistán y Arabia Saudita para que escuchase una declaración de la "Delegación Árabe de Palestina", y el 24 de octubre decidió acceder a lo solicitado, en las mismas condiciones.

Durante el examen de la cuestión por la Comisión Política Especial, los representantes de los Estados árabes sostuvieron, como lo vienen haciendo desde hace muchos años, que lo que impedía que se aplicase la resolución 194 (III) de la Asamblea General, de 11 de diciembre de 1948, en que se disponía la repatriación o indemnización de los refugiados de Palestina, era el incumplimiento por parte de Israel de sus obligaciones en virtud de la Carta de las Naciones Unidas. Si bien expresaron su agradecimiento por los programas llevados a cabo por el OOPS y por las contribuciones aportadas para financiar sus actividades, deploraron el desequilibrio del presupuesto del Organismo y expresaron su convencimiento de que había llegado el momento de que las Naciones Unidas encontrasen una nueva forma de financiarlo, ya fuera nombrando un depositario judicial que administrase los bienes de los refugiados y entregase la renta correspondiente a sus propietarios legítimos, o bien incorporando el presupuesto del Organismo al de las Naciones Unidas. Varios representantes árabes hicieron la acusación de que el pueblo de Palestina había sido víctima de una agresión colonial llevada a cabo por una conspiración entre las fuerzas sionistas y las imperialistas, que habían creado un Estado títere a fin de perpetuar su control sobre los recursos económicos y estratégicos de la región. Israel podía continuar desafiando las resoluciones de las Naciones Unidas y seguir siendo causa de una tirantez y un desorden que amenazaban la paz y la seguridad, no sólo del Oriente Medio, sino de todo el mundo, únicamente por el enorme apoyo financiero y militar que le proporcionaban las Potencias imperialistas. No podía considerarse que el problema de los refugiados fuese simplemente una cuestión de proporcionar socorro, porque era en realidad parte de toda la cuestión colonial conocida como la cuestión de Palestina. Como el peligro inherente a la situación requería una solución urgente, la primera medida de importancia debería ser la repatriación del pueblo de Palestina. Hasta que se tomase esta medida, deberían adoptarse inmediatamente otras, destinadas a poner fin a la confiscación e incautación ilegal de tierras árabes en virtud de la ley de adquisición de tierras de Israel. El derecho internacional no condonaba la confiscación de la propiedad de toda una nación, ni había en la historia caso alguno en que se hubiera privado a toda una nación de sus bienes, muebles e inmuebles. Además, durante los últimos dieciocho años la Asamblea General había reconocido y confirmado en cada uno de sus períodos de sesiones los derechos del pueblo árabe de Palestina a la repatriación o la indemnización, como se estableció primeramente en la resolución 194 (III). La esperanza de los palestinos de que las Naciones Unidas encontrasen una solución equitativa y restableciesen sus derechos estaba ya

agotada. El que la Organización no hubiese tomado medidas para aplicar sus decisiones estaba socavando su prestigio y constituía una invitación a los palestinos para buscar reparación por otros medios a fin de obtener la libre determinación y la liberación de su patria. El logro de una solución justa dependía de las Naciones Unidas, que habían votado por la partición de Palestina en contra de los deseos de la mayoría de su pueblo. Una solución de esta índole nunca podría obtenerse mediante negociaciones directas, porque el derecho de los refugiados a la repatriación no podía ser objeto de negociación, en tanto que para Israel la negociación significaba el reconocimiento del hecho consumado.

El representante de Israel señaló que la amplia cuestión de las relaciones árabe-israelíes no figuraba en el programa de la Comisión Política Especial, pero que en la última resolución de la Asamblea General al respecto, resolución 512 (VI), se había considerado que correspondía primordialmente a los gobiernos interesados llegar a una solución de las diferencias pendientes entre ellos. En respuesta a las acusaciones formuladas por los portavoces árabes, afirmó que Israel era el resultado del movimiento de liberación nacional y de libre determinación del pueblo judío. Los gobiernos árabes se habían opuesto a ese movimiento por la fuerza y con ello habían creado el problema de los refugiados. El llamamiento hecho por ciertos dirigentes árabes en favor de una solución militar era completamente inaceptable porque era contrario a la Carta y a la resolución 2131 (XX) de la Asamblea General sobre la no intervención, violaba el Acuerdo de Armisticio General y podría llevar a que los propios refugiados fuesen sacrificados por sueños de revanchismo. Evidentemente, lo más satisfactorio sería una solución diplomática, si se pudiese negociar un acuerdo entre los cuatro países de asilo e Israel, como se había propuesto reiteradamente en la Asamblea General, cosa que habían rechazado las delegaciones árabes, cuya posición había dejado impotente a la Comisión de Conciliación para Palestina de las Naciones Unidas. En cuanto a lo que el orador calificó de solución obligatoria impuesta por las Naciones Unidas, conforme al deseo árabe de que la Asamblea General tratase a Israel como si fuese un territorio bajo la administración de las Naciones Unidas, este criterio era insostenible porque las Naciones Unidas no podían conferir a los particulares el derecho a cruzar las fronteras de un Estado Miembro ni imponer tal obligación a un Estado Miembro. Finalmente, con respecto al criterio económico para llegar a una solución, consideraba que el OOPS podría cumplir una función dinámica y promover el sostenimiento por propios medios, la rehabilitación y la integración económica de los refugiados, conforme a su mandato inicial. Lo que se necesitaba era un nuevo programa de rehabilitación e indemnización que dispusiese de fondos cuantiosos. El Gobierno de Israel estaría dispuesto a prestar considerable apoyo a un programa de esta índole. Todo consistía en saber si se quería perpetuar el problema de los refugiados con fines militares y políticos o resolverlo en aras de la humanidad.

Durante el examen del tema por la Comisión Política Especial se presentaron dos proyectos de resolución. En virtud del primero de ellos, presentado por los Estados Unidos, la Asamblea General: 1) tomaría nota con profundo pesar de que ni la repatriación ni la indemnización de los refugiados dispuestas en el párrafo 11 de la resolución 194 (III) de la Asamblea General se habían efectuado todavía y que no se había alcanzado

progreso notable en la ejecución del programa que la Asamblea había hecho suyo en el párrafo 2 de su resolución 513 (VI) para reincorporar a los refugiados por repatriación o reasentamiento, y que, por lo tanto, la situación de éstos seguía siendo motivo de grave preocupación; 2) agradecería al Comisionado General y al personal del Organismo, así como a los organismos especializados y a las organizaciones privadas, su valiosa labor de ayuda a los refugiados; 3) señalaría la persistente y crítica situación financiera del OOPS; 4) observaría con preocupación que, pese a los loables y fructíferos esfuerzos del Comisionado General para allegar nuevas contribuciones que ayudasen a aliviar el grave déficit presupuestario del año anterior, las contribuciones del OOPS seguían sin alcanzar los fondos requeridos para atender las necesidades presupuestarias esenciales; 5) exhortaría a todos los gobiernos a que hicieran con urgencia los esfuerzos más generosos posibles para atender a las necesidades previstas del Organismo; 6) tomaría nota con preocupación de que, no obstante algunos progresos, se requerían nuevas medidas para la rectificación de las listas de socorro y, por consiguiente, encomendaría al Comisionado General que tomase estas medidas, entre ellas la rectificación de las listas de socorro, para lograr en cooperación con los gobiernos interesados la distribución más equitativa posible del socorro según las necesidades; y 7) tomaría nota con pesar de que la Comisión de Conciliación de las Naciones Unidas para Palestina no había podido hallar el modo de avanzar en el cumplimiento del párrafo 11 de la resolución 194 (III) por no haber cambiado la situación en la región, y exhortaría a los gobiernos interesados a cooperar para que la Comisión pudiese proseguir sus esfuerzos con ese fin.

El Afganistán, Malasia, el Paquistán y Somalia presentaron el segundo proyecto de resolución, en virtud del cual la Asamblea General: 1) pediría al Secretario General que adoptase todas las medidas pertinentes para que se nombrase a un curador que se encargara de proteger y administrar las propiedades, haberes y derechos de propiedad árabes en Israel y de recibir los ingresos procedentes de los mismos en nombre de los legítimos propietarios; 2) encarecería a los gobiernos interesados que brindasen todas las facilidades y ayuda necesarias al Secretario General para asegurar la eficacia de la tarea y las actividades del curador; y 3) pediría al curador que informase a la Asamblea General, en su vigésimo segundo período de sesiones, sobre el cumplimiento de su misión.

Somalia presentó enmiendas al proyecto de resolución de los Estados Unidos según las cuales: 1) en el párrafo 5 de la parte dispositiva, la Asamblea General instaría también a los gobiernos no contribuyentes a que contribuyesen y a los gobiernos contribuyentes a que considerasen la posibilidad de aumentar sus contribuciones; 2) se modificaría la redacción del párrafo 6 de la parte dispositiva de modo que se encomendase al Comisionado General que continuase sus esfuerzos para tomar las medidas necesarias, entre ellas la rectificación de las listas de socorro, para lograr, en cooperación con los gobiernos interesados, la distribución más equitativa posible del socorro según las necesidades; 3) se modificaría la redacción del párrafo 7 de la parte dispositiva de modo que la Asamblea tomaría nota con pesar de que la Comisión de Conciliación de las Naciones Unidas para Palestina no había podido hallar el modo de avanzar en cumplimiento del párrafo 11 de la reso-

lución 194 (III), y exhortaría al Gobierno de Israel a cooperar con la Comisión a este respecto; y 4) se añadiría un nuevo párrafo dispositivo en virtud del cual la Asamblea General pediría a la Comisión de Conciliación de las Naciones Unidas para Palestina que intensificase sus esfuerzos para dar cumplimiento al párrafo 11 de la resolución 194 (III) e informase al respecto según correspondiera, y a más tardar el 1º de octubre de 1967.

El 14 de noviembre, cuando la Comisión puso a votación las propuestas que tenía ante sí, quedaron aprobadas las dos primeras enmiendas presentadas por Somalia, los Estados Unidos aceptaron la cuarta, y la tercera fue rechazada. El proyecto de resolución de los Estados Unidos, con las enmiendas introducidas, fue luego aprobado por 65 votos contra ninguno y 45 abstenciones. La Comisión rechazó el proyecto de resolución de las cuatro Potencias por 38 votos contra 36 y 36 abstenciones.

El 17 de noviembre, la Asamblea General, por 68 votos contra ninguno y 39 abstenciones, aprobó el proyecto de resolución presentado por la Comisión Política Especial, como resolución 2154 (XXI).

ACTIVIDADES DEL ORGANISMO DE OBRAS PÚBLICAS Y SOCORRO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS DE PALESTINA EN EL CERCAÑO ORIENTE

El Organismo mantuvo los servicios de sanidad y educación establecidos para los refugiados necesitados y prosiguió el cumplimiento de sus programas de educación general y superior y de formación profesional y técnica de refugiados jóvenes, en un ambiente de creciente tirantez política.

El número de niños refugiados a los que se educaba con asistencia del OOPS volvió a registrar un gran aumento y pasó de 235.000 en mayo de 1966 a unos 250.000 en mayo de 1967. Se construyeron algunas aulas adicionales y se planificaron ulteriores construcciones escolares que se financiarían con fondos recuperados del Banco de Fomento de Jordania. El Instituto de Enseñanza del OOPS y de la UNESCO continuó proporcionando formación en el servicio para mejorar la calidad de la enseñanza en las escuelas primarias del Organismo. Desde que empezó a funcionar en octubre de 1964, el Instituto ha extendido certificados a 632 maestros. En total asistían a sus cursos 1.500 maestros y se esperaba que unos 600 de ellos los concluyeran en el verano de 1967.

Unos 3.550 jóvenes refugiados se beneficiaron con el programa de formación profesional y de formación de maestros del Organismo, tanto en los centros residenciales del OOPS como en otras instituciones. En 1966 se otorgaron diplomas a más de 1.660 estudiantes, y 270 de los refugiados recientemente graduados fueron a Europa o a la República Árabe Unida para recibir formación en el empleo. En el curso del mismo año, el Organismo otorgó 590 becas para estudios universitarios.

El número total de refugiados inscritos por el OOPS al 1º de abril de 1967 era de 1.338.000, lo que representa un aumento de 29.163 en doce meses. De dicho número, 860.955 se acogieron a todos los servicios, incluso raciones, en comparación con 860.516 al 1º de abril de 1966, y había además 370.216 personas con derecho a los servicios de educación y a los servicios mé-

dicos prestados por el Organismo. No se modificó la ración alimenticia básica.

El número de refugiados residentes en campamentos del OOPS aumentó en casi 15.000 durante el año hasta llegar a 530.220 al 1º de abril de 1967. Se terminó y ocupó un nuevo campamento y estaba muy adelantada la construcción de otro, pero el número de alojamientos disponibles seguía siendo considerablemente inferior a la demanda.

El Organismo continuó dando asistencia limitada en casos reconocidos de dificultades especiales, y capacitando y educando a niños refugiados impedidos. Con ayuda de contribuciones especiales, se mantuvieron modestos programas de actividades juveniles y femeninas.

El Organismo continuó prestando servicios sanitarios preventivos y curativos a los refugiados, en clínicas, hospitales y laboratorios dirigidos o subvencionados por el OOPS. El programa sanitario comprendió también la atención nutritiva a grupos vulnerables de refugiados, la prestación de servicios de saneamiento del medio en los campamentos, y enseñanza sanitaria. Gracias a donaciones especiales fue posible construir algunos centros sanitarios nuevos e introducir mejoras en los existentes.

El OOPS contó, como en años precedentes, con el asesoramiento y ayuda de otros organismos de las Naciones Unidas, particularmente de la UNESCO y de la OMS, y colaboró estrechamente con los organismos voluntarios que cumplen actividades en favor de los refugiados de Palestina.

Situación financiera

En 1966 el Organismo gastó o asignó cerca de 37.500.000 dólares (en comparación con 37.600.000 dólares en 1965), de los cuales 17.300.000 dólares correspondían a servicios de socorro (raciones básicas, alimentación complementaria, alojamiento y asistencia en caso de dificultades especiales), 5.000.000 de dólares a servicios de sanidad (servicios médicos y saneamiento del medio) y 15.100.000 dólares a servicios de educación y formación profesional.

Los ingresos de 1966 sumaron en total solamente 36.300.000 dólares. Por consiguiente, el Organismo tuvo un déficit de 1.200.000 dólares y volvió a verse en la obligación de recurrir a su capital de trabajo (reserva de operaciones). En 1967 tendrá un déficit aún mayor.

Personal

Al 30 de abril de 1967, el personal del OOPS se componía de 11.468 funcionarios contratados localmente y 108 funcionarios internacionales. Esta cifra representa una reducción del 21,2% del personal internacional en el curso de doce meses.

N. Reclamación del Reino Unido contra el Yemen

El 2 de agosto de 1966, el Reino Unido solicitó la convocatoria inmediata del Consejo de Seguridad para examinar la situación creada por un ataque no provocado e indefendible contra la ciudad de Nuqub, que se encuentra en un Estado parte de la Federación de Arabia Meridional, de cuya protección y de cuyas re-

laciones exteriores era responsable el Reino Unido. El 30 de julio, dos aviones, al parecer MIGs pertenecientes a la Fuerza Aérea de la República Árabe Unida, habían realizado partiendo de un aeropuerto del Yemen dos vuelos rasantes de ataque contra la ciudad de Nubukub, disparando con ametralladoras y cañones de 20 milímetros y haciendo uso de municiones tanto incendiarias como de alto poder explosivo. Tres niños árabes habían resultado heridos y se había contado hasta el momento un total de 75 impactos en casas de la ciudad.

El 4 de agosto el Consejo de Seguridad decidió sin objeciones incluir el tema en su programa e invitó a los representantes de la República Árabe Unida y del Yemen a participar en el debate, sin derecho a voto. El Consejo estudió el tema en cinco sesiones, que se celebraron entre el 4 y el 16 de agosto.

El representante del Reino Unido declaró que el Consejo había expresado recientemente profunda preocupación por ciertos asuntos del Oriente Medio, así como el deseo de que las controversias se resolvieran por conducto de las Naciones Unidas. La ciudad afectada era reconocible y estaba aislada. Las características salientes del ataque eran que había sido llevado a cabo por dos aviones que venían de la dirección del Yemen, que respondían a la descripción de los MIGs y que usaban municiones de fabricación soviética. La República Árabe Unida poseía tales aviones. Después del ataque de abril de 1965, el Reino Unido había informado a la República Árabe Unida que, de producirse nuevos ataques, se sometería la cuestión al Consejo de Seguridad. En junio de ese año el Reino Unido había aceptado, con respecto a otro ataque, las explicaciones de la República Árabe Unida de que se trataba de un "error del piloto". Tal explicación no era posible en el caso presente, porque el ataque había tenido lugar 17 millas al interior del territorio federal. La conclusión del Reino Unido era que el ataque había sido deliberado y que probablemente estaba relacionado con otras actividades en la zona. Si se quería que el Reino Unido cumpliera su empeño de llevar esa zona a la independencia en 1968, de acuerdo con los deseos de los habitantes locales y en conformidad con las recomendaciones pertinentes de las Naciones Unidas, era necesario que imperase la paz. El Reino Unido solicitaba ahora que el Consejo deplorase el ataque y ordenase a las autoridades de la República Árabe Unida y del Yemen que garantizaran que no volverían a ocurrir nuevos incidentes de esa índole. Con respecto a las dificultades que habían surgido anteriormente entre el Yemen y la Federación de Arabia Meridional, el Reino Unido, en cooperación con las autoridades federales, se había esforzado por llegar a un arreglo. Quizás alguna forma de observación encomendada a las Naciones Unidas pudiese contribuir al logro de una solución. El Reino Unido seguía dispuesto a explorar esa posibilidad por conducto de los buenos oficios del Secretario General. Los habitantes de Arabia Meridional tenían derecho a pedir que no se los hiciera objeto de ataques externos, ni de intimidaciones, ya que el territorio estaba en los umbrales de la independencia.

En respuesta, el representante del Yemen declaró que, aun si las afirmaciones del Reino Unido hubieran sido ciertas, no habrían justificado la prisa con que ese país convocó al Consejo. El Yemen podía citar muchos incidentes de carácter más grave que el que había motivado las acusaciones británicas, pero no había pedido que se convocara al Consejo. El Yemen

había estado sometido a la agresión británica desde hacía 130 años. Luego de citar algunos párrafos de cartas en las cuales su gobierno protestaba por actos del Reino Unido desde abril de 1964 en adelante, el representante del Yemen dijo que éste era sólo uno de los aspectos de la posición hostil del Reino Unido contra el Yemen y de su intervención en los asuntos internos de su país. La hostilidad había aumentado desde que el pueblo del Yemen meridional, ocupado por los británicos, se había levantado contra la dominación y la represión coloniales. El Yemen negaba categóricamente las acusaciones del Reino Unido y temía que el motivo oculto tras la reclamación británica fuera el de preparar un nuevo acto de agresión contra él. Al igual que otras acusaciones que el Reino Unido formulara en el pasado, la reclamación no tenía base. El Yemen tenía motivos de quejas reales y no imaginarios por incursiones británicas en su territorio: violaciones británicas de su espacio aéreo, provocaciones y actos de agresión. Agregó que los británicos sólo proyectaban una nueva forma de colonialismo para el Yemen meridional ocupado, al que denominaban Federación de Arabia Meridional. El Reino Unido no había aceptado las recomendaciones de las Naciones Unidas sobre Adén. El representante del Yemen dijo que otro posible motivo de la reclamación del Reino Unido podría ser su deseo de evitar que la Asamblea General tomara medida alguna en relación con el problema en su vigésimo primer período de sesiones. Los británicos sabían que el Yemen era uno solo, y que uno de los frutos de la libertad sería su reunificación, efectuada por los propios yemenitas.

El representante de la República Árabe Unida declaró que los árabes, a quienes intentaba dividir el Reino Unido, sabían quiénes eran sus enemigos. Gran Bretaña, cuyo colonialismo e imperialismo era una especie de pulpo en el mundo árabe, había tratado de ocultar su opresión al pueblo de Adén y al Protectorado de Adén. Los únicos aviones que volaban sobre esos territorios pertenecían al Reino Unido. Ningún avión de la República Árabe Unida había emprendido tipo de operación alguna en Beihan y, según el mando conjunto árabe-yemenita, ninguno de sus aviones había realizado vuelos el 30 de julio. El representante de la República Árabe Unida recordó que anteriormente el Consejo había condenado a los británicos por su agresión contra Harib, en el Yemen. El Reino Unido había estado tratando de desacreditar a la República Árabe Unida, la cual estaba apoyando la lucha por la libertad y por la libre determinación en Arabia meridional.

El 10 de agosto, Nueva Zelandia presentó un proyecto de resolución en virtud del cual el Consejo decidiría pedir al Secretario General que adoptara las medidas oportunas para efectuar una investigación inmediata, realizada por personal de las Naciones Unidas con experiencia, a fin de determinar los hechos relacionados con el incidente a que se refería la reclamación del Reino Unido del 2 de agosto de 1966, y que informase al Consejo de Seguridad lo antes posible.

Al presentar el proyecto, el representante de Nueva Zelandia manifestó que las pruebas presentadas al Consejo eran contradictorias. Como la conclusión que podía desprenderse de esto era que los que consideraban que no se habían probado las acusaciones del Reino Unido parecían opinar que el Consejo sólo debía aceptar el veredicto de un investigador imparcial, era evidente

que el Consejo debía tomar medidas para efectuar una investigación imparcial. El representante de Nueva Zelandia sugirió que se pidiera al Secretario General que pusiera en marcha una investigación inmediata a cargo de un grupo de las Naciones Unidas.

El representante de Jordania aceptó la afirmación de la República Árabe Unida de que ninguno de sus aviones había estado en la zona. El Consejo crearía un peligroso precedente si enviara un grupo de investigación a esa zona. Las acusaciones británicas, en sí, carecían de base suficiente. Lo que había que hacer en la zona era poner término inmediato al régimen colonial y restablecer los derechos del pueblo.

El representante de Malí, aun apoyando la propuesta de solicitar los buenos oficios del Secretario General, dijo que su delegación no consideraba válida la reclamación del Reino Unido. A su delegación le preocupaba que el Gobierno del Reino Unido no hubiera cooperado con las Naciones Unidas con respecto a la concesión de la independencia al pueblo de Arabia meridional.

En apoyo del proyecto de resolución de Nueva Zelandia, los representantes de la Argentina, los Estados Unidos, los Países Bajos y el Uruguay expresaron su opinión de que, a falta de pruebas objetivas, las divergencias de opinión entre las partes directamente interesadas ponían al Consejo en una situación difícil. El único medio efectivo de atender la reclamación era confiar a una autoridad imparcial la tarea de determinar la verdad con respecto a los hechos relacionados con el incidente acaecido el 30 de julio.

El representante de Nigeria, apoyado por los representantes del Japón y de Francia, se manifestó complacido por la propuesta de realizar una investigación y exhortó al Consejo a que se esforzara por lograr un consenso que contribuyera a reducir el estado de tensión en dicha zona.

Los representantes de Bulgaria y de la URSS sostuvieron que la acusación del Reino Unido no respondía a los hechos y era injustificada. El bombardeo de Nuqub era una de las muchas expediciones y operaciones punitivas del colonialismo británico. La independencia forzada que el Reino Unido decía estar planeando para el pueblo de esa zona sería solamente una continuación del colonialismo con otro disfraz. Sería inútil realizar una investigación como la que se había solicitado. La solución del problema de Arabia meridional consistía en concederle la independencia, como se ha confirmado en muchas decisiones de las Naciones Unidas, y en terminar con las bases militares británicas allí establecidas.

El 16 de agosto, como resultado de las consultas celebradas por los miembros del Consejo, el Presidente leyó una declaración que, según dijo, tenía el apoyo de todas las partes interesadas, al efecto de que el Presidente, habiendo notado que el debate tenía origen en una denuncia presentada por el representante del Reino Unido, que la República Árabe Unida y el Yemen se oponían a los elementos en los cuales se basaba la misma y que las declaraciones de los miembros del Consejo no habían podido llevar a una solución constructiva, consideraba que estaba autorizado para pedir a las partes interesadas que contribuyeran a disminuir la tensión y para invitar al Secretario General a continuar sus buenos oficios en un intento por resolver la

cuestión pendiente de conformidad con las partes interesadas.

El representante de Nueva Zelandia no insistió en que se votase sobre su propuesta y aceptó la declaración del consenso.

O. *Observancia estricta de la prohibición de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en las relaciones internacionales y del derecho de los pueblos a la libre determinación*

El 19 de septiembre de 1966, Checoslovaquia solicitó que se incluyera en el programa del vigésimo primer período de sesiones de la Asamblea General un tema titulado "Observancia estricta de la prohibición de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en las relaciones internacionales y del derecho de los pueblos a la libre determinación". En el memorando explicativo que acompañaba a su solicitud, Checoslovaquia declaró que la Asamblea debería adoptar medidas que permitieran asegurar relaciones pacíficas entre los Estados, afianzar su seguridad y apoyar la lucha de las naciones en pro de la libertad, la independencia y el desarrollo independiente. Agregaba que la Asamblea General debería afirmar solemnemente el principio de la prohibición de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en las relaciones internacionales, así como el derecho de los pueblos a la libre determinación, y condenar resueltamente toda violación de esos principios. Decía también que la Asamblea debería instar a todos los Estados a observar tales principios estricta e incondicionalmente.

El 24 de septiembre de 1966, la Asamblea General incluyó el tema en su programa. La Asamblea examinó el tema, sin remitirlo a ninguna Comisión, durante nueve sesiones entre el 9 y el 30 de noviembre de 1966.

Durante el debate, una gran mayoría de los oradores estuvieron de acuerdo en la conveniencia y la necesidad de reafirmar los principios de la observancia estricta de la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y del derecho de los pueblos a la libre determinación. No obstante, se expresaron diversos pareceres sobre la interpretación de esos principios.

El 11 de noviembre, el representante de Checoslovaquia presentó un proyecto de resolución patrocinado por catorce países. Según ese proyecto de resolución, la Asamblea General declararía que la fuerza militar, lo mismo que la presión política o económica de un Estado contra otro, constituyen una crasa violación del derecho internacional y que toda acción de fuerza contra los pueblos que luchan contra el colonialismo constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, y haría un llamamiento a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas a adoptar todas las medidas necesarias con miras a reducir la tirantez internacional, reforzar la paz y fomentar la coexistencia pacífica entre los Estados, cualesquiera que fueran sus sistemas sociales.

El 16 de noviembre, el representante de la República Democrática del Congo presentó enmiendas al proyecto de resolución de las catorce Potencias, según las cuales la Asamblea General declararía que el ataque

armado de un Estado contra otro y el uso de la amenaza o la coerción bajo cualquier forma, incluida la presión militar, política o económica, con objeto de atentar contra el ejercicio por parte de un Estado de los derechos legítimos inherentes a su soberanía, es contrario a la Carta y constituye una crasa violación del derecho internacional que da origen a responsabilidad internacional.

En virtud de otro proyecto de resolución presentado el 15 de noviembre por Costa Rica y los Estados Unidos, la Asamblea: 1) instaría a todos los países a que faciliten el ejercicio del derecho de libre determinación y se abstengan de emplear la fuerza armada para denegar ese derecho u obstaculizar de alguna otra manera su ejercicio, y 2) instaría a todos los países a que renuncien a toda doctrina que propugne el uso abierto de la fuerza armada, la subversión o el terrorismo para derrocar por la violencia los gobiernos de otros Estados, o la intervención en contiendas civiles.

El 17 de noviembre, ocho países presentaron un proyecto de resolución según el cual la Asamblea: 1) recomendaría que se asignara prioridad a los principios de la prohibición de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza y de la libre determinación de los pueblos dependientes en el nuevo estudio de los siete principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados, y 2) pediría al Secretario General que incluyera las actas de los debates celebrados sobre este tema en la documentación que deba ser examinada durante el nuevo estudio de los principios de derecho internacional relativos a las cuestiones conexas, con objeto de adoptar pronto una declaración en la que se enuncien tales principios.

Un grupo de trabajo compuesto por los representantes de los patrocinadores de los tres proyectos de resolución, junto con el representante de Austria, trató de superar las dificultades substantivas y prácticas resultantes de las diversas interpretaciones y enfoques de esta cuestión. Las consultas entre los patrocinadores culminaron en la presentación de un proyecto de resolución de transacción por veintidós países.

El 30 de noviembre de 1966, la Asamblea General aprobó el proyecto de resolución de las veintidós Potencias por 98 votos contra 2 y 8 abstenciones (resolución 2160 (XXI)). Por esta resolución la Asamblea General: 1) reafirmaba que: a) los Estados deberán respetar estrictamente, en sus relaciones internacionales, la prohibición de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas; en consecuencia, el ataque armado de un Estado contra otro o el uso de la fuerza en cualquier otra forma contraria a la Carta de las Naciones Unidas constituye una violación del derecho internacional que da origen a responsabilidad internacional; b) toda acción de fuerza, directa o indirecta, que prive a los pueblos bajo dominación extranjera de su derecho a la libre determinación y a la libertad e independencia y de su derecho a decidir libremente sobre su condición política y a llevar adelante su desarrollo económico, social y cultural constituye una violación de la Carta de las Naciones Unidas; en consecuencia, el uso de la fuerza para privar a los pueblos de su identidad nacional, prohibido por la Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención

en los asuntos internos de los Estados y protección de su independencia y soberanía, contenida en la resolución 2131 (XX) de la Asamblea General, constituye una violación de sus derechos inalienables y del principio de no intervención; 2) hacía un llamamiento urgente a los Estados a fin de que: a) renuncien a toda acción que sea contraria a los principios fundamentales antes enunciados y se abstengan de llevarla a cabo, y se aseguren de que sus actividades en materia de relaciones internacionales estén en plena armonía con los intereses de la paz y la seguridad internacionales; b) realicen todo tipo de esfuerzos y adopten todas las medidas necesarias con miras a facilitar el ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos bajo dominio colonial, reducir la tirantez internacional, reforzar la paz y fomentar las relaciones de amistad y la cooperación entre los Estados; 3) recordaba a todos los Estados Miembros su obligación de dar el máximo apoyo a los esfuerzos de las Naciones Unidas por asegurar el respeto y la observancia de los principios enunciados en la Carta, y de prestar ayuda a la Organización en el cumplimiento de las responsabilidades que le han sido asignadas en la Carta con respecto al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. También pedía al Secretario General que incluyera la resolución y las actas de los debates celebrados sobre el tema titulado "Observancia estricta de la prohibición de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en las relaciones internacionales y del derecho de los pueblos a la libre determinación" en la documentación que se examinará durante el nuevo estudio de los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, con objeto de aprobar en breve una declaración en la que se enuncien tales principios.

P. *Arreglo pacífico de controversias*

De acuerdo con la decisión de la Asamblea General en su vigésimo período de sesiones de suspender el examen del tema titulado "Arreglo pacífico de controversias" hasta el próximo período de sesiones, este tema fue incluido en el programa del vigésimo primer período de sesiones.

El tema fue remitido a la Comisión Política Especial, la cual lo examinó en dos sesiones el 16 de diciembre de 1966.

Durante el examen del tema por la Comisión, el representante de los Países Bajos presentó un proyecto de resolución suscrito por siete países en virtud del cual la Asamblea General: 1) invitaría a los Estados Miembros, los organismos especializados y las organizaciones regionales a que presentaran por escrito al Secretario General, para el 1º de julio de 1967, opiniones, sugerencias o propuestas para robustecer los medios de que dispone la comunidad internacional para el arreglo pacífico de controversias internacionales y para procurar que se recurra con mayor frecuencia al empleo de todos esos medios con arreglo a las disposiciones de la Carta, y 2) decidiría incluir en el programa provisional del vigésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General un tema titulado "Arreglo pacífico de controversias".

El representante del Reino Unido manifestó que su Gobierno continuaba creyendo que la cuestión del arreglo pacífico de las controversias era de importancia fundamental y de urgencia innegable. Tan importante como mantener la paz es hacer la paz, es decir, dirimir las controversias antes de que lleguen a la etapa de conflicto armado, o eliminar la causa de conflicto una vez que éste haya estallado. En vista de lo inadecuado de los resultados logrados en tal sentido, era imprescindible que la Asamblea adoptara un nuevo enfoque y estudiara cuidadosamente todos los medios posibles de hacer la paz. El Reino Unido acogería con satisfacción el establecimiento de un comité, compuesto de Estados Miembros nombrados por el Presidente de la Asamblea General, que tendría la función de estudiar toda la cuestión del arreglo pacífico de las controversias y de preparar un informe con sus conclusiones y recomendaciones. Su delegación no proponía ningún mecanismo nuevo de arreglo pacífico ni recomendaba el uso especial de ningún mecanismo concreto existente; simplemente pedía que se estudiaran todos los métodos de arreglo pacífico a fin de ver si había posibilidades que no se hubieran aprovechado plenamente.

El representante de Túnez sugirió que, en vista de que la Comisión Política Especial no tendría tiempo de examinar el tema detalladamente, se aplazase su estudio hasta el próximo período de sesiones.

Los representantes de la Argentina, Dinamarca, el Canadá y los Estados Unidos estuvieron de acuerdo en cuanto a la importancia y urgencia de la necesidad de emprender un estudio completo de los procedimientos de arreglo pacífico de las controversias. En apoyo de esta opinión dijeron que, aunque las Naciones Unidas habían mejorado y adaptado su maquinaria de mantenimiento de la paz, habían hecho poco para mejorar los procedimientos de arreglo pacífico, a pesar de que el arreglo pacífico de las controversias era imprescindible para la supervivencia de la humanidad en la era nuclear.

El representante de los Países Bajos dijo que una revisión total de los aspectos jurídicos y políticos de la cuestión, que permitiría enjuiciar los resultados logrados en los últimos veinte años y evaluar las necesidades, contribuiría a fortalecer la eficacia de las Naciones Unidas. En vista del poco tiempo restante en el actual período de sesiones, el debate a fondo del tema probablemente tendría que dejarse hasta más adelante. Mientras tanto, sin embargo, se podría invitar a los Estados a presentar por escrito al Secretario General sus sugerencias para fortalecer los medios de que dispone la comunidad internacional para el arreglo pacífico de las controversias y tratar de que se recurra con más frecuencia al uso de todos esos medios a tenor de lo dispuesto en la Carta. La Comisión debería también solicitar que se incluyera el tema en el programa provisional del próximo período de sesiones de la Asamblea. Tales eran las finalidades del proyecto de resolución a cuyo patrocinio se había adherido su delegación.

El representante de la República Unida de Tanzania expresó la opinión de que el examen del tema debería aplazarse hasta el próximo período de sesiones. Para hacer un estudio completo de la cuestión de los mecanismos de conciliación, habría que volver al origen de las controversias concretas y examinar sus causas. Tal procedimiento podría conducir a controversias

políticas y prolongar la labor de la Comisión sin objeto alguno.

Varios otros representantes, entre ellos los de Siria, Guinea, la República Árabe Unida, Polonia y Madagascar, indicaron que apoyaban la propuesta de aplazar el examen del tema. En general tales representantes subrayaron que la Comisión no tenía tiempo de emprender un estudio detallado del tema en el actual período de sesiones, y que la Carta, lo mismo que otros instrumentos de derecho internacional, ofrecía ya muchos medios de arreglo pacífico. El representante de Polonia agregó que, puesto que la cuestión del arreglo pacífico de las controversias ya estaba siendo estudiada en otros órganos de las Naciones Unidas, no parecía aconsejable que la Comisión abordara el mismo tema. Además, el debate podría centrarse en controversias que estaban en la actualidad sometidas al examen del Consejo de Seguridad, que sin duda era mucho más competente para discutir las que la Comisión Política Especial.

El representante del Camerún secundó tanto el proyecto de resolución como la propuesta de Tanzania de que se aplazara el debate. Consideró que con la colaboración de los gobiernos de los Estados Miembros sería posible reanudar el debate en forma mucho más fructífera más adelante.

El representante de Guinea manifestó que el debate de la cuestión del arreglo pacífico de las controversias sería oportuno solamente cuando países tales como el Reino Unido, Francia, Portugal y España hubieran liberado a los pueblos a los que estaban privando de su soberanía, y cuando la agresión de los Estados Unidos contra el pueblo de Viet-Nam hubiera terminado.

El representante de la URSS dijo que los conflictos internacionales que continuaban azotando al mundo eran producto, no de alguna deficiencia del derecho internacional, sino de la negativa de las Potencias occidentales a abandonar la política de imponer su voluntad a otros por medio de la amenaza o el uso de la fuerza y de sus intentos de aplastar los movimientos de liberación nacional.

En la 548a. sesión de la Comisión, el representante de la República Unida de Tanzania, propuso, de conformidad con el artículo 117 del reglamento, que se aplazase el debate sobre este tema. La moción fue aprobada por 50 votos contra 26 y 6 abstenciones.

El 19 de diciembre de 1966, la Asamblea General tomó nota del informe de la Comisión Política Especial.

Q. *Estado de la aplicación de la Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de los Estados y protección de su independencia y soberanía*

La Unión Soviética solicitó el 23 de septiembre de 1966 que se incluyera un tema titulado "Estado de la aplicación de la Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención en los Asuntos Internos de los Estados y Protección de su Independencia y Soberanía" en el programa del vigésimo primer período de sesiones de la Asamblea General.

En el memorando explicativo que acompañaba la solicitud, la URSS declaraba que la reciente intensificación de la intervención de las fuerzas imperialistas

en los asuntos internos de los Estados y pueblos había dado el primer lugar entre los asuntos internacionales al problema de impedir la intervención en los asuntos internos de los Estados y la protección de su independencia y soberanía. La aprobación por la Asamblea General de la Declaración en la resolución 2131 (XX) fue una importante medida en apoyo de los pueblos de Asia, África y América Latina. Pero la Declaración fue desafiada por las Potencias imperialistas, en especial por los Estados Unidos. La causa de la paz exigía la condenación y el cese de la intervención armada en los asuntos internos de los Estados y los pueblos y la aplicación estricta de la Declaración.

La URSS también adjuntó a su solicitud un proyecto de resolución en el que la Asamblea General expresaba preocupación ante la evidencia de la incesante intervención armada de ciertos Estados en los asuntos internos de otros en distintas partes del mundo, reafirmaba la Declaración que figura en la resolución 2131 (XX) de la Asamblea General y consideraba que tenía la responsabilidad directa de: 1) pedir encarecidamente la inmediata cesación de la intervención bajo cualquier forma en los asuntos internos de los Estados y pueblos; 2) hacer un llamamiento a todos los Estados para que cumplieran estrictamente las obligaciones que les incumbían en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y de las disposiciones de la Declaración que figuraba en la resolución 2131 (XX); 3) condenar todas las formas de intervención en los asuntos internos de los Estados y pueblos, ya que ésta constituía la fuente principal de peligro para la causa de la paz en el mundo entero, y 4) advertir a dichos Estados que en violación de la Carta y de la Declaración realizaban intervenciones armadas en los asuntos internos de otros Estados y pueblos que al hacer esto asumían la responsabilidad de todas las consecuencias que pudieran resultar, incluso consecuencias para sí mismos.

El 24 de septiembre de 1966, la Asamblea General incluyó el tema en su programa y lo asignó a la Primera Comisión. Esta lo examinó en once sesiones, celebradas entre el 5 y el 12 de diciembre de 1966.

Durante el debate en la Comisión, la abrumadora mayoría de los oradores reconoció la conveniencia de aprobar una resolución que incrementase más la eficacia de la Declaración aprobada en el período de sesiones anterior. Sin embargo, se expresaron opiniones distintas sobre el significado de los términos de la Declaración. Algunos Estados sostuvieron que la intervención armada constituía la principal amenaza a la paz en las relaciones internacionales contemporáneas. Otros opinaron que las formas más sutiles de intervención, tales como la subversión y el terrorismo desencadenados con el propósito de derrocar a gobiernos legalmente constituidos, creaban el mayor peligro para la paz mundial. También hubo opiniones diferentes sobre si los pueblos se veían amenazados por la intervención en igual grado que los Estados.

El 30 de noviembre 19 países presentaron enmiendas al proyecto de resolución de la URSS. Dichas enmiendas fueron revisadas después, y las patrocinaron 41 países. Según las enmiendas examinadas, la Asamblea General, entre otras cosas, expresaba su preocupación respecto a otras formas directas o indirectas de injerencia que atentaban contra la personalidad soberana y la independencia política de los Estados y reafirmaba

todos los principios y normas enunciados en la Declaración, en lugar de simplemente reafirmar la Declaración. Las enmiendas también ampliaban la alusión a los asuntos internos de los Estados para abarcar a los asuntos internos o externos de los Estados, e incluían una prohibición contra la subversión, el terrorismo y otras formas de intervención indirectas.

El 12 de diciembre la Primera Comisión aprobó las enmiendas examinadas por 100 votos contra ninguno y una abstención. Seguidamente, aprobó el proyecto de resolución en su forma enmendada por 99 votos contra ninguno y 2 abstenciones.

El 19 de diciembre de 1966 la Asamblea General aprobó, por 114 votos contra ninguno y 2 abstenciones, el proyecto de resolución recomendado por la Primera Comisión, que figura en la resolución 2225 (XXI). En la parte dispositiva de dicha resolución, la Asamblea General consideraba que tenía la responsabilidad directa de: 1) pedir encarecidamente la inmediata cesación de la intervención bajo cualquier forma en los asuntos internos de los Estados; 2) condenar todas las formas de intervención en los asuntos internos o externos de los Estados, ya que ésta constituía la fuente principal de peligro para la causa de la paz en el mundo entero, y 3) hacer un llamamiento a todos los Estados para que cumplieran estrictamente las obligaciones que les incumbían en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y de las disposiciones de la Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de los Estados y protección de su independencia y soberanía, e instarlos a que se abstuvieran de intervenir por las armas o mediante el fomento o la organización de actividades subversivas, terrorismo u otras formas de intervención indirecta encaminadas a cambiar por la violencia el régimen de otro Estado o intervenir en las luchas civiles de otro Estado.

R. *Cooperación entre las Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana*

El 8 de septiembre, el Secretario General presentó un informe en el que describía los arreglos y las prácticas relacionadas con la cooperación entre las Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana, de conformidad con la resolución 2011 (XX), del 11 de octubre de 1965. El informe se refería a cuestiones tales como la representación en las reuniones, los arreglos de enlace, la cooperación técnica y la cooperación entre la OUA y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África.

El 15 de diciembre de 1966, la Asamblea General aprobó por unanimidad un proyecto de resolución apoyado por 37 potencias, que expresaba su satisfacción ante los esfuerzos del Secretario General para estimular la cooperación entre las Naciones Unidas y la OUA. La resolución también invitaba al Secretario General a que continuara sus esfuerzos, en particular respecto del enlace y la cooperación técnica entre la Secretaría de las Naciones Unidas y la secretaria de la OUA, y a que informara a la Asamblea General según procediera (resolución 2193 (XXI)).

S. *Año de la Cooperación Internacional*

La Asamblea General tomó nota durante su vigésimo período de sesiones de los dos informes provi-

sionales del Comité del Año de la Cooperación Internacional, e invitó al Comité a que le presentara su informe final en su vigésimo primer período de sesiones.

El informe final del Comité fue publicado el 31 de marzo de 1966 y descrito en la Memoria Anual del Secretario General presentada al vigésimo primer período de sesiones de la Asamblea General.

En su 1486a. sesión plenaria, celebrada el 7 de diciembre de 1966, la Asamblea General examinó el informe final del Comité del Año de la Cooperación Internacional y un proyecto de resolución de doce Potencias. En dicha sesión, la Asamblea aprobó por unanimidad el proyecto de resolución que figura como resolución 2174 (XXI). En dicha resolución, la Asamblea General, reconociendo las contribuciones aportadas a las actividades emprendidas durante el Año de la Cooperación Internacional por los Estados Miembros, los organismos especializados, el Organismo Internacional de Energía Atómica y las organizaciones no gubernamentales interesadas y considerando que la idea de designar un año como Año de la Cooperación Internacional representó una valiosa contribución para intensificar la conciencia de los beneficios que reporta la cooperación internacional, toma nota con agradecimiento del informe final del Comité del Año de la Cooperación Internacional.

T. Nombramiento del Secretario General de las Naciones Unidas

El 3 de noviembre de 1966 debía terminar el mandato del Secretario General, U Thant. Por consiguiente, en el programa del vigésimo primer período de sesiones de la Asamblea General se incluyó un tema referente al nombramiento del Secretario General.

El Consejo de Seguridad celebró una sesión privada el 29 de septiembre de 1966, en la que se adoptó un consenso según el cual los miembros del Consejo celebraban la declaración del Secretario General de que estaba dispuesto a considerar la posibilidad de seguir en funciones hasta el final del vigésimo primer período de sesiones, expresaban su confianza en el Secretario General y consideraban que si U Thant indicaba que estaba dispuesto a desempeñar el cargo de Secretario General por un nuevo período, esto llenaría las aspiraciones de los miembros del Consejo.

El 28 de octubre, en una nueva sesión celebrada en privado, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 227 (1966), en la que después de confirmar el consenso adoptado el 29 de septiembre, el Consejo recomendaba a la Asamblea General que, en espera de un nuevo examen por el Consejo de Seguridad, prorrogara el

mandato de U Thant como Secretario General hasta el final del vigésimo primer período ordinario de sesiones.

El 1º de noviembre, la Asamblea General aprobó por unanimidad la resolución 2147 (XXI), que prorrogaba el mandato de U Thant como Secretario General hasta el final del período de sesiones.

El Consejo de Seguridad volvió a tratar la cuestión en una sesión privada el 2 de diciembre, después de la cual se distribuyó un comunicado en el que figuraba una declaración hecha por el Presidente en nombre del Consejo, junto con una declaración del Secretario General y el texto de la resolución 229 (1966) del Consejo. El Presidente declaraba, entre otras cosas, que los miembros del Consejo habían coincidido en que la mejor manera de servir los intereses superiores de la Organización sería que U Thant continuara en el puesto de Secretario General y habían decidido unánimemente apelar a su espíritu de dedicación a la Organización y pedirle que desempeñara otro mandato completo de Secretario General.

En su declaración, el Secretario General indicó que confiaba en que la gran atención que se venía dedicando a algunos problemas fundamentales con que se enfrentaba la Organización y a los acontecimientos inquietantes que se registraban en muchas partes del mundo, contribuiría a afianzar la Organización por el esfuerzo cooperativo de todos los Miembros y a servir la causa de la paz y el progreso mundiales. Con esta esperanza, el Secretario General accedía al llamamiento que le dirigió el Consejo de Seguridad.

En su resolución 229 (1966), aprobada el 2 de diciembre, el Consejo de Seguridad, consciente de las probadas cualidades y del elevado sentido del deber de U Thant, y convencido de que su nuevo nombramiento sería sumamente propicio a la causa de los intereses y propósitos superiores de la Organización, recomendó el nombramiento de U Thant para otro período como Secretario General de las Naciones Unidas.

La Asamblea General examinó la recomendación del Consejo de Seguridad ese mismo día, y por votación secreta aprobó unánimemente la resolución 2161 (XXI), en virtud de la cual la Asamblea General, actuando de conformidad con la recomendación del Consejo y haciendo suya la declaración según la cual, en vista de las probadas cualidades y del elevado sentido del deber de U Thant, su nuevo nombramiento sería sumamente propicio a la causa de los intereses y propósitos superiores de la Organización, nombró a U Thant Secretario General de las Naciones Unidas por otro período, que terminaría el 31 de diciembre de 1971.

REFERENCIAS

A. El desarme y otros asuntos conexos

Para el informe de la Conferencia del Comité de Desarme de Dieciocho Naciones correspondiente al período comprendido entre el 27 de enero y el 25 de agosto de 1966, véase: *Actas Oficiales de la Comisión de Desarme, Suplemento para 1966*, documento DC/228.

Para otros documentos pertinentes y la lista de las actas correspondientes, véase: *Documentos Oficiales de la Asamblea*

General, vigésimo primer período de sesiones, Anexos, temas 26, 27, 28, 29, 97 y 98 del programa.

Véase también el documento A/6663.

B. Efectos de las radiaciones atómicas

Para el informe del Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas, véase: *Documentos Oficiales de la Asamblea General*,

vigésimo primer período de sesiones, Suplemento No. 14 (A/6314 y Corr.1).

Para otros documentos pertinentes y la lista de las actas correspondientes, véase: *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Anexos*, tema 35 del programa.

C. Utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos

Para los documentos pertinentes y la lista de las actas correspondientes, véase: *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Anexos*, temas 30, 89 y 91 del programa; e *ibid.*, quinto período extraordinario de sesiones, *Anexos*, tema 9 del programa.

D. Admisión de nuevos miembros

Para los documentos pertinentes, véase: *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Anexos*, tema 20 del programa.

Para las actas correspondientes, véase:

- Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, Vigésimo Primer Año*, sesiones 1287a., 1306a. y 1330.;
- Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Sesiones plenarias*, sesiones 1409a., 1444a. y 1487a.

E. Examen de la situación en Rhodesia del Sur por el Consejo de Seguridad

Para los documentos pertinentes, véase:

- Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Anexos*, tema 23 del programa y addendum;
- Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, Vigésimo Primer Año, Suplemento de octubre, noviembre y diciembre de 1966; e ibid., Vigésimo Segundo Año, Suplemento de enero, febrero y marzo de 1967;*
- Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, Vigésimo Primer año*, sesiones 1331a. a 1333a. y 1335a. a 1340a.

F. La política de apartheid del Gobierno de la República de Sudáfrica

Para los documentos pertinentes y la lista de las actas correspondientes, véase: *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Anexos*, temas 34, 66, 68 y 95 del programa.

G. Denuncia de la República Democrática del Congo contra Portugal

Para los documentos pertinentes, véase: *Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, Vigésimo Primer Año, Suplemento de julio, agosto y septiembre de 1966, y Suplemento de octubre, noviembre y diciembre de 1966.*

Para las sesiones correspondientes, véase: *Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, Vigésimo Primer Año*, sesiones 1302a. a 1304a. y 1306a.

H. La situación en la República Dominicana

Para los documentos pertinentes, véase: *Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, Vigésimo primer año, Suplemento de abril, mayo y junio de 1966; Suplemento de julio, agosto y septiembre de 1966, y Suplemento de octubre, noviembre y diciembre de 1966.*

I. Representación de China en las Naciones Unidas

Para los documentos pertinentes y la lista de las actas correspondientes, véase: *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Anexos*, tema 90 del programa.

J. La cuestión de Corea

Para el informe de la Comisión de las Naciones Unidas para la Unificación y Rehabilitación de Corea, véase: *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Suplemento No. 12 (A/6312).*

Para los documentos pertinentes y la lista de actas correspondientes, véase: *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Anexos*, temas 31 y 93 del programa.

K. Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas

Para los documentos pertinentes y la lista de actas correspondientes, véase: *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Anexos*, tema 21 del programa.

Véase también el documento A/6672.

L. La cuestión de Palestina

Para los documentos pertinentes, véase: *Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, Vigésimo Primer Año, Suplemento de julio, agosto y septiembre de 1966, y Suplemento de octubre, noviembre y diciembre de 1966.*

Para las sesiones correspondientes, véase: *Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, Vigésimo Primer Año*, sesiones 1288a. a 1295a., 1305a., 1307a. a 1310a., 1312a. a 1314a., 1316a., 1317a. a 1328a.

M. Asistencia a los refugiados de Palestina

Para el informe del Comisionado General del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (1° de julio de 1965-30 de junio de 1966), véase: *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Suplemento No. 13 (A/6313).*

Para los documentos pertinentes y la lista de actas correspondientes, véase: *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Anexos*, tema 32 del programa.

N. Denuncia del Reino Unido contra el Yemen

Para los documentos pertinentes, véase: *Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, Vigésimo Primer Año, Suplemento de julio, agosto y septiembre de 1966.*

Para las sesiones correspondientes, véase: *Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, Vigésimo Primer Año*, sesiones 1296a. a 1300a.

O. Observancia estricta de la prohibición de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en las relaciones internacionales y del derecho de los pueblos a la libre determinación

Para los documentos pertinentes y la lista de actas correspondientes, véase: *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Anexos*, tema 92 del programa.

P. Arreglo pacífico de controversias

Para los documentos pertinentes y la lista de actas correspondientes, véase: *Documentos Oficiales de las Naciones Unidas, vigésimo primer período de sesiones, Anexos*, tema 36 del programa.

Q. Estado de la aplicación de la Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de los Estados y protección de su independencia y soberanía

Para los documentos pertinentes y la lista de las actas correspondientes, véase: *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Anexos*, tema 96 del programa.

R. Cooperación entre las Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana

Para los documentos pertinentes y la lista de las actas correspondientes, véase: *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Anexos*, tema 22 del programa.

S. Año de la Cooperación Internacional

Para los documentos pertinentes y la lista de las actas correspondientes, véase: *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Anexos*, tema 24 del programa.

T. Nombramiento del Secretario General de las Naciones Unidas

Para los documentos y sesiones pertinentes, véase:

- a) *Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, Vigésimo Primer Año, Suplemento de julio, agosto y septiembre de 1966;*
- b) *Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, Vigésimo Primer Año, sesiones 1301a., 1311a. y 1329a.*
- c) *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Anexos*, tema 18 del programa.

CAPITULO IV

Operaciones de mantenimiento de la paz y asuntos conexos

A. Tercer informe del Comité Especial

En la sesión celebrada el 13 de septiembre de 1966, el Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz aprobó el informe que habría de presentar a la Asamblea General en el vigésimo primer período de sesiones de ésta, documento al que se agregaron como anexos las actas resumidas de las sesiones del Comité y del Grupo de Trabajo.

En la misma sesión, el Comité Especial aprobó una declaración del Presidente según la cual aún existían diferencias de opinión respecto de las operaciones de mantenimiento de la paz y el Presidente, pese a sus esfuerzos, no había podido conciliar los distintos puntos de vista de los Estados Miembros.

Durante las deliberaciones, varios representantes lamentaron que el Comité Especial no hiciera progresos. El representante del Canadá manifestó que esperaba que se lograra fuera del Comité lo que no se había conseguido en él.

El representante del Reino Unido expresó su esperanza de que, sin mayor demora se efectuaran otras contribuciones voluntarias importantes. Las deliberaciones habían hecho surgir algunas ideas nuevas y propuestas útiles, y si el Comité no se hallaba en esos momentos en situación de presentar recomendaciones era porque algunos de sus miembros no estaban dispuestos a examinar dichas propuestas.

El representante de Francia lamentó que algunas delegaciones no hubieran aceptado las fórmulas sugeridas por el Presidente.

El representante de los Estados Unidos dijo que confiaba en que no tardarían en llegar contribuciones voluntarias considerables, pues se habían llevado a la práctica los dos primeros elementos del consenso establecido por el Comité el 31 de agosto de 1965. El Comité no había conseguido acordar recomendaciones para consolidar el mecanismo de mantenimiento de la paz y garantizar un régimen satisfactorio de financiación, pero se habían celebrado consultas privadas muy útiles.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dijo que no se habían alcanzado resultados satisfactorios por la actitud negativa de los Estados Unidos y del Reino Unido, que había impedido que el Comité Especial aprobara un verdadero informe a la Asamblea. Para que las Naciones Unidas pudieran asegurar la paz era indispensable la observación estricta de la letra y el espíritu de la Carta.

B. Consideración por la Asamblea General en su vigésimo primer período de sesiones

El 24 de septiembre de 1966, la Asamblea General decidió incluir en el programa de su vigésimo primer período de sesiones el tema titulado "Examen amplio de toda la cuestión de las operaciones de mantenimiento de la paz en todos sus aspectos: informe del Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz". El tema se asignó a la Comisión Política Especial para que ésta lo examinara y presentara un informe. La Comisión lo examinó en diecisiete sesiones, celebradas entre el 15 de noviembre y el 14 de diciembre.

El representante de México, Presidente del Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, presentó el informe pertinente. Al hacerlo, puso de manifiesto la utilidad del trabajo cumplido, aunque no se hubiera llegado a un acuerdo. En el Comité Especial había habido asentimiento general acerca de que las bases de progreso no residían en la defensa obstinada de determinados puntos de vista, sino en un nuevo concepto de coexistencia dentro de la Organización y conforme a la Carta. El problema de las divergencias graves no se salvaba mediante resoluciones aprobadas por mayoría de votos. Era menester tratar de llegar a la unanimidad.

En la Comisión Política Especial, se presentaron varios proyectos de resolución y enmiendas. El 17 de noviembre, doce países presentaron un proyecto de resolución con arreglo al cual la Asamblea General decidiría que mientras no se adoptara un sistema diferente para la financiación de las operaciones de paz, a) los gastos de mantenimiento de la paz que no estuvieran cubiertos por acuerdos previos o por partidas del presupuesto ordinario serían distribuidos de la manera siguiente: i) un 5% entre el grupo de Estados económicamente menos desarrollados; ii) un 25% entre el grupo de Estados Miembros económicamente desarrollados, con excepción de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad; iii) un 70% entre el grupo de miembros permanentes del Consejo de Seguridad, prorrateado solamente entre los que votaron a favor de la operación; no obstante, ningún miembro habría de contribuir con más del 50% del costo neto de la operación y cualquier saldo no prorrateado, en virtud de esa disposición, se agregaría a la suma asignada al grupo de Estados mencionados en el inciso ii); b) dentro de cada grupo, la cantidad que debería pagar cada Estado Miembro guardaría proporción con su capacidad de pago en relación con la de los demás Estados Miembros del grupo, tal como estaba determinado en la escala de cuotas para el presupuesto ordinario; c) todo Estado Miembro de las Naciones Unidas, otros

Estados u organizaciones podrían hacer contribuciones voluntarias para reducir la cantidad asignada a cualquier grupo o a todos los grupos.

El 29 de noviembre se presentó un texto revisado del proyecto de resolución de las doce Potencias, según el cual la Asamblea General: 1) estimaba que, mientras no se adoptara un sistema diferente para las operaciones de paz, a) los gastos de mantenimiento de la paz, hasta un límite de 100 millones de dólares cada año, que no estuviesen cubiertos por acuerdos previos o por partidas del presupuesto ordinario, deberían distribuirse según disponía la propuesta original; b) los gastos que un año cualquiera excediesen de los 100 millones de dólares serían prorrateados entre los grupos de Estados Miembros económicamente menos desarrollados y de miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y 2) consideraba que el examen amplio de toda la cuestión de las operaciones del mantenimiento de la paz en todos sus aspectos debería continuarse y terminarse lo antes posible.

El 21 de noviembre, siete países presentaron un proyecto de resolución conforme al cual la Asamblea General: 1) tomaba nota de que podían considerarse varios métodos de financiación de operaciones de paz; 2) consideraba que si los costos de determinada operación de paz entrañaban grandes gastos habrían de ser prorrateados entre los Estados Miembros de la Organización tomando debidamente en cuenta: a) las responsabilidades especiales de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad; b) la capacidad relativamente limitada de los países económicamente menos desarrollados de contribuir a los gastos, y c) la necesidad, cuando las circunstancias lo justificaran, de prestar especial atención a la situación de cualquier Estado Miembro que fuera víctima de los acontecimientos o acciones que requiriesen una operación de mantenimiento de la paz; 3) consideraba además que la distribución equitativa, cuando hubiera grandes gastos, podría lograrse mediante una escala especial, en virtud de la cual se establecería que los países económicamente menos desarrollados aportarían un 5% del total; 4) invitaba a los Estados Miembros a transmitir a las Naciones Unidas información sobre el tipo de fuerzas militares o civiles o sobre los servicios que podrían proporcionar, en caso de que decidieran hacerlo, en respuesta a una solicitud para que participaran en una operación de mantenimiento de la paz debidamente autorizada; 5) recomendaba al Consejo de Seguridad: a) que autorizara el estudio de la manera de mejorar los preparativos para las operaciones de mantenimiento de la paz; b) que, como práctica general, obtuviera del Secretario General una estimación de los gastos que entrañase el recomendar o decidir adoptar medidas tendientes a mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales; c) que explorase las perspectivas de que se negociaran convenios con los Estados Miembros para poner a disposición del Consejo de Seguridad, cuando éste lo solicitase, las fuerzas armadas, la ayuda y las facilidades, en conformidad con el Artículo 43 y tomando en cuenta el párrafo 2 del Artículo 47 de la Carta, y 6) decidía incluir un tema titulado "Examen de las operaciones de mantenimiento de la paz en todos sus aspectos" en el programa del vigésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General.

Se distribuyeron varias revisiones al proyecto de resolución de las siete Potencias, en que se tomaban en consideración diversas enmiendas presentadas. En

la versión definitiva del proyecto de resolución, se sustituyó la referencia a los países económicamente menos desarrollados, que aparecía en el inciso b) del párrafo 2 y en el párrafo 3 de la parte dispositiva, por una a los países en desarrollo y se añadió un nuevo inciso d) al párrafo 5, de acuerdo con el cual la Asamblea General pedía al Consejo de Seguridad de que le informara acerca de cualesquiera medidas que el Consejo de Seguridad hubiera estimado conveniente adoptar en cumplimiento de las resoluciones que figuraban en los incisos a), b) y c). En la versión revisada del proyecto de resolución, se incorporaron varias enmiendas propuestas por Etiopía y, entre ellas, un pedido al Comité Especial de que continuara, conforme a la resolución 2053 A (XX), el examen amplio de toda la cuestión de las operaciones de mantenimiento de la paz en todos sus aspectos, siguiera analizando las cuestiones citadas en los párrafos 1, 2 y 3 de la parte dispositiva y preparara para el 1º de julio de 1967 su informe a la Asamblea General. Comprendía también una nueva versión de la enmienda presentada por Chipre, de conformidad con la cual el inciso a) del párrafo 5 de la parte dispositiva se refería al estudio de los medios de mejorar los preparativos para operaciones "de carácter no coercitivo" de mantenimiento de la paz.

Jamaica presentó dos proyectos de resolución. Por el primero de ellos, en su forma revisada, la Asamblea General: 1) recomendaba al Consejo de Seguridad que iniciara cuanto antes los preparativos que le permitieran cumplir las responsabilidades que le incumbían en virtud de los Artículos 42 y 45 de la Carta y, en particular, que procediera a negociar convenios con Estados Miembros o grupos de Estados Miembros, conforme a los cuales se pondrían a disposición del Consejo, cuando éste lo solicitase, fuerzas armadas, ayuda y facilidades en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 43 de la Carta, y 2) aseguraba al Consejo de Seguridad toda la cooperación que necesitase para negociar los convenios mencionados en el párrafo 1 de la parte dispositiva.

Por el segundo proyecto de resolución de Jamaica, la Asamblea General decidía constituir un Comité Especial de Preparativos de Mantenimiento de la Paz a fin de que estudiara y recomendara los principios y condiciones generales que podrían aplicar los Estados Miembros al poner a disposición de las Naciones Unidas fuerzas, instalaciones y servicios para fines de operaciones de mantenimiento de la paz debidamente autorizadas, y un Comité Especial de Financiación del Mantenimiento de la Paz a fin de que estudiara todas las fórmulas de distribución de gastos de mantenimiento de la paz presentadas y recomendara la escala o las escalas que habían de aplicarse en la distribución de los gastos de operaciones de mantenimiento de la paz cuando estos hubieran de satisfacerse mediante contribuciones de los Estados Miembros.

El 8 de diciembre, la India, la República Árabe Unida y Yugoslavia presentaron un proyecto de resolución por el que la Asamblea decidía que el Comité Especial debía proseguir su tarea y, en particular, estudiar: a) los distintos métodos de financiación de las operaciones de mantenimiento de la paz, prestando la debida atención a: i) las responsabilidades especiales de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad; ii) la capacidad relativamente limitada de los países con economía en desarrollo para contribuir a sufra-

gar los gastos de tales operaciones; iii) la necesidad de prestar especial atención a la situación de cualquier Estado Miembro o cualesquiera Estados Miembros que fueran víctimas de una agresión o de los que de otro modo participaran en acontecimientos o actos que dieran lugar a una operación de mantenimiento de la paz; b) las instalaciones, servicios y personal que los Estados Miembros pudieran proporcionar voluntariamente para una operación de mantenimiento de la paz. Se pedía asimismo al Comité Especial que preparara para el 1º de julio de 1967 su informe a la Asamblea General en el vigésimo segundo período de sesiones de este órgano. La Asamblea General también recomendaba al Consejo de Seguridad: 1) que estudiara los medios de mejorar los preparativos para mantener la paz; 2) que investigara las posibilidades de negociar convenios con los Estados Miembros para que pusieran a disposición del Consejo de Seguridad, cuando éste lo solicitara, fuerzas armadas, asistencia y facilidades, con arreglo al Artículo 43 y habida cuenta del párrafo 2 del Artículo 47 de la Carta, y 3) que informara a la Asamblea General en su vigésimo segundo período ordinario de sesiones sobre las medidas que hubiera considerado conveniente adoptar en cumplimiento de las recomendaciones citadas.

Los Estados Unidos propusieron una enmienda al proyecto de resolución de las tres Potencias, por el cual la Asamblea General tomaba nota con aprobación de las orientaciones generales enunciadas en el informe del Secretario General y del Presidente de la Asamblea General, de fecha 31 de mayo de 1965. El representante de Guinea propuso que se modificase esa enmienda de modo que estipulase la inclusión de un nuevo párrafo final en la parte dispositiva, con arreglo al cual la Asamblea General tomaría nota de dicho informe.

El 9 de diciembre, México presentó un proyecto de resolución por el que la Asamblea 1) pedía que el Comité Especial continuara sus actividades; 2) aprobaba los principios enunciados en el anexo como normas para la conducción de las operaciones de mantenimiento de la paz; 3) decidía que dichos principios deberían aplicarse a la luz de los hechos y de las circunstancias de cada caso, y 4) invitaba al Consejo de Seguridad a que los tomara en cuenta para perfeccionar la maquinaria de las Naciones Unidas encargada del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y, si lo estimaba pertinente, informara a la Asamblea General.

Los Estados Unidos presentaron una enmienda por la que se reemplazaba el anexo al proyecto de resolución de México por el texto de las orientaciones generales enunciadas en el informe del Secretario General y el Presidente de la Asamblea General, de 31 de mayo de 1965, anexo al primer informe del Comité Especial.

Quienes apoyaban el proyecto de resolución de las doce Potencias se refirieron en general a la necesidad de contar con medios seguros de financiación de las operaciones de mantenimiento de la paz y consideraron que las cuotas obligatorias constituían la única solución real del problema. La experiencia demostraba, sin embargo, que no era posible esperar que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad pagaran los gastos de una operación a la que se oponían. En el proyecto de resolución de las doce Potencias se elu-

dían deliberadamente las cuestiones constitucionales para satisfacer la necesidad inmediata de contar con medios suficientes de financiación.

Quienes se oponían al proyecto de resolución de las doce Potencias se refirieron, especialmente, a la disposición — que consideraban falta de equidad y de realismo — por la que se autorizaba a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad a “optar por no cumplir”. Sostuvieron, en efecto, que, lejos de eludir la cuestión constitucional, la propuesta la pre-julgaba, al establecer que la Asamblea ejerciera poderes en oposición a la Carta. Afirmaron, también, que los problemas constitucionales y financieros eran interdependientes.

Los partidarios del proyecto de resolución de las siete Potencias hicieron hincapié en la importancia de procurar adelantos limitados y prácticos solamente y de evitar cuestiones respecto de las cuales no había posibilidad de acuerdo. Los impugnadores de la propuesta afirmaron que era ambigua o que contradecía evidentemente la Carta porque estaba concebida con objeto de que fuera posible eludir al Consejo.

El 14 de diciembre la Comisión Política Especial votó sobre las propuestas presentadas.

Rechazada la moción de dar prioridad en las votaciones al proyecto de resolución de las tres Potencias, el representante de la India, en nombre de los patrocinadores, precedió a retirarlo.

El proyecto de resolución revisado de las doce Potencias quedó aprobado por 33 votos contra 27, y 48 abstenciones.

El proyecto de resolución revisado de las siete Potencias quedó aprobado por 52 votos contra 14, y 42 abstenciones.

El primer proyecto de resolución revisado de Jamaica quedó aprobado por 20 votos contra 5, y 80 abstenciones.

El representante de Jamaica declaró que no insistiría en que se sometiera a votación el segundo proyecto de resolución de su delegación.

El representante de México retiró el proyecto de resolución presentado por su delegación.

La Asamblea General comenzó a considerar el informe de la Comisión Política Especial el 17 de diciembre de 1966.

A solicitud del representante de Irlanda, la Asamblea decidió que no se sometiera a votación el primer proyecto de resolución recomendado por la Comisión Política Especial.

La discusión se aplazó entonces hasta el 19 de diciembre, para dar tiempo a que se celebraran otras consultas, en un esfuerzo por llegar a un acuerdo general. Ese día, los representantes de 18 países presentaron un nuevo proyecto de resolución, por el cual la Asamblea General decidía remitir el informe de la Comisión Política Especial al quinto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, que se celebraría, a más tardar, en abril de 1967, y pedía al Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz que siguiera sus trabajos e informara a la Asamblea General en el quinto período extraordinario de sesiones de este órgano. El representante de Arge-

lia solicitó que se diera prioridad en la votación al nuevo proyecto de resolución.

El representante de Chipre presentó una enmienda al segundo proyecto de resolución recomendado por la Comisión Política Especial. Por esa enmienda, con las modificaciones introducidas durante las deliberaciones, se suprimía el párrafo 4 de la parte dispositiva y se agregaba un nuevo inciso b) al párrafo 5, por el que la Asamblea invitaba a los Estados Miembros a transmitir al Consejo de Seguridad información sobre el tipo de fuerzas militares o civiles o sobre los servicios que podrían proporcionar, en caso de que decidieran hacerlo, en respuesta a una solicitud de que participaran en una operación de mantenimiento de la paz debidamente autorizada por el Consejo de Seguridad. El representante de Chipre manifestó que la enmienda se proponía desvanecer los temores, expresados por algunos representantes, de que el párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolución violara la Carta.

El representante de Jamaica presentó otra enmienda al mismo proyecto de resolución, con objeto de suprimir el inciso c) del párrafo 5 y de recomendar al Consejo de Seguridad que explorara las posibilidades de negociar convenios con los Estados Miembros para que pusieran a su disposición, cuando lo solicitara, fuerzas armadas, asistencia y facilidades. La enmienda se proponía eliminar la duplicación de los proyectos de resolución segundo y tercero presentados por la Comisión Política Especial.

Por 49 votos contra 41 y 27 abstenciones, se aprobó una moción de dar prioridad en la votación al nuevo proyecto de resolución de las dieciocho Potencias. La Asamblea aprobó entonces el proyecto de resolución por 56 votos contra 36 y 25 abstenciones, como resolución 2220 (XXI).

C. Continuación de los trabajos del Comité Especial

El Comité Especial se reunió el 16 de febrero de 1967, día en que tuvo ante sí un memorando presentado por once Potencias sobre la organización de los trabajos. Los representantes de esos once países sugerían que la mejor manera de organizar los trabajos del Comité consistía en establecer dos grupos de trabajo, ambos con la misma composición que el Comité. Según las disposiciones propuestas, el Comité Especial examinaría los aspectos constitucionales relacionados con los asuntos mencionados en las resoluciones 2006 (XIX) y 2053 (XX), con el propósito de aumentar y reforzar la eficacia y la eficiencia de las Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Al Grupo de Trabajo A se le encargaría el estudio de los diversos métodos destinados a financiar las operaciones de mantenimiento de la paz y al Grupo B el estudio relacionado con los medios, servicios y personal que los Estados Miembros pudieran destinar voluntariamente a una operación de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Ambos grupos de trabajo informarían al Comité Especial; como norma general, el Comité y los grupos de trabajo no se reunirían simultáneamente.

Después de breves deliberaciones sobre el memorando de las once Potencias, deliberaciones en que se formularon ciertas reservas, el Presidente propuso que el Comité tomara nota del documento y de las declaraciones formuladas en esa sesión. El procedimiento sugerido en el memorando había tenido aceptación general y los temas propuestos en él podrían discutirse tanto en el Comité como en los grupos de trabajo sin que con ello el Comité quedara obligado formalmente por el fondo del memorando. Esta sugerencia del Presidente fue aprobada por el Comité.

El Grupo de Trabajo A celebró en total siete sesiones y el Grupo de Trabajo B se reunió tres veces.

El Comité Especial celebró tres sesiones, los días 3, 15 y 16 de mayo, para considerar y aprobar su informe.

El 10 de mayo, Argelia, Afganistán, Etiopía, la India, Mauritania, Nigeria, la República Árabe Unida, Sierra Leona y Yugoslavia presentaron un memorando en que enumeraban los puntos que a su juicio, debían constituir las conclusiones de las sesiones recientes del Comité Especial.

El 15 de mayo, el Reino Unido también presentó un memorando con las conclusiones que, a su modo de ser, debía aprobar el Comité.

El Comité no aprobó esos memorandos, que se agregaron como anexos al informe que le presentó a la Asamblea General en su quinto período extraordinario de sesiones.

En su informe, el Comité Especial recomendó a la Asamblea General que aprobara un proyecto de resolución por el cual la Asamblea: 1) renovaba su llamamiento a todos los Estados Miembros y, en particular, a los países altamente desarrollados para que efectuaran contribuciones voluntarias a fin de superar las continuas dificultades financieras de la Organización; 2) solicitaba del Comité Especial que continuara el análisis de la entera cuestión de las operaciones de mantenimiento de la paz en todos sus aspectos y estudiara las diversas sugerencias formuladas por diferentes delegaciones en el último período de sesiones del Comité, sobre todo, las referentes a: a) métodos de financiación de futuras operaciones de mantenimiento de la paz, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas; b) facilidades, servicios y personal que los Estados Miembros podrían suministrar voluntariamente, conforme a la Carta, para operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas; c) solicitaba del Comité Especial que informara sobre el progreso de sus actividades a la Asamblea General en su vigésimo segundo período de sesiones.

D. Consideración por la Asamblea General en su quinto período extraordinario de sesiones

En su quinto período extraordinario de sesiones, la Asamblea General tuvo ante sí el informe del Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y, de acuerdo con la resolución 2220 (XXI), el informe de la Comisión Política Especial sobre su consideración de la cuestión en el vigésimo primer

período de sesiones. La Asamblea examinó la cuestión en tres sesiones plenarias, celebradas en mayo de 1967.

En las deliberaciones, varios oradores subrayaron la necesidad de admitir la existencia de diferencias sobre cuestiones constitucionales. Algunos atribuyeron particular importancia al principio de unanimidad seguido en las deliberaciones del Comité Especial. La experiencia del Comité Especial había demostrado que, a pesar de los modestos resultados reflejados en sus recomendaciones, ciertas cuestiones determinadas podrían tratarse provechosamente, en un esfuerzo por hallar soluciones prácticas. Diversos representantes manifestaron interés en algunas ideas expuestas durante las deliberaciones del Comité Especial. Otros representantes, aunque apoyaban o aceptaban el consenso incorporado en la recomendación del Comité Especial, manifestaron dudas acerca de la eficacia de las soluciones de avenencias que, a su juicio, tal vez fueran indebidamente unilaterales o eliminaran todo lo sustancial de las decisiones. Les preocupaba, en efecto, que no hubieran dado resultados los esfuerzos encaminados a conseguir que se proporcionaran a las Naciones Uni-

das los recursos necesarios para consolidar su capacidad de efectuar operaciones de mantenimiento de la paz. Muchos representantes señalaron que los acontecimientos de esos momentos en el Oriente Medio subrayaban la urgencia del problema. Otros se refirieron a la necesidad de que los países desarrollados aportaran contribuciones voluntarias en cumplimiento del consenso de 1965. También se mencionó varias veces la necesidad de fomentar la solución de controversias por medios pacíficos. Varios oradores prestaron especial atención a las posibilidades prácticas que, según les parecía, era dable advertir en disposiciones de la Carta, que no se aplican o se pasan por alto y volvieron a poner de relieve la importancia primordial de una interpretación estricta de la Carta.

El 23 de mayo, la Asamblea General aprobó por 90 votos contra 1 y 11 abstenciones, como resolución 2249 (S-V), el proyecto de resolución, recomendado por el Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Decidió también, sin objeciones, transmitir a ese Comité el informe de la Comisión Política Especial sobre su consideración del tema en el vigésimo primer período de sesiones.

REFERENCIAS

Para los documentos pertinentes y la lista de las actas correspondientes, véase *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Anexos*, tema 33 del programa; e *ibid.*, quinto período extraordinario de sesiones, *Anexos*, tema 8 del programa.

Para las actas resumidas de las sesiones del Comité Especial en 1967, véanse A/AC.121/SR.23 a 26; para las de los Grupos de Trabajo, véanse A/AC.121/WG.A/SR.1 a 7 y A/AC.121/WG.B/SR.1 a 3.

CAPITULO V

La situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales

A. Aspectos generales

La Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, contenida en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, fue aprobada por la Asamblea el 14 de diciembre de 1960, en su decimoquinto período de sesiones. En su decimosexto período de sesiones, por la resolución 1654 (XVI), la Asamblea General decidió crear un Comité Especial de diecisiete miembros — que habían de ser designados por el Presidente de la Asamblea — para que examinara la cuestión de la aplicación de la Declaración y formulara sugerencias y recomendaciones sobre los progresos realizados en su aplicación.

En el decimoséptimo período de sesiones la Asamblea General, por su resolución 1810 (XVII), renovó el mandato del Comité y decidió ampliar su composición agregándole siete miembros más. Dicho mandato se volvió a renovar en el decimotercero período de sesiones por la resolución 1956 (XVIII) y en el vigésimo período de sesiones por la resolución 2105 (XX).

Los miembros del Comité Especial durante el año 1966 fueron el Afganistán, Australia, Bulgaria, la Costa de Marfil, Chile, Dinamarca, los Estados Unidos de América, Etiopía, la India, el Irak, el Irán, Italia, Madagascar, Malí, Polonia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Siria, Túnez, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Uruguay, Venezuela y Yugoslavia. El 20 de diciembre de 1966 el Presidente de la Asamblea General nombró a Finlandia para llenar la vacante que se produjo al retirarse Dinamarca del Comité Especial.

La Asamblea General tuvo ante sí en su vigésimo primer período de sesiones el informe del Comité Especial sobre su labor de 1966, en el que se indicaba que el Comité había celebrado noventa sesiones entre los meses de marzo y noviembre de 1966, en las que había examinado y formulado recomendaciones acerca de la aplicación de la Declaración respecto a cincuenta y un territorios. También se incluía información adicional acerca de los restantes territorios enumerados en su lista preliminar de los territorios a los que se aplicaba la Declaración pero que no se habían podido examinar. El Comité Especial había llevado a cabo un estudio adicional de las actividades de los intereses extranjeros económicos y de otra índole que estaban obstaculizando la aplicación de la Declaración a los Territorios bajo administración portuguesa y había completado un estudio análogo con respecto a Rhodesia del Sur. Había tenido en cuenta, en los casos pertinentes, la información transmitida por las Potencias administradoras en virtud

del inciso e del Artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas.

Por una decisión de la Asamblea General adoptada el 20 de diciembre de 1965, se había pedido al Comité Especial que informara al Consejo de Seguridad de todos los hechos nuevos que hubieran ocurrido en cualquiera de los Territorios que examinara y que pudieran constituir una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, y que hiciera sugerencias que el Consejo pudiera atender al estudiar las medidas que convenía adoptar de conformidad con la Carta. En conformidad con esta decisión, en la primera mitad de 1966 el Comité señaló a la atención del Consejo de Seguridad la grave situación reinante en Adén y formuló recomendaciones concretas con respecto a Rhodesia del Sur y el África Sudoccidental. El 22 de junio de 1966 formuló recomendaciones al Consejo con respecto a los Territorios bajo administración portuguesa y a Territorios coloniales de África.

El Comité Especial celebró una serie de sesiones en África en 1966. Entre el 22 de marzo y el 22 de junio se reunió en Addis Abeba, Argel, El Cairo, Dar es Salaam y Mogadiscio. En su informe, el Comité destacó los interesantes resultados logrados por estas sesiones, que no sólo subrayaron la creciente preocupación de las Naciones Unidas por la situación de las poblaciones coloniales, sino que reforzaron la propia capacidad del Comité para prestar asistencia a esos pueblos en su lucha por la libertad y la independencia. El Comité celebró cuarenta sesiones en África y escuchó a treinta y dos grupos de peticionarios. Aprobó resoluciones sobre Rhodesia del Sur, el África Sudoccidental, Basutolandia, Bechuania y Swazilandia, Adén, los Territorios bajo administración portuguesa y Guinea Ecuatorial.

El 22 de junio de 1966 el Comité Especial aprobó una resolución sobre todos los Territorios que había examinado en África. En esta resolución, que fue aprobada por 16 votos contra 2 y 1 abstención, deploraba la negativa de ciertas Potencias coloniales a colaborar con el Comité Especial y su constante desconocimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas; recomendaba al Consejo de Seguridad que diera obligatoriedad a las medidas previstas en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas contra Portugal, Sudáfrica y el régimen de minoría racista de Rhodesia del Sur; condenaba las actividades de los intereses financieros que operaban en esos Territorios explotando sus recursos humanos y materiales y que impedían el progreso de las respectivas poblaciones hacia la libertad y la independencia; reconocía la legitimidad de la lucha de los pueblos que estaban bajo dominación colonial a ejercer

su derecho a la libre determinación y a la independencia e invitaba a todos los Estados a suministrar ayuda material y moral a los movimientos de liberación nacional en los Territorios coloniales; pedía a las Potencias coloniales que desmantelaran las bases militares instaladas en los Territorios coloniales y que se abstuvieran de establecer otras nuevas; y pedía a todos los Estados y a las instituciones internacionales, inclusive el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el Fondo Monetario Internacional y otros organismos especializados de las Naciones Unidas, que se abstuvieran de prestar ayuda en cualquier forma a los Gobiernos de Portugal y Sudáfrica mientras no renunciaran ellos a su política de dominación colonial y de discriminación racial.

Al iniciar la labor en 1966, muchos de los miembros del Comité Especial expresaron la opinión de que los progresos realizados en la aplicación de la Declaración habían sido muy inferiores a las esperanzas que había despertado su aprobación casi seis años antes. Se observó que en general no habían disminuido las persistentes violaciones del derecho de los países y pueblos coloniales a la libre determinación, ni las actividades represivas de las Potencias interesadas, en confabulación con intereses creados económicos y de otra índole, contra la lucha de los movimientos de liberación nacional. Se expresó la creencia de que este anacrónico estado de cosas representaba una de las causas fundamentales de la deplorable situación internacional que prevalecía. En especial, muchos miembros manifestaron gran preocupación por el hecho de que, debido a la deliberada oposición y a la continua falta de cooperación de las Potencias administradoras interesadas, muchos graves y difíciles problemas coloniales parecían no haberse acercado perceptiblemente a una solución pacífica dentro del contexto de la Declaración, y habían en cambio alcanzado proporciones alarmantes que entrañaban peligrosas posibilidades.

Durante el año 1966 el Comité Especial tomó nota de que habían alcanzado la independencia la Guayana Británica (Guyana), Bechuania (Botswana), Basutolandia (Lesotho) y Barbados.

En conformidad con la solicitud que le dirigió la Asamblea General a fines de 1965, el Comité Especial prestó particular atención a los pequeños territorios. Si bien reconoció que su reducido tamaño y escasa población, así como sus limitados recursos, presentaban problemas peculiares, el Comité Especial expresó su firme opinión de que las disposiciones de la Declaración se aplicaban plenamente a esos territorios. En consecuencia, pidió a las Potencias administradoras que sin demora dieran a la población la posibilidad de expresar en completa libertad y sin restricción alguna su deseo sobre el futuro de sus países. A este respecto, el Comité expresó la creencia de que era conveniente una presencia de las Naciones Unidas mientras se pusiera en práctica el derecho a la libre determinación. El Comité tomó nota también de la urgente necesidad de adoptar medidas para consolidar la base de la economía de esos territorios y promover su desarrollo social y económico. Con respecto a algunos de esos territorios, el Comité se mostró profundamente preocupado por los informes que indicaban que se estaban haciendo preparativos para utilizarlos con fines militares, así como por falta de respeto para con su integridad territorial por parte de la Potencia administradora.

El Comité Especial insistió una vez más en la importancia de enviar misiones visitadoras a los territo-

rios más pequeños. En vista de que la información disponible sobre las condiciones en esos territorios y sobre las opiniones, deseos y aspiraciones de los pueblos era insuficiente, el Comité reiteró su solicitud de que las Potencias administradoras prestaran su plena cooperación, permitiendo el acceso a los Territorios bajo administración.

El Comité Especial prestó particular atención a la aplicación de las decisiones adoptadas en 1965 por la Asamblea General, en las que se pedía a todos los Estados y a las instituciones internacionales que se abstuvieran de prestar ayuda en cualquier forma a los Gobiernos de Portugal y de Sudáfrica mientras no renunciaran ellos a su política de dominación colonial y de discriminación racial. En una decisión adoptada en septiembre de 1966 por 15 votos contra ninguno y 7 abstenciones, el Comité, después de haber expresado su pesar de que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Fondo Monetario Internacional siguieran concediendo préstamos y créditos considerables a los Gobiernos de Portugal y de Sudáfrica, haciendo caso omiso de las resoluciones de la Asamblea General, instó a dichas instituciones a que cooperasen en la aplicación de las resoluciones 2105 (XX) y 2107 (XX) de la Asamblea General, absteniéndose de prestar toda ayuda financiera o de otra índole a los Gobiernos de Portugal y de Sudáfrica mientras no renunciaran ellos a su política de dominación colonial y de discriminación racial.

En su vigésimo primer período de sesiones la Asamblea General consideró la aplicación de la Declaración, en sus aspectos generales, en sesión plenaria. Los capítulos del informe del Comité Especial relativos a determinados territorios fueron examinados por la Cuarta Comisión.

El 13 de diciembre de 1966, la Asamblea General aprobó la resolución 2189 (XXI), en la que declaró que la continuación del dominio colonial constituía un peligro para la paz y la seguridad internacionales y que la práctica del apartheid, así como todas las formas de discriminación racial, constituían un crimen contra la humanidad; reafirmó la legitimidad de la lucha que sostenían los pueblos bajo dominación colonial para ejercer su derecho a la libre determinación a la independencia e instó a todos los Estados a que proporcionaran asistencia material y moral a los movimientos de liberación nacional; señaló a la atención de todos los Estados las graves consecuencias de la formación en la zona meridional de África de una *entente* entre los Gobiernos de Sudáfrica y de Portugal y el régimen minoritario, racista e ilegal de Rhodesia del Sur, y exhortó a todos los Estados a que se abstuvieran de prestar cualquier apoyo o ayuda a esta *entente*, cuya existencia y cuyas actividades eran contrarias a los intereses de la paz y la seguridad internacionales; pidió a las Potencias coloniales que desmantelaran las bases e instalaciones militares que tenían en territorios coloniales y que se abstuvieran de establecer otras nuevas y de utilizar las que todavía existían para obstaculizar la liberación de los pueblos de los territorios coloniales; condenó las actividades de aquellos intereses financieros y económicos extranjeros en territorios coloniales, en particular en el África Sudoccidental, Rhodesia del Sur y los Territorios bajo dominación portuguesa, que prestaban apoyo a los regímenes coloniales y, por lo tanto, constituían un serio obstáculo a la aplicación de la Declaración, y exhortó a los Gobiernos interesados a que tomaran las medidas necesarias para poner fin

a tales actividades; condenó las políticas consistentes en imponer regímenes no representativos y constituciones, fortalecer la posición de intereses financieros y económicos extranjeros, inducir a error a la opinión pública mundial y fomentar la afluencia sistemática de inmigrantes extranjeros al mismo tiempo que se desplazaba, deportaba y trasladaba a los autóctonos a otras zonas.

En la misma resolución, la Asamblea General pedía al Comité Especial que informara al Consejo de Seguridad de todos los hechos nuevos ocurridos en cualquiera de los Territorios que examinara el Comité que pudieran constituir un peligro para la paz y la seguridad internacionales, y que formulara sugerencias concretas que el Consejo pudiera atender al estudiar las medidas que convenía adoptar de conformidad con la Carta. Invitaba al Comité a que, cuando lo considerase justo y apropiado, recomendara una fecha límite para la accesión a la independencia de cada territorio conforme a los deseos del pueblo y a las disposiciones contenidas en la Declaración. Invitaba asimismo al Comité a que prestara suma atención a los territorios pequeños y que les recomendase los medios más adecuados y las medidas que conviniera adoptar para que las poblaciones de estos territorios pudieran ejercer plenamente su derecho a la libre determinación y a la independencia. Pedía al Comité que prosiguiera su labor y que continuara investigando los medios más adecuados para aplicar inmediata e íntegramente la Declaración. La Asamblea pedía al Secretario General que promoviese la difusión amplia y constante de la Declaración y de la labor del Comité Especial. Por último, la Asamblea decidió incluir en el programa provisional de su vigésimo segundo período de sesiones un tema titulado "Actividades de los intereses extranjeros, económicos y de otro tipo, que constituyen un obstáculo para la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales en Rhodesia del Sur, el Africa Sudoccidental y los Territorios bajo dominación portuguesa, así como en todos los demás Territorios bajo dominación colonial".

Al votarse sobre esta resolución, tres párrafos fueron sometidos a votación separadamente. El párrafo 11, relativo a las bases militares, fue aprobado por 58 votos contra 23 y 21 abstenciones, después de haber decidido la Asamblea, por 55 votos contra 38 y 9 abstenciones, que la cuestión se resolvería por el voto de una mayoría simple. El párrafo 6, en el que se declaraba que la continuación del dominio colonial constituía un peligro para la paz y la seguridad internacionales, fue aprobado por 69 votos contra 12 y 16 abstenciones; y el párrafo 9, en que se pedía a todos los Estados que se abstuvieran de prestar ayuda en cualquier forma a determinados gobiernos, fue aprobado por 71 votos contra 6 y 25 abstenciones. El proyecto de resolución en su totalidad fue aprobado por 76 votos contra 7 y 20 abstenciones.

El Comité Especial empezó sus reuniones de 1967 el 9 de febrero. Entre febrero y mayo examinó la cuestión de seis Territorios del Caribe administrados por el Reino Unido, y la de Somalia Francesa. Sus Subcomités también empezaron el examen de los pequeños territorios y los estudios especiales que les fueron encargados. El Comité aceptó la invitación de los Gobiernos de la República Democrática del Congo, el Irak, Siria, la República Unida de Tanzania y Zambia para celebrar reuniones en Kinshasa, Bagdad, Damasco, Dar

es Salaam y Kitwe durante el período de mayo a julio. El representante del Reino Unido hizo saber al Comité que su Gobierno no estaría representado en las sesiones que aquél celebrara fuera de la Sede. El Comité celebró sesiones en Kinshasa, Kitwe y Dar es Salaam entre el 25 de mayo y el 21 de junio, y en ellas escuchó a peticionarios y aprobó resoluciones relativas a Rhodesia del Sur, los Territorios bajo administración portuguesa, el Africa Sudoccidental, la Isla Mauricio, las Islas Seychelles y Santa Helena. Debido a la situación en el Oriente Medio, el Comité decidió aplazar sus visitas a Bagdad y Damasco y concluir sus reuniones en Dar es Salaam el 21 de junio.

El 20 de junio de 1967 el Comité Especial aprobó, por 17 votos contra 2 y 2 abstenciones, una resolución relativa a todos los territorios coloniales africanos que había examinado en la serie de sesiones celebradas fuera de la Sede. En esta resolución, en que se reiteraban la mayoría de las disposiciones de la resolución 2189 (XXI) de la Asamblea General, el Comité pedía al Secretario General que promoviese la difusión amplia y constante de la Declaración y de la labor del Comité — incluyendo en particular la preparación, en consulta con el Comité, de publicaciones relativas a la labor del Comité en su actual período de sesiones fuera de la Sede — a fin de que la opinión pública mundial pudiera estar bien informada acerca de la situación existente en los territorios coloniales y de la lucha incesante que por la liberación sostenían los pueblos coloniales.

Las decisiones adoptadas por la Asamblea General y el Comité Especial con respecto a distintos territorios se incluyen en las siguientes secciones separadas.

B. Decisiones sobre distintos territorios

1. Rhodesia del Sur

Sobre la cuestión de Rhodesia del Sur adoptaron decisiones el Comité Especial en septiembre de 1966, la Asamblea General en su vigésimo primer período de sesiones, de septiembre a diciembre de 1966, y nuevamente el Comité Especial en junio de 1967.

El 29 de septiembre de 1966 el Comité Especial examinó y aprobó por consenso un informe sobre las consecuencias de las actividades de intereses extranjeros económicos y de otro tipo en Rhodesia del Sur, preparado por el Subcomité I. Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos no apoyaron la aprobación del informe. Al aprobar el mismo, el Comité Especial recomendó a la Asamblea General que condenara enérgicamente las actividades y los métodos de operación en Rhodesia del Sur de los intereses extranjeros económicos y de otra índole que apoyaban al régimen racista minoritario, y que instara a las Potencias interesadas a que ejercieran su influencia sobre aquellos de sus nacionales que poseían o dirigían empresas en Rhodesia del Sur con objeto de que pusieran fin a sus actividades.

En su vigésimo primer período de sesiones, la Asamblea General aprobó dos resoluciones sobre la cuestión de Rhodesia del Sur.

La primera de ellas (resolución 2138 (XXI)), que fue considerada por sus copatrocinadores como una cuestión de urgencia en vista de las conversaciones que se estaban celebrando entre funcionarios británicos y representantes del régimen ilegal, fue aprobada el 22

ue octubre de 1966 por 86 votos contra 2 y 18 abstenciones. En dicha resolución, la Asamblea General condenaba cualquier arreglo al que se llegara entre la Potencia administradora y el racista e ilegal régimen minoritario y en el cual no se reconocieran los derechos inalienables del pueblo de Zimbabwe a la libre determinación y a la independencia en conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, y reafirmaba la obligación de la Potencia administradora de traspasar el poder al pueblo de Zimbabwe sobre la base del sufragio universal de los adultos de acuerdo con el principio de "un voto por persona".

La segunda resolución fue aprobada el 17 de noviembre como resolución 2151 (XXI), por 89 votos contra 2 y 17 abstenciones. En dicha resolución la Asamblea General deploraba que el Gobierno del Reino Unido todavía no hubiera puesto fin al régimen ilegal; condenaba todo acuerdo por el que se traspasara el poder al régimen ilegal en cualquier condición que fuera; condenaba a los Gobiernos de Portugal y Sudáfrica por el apoyo que prestaban al régimen ilegal; condenaba las actividades de los intereses extranjeros financieros y de otro tipo que apoyaban al régimen ilegal, y exhortaba a los Gobiernos de los Estados interesados a que tomaran las medidas necesarias para poner término a semejantes actividades; señalaba a la atención del Consejo de Seguridad la grave situación de Rhodesia del Sur con objeto de que pudiera decidir la aplicación de las medidas previstas en el Capítulo VII de la Carta; encarecía al Gobierno del Reino Unido que tomase medidas para impedir que llegaran a Rhodesia del Sur suministros, incluso petróleo y sus derivados; encarecía al Gobierno del Reino Unido que tomase todas las medidas necesarias, incluso en particular el uso de la fuerza, para poner fin al régimen ilegal de la minoría racista; encarecía a todos los Estados que prestaran todo género de ayuda moral y material al pueblo de Zimbabwe; y pedía a los correspondientes organismos especializados que prestaran ayuda y socorro a los refugiados procedentes de Zimbabwe.

El Comité Especial examinó la cuestión de Rhodesia del Sur en junio de 1967 durante sus sesiones en Kitwe. El 9 de junio el Comité aprobó una resolución sobre Rhodesia del Sur por 17 votos contra 1 y 3 abstenciones. Por dicha resolución reafirmaba una vez más la legitimidad de la lucha del pueblo de Zimbabwe; condenaba las políticas de discriminación racial y de segregación practicadas en Rhodesia del Sur, que constituían un crimen contra la humanidad; deploraba que el Reino Unido no hubiera tomado medidas ni hubiera querido tomarlas, en su capacidad de Potencia administradora, para derrocar el régimen de la minoría racista de Rhodesia del Sur; reafirmaba la obligación que tenía la Potencia administradora de traspasar el poder sin demora al pueblo de Zimbabwe sobre la base de elecciones efectuadas de conformidad con el principio de "un voto por persona"; expresaba su convicción de que para lograr el derrocamiento del régimen ilegal de Rhodesia del Sur las sanciones debían ser completas y obligatorias y estar respaldadas por la fuerza de parte de la Potencia administradora; reafirmaba además que la única forma eficaz y rápida de poner fin a la rebelión en el Territorio era el uso de la fuerza por la Potencia administradora; encarecía una vez más al Gobierno del Reino Unido que tomase inmediatamente todas las medidas necesarias, incluso el uso de la fuerza, para abolir el régimen ilegal de la minoría racista de Rhodesia del Sur; consideraba que cualesquiera consultas ulterio-

res que celebrase la Potencia administradora para determinar el porvenir de Rhodesia del Sur debían realizarse con representantes de los partidos políticos africanos y no con el régimen ilegal; condenaba las actividades de los intereses extranjeros económicos y de otra índole que estaban impidiendo que el pueblo africano de Zimbabwe alcanzara la libertad y la independencia, y encarecía a los gobiernos de los Estados interesados que tomaran todas las medidas necesarias para poner fin a tales actividades; condenaba con la mayor energía las políticas de los Gobiernos de Sudáfrica y de Portugal de apoyo continuo al régimen ilegal de la minoría racista en escandaloso desafío de resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad; instaba a todos los Estados, como cuestión de urgencia, a que dieran plena ayuda moral y material a los movimientos de liberación nacional de Zimbabwe por medio de la Organización de la Unidad Africana; recomendaba al Consejo de Seguridad que de conformidad con su resolución 232 (1966), de 16 de diciembre de 1966, y, en particular, con el párrafo 1 de la misma, tomase las medidas necesarias en virtud del Capítulo VII de la Carta; y pedía al Secretario General que promoviera la publicidad continua y en gran escala de la labor de las Naciones Unidas respecto a esta cuestión, a fin de que la opinión pública mundial pudiera estar suficientemente informada de la situación existente en el Territorio colonial de Rhodesia del Sur y de la lucha continua por la liberación que llevaba a cabo el pueblo de Zimbabwe.

2. Africa Sudoccidental

La cuestión del Africa Sudoccidental fue examinada por el Comité Especial en mayo, junio, agosto y septiembre de 1966, por la Asamblea General en su vigésimo primer período de sesiones y por el Comité Especial para el Africa Sudoccidental entre enero y abril de 1967, por la Asamblea en su quinto período extraordinario de sesiones en abril y mayo de 1967 y por el Comité Especial en junio de 1967.

El 9 de junio de 1966 el Comité Especial aprobó por 18 votos contra ninguno y 3 abstenciones la resolución sobre el Africa Sudoccidental en la que condenaba la política de apartheid y de discriminación racial seguida por el Gobierno de Sudáfrica en el Territorio, las actividades de los intereses económicos, que explotaban los recursos humanos y materiales, impedían el progreso del Territorio y frustraban el derecho del pueblo a la libertad y la independencia, y la política seguida por el Gobierno de Sudáfrica para suprimir y frustrar indirectamente los derechos políticos y económicos de la población autóctona del Territorio mediante el asentamiento en él de gran número de inmigrantes extranjeros. El Comité recomendaba al Consejo de Seguridad que hiciera obligatorio para todos los Estados el cumplimiento del embargo sobre las armas y el petróleo contra Sudáfrica y que adoptara todas las medidas necesarias para garantizar que en el Territorio se eliminaran todas las bases e instalaciones militares; instaba a todos los Estados a que dieran a la población africana del Africa Sudoccidental apoyo moral y material en su lucha por la libertad e independencia; y creaba un Subcomité encargado de realizar un estudio detallado de la situación y recomendar una fecha cercana para la concesión de la independencia al Territorio.

El Subcomité para el Africa Sudoccidental se reunió después de que la Corte Internacional de Justicia, en

su fallo de 18 de julio de 1966, rechazara las solicitudes de Etiopía y Liberia de 1960 aduciendo que no cabía considerar que dichos países hubieran establecido ningún derecho o interés legal respecto del objeto de sus solicitudes contra Sudáfrica, por lo cual la Corte no juzgaba necesario pronunciarse sobre ninguno de los problemas de fondo que se le habían sometido.

En su informe al Comité Especial, el Subcomité manifestó su grave preocupación por la situación reinante en el Territorio a raíz del fallo dictado por la Corte Internacional, así como su convencimiento de que había que adoptar medidas urgentes y positivas para impedir una grave amenaza a la paz del Territorio. Sostuvo unánimemente la opinión de que el problema del Africa Sudoccidental era una cuestión política y colonial cuya solución debía buscarse atendiendo a los derechos humanos fundamentales del pueblo del Africa Sudoccidental para permitirle ejercer su derecho a la libre determinación en un ambiente libre y carente de restricciones. Concretamente, recomendó que se reafirmara que las disposiciones de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales eran plenamente aplicables al Africa Sudoccidental y que la población tenía el derecho inalienable a la libertad y la independencia. Para brindar a la población del Territorio la oportunidad de ejercitar ese derecho lo antes posible, el Subcomité recomendó que las Naciones Unidas ejercitaran el derecho de reversión del mandato a ellas mismas, declarasen extintas las responsabilidades de Sudáfrica como Potencia Mandataria, y asumieran la responsabilidad de la administración directa del Territorio y creasen un sistema adecuado a tal efecto. Una vez asumida la responsabilidad directa por las Naciones Unidas, debieran hacerse los arreglos del caso para celebrar elecciones con arreglo al principio del sufragio universal de los adultos; y el Territorio debía obtener la plena independencia después de las elecciones y de la formación de un gobierno. El Subcomité recomendó asimismo que en caso de que Sudáfrica se resistiera a la ejecución de las medidas señaladas, se tomaran medidas eficaces en contra de Sudáfrica, incluidas las previstas en el Capítulo VII de la Carta.

El Comité Especial aprobó el informe del Subcomité por consenso el 15 de septiembre de 1966 con sujeción a que se hicieran consignar las reservas de varios de sus miembros.

En su vigésimo primer período de sesiones, la Asamblea General examinó la cuestión del Africa Sudoccidental como cuestión prioritaria en sesión plenaria, junto con el debate general. La Asamblea tuvo ante sí el informe del Comité Especial, un informe del Secretario General sobre las medidas adoptadas por los Estados Miembros para poner en práctica las resoluciones 1899 (XVIII) y 2074 (XX) de la Asamblea General, en que se les pedía que se abstuvieran de toda entrega a Sudáfrica de material militar o de petróleo; y un informe del Secretario General sobre los programas de enseñanza y capacitación para el Africa Sudoccidental.

El 27 de octubre de 1966 la Asamblea General aprobó por 114 votos contra 2 y 3 abstenciones, su resolución 2145 (XXI) sobre el Africa Sudoccidental. En ella reafirmaba que la resolución 1514 (XV), en que se dispone que los pueblos no autóctonos tienen un derecho inalienable a la libre determinación, la libertad y la independencia, eran plenamente aplicables al pueblo del Africa Sudoccidental y que el Territorio tenía

un estatuto internacional que conservaría hasta que obtuviera la independencia. Declaraba que Sudáfrica no había cumplido sus obligaciones en cuanto a la administración del Territorio bajo mandato ni había asegurado el bienestar moral y material y la seguridad del pueblo y que de hecho había repudiado el Mandato; en consecuencia decía que el Mandato conferido a Sudáfrica había terminado, que Sudáfrica no tenía ningún otro derecho para administrar ese Territorio y que a partir de ese momento el Africa Sudoccidental se convertía en una responsabilidad directa de las Naciones Unidas. En esas circunstancias, la Asamblea resolvió que las Naciones Unidas debían cumplir estas responsabilidades y estableció un Comité Especial compuesto de catorce Estados miembros para recomendar medidas prácticas para la administración del Territorio, a fin de permitir al pueblo el ejercicio de su derecho a la libre determinación y el logro de su independencia. Pidió al Comité Especial que presentara informe a la Asamblea General en un período extraordinario de sesiones, a más tardar en abril de 1967. La Asamblea instó al Gobierno de Sudáfrica a que se abstuviera de toda acción constitucional, administrativa, política o de cualquier otra índole que alterase el estatuto internacional del Territorio. También señaló a la atención del Consejo de Seguridad su resolución y pidió a todos los Estados que prestaran plena asistencia en su aplicación.

El 21 de noviembre de 1966 el Presidente nombró al Canadá, Checoslovaquia, Chile, los Estados Unidos de América, Etiopía, Finlandia, Italia, el Japón, México, Nigeria, el Paquistán, la República Árabe Unida, el Senegal y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas miembros del Comité Especial para el Africa Sudoccidental.

El 27 de octubre de 1966 la Asamblea General aprobó sin objeciones la resolución 2146 (XXI) sobre peticiones relativas al Africa Sudoccidental. En esta resolución, la Asamblea tomó nota de que el Comité Especial había tenido en cuenta las peticiones al examinar la cuestión del Africa Sudoccidental y señaló a la atención de los peticionarios interesados el informe del Comité Especial relativo al Territorio, las resoluciones aprobadas por la Asamblea en su vigésimo primer período de sesiones y los informes del Secretario General relativos a dicho Territorio.

El informe del Secretario General sobre los programas especiales de enseñanza y capacitación para el Africa Sudoccidental se examina en la sección D del capítulo VI.

El Comité Especial para el Africa Sudoccidental se reunió entre el 17 de enero y el 31 de marzo de 1967. Al no poder llegar a una conclusión concertada, el Comité Especial presentó a la Asamblea General tres propuestas separadas: una patrocinada por Etiopía, Nigeria, la República Árabe Unida y el Senegal, a los que se añadió luego el Paquistán; otra por el Canadá, los Estados Unidos e Italia; y otra por Chile y México, con el apoyo del Japón. En el informe del Comité Especial figuraban asimismo sugerencias formuladas por Checoslovaquia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que reflejaban una cuarta posición.

Los Estados africanos y el Paquistán propusieron una administración temporal directa de las Naciones Unidas, por medio de un Consejo de las Naciones Unidas para el Africa Sudoccidental, con la ayuda de un Comisionado. El Consejo, que tendría autoridad legislativa, se trasladaría al Africa Sudoccidental con el

fin de encargarse de la administración del Territorio, asegurar el retiro de la policía y las fuerzas militares y otro personal sudafricano y reemplazarlos por personal de las Naciones Unidas encargado de velar por el cumplimiento de la ley y otro personal de las Naciones Unidas. En consulta con representantes del pueblo, el Consejo establecería una asamblea constituyente a la que se encargaría la labor de elaborar una constitución, con arreglo a la cual se celebrarían elecciones sobre la base del sufragio universal de los adultos para establecer una asamblea legislativa. Al formarse el nuevo gobierno, se declararía inmediatamente la independencia del África Sudoccidental, a más tardar en junio de 1968. Los cinco patrocinadores también propusieron que la Asamblea General declarase que la presencia continua de Sudáfrica en el África Sudoccidental y toda acción de Sudáfrica que burlase o entorpeciera la labor del Consejo constituirían un acto de agresión contra el pueblo y contra la integridad territorial del África Sudoccidental, así como un desafío flagrante a la autoridad de las Naciones Unidas que requeriría la adopción de las medidas previstas en el Capítulo VII de la Carta.

La propuesta del Canadá, los Estados Unidos e Italia estaba encaminada a que se designase un representante especial que hiciera un estudio amplio de la situación del Territorio, estableciera contacto con todas las personas que considerara necesario y, entre otras cosas, determinase las condiciones necesarias para que el África Sudoccidental pudiera lograr la libre determinación y la independencia. Debía rendir informe a la Asamblea General en su vigésimo segundo período ordinario de sesiones.

Conforme a las propuestas de Chile y México, se crearía un Consejo de las Naciones Unidas y un Comisionado con funciones similares a las propuestas por los Estados africanos y el Paquistán. Sin embargo, esta propuesta no contenía ninguna disposición acerca de medidas coercitivas y preveía contactos con las autoridades de Sudáfrica para reglamentar el traspaso del Territorio al Consejo, que asumiría sus responsabilidades administrativas sólo después de su instalación en el Territorio.

Por último, Checoslovaquia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se oponían a una administración directa del Territorio por las Naciones Unidas, sugirieron que la Asamblea declarase inmediatamente la independencia del Territorio y dejara que la Organización de la Unidad Africana prestara asistencia al movimiento de liberación nacional y a la formación de un nuevo gobierno.

En su quinto período extraordinario de sesiones, la Asamblea General examinó el informe del Comité Especial, y el 19 de mayo de 1967 aprobó por 85 votos contra 2 y 3 abstenciones la resolución 2248 (S-V). Por esta resolución la Asamblea: 1) resolvía crear un Consejo de las Naciones Unidas para el África Sudoccidental, compuesto de once miembros y autorizado para administrar el Territorio hasta la independencia, con la máxima participación posible del pueblo del Territorio; 2) resolvía que el Consejo tuviera su sede en el África Sudoccidental y se trasladara allí y entrase inmediatamente en relaciones con las autoridades sudafricanas, a fin de establecer los procedimientos para el traspaso de la administración del Territorio con el menor trastorno posible, incluso el retiro de la policía, de las fuerzas militares y otro personal sudafricano y su

reemplazo por personal que actuase bajo la autoridad del Consejo; 3) pedía al Gobierno de Sudáfrica que cumpliera sin demora las disposiciones de la resolución y facilitara el traspaso de la administración del Territorio; y 4) pedía al Consejo de Seguridad que tomase todas las medidas apropiadas para que el Consejo pudiera cumplir sus funciones. En la misma resolución la Asamblea resolvía que el Consejo confiara las tareas ejecutivas y administrativas a un Comisionado de las Naciones Unidas para el África Sudoccidental, quien sería nombrado en ese período de sesiones a propuesta del Secretario General, y que el Consejo informase a la Asamblea General al menos una vez por trimestre y presentara un informe especial a la Asamblea en su vigésimo segundo período de sesiones sobre la aplicación de la resolución. En lo referente a la independencia del Territorio, la Asamblea resolvía que la fecha de la independencia se fijara en conformidad con los deseos del pueblo y que el Consejo hiciera todo lo posible para que dicha independencia se lograra a más tardar en junio de 1968.

El 13 de junio la Asamblea General eligió a Colombia, Chile, Guyana, la India, Indonesia, Nigeria, el Paquistán, la República Árabe Unida, Turquía, Yugoslavia y Zambia miembros del Consejo de las Naciones Unidas para el África Sudoccidental. En la misma sesión, a propuesta del Secretario General, nombró al Sr. Constantin A. Stavropoulos, Asesor Jurídico de las Naciones Unidas, Comisionado Interino de las Naciones Unidas para el África Sudoccidental.

El 19 de junio el Comité Especial aprobó por unanimidad una resolución sobre el África Sudoccidental en la cual, después de haber expresado su grave preocupación por las medidas adoptadas por el Gobierno de Sudáfrica para modificar el estatuto de Ovambolandia, parte integrante del África Sudoccidental, mediante el establecimiento de una supuesta autonomía, consideró que estas medidas constituían una extensión del apartheid destinadas a fragmentar el Territorio, y las condenó por considerar que eran ilegales y constituían un desafío flagrante a la autoridad de las Naciones Unidas.

3. Territorios bajo administración portuguesa

Los territorios bajo administración portuguesa fueron examinados por el Comité Especial en junio y octubre de 1966, por la Asamblea General en su vigésimo primer período de sesiones y de nuevo por el Comité Especial en junio de 1967. El 22 de junio de 1966 el Comité Especial aprobó, por 18 votos contra 1 y 3 abstenciones, una resolución acerca de los territorios bajo administración portuguesa. El texto de esta resolución era fundamentalmente el mismo que el de la que aprobó después la Asamblea General, y que se describe más adelante.

En octubre de 1966 el Comité Especial examinó un informe suplementario de su Subcomité I sobre las actividades de los intereses extranjeros económicos y de otra índole que obstaculizan la aplicación de la declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales en los territorios bajo administración portuguesa. Al aprobar este informe, el Comité reafirmó todas las recomendaciones que había hecho en 1965 y recomendó que se incluyera en el programa del vigésimo primer período de sesiones de la Asamblea un tema titulado: "Actividades de los intereses extranjeros, económicos y de otro tipo, que cons-

tituyen un obstáculo para la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales en Rhodesia del Sur, el África Sudoccidental y los territorios bajo dominación portuguesa, así como en todos los demás territorios bajo dominación colonial".

El 12 de diciembre de 1966 la Asamblea General aprobó, por 70 votos contra 13 y 22 abstenciones, la resolución 2184 (XXI). En esta resolución la Asamblea General condenaba, como un crimen contra la humanidad, la política portuguesa de asentar emigrantes extranjeros en los territorios y de exportar mano de obra africana a Sudáfrica; condenaba las actividades de los intereses financieros que operaban en los territorios portugueses, explotando los recursos humanos y materiales y constituyendo un obstáculo al progreso hacia la libertad y la independencia; exhortaba a Portugal a que pusiera en vigor inmediatamente el principio de la libre determinación en lo tocante a los pueblos de los territorios bajo su administración, de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y las resoluciones 183 (1963) y 218 (1965) del Consejo de Seguridad; hacía un llamamiento a todos los Estados para que prestasen a los pueblos de los territorios apoyo moral y material para impedir que sus nacionales colaborasen con las autoridades portuguesas, especialmente en lo que se refería a las inversiones en los territorios; recomendaba al Consejo de Seguridad que diera carácter obligatorio para todos los Estados, directamente y mediante su acción en los organismos internacionales apropiados de que formaban parte, a la aplicación de las medidas contenidas en la resolución 2107 (XX) de la Asamblea General, y en particular de las que se referían a la suspensión de asistencia; pedía a todos los Estados, y en particular a los aliados de Portugal dentro del marco de la OTAN, que se abstuvieran inmediatamente de prestar al Gobierno de Portugal cualquier asistencia que le permitiese continuar su represión contra la población africana y que impidiese la venta o el suministro de armas a Portugal; hacía un nuevo llamamiento a todos los organismos especializados, y en particular al BIRF y al FMI, para que se abstuvieran de prestar a Portugal toda ayuda financiera, económica o técnica mientras el Gobierno de Portugal no aplicara la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, y pedía al Secretario General que iniciase consultas con el BIRF a fin de obtener su observancia de las resoluciones 2105 (XX) y 2107 (XX) de la Asamblea General.

El Secretario General comenzó las consultas con el BIRF a principios de 1967 y hará su informe a su debido tiempo.

El 20 de junio de 1967 el Comité Especial aprobó, por 17 votos contra 2 y 2 abstenciones, una resolución sobre la cuestión de los territorios bajo administración portuguesa. En esta resolución el Comité reiteraba muchas de las disposiciones de la resolución 2184 (XXI) de la Asamblea General y además señalaba a la urgente atención del Consejo de Seguridad la continua agravación de la situación en los territorios bajo dominación portuguesa, así como las consecuencias de los actos agresivos cometidos por Portugal contra los Estados africanos independientes que lindaban con sus colonias. También recomendada urgentemente que el Consejo tomase las medidas necesarias para hacer obligatorias las disposiciones de sus resoluciones sobre esta cuestión, en particular su resolución 218 (1965) de 23 de noviembre de 1965.

4. Adén

La cuestión de Adén fue examinada por el Comité Especial en junio, agosto y octubre de 1966 y por la Asamblea General en su vigésimo primer período de sesiones.

El 15 de junio el Comité Especial aprobó, por 18 votos contra 2 y 2 abstenciones, una resolución sobre la cuestión de Adén. En ella pedía al Secretario General que, en consulta con el Comité Especial y con la Potencia Administradora, designase inmediatamente una misión especial para Adén con el fin de que recomendase las medidas prácticas necesarias para la plena aplicación de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y, en especial, determinase el alcance de la participación de las Naciones Unidas en la preparación y supervisión de las elecciones, y le presentase a la mayor brevedad posible un informe para transmitirlo al Comité Especial. El Comité deploraba asimismo que la Potencia administradora hubiera establecido un régimen no representativo en el Territorio, con miras a conceder la independencia en violación de las resoluciones 1514 (XV) y 1949 (XVIII) de la Asamblea General, y hacía un llamamiento a todos los Estados para que no reconocieran una independencia que no estuviera basada en los deseos del pueblo del Territorio libremente expresados en elección celebrada mediante el sufragio universal de los adultos. El Comité pedía a la Potencia Administradora que declarase inequívocamente su aceptación de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, así como su disposición a cooperar con las Naciones Unidas en su inmediata aplicación, y deploraba cualquier arreglo de carácter defensivo que el Gobierno del Reino Unido pudiera concertar con el régimen no representativo del Territorio. En el párrafo 8 de la resolución, el Comité encarecía a la Potencia administradora que procediese inmediatamente a poner fin al estado de excepción, a derogar todas las leyes que coartasen las libertades públicas, a hacer cesar toda acción represiva contra el pueblo, a poner en libertad a todos los detenidos políticos y a permitir el regreso de las personas desterradas.

El Secretario General inició consultas con los interesados en el nombramiento de una misión especial y en agosto presentó un informe al Comité Especial. Este informe contenía una respuesta que había recibido el Secretario General del representante del Reino Unido en la cual decía éste que su Gobierno cooperaría con una misión designada por el Secretario General, previo acuerdo respecto de su composición y siempre que se reconociera que las responsabilidades del Reino Unido en materia de seguridad no podrían ser limitadas ni abandonadas y que el Reino Unido se encontraba jurídicamente obligado por tratados existentes con la Federación de Arabia Meridional y los Estados no federados de Arabia Meridional. El Comité examinó esas reservas en agosto y octubre.

El 12 de diciembre de 1966 la Asamblea General aprobó, por 96 votos contra ninguno y 3 abstenciones, su resolución 2183 (XXI), sobre la cuestión de Adén. En esta resolución la Asamblea General pedía al Secretario General que, en consulta con el Comité Especial y con la Potencia administradora, nombrase inmediatamente una misión especial que se enviaría a Adén para los propósitos señalados en la resolución aprobada por el Comité el 15 de junio. Además, se pedía a la misión que considerase la posibilidad de recomendar medidas prácticas para el establecimien-

to en el Territorio de un gobierno central de transición que se encargase de la administración de todo el Territorio y ayudase a organizar las elecciones. La Asamblea reafirmaba el párrafo 8 de la resolución del Comité e instaba a la Potencia administradora a aplicarlo. También exhortaba a la Potencia administradora a que tomase las medidas necesarias, de conformidad con las establecidas en el párrafo 8 de la resolución del Comité, a fin de que la misión para Adén pudiera desempeñar sus tareas sobre la base de la resolución del Comité de 15 de junio de 1966.

El 23 de febrero de 1967 el Secretario General anunció que la Misión Especial de las Naciones Unidas para Adén estaría integrada por el Sr. Manuel Pérez Guerrero (Venezuela), Presidente, Sr. Abdul Satar Shalizi (Afganistán) y el Sr. Moussa Léo Keita (Mali).

La Misión Especial empezó sus trabajos en Nueva York el 7 de marzo. El 20 de marzo salió para Londres, El Cairo, Jidda y Adén, adonde llegó el 2 de abril. Partió de Adén el 7 de abril y, antes de regresar a Nueva York el 18 de abril, visitó Ginebra y Londres. La Misión continúa su trabajo en Nueva York.

5. Basutolandia, Bechuania y Swazilandia

Bechuania obtuvo su independencia, con el nombre de Botswana, el 30 de septiembre de 1966, en tanto que Basutolandia la obtuvo el 4 de octubre de 1966 con el nombre de Lesotho. Los dos nuevos Estados fueron admitidos como Miembros de las Naciones Unidas en el vigésimo primer período de sesiones de la Asamblea General. Antes de lograr su independencia, estos dos territorios y Swazilandia fueron examinados por el Comité Especial en junio, julio y septiembre de 1966 y por la Asamblea General en su vigésimo primer período de sesiones. El 9 de junio de 1966 el Comité Especial aprobó por 20 votos contra ninguno y 1 abstención una resolución relativa a esos territorios. En ella instaba a la Potencia administradora a que garantizase que la independencia que se otorgara a los tres Territorios se basara en los deseos libremente expresados de todos los habitantes; pedía a todos los Estados que contribuyesen al fondo para el desarrollo económico de dichos Territorios creado por la Asamblea General en virtud de su resolución 2063 (XX) del 16 de diciembre de 1965; estimaba que deberían realizarse esfuerzos continuos para proporcionar ayuda económica, financiera y técnica en virtud de los programas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados; y decidía crear un subcomité encargado de realizar estudios y de proponer las medidas necesarias para garantizar la integridad territorial y la soberanía de los tres territorios, conforme se había pedido en la resolución anteriormente mencionada.

El Comité Especial prestó nueva consideración a la cuestión de la situación de los tres Territorios en julio de 1966, cuando concedió audiencia a peticionarios, acerca de Basutolandia, que representaban a partidos de oposición, y que protestaron contra la actitud adoptada por el Gobierno del Reino Unido en la reciente conferencia constitucional respecto de las condiciones en que Basutolandia alcanzaría su independencia.

El 8 de julio el Comité Especial aprobó un consenso de las opiniones de sus miembros acerca de los recientes acontecimientos de Basutolandia. Todos los miembros manifestaron el deseo de que Basutolandia alcanzara la independencia, que en opinión general debería

fundarse en los principios formulados en la resolución del Comité de 9 de junio de 1966. Muchos miembros expresaron su esperanza de que todos los partidos políticos del Territorio se unieran para realizar los objetivos comunes y que la integridad territorial de Basutolandia fuera garantizada.

El 15 de septiembre el Comité Especial aprobó por consenso el informe de su Subcomité sobre Basutolandia, Bechuania y Swazilandia. Al aprobar este informe el Comité pidió a la Potencia administradora que adoptase todas las medidas pertinentes, antes de que los Territorios llegaran a la independencia, para que pudiesen lograr una completa independencia bajo gobiernos elegidos por sus pueblos en forma libre y democrática, y proteger su integridad territorial y su soberanía contra los manifestos designios del régimen racista de la República de Sudáfrica en el sentido de continuar injiriéndose en sus asuntos. El Comité recomendó también que la Asamblea General advirtiera de nuevo solemnemente al Gobierno de la República de Sudáfrica que cualquier intento de infringir la integridad territorial y la soberanía de los tres Estados a raíz de la independencia sería considerado como un acto de agresión y que cualquier interferencia en sus asuntos internos constituiría una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas, con todas las consecuencias inherentes; hizo un llamamiento a todos los Estados para que se abstuvieran de cualquier medida que pudiera alentar al Gobierno de la República de Sudáfrica a realizar tal infracción o interferencia; y señaló a la atención del Consejo de Seguridad la amenaza que la política de Sudáfrica representaba para la independencia, la integridad territorial y la soberanía de los tres Estados después de alcanzada su independencia.

En su vigésimo primer período de sesiones, la Asamblea General tuvo ante sí un informe del Secretario General sobre el estado del fondo para el desarrollo de la economía de los tres Territorios. El Secretario General decía en su informe que, dada la insuficiencia de las contribuciones prometidas hasta el momento, no había sido posible constituir el fondo.

El 29 de septiembre la Asamblea General aprobó, por 84 votos contra 2 y 19 abstenciones, la resolución 2134 (XXI) sobre los tres Territorios. En esta resolución la Asamblea reiteraba su gran inquietud ante la seria amenaza a la integridad territorial y la soberanía de los territorios que representaba la política agresiva del actual régimen de la República de Sudáfrica; hacía suyas las recomendaciones del Comité Especial; y exhortaba a todos los Estados que todavía no lo hubieran hecho a que contribuyeran al fondo establecido por la Asamblea General en su resolución 2063 (XX).

6. Somalia Francesa

La Somalia Francesa, que en 1965 fue incluida por el Comité Especial en la lista de territorios a los que se aplicaba la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, fue examinada por el Comité en junio y octubre de 1966, por la Asamblea General en su vigésimo primer período de sesiones y de nuevo por el Comité en marzo y abril de 1967. Después de oír a los peticionarios y de escuchar las declaraciones de los representantes de Somalia y Etiopía en junio y octubre de 1966, el Comité decidió transmitir las actas de sus sesiones a la Asamblea General.

El 12 de diciembre de 1966 la Asamblea General aprobó, por 70 votos contra 2 y 16 abstenciones, la resolución 2228 (XXI). Por esta resolución la Asamblea, habiendo tomado nota de que se celebraría un referéndum en el Territorio antes de julio de 1967 para que la población pudiera decidir su futuro político, reafirmaba el derecho inalienable del pueblo de la Somalia Francesa (Djibouti) a la libre determinación y la independencia; pedía a la Potencia administradora que adoptase las medidas necesarias para que los habitantes indígenas del Territorio pudieran expresar y ejercer libremente el derecho a la libre determinación, sobre la base del sufragio universal de los adultos y con pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales; instaba a la Potencia administradora a que promoviese un clima político adecuado para que el referéndum se llevara a cabo sobre una base enteramente libre y democrática; y pedía a la Potencia administradora que, en consulta con el Secretario General, adoptase disposiciones apropiadas para que hubiera una presencia de las Naciones Unidas antes del referéndum, y para que la Organización pudiera supervisar la celebración del mismo.

El 15 de marzo de 1967 el Comité Especial aprobó por 16 votos contra 1 y 7 abstenciones una resolución sobre la cuestión de la Somalia Francesa en la cual expresaba su pesar por el hecho de que la Potencia administradora no hubiese cumplido todavía las disposiciones de la Asamblea General e instaba a dicha Potencia que asegurase que el próximo referéndum se realizara de manera justa y democrática.

Del referéndum, que se celebró el 19 de marzo, resultó una mayoría en favor de continuar la asociación con Francia. El 6 de abril el Comité Especial escuchó a catorce peticionarios sobre cuestiones relativas al Territorio.

7. Guinea Ecuatorial

La cuestión de la Guinea Ecuatorial fue examinada por el Comité Especial en junio y noviembre de 1966, y por la Asamblea General en su vigésimo primer período de sesiones.

El 21 de junio de 1966 el Comité Especial, por invitación del Gobierno de España, decidió enviar al Territorio un subcomité encargado de averiguar cuál era la situación, con miras a celebrar la aplicación de las resoluciones 1514 (XV) y 2067 (XX) de la Asamblea General.

El Subcomité, compuesto por los representantes de Sierra Leona (Presidente), Chile, Dinamarca, Malí, Polonia, República Unida de Tanzania y Siria, visitó la Guinea Ecuatorial en agosto y presentó su informe al Comité de noviembre de 1966. El Comité hizo suyas las conclusiones y recomendaciones del subcomité.

El 20 de diciembre de 1966 la Asamblea General aprobó, por 109 votos contra ninguno y 7 abstenciones, la resolución 2230 (XXI). En dicha resolución, que reflejaba ampliamente las recomendaciones del subcomité, la Asamblea pedía a la Potencia administradora que instaurase plenas libertades democráticas, estableciese un sistema electoral basado en el sufragio universal de los adultos, celebrase antes de la independencia elecciones generales sobre la base de un padrón electoral unificado, fijase una fecha para la independencia y, con tal objeto, organizase una conferencia constitucional con plena representación. También pedía

al Secretario General que, en consulta con la Potencia administradora y con el Comité Especial, asegurase la participación de las Naciones Unidas en las medidas conducentes a la independencia, inclusive la celebración de elecciones. También pedía a la Potencia administradora que mantuviera la integridad territorial de la Guinea Ecuatorial cuando llegara a la independencia. Finalmente, expresaba su agradecimiento al Gobierno de España por haber invitado al Comité Especial a visitar el Territorio y por la colaboración prestada al subcomité durante su visita.

8. Ifni y Sahara Español

La cuestión de los territorios de Ifni y el Sahara Español fue examinada por el Comité Especial en junio, octubre y noviembre de 1966 y por la Asamblea General en su vigésimo primer período de sesiones.

En junio de 1966 el Comité Especial aprobó un consenso en el sentido de solicitar de España información acerca de las medidas tomadas para aplicar la resolución 2072 (XX), de 16 de diciembre de 1965, de la Asamblea General.

El 16 de noviembre de 1966 el Comité Especial aprobó, por 19 votos contra ninguno y 3 abstenciones, una resolución sobre estos dos Territorios, en la que se invitaba a la Potencia administradora a fijar, en consulta con la población del Sahara, con los Gobiernos de Mauritania y Marruecos y con toda otra parte interesada, las modalidades de la celebración de un referéndum que se realizara bajo los auspicios de las Naciones Unidas, a fin de que la población autóctona del Territorio pudiera ejercer libremente su derecho a la libre determinación. También se invitaba a la Potencia administradora a acelerar el proceso de descolonización del Territorio de Ifni y a convenir con el Gobierno de Marruecos las modalidades del traspaso de poderes, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 1514 (XV).

El 20 de diciembre de 1966 la Asamblea General aprobó por 105 votos contra 2 y 8 abstenciones la resolución 2229 (XXI) sobre Ifni y el Sahara Español. Por esta resolución la Asamblea pedía al Secretario General que, en consulta con la Potencia administradora y con el Comité Especial, nombrase inmediatamente una misión especial que se enviaría al Sahara Español a fin de que recomendase medidas prácticas para la plena aplicación de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y, en particular, de que determinase el alcance de la participación de las Naciones Unidas en la preparación y supervisión de un referéndum en el Territorio. La Asamblea también pedía el cumplimiento de ciertos requisitos específicos respecto al referéndum, tales como el regreso de los exiliados, e invitaba a la Potencia administradora a que determinase los procedimientos para celebrarlo en consulta con los Gobiernos de Marruecos y de Mauritania y con cualquier otra parte interesada. También pedía a la Potencia administradora que acelerase el proceso de descolonización de Ifni.

9. Gibraltar

La cuestión de Gibraltar fue examinada por el Comité Especial en noviembre de 1966 y por la Asamblea General en su vigésimo primer período de sesiones.

El 17 de noviembre de 1966 el Comité Especial aprobó, por 16 votos contra ninguno y 6 abstenciones, una

resolución sobre la cuestión de Gibraltar. Por esta resolución el Comité invitaba a las dos partes a que se abstuvieran de actos que obstruyeran el éxito de las negociaciones; lamentaba la demora en el proceso de descolonización y en la aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General a este Territorio; e invitaba a las dos partes a que continuasen sus negociaciones con espíritu constructivo e informasen al Comité Especial lo antes posible y, en todo caso, antes del vigésimo segundo periodo de sesiones de la Asamblea General.

El 20 de diciembre de 1966 la Asamblea General aprobó, por 101 votos contra ninguno y 14 abstenciones, la resolución 2231 (XXI), sobre la cuestión de Gibraltar. En esta resolución la Asamblea lamentaba la demora en el proceso de descolonización e invitaba a las dos partes a que continuasen sus negociaciones, teniendo en cuenta los intereses de la población del Territorio, y pedía a la Potencia administradora que acelerase la descolonización sin ningún obstáculo en consulta con el Gobierno de España. También pedía al Secretario General que prestase su ayuda para la aplicación de la resolución.

10. Islas Viti

La cuestión de las Islas Viti fue examinada por el Comité Especial en septiembre de 1966 y por la Asamblea General en su vigésimo primer periodo de sesiones. El 7 de septiembre de 1966 el Comité Especial aprobó una resolución en la cual reafirmaba el derecho inalienable de las islas Viti a la libertad y la independencia de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y pedía al Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que aplicase, entre otras, las medidas siguientes: celebración de elecciones generales sobre la base de un voto por persona, de conformidad con el principio del sufragio universal de los adultos, a fin de formar una asamblea constituyente que se encargara de redactar una constitución democrática; traspaso de nuevos poderes a un gobierno representativo, fijación de una fecha próxima para la concesión de la independencia, y supresión de toda clase de medidas discriminatorias para fomentar la armonía de comunidades y la unidad nacional en el Territorio. El Comité también decidió designar un Subcomité para que visitase las Islas Viti con el fin de estudiar directamente la situación en el Territorio.

El 12 de diciembre de 1966 la Asamblea General aprobó por 78 votos contra 6 y 17 abstenciones la resolución 2185 (XXI), sobre las Islas Viti. Por esta resolución la Asamblea hacía suya la decisión del Comité Especial de designar un subcomité para que visitara el Territorio y pedía a la Potencia administradora que aplicase las medidas necesarias para la celebración de elecciones sobre la base de un voto por persona, la fijación de una fecha próxima para la independencia y la supresión de toda clase de medidas discriminatorias a fin de fomentar la armonía de comunidades y la unidad nacional en el Territorio.

11. Islas Malvinas (Falkland Islands)

El 16 de noviembre de 1966 el Comité Especial tomó nota de la información suministrada por los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido respecto de que, de conformidad con la resolución 2065 (XX) de la Asamblea General, de 16 de diciembre de 1965, se

habían celebrado reuniones en julio de 1966 acerca del problema de las Islas Malvinas (Falkland Islands) y que continuarían tales reuniones.

El 20 de diciembre de 1966 la Asamblea General tomó nota de un consenso alcanzado en la Cuarta Comisión acerca de las Islas Malvinas (Falkland Islands) en favor de que se instara a ambas partes a que continuaran las negociaciones con objeto de lograr lo antes posible una solución pacífica del problema.

12. Antigua, Bahamas, Bermudas, Dominica, Granada, Guam, Isla Mauricio, Isla Pitcairn, Islas Caimán, Islas Cocos (Keeling), Islas Gilbert y Ellice, Islas Salomón, Islas Seychelles, Islas Tokelau, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos de América, Montserrat, Niue, Nuevas Hébridas, Samoa Americana, San Cristóbal-Nieves-Anguila, San Vicente, Santa Elena y Santa Lucía

Estos veinticinco territorios fueron examinados por los Subcomités I, II y III del Comité Especial. En octubre y noviembre de 1966 el Comité adoptó sus conclusiones y recomendaciones sobre estos territorios basándose en los informes de sus Subcomités.

En su vigésimo primer periodo de sesiones la Asamblea General oyó acerca de las Bermudas a un petionario que representaba al Progressive Labour Party.

El 20 de diciembre de 1966 la Asamblea General aprobó por 93 votos contra ninguno y 24 abstenciones su resolución 2232 (XXI) sobre estos territorios. Por dicha resolución la Asamblea reafirmaba el derecho inalienable de los mismos a la libre determinación y la independencia; reiteraba su declaración en el sentido de que todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de los territorios coloniales y a establecer bases o instalaciones militares en esos territorios era incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General; instaba a las Potencias administradoras a que permitiesen visitar los territorios a las misiones de las Naciones Unidas y les ofrecieran toda su cooperación y asistencia; decidía que las Naciones Unidas debían prestar a los pueblos de esos territorios toda la ayuda que necesitaran en sus esfuerzos por decidir libremente su futura situación; y pedía al Comité Especial que continuase prestando especial atención a esos territorios.

En febrero y marzo de 1967 el Comité Especial examinó la cuestión de Antigua, Dominica, Granada, San Cristóbal-Nieves-Anguila, San Vicente y Santa Lucía. El Comité se ocupó de esta cuestión con carácter urgente porque los Territorios iban a adquirir un nuevo estatuto como Estados en asociación con el Reino Unido. El 23 de marzo de 1967 el Comité aprobó, por 18 votos contra 3 y 3 abstenciones, una resolución sobre esos territorios. En dicha resolución el Comité reafirmaba que la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y otras resoluciones pertinentes siguiesen aplicándose a los Territorios y pedía a su Subcomité III que examinase a la luz de los recientes acontecimientos constitucionales la situación en los Territorios en todos sus aspectos, inclusive la posibilidad de enviar a ellos una misión visitadora que informara a la Comisión más adelante.

En junio de 1967 el Comité Especial examinó el informe de su Subcomité I respecto de la Isla Mauricio, Las Islas Seychelles y Santa Elena. El 19 de junio aprobó por 17 votos contra 2 y 3 abstenciones una resolución sobre tales Territorios. Por dicha resolución el Comité instaba a la Potencia administradora a que celebrase sin demora elecciones libres en los Territorios sobre la base del sufragio universal de los adultos y a que traspasase todos los poderes a los órganos administrativos elegidos por el pueblo. Exhortaba al Gobierno del Reino Unido a conceder a los Territorios el estatuto político que eligiera libremente el pueblo y a abstenerse de tomar cualquier medida incompatible con la Carta de las Naciones Unidas y con la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. El Comité deploraba el desmembramiento de la Isla Mauricio y de las Islas Seychelles por la Potencia administradora, el cual violaba su integridad territorial en contravención de las resoluciones 2066 (XX) y 2232 (XXI) de la Asamblea General, y pedía al Reino Unido que devolviese a dichos Territorios las islas que habían sido separadas de ellos. El Comité declaraba que el establecimiento de instalaciones militares o cualquier otra actividad de carácter militar en el territorio violaba la resolución 2232 (XXI) de la Asamblea General y constituía un origen de tensión en África, Asia y el Oriente Medio. Pedía a la Potencia administradora que desistiese de establecer tales instalaciones militares.

13. Omán

En junio de 1966 el Comité Especial oyó a peticionarios acerca de Omán. En noviembre de 1966 decidió

que por falta de tiempo, como no había podido concluir su examen de la cuestión de Omán, examinaría el asunto en sus sesiones de 1967 con miras a aplicar la resolución 2073 (XXI) de la Asamblea General.

El 20 de diciembre de 1966 la Asamblea General aprobó por 70 votos contra 18 y 28 abstenciones la resolución 2238 (XXI), sobre la cuestión de Omán. Por esta resolución la Asamblea General reafirmaba el derecho inalienable del pueblo del Territorio en su conjunto a la libre determinación y la independencia y reconocía la legitimidad de su lucha, deploraba la negativa del Reino Unido a aplicar las resoluciones 1514 (XV) y 2073 (XX) de la Asamblea General, así como la política seguida por el Gobierno de establecer y respaldar un régimen no representativo del Territorio contraviniendo las resoluciones pertinentes de la Asamblea General; reconocía que los recursos naturales del Territorio pertenecían al pueblo de Omán y que las concesiones otorgadas a los monopolios extranjeros sin el consentimiento de aquél constituían una violación de los derechos del pueblo; y consideraba que el mantenimiento de bases y depósitos militares y de tropas en el Territorio constituía un obstáculo importante que impedía al pueblo el ejercicio de su derecho a la libre determinación y la independencia y ponía en peligro la paz y seguridad de la región, por lo que era esencial su inmediato retiro. La Asamblea pedía también al Reino Unido la cesación de todas las medidas represivas contra la población del Territorio, el retiro de sus tropas, la liberación de los presos políticos y de los detenidos políticos y el regreso al Territorio de los exiliados políticos y la eliminación de su dominación en todos sus aspectos.

REFERENCIAS

Para el informe del Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, véanse *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Anexos*, adición al tema 23 del programa.

Para otros documentos pertinentes y la lista de las actas correspondientes, véanse *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Anexos*, temas 23, 64, 65, 67, 69 y 70 del programa; e *ibid.*, quinto período extraordinario de sesiones, *Anexos*, tema 7 del programa.

Véanse también A/AC.109/234, A/AC.109/235 y A/AC.109/248.

CAPITULO VI

Asuntos relativos a los territorios en fideicomiso y a los territorios no autónomos

A. Territorios en fideicomiso

1. Trabajos del Consejo de Administración Fiduciaria

El Consejo de Administración Fiduciaria celebró su 33º período de sesiones en la Sede el 27 de mayo y del 27 de junio al 26 de julio de 1966. El Consejo empezó su 34º período de sesiones el 29 de mayo de 1967.

La tarea principal del Consejo de Administración Fiduciaria en su 33º período de sesiones consistió en examinar la situación en los tres Territorios en fideicomiso que quedan: Nauru, Nueva Guinea y las Islas del Pacífico, y en hacer recomendaciones sobre los mismos a las Autoridades Administradoras, con miras al cumplimiento de los objetivos del régimen internacional de administración fiduciaria. El Consejo informó a la Asamblea General sobre su examen de la situación en Nauru y Nueva Guinea y al Consejo de Seguridad sobre la situación en el Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico.

En su 33º período de sesiones el Consejo de Administración Fiduciaria examinó también los informes del Secretario General sobre los ofrecimientos de Estados Miembros de conceder facilidades de estudio y capacitación a los habitantes de los Territorios en fideicomiso y sobre la distribución de información acerca de las actividades de las Naciones Unidas en los Territorios en fideicomiso.

En su 33º período de sesiones el Consejo de Administración Fiduciaria estuvo integrado por cuatro Autoridades Administradoras, es decir Australia (Nueva Guinea y Nauru), los Estados Unidos de América (Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico), Nueva Zelandia (Nauru) y el Reino Unido (Nauru), y por cuatro miembros no administradores, tres de los cuales — China, Francia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas — participaron en su calidad de miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y el cuarto — Liberia — fue un miembro elegido cuyo mandato termina a fines de 1968.

2. Decisiones relativas a los territorios en fideicomiso

NAURU

El Consejo de Administración Fiduciaria, tras haber sido informado en su 33º período de sesiones por el Jefe Principal de que el pueblo nauruano deseaba seguir siendo una pequeña nación con personalidad propia y lograr su independencia el 31 de enero de 1968, reco-

mendó a la Autoridad Administradora que tomase seriamente en cuenta los deseos del pueblo de Nauru, libremente expresados por conducto de sus representantes elegidos, de que se le concediese la independencia a más tardar el 31 de enero de 1968. Se declaró también de acuerdo con la opinión de la Misión Visitadora de las Naciones Unidas a los Territorios en fideicomiso de Nauru y Nueva Guinea, en 1965, de que no debía abandonarse la idea del reasentamiento y tomó nota de que la Autoridad Administradora había convenido en examinar cualesquier propuestas de reasentamiento que resultasen aceptables para el pueblo de Nauru y le garantizasen la preservación de su identidad nacional. El Consejo observó que la Autoridad Administradora, en respuesta a sus recomendaciones, había nombrado a un comité de expertos para que informara sobre la posibilidad de rehabilitación de las tierras una vez agotados los yacimientos de fosfato, atendiendo a una solicitud hecha por los nauruanos, y pidió que el informe se presentase lo antes posible. Con respecto a la cuestión de la propiedad de los yacimientos de fosfato, el Consejo señaló a la atención de la Autoridad Administradora la resolución 1803 (XVII) de la Asamblea General relativa a la soberanía permanente sobre los recursos naturales.

En su vigésimo primer período de sesiones la Asamblea General examinó la cuestión de Nauru, teniendo a la vista el informe del Consejo de Administración Fiduciaria, así como el del Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. En su informe el Comité había recomendado que la Autoridad Administradora adoptase medidas concretas de conformidad con las disposiciones de la Declaración para satisfacer el deseo del pueblo de Nauru de alcanzar la independencia en enero de 1968. El Comité declaraba asimismo que se diese a los nauruanos el control absoluto de sus recursos económicos naturales.

El 20 de diciembre de 1966, la Asamblea General aprobó la resolución 2226 (XXI) por 85 votos contra 2 y 27 abstenciones. En esta resolución la Asamblea reafirmaba el derecho inalienable del pueblo de Nauru a la autonomía y a la independencia; recomendaba a la Autoridad Administradora que fijase la fecha más próxima posible, pero no posterior al 31 de enero de 1968, para la independencia del pueblo nauruano, de conformidad con los deseos libremente expresados por éste; recomendaba, además, que la Autoridad Administradora transfiriese el control de la explotación de la industria del fosfato al pueblo nauruano y que tomase medidas inmediatas, fuese cual fuese su costo, con miras

a restaurar la isla de Nauru a fin de que pueda ser habitada por el pueblo nauruano como nación soberana.

NUEVA GUINEA

El Territorio en fideicomiso de Nueva Guinea y el Territorio de Papua son administrados conjuntamente en virtud de la *Papua and New Guinea Act, 1949-1966*. En su 33º período de sesiones el Consejo de Administración Fiduciaria tomó nota de que una Comisión Especial de la Asamblea de Papua y Nueva Guinea estaba examinando la cuestión de la redacción de una constitución. El Consejo reiteró su convicción de que la próxima etapa en la evolución constitucional consistirá en garantizar a la vez un parlamento representativo y un gobierno plenamente responsable y recordó las recomendaciones de la Misión Visitadora de las Naciones Unidas a los Territorios en fideicomiso de Nauru y de Nueva Guinea, en 1965, acerca de la ampliación de las atribuciones de la Asamblea, del número y del tamaño de las circunscripciones electorales y de la cuestión de los puestos especiales y oficiales en la Asamblea. El Consejo recomendó a la Autoridad Administradora que considerase con interés las recomendaciones de la Comisión Especial sobre la redacción de una constitución e hizo asimismo recomendaciones detalladas sobre problemas de administración local, y de desarrollo económico, social y educativo.

En su vigésimo primer período de sesiones la Asamblea General examinó la cuestión de Papua y el Territorio en fideicomiso de Nueva Guinea, teniendo a la vista el informe del Consejo de Administración Fiduciaria y el del Comité Especial. En este último, el Comité encarecía a la Autoridad Administradora que adoptase cuanto antes nuevas medidas para que la Asamblea Legislativa funcionase como un cuerpo totalmente representativo y eficaz y recomendaba que se hiciese lo necesario en la esfera constitucional para suprimir los puestos especiales y reservados en la Asamblea Legislativa y para acelerar la aplicación de la Declaración.

El 20 de diciembre de 1966 la Asamblea General aprobó, por 81 votos contra 8 y 24 abstenciones, la resolución 2227 (XXI), en la cual deploraba que la Potencia administradora no hubiese aplicado la resolución 2112 (XX) de la Asamblea General; instaba a la Potencia administradora a que suprimiese todos los requisitos electorales discriminatorios, eliminase todas las prácticas del mismo carácter en las esferas económica, social, sanitaria y educativa, celebrase elecciones a base del sufragio universal de los adultos y señalase una fecha cercana para la independencia. Instaba además a la Potencia administradora a que se abstuviese de utilizar los territorios para actividades militares incompatibles con la Carta de las Naciones Unidas.

ISLAS DEL PACÍFICO

En su 33º período de sesiones el Consejo de Administración Fiduciaria observó que, con la entrada en funciones del Congreso de Micronesia y la adopción de una bandera oficial, Micronesia, hasta entonces sólo una expresión geográfica, había pasado a ser una entidad política. El Consejo reiteró su conclusión precedente de que el Congreso tuviese poderes definidos, en particular en lo referente a la hacienda pública. Consideró asimismo esencial que los habitantes de Micronesia pudieran tener una mayor participación en la elaboración de la política en la sede del Territorio. El

Consejo hizo también recomendaciones detalladas sobre cuestiones del progreso económico, social y educativo.

En su informe, el Comité Especial, que examinó la situación del Territorio en fideicomiso junto con las de otros territorios del Pacífico administrados por los Estados Unidos, recomendó que la Potencia administradora debería acelerar el desarrollo político ulterior de los territorios mediante la ampliación de las funciones y poderes de las asambleas legislativas y el traspaso de la autoridad ejecutiva a la población autóctona.

B. Territorios no autónomos

1. Transmisión de información en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas

Con arreglo a lo dispuesto en el inciso e del Artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas, el Secretario General recibió información de cinco Estados Miembros administradores: Australia, los Estados Unidos, Francia, Nueva Zelandia y el Reino Unido. Como en años anteriores, los gobiernos de Australia, los Estados Unidos y Nueva Zelandia transmitieron información relativa al gobierno de sus territorios en conformidad con las resoluciones 144 (II), 327 (IV), 848 (IX) y 1468 (XIV). Los Gobiernos de España y del Reino Unido transmitieron al Comité Especial información de carácter político y constitucional sobre los Territorios que administran.

El Secretario General no ha recibido información alguna sobre los Territorios bajo administración portuguesa a los que la Asamblea General, en la resolución 1542 (XV) de 15 de diciembre de 1960, consideró como territorios no autónomos en el sentido del Capítulo XI de la Carta. Tampoco se ha transmitido información al Secretario General con respecto a Rhodesia del Sur, que, según afirmó la Asamblea General, en su resolución 1747 (XVI) de 28 de junio de 1962, era un territorio no autónomo a los efectos del Capítulo XI de la Carta.

En su resolución 2233 (XXI) de 20 de diciembre de 1966, la Asamblea General expresó su profundo pesar porque, no obstante sus reiteradas recomendaciones, algunos Estados Miembros responsables de la administración de territorios no autónomos no habían considerado oportuno transmitir información en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta o lo habían hecho en cantidad insuficiente o demasiado tarde; la Asamblea encarecía nuevamente a todos los Estados Miembros que tenían o asumían la responsabilidad de administrar territorios cuyos pueblos todavía no habían alcanzado la plena autonomía que transmitiesen o siguiesen transmitiendo al Secretario General la información prescrita en el inciso e del Artículo 73 de la Carta, así como los datos más completos posibles sobre la evolución política y constitucional.

2. Estudio de la información transmitida por los Estados Miembros administradores

Hasta 1963, la Comisión para la Información sobre Territorios no Autónomos estudiaba la información transmitida por los Estados Miembros administradores respecto de los territorios no autónomos. Cuando la

Asamblea General decidió, por su resolución 1970 (XVIII) de 16 de diciembre de 1963, disolver esta Comisión, pidió al Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales que estudiase dicha información y la tuviese plenamente en cuenta al examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración en cada uno de los territorios no autónomos.

En su informe a la Asamblea General sobre esta cuestión, en su vigésimo primer período de sesiones, el Comité Especial señaló que, en cumplimiento de esa resolución y de conformidad con el procedimiento sugerido por el Secretario General y adoptado más tarde por el Comité, la información transmitida por los Estados Miembros administradores se había utilizado para preparar documentos de trabajo sobre cada uno de los territorios. Estos documentos eran aprobados por el Comité y pasaban a formar parte de su informe a la Asamblea. En su resolución 2109 (XX) de 21 de diciembre de 1965, la Asamblea había aprobado expresamente este procedimiento.

3. Becas y programas especiales de capacitación

OFERTAS DE FACILIDADES DE ESTUDIO Y FORMACIÓN PROFESIONAL PARA ESTUDIANTES DE LOS TERRITORIOS NO AUTÓNOMOS

Por su resolución 2234 (XXI) de 20 de diciembre de 1966, la Asamblea General encargó a los Estados Miembros que siguieran ofreciendo becas de conformidad con lo dispuesto en la resolución 845 (IX) de 22 de noviembre de 1954.

En su informe a la Asamblea General en su vigésimo primer período de sesiones, el Secretario General declaró que en 1965-1966 habían ofrecido becas los veintiséis Estados Miembros siguientes: Birmania, Brasil, Bulgaria, Ceilán, Checoslovaquia, Chipre, Estados Unidos de América, Filipinas, Ghana, Grecia, Hungría, India, Irán, Israel, Italia, México, Paquistán, Polonia, República Árabe Unida, Rumania, Sierra Leona, Túnez, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela y Yugoslavia.

Durante el año académico 1965-1966 más de 430 alumnos cursaron estudios en instituciones de enseñanza de los Estados Miembros. Esta cifra no incluye todas las becas de estudio concedidas directamente por los gobiernos en virtud de las disposiciones de la resolución 845 (IX), ya que, en algunos casos, éstas no fueron concedidas por conducto de la Secretaría de las Naciones Unidas. Además, algunos Estados Miembros administradores continuaron concediendo becas de estudio en virtud de sus propios programas.

PROGRAMAS ESPECIALES DE ENSEÑANZA Y CAPACITACIÓN PARA EL AFRICA SUDOCCIDENTAL

En su resolución 1705 (XVI) de 19 de diciembre de 1961, la Asamblea General decidió establecer programas especiales de enseñanza y capacitación para el África Sudoccidental. En la misma resolución, la Asamblea invitó a los Estados Miembros a que ofrecieran a la población autóctona del África Sudoccidental becas para terminar la enseñanza secundaria y para cursar estudios superiores de distintas clases. El Secretario General administra el programa y la Asamblea facilita los fondos.

En su informe sobre esos programas en el vigésimo primer período de sesiones de la Asamblea General, el Secretario General declaró que había ocho habitantes autóctonos del África Sudoccidental estudiando en el extranjero con becas de las Naciones Unidas. También manifestó que durante 1966 los siguientes veintisiete Estados Miembros habían ofrecido becas para autóctonos del África Sudoccidental: Birmania, Bulgaria, Checoslovaquia, China, Dinamarca, Estados Unidos de América, Ghana, India, Israel, Italia, Kenia, Kuwait, Libia, Nigeria, Noruega, Paquistán, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Árabe Unida, República Socialista Soviética de Bielorrusia, República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Sudán, Suecia, Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia. La República Federal de Alemania también había ofrecido una beca.

El 20 de diciembre de 1966, por 112 votos contra 2 y 1 abstención, la Asamblea General aprobó la resolución 2236 (XXI), en la cual expresó su agradecimiento a los Estados Miembros que habían otorgado becas a habitantes del África Sudoccidental, e invitó a esos y otros Estados a que considerasen la posibilidad de incluir en sus ofrecimientos becas de enseñanza secundaria y de formación profesional y técnica. Invitó asimismo a los Estados Miembros a que considerasen favorablemente las peticiones del Secretario General para que admitiesen en sus escuelas secundarias, profesionales o técnicas a los candidatos que hubiesen obtenido becas conforme al programa especial de capacitación. Una vez más la Asamblea pidió a todos los Estados Miembros que facilitasen los viajes de los habitantes del África Sudoccidental que tratasen de aprovechar las posibilidades de instrucción que se les ofreciesen en virtud del programa. Pidió también a todos los Estados Miembros que cooperasen con el Secretario General en la aplicación de la resolución. Pidió al Secretario General que continuase tomando las medidas necesarias con objeto de poner los beneficios del programa a disposición del mayor número posible de habitantes del África Sudoccidental.

PROGRAMA ESPECIAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TERRITORIOS BAJO ADMINISTRACIÓN PORTUGUESA

En su resolución 1808 (XVII) de 14 de diciembre de 1962, la Asamblea General decidió establecer un programa especial de capacitación para los territorios bajo administración portuguesa. Pidió al Secretario General que, al formular dicho programa, hiciese el mayor uso posible de los programas existentes de cooperación técnica de las Naciones Unidas. En la misma resolución la Asamblea General invitó a los Estados Miembros a que, directamente o por intermedio de organizaciones benéficas, ofreciesen a los estudiantes de los territorios bajo administración portuguesa becas que cubriesen todos los gastos necesarios tanto para terminar la enseñanza secundaria como para seguir estudios superiores de distintas clases.

En el informe a la Asamblea General en su vigésimo primer período de sesiones, el Secretario General comunicó que el número de becarios había aumentado de 44 a 122. De éstos, 93 eran estudiantes secundarios, 2 seguían estudios de capacitación profesional y técnica, y 27 estudios universitarios. De los 122 becarios, 96 estaban estudiando en la República Democrática del Congo, 12 en la República Unida de Tanzania y los res-

tantes estaban matriculados en instituciones de enseñanza de Austria, Estados Unidos, Francia, Senegal, Suiza y Uganda.

Además de las becas mencionadas anteriormente concedidas por las Naciones Unidas, treinta y un Estados Miembros habían ofrecido becas para habitantes de los territorios bajo administración portuguesa, atendiendo a la resolución 1808 (XVII) de la Asamblea General y, según la información recibida, unos 400 estudiantes habían recibido becas para cursar estudios en instituciones de enseñanza de los Estados oferentes o en otros países. Se señaló que Suecia había concedido 96 becas, los Estados Unidos 115 y la India 27, y que 131 estudiantes cursaban estudios en instituciones de enseñanza de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Las otras becas habían sido concedidas por Checoslovaquia, Dinamarca, Gabón, Ghana, Italia, los Países Bajos, Polonia, la República Socialista Soviética de Bielorrusia y Yugoslavia.

El 20 de diciembre de 1966, la Asamblea General aprobó, por 112 votos contra 2 y 2 abstenciones, la resolución 2237 (XXI), por la cual pidió al Secretario General que siguiese adoptando medidas para que pudiera beneficiarse del programa especial de capacitación el mayor número posible de habitantes autóctonos de los territorios bajo administración portuguesa e invitó a los Estados Miembros que habían ofrecido becas, y a los que proyectaban hacerlo, a que considerasen en primer lugar la posibilidad de ofrecer becas de enseñanza secundaria y de formación profesional y técnica. La Asamblea reiteró su petición al Gobierno de Portugal de que cooperase en la ejecución del programa especial de capacitación.

CUESTIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES DE ENSEÑANZA Y CAPACITACIÓN PARA EL AFRICA SUDOCCIDENTAL, DEL PROGRAMA ESPECIAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TERRITORIOS BAJO ADMINISTRACIÓN PORTUGUESA Y DEL PROGRAMA DE ENSEÑANZA Y CAPACITACIÓN PARA SUDAFRICANOS

En su vigésimo primer período de sesiones la Asamblea General aprobó por 112 votos contra 2 y 1 abstención, la resolución 2235 (XXI) sobre la cuestión de la consolidación e integración de los programas especiales de enseñanza y capacitación para el Africa Sudoccidental, del programa especial de capacitación para los territorios bajo administración portuguesa y del programa de enseñanza y capacitación para sudafricanos. Advirtiendo que, a pesar de satisfacer necesidades semejantes y de tener propósitos comunes, estos programas eran administrados por separado y diferían en cuanto a su financiación, teniendo en cuenta el papel que desempeña el ACNUR, la UNESCO y otros organismos especializados y órganos de las Naciones Unidas en materia de capacitación y enseñanza, y tomando nota del interés y las actividades de la Organización de la Unidad Africana en el campo de la asistencia educacional, la Asamblea General pidió al Secretario General que estudiase, en consulta con las citadas organizaciones, la cuestión de la consolidación e integración de los programas; autorizó asimismo al Secretario General a que crease, de estimarlo conveniente, un comité integrado por los países de asilo de los refugiados y por Estados que hubiesen contribuido a los programas de enseñanza y capacitación de las Naciones Unidas antes mencionados, con objeto de que le asesorase acerca de los medios para desarrollar y ampliar esos programas.

REFERENCIAS

A. Territorios en fideicomiso

El informe del Consejo de Administración Fiduciaria a la Asamblea General correspondiente al período comprendido entre el 1° de julio de 1965 y el 26 de julio de 1966 figura en *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Suplemento No. 4 (A/6304)*.

El informe del Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales figura en *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Anexos, adición al tema 23 del programa*.

Otros documentos pertinentes y una lista de las actas correspondientes figuran en *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Anexos, te-*

ma 13 del programa; y en *Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, vigésimo primer año, Suplemento especial No. 1 (S/7425)*.

B. Territorios no autónomos

El informe del Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales figura en *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Anexos, adición al tema 23 del programa*.

Otros documentos pertinentes y una lista de las actas correspondientes figura en *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Anexos, temas 23, 64 y 71, y 66 y 68 del programa*.

Cuestiones de derechos humanos

A. *Derechos humanos*

Los Estados Miembros han puesto creciente interés en el papel que las Naciones Unidas desempeñan en la protección y promoción de los derechos humanos y libertades fundamentales. El acontecimiento más notable del año fue la aprobación por la Asamblea General, el 16 de diciembre de 1966, de los pactos internacionales de derechos humanos que representan un adelanto importante de las obras de las Naciones Unidas en esta esfera de actividad y son el fruto de unos 20 años de deliberaciones en diferentes órganos de las Naciones Unidas. Otras declaraciones y convenios internacionales que la Asamblea General ha recomendado que se aprueben para 1968, se llevaron más cerca de su conclusión en el transcurso del año.

Los preparativos para la celebración en 1968 del Año Internacional de los Derechos Humanos adelantaron satisfactoriamente, incluso los planes para la Conferencia Internacional de Derechos Humanos que se ha de celebrar en Teherán en el primer semestre de 1968. El informe del Comité Preparatorio de la Conferencia, constituido por la Asamblea General en 1965, se presentará en el vigésimo segundo período de sesiones de este órgano.

La mayoría de los órganos interesados en cuestiones de derechos humanos aprobaron otras resoluciones, que testimonian la preocupación constante y creciente de las Naciones Unidas por la discriminación racial y la política de *apartheid*. El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que la Asamblea General proclamó en el vigésimo primer período de sesiones, comenzó a observarse el 21 de marzo de 1967. En varias ocasiones se consideraron las medidas tomadas para llevar a efecto la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. La situación en lo relativo a la Convención Internacional sobre la misma materia, aprobada el 21 de diciembre de 1965, y la relativa a los pactos internacionales de derechos humanos, también serán consideradas en el vigésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General.

Estos y otros acontecimientos del año se tratan a continuación con más detalle.

1. Instrumentos internacionales

PACTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS

El 16 de diciembre de 1966, la Asamblea General, al término de su consideración de los proyectos de pactos internacionales de derechos humanos, por la resolución 2200 A (XXI), aprobó: a) el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; b) el Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y c) el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Al mismo tiempo, la Asamblea General aprobó las resoluciones 2200 B (XXI), sobre la publicidad relativa a los pactos y al Protocolo Adicional y 2200 C (XXI), sobre la creación de comisiones nacionales de derechos humanos.

Por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que por el Pacto se reconocen. A tal fin se valdrán de todos los medios apropiados, incluso, en particular, la adopción de medidas legislativas (párr. 1 del artículo 2 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos los Estados Partes se comprometen a respetar y a garantizar, a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los derechos que se reconocen por ese Pacto (párr. 1 del artículo 2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos). Conforme se ha declarado al respecto, las obligaciones que se asumen por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos han de llevarse a efecto, en general, inmediatamente después de la ratificación, mientras que los derechos que se exponen en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales han de entrar en vigor paulatinamente.

El derecho más importante que se regula por ambos pactos, que no figura en la Declaración Universal de Derechos Humanos, es el de la libre determinación de los pueblos y los derechos afines, entre ellos el de los pueblos a disponer libremente de las riquezas y los recursos naturales, que se codifican en el artículo 1 de los dos pactos.

Por el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Estados Partes reconocen el derecho a trabajar (artículo 6); el derecho al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias (artículo 7); el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse a elección (artículo 8); el derecho a la seguridad social, incluso al seguro social (artículo 9); la protección a la familia, las madres, los niños y adolescentes (artículo 10); el derecho a un nivel de vida adecuado (artículo 11); el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental (artículo 12); el derecho de toda persona a la educación (artículos 13 y 14), y el derecho a participar en la vida cultural (artículo 15).

El grueso de las disposiciones fundamentales del Pacto de Derechos Civiles y Políticos se dedica a los derechos civiles y políticos tradicionales establecidos en los artículos 3 a 13, 16 y 18 a 21 de la Declaración

Universal. Por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos se protegen el derecho a la vida (artículo 6); se prohíben las torturas, penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 7); se prohíbe la esclavitud, la trata de esclavos, la servidumbre y el trabajo forzoso (artículo 8); se prohíben la detención o prisión arbitrarias (artículo 9); se establece que se tratará humanamente a toda persona privada de libertad (artículo 10) y que nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual (artículo 11). Por el Pacto se establece, además, el derecho a circular libremente (artículo 12) y se limita la expulsión del extranjero que se halle ilegalmente en el territorio de un Estado Parte (artículo 13). El Pacto estatuye con bastante detalle la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia y las garantías en procesos penales y civiles (artículo 14). El Pacto prohíbe la sanción de leyes penales retroactivas (artículo 15); establece el derecho de todo ser humano, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica (artículo 16) y prohíbe injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada, la familia, el domicilio o la correspondencia y los ataques ilegales a la honra y la reputación (artículo 17). El Pacto afirma a continuación el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (artículo 18) y a la libertad de expresión (artículo 19). Estatuye que estarán prohibidas por ley la propaganda en favor de la guerra y la apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia (artículo 20). Por los artículos 21 y 22 del Pacto se reconocen los derechos de reunión pacífica y de libre asociación, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos. Establece que todos los ciudadanos tendrán derechos y oportunidades de participar en la dirección de los asuntos públicos y de votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal, y de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país (artículo 25). El artículo 26 del Pacto dice que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley; garantiza también la protección contra la discriminación.

Los derechos establecidos en los pactos no son absolutos y están sujetos a limitaciones. En el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en particular, se definen las limitaciones o restricciones admisibles de los derechos que en él se exponen. Aunque la formulación de las limitaciones varía en los detalles, según los artículos, cabe decir que en el Pacto se establece, en general, que los derechos no serán objeto de restricciones, salvo las que establezca la ley y las que resulten necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros (véanse artículos 12, 14, 18, 19, 21 y 22 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos).

En los dos Pactos figuran "medidas de aplicación", esto es, medidas relativas a cierto grado de fiscalización internacional de la aplicación de las disposiciones fundamentales. Las medidas de aplicación del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales consisten en un sistema de informes. Los Estados Partes se comprometen a presentar informes sobre las medidas que hayan adoptado, y los progresos realizados, con el fin de asegurar el respeto de los derechos que se reconocen por el Pacto. Los informes se remiten al Consejo Económico y Social para su consideración. El Consejo puede transmitir los informes a la Comisión de Dere-

chos Humanos para que los estudie y formule recomendaciones en general o, según proceda, para su información. En el Pacto se establece también la debida participación de los organismos especializados en estos procedimientos. Los Estados Partes y los organismos especializados interesados podrán someter al Consejo sus observaciones sobre cualesquiera recomendaciones de carácter general que formule la Comisión de Derechos Humanos. El Consejo Económico y Social puede presentar a la Asamblea General informes con recomendaciones de carácter general y un resumen de la información que haya recibido sobre las medidas tomadas y los progresos alcanzados en el cumplimiento general de los derechos que se reconocen por el Pacto.

Por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos se establece que el principal método de aplicación internacional consistirá en un sistema de informes. Al respecto, la diferencia principal entre los dos Pactos consiste en que, conforme al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Consejo Económico y Social, con asistencia de la Comisión de Derechos Humanos y de los organismos especializados, será el instrumento de aplicación, función que, conforme al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en cambio, cumplirá el Comité de Derechos Humanos, órgano que han de establecer los Estados Partes en el Pacto. El Comité se compondrá de dieciocho miembros elegidos por los Estados Partes, que ejercerán sus funciones a título personal. Los Estados Partes en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos se comprometen a presentar informes sobre las disposiciones que hayan adoptado y que den efecto a los derechos reconocidos en él y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de esos derechos. Esos informes se someterán al Comité de Derechos Humanos, que se encargará de estudiar los informes sometidos por los Estados Partes y de transmitir a éstos los informes y observaciones generales que le parezcan pertinentes. El Comité podrá también transmitir esas observaciones al Consejo Económico y Social, junto con las copias de los informes que haya recibido de los Estados Partes. Los Estados Partes tendrán derecho de presentar observaciones a los comentarios que se hayan hecho (artículos 28, 29 y 40).

Además del sistema de informes, por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos se establece un sistema de comunicación y conciliación entre Estados respecto a cuestiones relativas a la aplicación del Pacto. De acuerdo con el Pacto ese sistema es facultativo. Sólo se aplicará si un Estado Parte declara que reconoce la competencia del Comité de Derechos Humanos para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple las obligaciones que le impone el Pacto. Este sistema facultativo sólo se aplica sobre una base de reciprocidad. Sólo el Estado que haya declarado que reconoce con respecto a sí mismo la competencia del Comité de Derechos Humanos queda autorizado a emprender la aplicación del procedimiento respecto a otro Estado Parte que también haya reconocido la competencia del Comité al respecto. Además el sistema sólo comenzará a aplicarse cuando diez Estados Partes hayan declarado que reconocen la competencia del Comité al que se recurre.

Por el Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos se conviene, en lo que concierne a los Estados Partes en el Protocolo, un tercer método de aplicación del Pacto, además del procedimiento de informes y el sistema de comunicación y conciliación

entre Estados. Un Estado Parte en el Protocolo reconoce la competencia del Comité, de acuerdo con ciertas circunstancias, a recibir y considerar comunicaciones de individuos que se hallen bajo la jurisdicción de ese Estado y que aleguen ser víctimas de una violación por ese Estado Parte de cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto.

En conformidad con el pedido de la Asamblea, el Secretario General publicó y distribuyó el texto de los pactos, a fin de hacerlos circular inmediata y ampliamente. Los pactos internacionales y el Protocolo Facultativo quedaron abiertos a la firma en la Sede de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966. Al 15 de junio de 1967 doce Estados habían firmado los dos pactos (Colombia, Costa Rica, Chipre, Filipinas, Guinea, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Liberia, Polonia y Uruguay), y siete Estados habían suscrito el Protocolo Facultativo (Colombia, Costa Rica, Chipre, Filipinas, Honduras, Jamaica y Uruguay). Todavía no se ha depositado en poder del Secretario General ningún instrumento de ratificación.

PROYECTO DE CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE INTOLERANCIA RELIGIOSA

En 1962 la Asamblea General solicitó del Consejo Económico y Social, por la resolución 1781 (XVII), que pidiera a la Comisión de Derechos Humanos que preparara un proyecto de declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia religiosa.

Más tarde, la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, sometió a la Comisión de Derechos Humanos un anteproyecto de declaración sobre esta cuestión. La Comisión de Derechos Humanos aún tiene a consideración el proyecto de declaración, aunque ya se ha hecho cierto trabajo preliminar adicional en el texto.

Por lo que se refiere al proyecto de convención, la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías también preparó un anteproyecto en 1964. Ese anteproyecto fue considerado por la Comisión de Derechos Humanos en sus períodos de sesiones 21º, 22º y 23º, en 1965, 1966 y 1967, respectivamente. La Comisión decidió dar a la cuestión la más alta prioridad en el 23º período de sesiones, en el que aprobó un preámbulo y doce artículos principales. El Consejo Económico y Social, en conformidad con las recomendaciones de la Comisión respecto al proyecto de convención, decidió, en su 42º período de sesiones, transmitir a la Asamblea General, por la resolución 1233 (XLII): 1) un preámbulo y doce artículos de un proyecto de convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia religiosa; 2) un proyecto de artículo adicional presentado por Jamaica y el proyecto de artículo XIII propuesto por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías; y 3) el anteproyecto de medidas de aplicación adicionales, propuesto por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, que la Comisión no examinó por falta de tiempo. El Consejo también expresó la esperanza de que la Asamblea General escoja las medidas de aplicación y las cláusulas finales del proyecto de convención que estime apropiadas.

2. Año Internacional de los Derechos Humanos

PROGRAMA DE MEDIDAS Y ACTIVIDADES DEL AÑO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El 12 de diciembre de 1963 la Asamblea General, en su resolución 1961 (XVIII), designó el año 1968 como Año Internacional de los Derechos Humanos, y el 20 de diciembre de 1965, en su resolución 2081 (XX), aprobó un programa provisional de medidas y actividades para ser emprendidas en relación con el Año Internacional. También decidió que se celebrase ese año una Conferencia Internacional de Derechos Humanos.

El 19 de diciembre de 1966 la Asamblea General aprobó en su resolución 2217 (XXI) un programa adicional de medidas y actividades para ser emprendidas por los Estados Miembros, las Naciones Unidas, los organismos especializados y las organizaciones nacionales e internacionales interesadas, de conformidad con lo expuesto en el anexo a esa resolución. La Asamblea invitó a los Estados Miembros y a las organizaciones a que intensificasen en 1968 sus esfuerzos e iniciativas en materia de derechos humanos, incluyendo las medidas indicadas en el programa ya citado, y a que mantuvieran al Secretario General informado acerca de sus planes y preparativos. La Asamblea también invitó al Secretario General a que adoptase las medidas necesarias para facilitar la cooperación de las organizaciones intergubernamentales regionales competentes a fin de celebrar en 1968 el Año Internacional de los Derechos Humanos. Le pidió al Secretario que coordinase las medidas y actividades de los Estados Miembros, las Naciones Unidas, los organismos especializados y las organizaciones nacionales e internacionales interesadas, y en especial que reuniese y difundiese a intervalos regulares información sobre las actividades que hubieran proyectado o emprendido en relación con el Año Internacional de los Derechos Humanos. También le pidió al Secretario General que presentase a la Asamblea General en su vigésimo segundo período de sesiones un informe provisional sobre los planes, preparativos, arreglos, medidas y actividades mencionados en la resolución.

El programa de medidas y actividades que deben ser emprendidas en relación con el Año Internacional de los Derechos Humanos, aprobado por las decisiones correspondientes de la Asamblea General en 1965 y 1966, incluye recomendaciones con respecto a la cuestión de las ceremonias, actividades y celebraciones, así como las medidas que han de adoptar las Naciones Unidas con anterioridad a la iniciación del Año Internacional, tales como la supresión de ciertas prácticas que constituyen una violación de los derechos humanos y las medidas internacionales para la protección y garantía de los derechos humanos. El programa también recomienda que el Presidente de la Asamblea General, el Secretario General de las Naciones Unidas y los jefes ejecutivos de los organismos especializados y órganos subsidiarios preparen mensajes especiales sobre el Año Internacional. Otra recomendación se refiere a la concesión en 1968 de un premio o premios en la esfera de los derechos humanos. Entre las medidas que se invita a tomar a los Estados Miembros figuran el examen de su legislación nacional, comparándola con las normas enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras declaraciones y documentos de las Naciones Unidas relativos a los derechos huma-

nos, y el establecimiento o mejoramiento de sus instituciones nacionales para dar efectividad a los derechos humanos, así como el establecimiento de programas nacionales de educación en materia de derechos humanos. Se invita a los Estados Miembros a que dentro de la estructura de su legislación y política nacional y de acuerdo a sus medios intensifiquen sus esfuerzos nacionales en la esfera de los derechos humanos. También se recomiendan programas detallados de medidas y actividades a los organismos especializados, a las organizaciones no gubernamentales y a otras organizaciones interesadas en la promoción del respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

En virtud de lo decidido por la Asamblea General, fue creado el Comité Preparatorio de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos con objeto de terminar los preparativos de la conferencia. El Comité se reunió en mayo y posteriormente en junio de 1966 y formuló recomendaciones con respecto a la naturaleza y procedimientos, el programa, la documentación, la duración, el lugar y la fecha de la Conferencia y los medios de sufragar los gastos de la misma, que figuran en el primer informe sobre la marcha de sus trabajos, presentado en el vigésimo primer período de sesiones de la Asamblea General.

En su resolución 2217 B (XXI) la Asamblea General, al destacar la importancia de las posibles realizaciones de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, instó a los gobiernos de todos los países y a los pueblos del mundo a intensificar la lucha para garantizar las libertades y derechos fundamentales y para eliminar total e inmediatamente las violaciones de los derechos humanos tales como la discriminación racial y la política de apartheid. La Asamblea tomó nota en su resolución 2217 C (XXI) del primer informe sobre la marcha de los trabajos del Comité Preparatorio y expresó su satisfacción al Comité por la labor realizada. La Asamblea pidió al Comité Preparatorio que continuase su labor teniendo en cuenta las observaciones que reciba de la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, los debates y las decisiones pertinentes de la Asamblea General en su vigésimo primer período de sesiones, y la aprobación de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, y que informe nuevamente a la Asamblea General en su vigésimo segundo período de sesiones acerca del progreso alcanzado en la preparación de la conferencia. La Asamblea General aceptó con gratitud la invitación formulada por el Gobierno del Irán y decidió que la Conferencia Internacional de Derechos Humanos se celebrase en Teherán, preferentemente en la primavera de 1968, en una fecha que determinaría el Secretario General en consulta con el Comité Preparatorio y el Gobierno del Irán. La Asamblea invitó a los Estados Miembros de las Naciones Unidas, los Estados miembros de los organismos especializados, los Estados partes en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, y a los Estados a los que la Asamblea General decida invitar especialmente a participar en la Conferencia, a incluir entre sus representantes a personas eminentes cuyos méritos en la esfera de los derechos humanos les permitan aportar valiosas contribuciones a los trabajos de la misma. Los organismos especializados competentes fueron invitados a enviar observadores a la Confe-

rencia. La Asamblea expresó la esperanza de que la Conferencia represente un importante paso adelante en la promoción y el desarrollo del respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales y, en consecuencia, una contribución al fortalecimiento de la paz en el mundo y a la amistad entre los pueblos.

La Asamblea General decidió aumentar de diecisiete a veintitrés el número de miembros del Comité Preparatorio. En su forma ampliada el Comité está integrado por los siguientes Estados Miembros: Canadá, Colombia, Estados Unidos de América, Filipinas, Francia, India, Irán, Italia, Jamaica, Kenia, Líbano, Mauritania, Nigeria, Nueva Zelandia, Panamá, Paquistán, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Somalia, Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay y Yugoslavia.

Varias recomendaciones relativas a la Conferencia Internacional fueron formuladas en este período por el Consejo Económico y Social, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías.

El Comité Preparatorio de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos continuó su labor en 1967; mantuvo varias reuniones en febrero, abril y mayo y preparó un informe para ser sometido a la Asamblea General en su vigésimo segundo período de sesiones. Tal como fue pedido por la Asamblea, el Secretario General, en consulta con el Comité Preparatorio y el Gobierno del Irán, decidió que la Conferencia fuera celebrada en Teherán del 22 de abril al 12 de mayo de 1968. El Comité Preparatorio, teniendo también en cuenta las decisiones pertinentes del Consejo Económico y Social y sus órganos subsidiarios en la esfera de los derechos humanos, completó la preparación de un proyecto de programa provisional y un proyecto de reglamento para la Conferencia y formuló recomendaciones con respecto a la documentación. En cuanto a la cuestión de la participación de organizaciones intergubernamentales regionales en la Conferencia, el Comité recomendó que el Consejo de Europa, la Liga de los Estados Arabes, la Organización de la Unidad Africana, la Organización de los Estados Americanos y otras organizaciones intergubernamentales regionales especialmente interesadas con los derechos humanos fueran invitados a participar en la Conferencia. La cuestión de la participación de las organizaciones no gubernamentales en la Conferencia fue remitida por el Comité a la Asamblea General. El Comité también consideró la cuestión de los gastos de la Conferencia.

3. Informes periódicos sobre derechos humanos

En virtud del sistema revisado de informes periódicos que figura en la resolución 1074 C (XXXIX) del Consejo Económico y Social, los informes se consideran dentro de un ciclo continuo de tres años distribuidos de la manera siguiente: en el primer año, sobre derechos civiles y políticos, abarcando el primero de esos informes el período que termina el 30 de junio de 1965; en el segundo año, sobre derechos económicos, sociales y culturales, abarcando el primero de esos informes el período que termina el 30 de junio de 1966; en el tercer año, sobre libertad de información, abarcando el primero de esos informes el período que termina el 30 de junio de 1967.

La primera serie de informes periódicos, sobre derechos civiles y políticos, fue considerada en 1966 por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y la Comisión de Derechos Humanos. No obstante, como varios gobiernos no pudieron someter informes sobre estos derechos a tiempo para que fueran considerados por los tres órganos interesados, la Comisión de Derechos Humanos decidió en su resolución 12 (XXII) continuar el estudio y la evaluación de la información relativa a estos derechos en 1967, además de ocuparse de los derechos económicos, sociales y culturales, que hubiera considerado normalmente. De hecho, en 1967 todos los órganos interesados examinaron informes e informaciones relativos a ambas categorías de derechos.

Un total de 26 Estados sometieron informes relativos a derechos económicos, sociales y culturales en el período del 1° de enero de 1963 al 30 de junio de 1966. La OIT, la UNESCO y la OMS también sometieron informes sobre esos derechos. El número total de gobiernos que presentaron informes sobre derechos civiles y políticos fue de cuarenta y cuatro. También se recibió información de organizaciones no gubernamentales en virtud de la resolución 1074 C (XXXIX) del Consejo.

El estudio inicial de los informes e informaciones recibidas estuvo a cargo de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías en su 19° período de sesiones, celebrado en enero de 1967. La Subcomisión deploró que debido a la falta de tiempo no pudo examinar y debatir en ese período de sesiones un estudio preparado por su Relator, señaló a la atención de la Comisión de Derechos Humanos las dudas y dificultades que implica el examen de los informes periódicos — tal como quedó evidenciado en los debates — y pidió a la Comisión que volviese a considerar este asunto.

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, después de considerar en su 20° período de sesiones los informes e informaciones recibidas, tomó nota con satisfacción de que varios gobiernos han adoptado medidas legislativas o administrativas encaminadas a promover los derechos civiles y políticos de la mujer, en especial en relación con el derecho de sufragio, el derecho a formar parte de jurados, el matrimonio y la guarda de los hijos, y promulgado medidas encaminadas a garantizar a la mujer la igualdad de derechos económicos, sociales y culturales, especialmente en lo que se refiere a la igualdad de oportunidades de empleo y a las remuneraciones, pensiones de retiro, subsidios familiares y de alimentos y posibilidades de instrucción. La Comisión también tomó nota de que muchos gobiernos han aceptado las normas establecidas en instrumentos adoptados por órganos competentes de los organismos especializados sobre el acceso a la educación y las condiciones de trabajo de la mujer, y que los informes de los organismos especializados sobre la aplicación de esas normas proporcionan información útil a la Comisión tanto en lo que respecta a los acontecimientos favorables como a las dificultades aún existentes. La Comisión además tomó nota de que ha aumentado el número de mujeres miembros de algunas asambleas legislativas nacionales y que muchos gobiernos han prestado especial atención a las necesidades de la mujer derivadas de la maternidad y del desempeño simultáneo de responsabilidades familiares y profesio-

nales. La Comisión consideró que sería de gran asistencia para ella, en su evaluación futura de los progresos realizados en la promoción de los derechos de la mujer y de los problemas existentes, el que se incluyera en los informes de los gobiernos más información sobre los progresos hechos en relación con los derechos de la mujer en los períodos examinados y se hiciera referencia a las dificultades concretas encontradas y a las medidas, adoptadas o en estudio, para aplicar las disposiciones constitucionales o legales, y que los informes de las organizaciones no gubernamentales contuvieran más información relativa a los derechos de la mujer.

El Comité Especial de Informes Periódicos de la Comisión de Derechos Humanos, al considerar los informes y las informaciones recibidas, también tuvo ante sí los comentarios y recomendaciones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, y un estudio preliminar sobre el material recibido, preparado por su Relator.

En su resolución 16 (XXIII), aprobada por recomendación del Comité Especial, la Comisión de Derechos Humanos estimó que los informes sobre derechos económicos, sociales y culturales revelan las siguientes tendencias de especial importancia y común interés: 1) la preocupación de los Estados Miembros por aplicar los derechos humanos conforme a las normas establecidas en los instrumentos de las Naciones Unidas; 2) las medidas constructivas que en la legislación y la práctica se adopten en Estados con diversos sistemas de gobierno y con diferentes grados de desarrollo para promover el derecho a la educación, incluso el interés mostrado en la cuestión de la educación de los adultos, el derecho a la seguridad social, los derechos de la infancia y la familia, incluso la prestación de atención y asistencia especiales a la maternidad y a la infancia; el derecho al trabajo y el derecho a un nivel de vida suficiente; y 3) los esfuerzos que realizan diversos Estados para superar las dificultades con respecto a la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales y, en particular, la preocupación por ofrecer recursos contra la violación de estos derechos.

La Comisión también consideró que la tarea de los órganos de las Naciones Unidas a los que corresponde identificar las tendencias importantes en los informes periódicos se verá facilitada en el futuro al concentrar su atención en datos de carácter objetivo que revelan características como las siguientes: la influencia que ejercen en los Estados Miembros de las Naciones Unidas los instrumentos en que constan principios y normas para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y, en particular, las medidas adoptadas para aplicar tales instrumentos; el interés común que presentan para diversos Estados aspectos particulares de los derechos de que se trate; la experiencia en cuanto a las dificultades con que se ha tropezado en materia de derechos humanos que pueda ser de interés para otros Estados Miembros; los nuevos elementos o métodos que puedan ser de utilidad para vencer esas dificultades; y la participación de una proporción cada vez mayor de la población en el disfrute de los derechos humanos. Pidió al Secretario General que, al presentar informes en lo sucesivo para su examen por la Comisión, prepare un resumen analítico respecto de cada uno de los derechos de que se trate, teniendo presente las características a que se hace referencia *supra*, e incluyendo una descripción de las ten-

dencias importantes que revelen los informes, de las dificultades que hayan surgido, de los métodos adoptados para vencerlas y de las sugerencias para la adopción de nuevas medidas, y que se base, en su caso, en los datos pertinentes que pueda obtener de otras fuentes de las Naciones Unidas. También le pidió que, al solicitar la presentación de futuros informes periódicos, proporcione un esquema que indique los epígrafes con arreglo a los cuales se proponga disponer la documentación que se reciba, teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de los instrumentos de las Naciones Unidas, a fin de que los informes puedan presentarse ajustándose a esos epígrafes si quienes los presentan desean hacerlo así.

La Comisión expresó su gratitud a los gobiernos que presentaron informes e instó a gobiernos que hasta la fecha no habían presentado informes periódicos a que los presentasen lo antes posible. También expresó la esperanza de que todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y miembros de los organismos especializados presentaran informes sobre la libertad de información para el período que termina el 30 de junio de 1967.

El Consejo Económico y Social decidió en su resolución 1230 (XLII), aprobada por recomendación de la Comisión, que las disposiciones de la resolución 16 (XXIII) de la Comisión hacían innecesario el estudio inicial de los informes periódicos por la Subcomisión en el porvenir; y pidió a la Comisión que llevase a cabo esa labor con ayuda de su Comité Especial de Informes Periódicos. El Consejo reafirmó que la Subcomisión debía seguir teniendo acceso a los datos que se reciban y hacer uso de ellos en relación con sus trabajos sobre la prevención de discriminaciones y la protección a las minorías.

4. Castigo de los criminales de guerra y de las personas que hayan cometido crimen de lesa humanidad

El Consejo Económico y Social, en su resolución 1158 (XLI), aprobada por recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, instó a todos los Estados a que tomaran las medidas necesarias para evitar que se aplicara la prescripción a los crímenes de guerra y a los crímenes de lesa humanidad, a que prosiguieran sus esfuerzos para asegurar la detención, la extradición y el castigo de los criminales de guerra y de los culpables de crímenes de lesa humanidad, y a que pusieran a disposición de los demás Estados toda la documentación que poseyeran relativa a dichos crímenes, y pidió al Secretario General que presentara un informe a la Comisión, en su 23º período de sesiones, sobre las medidas que hubieran tomado los Estados Miembros de las Naciones Unidas o miembros de los organismos especializados en cumplimiento de la petición antes mencionada. En la misma resolución, el Consejo invitó a la Comisión a que en su 23º período de sesiones, entre las cuestiones que debieran recibir prioridad, preparara un proyecto de convención en el que se estableciera que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles; pidió al Secretario General que preparara un anteproyecto de dicha convención; invitó a la Comisión a que formulara las nuevas recomendaciones que estimase convenientes con objeto de fomentar la cooperación internacional para el enjuiciamiento y el castigo de los culpables de crímenes de guerra y de crímenes de lesa

humanidad; y pidió al Secretario General que efectuara un estudio destinado a asegurar la detención, la extradición y el castigo de los culpables de tales delitos, así como el intercambio de documentación al respecto.

En su 23º período de sesiones, la Comisión de Derechos Humanos tuvo ante sí el estudio sobre la cuestión de la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad presentado por el Secretario General ante la Comisión en su 22º período de sesiones, el informe del Secretario General sobre las medidas que hubieran tomado los gobiernos y un anteproyecto de convención, preparado por el Secretario General, sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad.

Un grupo de trabajo establecido por la Comisión para que considerara el proyecto de convención preparado por el Secretario General no pudo, debido a la falta de tiempo, completar el examen de todo el texto. Por consiguiente, mediante su resolución 4 (XXIII), la Comisión transmitió al Consejo Económico y Social el anteproyecto preparado por el Secretario General y el informe del grupo de trabajo, junto con todas las propuestas presentadas a la Comisión y las actas de los debates de la Comisión sobre este tema. Además, la Comisión pidió al Consejo que transmitiera estos documentos a la Asamblea General con la petición de que se tomaran en consideración en la preparación y aprobación por la Asamblea de un proyecto de convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad.

El Consejo Económico y Social, en su resolución 1220 (XLII), expresó la esperanza de que la Asamblea General aprobara esa convención a la mayor brevedad posible y, según las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, transmitía a la Asamblea los documentos enumerados en la resolución 4 (XXIII) de la Comisión. El Consejo también pidió al Secretario General que inscribiera en el programa provisional del vigésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General, como tema separado, la cuestión del castigo de los criminales de guerra y de las personas que hubieran cometido crímenes de lesa humanidad.

5. La cuestión de las violaciones de los derechos humanos

VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN GENERAL

En la resolución 2144 A (XXI), del 26 de octubre de 1966, la Asamblea General reafirmó su enérgica condena de las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales dondequiera se cometieran, especialmente en todos los territorios coloniales y dependientes, incluso la política de apartheid que se aplica en la República de Sudáfrica y el Territorio del África Sudoccidental, y la discriminación racial en las colonias de Rhodesia del Sur, Angola, Mozambique, Guinea Portuguesa, Cabinda, Santo Tomé y Príncipe, y se refirió con pesar al fomento, por parte de las Potencias coloniales, de la entrada sistemática de inmigrantes extranjeros y el desarraigo, el desposeimiento, la deportación y la expulsión de los autóctonos. Deploró los actos de los Estados que, con su colaboración política, comercial, económica y militar con los Gobiernos de Sudáfrica y de Portugal, y con el régimen ilegal de Rhodesia del Sur, los alentaban a persistir en su política racial. La Asamblea instó a todos los Estados

que no lo hubieran hecho todavía a que cumplieran las resoluciones de la Asamblea General donde se recomendaba que se aplicaran medidas económicas y diplomáticas contra Sudáfrica, así como las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad en que se invitaba a todos los Estados a imponer un embargo de armas a Sudáfrica. La Asamblea pidió a todos los Estados que redoblaran sus esfuerzos para promover la observancia plena de los derechos humanos y el derecho a la libre determinación en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, y para alcanzar las normas fijadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se instó a todos los Estados a que adoptaran medidas eficaces para suprimir la política de apartheid y de segregación y eliminar la discriminación racial dondequiera existiera, en particular en los países y territorios coloniales y dependientes. La Asamblea encargó a todos los Estados, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y a los particulares que dieran su apoyo al Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Sudáfrica y a las organizaciones voluntarias que se dedicaran a prestar ayuda y socorro a las víctimas del colonialismo y del apartheid, y alentaran a las asociaciones de juristas y otras organizaciones apropiadas, y al público en general, a que les prestaran socorro y ayuda.

La Asamblea General invitó también al Consejo Económico y Social y a la Comisión de Derechos Humanos a examinar con carácter de urgencia el modo de reforzar los medios de que las Naciones Unidas disponen para poner término a las violaciones de los derechos humanos dondequiera ocurran. Pidió al Secretario General que prestara asistencia en la aplicación de la resolución y que informara a la Asamblea en su vigésimo segundo período de sesiones.

La Comisión de Derechos Humanos, en su 23º período de sesiones, tuvo ante sí varias recomendaciones presentadas por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y de Protección a las Minorías relativas a violaciones de derechos humanos, y aprobó una serie de resoluciones sobre estas cuestiones. Por la resolución 6 (XXIII) decidió crear un Grupo de Estudio Especial integrado por once de sus miembros para que estudiara la propuesta de establecer comisiones regionales de derechos humanos dentro del sistema de las Naciones Unidas. Por la resolución 7 (XXIII) decidió nombrar un Relator Especial para que realizara un estudio y para que presentara un informe y formulara recomendaciones a la Comisión en su 24º período de sesiones, en 1968, sobre las medidas adecuadas que podría tomar la Asamblea General para combatir eficazmente la discriminación racial, la política de apartheid y la segregación. Mediante la resolución 8 (XXIII) decidió ocuparse todos los años del tema relativo a la violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales sin perjuicio de las funciones y atribuciones de los órganos ya existentes o que pudieran establecerse en el marco de las medidas de aplicación incluidas en las convenciones internacionales sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y pedir al Consejo Económico y Social que autorizara a la Comisión y a la Subcomisión a examinar la información pertinente incluida en las comunicaciones consignadas en la lista preparada por el Secretario General de conformidad con la resolución 728 F (XXVIII) del Consejo Económico y Social. La Comisión pidió también autorización para efectuar un estudio y una investigación a fondo de las situaciones que re-

velaran un cuadro persistente de violaciones de derechos humanos, y para dar cuenta de ellas, con sus recomendaciones al respecto, al Consejo Económico y Social.

El Consejo Económico y Social, en su 42º período de sesiones, recomendó a la Asamblea General en su resolución 1234 (XLII) que siguiera estimulando a todos los Estados que pudieran hacerlo a que firmaran y ratificaran sin tardanza la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, los Pactos internacionales de derechos humanos y las restantes convenciones y protocolos que tienen por objeto proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Según lo solicitado por la Comisión, el Consejo, mediante resolución 1235 (XLII), autorizó a la Comisión de Derechos Humanos y a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías a examinar la información pertinente sobre violaciones notorias de los derechos humanos y las libertades fundamentales que ilustran la política de apartheid practicada en la República de Sudáfrica y en el territorio del África Sudoccidental bajo la responsabilidad directa de las Naciones Unidas y ocupado ilegalmente en la actualidad por el Gobierno de la República de Sudáfrica, y la discriminación racial que se practica especialmente en Rhodesia del Sur, información que figura en las comunicaciones consignadas en la lista preparada por el Secretario General de conformidad con la resolución 728 F (XXVIII) del Consejo Económico y Social. El Consejo decidió además que la Comisión podía efectuar, en los casos procedentes y tras un examen detenido de la información de este modo obtenida, un estudio a fondo de las situaciones que revelaran un cuadro persistente de violaciones de derechos humanos que ilustraran la política de apartheid practicada en la República de Sudáfrica y en el Territorio del África Sudoccidental bajo la responsabilidad directa de las Naciones Unidas y ocupada ilegalmente en la actualidad por el Gobierno de Sudáfrica, y la discriminación racial que se practica especialmente en Rhodesia del Sur; y asimismo presentar un informe al respecto con sus recomendaciones al Consejo Económico y Social.

COMUNICACIÓN DEL PRESIDENTE INTERINO DEL COMITÉ ESPECIAL ENCARGADO DE ESTUDIAR LA POLÍTICA DE APARTHEID DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE SUDÁFRICA

Por un pedido del Presidente interino del Comité Especial de la Asamblea General encargado de estudiar la política de apartheid del Gobierno de la República de Sudáfrica que figura en su comunicación del 3 de febrero de 1967, el Secretario General señaló a la atención de la Comisión de Derechos Humanos los malos tratos a los que seguían sometidos los presos y las personas encarceladas o detenidas por la policía en la República de Sudáfrica, en particular el gran número de adversarios de la política de apartheid que habían sido reducidos a prisión en aplicación de leyes arbitrarias. La comunicación del Presidente interino indicaba además la preocupación del Comité Especial sobre esta cuestión e informó al Secretario General que el Comité Especial confiaba en que la Comisión de Derechos Humanos examinara esta cuestión con urgencia y adoptara las disposiciones oportunas para que se efectuara una investigación internacional encaminada a mejorar las condiciones de esas víctimas. La Comisión de De-

rechos Humanos consideró esta cuestión como tema separado en el programa de su 23° período de sesiones.

En la resolución 2 (XXIII), la Comisión condenó las prácticas que se describían y denunciaban en los diversos documentos presentados y pidió al Secretario General que dirigiera inmediatamente, en su nombre, un telegrama urgente al Gobierno de la República de Sudáfrica, en el que le transmitiera la grave ansiedad y honda inquietud de la Comisión con motivo de esta situación y pidiera a dicho Gobierno que tomara medidas positivas a fin de que el trato que otorgaba a sus presos políticos se ajustara a las normas civilizadas del derecho y la práctica penales. El Secretario General cumplió con esta petición el 8 de marzo de 1967.

En la misma resolución, la Comisión de Derechos Humanos decidió establecer, de conformidad con la resolución 9 (II) del Consejo Económico y Social, de 21 de junio de 1946, un Grupo Especial de Expertos integrado por juristas eminentes y funcionarios de prisiones, que serían nombrados por el Presidente de la Comisión. El Grupo Especial de Expertos recibió instrucciones de investigar las acusaciones de tortura y malos tratos a que se sometía a los presos y a las personas encarceladas o detenidas por la policía en Sudáfrica; recibir comunicaciones, oír testigos y utilizar las medidas de procedimiento que considerare oportunas; recomendar las medidas que debieran adoptarse en casos concretos; e informar a la Comisión de Derechos Humanos lo antes posible. La Comisión instó además al Gobierno de la República de Sudáfrica a que cooperara con el Grupo Especial de Expertos y le facilitara los elementos necesarios para el desempeño de su tarea en Sudáfrica.

La Comisión también pidió al Secretario General que diera la máxima publicidad, lo antes posible, a los documentos recibidos del Presidente interino del Comité Especial, que contenían el testimonio de presos políticos sometidos a torturas y malos tratos en las prisiones de Sudáfrica. También se instó a todos los Estados Miembros a que dieran la máxima publicidad nacional, a través de todos los medios de información, a los elementos esenciales de dichos documentos. También se señaló estos documentos a la atención de todas las organizaciones internacionales de carácter humanitario y les hizo un llamamiento para que tomaran, con carácter urgente, todas las medidas adecuadas en su poder para contribuir a aliviar la situación descrita en tales documentos.

En la misma resolución, la Comisión pidió al Secretario General que distribuyera la resolución a los miembros del Consejo de Seguridad; que transmitiera al Comité Especial encargado de estudiar la política de apartheid de la República de Sudáfrica, el deseo de la Comisión de Derechos Humanos de mantener una colaboración estrecha con dicho Comité para alcanzar sus objetivos comunes; que tomara las medidas necesarias para que se dieran facilidades que permitieran abrir un registro en cada país en el que se hicieran constar las contribuciones que se recibieran de todas las fuentes privadas y públicas con destino a las víctimas de la política de apartheid y racismo en Sudáfrica. La Comisión pidió a su Presidente que presentara un informe antes de que terminara el 23° período de sesiones sobre el estado de aplicación de la resolución 2 (XXIII), y pidió al Secretario General que informara a la Asamblea General sobre el grado de cooperación que hubiera recibido de los diversos Estados Miembros.

Finalmente, la Comisión decidió examinar de nuevo la situación en su 24° período de sesiones, en 1968.

El Secretario General ha dado amplia publicidad a las labores del Grupo Especial a través de los diferentes medios de información y también de los centros de información de las Naciones Unidas, a los que se ha comunicado el establecimiento del Grupo Especial de Expertos y sus atribuciones.

El Grupo Especial, compuesto de cinco miembros designados por el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos el 22 de marzo de 1967, celebró su primera serie de sesiones en la Sede de las Naciones Unidas en mayo de 1967, durante las cuales escuchó a varios testigos. Decidió reunirse nuevamente en Londres y en Dar es Salaam para escuchar a más testigos y para examinar los documentos que se le han presentado.

El Consejo Económico y Social, mediante su resolución 1236 (XLII) acogió con satisfacción las decisiones de la Comisión de Derechos Humanos contenidas en su resolución 2 (XXIII) y condenó al Gobierno de Sudáfrica por negarse a cooperar con las Naciones Unidas para facilitar el trabajo del grupo especial de expertos establecido en virtud de esa resolución.

6. Cuestión de hacer cumplir las disposiciones sobre derechos humanos por conducto de un Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos o de algún organismo internacional apropiado

En su 23° período de sesiones, la Comisión de Derechos Humanos, después de considerar el informe del Grupo de Trabajo establecido mediante su resolución 4 (XXII), aprobó la resolución 14 (XXIII), en la cual pidió al Consejo Económico y Social que recomendara a la Asamblea General que aprobase un proyecto de resolución por el cual se decidía establecer una Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El proyecto de resolución propuesto por la Comisión de Derechos Humanos fijaba las atribuciones del Alto Comisionado, el cual sería designado por la Asamblea General, a propuesta del Secretario General, por un plazo de cinco años. El Consejo aprobó la resolución 1237 (XLII), en la cual recomendaba a la Asamblea General la aprobación del proyecto de resolución propuesto por la Comisión de Derechos Humanos.

En la resolución 1238 (XLII), el Consejo pidió al Secretario General que señalara su resolución 1237 (XLII), junto con la documentación pertinente donde figurasen los diversos puntos de vista expresados, a la atención de los Estados Miembros, y los invitara a dar sus opiniones acerca de la cuestión de hacer cumplir las disposiciones sobre derechos humanos por conducto de un Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o de algún organismo internacional apropiado, y que presentara un informe con las propuestas de los gobiernos a tiempo para que la Asamblea General lo examinara durante su vigésimo segundo período de sesiones. El Consejo pidió también al Secretario General que invitara a los Directores Generales de la OIT y de la UNESCO a que presentasen a la Asamblea General, para facilitarle su tarea en el vigésimo segundo período de sesiones, un informe sobre la experiencia de sus organizaciones respecto

de la aplicación de los derechos humanos en las esferas de su competencia.

7. Esclavitud

En su 41º período de sesiones, el Consejo Económico y Social después de considerar el informe de su Relator Especial sobre esclavitud, Sr. Mohamed Awad, designado en cumplimiento de la resolución 960 (XXXVI), aprobó la resolución 1126 (XLI), en la cual pidió a la Comisión de Derechos Humanos que le presentase un informe en el que se formularan propuestas concretas de las medidas efectivas e inmediatas que podrían adoptar las Naciones Unidas para poner fin a la esclavitud en todas sus prácticas y manifestaciones.

La Comisión de Derechos Humanos, mediante su resolución 13 (XXIII), pidió a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías que examinara regularmente la cuestión de la esclavitud y de la trata de esclavos en todas sus prácticas y manifestaciones, incluidas las prácticas esclavizadoras del apartheid y del colonialismo, y que recomendará a la Comisión las medidas encaminadas a ofrecer ayuda a las Naciones Unidas y a los Estados Miembros que la aceptasen, para hacer frente a estos problemas; y pidió al Secretario General que preparase un análisis de la asistencia técnica u otros recursos del sistema de las Naciones Unidas que pudieran ser útiles a los Estados Miembros para eliminar todos los vestigios de la esclavitud y las prácticas esclavizadoras del apartheid y del colonialismo.

En su 42º período de sesiones, el Consejo Económico y Social aprobó, por recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, la resolución 1232 (XLII) en la cual pidió a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer que estudiara el informe del Relator Especial sobre esclavitud y que formulara propuestas concretas de las medidas inmediatas y eficaces que las Naciones Unidas podrían adoptar para eliminar todas las formas prácticas de esclavitud y de trata de esclavos que afecten a la condición jurídica y social de la mujer, señaló a la atención de la Comisión de Desarrollo Social el informe del Relator Especial sobre esclavitud, instó al Gobierno sudafricano a poner término inmediatamente a la práctica esclavizadora del apartheid en la República de Sudáfrica y en el territorio de África Sudoccidental, que constituía una responsabilidad directa de las Naciones Unidas y se encontraba ocupado ilegalmente en la actualidad por el Gobierno de Sudáfrica, y pidió al Secretario General que, dentro el programa de servicios de asesoramiento en materia de derechos humanos, organizara seminarios sobre medidas y procedimientos que hubiesen resultado eficaces para la eliminación de la esclavitud y de la trata de esclavos en todas sus prácticas y manifestaciones, incluidos las prácticas y los aspectos esclavizadores del apartheid y del colonialismo.

8. Estudios de derechos específicos o grupos de derechos

En su 23º período de sesiones, celebrado en 1967, la Comisión de Derechos Humanos tuvo ante sí las observaciones formuladas por cuarenta y nueve gobiernos acerca de los proyectos de principios que figuran en el informe revisado del Comité encargado del estudio del derecho de todo individuo a no ser arbitrariamente detenido, preso, ni desterrado. Por falta de tiempo, aplazó el examen del asunto hasta 1968.

En el mismo período de sesiones la Comisión recibió un cuarto informe sobre la marcha de los trabajos preparado por el Comité encargado del estudio del derecho del detenido a comunicarse con quienes precise consultar para asegurar su defensa o proteger sus intereses esenciales. Por falta de tiempo, la Comisión decidió aplazar el examen del tema hasta 1968.

9. Prevención de discriminaciones y protección a las minorías

ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL

La cuestión de las medidas adoptadas para aplicar la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial que había sido anteriormente considerada como tema separado en varios períodos de sesiones de la Asamblea General, del Consejo Económico y Social de la Comisión de Derechos Humanos, fue examinada nuevamente por los tres órganos en el período que se examina.

El Secretario General presentó un nuevo informe que la Asamblea General tuvo ante sí en su vigésimo primer período de sesiones, en el cual se proporcionaba información sobre las medidas encaminadas a la aplicación de la Declaración adoptadas por cincuenta gobiernos, las Naciones Unidas, siete de los organismos especializados y cuatro organizaciones intergubernamentales regionales. Tal como lo solicitara anteriormente el Consejo Económico y Social en su resolución 1146 (XLI), del 2 de agosto de 1966, el Secretario General presentó también a la Asamblea General, en su vigésimo primer período de sesiones, el informe del Seminario de las Naciones Unidas sobre apartheid, celebrado en Brasilia del 23 de agosto al 4 de septiembre de 1966.

La Asamblea General, en su resolución 2142 (XXI), de 26 de octubre de 1966, condenó, dondequiera existiesen, todas las políticas y prácticas de apartheid, de discriminación racial y de segregación, así como las prácticas discriminatorias inherentes al colonialismo, reiteró que el ejercicio de tales políticas y prácticas por un Estado Miembro era incompatible con las obligaciones que este Estado asume en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, instó a todos los Estados elegibles a que, sin demora, firmaran y ratificaran o se adhirieran a la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, e hizo un llamamiento a los Estados Miembros para que, en la lucha contra las prácticas discriminatorias, a fin de eliminar los prejuicios y las creencias erróneas tales como las ideas de superioridad de una raza sobre otra que incitan a esas prácticas, la educación y la cultura se orientasen, y los medios de comunicación para las masas y las actividades literarias se estimularan, con tal objeto. En la misma resolución la Asamblea General proclamó el 21 de marzo como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Pidió también al Secretario General que le informara en su vigésimo segundo período de sesiones acerca del cumplimiento de la Declaración y de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y acerca de la aplicación de las disposiciones de la resolución.

Al 15 de junio de 1967, doce Estados habían ratificado la Convención. Para que la Convención entre

en vigor son necesarias veintisiete ratificaciones o adhesiones.

La Comisión de Derechos Humanos aprobó, en su 23° período de sesiones tres resoluciones relacionadas con la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. En su resolución 10 (XXIII), la Comisión instó a todos los Estados a que observaran cada año el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial proclamado por la Asamblea General. Pidió al Secretario General que señalara esa resolución a la atención de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y les invitase a que presentaran anualmente información sobre el modo como habían observado el Día Internacional. La propia Comisión celebró una sesión conmemorativa especial el 21 de marzo de 1967 en oportunidad de celebrarse el primer Día Internacional.

Las otras dos resoluciones sobre el tema aprobadas por la Comisión de Derechos Humanos pedían que el Consejo Económico y Social adoptara medidas y contenían proyectos de resolución para su aprobación por la Asamblea General. El Consejo los consideró en su 42° período de sesiones, oportunidad en que también tuvo ante sí un nuevo informe del Secretario General sobre las medidas adoptadas por los Estados Miembros, las Naciones Unidas, los organismos especializados y las organizaciones intergubernamentales regionales encaminadas a la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, y el informe del Seminario sobre apartheid.

En su resolución 1211 (XLII), el Consejo hizo suya la propuesta de la Comisión de Derechos Humanos y recomendó a la Asamblea General la aprobación de un proyecto de resolución por el cual la Asamblea condenaría toda ideología, incluido el nazismo, que estuviese basada en la intolerancia racial y en el terror por suponer una violación flagrante de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y pediría a todos los Estados que adoptaran medidas inmediatas y efectivas contra cualesquiera de estas manifestaciones de nazismo e intolerancia racial.

En su resolución 1244 (XLII) el Consejo, a propuesta de la Comisión de Derechos Humanos, recomendó a la Asamblea General la aprobación de un proyecto de resolución por el cual la Asamblea instaría a todos los gobiernos que reuniesen las condiciones necesarias y que todavía no lo hubieran hecho a que firmaran, ratificaran y aplicaran sin demora los instrumentos internacionales dirigidos contra la discriminación, y pediría otras medidas destinadas a promover su aplicación.

ESTUDIO ESPECIAL SOBRE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL

En 1966 la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías inició un estudio especial sobre la discriminación racial en las esferas política, económica, social y cultural y designó relator especial para que se encargara de dicho estudio al Sr. Hernán Santa Cruz. El Relator Especial presentó un informe preliminar a la Subcomisión en su 19° período de sesiones, celebrado en enero de 1967, y ésta le pidió que presentara un informe sobre la marcha de los trabajos, que sería considerado más adelante en 1967.

Aunque la Comisión de Derechos Humanos no tuvo tiempo de considerar el informe de la Subcomisión en 1967, pidió a ésta que completara el estudio especial lo más rápidamente posible.

El Consejo Económico y Social, en su resolución 1240 (XLII), aprobó la solicitud que la Subcomisión dirigiera al Secretario General para que invitara al Relator Especial a asistir al Seminario sobre discriminación racial que ha de celebrarse en 1968 con arreglo al programa de servicios de asesoramiento en materia de derechos humanos, y a adoptar las disposiciones necesarias para que su informe sobre la marcha de los trabajos se ponga a disposición del seminario, junto con las observaciones que haga la Subcomisión respecto del estudio especial. El Consejo pidió también a la Asamblea General que recomendara a la Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos que utilizase el estudio especial de la discriminación racial, así como el informe del Seminario sobre discriminación racial, como documentos básicos de la Conferencia Internacional.

ESTUDIO DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS NACIDAS FUERA DE MATRIMONIO

La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías consideró, en su 19° período de sesiones, un informe final sobre el estudio de la discriminación contra las personas nacidas fuera de matrimonio, presentado por su Relator Especial, Sr. Vieno Voitto Saario. Aprobó principios generales sobre igualdad y no discriminación respecto de las personas nacidas fuera de matrimonio, sobre la base de recomendaciones incluidas en el informe del Relator Especial. La Subcomisión transmitió el informe del Relator Especial y los principios generales a la Comisión de Derechos Humanos para su consideración, pero la Comisión no tuvo tiempo de examinarlos. La Subcomisión pidió también al Secretario General que señalara el informe y los proyectos de principios a la atención de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la cual expresó su apoyo general a los mismos (véase la sección B, 4 *infra*).

ESTUDIO SOBRE LA IGUALDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

En 1967, el Relator Especial, Sr. Mohammed Ahmed Abu Rannat presentó a la Subcomisión un informe sobre la marcha de los trabajos relacionados con el estudio acerca de la igualdad en la administración de justicia. La Subcomisión lo invitó a presentar un proyecto de informe, que se aproximara en la mayor medida posible al informe final sobre el estudio, a tiempo para su consideración por la Subcomisión en su 21° período de sesiones que se celebrará en 1968.

10. Comunicaciones relativas a los derechos humanos

Desde el 20 de mayo de 1966 hasta el 31 de mayo de 1967 se recibió un total de 2.071 comunicaciones relativas a los derechos humanos, que se examinaron conforme al procedimiento establecido en la resolución 728 F (XXVIII) del Consejo Económico y Social. Se enviaron a la OIT 31 comunicaciones que contenían reclamaciones de violaciones de derechos sindicales, de conformidad con las resoluciones del Consejo 277 (X) y 474 A (XV) y se transmitieron a la OIT 214 comu-

nicaciones relativas a trabajos forzados, según la resolución del Consejo 60 (XXI).

Desde 1951, el Secretario General ha enviado al Gobierno de la República Federal de Alemania, de conformidad con la resolución 386 (XIII) del Consejo, información sobre la situación de los sobrevivientes de los campos de concentración que fueron víctimas de experimentos llamados científicos bajo el régimen nazi. Hasta el 31 de mayo de 1967 se habían enviado en esta forma 606 solicitudes de ayuda. El Secretario General también ha transmitido a la República Federal de Alemania información adicional relativa al número de reclamantes cuyas solicitudes de ayuda se habían enviado anteriormente a dicho Gobierno.

11. Anuario de los Derechos Humanos

El Anuario de los Derechos Humanos correspondiente a 1965, que es el vigésimo volumen de la serie, se halla en preparación. Incluirá disposiciones constitucionales, legislación, decretos y órdenes gubernamentales y decisiones judiciales relativas a los derechos humanos en más de 95 Estados y en ciertos territorios no autónomos y en fideicomiso.

12. Servicios de asesoramiento

Con arreglo al programa de servicios de asesoramiento, el Secretario General organizó en Brasilia un seminario mundial sobre el apartheid, que se realizó del 25 de agosto al 4 de septiembre de 1966, de conformidad con lo estipulado en la resolución 2060 (XX) de la Asamblea General; un seminario regional sobre las medidas necesarias para el adelanto de la mujer con referencia especial a la creación de un programa a largo plazo, que se celebró en Manila del 6 al 19 de diciembre de 1966; y otro seminario regional sobre la aplicación efectiva de los derechos civiles y políticos en el plano nacional, que se efectuó en Kingston, Jamaica, del 25 de abril al 8 de mayo de 1967.

En 1966, el Secretario General adjudicó 31 becas de derechos humanos, lo que eleva el total de becas concedidas en virtud de este programa a un total de 189. En conformidad con la resolución 1125 (XLI) del Consejo Económico y Social, el Secretario General empleó algunos de los fondos destinados a becas en un proyecto experimental de formación en grupo, en lugar de hacerlo en proyectos de formación individual, para participantes de Asia y la región del Lejano Oriente; aprovechando los servicios proporcionados por el Gobierno del Japón, el proyecto experimental se inició el 15 de junio de 1967.

En su informe sobre el programa de servicios de asesoramiento presentado a la Comisión de Derechos Humanos y a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, el Secretario General manifestó que se veía obligado a incluir la celebración de un curso regional de formación en derechos humanos en 1968 en la categoría de proyectos que han de ponerse en práctica en el momento en que se disponga de economías, con arreglo a la sección 14 del título V del presupuesto de las Naciones Unidas.

En su 23º período de sesiones, la Comisión de Derechos Humanos aprobó la resolución 17 (XXIII) en la que, entre otras cosas, pedía al Secretario General que estudiara la posibilidad de organizar, a partir de

1969, un programa anual de servicios de asesoramiento en materia de derechos humanos, consistente por lo menos en dos seminarios sobre cuestiones de derechos humanos (uno de ellos, como mínimo, de carácter internacional), uno o dos seminarios sobre la condición jurídica y social de la mujer y uno o varios cursos regionales de formación en derechos humanos; y recomendaba que el programa comprendiera la dotación de un número suficiente de becas para estudios de derechos humanos, teniendo en cuenta el creciente interés que en ellas habían manifestado los Estados Miembros.

B. Condición jurídica y social de la mujer

Un acontecimiento importante fue la aprobación unánime por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, el 2 de marzo de 1967, de un texto revisado del proyecto de declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, que será presentado a la Asamblea General en su vigésimo segundo período de sesiones.

El 16 de noviembre de 1966 y el 24 de febrero de 1967, Afganistán y el Reino Unido, respectivamente, pasaron a ser partes en la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, con lo cual se elevó a 52 el número de Estados que son parte en dicha Convención. El 8 de septiembre de 1966, el Gobierno de Malawi se adhirió a la Convención sobre la nacionalidad de la mujer casada. Con esto las partes en dicha Convención pasaron a ser 36 en total. Diecisiete Estados han ratificado la Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios o se han adherido a ella.

1. Proyecto de declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer

En su resolución 1921 (XVIII), del 5 de diciembre de 1963, la Asamblea General pidió que se preparase un proyecto de declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer. La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en su 18º y 19º períodos de sesiones, celebrados en 1965 y 1966, respectivamente, formuló un texto preliminar de proyecto de declaración que aprobó por unanimidad el 8 de marzo de 1966. Dicho texto, junto con las enmiendas presentadas en el 41º período de sesiones del Consejo Económico y Social y las actas resumidas de sus debates sobre este tema celebrados en el Consejo y en la Comisión, fueron transmitidos a la Asamblea General en 1966 por la resolución 1131 (XLI) del Consejo.

En el vigésimo primer período de sesiones de la Asamblea General se presentaron nuevas enmiendas al proyecto de declaración. Como la Asamblea General no tuvo tiempo para realizar un examen detallado, decidió en su resolución 2199 (XXI) pedir al Consejo Económico y Social que invitara a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer a que examinase nuevamente el texto, teniendo presentes las enmiendas que se habían propuesto en el Consejo y en la Asamblea General. La Comisión, en su 20º período de sesiones, estableció un comité de redacción encargado de realizar un examen preliminar del texto y de las enmiendas. Posteriormente, los miembros de la Comi-

sión presentaron nuevas enmiendas, y el Comité de Redacción fue ampliado para que incluyera a los patrocinadores de dichas enmiendas. El texto aprobado por el Comité de Redacción fue examinado por la Comisión en una sesión plenaria, y como resultado, se aprobó por unanimidad un proyecto revisado de declaración.

El Consejo Económico y Social decidió en su resolución 1206 (XLII), presentar dicho texto a la Asamblea General.

2. Asistencia de las Naciones Unidas para el adelanto de la mujer

El Secretario General presentó a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en su 20º período de sesiones, una nota en la que examinaba brevemente los adelantos logrados en el estudio de un programa de las Naciones Unidas, unificado y a largo plazo, para el adelanto de la mujer, iniciado en virtud de la resolución 1777 (XVII) de la Asamblea General, de 7 de diciembre de 1962.

El Secretario General también presentó un informe preliminar sobre la participación de la mujer en los programas de desarrollo de la comunidad, preparado de conformidad con la resolución 6 (XVIII) de la Comisión. Dicho informe reseñaba la evolución del concepto del desarrollo de la comunidad en las Naciones Unidas, describía sus elementos fundamentales y los tipos de programa de desarrollo de la comunidad y de otros programas en los que ha participado la mujer. Después de examinar dicho informe en su 20º período de sesiones la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en su resolución 13 (XX), pidió al Secretario General que enviara el informe preliminar a los Estados Miembros de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, a los organismos especializados competentes y a las organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas interesadas, a fin de obtener más información sobre diversos aspectos, que comprendían las formas en que se había mejorado la condición jurídica y social de la mujer mediante el desarrollo de la comunidad y los métodos que se podrían utilizar para aumentar el alcance y el contenido de la contribución de la mujer al desarrollo de la comunidad. La información recibida en respuesta a esta solicitud será incorporada en un nuevo informe que se presentará a la Comisión, de ser posible, en 1968.

En su resolución 12 (XX), también aprobada dentro del capítulo referente a la asistencia de las Naciones Unidas para el adelanto de la mujer, la Comisión invitó al Secretario General, a los organismos especializados competentes, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, así como a las organizaciones no gubernamentales interesadas, reconocidas como entidades consultivas, a que intensificaran y, siempre que fuera posible, unificaran a escala nacional y regional, la investigación y la labor encaminadas a fomentar la educación y la formación profesional de las muchachas y las mujeres de las zonas rurales.

La resolución 14 (XX) de la Comisión, basada principalmente en las conclusiones y recomendaciones del seminario sobre las medidas necesarias para el adelanto de la mujer, con referencia especial a un programa a largo plazo, celebrado en las Filipinas en diciembre de 1966, incluía dos peticiones al Secretario General.

Se le pedía que enviase un cuestionario a los Estados Miembros para determinar el número de comisiones nacionales sobre la condición jurídica y social de la mujer y órganos análogos que existían en ese momento, las funciones que desempeñaban y sus relaciones con las organizaciones no gubernamentales, y que preparase un informe basado en las respuestas recibidas, a ser posible, para el 21º período de sesiones de la Comisión. Además se le pedía que, en consulta con los organismos especializados interesados, estudiara las instituciones o centros regionales de capacitación existentes y la medida en que ofrecían o podía pedírseles que ofrecieran la capacitación o el perfeccionamiento necesarios para el adelanto de la mujer. También se le pedía un informe al respecto, de ser posible, para el 21º período de sesiones, que se celebrará en 1968. Posteriormente, el Consejo Económico y Social en su resolución 1209 (XLII), apoyó otras recomendaciones contenidas en esa misma resolución. El Consejo señaló a la atención de los Estados Miembros, los organismos especializados competentes, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, así como a las organizaciones no gubernamentales interesadas, reconocidas como entidades consultivas, el informe del seminario celebrado en las Filipinas y las conclusiones y recomendaciones contenidas en el mismo. También invitó a los Estados Miembros a que examinasen la posibilidad de establecer programas nacionales a largo plazo para el adelanto de la mujer, en el contexto de los planes de desarrollo nacionales, y recomendaba el examen de ciertas medidas para facilitar la pronta realización de los objetivos previstos.

3. Derechos políticos de la mujer

De conformidad con la resolución 1132 (XLI) del Consejo Económico y Social, el Secretario General preparó un informe consolidado sobre constituciones, leyes electorales y otros instrumentos jurídicos relativos a los derechos políticos de la mujer, el que fue distribuido en la Asamblea General y en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Dicho informe indicaba que, al 1º de septiembre de 1966 en 114 países, las mujeres podían votar en todas las elecciones y ser elegidas con iguales derechos que los hombres; en tres países, los derechos de la mujer a votar y a ser elegida estaban sujetos a limitaciones que no se imponían a los hombres; y en ocho países las mujeres no tenían derecho a votar ni podían ser elegidas. Después de examinar dicho informe, la Comisión pidió al Secretario General que hiciera los arreglos necesarios para la impresión de dicho informe después de transmitirlo a los Gobiernos para obtener información complementaria.

El Secretario General también presentó a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la mujer un resumen de la información recibida de los Estados Miembros sobre la aplicación de los principios enunciados en la Convención sobre los derechos políticos de la mujer. El informe, preparado de conformidad con la resolución 961 B (XXXVI) del Consejo Económico y Social incluía datos proporcionados por 43 Estados y cuadros que indicaban los Estados Miembros de las Naciones Unidas donde habían sido elegidas mujeres como miembros del parlamento nacional y los Estados donde habían sido nombradas mujeres en cargos gubernamentales, judiciales o diplomáticos.

También se presentó ante la Comisión un tercer informe relativo a la condición de la mujer en los territorios no autónomos. Dicho informe exponía los últimos acontecimientos referentes a la condición jurídica y social de la mujer en general, así como en las esferas política, social, económica y educativa y la condición de la mujer en el derecho privado. El Secretario General presenta dichos informes a la Comisión cada dos años en virtud de un pedido formulado por la Comisión en 1947.

En la resolución 4 (XX), la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer expresó la esperanza de que la serie de seminarios sobre la educación cívica y política de la mujer, iniciada en 1965 en virtud de la resolución 1067 A (XXXIX) del Consejo, trataría de analizar los factores, los obstáculos y las presiones que influyen en el ejercicio por la mujer de sus derechos y deberes de orden político y su participación en la vida pública; e identificaría los métodos de ayuda y estímulo a la mujer para que haga uso más completo posible de sus derechos y deberes políticos. El primer seminario sobre este tema se celebrará en Helsinki en agosto de 1967.

4. Condición de la mujer en el derecho privado

De conformidad con lo solicitado por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en la resolución 10 (XIX), el Secretario General preparó un informe revisado sobre los derechos y deberes de los padres, incluida la guarda de los hijos, basado en la información complementaria proporcionada por los Gobiernos. El Consejo Económico y Social, en su resolución 1207 (XLII), hizo suyas, con algunas enmiendas, las recomendaciones de la Comisión basadas en el examen que realizó del informe del Secretario General. En dicha resolución, el Consejo recomendaba a los gobiernos de los Estados Miembros que adoptasen todas las medidas posibles para garantizar la igualdad del hombre y de la mujer en el ejercicio de los derechos y deberes de los padres; también recomendaba que, para garantizar tal igualdad, se adoptasen ciertos principios, teniendo en cuenta las especiales características de las legislaciones de los diferentes países y sin olvidar que en todos los casos el interés de los hijos debe ser la consideración primordial.

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer también consideró en su 20º período de sesiones un estudio sobre la discriminación contra las personas nacidas fuera del matrimonio, preparado por un Relator Especial de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías y el proyecto de principios generales sobre igualdad y no discriminación en lo que respecta a las personas nacidas fuera del matrimonio, preparado por la Subcomisión en su 19º período de sesiones celebrado en 1967. En su resolución 6 (XX), la Comisión expresó su aprecio por el estudio del Relator Especial y su apoyo en general a los principios aprobados por la Subcomisión. También pidió al Secretario General que preparase para un próximo período de sesiones de la Comisión, un informe sobre la condición de la madre soltera, tanto en el campo del derecho como en la práctica, basado en la documentación que tenga disponible, incluyendo la información contenida en el informe del Relator Especial.

5. Repercusiones de las resoluciones y recomendaciones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en las legislaciones nacionales

De conformidad con la resolución 14 (XVIII) de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, el Secretario General presentó en el 20º período de sesiones de dicha Comisión un informe complementario sobre las repercusiones de las resoluciones y recomendaciones de la Comisión sobre las legislaciones nacionales, que estaba basado en información proporcionada por los gobiernos. El informe trataba de los derechos políticos y la condición jurídica y social de la mujer en derecho privado. Los informes sobre esta cuestión se presentan a la Comisión a intervalos regulares. El próximo informe de la serie tratará sobre los derechos y las oportunidades de la mujer en la esfera económica e incluirá cualquier información adicional disponible relativa a los derechos políticos y a la condición jurídica y social de la mujer en derecho privado.

6. Posibilidades de instrucción para la mujer

El Secretario General transmitió a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en su 20º período de sesiones dos informes de la UNESCO: uno sobre las actividades de 1965-1966 de especial interés a la mujer y las principales actividades propuestas para 1967-1968 y otra sobre el acceso de las jóvenes y las mujeres a la enseñanza superior.

En su resolución 7 (XX), la Comisión observó con satisfacción que la Conferencia General de la UNESCO aprobó un programa a largo plazo para el adelanto de la mujer mediante su acceso a la educación, la ciencia y la cultura y observó también que este programa sería proyectado de forma que pudiera integrarse en el programa unificado a largo plazo para el adelanto de la mujer que establecerían las Naciones Unidas.

En la resolución 1208 (XLII), aprobada por el Consejo Económico y Social el 29 de mayo de 1967 por recomendación de la Comisión, figuran distintas recomendaciones a los Estados Miembros para que tomen ciertas medidas a fin de promover el acceso de jóvenes y mujeres a los estudios superiores, en condiciones de igualdad con los hombres, y a todos los empleos y profesiones para los que dicha educación las capacite.

7. Derechos económicos y participación de la mujer en la vida económica

El Secretario General transmitió a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer cuatro informes preparados por la Organización Internacional del Trabajo: dos informes sobre las actividades de la OIT que presentaban especial interés desde el punto de vista del trabajo de la mujer; un informe de las normas de la OIT relativas al trabajo de la mujer; y un informe sobre el salario igual por trabajo igual.

Como consecuencia de dichos informes, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en su resolución 9 (XX), invitó al Consejo de Administración de la OIT a que examinara las posibilidades de convocar regularmente reuniones de grupos de consultores sobre los problemas de las mujeres trabajadoras, a fin de examinar periódicamente las necesidades y problemas de la mujer que trabaja y las normas de la OIT

relativas al empleo de la mujer, y a que incluyera en los programas de las conferencias regionales de la OIT la cuestión de la participación de la mujer en la vida económica. La Comisión también invitaba a la OIT a que promoviera la mayor participación de la mujer

en los programas de formación profesional, técnica y vocacional, y a que prosiguiera sus esfuerzos para promover la aplicación de los principios contenidos en el Convenio y la Recomendación de 1951 sobre igualdad de remuneración.

REFERENCIAS

A. Derechos humanos

El informe de la Comisión de Derechos Humanos sobre su 23° período de sesiones (20 de febrero a 23 de marzo de 1967), figura en *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 42° período de sesiones, Suplemento No. 6* (E/4322).

Los documentos pertinentes figuran en el anexo 11 al informe mencionado.

Otros documentos pertinentes y una lista de las actas de las sesiones correspondientes figuran en *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 41° período de sesiones, Anexos*, temas 21, 23, 24, 25 y 31 del programa; *ibid.*, 42° período de sesiones, *Anexos*, temas 11, 13, 15 y 16 del programa y en *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Anexos*, temas 57, 58, 59, 62, 63 y 95 del programa.

Véase también el documento A/6670.

B. Condición jurídica y social de la mujer

El informe de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer sobre su 20° período de sesiones (13 de febrero a 6 de marzo de 1967) figura en *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 42° período de sesiones, Suplemento No. 7* (E/4316).

Los documentos pertinentes figuran en el anexo I al informe mencionado.

Otros documentos pertinentes y una lista de las actas de las sesiones correspondientes figuran en *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 41° período de sesiones, Anexos*, tema 22 del programa; *ibid.*, 42° período de sesiones, *Anexos*, tema 12 del programa; y *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Anexos*, tema 56 del programa.

Véase también el documento A/6447.

CAPITULO VIII

Asuntos económicos y sociales

A. Cuestiones generales y métodos relativos al desarrollo

1. La situación económica y social en el mundo

EL DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

Sobre la base de un informe provisional preparado por el Secretario General en nombre del Comité Administrativo de Coordinación, el Consejo Económico y Social examinó, en su 41º período de sesiones, la cuestión del Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En su resolución 1152 (XLI), de 4 de agosto de 1966, el Consejo pidió al Secretario General que estudiase los preparativos que fueran necesarios a fin de promover y facilitar la planificación de medidas internacionales concertadas para el período que seguirá al Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Posteriormente la Asamblea General, en su resolución 2218 B (XXI), de 19 de diciembre de 1966, pidió al Secretario General que preparase un plan preliminar de estrategia internacional para el desarrollo en el decenio que empezará en 1970, dentro del cual se pudieran concentrar los esfuerzos iniciales en la determinación de metas y objetivos concretos para los diversos sectores y componentes.

Teniendo en cuenta lo solicitado en esas resoluciones, se preparó una nota en la que se hacían algunas sugerencias preliminares acerca de las directrices y propuestas para el decenio de 1970, a fin de presentarla al Comité de Planificación del Desarrollo en su segundo período de sesiones, en abril de 1967. El Comité en su informe al Consejo, sugirió que las Naciones Unidas adoptasen una carta para el segundo decenio para el desarrollo que incluyese una serie de disposiciones generales destinadas a lograr un acrecentamiento más rápido del ingreso y del bienestar de los países en desarrollo. El Comité decidió también crear un grupo de trabajo encargado de elaborar un programa de acción más preciso.

De conformidad con las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo, se preparó un informe sobre la marcha de los trabajos para presentarlo al Consejo Económico y Social en su 43º período de sesiones. En dicho informe, el Secretario General señaló las medidas que podrían tomarse con respecto a la labor preparatoria del segundo decenio para el desarrollo.

LA SITUACIÓN ECONÓMICA EN EL MUNDO

El *Estudio Económico Mundial, 1966* fue preparado para su presentación al Consejo Económico y Social en julio de 1967. El *Estudio* consta de dos partes. La primera está dedicada al examen de la experiencia en

la ejecución de planes de desarrollo; en la subsección 4 *infra*, titulada "Planificación y proyecciones para el desarrollo", se hace referencia a esta cuestión.

La segunda parte del *Estudio* consiste en un examen de las tendencias económicas mundiales durante el año 1966 y principios de 1967. La actividad económica mundial continuó progresando en 1966. Las exportaciones mundiales aumentaron en un 9% entre 1965 y 1966, en comparación con un aumento del 8% registrado entre 1964 y 1965.

Aparte de la China continental, sobre la que no se dispone de datos, los aumentos de la producción entre 1965 y 1966 fueron en general similares a los registrados entre 1964 y 1965. Los progresos registrados en la agricultura y la minería fueron ligeramente superiores, en tanto que en la manufactura fueron algo menores. En conjunto, el mundo dispuso en 1966 de un 5% más de bienes y servicios que en 1965.

Entre 1965 y 1966 las economías de mercado desarrolladas aumentaron nuevamente su producto combinado en términos reales en un 5%, pese a la desaceleración registrada en algunos de los principales países industriales tales como el Reino Unido y la República Federal de Alemania. La producción industrial aumentó algo más como consecuencia de la recuperación del Japón, Italia, y Francia. En América del Norte, la tasa de crecimiento de la producción industrial disminuyó durante el año, porque la amenaza de desequilibrio externo y de inestabilidad interna condujo a la adopción de políticas de contención. En varios otros países regían políticas económicas restrictivas, pero a fines del año las presiones inflacionarias parecían ir en disminución. La tendencia a la desaceleración del crecimiento industrial a medida que avanzaba el año empezó a afectar las importaciones procedentes de los países en desarrollo. Pero durante el primer trimestre de 1967 se mantuvo un alto nivel de comercio entre las economías de mercado desarrolladas.

En los países en desarrollo, la tasa de crecimiento general, que había disminuido ligeramente entre 1964 y 1965, descendió aún más, entre un 3% y un 4% entre 1965 y 1966. Esta disminución reflejó el virtual estancamiento de la producción agrícola en varios de los principales países en desarrollo. Así, en tanto que la producción industrial aumentó en un 8% entre 1965 y 1966, la producción agrícola disminuyó, al parecer, alrededor del 1%. Los ingresos de exportación de los países en desarrollo aumentaron entre 1965 y 1966 algo más que en el período precedente; sus reservas en divisas aumentaron también en 1966, aunque en menor grado que en 1965.

En las economías europeas de planificación centralizada, la producción aumentó en más del 7% entre

1965 y 1966 — es decir, a un ritmo ligeramente superior al del período precedente. Esta aceleración se debió enteramente a un considerable incremento en la producción agrícola, que aumentó en un 9% entre 1965 y 1966. La expansión del comercio exterior (importaciones más exportaciones) no se mantuvo al nivel del crecimiento de la producción total en 1966; después de aumentar en un 6% entre 1964 y 1965, tuvo un 5% de aumento entre 1965 y 1966. Esta desaceleración refleja un ritmo de crecimiento mucho menor en el comercio exterior de Checoslovaquia, Hungría y Polonia, y un decrecimiento absoluto en las importaciones de la Unión Soviética.

LA SITUACIÓN SOCIAL EN EL MUNDO

El Consejo Económico y Social examinó el *Informe sobre la situación social en el mundo, 1965*, en su 41º período de sesiones. En este informe se hizo una breve reseña de las tendencias sociales recientes y se trazó un cuadro del lento progreso social de los países en desarrollo al llegar al punto medio del Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Si bien en algunos sectores del desarrollo, en particular en la educación, siguieron registrándose más progresos que en otros, y algunos países o partes de países progresaron más rápidamente que otros, los esfuerzos recientes en pro del desarrollo no han satisfecho las esperanzas y previsiones. Los incentivos para el cambio social en el plano local constituyeron el tema principal del informe, en el que se examinaron las medidas prácticas que podían tomarse para inducir a la población en el plano local o comunal a prestar apoyo a los cambios sociales, y alentarla a introducir nuevos métodos de producción y consumo. El Consejo aprobó la resolución 1143 (XLI) por la que invitó a la Comisión de Desarrollo Social a que prosiguiese su labor en la esfera de la participación popular en el desarrollo, habida cuenta del programa en materia social aprobado en virtud de la sección I de la resolución 1139 (XLI) del Consejo, y en cooperación con el Comité de Planificación del Desarrollo, y pidió al Secretario General que, al proseguir su trabajo sobre este tema, se valiera de los recursos del Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social.

La Asamblea General, en su resolución 2215 (XXI), pidió al Secretario General, al Consejo Económico y Social y, por conducto de éste, a la Comisión de Desarrollo Social que, en cooperación con los organismos especializados, procurasen que los informes periódicos sobre la situación social en el mundo reflejasen la situación social en general y las tendencias sociales en las diversas regiones del mundo y en los países de distintos sistemas económicos y sociales, teniendo en cuenta la estrecha correlación entre los factores económicos y sociales. La Asamblea pidió asimismo que estos informes, junto con sus conclusiones y recomendaciones prácticas, se sometiesen a su consideración cada tres años.

En su 41º período de sesiones el Consejo reevaluó el papel que corresponde desempeñar a la Comisión de Asuntos Sociales y aprobó la resolución 1139 (XLI), en la que definió los principios y objetivos del Programa de las Naciones Unidas en la esfera social y el futuro programa de trabajo de la Comisión, así como el programa concertado de acción práctica en materia social. Reiteró asimismo los fines del programa, abarcando todos los sectores principales del desarrollo:

eliminación del hambre y elevación de los niveles de salud y de nutrición; eliminación del analfabetismo, ampliación y mejora de la educación; elevación de los niveles de empleo y de ingresos; mejora de las condiciones de la vivienda y de los servicios comunales, ordenación urbana y planificación de las ciudades; prestación de servicios de protección social y seguridad social; y estudio de los aspectos y consecuencias sociales de la industrialización y la urbanización. Se recaló en particular la función de la planificación y la importancia de un criterio equilibrado e integral de los aspectos económicos y sociales del desarrollo. Se insistió en la importancia de introducir cambios estructurales, tales como la reforma agraria y la distribución del ingreso, y se asignó especial importancia a la formación de cuadros nacionales y a la función del Estado en la mejora del bienestar de la población. Se cambió la designación de la Comisión por la de Comisión de Desarrollo Social para aclarar su función de órgano preparatorio del Consejo en todo el ámbito de la política de desarrollo social. La Asamblea General, en su resolución 2215 (XXI), hizo suya la resolución del Consejo relativa a la reevaluación del papel que corresponde desempeñar a la Comisión de Asuntos Sociales.

En su 42º período de sesiones, el Consejo recaló la importancia de las conclusiones y recomendaciones de la Comisión acerca de cuestiones sociales relativas a la ampliación de los servicios sanitarios, basadas en su examen de un informe preparado por la Organización Mundial de la Salud para la Comisión en su 18º período de sesiones. Se sugirió que el Secretario General las hiciera llegar a los gobiernos, los organismos especializados interesados y las organizaciones no gubernamentales, para que formularan observaciones y tomaran medidas prácticas complementarias. El Consejo aprobó por unanimidad su resolución 1226 (XLII) por la que invitó a la Organización Mundial de la Salud a preparar, de ser posible para el 19º período de sesiones de la Comisión, un nuevo informe sobre la disponibilidad y utilización de los servicios sanitarios y médicos en países que se hallan en distintas etapas de desarrollo.

La Comisión de Desarrollo Social consideró asimismo, en su 18º período de sesiones, la preparación de un proyecto de declaración sobre desarrollo social. Un grupo de trabajo de la Comisión preparó una lista preliminar de puntos que habrían de incluirse en el proyecto de declaración. En su 42º período de sesiones, el Consejo, en su resolución 1228 (XLII), decidió que el Grupo de Trabajo se reuniese antes del comienzo del 19º período de sesiones de la Comisión a fin de preparar un proyecto de declaración inicial que se sometería para su consideración al Consejo; el Secretario General celebraría también consultas con los organismos especializados antes del período de sesiones que el Grupo de Trabajo celebraría en febrero de 1968.

La Comisión examinó también un informe sobre los progresos realizados en la elaboración del programa de investigación y capacitación en la esfera del desarrollo regional, solicitado por el Consejo en su resolución 1086 C (XXXIX). En 1966 y 1967 varios grupos compuestos por especialistas en planificación del medio físico y desarrollo económico y social, familiarizados con la planificación y el desarrollo regionales, celebraron consultas con los Gobiernos de Arabia Saudita, Ceilán, Etiopía, Japón, Paquistán, la República

Arabe Unida y Siria. En todos los casos, los representantes locales de los organismos especializados y miembros de las oficinas regionales fueron asociados a los grupos. La tarea más importante de cada grupo era efectuar un estudio preliminar de los proyectos regionales cuya inclusión en el programa de investigación y capacitación se había sugerido. Los grupos celebraron consultas con las autoridades nacionales de planificación, los ministerios de desarrollo interesados y los representantes residentes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con miras a determinar las políticas y prácticas nacionales en relación con la planificación y el desarrollo regionales, los servicios que podrían ponerse a disposición del programa de investigaciones y capacitación, la posible necesidad de racionalizar o reforzar el programa de asistencia técnica existente, a fin de promover una planificación y un desarrollo regional más completos, y las esperanzas de las autoridades nacionales en lo referente a la naturaleza y alcance del programa que podría emprenderse con asistencia de las Naciones Unidas. Se señalaron a la atención del Comité de Desarrollo Industrial, en su sexto período de sesiones, los propósitos del programa de investigación, que también fue objeto de examen en el cuarto período de sesiones del Comité de Vivienda, Construcción y Planificación.

Ocho expertos, así como representantes de la CEPAL, la OIT, la FAO, la UNESCO y la OMS, participaron en una reunión celebrada a principios de 1967, a fin de estudiar la relación entre la distribución del ingreso en la nación y la política social, inclusive las cuestiones de la definición y medición de la distribución del ingreso en el contexto de la política social. Si bien el informe completo de la reunión no será presentado a la Comisión hasta su 19º período de sesiones, ésta, en su 18º período de sesiones, examinó e hizo suyas en general las conclusiones de los expertos, y convino en que se debía asignar alta prioridad a los estudios en este campo.

El Director del Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social presentó a la Comisión, en su 18º período de sesiones, el tercer informe de la Junta sobre la marcha de los programas y examinó sucintamente la labor del Instituto en las principales esferas de su interés: el estudio de las interrelaciones en los factores económicos y sociales en el proceso del desarrollo; los instrumentos y métodos de la planificación social como medios para influir en el proceso del desarrollo; y el estudio de problemas relacionados con la adopción de cambios sociales. En la 1428a. sesión del Consejo, el representante de los Estados Unidos de América anunció que su Gobierno estaba dispuesto a hacer una contribución de 885.000 dólares a lo largo de un período de tres años, a partir de 1967, siempre que esta contribución no constituyese más del 40% del total de las contribuciones gubernamentales. Posteriormente, otros Gobiernos han prometido contribuciones y se espera que pueda alcanzarse el objetivo de 1.500.000 dólares para el trienio 1968-1970.

2. La situación demográfica en el mundo

En los últimos años, las Naciones Unidas han adoptado una serie de medidas en respuesta a la preocupación de muchos gobiernos por las repercusiones del crecimiento de la población y de los cambios demográficos sobre el desarrollo económico y social. A la resolución 1084 (XXXIX) por la que el Consejo Eco-

nómico y Social hizo suyo un programa de trabajo a largo plazo en materia de población y afirmó la autoridad del Secretario General para prestar, a solicitud de los gobiernos, asistencia a los programas nacionales de acción, siguió la elevación, por parte del Secretario General, de la antigua Subdirección de Población a la categoría de División. La Asamblea General, en su resolución 2211 (XXI), recalcó la necesidad de continuar con el programa y desarrollar y fortalecer los servicios nacionales y regionales de formación, investigación, información y asesoramiento en materia de población, teniendo presente el carácter diverso de los problemas demográficos de cada país y región y las necesidades a que dieran lugar. En diciembre de 1966, los Jefes de Estado de 12 países hicieron una declaración en la que se reconocía la gravedad del problema del crecimiento no planificado de la población, y el interés vital de la planificación de la familia tanto para ésta como para la nación. El Secretario General distribuyó esta declaración el Día de los Derechos Humanos, en 1966, observando que el crecimiento demográfico no sólo es un importante factor en el ritmo al que las naciones pueden alcanzar sus objetivos económicos, sino también que el tamaño de la familia es un problema fundamental que debe basarse en las decisiones de padres responsables preocupados por la dignidad y el bienestar de sus hijos.

Actualmente se examina el programa de las Naciones Unidas en materia de población a fin de llegar a un mejor equilibrio entre las actividades de la Sede, las regionales y nacionales, y entre las distintas disciplinas en juego. Se presta asesoramiento al Secretario General sobre aspectos detallados del programa mediante una serie de reuniones especiales de expertos.

Las crecientes actividades en materia de población en que participa el sistema de las Naciones Unidas requieren una colaboración y coordinación más estrechas con los organismos especializados pertinentes y con las comisiones económicas regionales. Con este propósito se iniciaron en 1965 conversaciones con los organismos especializados, y en noviembre de 1966 se celebró la segunda reunión interinstitucional sobre programas de población, en la que se realizaron consultas entre las Naciones Unidas, el UNICEF, la OIT, la FAO, la UNESCO y la OMS. En una reunión celebrada en enero de 1967, los secretarios ejecutivos examinaron el papel de las comisiones económicas regionales en el programa ampliado de las Naciones Unidas en materia de población, y se están preparando planes detallados para las actividades regionales.

Como la aceleración incontrolada del aumento de la población y una gran migración rural hacia las zonas urbanas pueden trabar el verdadero progreso económico en muchos países, el programa de trabajo en materia de población se ha concentrado durante el corriente año en estos dos sectores. En gran parte como resultado de la labor y del informe de la misión de las Naciones Unidas encargada de asesorar al Gobierno de la India en cuestiones de planificación de la familia, se han recibido tres solicitudes de gobiernos que se tramitan en estrecha colaboración con los organismos especializados interesados.

Se está realizando un estudio mundial del crecimiento de la población urbana y rural, a fin de comprender mejor sus tendencias, especialmente en las regiones en desarrollo. Otro importante proyecto de investigación es la revisión de *Factores determinantes y conse-*

cuencias de las tendencias demográficas, obra publicada en 1953, con la que se actualizará este resumen de los resultados de los estudios realizados sobre las relaciones existentes entre los factores demográficos, económicos y sociales.

En materia de asistencia técnica, se proporciona apoyo a centros de formación e investigación demográfica en Chile, la India y la República Árabe Unida, que preparan a unos 55 becarios por año, bajo los auspicios de las Naciones Unidas. A solicitud de los gobiernos, se proporcionan servicios de asesoramiento y asistencia de expertos por conducto de asesores regionales en la región de la CEPAL y el Oriente Medio, mediante los servicios del personal del centro demográfico de Chile y el suministro de expertos a los gobiernos.

3. Asistencia económica internacional a los países menos desarrollados

LA CORRIENTE INTERNACIONAL DE CAPITAL HACIA LOS PAÍSES MENOS DESARROLLADOS

En cumplimiento de las resoluciones 923 (XXXIV) y 1184 (XLI) del Consejo Económico y Social, el Secretario General preparó un informe titulado *La Corriente Internacional de Capital a Largo Plazo y de Donaciones Oficiales, 1961-1966*. En él se señalan algunas tendencias en la corriente de recursos hacia los países en desarrollo durante la primera mitad del Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En ese período, algo más de dos tercios del volumen de la corriente fueron transferencias oficiales y algo menos de un tercio transferencias privadas. Un 90% aproximadamente de la corriente de recursos se hizo en virtud de convenios bilaterales y un 10% fue transferido por conducto de instituciones internacionales. La distribución de la cifra total entre donaciones y préstamos ha variado; el porcentaje correspondiente a las donaciones descendió del 50% en el año 1962 al 41% aproximadamente en 1965. Durante el período 1960-1965 la corriente de recursos hacia los países en desarrollo fue inferior al crecimiento de las economías de mercado de los países desarrollados. La relación entre las corrientes netas de recursos y el total de los productos brutos de los países desarrollados con economía de mercado descendió del 0,8% en 1961 al 0,7% aproximadamente en 1965.

En conformidad con la resolución 1184 (XLI) del Consejo Económico y Social, el Secretario General convocó al grupo de expertos que anteriormente había preparado un informe preliminar sobre la medición de la corriente de recursos a los países en desarrollo en cumplimiento de la resolución 1938 (XVIII) de la Asamblea General. En su reunión, el grupo de expertos preparó su informe definitivo titulado *Medición de la Corriente de Recursos a los Países en Desarrollo* que fue presentado al Consejo Económico y Social en su 41º período de sesiones. En el informe se estudian también los problemas relacionados con la presentación en forma significativa de datos exactos sobre la salida de recursos de los países desarrollados y las entradas de estos en los países en desarrollo. En el informe se formulan algunas recomendaciones relacionadas con la recopilación y presentación de datos destinados a la medición del volumen de las corrientes de recursos hacia los países en desarrollo y de su grado de adecuación.

En conformidad con las resoluciones 1184 (XLI) del Consejo Económico y Social y 2169 (XXI) de la Asamblea General, un informe titulado "Salida de capitales de los países en desarrollo" fue presentado al Consejo en su 43º período de sesiones. En el informe se presentan los datos existentes sobre la salida de capital y exportaciones invisibles de los países en desarrollo hacia los países desarrollados, junto con un estudio de algunos de los problemas derivados de estas salidas y de las políticas que influyen en ellos. También contiene las respuestas a un cuestionario enviado a los gobiernos con objeto de recabar sus puntos de vista sobre la salida de capitales de los países en desarrollo, sus causas, consecuencias y medidas para regularlas.

En cumplimiento de las resoluciones 1183 (XLI) del Consejo Económico y Social y 2170 (XXI) de la Asamblea General, el Secretario General preparó un informe sobre los factores que afectan a la capacidad de los países desarrollados para transferir recursos financieros a los países en desarrollo. Este informe, que fue presentado al Consejo Económico y Social en su 43º período de sesiones, estudia los factores económicos que afectan a la capacidad de los países desarrollados para transferir los máximos recursos financieros a los países en desarrollo de conformidad con las recomendaciones contenidas en el Acta Final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y también estudia los progresos realizados por cada uno de los países desarrollados en cuanto a la aplicación de la recomendación referente a las condiciones de la asistencia. Asimismo toma nota de lo decepcionantes que son las tendencias que se manifiestan en las corrientes de recursos financieros hacia los países en desarrollo y considera los factores que se cree afectan de manera importante a estas corrientes.

En el informe se señala el contraste entre el éxito de la ayuda masiva y temporal para la reconstrucción de Europa occidental después de la guerra y los diversos obstáculos que se oponen a la labor mucho más difícil de asistencia a largo plazo para los países en desarrollo.

En dicho informe se considera que la transferencia de recursos financieros en forma sostenida por los países desarrollados compite con las exigencias internas de una economía caracterizada recientemente por unas condiciones generales de plena utilización de la capacidad económica y empleo total. Aun cuando las dificultades de la balanza de pago de los países desarrollados considerados como un grupo son primordialmente un problema interno del grupo, los países con semejante problema, especialmente el Reino Unido y los Estados Unidos, han mostrado tendencia a restringir la salida de capitales. En algunos casos se han adoptado en cambio medidas para eximir de restricciones a los países en desarrollo.

En el informe se señala también la restricción presupuestaria a la ampliación de la asistencia y sugiere que los países en desarrollo con mejores condiciones de acceso a los mercados de capital podría atenuar las dificultades presupuestarias.

Ayuda multilateral en materia de alimentos

En cumplimiento de las resoluciones 1149 (XLI) del Consejo Económico y Social y 2155 (XXI) y 2096

(XX) de la Asamblea General, el Secretario General en colaboración con el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación preparó un informe sobre la ayuda multilateral en materia de alimentos. En él se explora el problema de la insuficiencia de los suministros de alimentos y las políticas nacionales e internacionales que se requieren para hacer frente a las necesidades de alimentos de los países en desarrollo.

En el informe se examinan los factores que han contribuido a crear el actual problema de alimentos. Del lado de la oferta, la producción interna de alimentos de los países en desarrollo ha venido aumentando a razón de un 3% anual aproximadamente entre 1953 y 1963, pero la tasa de crecimiento ha disminuido en los años recientes. Del lado de la demanda, la presión que se ejerce sobre los recursos disponibles ha sido producida en parte por un rápido crecimiento de la población, el cual actualmente se eleva a un 2,5% anual aproximadamente, lo que supone una tasa de crecimiento doble de la que hubo en el período entre las dos guerras. El aumento en los ingresos que, de 1950 a 1965 se ha elevado un 4,6% anual, ha hecho que la demanda de alimentos se eleve rápidamente, dando lugar a que el consumo de cereales aumentara a razón de un 3,5% anual durante el período 1954-1963. Estas tendencias han provocado en los países en desarrollo unos déficit cada vez mayores de alimentos. Mientras que estos países en el período de 1934-1938 exportaron 14 millones de toneladas de cereales, en 1961-1963 importaban 12 millones de toneladas. Además, para decenas de millones y aun quizás centenares de millones de personas, los productos alimenticios existentes son inadecuados considerando su valor nutritivo.

Al analizar el futuro, el informe considera que la perspectiva de alcanzar un equilibrio en la balanza de los alimentos de los países en desarrollo es causa de honda preocupación. En el decenio que comienza en 1970 se calcula que la población aumentará anualmente en unos 56 millones lo que supondrá un aumento anual de 9 millones de toneladas en el consumo de cereales, aun cuando el consumo por habitante se mantenga sólo en el nivel que había en 1964. Según las proyecciones de la FAO, para 1975 el déficit neto de cereales podría alcanzar incluso los 47 millones de toneladas, mientras que en el período 1961-1963 las importaciones netas fueron de 23 millones de toneladas. En 1975 el valor de las importaciones destinadas a cubrir el déficit de alimentos podría llegar a 8.500 millones de dólares, mientras que en 1961-1963 el valor de las importaciones netas ascendió a 3.000 millones de dólares. Calculando tasas de crecimiento plausibles en las importaciones comerciales, esto podría producir un déficit de 3.000 a 4.000 millones de dólares de alimentos. Además de estos déficit producidos por las tendencias proyectadas en la demanda y la oferta, se precisarían suministros adicionales de alimentos en forma de reservas para hacer frente a contingencias imprevistas causadas por sequías u otros desastres naturales. Finalmente, si se deseara subsanar las deficiencias nutritivas, se requerirían importantes cantidades adicionales de alimentos.

En el informe se considera una amplia gama de posibles medidas para mejorar el problema de los déficit de alimentos. Entre éstas figuran las medidas bilaterales y multilaterales. También se consideran pautas para reducir las tasas de crecimiento de la pobla-

ción así como para elevar la producción de alimentos en los países en desarrollo y se examinan detenidamente el carácter y repercusiones posibles de los programas de ayuda en gran escala en materia de alimentos.

Instituciones y política financieras

El Consejo Económico y Social, en su 41º período de sesiones, consideró una nota sobre el fomento de la corriente internacional de capitales privados en los países en desarrollo, como parte de una serie que comenzó en 1958 en cumplimiento de la resolución 1318 (XIII) de la Asamblea General. La nota trata de manera específica los problemas de la política fiscal y tributaria y pone de relieve el valor de los tratados sobre tributación entre países receptores y países suministradores de capital, como un medio para reducir los obstáculos a las inversiones extranjeras y proteger al mismo tiempo los intereses de los países en desarrollo.

En conformidad con la recomendación contenida en el anexo A.IV.12 del Acta Final del primer período de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo acerca del fomento de las inversiones extranjeras privadas y de la petición contenida en la resolución 2087 (XX) de la Asamblea General sobre la financiación del desarrollo económico, han continuado los trabajos para redactar un informe completo sobre el fomento de las inversiones extranjeras privadas en los países en desarrollo, en el que se presentarán las conclusiones y recomendaciones resultantes de la extensa revisión y análisis realizados acerca de las instituciones y métodos financieros, así como sobre las políticas y medidas económicas, jurídicas y administrativas que puedan servir para encauzar hacia los países en desarrollo la corriente de capitales privados y de métodos tecnológicos y administrativos.

En el segundo período de sesiones de la Comisión del Comercio Invisible y de la Financiación relacionada con el Comercio, celebrado en abril de 1967, se examinó de antemano un texto del resumen y conclusiones del informe que será presentado oportunamente al Consejo Económico y Social en su 43º período de sesiones.

El Consejo tuvo también ante sí en su 41º período de sesiones, el texto del resumen y conclusiones de un informe sobre créditos para exportaciones destinados a la financiación de bienes de capital requeridos por los países en desarrollo. El informe propiamente dicho se publicó en dos volúmenes. El primero, que contiene un análisis general de la materia, apareció a finales de 1966 y el segundo volumen se publicó en marzo de 1967 y contiene estudios por países de unos 19 países exportadores de bienes de capital, algunos de ellos con economía de mercado y otros con economía de planificación centralizada. Este informe fue examinado en el segundo período de sesiones de la Comisión del Comercio Invisible y de la Financiación relacionada con el Comercio de la UNCTAD y será presentado al Consejo Económico y Social y a la Asamblea General, así como también a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en su segundo período de sesiones, a la Junta de Desarrollo Industrial y al Simposio Internacional sobre Desarrollo Industrial.

En el informe se señala que desde el final de la Segunda Guerra Mundial el deseo que han manifestado los países industrializados de fomentar sus exportaciones de bienes de capital, unido a la inadecuada capacidad de los países en desarrollo para importar bienes de capital con que satisfacer las crecientes necesidades de su desarrollo, ha dado lugar a profundos cambios en los métodos por los que se financia el comercio internacional de ese tipo de bienes.

La insuficiencia de los recursos financieros para la adquisición de bienes de capital ha acelerado la transición a sistemas organizados de créditos a plazo medio, acompañado por la ampliación del seguro de los créditos a la exportación haciéndose extensivo a los créditos a plazo medio. Para las ventas de bienes de capital el facilitar créditos a plazo medio y frecuentemente a plazo largo para la exportación se ha convertido en un requisito previo indispensable. Así a mediados del decenio 1950-1960, las instituciones de seguros de créditos para la exportación de los principales países suministradores de bienes de capital, en previsión de una posible competencia desenfrenada en las concesiones de créditos, organizaron, por conducto de la Unión de Seguros de Créditos y Cauciones Internacionales (Berna) un intercambio directo de opiniones sobre las condiciones del seguro de crédito para la exportación y convinieron en que tal seguro no debe exceder de cinco años para el equipo pesado de capital.

A partir de mediados del decenio 1950-1960, en casi todos los países de Europa Occidental los exportadores comenzaron a ejercer presión sobre sus gobiernos para que ampliaran a más de cinco años los seguros de créditos para la exportación. Con esto la situación se apartó del acuerdo de los cinco años de la Unión de Berna y se produjo una prórroga general de los plazos de vencimiento de los créditos a la exportación. En un número de casos cada vez mayor, se concedieron créditos a la exportación que se aseguraron según unas condiciones y para unos fines que tendían a borrar la distinción entre comercio y ayuda.

En el informe se hace resaltar que aun cuando la función normal del crédito a la exportación es servir de instrumento para financiar el comercio internacional, los créditos a plazo medio y a plazo largo para la exportación se han convertido en fuente importante de financiación externa para los proyectos de desarrollo de los países en desarrollo.

Por lo tanto al buscar una solución a los problemas creados por la competencia entre los créditos para la exportación y el exceso de deudas habrá de tenerse en cuenta la necesidad reconocida de que se mantenga e incluso aumente la corriente neta de recursos financieros hacia los países en desarrollo. Los créditos a la exportación podrían desempeñar una función útil en la complicada maquinaria de la financiación del desarrollo, a condición de que el examen de sus corrientes y condiciones formasen parte integrante del estudio total y continuado del nivel general y condiciones de la ayuda al desarrollo.

El Banco Asiático de Desarrollo, establecido bajo los auspicios de la CEPAL, celebró su reunión inaugural en Tokio del 24 al 26 de noviembre de 1966. Asistieron representantes de 32 países y de varias organizaciones internacionales, entre ellas el BIRF y el FMI. Fueron elegidos diez miembros del Consejo de Administración del Banco y se aprobó una propuesta

de aumentar en 100 millones de dólares los 1.000 millones de dólares que forman el capital autorizado del mismo. En diciembre de 1966 el Banco Asiático de Desarrollo comenzó a funcionar en sus oficinas centrales de Manila.

Lo mismo que en años anteriores, la asistencia técnica en materia de política e instituciones financieras abarcó una amplia gama de actividades: investigaciones económicas, financiación del desarrollo, contabilidad bancaria, problemas de crédito, etc. En Arabia Saudita un experto asesoró sobre la organización y administración financieras y en Uganda otro experto ayudó al Gobierno en sus operaciones externas y créditos documentarios. Tanzania recibió servicios de asesoramiento de un experto asignado al Banco Central, y en Paraguay otro experto desempeñó funciones de Director del Departamento de Estudios Económicos en el Banco Central del país. Se envió a Nigeria un asesor sobre seguros y a Guinea un experto en contabilidad bancaria. En Irán, dos expertos de las Naciones Unidas dieron por terminadas sus funciones, mientras que en Malawi otro experto comenzó a prestar sus servicios como Director General de la Corporación de Desarrollo de Malawi.

Se concedieron algunas becas de perfeccionamiento a funcionarios oficiales para que se ocuparan de problemas de la financiación del desarrollo.

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO DE LA CAPITALIZACIÓN

La cuestión relativa al establecimiento de un fondo de las Naciones Unidas para el desarrollo de la capitalización fue examinada en el quinto período de sesiones de la Comisión encargada de estudiar el establecimiento de un fondo de las Naciones Unidas para el desarrollo de la capitalización, que se reunió en Nueva York del 12 al 16 de septiembre de 1966 y aprobó un informe que sería presentado al Consejo Económico y Social en su 41º período de sesiones y a la Asamblea General en su vigésimo primer período de sesiones.

La Comisión, creada en 1960, había celebrado su cuarto período de sesiones en 1964. El quinto período de sesiones fue convocado en respuesta a una solicitud de la Asamblea General en 1965 en la que se encargaba a la Comisión que renovara sus esfuerzos con objeto de llegar a un amplio acuerdo sobre los proyectos de textos legislativos (estatutos) del fondo de las Naciones Unidas para el desarrollo de la capitalización, teniendo también presente la posibilidad de iniciar las actividades mediante la transformación gradual del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La Comisión examinó los siguientes documentos: el proyecto de estatutos de un Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización, aprobado por una mayoría de los miembros de la Comisión en su segundo período de sesiones en 1962; el informe sobre el segundo período de sesiones del Consejo de Administración del PNUD en el que figura un resumen de sus debates acerca de la transformación gradual del PNUD en un fondo para el desarrollo de la capitalización, de conformidad con las sugerencias de la UNCTAD; y el informe del Secretario General sobre las consultas con los Estados Miembros acerca de los recursos adicionales que deben obtenerse con objeto de comenzar las actividades de inversión propuestas.

En el informe final, tal como lo aprobó la Comisión, figuraba un resumen del debate general y las enmiendas, al proyecto de estatutos del Fondo de las Naciones Unidas para el desarrollo de la capitalización propuesto, presentadas por la mayoría de los miembros, quienes consideraron que era necesario poner al día el proyecto, aprobado en el segundo período de sesiones de la Comisión.

En la continuación del 41º período de sesiones en noviembre de 1966, el Consejo Económico y Social examinó el informe de la Comisión encargada de estudiar el establecimiento de un fondo de las Naciones Unidas para el desarrollo de la capitalización. En su 1447a. sesión, de conformidad con una propuesta presentada por el representante de Grecia, el Consejo tomó nota del informe sin aprobar una resolución oficial.

En el vigésimo primer período de sesiones de la Asamblea General, la Segunda Comisión examinó la cuestión del establecimiento de un fondo de las Naciones Unidas para el desarrollo de la capitalización. La gran mayoría de los miembros de la Comisión apoyó la idea de que el fondo se estableciera en conformidad con las decisiones previas de la Asamblea General, pero hubo diferencias de opinión con respecto a los medios que debían emplearse.

Algunos países en desarrollo pugnaron por el establecimiento de un Fondo de las Naciones Unidas para el desarrollo de la capitalización como organización autónoma dentro de las Naciones Unidas. Cuarenta y dos patrocinadores presentaron un proyecto de resolución al respecto.

Otro grupo de países apoyaron la idea de establecer el Fondo, pero estimaron que lo mejor sería transformar el sector del Fondo Especial del PNUD en un fondo para el desarrollo de la capitalización.

También fue presentado un proyecto de resolución según el cual la Asamblea instaría al Consejo de Administración del PNUD a conceder la más alta prioridad al examen de los medios de aplicar la recomendación A.IV.8 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en la que se consideraba la transformación gradual del Fondo Especial en un fondo para el desarrollo de la capitalización.

Algunos países desarrollados se opusieron a que se creara un fondo para el desarrollo de la capitalización y a que se transformara el sector Fondo Especial del PNUD, ya que a su juicio, los organismos internacionales de financiación existentes proporcionaban una vía eficiente para la ayuda multiateral.

En su resolución 2186 (XXI), aprobada el 13 de diciembre de 1966, por 76 votos contra 19 y 14 abstenciones, la Asamblea General decidió "poner en funcionamiento el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización... como órgano de la Asamblea General, que funcionará como organización autónoma dentro de las Naciones Unidas". Dicha resolución incluye disposiciones que regulan el funcionamiento del Fondo, según las cuales el Fondo tendrá por objeto prestar asistencia a los países en desarrollo en la expansión de su economía, completando las fuentes existentes de asistencia en capital mediante la concesión de subsidios y préstamos, especialmente de préstamos a largo plazo, sin interés o a bajo tipo de interés. La asistencia del Fondo será de una clase y forma compatible con los deseos de los países beneficiarios y no entrañará para éstos condiciones que puedan

resultarles inaceptables, ya fueran políticas, económicas, militares o de cualquier otra índole.

Los gastos correspondientes a las actividades administrativas figurarán en el presupuesto ordinario de las Naciones Unidas, mientras que los gastos correspondientes a las actividades operacionales serán sufragados mediante las contribuciones voluntarias aportadas, en dinero o en especie, por los gobiernos de los Estados Miembros. Se invitará a otras fuentes que no sean los gobiernos a que hagan contribuciones voluntarias.

Con respecto a las formas de asistencia, el Fondo para el Desarrollo de la Capitalización concederá subsidios y préstamos; los préstamos se concederán con períodos de amortización largos, tipos de interés bajos, o incluso sin interés, y, por lo general, en condiciones que puedan compararse favorablemente con las de los préstamos de otras instituciones internacionales prestamistas.

El organismo principal del Fondo para el Desarrollo de la Capitalización será una Junta Ejecutiva que estará integrada por los representantes de veinticuatro Estados Miembros de las Naciones Unidas quien tendrá autoridad para la aprobación definitiva de los subsidios y préstamos que le proponga el Director General. Los miembros de la junta Ejecutiva serán elegidos por la Asamblea General por un período de tres años a base de una representación igual de los países económicamente más desarrollados, por una parte, habida cuenta de sus contribuciones al Fondo para el Desarrollo de la Capitalización, y los países en desarrollo, por otra parte, habida cuenta de la necesidad de que entre estos últimos exista una distribución geográfica equitativa. La principal autoridad ejecutiva será el Director General, quien será nombrado por el Secretario General de las Naciones Unidas por un período de cuatro años a partir del 1º de enero de 1968 y cuyo nombramiento estará sujeto a confirmación por la Asamblea General. El Director General se encargará de las operaciones del fondo y ejercerá sus funciones bajo la dirección general de la Junta Ejecutiva.

La primera conferencia sobre promesas de contribuciones en la cual los Estados Miembros anunciarán sus contribuciones al Fondo para el Desarrollo de la Capitalización será convocada por el Secretario General de las Naciones Unidas en el vigésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General en 1967.

4. Planificación y proyecciones para el desarrollo

En su 43º período de sesiones se presentó al Consejo Económico y Social, en forma preliminar, un estudio titulado "Ejecución de planes de desarrollo: problemas y experiencia", que iban a constituir la parte I del Estudio Económico Mundial. 1966. Los cuatro primeros capítulos del estudio trataban de algunos aspectos de la ejecución de planes en los países en desarrollo. Los temas discutidos incluían algunas condiciones para la ejecución eficaz de los planes de desarrollo, el papel del presupuesto fiscal en la ejecución de planes, algunos problemas de la ejecución en el sector privado de la economía y reciente experiencia en la ejecución de planes. Estos capítulos iban seguidos por un examen paralelo de algunos aspectos de la ejecución de planes en los países con economía de planificación centralizada, en el que se trataban temas como las condiciones generales de la ejecución eficaz de los planes, la plani-

ficación financiera y los problemas de la preparación y ejecución de planes de inversión.

Se preparó un cierto número de documentos y notas sobre ejecución de planes, proyecciones de déficit para países en desarrollo, Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y principales actividades de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas relacionadas con la planificación y las proyecciones para el desarrollo, con miras a su presentación en el segundo período de sesiones del Comité de Planificación del Desarrollo. Estos documentos incluían, además de algunos presentados por miembros del Comité, seis estudios preparados por la Secretaría en la Sede, uno por la Secretaría de la CEPAL, y uno por el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social.

En su informe al Consejo, sobre el segundo período de sesiones, el Comité de Planificación del Desarrollo examinó la experiencia adquirida y los problemas afrontados en la ejecución de planes, con particular referencia a América Latina, e hizo una serie de recomendaciones. También hizo varias sugerencias sobre la preparación de directrices y propuestas relativas al próximo decenio para el desarrollo y al programa de futuras actividades en planificación y proyecciones para el desarrollo.

El segundo seminario interregional sobre planificación del desarrollo se celebró en Amsterdam en septiembre de 1966. El tema de discusión del seminario era "Planificación de los recursos internos y externos para las inversiones". El informe sobre el primer seminario interregional de esta serie, celebrado en Ankara, ha sido publicado. Lleva por título *Planning the External Sector: Techniques, Problems and Policies* y contiene un resumen de lo tratado en el seminario y de los principales documentos de consultores que sirvieron de base a las deliberaciones. El primer seminario interregional sobre proyecciones económicas a largo plazo tuvo lugar en Elsinore, Dinamarca, en agosto de 1966, y trató de los aspectos sectoriales y de las proyecciones para la economía mundial. Los seminarios interregionales sobre planificación y proyecciones para el desarrollo están encaminados a servir de foros para un intercambio de información y opiniones entre los planificadores nacionales.

5. El presupuesto como instrumento de programación del desarrollo económico

Durante el año que se examina se publicó un *Manual de Presupuestos por Programas y Actividades* y un manual relativo a la preparación del presupuesto y la planificación económica en los países en desarrollo. Ambas monografías se presentaron también como documentos de trabajo al Cuarto Seminario sobre Problemas de Reclasificación y Administración Presupuestarias, que se celebró en Bangkok del 22 de agosto al 2 de septiembre de 1966 para los países de la CEPAL. También se habían discutido en diversos seminarios regionales y en el primer seminario interregional las versiones anteriores de estas publicaciones. Las versiones definitivas tienen en cuenta las observaciones hechas por los expertos de los países en desarrollo en estas reuniones.

Se hicieron preparativos de fondo para el segundo seminario interregional sobre problemas de política y administración presupuestarias que se celebrará en

Copenhague del 4 al 16 de septiembre de 1967. Este seminario discutirá fundamentalmente problemas de contabilidad pública, la relación que existe entre la preparación del presupuesto y el plan anual y ponderaciones de la eficacia en los gastos públicos. A este propósito, se ha terminado un proyecto de manual sobre contabilidad pública para presentarlo a las reuniones y se han preparado igualmente documentos sobre los otros dos temas.

La labor sobre estadísticas de hacienda pública se ha convertido en una actividad permanente. Con en años anteriores, el *Statistical Yearbook, 1966*, contiene información sobre los principales componentes de los gastos e ingresos gubernamentales, y sobre la deuda pública. El *Yearbook* para 1966 contiene información sobre setenta y un países. Desde la edición de 1958 se han revisado los cuadros de cuarenta y tres países con arreglo a una clasificación económica complementada con categorías funcionales principales de gastos públicos, lo que refleja los progresos realizados por los gobiernos en la reclasificación de las transacciones del sector público.

La asistencia técnica en la esfera del presupuesto refleja el creciente interés de los gobiernos por mejorar la administración presupuestaria y financiera e introducir las técnicas de la programación y realización del presupuesto, y en particular por establecer una coordinación más estrecha entre los planes de desarrollo económico y el presupuesto nacional. A este respecto, se ha reconocido también la necesidad de mejorar fundamentalmente la contabilidad pública. La importancia dada a la preparación y la ejecución del presupuesto se refleja en el número cada vez mayor de las solicitudes de asistencia técnica que para esta esfera se reciben. En América Latina, el Ecuador, Panamá, el Paraguay, el Uruguay y Venezuela recibieron ese tipo de asistencia. Ceilán y el Sudán, entre otros países, recibieron también asistencia. En la esfera de la contabilidad pública, Argelia, Barbados, Burundi, Camboya, Colombia, el Congo (Brazzaville), Etiopía, Guinea, Malta, Nigeria, la República de Viet-Nam y Rwanda recibieron asesoramiento de expertos. En Somalia y en el Sudán, equipos de expertos están prestando una asistencia general para mejorar las prácticas presupuestarias y contables. Se sigue también suministrando ayuda general a la República Democrática del Congo. El asesor interregional en cuestiones de presupuesto y contabilidad visitó Jamaica y el Irak para aconsejar a los Gobiernos sobre el mejoramiento de sus procedimientos presupuestarios y financieros, en particular en sus relaciones con los planes de desarrollo y su ejecución y la conveniencia de modificar los sistemas de contabilidad para que se adaptaran a estas necesidades.

6. Aplicación de la ciencia y la tecnología en beneficio de las regiones menos desarrolladas

El Consejo Económico y Social examinó en su 41º período de sesiones el tercer informe del Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo. El Consejo aprobó la resolución 1155 (XLI), en la cual veía con agrado la propuesta del Comité Asesor a fin de establecer un plan de acción mundial para la aplicación de la ciencia y la tecnología al desarrollo, y suscribía los objetivos del plan. El Consejo instaba a las organizaciones de las Naciones Unidas, a los Gobiernos de los Estados Miembros, a los

grupos científicos y tecnológicos y a otras entidades interesadas a examinar con carácter prioritario el tercer informe del Comité Asesor; invitaba a las organizaciones vinculadas al sistema de las Naciones Unidas a que preparasen, para el 1º de enero de 1968 y a fin de que pudieran ser examinadas por el Comité Asesor, exposiciones detalladas en las que se indicasen la medida en que sus actuales o proyectados programas de actividades estaban encaminados a intensificar y acelerar el logro de los objetivos del plan; invitaba al PNUD, al BIRF y a las instituciones conexas, así como a las instituciones regionales de financiación del desarrollo, a considerar la posibilidad de facilitar más recursos para atender las solicitudes de los países en desarrollo relativas a ayuda para proyectos orientados hacia la aplicación de la ciencia y la tecnología al desarrollo, y recomendaba a los gobiernos que aplicaban programas de ayuda bilateral que prestasen la máxima atención a las necesidades de asistencia de los países en desarrollo en el campo de la ciencia y la tecnología y que proporcionasen tal asistencia en el marco del Plan de Acción Mundial. El Consejo invitaba al Comité Asesor a que redujese aún más la lista de problemas prioritarios para una "ofensiva concertada", y suscribía la opinión del Comité Asesor de que se debía concentrar en las actividades directamente vinculadas con problemas concretos de principal importancia. Pedía asimismo al Comité Asesor que examinase lo antes posible el problema del cómputo de los gastos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas relativos a la aplicación de la ciencia y la tecnología al desarrollo.

Como el primer período trienal del mandato de los miembros del Comité Asesor terminó a fines de 1966, en su 41º período de sesiones el Consejo extendió el nombramiento de los miembros por otro período de tres años, que termina a fines de 1969. En diciembre de 1966 el Sr. Abba Eban, uno de los miembros, dimitió del Comité debido a la carga de trabajo de otras funciones suyas, por lo cual al reanudar su 41º período de sesiones el Consejo, por recomendación del Secretario General, nombró al Sr. Alexander Keynan para sustituir al Sr. Eban durante el resto de su mandato.

El Comité Asesor celebró su sexto período de sesiones en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en Roma, del 17 al 28 de octubre de 1966. En ese período de sesiones el Comité Asesor examinó las actividades de los últimos tres años transcurridos y llegó a la conclusión de que aunque continuaría haciendo estudios generales, se dedicaría también a un estudio en profundidad de determinados temas importantes relacionados con la aplicación de la ciencia y la tecnología al desarrollo, que había ya señalado en sus informes precedentes. El primer problema elegido por el Comité Asesor y examinado en su sexto período de sesiones fue el del suministro y consumo de proteínas comestibles. Otros dos problemas sobre los cuales se iniciaron análisis más detenidos en el sexto período de sesiones fueron los recursos naturales y determinados aspectos de la enseñanza de las ciencias. El Comité se ocupó también de las cuestiones relacionadas con la preparación y el examen de las exposiciones que tenían que preparar las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, de conformidad con la resolución 1155 (XLI) del Consejo Económico y Social. Aprovechando la circunstancia de que el período de sesiones se celebraba en la sede de la FAO, el Comité Asesor examinó y discutió los programas de ese organismo que eran de su interés.

El Comité Asesor decidió que en adelante presentaría al Consejo un breve y concreto informe anual en el que expondría en líneas generales las actividades que había llevado a cabo durante el año, y que prepararía, conforme fuera oportuno, una serie de informes separados sobre temas técnicos para su presentación al Consejo a medida que estuvieran disponibles. En el sexto período de sesiones no se aprobó ningún informe; en cambio, el Comité aprobó un sumario para su propio uso. El Comité decidió además que celebraría su séptimo período de sesiones en Nueva York en el primer semestre de 1967, el octavo en la sede de la UNESCO en el segundo semestre de 1967 y el noveno en el primer semestre de 1968 en un lugar que se decidiría más tarde.

El Comité Asesor celebró su séptimo período de sesiones en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York del 1º al 5 de mayo de 1967. El séptimo período de sesiones se consagró principalmente al examen de dos temas fundamentales: el suministro y consumo de proteínas comestibles y los recursos naturales. Hecho saliente del período de sesiones fue la aprobación unánime por el Comité de un informe general que contenía propuestas específicas para aumentar el suministro y consumo de proteínas comestibles en los países en desarrollo. Este informe, titulado "Alimentos para una población mundial en crecimiento: recomendaciones para una acción internacional encaminada a evitar la inminente crisis de proteínas", es el primero de una serie de informes que se ocuparán de problemas específicos, para cuya solución la comunidad internacional debiera lanzar una ofensiva concertada y que serán presentados al Consejo en su 43º período de sesiones.

Además de estos dos temas el Comité Asesor examinó también diversas cuestiones relacionadas con sus actividades regionales y con otros temas que habrá de examinar ulteriormente, entre ellos el Plan de Acción Mundial, el cómputo de los gastos relativos a la aplicación de la ciencia y la tecnología, la enseñanza de las ciencias, la contaminación, estudios sobre la transmisión de tecnología entre unas empresas y otras, la conservación y mejoramiento de los medios naturales, la colaboración internacional en la esfera de la ciencia y la tecnología y el programa de publicaciones del Comité. El Comité Asesor escuchó también exposiciones sobre las políticas y actividades de la División de Recursos y Transportes de las Naciones Unidas y de la recién fundada Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. En cuanto a sus futuros períodos de sesiones, el Comité confirmó que celebraría su octavo período de sesiones en la sede de la UNESCO, en París, del 13 al 24 de noviembre de 1967 y decidió celebrar dos períodos de sesiones en 1968, uno en la primavera en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, y el otro en otoño, a invitación del OIEA, en la sede de ese organismo en Viena.

Siguiendo la práctica introducida en su sexto período de sesiones, el Comité preparó y aprobó un breve informe, de carácter objetivo, sobre las actuaciones del séptimo período de sesiones.

Los grupos regionales del Comité Asesor para América Latina y África celebraron sus segundas reuniones, respectivamente, en Santiago del 27 de febrero al 1º de marzo de 1967 y en Addis Abeba del 9 al 18 de marzo de 1967. Ambos grupos examinaron los aspectos regionales de los temas fundamentales del programa del séptimo y el octavo períodos de sesiones del Co-

mité Asesor y las actividades regionales de los organismos especializados, y estudiaron las instituciones de investigación y desarrollo en sus regiones, que tendían a caer en desuso y requerían reactivación. Los informes de estos dos grupos regionales fueron examinados por el Comité Asesor en su séptimo período de sesiones.

Durante el período que se examina el Subcomité de Ciencia y Tecnología del Comité Administrativo de Coordinación celebró tres sesiones. Se reunió en Roma durante el sexto período de sesiones del Comité Asesor, y examinó allí los arreglos para la preparación del informe sobre proteínas y de las exposiciones de los organismos especializados y del OIEA previstas en la resolución 1155 (XLI) del Consejo Económico y Social, y el alcance y metodología del examen sobre el cómputo de los gastos de las Naciones Unidas en ciencia y tecnología. La segunda sesión se celebró en Ginebra los días 18 y 19 de enero de 1967 y se consagró principalmente a un examen más detallado de las cuestiones relativas a la preparación de las declaraciones de los organismos previstas en la resolución 1155 (XLI). La tercera se celebró el 26 de abril de 1967 inmediatamente antes de la apertura del séptimo período de sesiones del Comité Asesor. El programa para esta reunión comprendía el cómputo de los gastos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para la aplicación de la ciencia y la tecnología al desarrollo, los recursos naturales y el informe del Cuadro Especial de Expertos en Proteínas.

El cuarto informe del Comité Asesor, referente a sus actividades durante el segundo semestre de 1966, fue examinado por el Consejo Económico y Social en su 42º período de sesiones.

7. Patentes y transmisión de la tecnología

La experiencia actual de los países en desarrollo respecto a la eficacia y costo de las técnicas avanzadas patentadas y no patentadas que han adquirido está siendo examinada en una serie de estudios monográficos seleccionados por países y por industrias, de conformidad con la resolución 2091 (XX) de la Asamblea General y con una solicitud del Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo. En el séptimo período de sesiones del Comité Asesor y en el 42º período de sesiones del Consejo Económico y Social se presentó un informe sobre la marcha de las actividades en relación con los arreglos para la transmisión de tecnología práctica a los países en desarrollo, describiendo las condiciones y planes para la ejecución de los estudios por casos.

Los estudios experimentales por casos tienen por objeto examinar en detalle la naturaleza, las operaciones, los costos y los efectos de los arreglos directos para el traspaso de información técnica y administrativa entre empresas (públicas o privadas) en los países desarrollados y en desarrollo. Los estudios son emprendidos por la Subdirección Fiscal y Financiera del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales en colaboración con el Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas. Sobre la base de un estudio preliminar y de un cierto número de misiones sobre el terreno, se han formulado planes para la realización de los estudios por casos en dos países, el Brasil y México, en colaboración con el Programa Conjunto de Integración del Desarrollo Industrial en la

América Latina, el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social y el Banco Interamericano de Desarrollo.

El 26 de mayo de 1967 el Consejo Económico y Social aprobó por unanimidad su resolución 1201 (XLII), en la que se pedía al Secretario General que acelerara los estudios por país de los arreglos para la transmisión de tecnología a los países en desarrollo y que reforzara las actividades conexas de asistencia técnica.

El costo efectivo de la tecnología extranjera y las medidas para reducirlo han despertado particular interés en los países en desarrollo. El Secretario General ha distribuido a los gobiernos y organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales interesadas un cuestionario sobre este tema. Las contestaciones a ese cuestionario ayudarán al Secretario General a estudiar los posibles medios de reducir el costo de la adquisición y aplicación de la tecnología extranjera.

En la esfera de la legislación y administración de la propiedad industrial, se han empezado dos proyectos basándose en el informe del Secretario General sobre la función de las patentes en la transmisión de la tecnología a los países en desarrollo y de conformidad con la resolución 2091 (XX) de la Asamblea General: uno, para la fundación de centros de cooperación regional de patentes; el otro, para un instituto central de capacitación en administración de la propiedad industrial. El primer proyecto está destinado a permitir que los gobiernos de los países en desarrollo de la misma región puedan agrupar sus recursos para el examen de las solicitudes de patente. El instituto de capacitación proporcionará facilidades concretas de formación para funcionarios estatales que se ocupan de administración de la propiedad industrial.

8. Consecuencias económicas y sociales del desarme

En su 41º período de sesiones el Consejo Económico y Social, por su resolución 1154 (XLI) sobre documentación, suscribió las propuestas del Secretario General en el sentido de que los informes relativos a las consecuencias económicas y sociales del desarme se presentaran al Consejo en lo futuro en forma bienal, a menos que las circunstancias exigieran la presentación de informes adicionales. El 6 de diciembre de 1966, por su resolución 2171 (XXI), la Asamblea General tomó nota con aprobación de esta decisión.

9. Preparación y suministro de información estadística básica

En su 14º período de sesiones, celebrado en Ginebra del 10 al 20 de octubre de 1966, la Comisión de Estadística se ocupó de tres asuntos: los programas de censos mundiales de población y de habitación de 1970, la coordinación de las actividades relativas a estadística y las cuentas y balances nacionales.

La Comisión aprobó recomendaciones finales para los censos de población y de habitación de 1970, subrayando la importante contribución que aportarían para mejorar la reunión, cotejo, análisis y difusión de los datos estadísticos que se requieren para poder medir los progresos realizados hacia los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En su 42º período de sesiones, el Consejo Económico y

Social aprobó la resolución 1215 (XLII) relativa a la aplicación de estas recomendaciones.

La Comisión aprobó una propuesta encaminada a crear un comité coordinador de actividades estadísticas que pusiera en relación a los jefes de los servicios de estadística de las diversas organizaciones internacionales. En su resolución 1214 (XLIII), el Consejo tomó nota de esta propuesta y pidió al Secretario General que preparase un informe para la Comisión.

La Comisión examinó una propuesta relativa a la ampliación y revisión del Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas. En las oficinas de estadística de los países, y en reuniones regionales se hará un estudio de la propuesta, que incluirá capítulos complementarios sobre cuentas nacionales a precios constantes y un análisis del insumo-producto.

En su 13º período de sesiones, celebrado en 1965, la Comisión consideró imprescindible una revisión completa de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU) en vista de las modificaciones ocurridas en la estructura de las economías nacionales y de las importantes novedades habidas en los trabajos estadísticos — tanto en el plano nacional como internacional — desde que se publicara en 1958 la primera revisión de la CIIU. En consecuencia, en 1966 se comenzó una segunda revisión.

Durante el período 1961-1967 han funcionado en África centros de formación en estadística a largo plazo — tanto de carácter nacional como internacional — con la ayuda de las Naciones Unidas. Estos centros están establecidos en el Camerún, la Costa de Marfil, Etiopía, Ghana, Marruecos y la República Unida de Tanzania. Además de la formación profesional que se proporciona en estos centros de formación a largo plazo, se llevaron a cabo las siguientes actividades de formación a corto plazo: un seminario sobre estadísticas y programas de viviendas para África, celebrado en Copenhague del 1º al 16 de septiembre de 1966, un seminario sobre censos de encuestas por el método de la muestra sobre el sector de la distribución, celebrado en Bangkok del 19 al 30 de septiembre de 1966, un seminario latinoamericano sobre estadísticas industriales, celebrado en Quito del 7 al 16 de septiembre de 1966 con el patrocinio del Instituto Interamericano de Estadística, y un seminario de estadísticas industriales en Asia que comenzó en Bangkok el 12 de junio de 1967.

Los dos primeros asesores interregionales en estadística ocuparon sus puestos en febrero de 1967; uno es asesor en estadísticas demográficas y sociales y el otro en métodos de computadoras.

La Secretaría continuó reuniendo y publicando estadísticas sobre las principales características económicas y sociales del mundo en general, de las regiones y de países. Además de las publicaciones periódicas ordinarias — *Statistical Yearbook*, *Demographic Yearbook*, *Yearbook of National Accounts Statistics*, *Yearbook of International Trade Statistics*, *World Trade Annual and Supplement*, *World Energy Supplies*, *Commodity Trade Statistics*, *Population and Vital Statistics Report*, *Monthly Bulletin of Statistics* —, durante el año aparecieron las publicaciones siguientes: Encuestas a base de muestras de interés actual; *Statistical Notes*; *World Weights and Measures (Handbook for Statisticians)*; Principios y recomendaciones rela-

tivos a los censos de población de 1970; Principios y recomendaciones relativos a los censos de habitación de 1970; *Methods of Estimating Housing Needs*; *Growth of World Industry, 1953-1965*. El último, que es una adición revisada y puesta al día de la publicación *The Growth of World Industry, 1938-1961: National Tables*, presenta una amplia compilación de los resultados del 1963 *World Programme of Basic Industrial Statistics*. Participaron en el programa más de noventa países, la mayoría de los cuales están representados en la nueva publicación. Una sección especial proporciona una compilación de estadísticas de producción de productos básicos que abarca a veintisiete países industrializados, y una selección de unos 200 productos industriales básicos.

B. Preparación y utilización de recursos humanos

Por su resolución 1090 A (XXXIX), el Consejo Económico y Social pidió un informe sobre las medidas encaminadas a intensificar una acción concertada por parte de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en materia de formación de personal nacional para el desarrollo económico y social de los países en desarrollo. La labor preparatoria para el informe se confió a un Grupo de Trabajo integrado por representantes de las secretarías de todas las organizaciones interesadas del sistema de las Naciones Unidas. El proyecto de informe fue examinado por el Subcomité de Educación y Capacitación del Comité Administrativo de Coordinación y presentado al CAC en su período de sesiones de abril.

Se convino en que uno de los objetivos principales del informe consistiría en reseñar brevemente los esfuerzos realizados por las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en las diferentes esferas relativas al desarrollo y utilización de los recursos humanos; comparar esos esfuerzos con las necesidades; señalar la conciencia cada vez más clara que tienen los países de la necesidad de una acción planificada y coordinada con objeto de lograr que se movilicen y se encaucen eficazmente los recursos disponibles; y poner de manifiesto cómo puede contribuir la acción concertada de los organismos internacionales a las modalidades nacionales de acción coordinada.

El informe, que se presenta al Consejo en su 43º período de sesiones, trata de los problemas concretos con que tropiezan los países en desarrollo, de los esfuerzos de los organismos competentes para enfrentarse con esos problemas, de las dificultades que se encuentran, y de la dirección propuesta para la intensificación de la acción concertada en el plano internacional. Se presta atención especial a cuestiones tales como la necesidad de formación profesional en los distintos niveles, el "éxodo intelectual", y los métodos y posibilidades de evaluación y planificación de la mano de obra, especialmente frente a una información estadística inadecuada. Se actuó en estrecha colaboración con las comisiones económicas regionales y con la Oficina de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas en Beirut en la preparación de propuestas de acción internacional intensificada.

1. Reforma agraria

El acontecimiento más importante del año pasado en esta materia fue la Conferencia Mundial sobre Refor-

ma Agraria, que convocaron conjuntamente las Naciones Unidas y la FAO, con la colaboración de la OIT, y que se celebró en la Sede de la FAO en Roma del 20 de junio al 2 de julio. Tres grupos de trabajo discutieron los problemas de tenencia de la tierra y reformas estructurales, los aspectos sociales y económicos de la reforma agraria, y los aspectos administrativos financieros y de formación profesional de la reforma agraria. La atención se concentró más en el intercambio de experiencias que en llegar a conclusiones formales y hacer recomendaciones. La Conferencia confirmó la opinión de que las fallas de la estructura agraria constituían graves obstáculos para el progreso económico y social y que era indispensable una reforma agraria amplia para lograr un desarrollo adecuado. También se subrayó la necesidad de proporcionar una infraestructura y seguros sociales adecuados para que los beneficiarios de los programas de redistribución de las tierras pudieran obtener verdaderas ventajas del cambio de su condición respecto a la tenencia de tierras. La Conferencia reconoció la importante función de las cooperativas como medio de asegurar el éxito de los programas de reforma agraria, y la necesidad de que hubiese una amplia participación popular en la planificación y la ejecución de tales programas, así como la función del desarrollo de la comunidad en la reforma agraria. Se prestó especial atención a la planificación de la reforma agraria y a la evaluación de las medidas de reforma.

La Conferencia aprobó por unanimidad una resolución en la que pedía una mayor acción internacional, inclusive la organización de seminarios y cursos prácticos regionales, la asistencia directa a los gobiernos que la solicitaran, y un programa intensificado de investigación y publicaciones.

Expertos enviados al terreno han continuado presutando asesoramiento sobre asentamiento en tierras y cuestiones conexas, y en junio de 1966 se publicó un estudio sobre los métodos de desarrollo de la comunidad en la colonización agraria.

2. Desarrollo regional y de la comunidad

Después de la publicación del Informe sobre la Situación Social en el Mundo, 1965, en el que se hace hincapié en la participación popular en la planificación y la ejecución del desarrollo, tanto la investigación como las actividades de ejecución del desarrollo regional y de la comunidad han continuado concentrándose en la participación popular en el desarrollo mediante la creación de instituciones y la planificación en el plano local, y en ejecución real de los planes. Se están llevando a cabo estudios sobre los problemas y procedimientos de creación de instituciones para el desarrollo local y de participación local en la planificación. Los expertos en asistencia técnica, en particular en los países de Asia y de Africa, reciben un número creciente de solicitudes de asesoramiento sobre el fortalecimiento del gobierno local, y las Naciones Unidas participaron en un seminario nacional sobre desarrollo de la comunidad y gobierno local celebrado en el Camerún Occidental en diciembre de 1966. En otros países, por ejemplo Perú y Venezuela, la población interviene cada vez más, en el plano local, en la ejecución de los planes nacionales.

Otra tendencia que se manifestó el año pasado fue el creciente interés en el desarrollo regional, en el con-

texto de regiones dentro de los países más bien que de regiones abarcadoras de varios países. Muchos gobiernos adoptan el desarrollo regional como política nacional y como complemento de la planificación nacional. En conformidad con la solicitud de la Comisión de Asuntos Sociales y del Consejo Económico y Social, grupos visitadores constituidos por expertos nombrados por las Naciones Unidas han iniciado consultas con diferentes autoridades nacionales en lo relativo a proyectos regionales que los gobiernos interesados habían sugerido para su inclusión en el nuevo proyecto de investigación y de formación en desarrollo regional iniciado en virtud de las resoluciones 1086 C (XXXIX) y 1141 (XLI) del Consejo. Los grupos celebraron consultas con los organismos especializados, y las comisiones económicas regionales intervinieron en forma directa y enviaron miembros a los grupos de expertos.

Cada vez se reconoce más ampliamente la necesidad de personal capacitado en técnicas y principios del desarrollo de la comunidad, y muchos de los expertos de países reciben solicitudes concretas de asesoramiento sobre formación, del mismo modo que las reciben los expertos asignados al Centro de Educación Fundamental de los Estados Arabes, en la República Árabe Unida, y al Centro Regional de Educación Fundamental para América Latina, en México. El Centro Nacional de Investigación Aplicada y Capacitación en Materia de Desarrollo de la Comunidad, establecido en Venezuela con la asistencia del PNUD (Fondo Especial), funciona normalmente.

En noviembre de 1966 se llevó a cabo en Bangkok un curso de formación profesional para instructores en desarrollo de la comunidad, organizado conjuntamente por la CEPAL y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas.

El UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos continúan prestando asistencia a proyectos relacionados con el desarrollo de la comunidad.

3. Aspectos sociales de la industrialización y de la urbanización

Las Naciones Unidas, en sus actividades referentes a la urbanización y problemas inherentes, han reconocido que las soluciones que en esta esfera se intentan esporádicamente o partiendo de un punto de vista parcial o sectorial suelen ser inadecuados. Lo que se requiere es un enfoque donde se combinen la planificación demográfica, de la vivienda y del medio físico y los elementos económicos y sociales. Además, hay que buscar las soluciones no sólo en la planificación urbana, sino también en la política y la planificación del desarrollo nacional y regional.

Durante 1965 y 1966, se organizaron varias reuniones regionales e interregionales, en colaboración con los organismos especializados y las comisiones económicas regionales, para ocuparse de temas que tienen cabida dentro de la amplia esfera de problemas sociales relacionados con la urbanización y la industrialización. El Comité de Vivienda, Construcción y Planificación incluyó en el programa de trabajo de su tercer período de sesiones la preparación de estudios monográficos acerca de las políticas de descentralización, como medio para resolver los problemas sociales, económicos y físicos de la urbanización y establecer normas para el reasentamiento de ocupantes sin título. Un seminario sobre planificación del desarrollo urbano y regional

comprendido de zonas metropolitanas, ciudades nuevas y políticas agrarias, celebrado en Nagoya (Japón) en octubre de 1966 fue organizado conjuntamente por el Centro de Vivienda, Construcción y Planificación y por la CEPALO. En un documento de antecedentes preparado por el Centro, titulado *"Selected Conclusions and Recommendations on Regional and Metropolitan Planning, New Towns and Land Policy"*, se resumían los puntos principales de anteriores reuniones de las Naciones Unidas sobre el asunto de la urbanización. En Pittsburgh se celebró del 24 de octubre al 4 de noviembre de 1966 un Seminario sobre política y planificación del desarrollo en relación con la urbanización, organizado por las Naciones Unidas en colaboración con el Gobierno de los Estados Unidos de América. En su 18º período de sesiones la Comisión tuvo ante sí un informe sobre los puntos más destacados, recomendaciones y conclusiones de este seminario que, según sugirió, podría ser conveniente enviar al Simposio Internacional sobre Desarrollo Industrial programado para diciembre de 1967. La cuestión general de la política industrial, que se examinará en este Simposio, incluirá la infraestructura social para el desarrollo industrial.

En su 19º período de sesiones, la Comisión recibirá un programa de trabajo sobre los aspectos sociales de la industrialización, que se prepara en colaboración con la ONUDI y con los organismos especializados y cuyo propósito es ayudar a los gobiernos a encarar los fenómenos sociales inherentes a la industrialización con miras a facilitar el proceso y a evitar sus efectos indeseables.

4. Servicios de bienestar social

Siguiendo la recomendación de la Comisión de Asuntos Sociales, el Consejo Económico y Social aprobó en su 41º período de sesiones la resolución 1140 (XLI) sobre un proyecto de conferencia de ministros encargados de los servicios de bienestar social. El Consejo tomó nota de la respuesta positiva de los gobiernos a las consultas dirigidas por el Secretario General, de conformidad con la resolución 1086 F (XXXIX) del Consejo, sobre la conveniencia de la propuesta. En consecuencia, el Consejo pedía al Secretario General que llevara adelante los planes para convocar la conferencia en 1968, con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 5 de la resolución 2116 (XX) de la Asamblea General. Decidía que la conferencia se dedicara a un examen del papel de los programas de protección social en el desarrollo nacional; que se invitara a los gobiernos de los Estados Miembros de las Naciones Unidas o miembros de los organismos especializados y del OIEA a que se hicieran representar por el ministro u otro funcionario responsable de los servicios de bienestar social, acompañado, de ser posible, por consejeros de categoría superior; que se invitara a los organismos especializados interesados, al UNICEF, al Programa Mundial de Alimentos y a las comisiones económicas regionales, a participar en la conferencia, y a las principales organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades de carácter consultivo por el Consejo y que desarrollaban actividades en materia de protección social, a que enviaran observadores. El Consejo autorizaba además al Secretario General a establecer una comisión preparatoria, en cuyos trabajos debía invitarse a participar a los correspondientes organismos especializados interesados.

En su 18º período de sesiones, celebrado en 1967, la Comisión de Desarrollo Social examinó los progresos

alcanzados en la aplicación de la Declaración de los Derechos del Niño basándose en un informe preparado por el Secretario General. La Comisión celebró la expansión de las actividades de las Naciones Unidas relacionadas con la juventud y el desarrollo nacional y apoyó las propuestas del Secretario General de seguir intensificando el programa de trabajo en ese sector en estrecha cooperación con los organismos especializados pertinentes.

Al considerar su programa de trabajo para el período 1966-1970, la Comisión aprobó las propuestas del Secretario General de que en los programas de bienestar social para familias, comunidades y grupos especiales debía hacerse hincapié en la planificación y administración del bienestar social, inclusive un examen comparativo de las normas de organización y administración de bienestar social, basado en un estudio por países y realizado por una reunión interregional de expertos que ha de convocarse en agosto de 1967; en las actividades relacionadas con el bienestar de la familia, de la juventud y del niño, incluido el examen de los aspectos relativos al bienestar en los programas de acción en materia de población; y en la formación del personal de asistencia social, incluido un estudio sobre los nuevos criterios y experimentos en la formación de dicho personal en todos los niveles y la preparación del quinto estudio internacional sobre formación para el servicio social que ha de concluir en 1969. Se esperaba que continuase la expansión del trabajo sustantivo en relación con las actividades operacionales, especialmente en colaboración con el UNICEF.

Se ha ampliado la asistencia a los gobiernos en forma de expertos, becas, seminarios y grupos de expertos. La División de Asuntos Sociales de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra organizó, dentro del Programa Europeo de Desarrollo Social, cuatro reuniones sobre el bienestar social. Estas reuniones incluyeron dos seminarios sobre las funciones y la formación de trabajadores sociales voluntarios, celebrados en la República Federal de Alemania en 1965 y en el Reino Unido en 1967, un seminario sobre la planificación y administración de los programas de bienestar social a nivel local, celebrado en Noruega en 1966, y un grupo de trabajo sobre familias desposeídas socialmente, celebrado en los Países Bajos en 1967. En 1966 la CEPALO organizó en Tailandia un curso de formación para educadores y supervisores de trabajo social.

El Consejo Económico y Social, en su resolución 1086 J (XXXIX), señaló las necesidades de los jóvenes y su papel en el desarrollo nacional e hizo un llamamiento a las Naciones Unidas y a los organismos especializados para que proporcionasen asesoramiento y asistencia a los gobiernos en sus esfuerzos para satisfacer esas necesidades y permitir que los jóvenes participen plenamente en el proceso de desarrollo. Al adoptar esta resolución, por recomendación de la Comisión de Asuntos Sociales, el Consejo inició en efecto un nuevo programa que exige una estrecha colaboración entre organismos. Como resultado de las consultas dentro del marco del CAC, se acordó emprender una acción concertada con la OIT, la FAO, la UNESCO y la OMS, bajo la dirección general de las Naciones Unidas.

Las actividades se concentraron en ciertos aspectos concretos de la gama de problemas que se plantean a los gobiernos en relación con la juventud. De acuerdo

con la resolución del Consejo, se prestó particular atención a la acción que ayudaría a proporcionar a los jóvenes oportunidades de conseguir empleo y ser útiles a la comunidad, y a prepararles para que hagan uso de tales oportunidades.

Como primera medida, se designó un asesor interregional en políticas y programas para la juventud encargado de asistir a los gobiernos en la organización de planes nacionales y proyectos concretos relacionados con los jóvenes. Durante el período inicial del programa, el asesor se concentró en la realización de misiones consultivas sobre determinación de hechos y a corto plazo en países de Asia, Oriente Medio, África y América Latina. El trabajo se realizó en estrecha colaboración con los organismos especializados. En el plano regional, se ha mantenido estrecha colaboración con las comisiones económicas regionales, especialmente con la CEPAL, las cuales pusieron a disposición de los gobiernos los servicios de un asesor en asuntos relacionados con la juventud. Se celebraron conferencias regionales sobre la infancia y la juventud en la planificación y el desarrollo nacional en Santiago, en 1965, y en Bangkok, en 1966, y una reunión especial sobre el mismo tema de Addis Abeba, en 1966, patrocinadas conjuntamente por el UNICEF y las comisiones económicas regionales interesadas, en cooperación con los organismos especializados.

Durante 1966 se asignaron cuarenta y dos asesores en servicio social a 30 países y se otorgaron cuarenta becas de estudios a nacionales de veintiséis Estados Miembros. Se proporcionaron a los gobiernos de doce países asesores en planificación, organización y administración de servicios de bienestar social; se asignaron a doce países asesores en protección de la familia, de la juventud y de la infancia, y se facilitaron a quince países los servicios de asesores en capacitación para el servicio social.

En materia de rehabilitación de inválidos, se prestó asistencia a los gobiernos en forma de expertos, becas y otras actividades de formación. De consuno con el Gobierno de Dinamarca, se celebró un seminario internacional sobre programas y administración de los principales servicios de rehabilitación en los países en desarrollo. Asistieron treinta y tres participantes de veintiséis países. Se suministraron a los gobiernos de trece países asesores en planificación y organización de programas de rehabilitación, así como en ciertas especialidades concernientes a la rehabilitación de inválidos. Se otorgaron becas de estudios sobre la mayoría de los aspectos de la rehabilitación a nacionales de muchos países.

Dentro del marco del CAC se celebró en Ginebra una Reunión *ad hoc* entre organismos sobre rehabilitación de los impedidos, a fin de estudiar el progreso que han alcanzado los organismos en este sector y planear futuras actividades.

Se publicaron monografías y estudios sobre diferentes aspectos de la rehabilitación para ser distribuidos en cinco idiomas.

5. Defensa social

La política y el programa de las Naciones Unidas en materia de defensa social experimentaron una importante reorientación como consecuencia de haberse adoptado la resolución 1139 (XLI) del Consejo Económico y Social en la cual éste reafirmaba los princi-

pios y objetivos de las actividades de las Naciones Unidas en materia de desarrollo social y pedía los ajustes apropiados. La nueva orientación había sido prevista en la resolución 1086 B (XXXIX) del Consejo que establecía que la prevención y limitación de la delincuencia de menores y de adultos habían de llevarse a cabo como parte integrante de programas generales de desarrollo económico y social; los ajustes exigidos formaban parte, por consiguiente, de una línea continua de acción.

El Comité Asesor de Expertos en Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente se reunió en la Sede del 12 al 16 de diciembre de 1966 para establecer la tónica del programa de trabajo de defensa social y formular los proyectos; el principio rector del Comité fue que el programa de trabajo debería sobrepasar el estrecho sector de la defensa social tradicional y coadyuvar al desarrollo nacional. Aunque la prevención del delito y de la delincuencia mediante la reducción de reincidencias, así como la prevención primaria, siguen siendo importantes actividades de defensa social, la preocupación de las Naciones Unidas debiera ir más allá de su interés ya establecido por el desarrollo de programas especializados de tratamiento de delincuentes menores y adultos, la estructura y contenido de los programas de formación de personal de defensa social, la investigación o estudios de carácter etiológico y materias semejantes. Las nuevas actividades de las Naciones Unidas debieran servir de estímulo a los esfuerzos nacionales por idear métodos y estrategias de prevención y represión de la delincuencia; estos métodos y estrategias tendrían presente los cambios que los esfuerzos encaminados al desarrollo nacional acarrearán inevitablemente a un país y procurarían reducir al mínimo cualquier efecto criminógeno que pudieran tener.

El programa de trabajo propuesto por el Comité Asesor partió de la tesis que la política de defensa social debiera estar integrada en la política nacional del desarrollo. Este programa de trabajo, según fue aprobado por la Comisión de Desarrollo Social en su 18º período de sesiones en marzo de 1967, incluye estudios de políticas de defensa social en relación con la planificación del desarrollo, la evaluación de las necesidades de mano de obra, los aspectos económicos de la capacitación de personal de defensa social, y la participación del público en la prevención y represión de la delincuencia; el programa también prevé la expansión de las actividades operacionales de las Naciones Unidas, especialmente de los servicios consultivos, y la creación de institutos regionales de defensa social del tipo establecido por Asia y el Lejano Oriente en colaboración con el Gobierno del Japón.

Para prestar apoyo a este programa reforzado, el Secretario General hará uso de los recursos del fondo fiduciario para defensa social establecido en virtud de la resolución 1086 B (XXXIX) del Consejo. El fondo fiduciario es administrado desde la Sede y sus recursos se consideran suficientes para que el Secretario General comience las actividades previstas por el Comité Asesor a fines de junio de 1967. Una de estas actividades es el establecimiento de un instituto de investigaciones de defensa social en Roma. Entre otras actividades figuran la asistencia técnica al Instituto de Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente para Asia y el Lejano Oriente, el reactivar los planes para establecer un instituto análogo para América Latina, la asistencia a los respectivos institutos nacionales de

defensa social capaces de servir a las necesidades de los países de la región, y el nombramiento de un asesor interregional de defensa social.

El Instituto de Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente para Asia y el Lejano Oriente continuó su programa de formación e investigación. Sesenta y seis becarios muchos de los cuales desempeñan cargos directivos en países asiáticos, asistieron a los cursos que se celebraron entre junio de 1966 y junio de 1967. El Instituto concluyó también, entre sus trabajos de investigación, la revisión del estudio sobre la delincuencia juvenil en Asia y el Lejano Oriente.

En virtud de la resolución 1918 (XVIII) de la Asamblea General, la Secretaría tiene un mandato especial de preparar un estudio sobre la evolución de la situación con respecto a las leyes y los usos relacionados con la pena capital y sobre las nuevas aportaciones de la criminología en la materia. El estudio, que se basa principalmente en las respuestas de los gobiernos a un cuestionario, fue preparado por un consultor especial en colaboración con la Secretaría, y está en prensa.

Otros informes publicados por las Naciones Unidas en materia de defensa social son los cinco estudios nacionales por casos que se encargaron a cinco países; Bélgica, la India, la República Árabe Unida, Yugoslavia y Zambia. Esos estudios se encargaron de conformidad con una instrucción de la Comisión de Asuntos Sociales en su 13º período de sesiones donde se pedía a la Secretaría que realizara una serie de estudios monográficos en determinados países para medir los aumentos reales registrados en la delincuencia de menores y el grado en que tales aumentos son atribuibles a causas económicas, sociales, psicológicas, o a una combinación de éstos.

Además, la versión revisada del estudio comparado sobre la delincuencia infantil en el Oriente Medio fue publicado en inglés y en francés. El número de 1966 de la *Revista Internacional de Política Criminal* estuvo dedicado a los aspectos económicos de la formación en defensa social.

El número de corresponsales nacionales de la Secretaría en materia de defensa social ha aumentado a 163, que representan 63 países.

6. Examen de las actividades de cooperación técnica en materia de desarrollo social

Al reevaluarse el papel de la Comisión de Asuntos Sociales, se atribuyó particular importancia a las actividades de cooperación técnica internacional en materia de desarrollo social; de hecho, el Consejo Económico y Social enunció, en su resolución 1139 (XLI), ciertos principios relativos a los programas operacionales y a la labor de la Comisión de Desarrollo Social en relación con dichas actividades. En vista de la preocupación de la Comisión por que las actividades operacionales desempeñen un papel más importante en los esfuerzos de las Naciones Unidas por el desarrollo social, se presentó a la Comisión en su 18º período de sesiones un informe en el que se examinaban algunos de los principales problemas que afectan las actividades de cooperación técnica en esta esfera.

Después de discutirse extensamente estas cuestiones, la Comisión de Desarrollo Social recomendó un proyecto de resolución para su aprobación por el Consejo en el cual se proponía el examen de las actividades de

cooperación técnica en materia de desarrollo social. Con este fin, la Comisión propuso que el Secretario General nombrase a cinco relatores especiales quienes harían "un examen y una evaluación de los distintos programas y métodos empleados por las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para la prestación de asistencia técnica en la esfera social y a los países en desarrollo". Estos relatores serían elegidos entre los Estados miembros de la Comisión de Desarrollo Social, atendiendo a su capacidad personal, y sobre la base de la distribución geográfica equitativa establecida en el párrafo 1 de la resolución 1147 (XLI). Tras consultas con gobiernos de Estados Miembros, el PNUD, la ONUDI, el UNICEF, los organismos especializados interesados y las comisiones económicas regionales, los relatores especiales formularían las recomendaciones encaminadas a intensificar el efecto en el desarrollo social de los programas de cooperación técnica del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas, a más tardar en el 20º período de sesiones de la Comisión de Desarrollo Social. El Consejo adoptó el proyecto de resolución como resolución 1227 (XLII).

C. Aprovechamiento y utilización de los recursos naturales

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN TÉCNICA

En virtud del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización siguió actuando como organismo de ejecución para un número grande, y cada vez mayor, de proyectos del Fondo Especial relacionados con encuestas sobre recursos minerales, aguas subterráneas y energía, estudios sobre el desarrollo de cuencas fluviales e instituciones técnicas y de investigaciones en la esfera de los recursos naturales. De los 66 proyectos mencionados en el informe del año pasado, 13 se han completado o están por completarse. En junio de 1966 se asignaron a las Naciones Unidas 10 proyectos nuevos y en enero de 1967, otros cinco. Además, se suministraron los servicios de 137 expertos y se concedieron 71 becas en virtud de los programas de asistencia técnica.

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

Aunque estas actividades operacionales constituyeron la mayor parte de la labor de la División de Recursos y Transportes en las esferas de recursos no agrícolas, también se realizó considerable trabajo no operacional.

La División siguió estudiando los progresos relativos a la desalación del agua y las nuevas fuentes de energía y sus aplicaciones prácticas, particularmente con respecto a los países en desarrollo. Del 7 al 18 de noviembre de 1966 se reunió en la Sede de las Naciones Unidas un grupo de expertos para examinar la relación entre el tamaño óptimo y el factor de carga de las plantas de desalación, por una parte, y la capacidad y el costo de los servicios de almacenamiento exigidos, por la otra. Más adelante se publicará un estudio con las conclusiones del grupo. En noviembre de 1966 se distribuyó un cuestionario sobre el funcionamiento de las instalaciones de desalación en diferentes partes del mundo. Se está preparando un informe basado en la evaluación de los datos sacados de las respuestas. Un informe sobre la situación en la esfera de la desalación del agua fue presentado al Consejo Económico y Social en su

42º período de sesiones. También se preparó un informe sobre la marcha de los trabajos acerca de las nuevas fuentes de energía, que deberá ser presentado al Consejo.

Un grupo de expertos en mineral de hierro se reunió en la Sede de las Naciones Unidas del 5 al 9 de diciembre de 1966. Se pidió a los expertos que realizaran un estudio de los recursos mundiales de mineral de hierro, que se está haciendo actualmente. En la segunda mitad de 1967 se espera convocar un segundo y último período de sesiones del grupo en Ginebra con el propósito de completar el estudio.

En abril de 1967 se publicó un estudio sobre la generación de energía en pequeña escala, en el cual se hace un examen general de los métodos y costos de la generación de energía, insistiendo en particular en centrales pequeñas para los primeros trabajos de electrificación en los países en desarrollo.

En cooperación con el Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo, se prepararon para uso del Comité en su sexto período de sesiones, dos documentos: uno sobre concentración de minerales en regiones con escasez de agua y otro sobre materiales de construcción y producción de energía a partir de la cáscara de arroz, y 16 documentos breves sobre políticas y actividades seleccionadas de la División, para que los examinase el Comité en su séptimo período de sesiones.

Seminario interregional sobre utilización integrada de los recursos hidráulicos

Del 1º al 21 de agosto de 1966 se celebró un Seminario sobre utilización integrada de los recursos hidráulicos, bajo los auspicios conjuntos de las Naciones Unidas y del Gobierno de la Unión Soviética. Asistieron a este seminario 36 participantes de 35 países para examinar las técnicas y los conceptos modernos aplicables a la utilización de los recursos hidráulicos de los países en desarrollo. Las sesiones oficiales se celebraron en Fergana, República Socialista Soviética de Uzbekia, entre el 1º y el 9 de agosto, después de lo cual se realizó un viaje de estudio para visitar las instalaciones hidrotécnicas en el valle de Fergana, cerca del río Kura, Azerbaijan, y en la región de Volgogrado.

Programa quinquenal de estudio para el desarrollo de los recursos naturales

El Consejo examinó, en su 41º período de sesiones, un informe del Secretario General sobre los resultados de sus consultas en aplicación de la resolución 1113 (XL) del Consejo Económico y Social, con un grupo de expertos y el Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo acerca de un programa quinquenal de estudio para el desarrollo de los recursos naturales. El Secretario General formuló sus propuestas relativas a un programa a largo plazo en su informe bienal presentado al Consejo, en su 40º período de sesiones, sobre la marcha de los trabajos en la esfera del desarrollo de los recursos no agrícolas. En él se previeron los nueve estudios globales siguientes: recursos mundiales de mineral de hierro; metales no ferrosos; determinadas minas en los países en desarrollo; posible riqueza mineral de la plataforma continental de los países en desarrollo; necesidades y recursos hidráulicos de los países en desarrollo con posible escasez

de agua; posibilidades de desarrollo de los ríos internacionales; posibilidades de los recursos geotérmicos de los países en desarrollo; recursos de esquistos bituminosos; y necesidades de generación de energía en pequeña escala en los países en desarrollo.

En su resolución 1127 (XLI), el Consejo pidió a los gobiernos, que todavía no lo hubieran hecho, que comunicaran sus opiniones sobre este programa y sobre las posibilidades de financiarlo, y pidió al Secretario General: 1) que consultara al Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo acerca de las consecuencias del programa dentro del contexto global de las demás actividades en materia de recursos naturales; 2) que estableciera tres grupos reducidos de asesores competentes en materia de riquezas minerales, recursos hidráulicos y energía, a los que se confiaría la labor de preparar un estudio sobre los parámetros y el alcance de los objetivos de los estudios, las definiciones y los criterios, la planificación detallada y una evaluación más precisa en lo que respecta al calendario y la relación entre el costo y los beneficios; 3) que consultara a las comisiones económicas regionales, los organismos especializados interesados, el Organismo Internacional de Energía Atómica y otros organismos pertinentes sobre la formulación y la ejecución del programa; 4) que estudiara los medios de financiar este programa; y 5) que presentara un informe provisional al Consejo en la segunda parte de su 41º período de sesiones y preparase un informe completo y definitivo a más tardar para el 43º período de sesiones y preparase un informe completo y definitivo a más tardar para el 43º período de sesiones del Consejo. Por último, recomendó que la Asamblea General, en su vigésimo primer período de sesiones, tomase nota del progreso realizado en la ejecución del programa quinquenal de estudios.

Entre el 41º período de sesiones y la continuación del mismo período de sesiones se celebraron nuevas consultas con el Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo, así como con las comisiones económicas regionales y demás organismos interesados del sistema de las Naciones Unidas, y se presentó un informe sobre los resultados en un período de sesiones posterior del Consejo. El Consejo tomó nota de este informe provisional así como de dos informes en los que se transmitían respuestas de los gobiernos a la solicitud del Secretario General de que comunicaran sus opiniones y observaciones sobre el programa quinquenal de estudio.

El programa quinquenal fue examinado asimismo por la Asamblea General en su vigésimo primer período de sesiones. En su resolución 2173 (XXI), la Asamblea General tomó nota con satisfacción de los progresos realizados por el Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo, el grupo de expertos consultado por el Secretario General y el Consejo Económico y Social en la preparación de un programa a largo plazo de estudios. Además, la Asamblea pidió al Secretario General que estudiara las consecuencias técnicas y financieras de realizar estudios sobre los recursos de petróleo y gas natural en los países en desarrollo, y que presentara propuestas concretas sobre esta materia al Consejo Económico y Social.

Para aplicar la resolución 1127 (XLI) del Consejo se crearon tres grupos de consultores a fines de 1966. Estos grupos se reunieron en la Sede de las Naciones Unidas en las fechas siguientes: el grupo de consultores

sobre minerales del 16 al 24 de enero de 1967; el de recursos hidráulicos del 26 de enero al 4 de febrero de 1967; y el de energía del 6 al 14 de febrero de 1967.

Se preparó un informe final sobre la ejecución del programa quinquenal que contiene las conclusiones de los tres grupos de consultores y un examen de los problemas de la financiación del programa, que deberá presentarse al Consejo en su 42^o período de sesiones.

Recursos del mar

En su resolución 2172 (XXI), la Asamblea General hizo suya la resolución 1112 (XL) del Consejo Económico y Social, en la que se pedía al Secretario General que preparase un estudio sobre la situación actual de los conocimientos de los recursos del mar fuera de la plataforma continental, con exclusión de la pesca, y sobre las técnicas para la explotación de estos recursos. La Asamblea pidió al Secretario General que, en colaboración con la UNESCO, especialmente su Comisión Oceanográfica Intergubernamental, la FAO especialmente su Comité de Pesca, la OMM, otras organizaciones intergubernamentales pertinentes y los gobiernos de los Estados Miembros interesados, iniciara, además del estudio solicitado por el Consejo, un estudio amplio de las actividades que, en la ciencia y tecnología marina, incluidas las relativas a la explotación de los recursos minerales, llevaran a cabo las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y otras instituciones. También se pidió al Secretario General que formulara propuestas con objeto de: asegurar los arreglos más eficaces para un programa ampliado de colaboración internacional que ayudara a conocer mejor el medio ambiente marino y a explotar y desarrollar los recursos del mar; e iniciar y reforzar los programas de educación y capacitación en cuestiones marinas. También se le pidió que estableciera un pequeño grupo de expertos para que le ayudara a preparar el estudio y formular las propuestas; que presentase el estudio y las propuestas al Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo, para que formulara observaciones; y que, por conducto del Consejo Económico y Social, presentara a la Asamblea General el estudio y sus propuestas, junto con las observaciones del Comité Asesor.

Para aplicar esta resolución, se ha establecido un grupo de expertos que deberá reunirse en junio de 1967, con el propósito de preparar la parte del informe al Secretario General que se refiere a las actividades en ciencia y tecnología marinas, y nuevamente a principios de 1968 con objeto de prestar ayuda al Secretario General en la formulación de dichas propuestas.

D. Vivienda, construcción y planificación

1. Actividades de asistencia técnica

Las actividades de las Naciones Unidas en la esfera de la vivienda, construcción y planificación siguieron aumentando especialmente en el sector Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Hasta el 30 de junio de 1967, 13 proyectos habían reunido los requisitos necesarios para recibir asistencia del Fondo Especial, por un valor total aproximado de 15 millones de dólares (asignaciones del Fondo Espe-

cial), con 90 a 100 expertos a largo plazo, además de consultores y subcontratistas. En 1968, se espera que el Consejo de Administración examine unos diez nuevos proyectos en la esfera de la vivienda, construcción y planificación.

Con arreglo al programa ordinario y al sector Asistencia Técnica del PNUD, incluidos los fondos fiduciarios, 129 expertos proporcionaron asesoramiento en diversos aspectos relacionados con la vivienda, construcción y planificación a 57 países y territorios. Además, 12 expertos y auxiliares fueron asignados a las comisiones económicas regionales (excluida la CEPE) y a la Oficina de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas en Beirut para prestar asistencia a los Gobiernos de las regiones respectivas en los problemas de vivienda, construcción y planificación. Por último, se aumentó hasta cinco el número de asesores regionales destinados al Centro de Vivienda, Construcción y Planificación de las Naciones Unidas para atender al creciente número de solicitudes de asistencia a corto plazo.

2. Comité de Vivienda, Construcción y Planificación

El Comité de Vivienda, Construcción y Planificación celebró su cuarto período de sesiones en Ginebra, del 5 al 16 de septiembre de 1966. Entre los asuntos discutidos figuraban los siguientes: coordinación y organización del programa internacional de vivienda, construcción y planificación; financiación de la vivienda y servicios de la comunidad; aspectos sociales de la vivienda y del urbanismo; industrialización de la construcción; mejora del medio; formación de personal y dirigentes nacionales especializados en vivienda, construcción y planificación, en particular para atender las necesidades de los países en desarrollo; rehabilitación y reconstrucción a raíz de desastres naturales; programa de investigación y capacitación en la esfera del desarrollo regional; labor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la esfera de la vivienda, construcción y planificación; y labor del Comité de Vivienda, Construcción y Planificación.

Medidas del Consejo Económico y Social

En conformidad con las recomendaciones del Comité, el Consejo Económico y Social aprobó la resolución 1221 (XLII), en la que invitaba al Centro de Vivienda, Construcción y Planificación, a las comisiones económicas regionales, a los organismos especializados, a los centros regionales de vivienda y a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales interesadas, a que reforzasen y aumentasen su cooperación en la esfera de la vivienda, la construcción y la planificación y pedía al Secretario General que facilitara al Comité de Vivienda, Construcción y Planificación en cada uno de sus períodos de sesiones, a partir de 1967, un informe sobre las actividades de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en materia de vivienda, construcción y planificación.

En la resolución 1222 (XLII) que también fue aprobada por recomendación del Comité, el Consejo pidió al Secretario General que diera la más amplia difusión posible al informe sobre rehabilitación y reconstrucción a raíz de desastres naturales; que estableciera una lista de expertos capaces de proporcionar rápidamente ase-

soramiento y asistencia en zonas afectadas por catástrofes; que emprendiera, en la medida que lo permitieran los recursos, la preparación de manuales sobre desastres; que diera una prioridad elevada al suministro de becas a estudiantes de arquitectura e ingeniería para que efectuaran estudios especiales sobre diseño y construcción en relación con las cuestiones que se plantearan a causa de catástrofes, ingeniería sísmica y esferas similares; y que estudiara la posibilidad de introducir medidas administrativas especiales destinadas a acelerar la asistencia técnica que debía proporcionarse a países en que hubiesen ocurrido desastres naturales.

Conforme a la recomendación de la Comisión de Desarrollo Social, que en su 18º período de sesiones examinó el informe correspondiente al cuarto período de sesiones del Comité de Vivienda, Construcción y Planificación, el Consejo aprobó la resolución 1224 (XLII) que se refería particularmente a la cuestión de la vivienda y de los servicios comunales conexos para familias de bajos ingresos. En virtud de esta resolución, el Consejo pidió al Comité de Vivienda, Construcción y Planificación que prestara la debida atención a medios tales como el esfuerzo propio, cooperativas, viviendas alquiladas, subsidios del gobierno, así como a la elaboración de normas apropiadas para la vivienda. También instó a los Gobiernos de los Estados Miembros a que emprendiesen programas prácticos experimentales adaptados a las necesidades de los países en desarrollo y encaminados a mejorar las condiciones de vida en las colonias de moradores intrusos en los barrios de tugurios de las zonas rurales y urbanas, combatiendo simultáneamente las condiciones sociales, económicas y físicas en dichas zonas.

Para movilizar el interés público y obtener la atención de los Gobiernos en los problemas de vivienda, el Consejo aprobó, también por recomendación de la Comisión de Desarrollo Social, la resolución 1223 (XLII), que se refería a los medios de dirigir la atención hacia los graves problemas sociales y económicos relacionados con la falta de viviendas adecuadas y de instalaciones comunales y las dificultades que se plantean en el desarrollo nacional de las comunidades rurales y urbanas, especialmente en los países en desarrollo, y de los medios para movilizar la acción en forma de programas concretos para mejorar dichas condiciones. El Consejo pidió al Secretario General que preparase un informe sobre este tema, junto con propuestas de acción, y pidió al Comité de Vivienda, Construcción y Planificación que, al examinar los medios de poner en práctica el informe del Secretario General, estudiase si era aconsejable proclamar un año internacional de la vivienda.

ESTUDIOS

Se publicó un estudio sobre la *Coordinación Modular en la Construcción — Asia, Europa y las Américas*. Dicho estudio fue preparado como parte del programa de trabajo aprobado por el Comité de Vivienda, Construcción y Planificación en su segundo período de sesiones, en el que se sugirió que se ampliaran las actividades en la esfera de la coordinación modular para facilitar el desarrollo de la industria de materiales de construcción. Dicho estudio trata del estado de la coordinación modular en distintas regiones geográficas del mundo y subraya la importancia de las normas existentes aprobadas por los organismos nacionales encargados de realizar investigaciones en esta materia.

E. Creación de servicios básicos

1. Viajes, transportes y comunicaciones

DESARROLLO DE LOS TRANSPORTES

En cumplimiento de la recomendación del Consejo Económico y Social contenida en la resolución 1082 (XXXIX), en el sentido de que el Secretario General iniciara un programa de estudios sobre el fomento de los transportes en los países en desarrollo, la División de Recursos y Transportes del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales preparó y publicó el pasado año tres estudios titulados, respectivamente: *Transporte por Tuberías de Materiales a Granel o en Recipientes, Examen de Algunos Aspectos del Sistema de Carga Unificada para el Transporte de Carga: Aplicación a los Países en Desarrollo y el Tiempo de Estadía en Puerto de los Buques*.

Han continuado aumentando las actividades de cooperación técnica de las Naciones Unidas en la esfera del transporte y obras públicas afines. En el pasado año unos ciento treinta y cinco expertos prestaron servicios en misiones sobre transporte y se concedieron cuarenta becas de ampliación de estudios. Las Naciones Unidas actúan también como organismo de ejecución del sector Fondo Especial del PNUD en siete proyectos relacionados con los transportes.

El séptimo seminario del Centro de Capacitación en materia de Puertos y Navegación Marítima de las Naciones Unidas, al que asistieron treinta y un participantes de veinticinco países, se celebró en febrero y marzo de 1967 en Lima, Perú, y fue seguido por una gira de estudios de tres días al Ecuador.

El seminario interregional sobre el empleo de "containers" y otros métodos de unificación de carga en diversos modos de transporte, al que asistieron treinta y cinco participantes de otros tantos países, se celebró en Londres del 1º al 19 de mayo de 1967 con la colaboración del Gobierno del Reino Unido.

Se presentó a examen del Consejo Económico y Social, en su 42º período de sesiones, un informe del Secretario General sobre el progreso de los trabajos de fomento de los transportes, en el que se examinan las actividades de las Naciones Unidas y de otras organizaciones del sistema que intervienen en ese campo.

CIRCULACIÓN POR CARRETERA

Se han proseguido los trabajos preliminares para la revisión de la Convención sobre la Circulación por Carretera y el Protocolo relativo a las Señales de Carreteras de 1949.

De conformidad con la resolución 1082 B (XXXIX) del Consejo Económico y Social, las comisiones económicas regionales estudiaron los proyectos de convención que se distribuyeron en cumplimiento de la resolución 1034 (XXXVII) del Consejo.

En su 41º período de sesiones el Consejo aprobó la resolución 1129 (XLI) en la que se dispone que para marzo de 1968 se convoque una conferencia internacional en Viena, y se determine cuál habrá de ser su composición; también se pide al Secretario General que prepare y distribuya los proyectos de convención revisados y basados en los proyectos que preparó anteriormente, habida cuenta de las enmiendas propuestas por

las comisiones económicas nacionales, y que solicite comentarios sobre estos documentos. Se están preparando los proyectos de convención revisados, que se distribuirán durante el verano de 1967.

En su 42º período de sesiones y en virtud de la resolución 1203 (XLII), el Consejo decidió aplazar hasta fines de septiembre de 1968 la fecha de apertura de la conferencia propuesta.

TRANSPORTE DE MERCADERÍAS PELIGROSAS

El Grupo de Expertos en Explosivos y el Grupo de Relatores sobre envasado de mercaderías peligrosas continuaron sus estudios sobre normas de envasado y sobre las pruebas a que deben someterse los envases de mercaderías peligrosas. Sus trabajos serán examinados por la instancia superior del Grupo, el Comité de Expertos en Transporte de Mercaderías Peligrosas durante su quinto período de sesiones, que ha de celebrarse a finales de junio de 1967.

En cumplimiento de la resolución 1110 (XL) del Consejo Económico y Social, se distribuyó a todos los interesados una versión revisada de las recomendaciones sobre transporte de mercaderías peligrosas.

TURISMO

Se recordará que el Consejo Económico y Social, por la resolución 1108 (XL), recomendó a la Asamblea General que el año 1967 fuera designado como Año Internacional de Turismo. En su 41º período de sesiones, celebrado en julio de 1966, el Consejo examinó un informe presentado por la Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo en relación con los preparativos del Año Internacional del Turismo. En su resolución 1130 (XLI) el Consejo tomó nota de dicho informe e invitó a los gobiernos y a las organizaciones internacionales intergubernamentales y no gubernamentales interesadas a que tuvieran en cuenta, al hacer sus preparativos, las propuestas encaminadas al fomento del turismo que figuran en dicho informe y, finalmente, señaló el informe a la atención de la Asamblea General.

El 4 de noviembre de 1966 en su resolución 2148 (XXI) la Asamblea General designó el año 1967 como Año Internacional del Turismo. Invitó a los Estados Miembros a que hicieran todos los esfuerzos posibles para el éxito del Año y pidió al Secretario General que proporcionara toda la asistencia necesaria para su organización. También pidió al Secretario General que, en colaboración con la Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo, preparase un informe para el Consejo Económico y Social que contuviera una descripción de los programas y actividades emprendidas y una evaluación de los resultados conseguidos.

Algunas dependencias de la Secretaría, entre ellas la División de Recursos y Transportes, el Centro de Vivienda, Construcción y Planificación y la Oficina de Estadística del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, así como la Oficina de Información Pública y la Administración Postal de las Naciones Unidas, vienen fijando la atención desde hace tiempo en el fomento del turismo. La asistencia que se presta a los países en desarrollo sigue aumentando, si bien es todavía muy modesta. Las formas de asistencia comprenden desde el asesoramiento sobre un aspecto concreto hasta un estudio completo del programa turístico de un país.

En abril de 1967 fue nombrado un consultor de alta categoría sobre turismo, que ayudase a la Secretaría en sus crecientes actividades en esta esfera y, concretamente, examinase la cuestión del turismo en conjunto y prestara asesoramiento sobre las actividades futuras y su coordinación.

2. Agrimensura y cartografía

Las Naciones Unidas siguen actuando como organismo de ejecución del sector Fondo Especial del PNUD en cuatro proyectos de cartografía. Además, se facilitaron durante el pasado año los servicios de veinticuatro expertos para asistencia técnica cartográfica y se concedieron doce becas de ampliación de estudios en las especialidades de fotogrametría e hidrografía.

El Secretario Ejecutivo de la CEPA convocó en Túnez del 12 al 24 de septiembre de 1966 la Segunda Conferencia Cartográfica Regional de las Naciones Unidas para África, a la cual asistieron representantes y observadores de treinta y un países de África y otros continentes y representantes de la UNESCO, la OACI, la OMS, la Oficina Hidrográfica Internacional y la Asociación de Levantamientos Geológicos de África.

La Quinta Conferencia Cartográfica Regional de las Naciones Unidas para Asia y el Lejano Oriente fue convocada por el Secretario General en Canberra, del 8 al 22 de marzo de 1967. Asistieron representantes y observadores de treinta y dos países de Asia y otros continentes y representantes de la UNESCO, la Oficina Hidrográfica Internacional, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, la Unión Geográfica Internacional, la Sociedad Internacional de Fotogrametría y la Federación Internacional de Agrimensores.

El Segundo Seminario Interregional de las Naciones Unidas sobre la Aplicación de la Cartografía al Desarrollo Económico se celebró, con la cooperación del Gobierno danés, en Humleback, Dinamarca, del 15 de mayo al 10 de junio de 1967 y a él asistieron treinta y dos participantes de otros tantos países. El seminario fue seguido por una breve gira de estudios a institutos cartográficos de la República Federal de Alemania y de Suiza.

Las Naciones Unidas publicaron el informe de 1965 sobre el mapa internacional del mundo a escala de 1:1.000.000, que es una reseña anual preparada por la Secretaría sobre la marcha de los trabajos.

F. Administración pública

1. Servicios de asesoramiento, formación e investigación

El programa de las Naciones Unidas en materia de administración pública fue examinado en una reunión de expertos que el Secretario General convocó del 16 al 24 de enero de 1967. El examen fue el primero de esa clase realizado en quince años. Los catorce expertos fueron escogidos en diferentes países de las diversas regiones del mundo y representaban muy diversos sistemas y tradiciones administrativas. La Secretaría preparó una monografía básica en la cual se proporcionaba información detallada sobre las actividades pasadas y presentes del programa.

En el informe de la reunión de expertos se afirmaba que la cantidad y la calidad del trabajo realizado eran verdaderamente impresionantes, máxime cuando se examinaban en relación con los escasos recursos disponibles, y se recomendaba que se intensificaran y aceleraran los esfuerzos para ayudar a los gobiernos a reforzar sus sistemas administrativos de desarrollo económico y social. El Consejo Económico y Social estudió el informe en su 42º período de sesiones y aprobó la resolución 1199 (XLI), por la cual, entre otras cosas, tomó nota de los planes del Secretario General encaminados a elevar la Subdirección de Administración Pública a la categoría de división y de prestar apoyo adicional al trabajo en esa esfera.

Las actividades desarrolladas en materia de administración pública en cumplimiento de la resolución 723 (VIII) de la Asamblea General incluyen, como en años anteriores, el suministro de servicios de asesoramiento y de becas, a solicitud de los gobiernos miembros, el apoyo a programas regionales y asesores en administración pública, la organización de seminarios y conferencias para el intercambio de información y la realización de estudios destinados a fomentar el mejoramiento administrativo con miras al desarrollo económico y social. Más de ciento treinta expertos en administración pública prestaron servicio en cincuenta países. Dos asesores interregionales en administración pública prestaron servicios de asesoramiento de corta duración en Ceilán, Chile, Honduras y la India.

Se proporcionó asistencia en administración pública general, organización y métodos, administración y formación de personal, administración local y administración del desarrollo. Cada uno de estos temas comprendía asistencia en varios problemas y aspectos especializados de la administración pública. Se enviaron misiones de estudio de la administración pública general a Ceilán, Guyana y Panamá. Un grupo de tres asesores en administración local viajó a Zambia para realizar allí un estudio del sistema de administración local. En materia de organización y métodos, se proporcionaron servicios de asesoramiento en distintos aspectos de las funciones de gobierno a treinta y dos países.

Un experto asesoró al Gobierno de Argelia sobre la legislación y la política general relacionada con la ejecución de un plan completo de jubilación para empleados del gobierno. En Libia se proporcionó asistencia de expertos a la Caja de Pensiones para ayudar en la formulación de normas y en la organización y administración de un plan eficaz de jubilación. Además, un asesor superior en administración de personal está ayudando al Gobierno a examinar la política y los procedimientos que rigen en la administración pública, en estrecha colaboración con la Comisión de Administración Pública, a fin de formular una reglamentación eficaz de la administración pública de Libia. Un asesor superior en administración de personal colabora con la Comisión de condiciones de servicio en la administración pública, creada por el Gobierno del Sudán para estudiar las cuestiones relacionadas con las condiciones de servicio del personal de administración pública y también para mejorar los métodos de selección y formación de funcionarios públicos. En el Yemen se está prestando asistencia para la formación de personal de administración pública mediante servicios de expertos asignados al Instituto de Administración Pública y al Gobierno para la preparación de leyes de administración pública y reglamentos de personal eficaces. Un exper-

to de categoría superior y tres expertos asociados ayudaron a implantar un nuevo sistema de administración regional y local en el Níger. Un grupo de tres asesores en administración local continúa ayudando al Gobierno de Uganda a ejecutar un programa de capacitación de empleados en financiación y administración local que se lleva a cabo por correspondencia. Se asignó un experto para ayudar a las autoridades de Granada a codificar los reglamentos de las autoridades locales y asesorar sobre las leyes y ordenanzas básicas relacionadas con la administración local.

Un hecho digno de destacarse en este período fue el aumento de los proyectos de administración pública financiados por el sector Fondo Especial del PNUD. Frente a cuatro proyectos del Fondo Especial que se hallaban en curso de ejecución el año pasado, hay actualmente siete de esos proyectos en materia de administración pública, aunque el proyecto de Ghana (iniciado en 1961) debe considerarse ya como terminado. Los seis proyectos en curso se ejecutan en Burundi, Colombia, Libia, el Níger, Somalia y Centroamérica, este último de carácter regional. Además se han recibido y se están considerando otras cuatro solicitudes oficiales, al tiempo que se mantiene correspondencia con varios otros países y organizaciones que han expresado interés por obtener asistencia del Fondo Especial para perfeccionar sus servicios de formación de administración pública, sus programas de investigación y servicios de asesoramiento técnico, incluidos los pertenecientes al plano de la administración local, y crear el aparato necesario con miras a una reforma administrativa de importancia. Se prevé que aumentará el número de solicitudes de asistencia para la creación de instituciones y programas de ese tipo.

Los tres proyectos aprobados e iniciados durante el período que se examina corresponden a Burundi, Libia y Centroamérica. En junio de 1966 se aprobó un proyecto del Fondo Especial destinado a reorganizar en mayor escala la Escuela Real (ahora Nacional) de Administración de Burundi. El objeto del proyecto es ayudar al gobierno a organizar la formación previa al empleo y en el empleo dentro de la escuela, tanto para los funcionarios públicos como para el personal de las empresas semipúblicas, privadas y cooperativas. Los programas de formación reorganizados están ya en curso de ejecución. Como el gobierno desea iniciar ahora un programa de reorganización y reforma administrativa, se están considerando nuevas propuestas para reforzar los servicios de asesoramiento de la escuela mediante la creación de una dependencia especial de organización y métodos que contará con más expertos.

Los otros dos proyectos nuevos en materia de administración pública fueron aprobados en enero de 1967. Dichos proyectos fueron el Instituto Centroamericano de Administración Pública de San José, Costa Rica, y el Instituto Nacional de Administración Pública de Trípoli, Libia. El primero fue organizado como sucesor de la Escuela Superior de Administración Pública de América Central que había sido creada por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua en 1954; Panamá ingresó como participante en 1961. Los gobiernos participantes, convencidos de que, para que tuviera éxito la integración de la región, era fundamental aplicar procedimientos de armonización, especialmente en materias tales como la administración aduanera, tributaria y de transportes, y de que solamente una institución como la Escuela, que trabajara

en escala regional, podía lograr dicha armonización, decidieron transformar y ampliar la Escuela convirtiéndola en Instituto Centroamericano de Administración Pública. La Escuela Nacional de Administración Pública de Trípoli, para la cual el Fondo Especial ha proporcionado apoyo por un período de cinco años y medio, ofrecerá cursos de ingreso y un extenso programa de formación en el empleo destinado a aliviar la grave escasez que se registra en esta esfera. El Instituto realizará también investigaciones y prestará servicios de asesoramiento a solicitud de los gobiernos.

Se proporcionó apoyo sustantivo a varios proyectos en materia de administración pública organizados por las comisiones económicas regionales. Se proporcionó asistencia al Seminario sobre financiación de la administración local, celebrado en Addis Abeba en septiembre de 1966, y al curso de capacitación en organización y administración de sistemas de personal para la administración local, celebrado en Arusha y Dar es Salaam, Tanzania, en marzo de 1967, ambos patrocinados por la CEPA, así como a la décima reunión del Grupo de Trabajo sobre desarrollo y planificación económicos de la CEPAL, celebrada en Bangkok en octubre de 1966, la cual estudió los aspectos administrativos de la planificación del desarrollo económico.

En Ginebra se celebró del 26 de septiembre al 4 de octubre de 1966 un seminario interregional para estudiar los problemas relacionados con la organización y administración de empresas del sector público. Participaron en él veintidós países, representantes de ocho expertos consultores seleccionados por su competencia y experiencia profesional en aspectos especiales del tema del seminario, y representantes de organismos especializados y de organizaciones no gubernamentales. El seminario fue particularmente notable porque facilitó el intercambio de opiniones y de experiencia entre especialistas de países de economía mixta y de países de planificación centralizada.

Entre las publicaciones del período que se examina figuran las siguientes: *Handbook of Civil Service Laws and Practices*, *Local Government Personnel Systems*, *Orientation Course in Mechanised Data Processing*, *The Administration of Economic Development Planning: Principles and Fallacies*, y *Droit administratif et développement national*. Un grupo de trabajo, que se reunió del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 1966, examinó una publicación sobre formación para la administración local que, una vez publicada, complementará el *Handbook of Training in the Public Service*, ya publicado.

Se está prestando atención a los aspectos administrativos de la planificación y de la ejecución de planes. Dos proyectos interregionales se iniciaron durante el año: el primero es un estudio comparado de los aspectos administrativos de la ejecución de planes, y el segundo es un estudio de la evaluación de la capacidad administrativa para la planificación del desarrollo. Otro proyecto interregional en curso de ejecución es el estudio comparado de los esfuerzos nacionales de reforma administrativa. El estudio tiene por objeto analizar las actividades nacionales encaminadas a lograr la reforma administrativa en determinados países con miras a identificar factores favorables y desfavorables para el éxito de dichos esfuerzos y formular normas de preparación y ejecución de programas de reforma en distintas circunstancias.

Se hallan en curso de realización dos estudios sobre administración local: uno se refiere a los enfoques comparativos para la solución de los problemas administrativos vinculados con el rápido crecimiento urbano, y el segundo se refiere a las instituciones de crédito para la administración local.

2. Prestación de servicios de personal de dirección, ejecución y administración

Uno de los principales acontecimientos registrados en el curso del año en este aspecto fue la decisión de la Asamblea General de autorizar, por la resolución 2179 (XXI), que se siguieran utilizando temporalmente los fondos del sector Asistencia Técnica del PNUD para que todas las organizaciones participantes proporcionen personal de ejecución, a solicitud de los gobiernos, durante los años 1967-1968.

En 1966 las Naciones Unidas cubrieron treinta y nueve puestos en veintitrés países. Además, pusieron a disposición de los gobiernos de diecinueve países treinta funcionarios de ejecución.

G. Coordinación y relaciones con los organismos especializados y con el Organismo Internacional de Energía Atómica

En el desarrollo de la labor relativa a la cooperación y la coordinación entre organismos han influido naturalmente las decisiones adoptadas por la Asamblea General en su vigésimo primer período de sesiones respecto de las recomendaciones del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados y de la misión del Comité encargado del Programa y de la Coordinación.

Por lo que hace a las recomendaciones del Comité Especial, se ha organizado una serie de consultas entre los diversos organismos interesados por intermedio del Comité Administrativo de Coordinación (CAC), que ha preparado y sometido a la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto un informe provisional sobre el asunto. Este informe trata principalmente de la forma como puede funcionar con más eficacia la Dependencia de Inspección recomendada por el Comité Especial; un nuevo informe relativo a otras recomendaciones que aún están en estudio se presentará a la Asamblea General en el vigésimo segundo período de sesiones.

Como base de los trabajos del recién reorganizado Comité del Consejo Encargado del Programa y de la Coordinación que empezó a reunirse a principios de mayo de 1967, la Secretaría preparó una serie de estudios detallados relativos a todos los aspectos del programa de trabajo de las Naciones Unidas en materia económica, social, y de derechos humanos. La documentación destinada a la segunda etapa de la labor del Comité y al 43º período de sesiones del Consejo (julio de 1967) incluye los informes anuales de los organismos especializados, así como el informe anual del CAC y una serie de informes conexos preparados por ese órgano o en colaboración con el mismo. Se celebrarán reuniones conjuntas del CAC y del Comité encargado del Programa y de la Coordinación en Bucarest, con la presencia de miembros de la Mesa del Consejo, poco

antes de abrirse el período de sesiones de verano del Consejo. El CAC ha sugerido que se consideren en dichas reuniones, cuyo programa se trazó en 1966, dos temas del programa de verano del Consejo que suscitan considerable interés en muchos organismos y respecto de los cuales se someterán propuestas al Consejo, a saber, el desarrollo y la utilización de los recursos humanos y la asistencia alimentaria multilateral. Otro tema que se propone para un examen conjunto es el estudio general de los programas de actividades del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas, para lo cual el Comité encargado del Programa y de la Coordinación fue ampliado con representantes de cinco Estados designados por el Presidente de la Asamblea General. Este tema será examinado detalladamente por el Comité ampliado en septiembre.

En su último informe al Consejo el CAC se refirió a la nueva ampliación importante durante el año anterior de la labor del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas en materia económica, social y de derechos humanos y advirtió que la parte principal de esta expansión se había referido a temas amplios que exigían un enfoque concertado y la consiguiente cooperación y coordinación entre los organismos. Las quince esferas de actividad que se tratan en el capítulo II del informe son de esta naturaleza. En varias de ellas — incluidas la industrialización, la ciencia y la tecnología, las ciencias marinas, la política social — han ocurrido o se están produciendo importantes novedades que afectan a la cooperación entre organismos. En otras — como la asistencia alimentaria multilateral, las cuestiones demográficas y el desarrollo y utilización de los recursos humanos — se han preparado las bases para la futura acción cooperativa. En dos casos la cooperación entre organismos está centrada en acontecimientos especiales proyectados para 1968: el Año Internacional de los Derechos Humanos y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos.

Se advirtió que se habían planteado algunos problemas. Varios de ellos se deben, al menos en parte, a la dificultad de conciliar las decisiones aprobadas por diferentes organismos intergubernamentales, por ejemplo, en la esfera del comercio internacional y la esfera de la educación agrícola, que fue examinada el verano pasado en el Comité Administrativo de Coordinación del Consejo Económico y Social. En otros casos, como en la aplicación de la resolución 2172 (XXI) de la Asamblea General sobre recursos del mar, se han planteado problemas a resultas, en parte, del alcance mismo de las disposiciones de coordinación necesarias.

El aumento del volumen y de la interdependencia de las actividades internacionales, y del número de organizaciones y programas que intervienen en estas actividades, ha requerido naturalmente un análisis constante de los métodos de coordinación y esfuerzos continuos para mejorar e intensificar las disposiciones de coordinación. Estas disposiciones, así como ciertas medidas nuevas adoptadas para mejorar el funcionamiento del mismo CAC y para reforzar en general el sistema de cooperación entre las secretarías cuyas actividades fiscaliza, se describen sucintamente en el informe del CAC.

Entre las nuevas medidas adoptadas figura la separación de las funciones de Subsecretario Adjunto de

Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas y las de Representante Personal del Secretario General ante los organismos especializados, mediante la creación, por el Secretario General, previa consulta con el CAC y la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, de una subsecretaría de asuntos entre organismos. El nuevo Subsecretario, si bien seguirá figurando en la plantilla del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, es directamente responsable ante el Secretario General y no ejerce funciones puramente departamentales. Además de desempeñar las funciones de relator del CAC y Presidente de su Comité Preparatorio, deberá mantener contacto estrecho con los jefes ejecutivos de todos los programas especiales que dependen de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social para promover y facilitar la coordinación. El CAC consideró que esta medida, al tiempo que reforzaba en cierto grado el personal del CAC y el personal asignado a asuntos interinstitucionales en Ginebra y en Nueva York, consolidaría notablemente los medios de promover la coordinación y la cooperación entre organismos.

El informe del CAC refleja la atención prestada a la preparación de acuerdos sobre distintas formas de evaluación de las actividades internacionales de cooperación técnica, y a la cooperación entre las Naciones Unidas y los organismos especializados, por una parte, y los institutos de desarrollo económico regional por otra. Además, el CAC preparó y aprobó importantes estudios de la coordinación en el plano regional — tema sobre el cual no había sido presentado ningún informe sistemático al Consejo en más de quince años — de la coordinación en el terreno. Este último estudio, preparado con ayuda del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, contiene una nueva declaración sobre política, que representa una evolución y un desarrollo de los acuerdos existentes, en especial con respecto a la función de los Representantes Residentes expuesta en los diez principios aprobados por el CAC en 1961. Otro estudio preparado para el Consejo en consulta con el CAC se refiere a las relaciones entre el Consejo y las organizaciones intergubernamentales en las esferas económica y social en las que no interviene el sistema de las Naciones Unidas.

En su 41º período de sesiones el Consejo dedicó mucha atención a la difusión de información sobre los propósitos, acciones y realizaciones del sistema de las Naciones Unidas y se mostró deseoso de conocer los resultados de la revisión efectuada por el CAC de determinados aspectos de los programas de información de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Un resumen de los resultados de esa revisión — incluidas varias recomendaciones que serán transmitidas a los órganos ejecutivos interesados — figura también en el informe del CAC.

H. Cuestiones especiales

I. Asistencia en caso de desastres naturales

La Asamblea General, en su resolución 2034 (XX) sobre asistencia en casos de desastres naturales, autorizó al Secretario General para "retirar del Fondo de Operaciones un total de 100.000 dólares a fin de prestar ayuda de urgencia en cualquier año, con un límite normal de 20.000 dólares por país y por desastre". Un

documento titulado "*Acción internacional en caso de desastres naturales: manual sobre los recursos y los procedimientos del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas*", preparado por la secretaría del CAC, fue publicado en junio de 1966. Se le dio muy amplia difusión, ya que servirá de guía a los gobiernos y al personal de las Naciones Unidas y de los organismos especializados para atender necesidades urgentes a raíz de desastres naturales.

El Secretario General prestó asistencia de conformidad con la resolución 2034 (XX) durante ese periodo. Luego de una desastrosa inundación ocurrida en Ulan Bator, capital de Mongolia, en julio de 1966, el Secretario General autorizó el uso de fondos de las Naciones Unidas para suministrar materias colorantes por valor de 14.500 dólares a fin de ayudar a restablecer la industria textil del país. Un terremoto asoló la región oriental de Turquía en agosto, y fueron proporcionadas 1.000 toneladas de planchas de hierro corrugado destinadas a poner techo a las viviendas provisionales construidas para los sobrevivientes. También se registró en octubre, cerca de la ciudad de Lima, Perú, un sismo que dejó a unas 20.000 personas sin hogar. En respuesta a una petición de ayuda del Gobierno en virtud de la resolución 2034 (XX), el Secretario General autorizó gastos por la suma de 20.000 dólares para adquirir equipo sanitario destinado a las viviendas provisionales en las cuales se alojó a las víctimas del terremoto.

En mayo de 1967 hubo inundaciones en el valle del Eufrates, a raíz de las cuales muchas personas se quedaron sin hogar en la República Árabe Siria y en el Irak. En 1° de junio se estaban considerando planes para reponer en Siria las bombas de riego dañadas por las inundaciones. El 29 de mayo de 1967 el Consejo Económico y Social aprobó la resolución 1212 (XLII), en la cual pidió a los Estados Miembros que proporcionasen asistencia para aliviar los sufrimientos de las regiones afectadas por las inundaciones, e invitó al Secretario General y a los organismos especializados a que prestasen asistencia dentro de los límites de sus posibilidades.

2. Fiscalización de estupefacientes

21° PERÍODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE ESTUPEFACIENTES Y 42° PERÍODO DE SESIONES DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

El 21° periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes se celebró en Ginebra, del 5 al 21 de diciembre de 1966. Había en el programa ocho temas fundamentales, que abarcaban la aplicación de los tratados sobre estupefacientes y fiscalización internacional, el tráfico ilícito, el uso indebido de estupefacientes, la evolución de la situación respecto de las sustancias sometidas a fiscalización internacional, las cuestiones relativas a sustancias psicotrópicas no sometidas a fiscalización internacional (barbitúricos, tranquilizantes, anfetaminas, etc.), la cooperación técnica para la fiscalización de estupefacientes, y el programa y orden de prioridades en materia de estupefacientes. La Comisión recomendó dos proyectos de resolución para que los aprobase el Consejo Económico y Social: uno sobre la fiscalización de la LSD y otro sobre las disposiciones administrativas para la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, establecida por el Consejo

según lo dispuesto en la Convención Unica de 1961 sobre Estupefacientes.

En su 42° periodo de sesiones, el Consejo Económico y Social tomó nota con satisfacción del informe de la Comisión sobre su 21° periodo de sesiones, así como del informe del Comité Central Permanente de Estupefacientes sobre sus actividades de 1966. Además, aprobó la resolución 1197 (XLII), en la cual pide a los gobiernos que adopten medidas sin demora a fin de fiscalizar estrictamente la importación, la exportación y la producción de la LSD y de las sustancias que producen efectos análogos y que sometan la distribución de dichas sustancias a la fiscalización de las autoridades competentes; recomienda que el uso de tales sustancias quede limitado a los fines médicos y de investigación científica; condena todos los demás usos e insta a los gobiernos a que adopten todas las medidas pertinentes para impedirlos.

El Consejo aprobó también la resolución 1196 (XLII), en la cual se enuncian las disposiciones administrativas para garantizar la completa independencia técnica de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, elegida por él conforme a lo dispuesto en la Convención de 1961. En su 1472a. sesión, el Consejo eligió a los once miembros de la Junta que asumirán sus funciones el 2 de marzo de 1968.

APLICACIÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE ESTUPEFACIENTES

Los Estados Unidos, México y Turquía ratificaron la Convención Unica de 1961 sobre Estupefacientes o se adhirieron a ella, con lo cual el número total de las partes asciende a cincuenta y siete. A solicitud de la Comisión, el Secretario General volvió a señalar a la atención de los gobiernos la resolución 1774 (XVII) de la Asamblea General y la resolución 914 C (XXXIV) del Consejo, en las cuales se invita a los gobiernos a adoptar las medidas necesarias para ratificar la Convención de 1961 o adherirse a ella cuanto antes.

El Secretario General preparó los siguientes documentos para distribuir a los gobiernos con el objeto de facilitarles el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de tratados: una lista de autoridades nacionales facultadas para expedir certificados y autorizaciones de importación y de exportación de estupefacientes; un documento que contiene una lista de los países en los cuales se fabrican estupefacientes, incluso los nombres y las direcciones de las compañías dedicadas a ello, y una lista actualizada de estupefacientes sometidos a fiscalización internacional que abarca noventa estupefacientes básicos, sesenta de los cuales son sustancias sintéticas.

El Secretario General, basándose en las decisiones de la Comisión de Estupefacientes y la OMS, informó a los gobiernos de que habían sido sometidas a fiscalización internacional tres nuevas sustancias. El Secretario General también tuvo en cuenta los cambios introducidos por la Comisión en las listas de estupefacientes comprendidos en la Convención en 1961.

Por lo que hace a los informes anuales preparados en virtud de los tratados internacionales sobre estupefacientes, el Secretario General los recibió de 144 países con respecto a 1964, de seis con respecto a 1963 y de 33 con respecto a 1965. El Secretario General analizó tales informes en el resumen de los informes anuales

de los gobiernos correspondiente a 1964. Además, se prepararon para la impresión y se distribuyeron treinta y cinco textos de leyes y reglamentos recibidos por el Secretario General. Por otra parte, se confeccionó un índice acumulativo polivalente, según lo dispuesto en la resolución 626 C III (XXII) del Consejo.

INFORME DEL COMITÉ CENTRAL PERMANENTE DE ESTUPEFACIENTES

La Comisión examinó en su 21º período de sesiones el informe del Comité Central Permanente de Estupefacientes sobre sus trabajos en 1966; el Consejo hizo lo propio en su 42º período de sesiones. La Comisión y el Consejo aprobaron las disposiciones administrativas para garantizar la completa independencia técnica de la futura Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, elaboradas conjuntamente por el Secretario General y el Presidente de la Junta.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

El laboratorio de las Naciones Unidas prosiguió sus investigaciones sobre el opio, la cannabis y otras sustancias. Durante el período examinado se amplió la colaboración internacional en los programas de investigaciones de la Organización. Se progresó considerablemente en la preparación de índices de obras científicas sobre estupefacientes, y el laboratorio dio formación profesional a varios becarios.

TRÁFICO ILÍCITO

El Secretario General recibió 591 informes sobre decomisos, que abarcaban 658 casos de decomiso en 24 países, y preparó su texto para la distribución a los gobiernos en forma de resúmenes mensuales sobre transacciones ilícitas y decomisos. Asimismo, el Secretario General preparó para la Comisión de Estupefacientes, en su 21º período de sesiones, un estudio del tráfico ilícito de estupefacientes en 1965. Dicho estudio incluye la información comunicada por la Organización de Policía Criminal Internacional (INTERPOL) sobre 800 casos de decomiso en 46 países.

Las cantidades de estupefacientes decomisados en 1965 fueron las mayores registradas en 35 años. Se recalcó que este esfuerzo de aplicación de la ley sólo indica de modo limitado la existencia de una masa oculta y enorme de tráfico ilícito, descrito por la Comisión en su informe como uno de los ejemplos más impresionantes de delincuencia organizada.

Los centros principales de la producción clandestina de opio siguieron ubicados especialmente en el Oriente Medio y el Asia Sudoriental, sobre todo en las zonas montañosas de las regiones fronterizas de Birmania, China, Tailandia y Laos. También hay cierta desviación de la producción lícita en Turquía y en el subcontinente indio-paquistaní.

El tráfico del opio persigue el propósito de abastecer a los fumadores y, como el número de éstos va disminuyendo, apunta ahora, en medida cada vez mayor, a la conversión de dicho estupefaciente en una base de morfina y en heroína.

Las pruebas disponibles revelan que la fabricación ilícita de heroína en Asia se realiza cerca de las zonas de comercialización al por menor, tales como las que representan Irán, Tailandia, Hong Kong y Macao. En

Europa, ocurre más que nada en Francia e Italia y se destina en particular al continente de América del Norte, objetivo principal del tráfico ilícito de heroína.

La cannabis siguió siendo el estupefaciente de uso indebido más general. Se la halla bajo distintas formas y variadas denominaciones. He aquí algunos de los nombres más populares: mariguana, dagga, kif, maconha (las sumidades y hojas de la planta, secadas y trituradas), hachís, charas (resina de cannabis) y ganja (las sumidades floridas secadas de la planta hembra).

El tráfico ilícito de la cannabis prosiguió en diversas partes de Africa, así como de Marruecos y Nigeria a Europa, de México a los Estados Unidos de América y de Nepal a la India. El tráfico altamente organizado de hachís del Líbano a la República Árabe Unida, Arabia Saudita y Yemen es una característica especial del Oriente Medio.

La gran mayoría de la hoja de coca cosechada se mastica en los países productores — Bolivia y Perú — y, en grado mucho más reducido, en Argentina, Colombia y Ecuador. En los Estados Unidos se han encontrado grandes cantidades de cocaína de origen ilícito procedente del Perú y Bolivia; se han encontrado cantidades más pequeñas de ella en Europa, el Oriente Medio y algunos países latinoamericanos.

USO INDEBIDO DE LOS ESTUPEFACIENTES (TOXICOMANÍA)

La toxicomanía constituye una de las preocupaciones principales de la Comisión de Estupefacientes. El Secretario General preparó una nota al respecto en la que informó también sobre la incidencia de la toxicomanía en diversas partes del mundo. La Comisión examinó la posibilidad de adoptar una definición internacional de la toxicomanía a fin de contribuir a normalizar los informes estadísticos. Se consideró útil una sugerencia tendiente a crear comités asesores nacionales para estudiar el uso de los estupefacientes y las sustancias psicotrópicas no sometidas a fiscalización internacional; idéntico juicio mereció una sugerencia de que la Secretaría preparase una lista de corresponsales científicos. Se reconoció, sin embargo, la falta de uniformidad de las características que presenta la toxicomanía según las drogas, las diferentes regiones del mundo e incluso los diversos países de que se trate. Asimismo, se estableció que, en última instancia, el objetivo a que apunta el tratamiento no consiste sólo en el abandono del hábito, sino también en la total rehabilitación.

SUSTANCIAS SOMETIDAS A FISCALIZACIÓN INTERNACIONAL (OPIO, CANNABIS, HOJA DE COCA Y ESTUPEFACIENTES SINTÉTICOS)

El Secretario General ha preparado un documento consolidado, sobre los estupefacientes sometidos a fiscalización internacional, en el cual se examinan los problemas que suscita la limitación de la producción de estas sustancias a necesidades científicas y médicas. Aunque en el caso de la cannabis no puede emplearse un sucedáneo, se plantean cuestiones importantes de índole económica y social en el caso del opio y de la hoja de coca. La Comisión llegó a la conclusión de que el reemplazo del opio, por ejemplo, por la paja de adormidera, y el reemplazo de los opiáceos por estupefacientes sintéticos — así como la reducción de la gran producción de hoja de coca en el mundo — deben ser

objeto de un nuevo y cuidadoso estudio por la Secretaría.

SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS NO SOMETIDAS A FISCALIZACIÓN INTERNACIONAL (BARBITÚRICOS, ANFETAMINAS, TRANQUILIZANTES Y LSD)

En vista de su preocupación cada vez mayor por los peligros resultantes del uso indebido de sustancias no sometidas a fiscalización internacional, tales como barbitúricos, anfetaminas y tranquilizantes, el Consejo aprobó, por recomendación de la Comisión, la resolución 1104 (XL), por la cual estableció un Comité de la Comisión para que estudiara el problema e informara al respecto a la Comisión en su 21º período de sesiones, en diciembre de 1966. El Comité se reunió del 8 al 12 de agosto de 1966. El Secretario General preparó material de antecedentes para la labor del Comité y también le transmitió la información suministrada por los gobiernos. La Comisión examinó el informe del Comité en su 21º período de sesiones y recomendó un proyecto de resolución relativo a la LSD para que lo aprobara el Consejo, cosa que éste hizo en su resolución 1197 (XLII). A raíz de una recomendación hecha por el Comité y aprobada por la Comisión, el Secretario General emprendió, en consulta con la OMS y el Comité Central Permanente de Estupefacientes, un estudio detallado de las cuestiones jurídicas, administrativas y de otra índole relacionadas con la iniciación de una acción internacional capaz de conducir a la fiscalización de las citadas sustancias.

COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS ESTUPEFACIENTES

En un informe preparado en cumplimiento de la resolución 1395 (XIV) de la Asamblea General, el Secretario General explicó cómo se había aplicado, durante el período que se examina, el programa de asistencia técnica para la fiscalización de estupefacientes. Según las normas generales formuladas por la Comisión, el crédito de 75.000 dólares se había dividido por igual entre los proyectos por países y por regiones. Se habían terminado dos proyectos regionales: una gira de estudio a los puntos de convergencia del tráfico ilícito de la hoja de coca y la cocaína en América Latina y un seminario de capacitación en Addis Abeba para funcionarios del África oriental encargados de la fiscalización de estupefacientes. Se concedieron varias becas para la capacitación en fiscalización de estupefacientes. Se siguieron prestando los servicios de expertos al Gobierno del Irán para la rehabilitación de toxicómanos y para las investigaciones sobre estupefacientes; asimismo, se terminó un estudio de las necesidades económicas y sociales de las regiones productoras de opio en el norte de Tailandia, destinado a facilitar el reemplazo del opio por otros cultivos u otras actividades económicas.

3. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

Un número creciente de refugiados se ha beneficiado de la asistencia proporcionada por la Oficina del Alto Comisionado en muchos países del mundo, y se han realizado nuevos adelantos apreciables en las esferas de la protección internacional y de la asistencia mate-

rial. De conformidad con la decisión tomada por la Asamblea General en su vigésimo primer período de sesiones, que figura en la resolución 2198 (XXI), el Secretario General transmitió el texto del Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados a los Estados a fin de que pudieran adherirse al mismo.

Nuevamente se le pidió al Alto Comisionado que concentrara gran parte de sus programas de asistencia en el problema de los refugiados de África. El proceso de asentamiento ya ha alcanzado una etapa avanzada en el caso de diversos grupos de refugiados de dicho continente, pero en 1966, se registró la llegada de nuevos refugiados para los cuales se requirieron nuevas medidas. Como consecuencia, se necesitarán mayores esfuerzos combinados para continuar las tareas importantes que hay que llevar a cabo. Se ha establecido una estrecha cooperación entre la Oficina del ACNUR y otros miembros del sistema de las Naciones Unidas, lo cual se refleja en la ejecución de los proyectos conjuntos que han beneficiado a los refugiados de África y también, hasta cierto punto, a la población local.

Cabe observar que el Alto Comisionado continúa haciendo frente a considerables problemas para financiar sus programas de asistencia, y es de esperar que, mediante los esfuerzos mancomunados de los miembros de la comunidad internacional y gracias a un permanente interés público por la labor humanitaria del ACNUR, el Alto Comisionado reciba ayuda para alcanzar los objetivos financieros del programa corriente.

PROTECCIÓN INTERNACIONAL

Por su resolución 2197 (XXI), relativa al informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Asamblea General pidió al Alto Comisionado, entre otras cosas, que siguiera proporcionando protección internacional a los refugiados de quienes pudiera ocuparse dentro de la esfera de su competencia, y que promoviera la búsqueda de soluciones permanentes para sus problemas. El Alto Comisionado ha continuado su labor básica de protección internacional, cuyo alcance se amplió aún más en el período que se examina con la suma de nuevas responsabilidades, en particular en algunas regiones de África.

Como lo había venido haciendo, el Alto Comisionado promovió la concertación de instrumentos intergubernamentales de interés para los refugiados, observó el cumplimiento de los existentes y estimuló las medidas nacionales jurídicas y administrativas favorables a los refugiados.

Uno de los acontecimientos más importantes ocurridos en la esfera de la protección internacional fue la aprobación de la resolución 2198 (XXI) de la Asamblea General, relativa al Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, cuyo propósito es ampliar el alcance de la Convención de 1951 para que incluya a nuevos grupos de refugiados. De acuerdo con dicha resolución, el texto del Protocolo fue transmitido a los Estados para que éstos pudieran adherirse al mismo. En su 17º período de sesiones, celebrado en mayo de 1967, el Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado expresó la esperanza de que el mayor número de Estados posibles se adhirieran al Protocolo. Desde el 15 de junio de 1967, Gambia y la Santa Sede son Partes en el Protocolo y varios Estados han manifestado su intención de adherirse al mismo.

El número de Partes en la Convención de 1951 aumentó a 51, y se han registrado nuevas adhesiones referentes a otros varios instrumentos jurídicos de interés para los refugiados, que comprenden en particular el Acuerdo de 1957 relativo a los marinos refugiados y el Acuerdo Europeo de 1959 sobre la Supresión de los Visados para los Refugiados.

El Alto Comisionado y algunas organizaciones regionales y distintos gobiernos han continuado prestando gran atención a la importante cuestión del asilo. A excepción de los casos que citó el Alto Comisionado en su discurso de apertura del 17º período de sesiones del Comité Ejecutivo, se observó el principio de la no devolución y en muchos países se concedió generosamente asilo a los refugiados. En su resolución 2203 (XXI), la Asamblea General pidió al Secretario General que incluyese en el programa de su vigésimo segundo período de sesiones un tema titulado "Proyecto de declaración sobre el asilo territorial", con miras a la adopción definitiva de una declaración sobre esa materia. Diversos gobiernos adoptaron otras medidas positivas con respecto a la aplicación del principio de la no devolución y a la concesión de asilo.

Al igual que en ocasiones anteriores, en diferentes países se tomaron providencias para beneficiar a los refugiados en esferas tales como la seguridad social, el derecho a trabajar y la educación.

La Organización de la Unidad Africana y el Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano aprobaron una serie de importantes principios relativos al estatuto de los refugiados y, en un período de sesiones celebrado en abril de 1967, la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa aprobó una moción relacionada con la integración de los refugiados en sus países miembros.

En 1966, se concertó un acuerdo entre el ACNUR y la República Federal de Alemania sobre la creación de un fondo complementario de indemnización de 875.000 dólares para brindar asistencia a ciertas categorías de refugiados que habían sido víctimas de persecución bajo el régimen nacional socialista de Alemania y habían adquirido una nueva nacionalidad antes del 1º de octubre de 1953 o se habían transformado en refugiados después de esa fecha. El segundo fondo de indemnización ha de atender a las personas que no se beneficiaron del primer fondo de 11 millones de dólares creado en 1960, a causa de que no poseían la condición de refugiados el 1º de octubre de 1953.

PROGRAMAS DE ASISTENCIA MATERIAL

Observaciones generales

En 1966, unos 240.000 refugiados en más de 50 países se beneficiaron en una forma u otra de los proyectos llevados a cabo por la Oficina del Alto Comisionado o con su asistencia. El ACNUR aunque continúa su labor en Asia, América Latina, Europa, el Lejano Oriente y el Oriente Medio, tuvo que concentrar sus esfuerzos en los refugiados de África al Sur del Sahara, cuyo número aumentó durante 1966 de 630.000 a 740.000. De este total, se puede considerar que unos 450.000 ya están asentados. De los 300.000 restantes, 100.000 han recibido asistencia del ACNUR y pueden cubrir sus propias necesidades y 200.000 aún recibían ayuda del ACNUR al 31 de diciembre de 1966.

Los compromisos del programa corriente del ACNUR para 1966 ascendieron aproximadamente a 3.900.000 dólares, y se extrajo la suma de 246.253 dólares del Fondo de Emergencia. Demuestra el papel catalítico del programa el hecho de que en los países huéspedes se efectuaran contribuciones de apoyo por más de 6.570.000 dólares, con el fin de complementar los fondos proporcionados por la comunidad internacional. A dicha cifra hay que añadir el millón y medio de dólares de víveres aportados por el Programa Mundial de Alimentos, el valor de los terrenos puestos a disposición de los refugiados en África, los servicios administrativos suministrados por los gobiernos y por otras organizaciones que colaboran en la ejecución de los proyectos del ACNUR y también la apreciable cantidad de asistencia bilateral brindada por algunos gobiernos a los países de residencia. Además, los proyectos fuera del programa, se financiaron con cargo a fondos fiduciarios especiales, que ascendieron a 610.000 dólares y de los cuales se dedicaron a la educación más de 200.000.

La repatriación voluntaria ha contribuido a la solución de los problemas de los refugiados, especialmente en África. De los 27.000 refugiados que regresaron a sus países de origen en 1966, 26.000 eran de países africanos, en su mayoría refugiados congoleños que habían estado esperando que se restableciera la normalidad para regresar a sus hogares. El ACNUR facilitó la repatriación voluntaria de 1.250 refugiados, 1.208 de ellos en África, con destino a cuyo transporte proporcionó los fondos necesarios.

La emigración ha continuado desempeñando un papel de importancia al permitir que nuevos refugiados, sobre todo en países de Europa y del Lejano Oriente, vayan a asentarse permanentemente en otros países.

En general, sin embargo, y particularmente en África, la integración local continúa siendo, sin lugar a dudas, la solución más usual. En 1966, más de 223.000 refugiados (216.000 en África, 3.000 en Asia y 2.900 en Europa) recibieron asistencia para su asentamiento en el país de residencia. Como en el pasado, se ayudó al asentamiento de los refugiados de África, principalmente en la agricultura, y se les prestó asistencia material, en especial alimentos, hasta la época de su primera cosecha. Durante 1966, un número creciente de dichos refugiados lograron subvenir a sus propias necesidades, y el asentamiento de algunos de ellos, particularmente en Burundi y en la Provincia de Kivu en la República Democrática del Congo, fue facilitado por proyectos de integración llevados a cabo con la cooperación de la OIT, la FAO y el PNUD. La cooperación entre el ACNUR y las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas se intensificó durante el período que se examina, particularmente en distintos países africanos. En su resolución 2197 (XXI) sobre el informe del Alto Comisionado, la Asamblea General pidió al Alto Comisionado que promoviera la búsqueda de soluciones permanentes para los problemas de los refugiados asegurándose de que, en los países en desarrollo, los planes de integración económica y social de los refugiados, hasta tanto pudieran incluirse en los programas de desarrollo económico y social realizados por los órganos competentes y los organismos especializados de las Naciones Unidas, estuvieran debidamente coordinados con esos programas, así como con otros que pudieran llevar a cabo las organizaciones

regionales; asimismo, pidió a los órganos competentes y a los organismos especializados de las Naciones Unidas que tuvieran en cuenta, a petición de los gobiernos interesados, las necesidades de los refugiados al estudiar los planes de desarrollo. Desde entonces, se han logrado nuevos adelantos al respecto y el Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado, en su 17º período de sesiones, consideró por tanto que el ACNUR debía estar vinculado a la labor de la Junta Consultiva Mixta del Programa.

Se prestó especial atención a la cuestión de la asistencia educacional a los refugiados, particularmente en África. En su 16º período de sesiones, el Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado decidió autorizar al Alto Comisionado a que abriese una cuenta con fines de educación y promoviese las contribuciones destinadas por los donantes a la asistencia educacional de los refugiados, en aquellos casos en que sus necesidades no quedasen cubiertas por el programa ordinario del ACNUR, y estimulase la enseñanza secundaria y, en alguna medida, la superior. La Oficina del Alto Comisionado coopera estrechamente con la UNESCO en esta esfera.

Se proporcionó ayuda complementaria en distintos casos, a título individual. La asistencia jurídica también fue extremadamente valiosa para facilitar la integración de los refugiados en sus países de residencia.

Refugiados Africanos

Burundi

El número de refugiados rwandeses en Burundi aumentó de 52.000 a 54.000 en 1966. El Alto Comisionado asignó unos 590.000 dólares a esta región, especialmente para ayudar a 19.000 refugiados rwandeses en Kayongozi, Kigamba y Muramba a consolidar su asentamiento y para facilitárselo a un grupo de 27.300 refugiados rwandeses en la zona de asentamiento de Mugeru. El Programa Mundial de Alimentos suministró víveres al centro de Mugeru por valor de 1.551.500 dólares, parte de los cuales se utilizarán en 1967 en las cuatro zonas rwandesas de asentamiento de Burundi Oriental. En general, se realizó un progreso considerable y todos los refugiados han alcanzado un nivel mínimo de subsistencia, que es, sin embargo, bastante inferior al nivel de vida de la población local. Se consideró necesario trazar un plan de desarrollo zonal, en beneficio de la población local y de los refugiados. Asimismo, se decidió fusionar los programas en ejecución en las cuatro zonas de asentamiento y continuarlos en 1967 en forma provisional. Con tal propósito, se incluyó en el programa de 1967 una asignación de 200.000 dólares, que se agregará al saldo de los proyectos anteriores, calculado en 130.000 dólares.

República Centroafricana

Tras la llegada de otras 9.500 personas a la región de Banbouti y de Ouanda-Djallé, había 27.000 refugiados sudaneses en la República Centroafricana a fines de 1966. El Alto Comisionado, que había hecho una contribución inicial para una operación de socorro de emergencia para los refugiados de Banbouti, efectuó otra asignación de 200.000 dólares con cargo al programa ordinario de 1966 para la ejecución de un proyecto encaminado a asentar a los refugiados al oeste de Banbouti con la cooperación de las autoridades cen-

troafricanas, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y la Oficina del Alto Comisionado. A pesar de ciertas dificultades de carácter técnico, se realizó un progreso suficiente como para suspender la distribución de las raciones alimentarias a 20.000 de estos refugiados, por lo menos temporalmente, después de la primera cosecha: mientras tanto, se reforzaba la infraestructura de la región. Sin embargo, había sido necesario retardar la ejecución del proyecto a fin de tener en cuenta las intenciones del Gobierno de la República Centroafricana de transferir a los refugiados más hacia el interior, a Mboki, una región con bastantes tierras de regadío, cuyos habitantes son del mismo origen étnico que los refugiados. En tales circunstancias, el Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado había previsto una asignación de 700.000 dólares para el asentamiento de los refugiados sudaneses en la República Centroafricana en 1967.

República Democrática del Congo

Unos 30.000 refugiados angolanos llegaron a las regiones de Katanga y del Bajo Congo en 1966, lo que elevó a 300.000 el número de refugiados de origen angolano que viven en la República Democrática del Congo. Gracias a la hospitalidad de la población local y a la asistencia proporcionada por algunas organizaciones voluntarias, los refugiados han podido asentarse en la región sin mayores dificultades. El ACNUR contribuyó con 20.000 dólares a la creación de un centro de formación agrícola, en el que también se enseñan otros oficios. Si bien la mayoría de dichos refugiados ya están más o menos en condiciones de bastarse a sí mismos, necesitarán todavía cierta asistencia en materia de servicios educacionales y médicos.

Como resultado de la repatriación voluntaria de unos 100 refugiados rwandeses que estaban en la República Democrática del Congo y de la partida de otros 1.200 para Burundi, la República Unida de Tanzania o Uganda, el número de refugiados rwandeses en el Congo disminuyó en 1966 de 25.000 a 24.000. El proyecto ACNUR/OIT de integración y desarrollo zonal, aunque se mantuvo sobre una base temporal en espera de la derogación formal de los decretos de expulsión y embargo de agosto de 1964 — que tuvo lugar a fines de 1966 — ha permitido a una proporción creciente de refugiados subvenir a sus propias necesidades. Hacia fines de 1966, la mayoría de ellos podían considerarse asentados, particularmente porque su situación jurídica se había visto consolidada por la derogación de los decretos ya mencionados. Además, una mejora en la situación de la población local acompañó al progreso realizado en el asentamiento de los refugiados. Se espera que la ayuda del ACNUR a las zonas de asentamiento de Kivu termine cuando se haya dado cima al proyecto OIT de desarrollo rural.

El número de refugiados sudaneses en la República Democrática del Congo aumentó de 22.000 a 24.000 en 1966, a causa de la llegada de una nueva corriente de refugiados. La mayoría de ellos están en la Provincia Oriental. A principios de 1967, se concertó un acuerdo entre los gobiernos del Congo y del Sudán con miras a facilitar la repatriación de los refugiados y de ayudar a los que no la desearan a asentarse en el interior del país. En junio de 1966, el ACNUR destinó 45.000 dólares del Fondo de Emergencia para permitir que los refugiados satisficieran sus necesidades inmediatas;

como resultado de una misión de información llevada a cabo por un representante del ACNUR que visitó la región en 1966, se estableció que era necesario incrementar esta suma a 50.000 dólares.

Senegal

El número de refugiados de la Guinea bajo administración portuguesa aumentó de 51.000 a 61.000, en 1966. Aunque continuaban siendo bien recibidos por la población local, se los había estimulado a asentarse en el interior del país, donde un programa en gran escala para su asentamiento está progresando bien gracias a los esfuerzos conjuntos del Gobierno de Senegal, el Gobierno de los Estados Unidos de América, el ACNUR y varios organismos voluntarios. La Oficina del Alto Comisionado asignó la suma de 200.000 dólares con cargo al programa en 1966, de la cual una proporción importante está destinada a asistencia médica. Hacia fines de 1966, casi dos tercios de la población refugiada había alcanzado el mismo nivel de vida que la población local; se espera que los demás también se encuentren en condiciones de bastarse a sí mismos hacia fines de 1967. El Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado aprobó una asignación de 140.000 dólares con cargo al programa de 1967 a fin de continuar el asentamiento y la integración en Senegal de los refugiados procedentes de la Guinea bajo administración portuguesa.

Tanzania

El número de refugiados rwandeses en Tanzania se mantuvo en un nivel de alrededor de 13.500, la mayoría de los cuales continuaban recibiendo ayuda internacional en las tres zonas de asentamiento de Mwesi, Karagwe y Muvenzi. El Alto Comisionado asignó la suma de 203.760 dólares en 1966 con miras a facilitar o consolidar el asentamiento de varios grupos en la región. Se realizó un progreso satisfactorio con respecto a los 3.000 refugiados rwandeses en las tierras altas de Mwesi y de los 2.300 en la región de Karagwe. En Muvenzi, merced a una reorganización de las parcelas destinadas al cultivo, los 6.500 refugiados de la zona tienen ahora suficientes tierras cultivables para subvenir a sus necesidades en un futuro muy cercano, y se espera poder reducir mucho en 1967 la cantidad de alimentos suministrada a los refugiados de las tres zonas por el Programa Mundial de Alimentos. Los refugiados se beneficiaron también en 1966 de diversos proyectos educativos y de capacitación financiados con contribuciones especiales.

A fines de 1966, el número de refugiados de Mozambique en Tanzania se calculaba en 19.000, contra 12.000 de principios de año. La llegada de otros 7.000 refugiados hizo necesario establecer una nueva zona de asentamiento rural en Muhukuro además de las de Rutamba y Lundo, en donde se han realizado, en general, progresos satisfactorios en el asentamiento de grupos anteriores. Además de la asignación de 35.700 dólares de su Fondo de Emergencia para socorrer a los grupos de Muhukuro y Lundo, el Alto Comisionado asignó la suma de 199.000 dólares con cargo a su programa ordinario de 1966 para el asentamiento de todos los refugiados provenientes de Mozambique en Tanzania, los que también se beneficiaron de proyectos educativos complementarios, financiados con fondos fiduciarios especiales ajenos al programa.

El Alto Comisionado también asignó 22.000 dólares con cargo a su programa de 1966 para facilitar el asentamiento rural de unos 500 refugiados congoleños y unos 150 malwianos en Pangale, y, para consolidar su asentamiento, se ha previsto una asignación de 8.000 dólares en el programa del ACNUR correspondiente a 1967.

Uganda

El número de refugiados de origen rwandés ascendió de 65.000 a 68.000. Más de la mitad de ellos, que están divididos entre siete zonas de asentamiento, recibieron ayuda de la comunidad internacional para su asentamiento en la agricultura o la ganadería. Una importante medida adoptada en este período fue la transferencia por parte del Gobierno de Uganda de un primer grupo de refugiados rwandeses del superpoblado valle de Oruchinga a una nueva zona de asentamiento en Kyangwali. El ACNUR destinó 55.320 dólares de su Fondo de Emergencia para ayudar al Gobierno a establecer los arreglos iniciales del asentamiento. También destinó el saldo de un proyecto de 1965 para la compra de semillas y la prestación de asistencia marginal en materia de enseñanza primaria para refugiados de otras zonas, cuyo asentamiento ha continuado sin dificultad. Se espera que, sino se presentan acontecimientos imprevistos tales como una sequía o la llegada de nuevos refugiados, los refugiados rwandeses en Uganda, 13.000 de los cuales recibían todavía raciones de víveres a fines de 1966, puedan bastarse a sí mismos dentro de poco tiempo.

Como consecuencia de la llegada de 12.000 refugiados y del retorno voluntario de otros 1.000, el número de refugiados sudaneses aumentó a 55.000, de los cuales 11.000 vivían en zonas de asentamiento en Nakapiririt, Onigo y Agago, donde recibían asistencia de la comunidad internacional. La llegada de nuevos refugiados a los varios centros en los cuales ya había grupos en proceso de asentamiento dificultó la organización de la asistencia adicional requerida y tornó necesaria la continuación de la ayuda internacional. El ACNUR ha previsto una asignación de 195.000 dólares en el programa de 1967 para tener en cuenta esta situación.

Asimismo, 242 refugiados sudaneses han podido aprovechar los proyectos de enseñanza y formación profesional financiados mediante contribuciones especiales.

Se realizaron progresos satisfactorios en las tres zonas, donde se están asentando unos 3.000 de los refugiados congoleños en el país. El ACNUR destinó en 1966, 60.000 dólares a tales efectos y en su programa para 1967 se incluye otra asignación de 32.450 dólares.

Zambia

El ACNUR destinó 760.000 dólares de su Fondo de Emergencia a una operación de socorro de urgencia organizada en Zambia para los refugiados de Angola, cuyo número en Zambia aumentó de unos 100 a 3.800 en 1966, a pesar del regreso de alrededor de 1.000 a su país de origen. Además, se incluyó la suma de 338.000 dólares en el programa ordinario del ACNUR para 1967 con el propósito de ayudar a dichos refugiados a asentarse en la agricultura en Lwatembo y Mankoya, zonas dedicadas a tal fin por las autoridades de Zambia.

A pesar de la llegada a Zambia de 1.000 nuevos refugiados de Mozambique durante el año, el número total de refugiados de este país en Zambia declinó considerablemente, de 5.000 a 1.800, como consecuencia de la repatriación voluntaria de unos 4.000. En la zona de Nyimba, donde se los establece en la agricultura, se están realizando progresos alentadores en lo tocante a su asentamiento, después de un comienzo bastante lento. El ACNUR ha retirado la suma de 5.000 dólares de su Fondo de Emergencia para suministrar socorro de urgencia a estos refugiados.

Refugiados europeos

Al 31 de diciembre de 1966, la financiación de los principales programas de ayuda del ACNUR, que habían sido formulados entre 1955 y 1963 para asistir a los "antiguos" refugiados europeos, había quedado finalmente asegurada, y se estaban ejecutando casi todos los proyectos restantes para terminarlos. Los refugiados que todavía necesitaban la asistencia de los principales programas de ayuda al 1° de enero de 1967 sumaban 7.400 personas, principalmente en Francia, la República Federal de Alemania y Grecia. En Francia, se están tomando las medidas necesarias para brindar cuidado permanente en instituciones a la mayoría de los refugiados no asentados, gran número de los cuales son impedidos. En la República Federal Alemana y en Grecia, la solución del problema depende en sumo grado de la vivienda. En Alemania, la suministrarán los programas nacionales de vivienda. En Grecia, la mayor parte de las viviendas requeridas se hallan en construcción.

En su 15° período de sesiones, celebrado en mayo de 1966, el Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado decidió que unos 2.100 de los "antiguos" refugiados europeos mencionados más arriba, para quienes todavía se estaban buscando soluciones, quedarían incorporados en el programa ordinario del ACNUR. Entre ellos había 1.150 refugiados en el Lejano Oriente, 350 de origen europeo en el Medio Oriente y 610 en Marruecos, muchos de los cuales esperaban la ocasión de reasentarse en otros países. Hacia fines de 1966, algunos así lo habían hecho.

Durante 1966, aproximadamente 6.700 refugiados de origen europeo fueron reconocidos como tales, en comparación con 10.000 en 1965. En su mayoría eran jóvenes y físicamente aptos, y varios miles de ellos pudieron emigrar, con la ayuda de los gobiernos, del Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas y de organismos voluntarios, a países de ultramar, en casi todos los casos. Varios países europeos aceptaron también a los refugiados, incluso los impedidos, para su asentamiento definitivo, aunque los cambios de la situación del mercado del trabajo en varios de estos países disminuyó la intensidad de la corriente inmigratoria.

Durante 1966, el ACNUR ayudó al reasentamiento de 199 refugiados impedidos y financió o cofinanció el reasentamiento de 630 refugiados, de los cuales 250 eran impedidos, mediante la migración, a un costo de 300.000 dólares para el programa ordinario del ACNUR correspondiente a 1966.

Con cargo al programa del ACNUR de 1966 se brindó asistencia a más de 3.000 refugiados europeos para su integración en el país de asilo; la mayoría de

ellos se beneficiaron de la ayuda para el asentamiento y la consecución de vivienda. Durante el mismo período, algunos de los refugiados europeos pudieron establecerse por sus propios medios.

En su 17° período de sesiones, el Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado examinó un nuevo estudio de los problemas de los refugiados gravemente impedidos. Este nuevo estudio demostró que el número de tales casos en Europa se había reducido a 213, para 111 de los cuales se aconsejó el reasentamiento como solución. El Comité Ejecutivo exhortó a los países de inmigración a disminuir aún más la rigidez de los criterios para la admisión de refugiados, y recomendó que en los países con sistemas de previsión social bien desarrollados se realizarán renovados esfuerzos para suministrar rehabilitación adecuada a los gravemente impedidos. Resta todavía el problema de los refugiados impedidos en América Latina.

Se han hecho bastante progresos, particularmente en Austria, la República Federal de Alemania, Francia e Italia, en lo relativo a traspasar del ACNUR a los gobiernos y a los gobiernos voluntarios la responsabilidad de proporcionar servicios de asesoramiento a los refugiados.

Otros grupos de refugiados

Refugiados chinos

Según cálculos recientes efectuados por las autoridades locales, a fines de 1966 había cerca de 74.000 refugiados chinos en Macao. El ACNUR, de conformidad con su política, que ha consistido siempre en apoyar los proyectos que creen oportunidades de empleo y faciliten la rehabilitación de los refugiados, concentró su asistencia en Macao en proyectos de vivienda, formación profesional y educación. Con esa finalidad, se asignó la suma de 184.000 dólares en el programa ordinario del ACNUR de 1966.

Se efectuaron nuevos progresos en un proyecto relativo a la construcción de 242 apartamentos en la isla de Taipa, aunque se aplazaron los trabajos de otros proyectos de viviendas para Taipa y Macao debido a los acontecimientos que ocurrieron a fines de año. El ACNUR contribuyó también con una suma global de 25.000 dólares a la construcción de dos centros de formación profesional y de capacitación en artesanía y asignó en 1966 la mitad del crédito de 30.000 dólares concedido con destino a la construcción de un hostel para muchachas refugiadas. El centro de rehabilitación social de toxicómanos de la isla de Taipa, para el cual el ACNUR asignó la suma de 9.000 dólares, quedó prácticamente terminado a fines de 1966, mientras que el funcionamiento de un fondo rotatorio de 10.000 dólares creado a objeto de otorgar pequeños préstamos para el establecimiento en el comercio se inició a principios de 1967.

Los refugiados chinos en Hong Kong siguieron beneficiándose de los proyectos globales de desarrollo que llevan a cabo las autoridades de Hong Kong para toda la población.

Refugiados cubanos

Se estima que 6.680 cubanos llegaron a España durante 1966; 2.423 de ellos han sido aceptados por otros países; prácticamente todos por los Estados Unidos,

que es donde la mayoría desea reasentarse, para reunirse con sus parientes radicados en ese país. Después de disminuir la proporción de refugiados que podían emigrar a los Estados Unidos, a raíz de la entrada en vigor a fines de 1965 de las enmiendas hechas a la ley de inmigración y naturalización, se ha registrado un aumento del número de visados expedidos a causa de una decisión adoptada para hacer menos rígidos los procedimientos administrativos relativos a la admisión de refugiados. El número de visados, sin embargo, es todavía inferior al de solicitudes, y el número promedio de llegadas cada día supera al de salidas. Se estima que a fines de 1966 había 3.800 cubanos esperando una oportunidad para emigrar de España. En junio de 1967 y según se informó, su número había ascendido a unos 6.000.

Como siempre, el ACNUR prestó ayuda al Gobierno de España y a las organizaciones voluntarias para sufragar los gastos del alojamiento temporario de los recién llegados durante el período inmediatamente posterior a su llegada a España. Con tal motivo, en el programa de 1966 se asignó la suma de 14.000 dólares para conceder pequeños subsidios. El ACNUR asignó también la suma de 21.700 dólares para proporcionar servicios de asesoramiento a los recién llegados a fin de ayudarlos a prepararse para su inmigración a los países de reasentamiento o su reasentamiento en España. Se asignó la suma de 85.000 dólares para la integración local de un número limitado de cubanos que decidieron reasentarse en España, pero pueden hacerlo sin asistencia internacional.

En América Latina, se proporcionó asistencia urgente por valor de unos 22.000 dólares a más de 900 cubanos en tránsito por países latinoamericanos para reasentarse en los Estados Unidos.

Refugiados tibetanos

De los 7.000 refugiados tibetanos que, según cálculos recientes, vivían en Nepal, unos 2.850 recibieron en 1966 asistencia del programa del ACNUR a los efectos de su radicación. Las autoridades locales ofrecieron el terreno necesario para la construcción de viviendas para los refugiados. La Asociación Suiza de Asistencia Técnica, el ACNUR y diversas organizaciones voluntarias continuaron colaborando en un programa cuyos objetivos abarcan el suministro de viviendas, la instalación de talleres y de un centro para fines múltiples y la organización de centros artesanales para poner a los refugiados en condiciones de bastarse a sí mismos. Como primer resultado de tal política, la mayoría de los refugiados en buenas condiciones físicas de casi todos los centros de reasentamiento ya no necesitaban raciones alimentarias a fines del año.

Además de los proyectos que se mencionan en el párrafo anterior, elaborados con la Cruz Roja Nepalesa en 1965, se inició durante ese año un pequeño proyecto destinado a facilitar asistencia médica a los refugiados tuberculosos, para el cual se asignaron 5.000 dólares conforme al programa.

A fin de consolidar el establecimiento de los 2.500 refugiados que viven en asentamientos organizados, el Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado asignó 71.000 dólares como parte del programa ordinario para 1967.

El Gobierno de la India facilita asistencia a unos 45.000 refugiados tibetanos en la India, mientras que el Comité Central de Socorro de la India coordina la ayuda de las organizaciones voluntarias. El ACNUR puso a disposición de las autoridades indias contribuciones procedentes de fuentes privadas destinadas a asistencia complementaria; además, en el programa ordinario del ACNUR para 1967 se incluyó una asignación de 9.000 dólares, a fin de continuar con el programa médico en la zona de Simla que se cumple por conducto de la Sociedad de la Cruz Roja India. Se espera que muchos de los refugiados tibetanos que no se han asentado aún puedan beneficiarse de los fondos recaudados en la Campaña del Refugiado Europeo de 1966.

Refugiados khmers

Según las fuentes oficiales camboyanas, unos 17.000 refugiados khmers entraron al país durante el período comprendido entre 1962 y 1966. Además de la ayuda suministrada por las autoridades locales, se destinaron 10.000 dólares del Fondo de Emergencia del ACNUR con el propósito de establecer tres centros de recepción para estos refugiados. En 1967 se hizo por conducto del ACNUR otra contribución gubernamental especial de más de 23.000 dólares para ayudar a dichos refugiados.

Refugiados de Zanzíbar

A fines de 1966, el número de residentes de Zanzíbar de origen árabe que habían abandonado su país a efectos de radicarse en la península arábiga pasaba de 200. El Alto Comisionado destinó 10.000 dólares para ayudar a la integración de tales refugiados en su nueva comunidad local.

FINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES DEL PROGRAMA DEL ALTO COMISIONADO

Al 31 de mayo de 1967, un total de 52 gobiernos de Estados Miembros de las Naciones Unidas o miembros de las agencias especializadas habían entregado, anunciado o prometido contribuciones que ascendían a 3.123.975 dólares con destino al programa ordinario del ACNUR de 1966, y otras fuentes aportaron la suma de 365.434 dólares. Faltaban, pues, 679.151 dólares para alcanzar el objetivo financiero de ese programa, que había sido aumentado de 3.900.000 dólares a 4.168.560 dólares por el Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado en su 15º período de sesiones. Teniendo en cuenta las reducciones de los créditos aprobados en el programa de 1966 y el aumento de las contribuciones provenientes del sector no gubernamental, se aseguró al fin la financiación de ese programa durante la primera parte de 1967.

En 1966, el Alto Comisionado tuvo también que retirar un total de 246.253 dólares de su Fondo de Emergencia a efectos de financiar la ayuda urgente a otros refugiados, particularmente en África.

En el transcurso de 1966, se pagó o prometió al ACNUR la suma de 559.922 dólares como fondos fiduciarios especiales para operaciones no comprendidas en el programa, lo que hizo posible la financiación de varios proyectos complementarios de asistencia a refugiados.

El interés del público por los refugiados aumentó considerablemente con la dedicación del Día de las Naciones Unidas de 1966 a la causa de los refugiados y la iniciativa de un grupo de organizaciones voluntarias, presididas por su Alteza Real el Príncipe Bernardo de los Países Bajos, con el fin de recaudar fondos para los refugiados, especialmente los refugiados en Asia y África. La Campaña Europea en favor de los Refugiados se inició en 18 países europeos. Algunas organizaciones privadas de Australia y Nueva Zelanda también se asociaron a esta iniciativa. Si bien la Campaña obtuvo excelentes resultados, los fondos recaudados, de conformidad con el deseo de la mayoría de los donantes, se destinaron en su mayor parte a la asistencia a los refugiados no comprendidos en el programa del ACNUR.

El 31 de mayo de 1967, había sido entregada, prometida o condicionalmente prometida por diversos gobiernos la suma de 2.997.839 dólares como aporte a la consecución del objetivo ampliado de 4.846.130 dólares del programa ordinario del ACNUR para 1967, aprobado por el Comité Ejecutivo en su 17º período de sesiones. Aunque en 1967 se espera una importante contribución de fuentes no gubernamentales, el Alto Comisionado está empeñado en obtener contribuciones gubernamentales en proporción al objetivo de sus programas de fondos de contribuciones voluntarias y, en consecuencia, ha dirigido un llamamiento a los gobiernos con el fin de obtener una más amplia y mayor participación financiera en tales programas, de conformidad con las disposiciones de la resolución 2197 (XXI) de la Asamblea General.

4. Sistemas de consultas con las organizaciones no gubernamentales

El número de organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social asciende actualmente a 375. De éstas, 12 pertenecen a la categoría A, 143 a la categoría B y 220 están inscritas en el registro del Secretario General.

Las organizaciones no gubernamentales presentaron cincuenta y tres exposiciones escritas, que se distribuyeron como documentos del Consejo, de sus comisiones y de otros órganos auxiliares. El Comité del Consejo encargado de las Organizaciones no Gubernamentales, el Consejo, sus comisiones y otros órganos auxiliares concedieron en diversas ocasiones audiencias a representantes de las diversas organizaciones.

El Consejo, en su resolución 1225 (XLII), pidió al Comité encargado de las Organizaciones no Gubernamentales que revisara los criterios que rigen el reconocimiento de organizaciones no gubernamentales como entidades consultivas; volviera a definir, según procediera, los requisitos para cada categoría; revisara, teniendo en cuenta sus consecuencias financieras, las facilidades y las prerrogativas de que disfrutaran esas organizaciones, y procediera a examinar la enunciación

de las reglas para la suspensión o retiro de la condición de entidad consultiva. Además, pidió al Comité que solicitara de las organizaciones no reconocidas como entidades consultivas que presentaran información sobre sus actividades, y sobre la fuente de los fondos con que costean dichas actividades y que le transmitiera su informe a más tardar en el 44º período de sesiones. Asimismo, pidió al Comité que a base de cualquier modificación aprobada por el Consejo, examinara las actividades de cada organización a fin de recomendar cualquier reclasificación que fuera aconsejable, y examinara en particular si alguna organización estaba sujeta a influencia indebida por parte de los Estados Miembros, y de ser así, recomendará qué medida debería adoptar el Consejo.

5. Hermanamiento de ciudades

La Asamblea General, en su resolución 2058 (XX), pidió al Consejo Económico y Social que, en colaboración con las organizaciones no gubernamentales pertinentes reconocidas como entidades consultivas, y teniendo en cuenta las decisiones que adoptara la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, preparara un programa de medidas merced al cual las Naciones Unidas y dicha Organización pudieran adoptar disposiciones para estimular el establecimiento del mayor número posible de ciudades gemelas, y que lo presentara a la Asamblea General en su vigésimo segundo período de sesiones. Pidió también al Secretario General que promoviera esa forma de cooperación.

De conformidad con lo expresado, el Secretario General presentó al Consejo en su 42º período de sesiones un informe en que figuraba una reseña de la labor del PNUD y de la UNESCO relativa al hermanamiento de ciudades y la cooperación intermunicipal, junto con declaraciones sobre este tema formuladas por la Federación Mundial de Ciudades Hermanadas y de la Unión Internacional de Autoridades Locales.

El Consejo tuvo ante sí una propuesta relativa a la asistencia financiera para la Federación Mundial de Ciudades Hermanadas y una propuesta referente a la probable institución de un fondo para el hermanamiento de ciudades.

El Consejo, en su resolución 1217 (XLII), recordando que la Asamblea General había definido al hermanamiento de ciudades como medio de cooperación internacional, sugirió a los gobiernos que invitaran a las organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas a participar en la formulación y ejecución de los proyectos del PNUD en que el hermanamiento de ciudades pudiera desempeñar una función importante, e invitó a las organizaciones no gubernamentales competentes a que pidieran a las ciudades que presentaran sus planes de hermanamiento de ciudades a sus gobiernos para que éstos los consideraran al presentar solicitudes de asistencia al PNUD.

REFERENCIAS

A. Cuestiones generales y métodos relativos al desarrollo

1. La situación económica y social en el mundo

EL DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

Para los documentos pertinentes, véase:

- a) *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 41º período de sesiones, Anexos*, tema 5 del programa; y *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Anexos*, tema 39 del programa;
- b) E/4362, E/4376.

LA SITUACIÓN ECONÓMICA MUNDIAL

Para los documentos pertinentes, véase:

- a) *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 41º período de sesiones, Anexos*, tema 2 del programa;
- b) *Estudio Económico Mundial, 1966*: Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 67.II.C.1.

LA SITUACIÓN SOCIAL EN EL MUNDO

El informe correspondiente al 18º período de sesiones de la Comisión de Desarrollo Social (6 a 23 de marzo de 1967) figura en *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 42º período de sesiones, Suplemento No. 5 y Corr.1* (E/4324 y Corr.1).

Para otros documentos pertinentes, véase:

- a) *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 41º período de sesiones, Anexos*, tema 17 del programa; *ibid.*, 42º período de sesiones, *Anexos*, tema 10 del programa; *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Anexos*, tema 54 del programa;
- b) *Informe sobre la situación social en el mundo, 1965*: Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 66.IV.7.

2. La situación demográfica mundial

Para los documentos pertinentes y la lista de las actas correspondientes, véase: *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Anexos*, tema 46 del programa.

3. Asistencia económica internacional a los países menos desarrollados

LA CORRIENTE INTERNACIONAL DE CAPITAL HACIA LOS PAÍSES MENOS DESARROLLADOS

Para los documentos pertinentes, véase:

- a) *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 41º período de sesiones, Anexos*, tema 8 del programa; y *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Anexos*, tema 40 del programa;
- b) *Medición de la corriente de recursos hacia los países en desarrollo*: Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 67.II.D.17;
- c) E/4371 y Corr.1, E/4374, E/4375.

LA AYUDA MULTILATERAL EN MATERIA DE ALIMENTOS

Para los documentos pertinentes, véase:

- a) *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 41º período de sesiones, Anexos*, tema 16 del programa; y *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Anexos*, tema 50 del programa;
- b) E/4352.

POLÍTICA E INSTITUCIONES DE FINANCIACIÓN

Para los documentos pertinentes, véase:

- a) *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 41º período de sesiones, Anexos*, tema 8 del programa; y *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Anexos*, tema 40 del programa;
- b) *Créditos de exportación y financiación del desarrollo, Partes I y II*: E/4374 y Corr.1 y Add.1.

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO DE LA CAPITALIZACIÓN

Para los documentos pertinentes y la lista de las actas correspondientes, véase *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 41º período de sesiones* (continuación), *Anexos*, tema 1 del programa; y *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Anexos*, tema 38 del programa.

4. Planificación y proyecciones del desarrollo

Para el informe del Comité de Planificación del Desarrollo correspondiente a su segundo período de sesiones (10 a 20 de abril de 1967), véase *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 43º período de sesiones, Suplemento No. 7* (E/4362).

Para otros documentos pertinentes, véase:

- a) *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 41º período de sesiones, Anexos*, tema 7 del programa;
- b) *Planning the External Sector: Techniques, Problems and Policies*: Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 67.II.B.5;
- c) *Estudio Económico Mundial 1966*: Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 67.II.C.1.

5. El presupuesto como instrumento para el programa del desarrollo económico

- a) *Manual de Presupuesto por programas y por realizaciones*: Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 66.XVI.1;
- b) *Government Budgeting and Economic Planning in Developing Countries*: Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 67.XVI.1.
- c) *Statistical Yearbook, 1966*: Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 67.XVII.1.

6. Aplicación de la ciencia y la tecnología en beneficio de las naciones menos desarrolladas

El cuarto informe del Comité Asesor sobre la aplicación de la ciencia y la tecnología al desarrollo figura en *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 42º período de sesiones, Suplemento No. 8* (E/4300).

Para otros documentos pertinentes, véase:

- a) *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 41º período de sesiones, Anexos*, tema 12 del programa; *ibid.*, 41º período de sesiones (continuación), *Anexos*, tema 14 del programa; *ibid.*, 42º período de sesiones, *Anexos*, tema 5 del programa; y *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, tema 12 del programa*;
- b) E/4343, E/AC.52/L.27, E/AC.52/L.29.

7. Patentes y transmisión de la tecnología

Para los documentos y la lista de las actas correspondientes, véase: *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 42º período de sesiones, Anexos*, tema 5 del programa.

8. Consecuencias económicas y sociales del desarme

Para los documentos pertinentes y la lista de las actas correspondientes, véase: *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social*, 41° período de sesiones, Anexos, temas 3 y 17 del programa; *ibid.*, 42° período de sesiones, Anexos, temas 8 y 10 del programa; y *Documentos Oficiales de la Asamblea General*, vigésimo primer período de sesiones, Anexos, tema 44 del programa.

9. Preparación y suministro de información estadística básica

El informe de la Comisión de Estadística correspondiente a su 14° período de sesiones (10 a 20 de octubre de 1966) figura en *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social*, 42° período de sesiones, Suplemento No. 3 (E/4283).

Para los documentos pertinentes y la lista de las actas oficiales, véase *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social*, 42° período de sesiones, Anexos, tema 7 del programa.

World Weights and Measures: Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 66.XVII.3.

Demographic Yearbook, 1966: Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 67.XIII.1.

Statistical Yearbook, 1966: Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 67.XVII.1.

Yearbook of International Trade Statistics, 1965: Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 67.XVII.2.

Principles and Recommendations for the 1970 Population Censuses: Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 67.XVII.3.

Principles and Recommendations for the 1970 Housing Censuses: Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 67.XVII.4.

Growth of World Industry, 1953-1965: Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 67.XVII.10.

Sample Surveys of Current Interest (11th report): Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 67.XVII.11.

Yearbook of National Accounts Statistics, 1966: Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 67.XVII.14.

Methods of Estimating Housing Needs: Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 67.XVII.15.

World Energy Supplies, 1962-1965: Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 67.XVII.18.

1965 World Trade Annual (4 tomos) y *Supplement* (5 tomos). Publicación comercial de Walker and Company con informaciones suministradas por la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas.

Population and Vital Statistics Report. Statistical Papers, Series A. Vol. XVIII, Nos. 3-4 (información disponible al 1° de julio y al 1° de octubre de 1966); Vol. XIX, Nos. 1-2 (información disponible al 1° de enero y al 1° de abril de 1967).

Commodity Trade Statistics. Statistical Papers, Series D. Vol. XIV (información de 1964), No. 26; Vol. XV (información de 1965), Nos. 15-28; Vol. XVI (información de 1966), Nos. 1-10.

Monthly Bulletin of Statistics. Vol. XX, Nos. 7-12 (julio a diciembre de 1966); Vol. XXI, Nos. 1-6 (enero a junio de 1967).

Statistical Notes: ST/STAT/Series B/30.

B. Preparación y utilización de recursos humanos

El informe de la Comisión de Desarrollo Social correspondiente a su 18° período de sesiones (6 a 23 de marzo de 1967) figura en *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social*, 42° período de sesiones, Suplemento No. 5 y Corr.1 (E/4323 y Corr.1).

Para otros documentos pertinentes, véase:

- Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social*, 41° período de sesiones, Anexos, temas 3 y 17 del programa; *ibid.*, 42° período de sesiones, Anexos, temas 8 y 10 del programa; y *Documentos Oficiales de la Asamblea General*, vigésimo primer período de sesiones, Anexos, temas 52 y 54 del programa;
- Los métodos de desarrollo de la comunidad en la colonización agraria*: Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 66.IV.5;
- E/4353 y Add.1; E/CN.5/409 y Adiciones, E/CN.5/412.

C. Desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales

Para los documentos pertinentes, véase:

- Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social*, 41° período de sesiones, Anexos, tema 11 del programa; *ibid.*, 41° período de sesiones (continuación), Anexos, tema 3 del programa; *ibid.*, 42° período de sesiones, Anexos, tema 3 del programa; y *Documentos Oficiales de la Asamblea General*, vigésimo primer período de sesiones, Anexos, tema 94 del programa;
- Small-scale Power Generation*: Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 67.II.B.7.

D. Vivienda, construcción y planificación

El informe del Comité de Vivienda, Construcción y Planificación correspondiente a su cuarto período de sesiones (5 a 16 de septiembre de 1966), figura en *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social*, 42° período de sesiones, Suplemento No. 4 (E/4287).

Para otros documentos pertinentes, véase:

- Informe de la Comisión de Desarrollo Social correspondiente a su 18° período de sesiones (6 a 23 de marzo de 1967): *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social*, 42° período de sesiones, Suplemento No. 5 y Corr.1 (E/4324 y Corr.1);
- Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social*, 41° período de sesiones, Anexos, tema 18 del programa; *ibid.*, 41° período de sesiones (continuación), Anexos, tema 4 del programa; e *ibid.*, 42° período de sesiones, Anexos, tema 9 del programa;
- Coordinación modular en la construcción — Asia, Europa y las Américas*: Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 66.IV.4.

E. Creación de servicios básicos

1. Viajes, transportes y comunicaciones

Para los documentos pertinentes, véase:

- Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social*, 41° período de sesiones, Anexos, tema 20 del programa; *ibid.*, 42° período de sesiones, Anexos, temas 4 y 28 del programa; y *Documentos Oficiales de la Asamblea General*, vigésimo primer período de sesiones, Anexos, tema 53 del programa;
- Transporte por tuberías de materiales a granel o en recipientes*: Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 66.VIII.1;
- Examen de algunos aspectos del sistema de carga unificada para el transporte de carga: aplicación a los países en desarrollo*: Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 66.VIII.2;
- Transport of Dangerous Goods* (1966): Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 67.VIII.2 (3 tomos);
- The Turn-Around Time of Ships in Port*: Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 67.VIII.5.

2. Agrimensura y cartografía

International Map of the World on the Millionth Scale. Report for 1965: Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 66.I.27.

F. Administración pública**1. Servicios de asesoramiento, formación e investigaciones**

Para los documentos pertinentes, véase *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social*, 42° período de sesiones, *Anexos*, tema 6 del programa.

Handbook of Civil Service Laws and Practices: Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 66.II.H.2.

Curso de orientación en sistematización mecanizada de datos: Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 66.II.H.3.

Local Government Personnel Systems: Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 67.II.H.1.

The Administration of Economic Development Planning: Principles and Fallacies: ST/TAO/M/32.

Droit administratif et développement national: ST/TAO/M/34.

Report of the United Nations Seminar on Organization and Administration of Public Enterprises: ST/TAO/M/35; y *Selected Papers*: ST/TAO/M/36.

Role of Public Enterprises in Plan Formulation and Plan Implementation in Centrally Planned Economies: ST/TAO/M/37.

Programa de las Naciones Unidas en materia de administración pública: Informe de la Reunión de Expertos: ST/TAO/M/38.

2. Envío de personal de ejecución, administración y operaciones

Para los documentos pertinentes y la lista de las actas correspondientes, véase *Documentos Oficiales de la Asamblea General*, vigésimo primer período de sesiones, *Anexos*, tema 49 del programa.

G. Coordinación y relaciones con los organismos especializados y con el Organismo Internacional de Energía Atómica

Para los documentos pertinentes, véase:

- a) *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social*, 41° período de sesiones, *Anexos*, tema 3 del programa; *ibid.*, 41° período de sesiones (continuación), *Anexos*, tema 10 del programa; y *Documentos Oficiales de la Asamblea General*, vigésimo primer período de sesiones, *Anexos*, tema 52 del programa;

- b) E/4337.

H. Cuestiones sociales**1. Asistencia en casos de desastres naturales**

Para los documentos pertinentes, véase *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social*, 42° período de sesiones, *Anexos*, tema 29 del programa.

2. Fiscalización de estupefacientes

El informe de la Comisión de Estupefacientes correspondiente a su 21° período de sesiones (5 a 21 de diciembre de 1966) figura en *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social*, 42° período de sesiones, Suplemento No. 2 (E/4294).

Para los documentos pertinentes y la lista de las actas correspondientes, véase *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social*, 42° período de sesiones, *Anexos*, tema 17 del programa.

Informe del Comité Central Permanente de Estupefacientes, sobre las actividades del Comité en 1966: Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 66.XI.9 (E/OB/22).

Boletín de Estupefacientes: Vol. XVIII, Nos. 2, 3 y 4, y Vol. XIX, No. 1.

3. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

El informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados correspondiente al período comprendido entre el 1° de abril de 1966 y el 31 de marzo de 1967 figura en *Documentos Oficiales de la Asamblea General*, vigésimo segundo período de sesiones, Suplementos Nos. 11 (A/6711/Rev.1) y 11A (A/6711/Rev.1/Add.1).

Para otros documentos pertinentes, véase *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social*, 41° período de sesiones, *Anexos*, tema 27 del programa; *ibid.*, 41° período de sesiones (continuación), *Anexos*, tema 13 del programa; y *Documentos Oficiales de la Asamblea General*, vigésimo primer período de sesiones, *Anexos*, temas 55 y 85 del programa.

4. Sistema de consultas con las organizaciones no gubernamentales

Para los documentos pertinentes, véase *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social*, 41° período de sesiones, *Anexos*, tema 29 del programa; e *ibid.*, 42° período de sesiones, *Anexos*, tema 20 del programa.

5. Hermanamiento de ciudades

Para los documentos pertinentes, véase *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social*, 42° período de sesiones, *Anexos*, tema 18 del programa.

CAPITULO IX

Comisiones económicas regionales

Las cuatro comisiones económicas regionales se reunieron a comienzos de 1967. Los períodos de sesiones de la Comisión Económica para Europa (CEPE) y de la Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente (CEPALO) señalaron el vigésimo aniversario de dichas comisiones. En 1968, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) cumplirá 21 años de existencia, y la Comisión Económica para África (CEPA) diez años. Por lo tanto, tal vez resulte provechoso en esta ocasión realizar una breve reseña a fin de evaluar las actividades llevadas a cabo por las comisiones para satisfacer las necesidades de sus regiones respectivas.

La eficacia de las comisiones económicas regionales ha aumentado de varias maneras. Primero, en los años transcurridos desde su creación su alcance geográfico se ha ampliado. Por ejemplo, el número de miembros de la CEPALO ha aumentado de diez en 1947 a 27 en 1966. Del mismo modo, ha aumentado el número de miembros de la CEPA, al lograr la independencia muchos países africanos. El número de países miembros de la CEPAL ha aumentado también en los últimos años con la inclusión de los países del Caribe recientemente independizados. Aunque el ideal de la universalidad en la composición está aún por lograrse, las comisiones han llegado a ser las tribunas más universales para el examen de las cuestiones económicas y sociales de sus regiones respectivas. A este respecto, el Secretario General, en su mensaje a la CEPE con motivo de su vigésimo aniversario, reiteró la opinión expresada en la introducción a su última memorial anual de que se ha de dar a todos los países el estímulo y la posibilidad de seguir más de cerca los trabajos de la Organización por intermedio de los diversos órganos de las Naciones Unidas, incluidas las comisiones económicas regionales.

El siguiente elemento de importancia ha sido que en los programas de trabajo de las comisiones económicas regionales se ha pasado a conceder especial atención a los programas operacionales que prestan asistencia directa a los países de las respectivas regiones en lugar de concedérsela a los estudios encaminados a la recolección y difusión de datos como se hacía anteriormente. Esto es tan cierto con respecto a Europa, la región más desarrollada, como con respecto a las otras tres regiones. El programa de trabajo de la CEPE, por ejemplo, ha ayudado a la expansión del comercio entre el oriente y el occidente, así como a la participación de ambos grupos en los conocimientos técnicos, particularmente en esferas tales como el desarrollo de métodos de planificación. En los programas de trabajo de la CEPA, la CEPALO y la CEPAL se han dado importancia cada vez mayor a los proyectos de repercusión regional o subregional. Algunos de estos proyectos operacionales, tales como los bancos regionales de desa-

rollo y los institutos regionales de formación de planificadores económicos y sociales, han servido para concretar en instituciones de alcance regional la estructura del desarrollo. El desarrollo de la cuenca del Bajo Mekong y los estudios geofísicos de la plataforma submarina asiática son ejemplos de los esfuerzos subregionales para fomentar la cooperación entre los países con miras al desarrollo económico y social.

La creación de instituciones regionales y subregionales ofrece también oportunidades para la cooperación internacional. El capital del Banco Asiático de Desarrollo, que inició sus operaciones en diciembre de 1966, está formado mediante contribuciones de los países desarrollados y en desarrollo de Asia, así como de los países en desarrollo de Europa y América. Este tipo de cooperación, agrupada en torno a instituciones muy necesarias, debe ser estimulado por las Naciones Unidas en sus esfuerzos por fomentar el desarrollo económico y social de los países en desarrollo, que constituyen las dos terceras partes del mundo. Estos esfuerzos deberán intensificarse en el próximo decenio, especialmente porque el Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo no ha logrado el éxito esperado, y las cuatro comisiones económicas regionales y la Oficina de Asuntos Económicos y Sociales en Beirut (Naciones Unidas) tienen en realidad una función vital que desempeñar en dichos esfuerzos. Como el Secretario General lo señalara en su mensaje a la CEPALO en oportunidad de su reciente período de sesiones celebrado en Tokio, las comisiones económicas regionales son los catalizadores, los servicios capacitantes y los coordinadores de la cooperación subregional, regional e internacional.

La CEPE y la CEPALO publicaron declaraciones con motivo de su vigésimo aniversario. En la declaración de la CEPE se hacía hincapié en el creciente desarrollo de las buenas relaciones entre todos los Estados europeos y se subrayaba la importancia de la cooperación económica. Los miembros de la CEPE declararon que se comprometerían a contribuir por todos los medios posibles al mayor desarrollo de la cooperación comercial, económica, científica y técnica, tanto en los aspectos tradicionales como en los nuevos ámbitos en que dicha cooperación es necesaria sobre una base mutuamente provechosa y a largo plazo, habida cuenta de las posibilidades de cooperación multilateral. Destacaron también la conveniencia de fortalecer las relaciones económicas con los países de otras regiones y la necesidad de fomentar el desarrollo económico en todo el mundo. En la declaración aprobada en su 23º período de sesiones, la CEPALO reconoció la imperiosa necesidad de satisfacer las legítimas esperanzas de los pueblos de Asia con respecto a niveles de vida más elevados y exhortó a los países desarrollados y en desarro-

llo a que adoptaran medidas y políticas que estén acordes con los objetivos y las esperanzas de los países en desarrollo. Esas declaraciones indican que a pesar de la multitud de diferencias que existen entre ellas, hay en las distintas regiones una comprensión de la necesidad de trabajar en favor del establecimiento de lazos económicos y sociales más estrechos, tanto en el plano regional como en el internacional.

Cada comisión ha establecido su propio orden de prioridades y su propia estrategia de desarrollo con arreglo a la situación imperante en su respectiva región. Por ejemplo, la CEPAL ha prestado asistencia directa a la secretaría del Mercado Común Centroamericano, y la CEPALO actúa como secretaría del Consejo Asiático de Desarrollo Industrial. Las comisiones han podido satisfacer también necesidades regionales mediante el estímulo dado a los grupos económicos subregionales, como en África y Asia, y mediante el apoyo a la integración regional, como en el caso de la CEPAL.

Las comisiones económicas regionales han recogido experiencia de valor incalculable en materia de industria, recursos naturales, recursos humanos, agricultura, y comercio y finanzas, especialmente en relación con el desarrollo económico y social de las naciones en desarrollo. Las comisiones actúan como puntos focales de la aplicación efectiva de los programas prácticos relacionados con estas esferas, y en el futuro será menester reforzar adecuadamente sus esfuerzos en este sentido. Con el establecimiento de la UNCTAD y de la ONU-DI, se está concediendo especial atención a la coordinación de las actividades de estas instituciones recientemente creadas con los programas que actualmente ejecutan las comisiones económicas regionales. La cooperación efectiva entre todos los organismos de las Naciones Unidas cuyo cometido se relaciona con el desarrollo económico y social, es fundamental para el logro, dentro de un plazo mínimo, de los objetivos económicos y sociales fijados por la Carta.

A. Comisión Económica para Europa

En su 22º período de sesiones, celebrado en abril de 1967, la Comisión Económica para Europa realizó una reunión conmemorativa en el plano ministerial para celebrar su vigésimo aniversario y en dicha reunión se aprobó por unanimidad una declaración en la que se formulaban las directivas principales para la labor futura de la Comisión con miras a fortalecer la cooperación entre los países miembros y extenderla a nuevos campos de actividades. Además, se aprobaron resoluciones sobre los siguientes temas: la actividad estadística de la Comisión; el trabajo del Comité de Fomento del Comercio; las actividades de la Comisión en materia de normalización; la productividad de la mano de obra; la convocación de una reunión internacional sobre el medio ambiente y su influencia en la sociedad y en el desarrollo de la economía nacional; la aplicación de métodos matemáticos-económicos modernos y de sistemas de computadoras a la investigación económica; el estudio de las tendencias económicas a largo plazo en la región de la CEPE y del desarrollo de la cooperación; los programas de trabajo de la Comisión; la cooperación entre la CEPE y la ONU-DI para el desarrollo industrial, el turismo las actividades de la Comisión relacionadas con los preparativos para el segundo período de sesiones de la UNCTAD; el establecimiento de un órgano encargado de examinar los pro-

blemas relativos a los recursos hidráulicos y a la contaminación de las aguas; la investigación científica y tecnológica; la cooperación científica y tecnológica; el trabajo de la Comisión relacionado con la industria química; y el programa de trabajo de la Comisión para 1967/1968.

El Comité de Problemas Agrícolas examinó la evolución de la agricultura europea y de las políticas y del comercio agrícola en 1956 y en 1966, y consideró en forma detallada las condiciones del mercado y las perspectivas a corto plazo con respecto a algunos de los productos agropecuarios más importantes. Se continuó la publicación del examen anual de la situación agrícola de Europa a finales del año y de los informes anuales sobre precios de los productos agrícolas y de los fertilizantes y sobre los cambios recientes producidos en el comercio de productos agropecuarios. En 1967 se publicaron dos estudios realizados por la secretaría en relación con la racionalización de las explotaciones agrícolas — clasificación económica de las explotaciones agrícolas y racionalización de las mismas según su tamaño. Además, el Comité y la FAO organizaron en forma conjunta un simposio sobre los aspectos económicos del empleo de fertilizantes. Se organizaron varias giras de estudios y visitas sobre el terreno, incluida una gira de estudios por Francia, realizada en mayo de 1966, por el Grupo de Trabajo sobre la mecanización de la agricultura.

El Comité del Carbón emprendió varios estudios nuevos de los factores que afectan la estructura de la industria europea del carbón, tales como los nuevos métodos para incrementar la productividad, en particular, mediante la automatización de las operaciones de extracción del carbón; los métodos avanzados de explotación minera a cielo abierto; las tendencias y la estructura de las inversiones y de los costos y su influencia en las posibilidades competitivas del carbón y la publicación de un boletín anual de estadísticas del carbón para Europa. El Comité del Carbón organizó varios simposios y giras de estudios, incluida una gira de estudios a los Estados Unidos, una reunión de directores de institutos nacionales de investigación minera celebrada en la URSS y un simposio sobre el uso de computadoras en la industria minera del carbón celebrado en el Reino Unido.

El Comité de Energía Eléctrica continuó examinando la situación y las perspectivas de la industria de la energía eléctrica en Europa, así como el estado de la electrificación rural. Se preparó un informe acerca del simposio sobre problemas de explotación económica óptima de la electricidad para el suministro de calefacción y aire acondicionado a grandes grupos de viviendas, celebrado en Praga, en septiembre de 1966. Se preparó un estudio amplio del potencial hidroeléctrico de los recursos hidráulicos de Europa, su evaluación y distribución geográfica. Los expertos en cuestiones jurídicas iniciaron un estudio comparativo del régimen jurídico de las empresas de electricidad de Europa. Se publicaron algunos informes sobre aspectos concretos del diseño y funcionamiento de centrales termoeléctricas y de la electrificación de zonas rurales. Se inició un estudio comparativo sobre las medidas de seguridad vigentes en la construcción de líneas de alta tensión de tendido aéreo en los países que participan en los trabajos de la Comisión.

Se publicó un informe resumido con información sobre la situación en materia de energía eléctrica en Eu-

ropa en 1964 y se preparó un nuevo informe con datos referentes a 1965; dichos documentos proporcionaron material de antecedentes para el Comité del Carbón, el Comité del Gas y el Comité de Energía Eléctrica.

El Comité del Gas examinó las disponibilidades de gas natural en su examen anual titulado *The Gas Situation in Europe in 1965 and Prospects*. Trabajó también en un boletín de recapitulación de estadísticas del gas que abarca el período 1960-1965. Se terminaron algunos estudios tales como los referentes al empleo del gas en las industrias del vidrio, el hierro y el acero y se prosiguieron varios otros sobre temas tales como la situación jurídica de los gasoductos internacionales y el empleo de productos del petróleo por la industria del gas. También se está prestando atención a los métodos para evaluar las reservas de gas natural y se ha preparado un informe consolidado al respecto. Se han iniciado también los trabajos para la preparación de un mapa internacional de los depósitos de gas natural en Europa.

El Comité de Vivienda, Construcción y Planificación continuó publicando los boletines estadísticos anuales y trimestrales. Se inició un estudio amplio de la situación en materia de vivienda y de las perspectivas de las necesidades de vivienda a largo plazo en los países europeos. El Subcomité de la industria de la construcción organizó un seminario en París sobre diseño, producción y utilización de elementos para la construcción fabricados industrialmente. A pedido de la secretaria de la ONUDI se preparó un estudio de las industrias de materiales y elementos para la construcción como contribución al Simposio Internacional sobre Desarrollo Industrial. Se publicó un informe sobre un método unificado de coordinación dimensional en la construcción y un estudio sobre la planificación regional del medio físico. El Subcomité en materia de renovación urbana y aspectos de la vivienda concernientes al urbanismo organizó en Amsterdam un seminario sobre la distribución y las formas futuras de las zonas urbanas. Se terminó la encuesta sobre los métodos de evaluación de la calidad de las viviendas y de las zonas destinadas a vivienda. Durante el año se organizaron giras de estudios a Bulgaria y a Turquía y un grupo visitó a Israel.

El Comité del Acero, por intermedio de su Grupo de Trabajo sobre el mercado del acero, examinó las tendencias de los mercados europeo y mundial del acero sobre la base del informe de la Secretaría, titulado *The European Steel Market in 1965*, y de un examen referente a 1966. Se publicaron cuatro números del boletín trimestral de estadísticas del acero para Europa y la edición anual de *Statistics of World Trade in Steel, 1965*. Se publicó un estudio sobre aspectos de la competencia entre el acero y otros materiales, así como un informe titulado *International Comparisons of Labour Productivity in the Iron and Steel Industry*. Se continuó trabajando en los estudios del mercado mundial de mineral de hierro y del comercio mundial de acero y de la demanda de acero en los países en desarrollo; ambos estudios, junto con una monografía sobre los aspectos económicos de la preparación del mineral del hierro, serán presentados al Simposio Internacional sobre Desarrollo Industrial. Por invitación del Gobierno de la Unión Soviética, el Comité realizó una gira de estudio en ese país.

Con la colaboración de relatores nacionales, se está preparando un estudio sobre los aspectos económicos de

la automatización. También se está preparando un estudio sobre las tendencias y perspectivas del mercado para los productos químicos de los países de la CEPE. Este estudio, junto con una segunda parte relacionada con los países en desarrollo de África, Asia y América Latina, será presentado al Simposio Internacional sobre Desarrollo Internacional. Durante el año pasado se publicaron los números correspondientes a 1963, 1964 y 1965 del *Boletín de estadísticas sobre el comercio mundial de maquinaria*. Un estudio sobre las industrias mecánicas y la industrialización será presentado al Simposio Internacional. Se prosigue un estudio sobre las necesidades de maquinaria de los países europeos en el proceso de industrialización.

El Comité de Transportes Interiores continuó sus trabajos sobre seguridad de la circulación por carretera, sobre la unificación de las reglamentaciones técnicas y administrativas referentes a las carreteras y sobre la adopción de normas uniformes con respecto a las piezas y equipo de los vehículos. Se terminó la consideración de los proyectos de convenciones sobre la circulación por carretera y sobre las señales de carretera distribuidos en cumplimiento de la resolución 1082 B (XXXIX) del Consejo Económico y Social. Con la adopción de resoluciones al respecto se completó el trabajo sobre unificación de las características de las diversas categorías de vías de navegación interior y de las embarcaciones para navegar por ellas. Se prosiguieron los estudios económicos sobre la conexión de los principales ríos navegables. Se actualizaron los anexos del Acuerdo Europeo sobre transportes de mercancías peligrosas por carretera, se comenzó a trabajar en un nuevo acuerdo destinado a reemplazar el Acuerdo sobre equipo especial para el transporte de productos alimenticios perecederos, firmado en 1962.

Para señalar el Año Internacional del Turismo, el Comité aprobó dos resoluciones, una de ellas sobre la concesión de mayores facilidades aduaneras a los turistas y la otra sobre la liberalización de ciertas operaciones de transporte internacional de pasajeros.

El Comité de la Madera pasó revista a la evolución del mercado de productos forestales en 1966 y evaluó las perspectivas para 1967. Examinó también el programa para el estudio sobre el consumo de maderas duras tropicales en Europa, que fue publicado como suplemento al volumen XIX del *Timber Bulletin for Europe* en febrero de 1967. Consideró además los preparativos para el segundo coloquio sobre tableros y productos conexos que se ha de celebrar a comienzos de 1968. El Comité llevó a cabo algunas giras de estudio, entre ellas una a Finlandia. En febrero de 1967 se celebró en Ginebra un Simposio sobre integración de las industrias forestales. El Comité Mixto FAO/CEPE/OIT sobre técnicas de explotación forestal y capacitación de obreros forestales celebró su sexto período de sesiones en Suecia, en septiembre de 1966. En enero de 1967 se celebró el séptimo período de sesiones del Grupo de Estudio sobre capacitación y prevención de accidentes en los trabajos forestales y en abril de 1967 se celebró el segundo período de sesiones del Grupo de Estudio sobre mecanización de los trabajos forestales. Bajo los auspicios del Grupo Mixto de Trabajo FAO/CEPE sobre estadísticas de silvicultura y productos forestales se reunió en abril de 1967 un grupo de expertos en lucha contra los incendios en los bosques, a fin de examinar los aspectos técnicos, económicos y estadísticos de la lucha contra los incendios en los bosques.

El Comité de Fomento del Comercio continuó examinando la evolución del comercio entre Oriente y Occidente y realizando progresos en el mejoramiento de los servicios para dicho comercio, particularmente en lo referente a la simplificación y unificación de los documentos para el comercio exterior y al arbitraje. Inició también estudios sobre los problemas del comercio, particularmente un estudio de los medios que aplican los gobiernos para incrementar la estabilidad y la flexibilidad del comercio entre el Oriente y el Occidente. Prestó especial atención a la contribución que podrían hacer la CEPE y los gobiernos de sus países miembros a los trabajos de la UNCTAD, especialmente en los preparativos del segundo período de sesiones de la Conferencia.

La Conferencia de Estadísticos Europeos celebró su 14a. reunión plenaria. La Conferencia y sus grupos de trabajo continuaron prestando suma atención a dos temas importantes: primero, las cuentas y balances nacionales, y segundo, los preparativos para la serie de censos de población y vivienda de 1970. La Conferencia continuó también persiguiendo su propósito de estimular la coordinación y eliminar la duplicación de actividades estadísticas tanto dentro del programa de la CEPE como entre las organizaciones internacionales, regionales y subregionales que actúan en Europa. Además, las deliberaciones abarcaron desde temas tales como las estadísticas y los índices de precios hasta los registros de población. Se celebraron también reuniones para tratar los temas siguientes: estadísticas básicas relacionadas con el transporte (conjuntamente con el Comité de Transportes Interiores); estadísticas corrientes sobre vivienda y construcción (conjuntamente con el Comité de Vivienda, Construcción y Planificación); y estadísticas sobre agricultura (conjuntamente con la FAO y con el Comité de Problemas Agrícolas). Se publicaron dos nuevos estudios de la serie de *Statistical Standards and Studies*. A comienzos de 1967 se creó en la secretaría de la CEPE una División de Estadísticas separada.

Entre otras cuestiones consideradas por la Comisión figuraron: la aplicación de la declaración sobre la transferencia para usos con fines pacíficos de los recursos liberados por el desarme; la ubicación de establecimientos industriales; y la publicación de un compendio de los estudios y boletines de estadísticas de la CEPE.

B. Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente

En su 23º período de sesiones, celebrado en Tokio en abril de 1967, la Comisión tomó nota de los resultados logrados durante el año precedente en materia de cooperación regional e internacional, y de las instituciones y mecanismos que se habían establecido para acelerar esa cooperación. Con arreglo a esa ampliación de la magnitud de sus trabajos, aligeró aún más su programa de trabajo, tanto en su presentación como su contenido, a fin de facilitar las preinversiones y las actividades operacionales conexas.

Autorizó varios proyectos prácticos en materia de planificación, producción industrial y comercio, como base para establecer programas coordinados entre los países de la región. Tomó nota de las consecuencias financieras de su programa y destacó la necesidad de au-

mentar los recursos de personal en esta etapa de la evolución sus principales proyectos.

El vigésimo aniversario del establecimiento de la CEPALO fue marcado por un examen de los triunfos logrados y las futuras empresas, basado en un documento titulado "*ECAFE — Twenty years of progress*", y la aprobación de dos resoluciones en las que la Comisión afirmó la abrumadora necesidad básica de comercio y ayuda, de cooperación regional para el desarrollo y de que se continúen los programas concretos orientados hacia la acción en las zonas prioritarias.

Cuando la Comisión examinó la situación económica de Asia, se expresó inquietud acerca de la baja tasa de crecimiento de la región en 1965 y de la disminución de los ingresos per cápita. Al mismo tiempo, se señaló que muchos países de la región ya habían superado el objetivo fijado para el período 1960-1969 con arreglo al Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La Comisión tomó nota del crítico problema del abastecimiento de alimentos y sugirió medidas para resolverlo, destacando además la dependencia recíproca entre la agricultura y la industria. Entre otros asuntos, estudió el lento progreso en la aplicación de las recomendaciones formuladas durante el primer período de sesiones de la UNCTAD, incluso de las aprobadas por unanimidad. Durante la discusión de los aspectos financieros del desarrollo, la Comisión expresó preocupación por la merma en la entrada neta de ayuda extranjera y por las condiciones en que se la presta y subrayó la necesidad de que durante la actual etapa de desarrollo se preste ayuda prontamente, en gran escala y con carácter continuo. También pidió que se realizara un estudio de las consecuencias que para la región de la CEPALO tendrá la propuesta formulación de la estrategia de desarrollo global que ha de emplearse en la década 1970/79.

La Comisión aprobó la decisión de que durante la próxima Conferencia de Planificadores Económicos Asiáticos se concentren los trabajos en problemas relativos a la ejecución de planes de desarrollo. En lo tocante a la armonización de los planes regionales, la Comisión subrayó que las agrupaciones subregionales deben considerarse como medidas de transición hacia una cooperación regional más amplia. La Conferencia Ministerial sobre la Cooperación Económica en Asia debía ser el órgano encargado de establecer las normas que han de regir el programa de armonización de los planes.

La Comisión tomó nota de la labor desarrollada por el Instituto Asiático de Planificación y Desarrollo Económicos, y aprobó una resolución relativa a la financiación de dicho Instituto durante su segundo período quinquenal (1969-1973).

La Comisión comprobó la gran demanda de equipo de elaboración de datos, y decidió convocar a un grupo de trabajo integrado por expertos para que considerase la posibilidad de establecer un centro regional de elaboración de datos. También acogió con beneplácito la oferta del Gobierno del Japón de proporcionar, a título de huésped, las instalaciones y servicios necesarios para un Instituto Asiático de Capacitación e Investigaciones en Estadística, adecuadamente apoyado por el PNUD.

La Comisión pidió a los países adelantados que aportasen contribuciones a los fondos especial o fiduciario del Banco Asiático de Desarrollo. Se ratificó el de-

seo de establecer estrechos vínculos y cooperación entre la CEPALO y el Banco.

La Comisión acogió favorablemente la invitación, hecha por el Gobierno del Irán a los miembros de la CEPALO, a participar en la Segunda Feria Comercial Internacional de Asia, que tendrá lugar en Teherán en 1969.

En la esfera del comercio, se expresó grave preocupación acerca de varios asuntos, tales como el aumento del déficit comercial de la región; las dudas acerca de los resultados de la serie de negociaciones Kennedy sobre aranceles aduaneros, celebrada bajo los auspicios del GATT; el peligro de que el papel de los países en desarrollo quedase reducido al de proveedores residuales de materias primas para los países desarrollados; las fluctuaciones de los precios de exportación de los productos básicos y sus condiciones de comercialización poco satisfactorias. Se sugirieron varios métodos para resolver estos problemas.

La Comisión aprobó una resolución sobre la convocatoria de una conferencia ministerial de los países de la región de la CEPALO que se celebraría antes del segundo período de sesiones de la UNCTAD y sería precedida por la reunión de un grupo de estudio.

En lo que respecta a la industria y los recursos naturales, la Comisión expresó satisfacción por el establecimiento del Consejo Asiático de Desarrollo Industrial y el Comité para la Coordinación de la exploración conjunta de los recursos minerales en las regiones cercanas a las costas de Asia, orientados hacia las actividades operacionales. Con respecto al primero, la Comisión consideró que ese Consejo parecía ser el organismo apropiado para llevar a cabo en la región las tareas que requiera la estrategia global establecida por la ONUDI. En cuanto al Comité para la Coordinación de la exploración conjunta de los recursos minerales en las regiones cercanas a las costas de Asia, la Comisión decidió incluir en las actividades de ese Comité los territorios que se encuentran en las proximidades del Océano Pacífico y formar un grupo similar para los países del Océano Índico.

Se examinó el problema de las exportaciones de manufacturas y semimanufacturas, así como la cuestión de las relaciones con la UNCTAD y la ONUDI. La Comisión consideró que, en vista del gran éxito logrado por su propio programa en la esfera de los recursos minerales, podía aportar una útil contribución al programa quinquenal de estudios de las Naciones Unidas sobre recursos naturales no agrícolas. Entre otros asuntos, estudió la electrificación rural, cuya importancia fue puesta de relieve por la Comisión.

La Comisión estudió el proyecto relacionado con la Carretera Asiática, y reafirmó su decisión de que se terminara por lo menos una carretera de este a oeste para fines del Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. También destacó la importancia de las carreteras secundarias para dar impulso a los aspectos del proyecto que se relacionan con el desarrollo económico.

La Comisión tomó nota de las repercusiones de los adelantos técnicos sobre la planificación y las inversiones en materia de transportes y comunicaciones, incluso la unificación del transporte de carga. Discutió también la posibilidad de establecer centros regionales de equipo, como por ejemplo para construcción y dragado.

Apoyó la inclusión, en el programa de trabajo, de estudios sobre la viabilidad de un sistema ferroviario transasiático y sobre los métodos para facilitar el tráfico internacional.

La Comisión subrayó que, para superar el atraso en el desarrollo, es necesario establecer coordinación entre las distintas disciplinas y los diferentes organismos que actúan en la esfera de los recursos hidráulicos. Hizo hincapié en el enfoque regional y expresó la esperanza de que la obra *"Compendium of major international rivers in the ECAFE region"*, preparada por la Secretaría, estimule la cooperación entre los países interesados. Además, aprobó los trabajos realizados por la misión preparatoria sobre tifones y por el grupo de trabajo de expertos en ciclones; y tomó nota de la alentadora reacción ante la idea de establecer un grupo consultor en materia de recursos hidráulicos.

La Comisión instó a todos los países amigos a que ayudasen al Comité de Coordinación de las Investigaciones para el Aprovechamiento de los Recursos de la Cuenca del Bajo Mekong a responder a las exigencias de la ejecución del proyecto relativo a los afluentes del Prek Thnot, en Camboya, en la medida en que pueda decidirlo el Gobierno de ese país. La Comisión tomó nota con satisfacción de que Austria e Indonesia se habían unido a la comunidad internacional que coopera en el proyecto del Mekong. Se sugirió que se estableciera, bajo los auspicios del Banco Asiático de Desarrollo, un fondo especial para el ordenamiento de la cuenca del Bajo Mekong.

La Comisión hizo referencia a la atención inadecuada que se prestaba a los aspectos sociales en los planes de desarrollo y sugirió medidas apropiadas. Apoyó diversas medidas destinadas a resolver los problemas demográficos de la región, tomó nota de la propuesta de que se estableciera un consorcio de las Naciones Unidas basado en recursos financieros gubernamentales y privados, que sería administrado por el Secretario General como fondo fiduciario especial.

Se acogió con agrado la posibilidad de que el Banco Asiático de Desarrollo proporcionara asistencia en materia de agricultura. La Comisión expresó gran preocupación ante la situación actual y las perspectivas de la agricultura, sugirió varias medidas e instó a que se robusteciera la cooperación entre la FAO y la CEPALO y a que se organizaran programas de acción.

La Comisión tomó nota de la estrecha vinculación que existía entre su programa de trabajo y el suministro de asistencia técnica, como lo demostraba especialmente la reciente y fausta creación del Banco Asiático de Desarrollo. Expresó su satisfacción ante la creciente cooperación establecida entre los países — con inclusión de los que prestan ayuda — y los órganos de las Naciones Unidas, con el fin de asegurar la programación y utilización eficaces de la asistencia. Se subrayó la necesidad cada vez mayor de que los países determinen la asistencia y las preinversiones que necesitan, y se señaló que la prestación de asistencia a este respecto incumbe especialmente a la CEPALO. Se hizo hincapié en los resultados evidentemente benéficos incluso para algunos países adelantados, del Seminario sobre Coordinación Nacional de la Asistencia Técnica, y se subrayó enérgicamente la necesidad de celebrar un seminario sobre métodos y técnicas de evaluación de la asistencia técnica y actividades conexas.

La Comisión apoyó la iniciativa de las Naciones Unidas de preparar informes sobre la evaluación de la asistencia técnica en determinados países. También apoyó el aumento de la participación de la CEPALO en la programación y ejecución de los programas de asistencia a los diversos países, dentro del contexto de la coordinación que proporcionan los representantes residentes en el plano nacional. Se señalaron a la atención demoras en la tramitación de solicitudes al Fondo Especial.

Se aprobaron los trabajos realizados por la Secretaría en materia de administración pública.

La Comisión elogió la labor del Programa Mundial de Alimentos y expresó su preocupación por la circunstancia de que aún no se hubieran alcanzado las cifras fijadas como meta para las contribuciones al actual período del programa.

C. Comisión Económica para América Latina

Durante el año pasado, la secretaría de la CEPAL prestó atención especial a los preparativos para el segundo período de sesiones de la UNCTAD, sobre todo en lo referente a las posibilidades de desarrollo que ofrecen las exportaciones potenciales de manufacturas; los problemas de los países de menor desarrollo relativo, incluidas las actividades del Programa de Integración Económica Centroamericana, la preparación del *Estudio Económico de América Latina, 1966*, incluido un estudio especial sobre los problemas de la agricultura; el examen de los obstáculos que confrontan los gobiernos en la etapa actual de ejecución de los planes de desarrollo; un estudio sobre la distribución del ingreso, la elaboración de proyecciones económicas a largo plazo para varios países de la región; la revisión de las monografías de países y otros trabajos como preparación para el Simposio Internacional sobre Desarrollo Industrial; la investigación de los problemas educativos y sociales con el propósito de conocer mejor las necesidades sociales básicas de la región; la prestación de asistencia técnica de diversa índole, y la preparación de estudios destinados a reuniones y conferencias organizadas por la Secretaría o por otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, con la colaboración de la CEPAL.

Uno de los acontecimientos más importantes que afectan el curso futuro de los trabajos de la CEPAL fue la Declaración de los Presidentes de América, el 14 de abril de 1967, por la cual se decidió establecer un mercado común en la región dentro de un período determinado; esta declaración confirma la pertinencia de las actividades de la Comisión durante los últimos diez años en lo relativo al desarrollo económico, el comercio y la integración y constituye una base sólida y duradera para su futuro programa de trabajo. El Secretario Ejecutivo concurrió a la Reunión de Jefes de Estados Americanos celebrada en Punta del Este en abril de 1967, y previamente había tomado parte en los preparativos para esta reunión, utilizando información básica y propuestas provisionales preparadas por la Secretaría de la CEPAL. La declaración constituyó el tema fundamental de los debates del 12º período de sesiones de la Comisión, celebrada en Caracas, Venezuela, del 2 al 13 de mayo de 1967, y de las resoluciones que ésta aprobó, particularmente las relativas a los problemas de comercio y desarrollo.

En muchas de las resoluciones aprobadas en el 12º período de sesiones de la Comisión se subrayó la importancia del segundo período de sesiones de la UNCTAD para los gobiernos de los países en desarrollo de la región. Se examinó el estudio sobre América Latina y la política comercial internacional preparado por la secretaría, que será revisado y actualizado con arreglo a lo solicitado por los gobiernos; se lo enviará luego a todos los Estados miembros de la Comisión y la secretaría consultará con los gobiernos de los países miembros a efecto de convocar una reunión de expertos gubernamentales para la consideración de dicho documento antes del segundo período de sesiones de la UNCTAD. Esta reunión debería realizarse en el último trimestre de 1967; entre tanto, se aprovecharán otras reuniones interamericanas para la realización de consultas previas con los gobiernos de los países en desarrollo. Asimismo, la secretaría preparará sugerencias concretas sobre las medidas, instrumentos y programas de acción relacionados con la ejecución de los acuerdos sobre comercio exterior contenidos en la Declaración de los Presidentes de América, y presentará un documento informativo sobre el particular en la próxima reunión del Consejo Interamericano Económico y Social en junio de 1967. Posteriormente, se prestará especial atención al problema de los países relativamente menos desarrollados de la región, y se prevé realizar antes de fines de 1967 una reunión de representantes de los gobiernos de esos países para examinar las conclusiones de un estudio de la CEPAL presentado en forma preliminar en el 12º período de sesiones. A este respecto, tiene mucha importancia la labor que se viene cumpliendo en Centroamérica, en particular las actuales actividades destinadas a crear la infraestructura económica, asignando especial importancia a estudios comparados de los costos de construcción de carreteras, programas regionales de interconexión eléctrica y un proyecto de investigación de los recursos hidráulicos de Centroamérica. Conforme a los deseos expresados por los gobiernos de los países del Caribe recientemente independizados, la secretaría estudia la posibilidad de desarrollar programas similares a los que han resultado tan útiles en Centroamérica.

En el 12º período de sesiones de la Comisión, los países en desarrollo de la región atribuyeron especial importancia a los problemas que afectan el comercio de los productos básicos, particularmente lo relativo al acceso a los mercados, precios, financiación, impuestos internos y la producción antieconómica de dichos productos en los países desarrollados, y la secretaría ha ajustado el programa de trabajo a fin de emprender algunas de las nuevas investigaciones solicitadas en dicho período de sesiones. En lo referente al acceso a los mercados, los países en desarrollo miembros de la CEPAL convinieron en que se habían hecho limitados progresos en el caso de unos pocos productos primarios, pero recalcaron que se habían producido marcados retrocesos en otros; en muchos casos, estos productos se habían visto sometidos a crecientes restricciones después del primer período de sesiones de la UNCTAD, en violación al principio del *statu quo* aprobado en la Conferencia y de los compromisos asumidos por los gobiernos de los países desarrollados en el GATT y otros órganos internacionales.

En el 12º período de sesiones, varias delegaciones encomiaron la coordinación establecida por la CEPAL con otros organismos del sistema de las Naciones Uni-

das, sobre todo la UNCTAD y la FAO. La labor conjunta que realizan la CEPAL y la FAO era, en su opinión, un ejemplo de la coordinación que debe existir entre las comisiones económicas regionales y los organismos especializados, y expresaron la esperanza de que esa cooperación se extendiese a la ONUDI. A este respecto, se expresó particular interés acerca de las medidas especiales que habrían de adoptar los gobiernos miembros para asegurar la participación activa de todos los grupos, instituciones y organismos interesados en la promoción del desarrollo industrial, tanto en el sector público como en el privado, en los preparativos para el Simposio Internacoinal sobre Desarrollo Industrial; al mismo tiempo, se solicitó a la secretaría que prosiguiera sus actividades con este fin, en colaboración con la secretaría de la ONUDI.

La ejecución de planes fue otro de los temas importantes del 12º período de sesiones de la Comisión, y a este respecto fue motivo de satisfacción que el Comité de Planificación del Desarrollo, del Consejo Económico y Social, celebrase su segundo período de sesiones en la sede de la CEPAL, en abril de 1967. El Comité hizo llegar a la Comisión la parte de su informe relativa a la planificación y ejecución de planes en América Latina. Los debates se refirieron principalmente a un estudio preparado por la secretaría en el que se hacía una breve reseña de la historia y la situación actual de las actividades de planificación en América Latina, y se analizaban los obstáculos que se oponían a la ejecución de planes, y los problemas externos que afectaban las economías latinoamericanas. Conforme a dicho estudio, se ha puesto término a la primera etapa de la planificación — establecimiento de oficinas de planificación, preparación de una serie de planes, elaboración de políticas de desarrollo coherentes, asignación de recursos públicos sobre bases más sistemáticas, y capacitación de grandes grupos profesionales en técnicas nuevas para la región. Por consiguiente, ha llegado el momento de iniciar la segunda etapa, en la que deben elaborarse medidas para superar las limitaciones y obstáculos que se han encontrado y para perfeccionar la formulación de planes de desarrollo y la eficiencia con que se los ejecuta. Cuando se examinó este estudio en el 12º período de sesiones, la Comisión percibió la interrelación que existe entre la coordinación de planes y el progreso de la planificación nacional, ya que una armonización de los planes nacionales con vistas a los objetivos de la integración acrecentará la necesidad de perfeccionamiento de dichos planes, a fin de que cada país pueda apreciar mejor las posibilidades que le ofrece la integración y evaluar las consecuencias de la misma sobre la economía interna. Algunos Estados miembros de la CEPAL han instado a que se concluyan cuanto antes acuerdos que conduzcan a facilitar el intercambio de experiencias como primer paso para coordinar progresivamente algunos aspectos de los programas nacionales y acelerar la ejecución de convenios de complementación, programas conjuntos e industrias básicas, convenios subregionales, armonización de la infraestructura física y aprovechamiento del progreso técnico y científico que surgen de la voluntad de integración contenida en la Declaración de los Presidentes de América.

La labor que realiza el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social debe examinarse también en el contexto de la ejecución de planes; varias delegaciones expresaron la esperanza de que se proporcionarían al Instituto los fondos necesarios para fun-

cionar en forma permanente. A este respecto, se tomó nota con satisfacción de las medidas adoptadas para asegurar la continuación e intensificación de las actividades del Instituto, particularmente la aprobación por el PNUD (Fondo Especial) y por el Banco Interamericano de Desarrollo del financiamiento requerido para prorrogar por cuatro años, a partir de julio de 1967, el mantenimiento y desarrollo del Instituto. En realidad, las tareas del Instituto se han concentrado en torno a problemas importantes de América Latina, a los que ha aplicado los resultados de las experiencias nacionales e internacionales en materia de planificación, y ha prestado un intenso apoyo al proceso de planificación de los países, tanto en lo que se refiere a la formulación de planes como a su ejecución. El estudio de una estrecha vinculación de los procesos de planificación y de integración económica que lleva a cabo el Instituto está acorde también con el movimiento integracionista que vive América Latina.

El programa aprobado para el 12º período de sesiones se limitó a unos pocos temas fundamentales, y los debates se concentraron en torno a un reducido número de documentos de trabajo seleccionados. La Comisión acogió con beneplácito este esfuerzo encaminado a la concentración, porque contribuyó a asegurar un estudio detallado de ciertos problemas. Las actividades restantes realizadas durante el año, muchas de las cuales eran igualmente importantes, fueron examinadas en relación con los debates sobre el programa de trabajo y prioridades. La Secretaría ha de continuar sus estudios sobre la distribución del ingreso y sobre diversos aspectos sociales del desarrollo, junto con una amplia gama de estudios industriales, y ulteriores actividades relativas a los recursos hidráulicos y al petróleo. Las investigaciones sobre la formación de la mano de obra y los recursos humanos, que fueron el tema de las contribuciones aportadas por la CEPAL a la Conferencia de Ministros de Educación y Ministros encargados del Planeamiento Económico en los Países de América Latina y del Caribe, celebrada en Buenos Aires, adquirirán mayor urgencia a la luz de las decisiones adoptadas en la Conferencia de los Estados de América miembros de la Organización Internacional del Trabajo, celebrada en Ottawa en 1966. Las conclusiones de los seminarios de asistencia técnica sobre la pequeña industria, las estadísticas industriales y la industria del petróleo en América Latina resultan particularmente útiles para los gobiernos miembros. En particular, la Comisión pidió que se continuara con las investigaciones relativas a la industria del petróleo y que otro grupo de expertos examinase los resultados de estos estudios.

Al examinar el programa de trabajo y orden de prelación, la Comisión expresó su satisfacción por las modificaciones introducidas en la presentación del programa y por el mayor uso de la técnica de presupuesto por programas y actividades.

El edificio de las Naciones Unidas en Santiago de Chile fue inaugurado oficialmente el 29 de agosto de 1966 por el Secretario General U Thant, en presencia del Presidente de Chile. A fines del mismo año se instalaron en el nuevo edificio la secretaría de la CEPAL y el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social.

El 21 de marzo de 1967, el Sr. Carlos Quintana asumió oficialmente el cargo de Secretario Ejecutivo de la Comisión, en reemplazo del Sr. José Antonio Ma-

yobre, quien renunció el 31 de diciembre de 1966 para aceptar su designación como Ministro de Estado en Venezuela.

Guyana y Barbados se incorporaron como miembros plenos de la Comisión en octubre de 1966 y marzo de 1967, respectivamente.

A fin de encarar más adecuadamente los problemas de los países recientemente independizados en la zona del Caribe, comenzó a funcionar en Puerto España, en diciembre de 1966, la oficina del Caribe, a lo que siguió en marzo de 1967 la creación de la oficina de Bogotá, que se encargará de la realización de estudios e investigaciones relativos a Colombia, Ecuador y Venezuela. Ambas oficinas cuentan con el apoyo de los gobiernos interesados, algunos de los cuales proporcionan las instalaciones y el personal local necesario, en tanto que otros contribuirán con personal de categoría profesional. Utilizando los recursos combinados de estas nuevas oficinas, de la Oficina de México, el Centro CEPAL/BNDE de Desarrollo Económico, la Oficina de Montevideo y su sede de Santiago de Chile, la secretaría de la CEPAL está en mejores condiciones para satisfacer las necesidades de los países en desarrollo de la región y para continuar prestando asistencia a los gobiernos en la solución de sus problemas de desarrollo económico en el contexto de la integración.

D. Comisión Económica para África

De conformidad con su decisión de reunirse en forma bienal, la Comisión Económica para África celebró su octavo período de sesiones en Lagos, Nigeria, del 13 al 25 de febrero de 1967. La Comisión, después de examinar las actividades de la secretaría correspondientes a los dos años anteriores, aprobó una serie de resoluciones, así como su programa de trabajo y el orden de prioridad para el próximo bienio.

Acerca de la cuestión pendiente de "la participación de los territorios dependientes de Angola, Mozambique, la llamada Guinea Portuguesa y el África Sudoccidental" en sus trabajos, la Comisión decidió recomendar que la Organización de la Unidad Africana fijase las condiciones en que deberían estar representados e informarse al respecto al Secretario Ejecutivo.

Durante el último año, la Comisión continuó concentrando sus actividades de investigación y sus operaciones en la promoción de la cooperación económica, mediante la creación de un marco institucional permanente de carácter intergubernamental en cada una de las cuatro subregiones, o la ampliación de la cooperación entre las instituciones multinacionales existentes y los otros países de la subregión en lo relativo a proyectos concretos de desarrollo. Como se preveía, el progreso de las distintas subregiones en el establecimiento de la estructura institucional necesaria no ha sido uniforme. En África del Norte y África Central, existe ya un mecanismo para la cooperación económica, pero en su composición no están incluidos todos los Estados de las subregiones; no obstante, puede considerarse como un cierto progreso el que varios Estados Miembros hayan expresado su voluntad de cooperar, especialmente con respecto a determinados proyectos de mutuo beneficio en materia de industrias, transportes, comunicaciones, energía, comercio e institutos

de formación e investigación. Mucho dependerá de la capacidad de la secretaría de la CEPA para iniciar y proporcionar los estudios detallados solicitados por dichos Estados. En una segunda reunión del Consejo Provisional de Ministros de la Comunidad Económica del África Oriental, que se prevé realizar durante 1967, se examinarán los principios de un proyecto de tratado que ha de regir las operaciones de la Comunidad, se patrocinará una solicitud de asistencia técnica para redactar los instrumentos de asociación, y se decidirá sobre la dotación de personal de la secretaría de la Comunidad. La primera fase de la labor emprendida por la secretaría en la promoción del mecanismo internacional para la cooperación económica en todas las subregiones ha quedado terminada con el establecimiento de la Comunidad Económica del África Occidental en mayo de 1967, oportunidad en que doce Estados firmaron el estatuto de asociación.

La Comisión, reconociendo la necesidad de terminar sin demora el proceso inicial de crear instituciones de cooperación económica, decidió, en su octavo período de sesiones, esbozar un programa de acción para cada subregión.

Por otra parte, cabe señalar que cuando se crean instituciones multinacionales para la cooperación y la integración económicas, se origina una demanda de asistencia técnica especial para estas instituciones, cuyas funciones y necesidades son diferentes de las instituciones nacionales previstas en virtud de los programas nacionales existentes. Respondiendo a la solicitud del Consejo de Ministros de Economía del Maghreb de que se lo reconociese como órgano calificado para recibir asistencia técnica directa de las Naciones Unidas y los organismos especializados, la Comisión aprobó una resolución en la que se recalca la necesidad urgente de aumentar los recursos de los programas regionales para proporcionar esta asistencia.

Se ha continuado la preparación del estudio económico de África, correspondiente al período 1950-1960. Se han publicado las secciones correspondientes al África Occidental y a Sudáfrica, y se espera terminar antes de fines de 1967 las secciones correspondientes al África Oriental y África del Norte, y un poco más adelante la correspondiente al África Central. Entre tanto, la Comisión ha publicado el *Economic Survey for Africa, 1960-1964*.

Según el *Survey*, el producto interno bruto del continente, incluida Sudáfrica, a precios de mercado de 1960, llegó a los 40.750 millones de dólares en 1964; la cifra correspondiente al continente, excluida Sudáfrica, fue de 31.400 millones de dólares. Durante 1960 y 1964 se registraron distintos índices de crecimiento del producto interno bruto para las diferentes subregiones de África. El producto interno bruto real a precios de mercado de Sudáfrica, África del Norte, África Occidental, África Oriental y África Central, tuvo un índice anual de crecimiento medio de 5,1%; 4,7%; 4,2%; 3,8% y 2,3% respectivamente. En 1963, el ingreso por habitante de África, incluida Sudáfrica, fue de 126 dólares; excluida Sudáfrica, fue de 103 dólares.

En el contexto económico mencionado en el *Survey*, la Comisión señaló que habían transcurrido seis años del Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y que, para África, éste había sido un período decepcionante, tanto en lo referente a objetivos, esperanzas en los países en desarrollo, o posibilidades indicadas

por la riqueza de los países desarrollados. En las deliberaciones del octavo período de sesiones, se señalaron especialmente el estancamiento de la corriente neta de capital a largo plazo desde los países ricos a los países en desarrollo más pobres, el mantenimiento de barreras comerciales contra las importaciones procedentes de países en desarrollo, la falta de convenios efectivos sobre productos básicos y el empeoramiento de la relación de intercambio. En una resolución en la que la Comisión solicitó la creación de un fondo especial para el desarrollo de África, con asistencia de los países desarrollados, se expresó la urgente necesidad de contar con capitales para el desarrollo. La Comisión pidió también a los países más desarrollados signatarios del GATT que acordaran medidas especiales para facilitar el comercio de los países africanos, y solicitó al Secretario Ejecutivo que cooperase con la UNCTAD a fin de obtener acuerdos internacionales sobre exportaciones de productos primarios. La Comisión reiteró sus esperanzas de que en el segundo período de sesiones de la UNCTAD todos los Estados miembros de la Conferencia harían nuevos y decididos esfuerzos para lograr progresos importantes en la elaboración y aplicación de una nueva política internacional para el desarrollo. La Comisión apoyó también la idea de convocar a una reunión de setenta y siete países en desarrollo para coordinar sus opiniones, y la preparación de propuestas concretas que habrían de presentar los países en desarrollo en el segundo período de sesiones de la UNCTAD.

En lo referente al sector industrial, la secretaría preparó una serie de estudios preliminares sobre proyectos multinacionales para determinar su factibilidad técnica y su viabilidad económica. En la fase siguiente será necesario complementar estos estudios con estudios detallados de viabilidad e ingeniería para determinar las perspectivas comerciales de los proyectos. Esta segunda etapa requiere la cooperación de los Estados africanos con los países tecnológicamente adelantados. En enero de 1967 la secretaría convocó a una primera reunión con los industriales y financistas para que le proporcionasen asesoramiento y sugerencias sobre las medidas que podrían adoptarse para promover las inversiones industriales en el continente. La Comisión aprobó la iniciativa adoptada por la secretaría, recalcó la necesidad de crear un ambiente adecuado para las inversiones y de formular políticas que atrajesen al capital extranjero, y pidió que se realizara una segunda conferencia de los Estados miembros africanos a fin de examinar todos los aspectos de la financiación y la inversión en la industria.

La Comisión tomó nota de los distintos estudios terminados y en ejecución, y de las negociaciones que se realizaban para promover un sistema racional de enlaces aéreos, viales, ferroviarios y marítimos, como medida necesaria y urgente para el desarrollo de la infra-

estructura destinada a facilitar la corriente de bienes y servicios en el contexto de la cooperación económica subregional e interregional. Para la realización de estos estudios, la Comisión recibió considerable asistencia bilateral. La Comisión expresó su preocupación por las consecuencias del monopolio ejercido por unas pocas empresas de transportes marítimos sobre los ingresos de exportación de los países africanos. Con respecto a las comunicaciones, la Comisión expresó su satisfacción por el plan formulado por la Comisión del Plan para África, bajo los auspicios de la UIT, para la interconexión de las redes africanas de telecomunicaciones como una primera etapa básica en la construcción de una red general panafricana, y recomendó a los gobiernos africanos que en sus planes diesen la más alta prioridad al desarrollo de una red panafricana de telecomunicaciones.

En lo referente al sector agrícola, fue decepcionante para la Comisión el lento progreso realizado en la región, particularmente en vista de la creciente tendencia a importar alimentos que para muchos países dio como resultado dificultades adicionales de balanza de pagos. La Comisión aprobó una resolución en la que se señalaban los sectores en que sería necesario tomar medidas urgentes para aumentar la producción agrícola, especialmente la producción de alimentos.

El continente está dotado de vastos recursos naturales cuyos límites son todavía relativamente desconocidos, y deben ser objeto de ulterior exploración y explotación científicas. La escasez de mano de obra da lugar a un grave estrangulamiento en el desarrollo económico y social. La Comisión recalcó la importancia de adoptar políticas y programas adecuados en materia de mano de obra para poder contar con suficiente personal científico, técnico y administrativo de origen nacional.

La Comisión recomendó la adopción de un sistema de trabajo más factible, deducido de la experiencia obtenida, para el próximo bienio. La secretaría ayudará a los Estados miembros a fin de permitir a los agricultores y campesinos la obtención de mayores utilidades de su trabajo mediante el aumento en la productividad, el suministro de instalaciones de almacenamiento y la adopción de disposiciones eficientes de comercialización, y un mayor grado de elaboración local de los productos agrícolas; fomentar las industrias en escalas pequeña y mediana para permitir que las comunidades satisfagan sus necesidades locales en lo referente a herramientas agrícolas simples, productos para el hogar, material de construcción y vestuario; aumentar sus relaciones comerciales y económicas recíprocas; crear condiciones para un aumento considerable en las corrientes de fondos de inversión; y tomar medidas para subsanar deficiencias en materia de mano de obra calificada.

REFERENCIAS

Para los documentos pertinentes, véanse *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 41° período de sesiones, Anexos*, tema 13 del programa.

Para las sesiones pertinentes, véanse *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 41° período de sesiones*, 1431a. a 1435a. sesiones.

A. Comisión Económica para Europa

Informe anual de la Comisión Económica para Europa correspondiente al período del 30 de abril de 1966 al 28 de abril de 1967: *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 43° período de sesiones, Suplemento No. 3 (E/4329)*.

Para una lista de otros documentos pertinentes, véase el anexo V del mencionado informe.

B. Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente

Informe anual de la Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente, correspondiente al período del 5 de abril de 1966 al 17 de abril de 1967: *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 43º período de sesiones, Suplemento No. 2* (E/4358).

Para una lista de otros documentos pertinentes, véase el anexo II de dicho informe.

C. Comisión Económica para América Latina

Informe anual de la Comisión Económica para América Latina correspondiente al período del 13 de mayo de 1966 al 13 de mayo de 1967: *Documentos Oficiales del Consejo Econó-*

mico y Social, 43º período de sesiones, Suplemento No. 4 (E/4359) y *Suplemento No. 4A* (E/4359/Add.1).

Para una lista de otros documentos pertinentes, véase el anexo II al *Suplemento No. 4*.

D. Comisión Económica para África

Informe de la Comisión Económica para África correspondiente al período del 24 de febrero de 1965 al 25 de febrero de 1967: *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 43º período de sesiones, Suplemento No. 5* (E/4354).

Para una lista de otros documentos pertinentes, véase el anexo II a dicho informe.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

A. Examen de las actividades

Las actividades de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) durante el período que abarca el informe han consistido, principalmente, en el examen y evaluación de la ejecución de las recomendaciones del primer período de sesiones de la Conferencia y en hacer los preparativos para el segundo período de sesiones. Dentro de este amplio contexto, la Junta de Comercio y Desarrollo y las comisiones de la Conferencia han continuado o iniciado trabajos sobre una amplia variedad de temas y han tomado varias decisiones que dan soluciones concretas y prácticas a los problemas del comercio y el desarrollo. El segundo período de sesiones de la conferencia ha sido considerado como un paso hacia adelante en un proceso continuo iniciado en 1964, que los Gobiernos de los Estados miembros han convenido en que debería estar orientado esencialmente hacia la acción.

La Junta de Comercio y Desarrollo celebró su cuarto período ordinario de sesiones en Ginebra del 30 de agosto al 24 de septiembre de 1966. La Junta también fue convocada a un período extraordinario de sesiones en Nueva York, el 21 de diciembre de 1966, para revisar el calendario de reuniones de 1967.

Los debates sobre la ejecución de las recomendaciones se basaron en el primer informe que el Secretario General de la UNCTAD ha de presentar anualmente con ese propósito. En el informe, titulado "Estudio sobre el Comercio Internacional y el Desarrollo, 1966", se indicaba que las tasas de crecimiento logradas por el conjunto de los países en desarrollo habían disminuido durante la primera mitad del Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y se ponía de relieve que esto había ocurrido pese a que durante el decenio de 1960 el volumen de las exportaciones de esos países había aumentado considerablemente. Entre los factores externos analizados en el documento que contribuyeron a explicar las tasas de crecimiento logradas por los países en desarrollo, figuraban la corriente neta todavía insuficiente de recursos financieros internacionales y el aumento lento, pero constante, del volumen de las importaciones de los países en desarrollo. En el informe se señalaba también que se requerían mayores esfuerzos para movilizar recursos internacionales.

En una declaración introductoria del Estudio, el Secretario General de la UNCTAD relacionó los pobres resultados logrados por los países en desarrollo con la falta de una política internacional de desarrollo integrada. Expresó honda inquietud ante los efectos que la revolución tecnológica probablemente tendrá sobre la

capacidad de los países en desarrollo para exportar materias primas, así como sobre su capacidad para absorber en su insuficiente sector industrial la oferta de mano de obra no calificada en constante aumento. Otro motivo de preocupación era el creciente peligro del hambre en ciertas regiones del mundo. El Secretario General de la UNCTAD señaló que la corriente de recursos financieros de los países desarrollados hacia los países en desarrollo había permanecido estacionaria entre 1961 y 1964, pese a que los países desarrollados habían registrado en ese período tasas de crecimiento satisfactorias.

En un memorando conjunto presentado a la Junta, los países en desarrollo declararon que las recomendaciones del primer período de sesiones de la Conferencia no se habían aplicado adecuadamente o de una manera concentrada y sólo habían conducido hasta la fecha a la adopción de medidas limitadas y aisladas por parte de algunos países. Al proponer un programa a corto plazo de ejecución de las recomendaciones, instaron a los países desarrollados a que adoptaran, antes del segundo período de sesiones, las medidas siguientes: concertar convenios internacionales sobre el cacao y el azúcar; observar el *statu quo* en relación con las medidas de política comercial perjudiciales para los países en desarrollo; establecer un plan de preferencias de carácter general y no discriminatorio; aumentar la corriente de asistencia financiera dirigida a los países en desarrollo hasta alcanzar el objetivo del 1%; aliviar la carga de la deuda de los países en desarrollo estableciendo, en los casos apropiados, nuevos plazos de amortización de sus deudas; hacer más favorables las condiciones de los préstamos; y cooperar en la formulación de un plan práctico de financiación complementaria.

Los países desarrollados con economía de mercado indicaron que compartían la honda preocupación de los países en desarrollo por la situación actual y deseaban contribuir a mejorarla. Sin embargo, no podían suscribir el memorando debido al modo en que estaba formulado, pero, a su juicio, las diferencias que separaban a los países en desarrollo de los países desarrollados no eran diferencias de objetivos.

Los representantes de los países socialistas de Europa oriental expresaron su simpatía por los deseos formulados por los países en desarrollo. Pusieron de relieve el carácter dinámico del incremento experimentado por el comercio de sus países con los países en desarrollo, que había contribuido en importante medida al aumento de las exportaciones en algunos de ellos. En su opinión, la normalización general del comercio mundial, inclusive el comercio entre el Este y el Oeste, contribuiría también a intensificar el intercambio comercial

de los países en desarrollo, pero las condiciones políticas actuales impedían esa normalización.

Durante el debate sobre los preparativos para el segundo período de sesiones de la Conferencia, muchos representantes expresaron la opinión de que habría que considerarlo como continuación del primero y como una tribuna para el examen de los principales problemas del comercio y del desarrollo. Al mismo tiempo, debía llevar adelante las realizaciones del primer período de sesiones. Gran número de delegaciones expresaron también la opinión de que debería hacerse hincapié en los procedimientos y maneras de ejecutar las recomendaciones aprobadas en el primer período de sesiones de la Conferencia, en 1964.

Al referirse a los propósitos que deberían alcanzarse en el segundo período de sesiones de la Conferencia, algunas delegaciones propusieron los siguientes objetivos: examen de los problemas, negociación y perspectivas, es decir, el estudio de las posibilidades para una acción futura. A este respecto, se estimó que debía prestarse especial atención a la solución de los problemas ya determinados y que podían ser objeto de medidas prácticas, así como al examen y estudio de cuestiones que, aunque no estaban todavía a punto para ser objeto de negociación, revestían importancia fundamental para los países en desarrollo y para la labor futura de la UNCTAD. Algunas delegaciones estimaron que uno de los principales objetivos de la Conferencia debería ser fomentar la reestructuración y normalización de todas las corrientes comerciales mediante la eliminación de las barreras y prácticas discriminatorias existentes.

La mayoría de las delegaciones estimó que el objetivo principal de la Conferencia debería ser el examen de los acontecimientos, abarcando las tendencias destacadas del comercio y desarrollo y el alcance de los progresos logrados en la ejecución de las recomendaciones del primer período de sesiones. Por lo que respecta a la negociación durante el segundo período de sesiones, se consideró que, por medio de una actuación sincronizada y convergente de los países desarrollados y de los países en desarrollo, deberían crearse condiciones que permitieran celebrar negociaciones sobre materias concretas y escogidas, de interés inmediato para los países en desarrollo, a fin de llegar así a un acuerdo sobre programas adecuados de medidas prácticas.

La Junta aprobó un programa provisional para el segundo período de sesiones de la Conferencia y acordó que debería remitirse a todos los Estados miembros de la UNCTAD, los órganos auxiliares de la Junta, las comisiones económicas regionales y la Oficina de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas en Beirut, como documento de base para la preparación del segundo período de sesiones, con el ruego de que formularan los comentarios, observaciones y recomendaciones que, en relación con el contenido de los temas del proyecto del programa provisional, desearan someter a la Junta en su quinto período de sesiones. La Junta decidió también aceptar la invitación del Gobierno de la India para que la Conferencia celebrase en ese país su segundo período de sesiones y recomendó a la Asamblea General que aquella se reuniera en Nueva Delhi.

La Junta examinó también los problemas que se plantean en las relaciones comerciales entre países que tienen sistemas económicos y sociales diferentes. A este

respecto, los representantes de los países socialistas de Europa oriental subrayaron que las corrientes comerciales internacionales eran interdependientes y que, pese a su reciente incremento, el comercio Este-Oeste distaba mucho de haber alcanzado el máximo de sus posibilidades, atendidas la importancia y la avanzada etapa de desarrollo de las economías interesadas. Un aumento considerable de ese comercio no sólo beneficiaría a los participantes en el mismo, sino que estimularía además el comercio de los países en desarrollo y contribuiría a reducir la tirantez internacional. Tal incremento no podría lograrse si no se realizaban importantes esfuerzos internacionales, por lo que los problemas del comercio entre el Este y el Oeste figuraban entre los más importantes de cuantos se planteaban ante la UNCTAD. Los representantes de cierto número de países desarrollados y de países en desarrollo comentaron las tendencias favorables que desde el punto de vista del volumen y la diversificación se habían registrado recientemente en el comercio entre países con sistemas económicos y sociales diferentes. A este respecto, se hizo hincapié en los efectos favorables que la cooperación industrial y los acuerdos a largo plazo ejercían en ese comercio.

La Junta y la secretaría también han dedicado creciente atención a la expansión del comercio y a la cooperación e integración económica entre países en desarrollo. Los representantes de los países en desarrollo mencionaron los esfuerzos que ya estaban emprendiendo sus gobiernos en esta esfera, y los representantes de países miembros de agrupaciones económicas regionales expusieron los progresos que venían realizando. Si bien el comercio entre los países en desarrollo en su conjunto había aumentado entre 1960 y 1965 a un ritmo mucho más rápido que en el quinquenio anterior, los representantes de los países en desarrollo reconocieron unánimemente que eran necesarias nuevas e importantes actividades para que aumentara la pequeña parte del comercio mundial que representa actualmente el intercambio entre países en desarrollo. Insistieron en la gran importancia de que los países poco avanzados desarrollen una acción conjunta mediante el propio esfuerzo para incrementar el comercio entre ellos de manera compatible con sus necesidades de desarrollo, pero añadieron que semejante esfuerzo no podía sustituir a la acción que los países en desarrollo esperaban por parte de los países desarrollados de conformidad con las recomendaciones aprobadas por la Conferencia en su primer período de sesiones. En general se sustentó la opinión de que la UNCTAD debía procurar fomentar y facilitar nuevos progresos en este campo y, por tanto, se acordó que en el quinto período de sesiones de la Junta tendría lugar un examen completo de dicho tema, con vistas a preparar, con la asistencia de las comisiones económicas regionales y las agrupaciones regionales existentes, las medidas que se debieran adoptar a este respecto en el segundo período de sesiones de la Conferencia.

La Junta examinó la cuestión de las actividades de asistencia técnica de las Naciones Unidas en materia de comercio y en esferas conexas, y reconoció en general la necesidad especial que tienen los países en desarrollo de recibir asistencia para fomentar sus exportaciones y aumentar sus ingresos procedentes del comercio invisible. La Junta tomó nota de la asistencia ya prestada por los gobiernos, bilateralmente o por medio de organizaciones intergubernamentales existentes. Sin embargo, se declaró que aún quedaba margen para una

mayor corriente de asistencia y para que la UNCTAD pudiera desempeñar una función útil. Con la creación de la UNCTAD y la ONUDI, las Naciones Unidas se encontraban ahora mejor dotadas para prestar una asistencia eficaz a los países en desarrollo en las esferas de la industrialización y del fomento del comercio, acogiendo con satisfacción el deseo formulado por el PNUD de ser asociado activamente a la UNCTAD en sus esfuerzos por mejorar la posición comercial de los países en desarrollo. La Junta decidió invitar al PNUD a que examinara debidamente las solicitudes que los países en desarrollo presentaran para obtener asistencia técnica en las esferas de la promoción de sus exportaciones y del comercio invisible, especialmente los transportes marítimos, los seguros y el turismo, y decidió recomendar que los servicios de la UNCTAD fueran utilizados para proporcionar apoyo técnico en la ejecución de las solicitudes pertinentes de los países en desarrollo. La Junta decidió asimismo recomendar a la Asamblea General que adoptara las medidas necesarias para que el Secretario General de la UNCTAD fuera miembro de la Junta Consultiva Mixta del PNUD.

Durante el cuarto período de sesiones de la Junta, se expresó gran interés por la necesidad de examinar las medidas para impulsar el desarrollo progresivo del derecho del comercio internacional y promover su unificación y armonización progresivas. Se subrayó la necesidad de que toda actividad ulterior en materia de convenciones, acuerdos e instrumentos jurídicos internacionales, leyes uniformes o modelo aplicables al comercio internacional, cláusulas contractuales tipo, condiciones generales de venta, modalidades comerciales uniformes y otras medidas se realizaran con un criterio de alcance universal como medio de fomentar mejores y más amplias relaciones comerciales entre todos los países. La Junta decidió aplazar hasta su quinto período de sesiones el examen de un proyecto de resolución en que pedía la intensificación de las actividades de las Naciones Unidas en esta esfera, en espera del examen de esta cuestión por la Asamblea General en su vigésimo primer período de sesiones.

Por recomendación de la Comisión de Manufacturas y de la Comisión del Comercio Invisible y de la Financiación relacionada con el Comercio, respectivamente, la Junta decidió establecer un grupo de trabajo mixto UNCTAD/FAO sobre la madera y los productos forestales, que actuará entre los períodos de sesiones, y un grupo intergubernamental para estudiar las medidas financieras complementarias.

B. Problemas de productos básicos

En su primer período de sesiones, celebrado en Ginebra del 27 de junio al 16 de julio de 1966, la Subcomisión Permanente de Productos Básicos examinó las cuestiones que le fueron asignadas por la Comisión de Productos Básicos, la Junta de Comercio y Desarrollo y el Grupo Especial de Trabajo sobre la organización internacional del comercio de productos básicos, a saber: preparación de un resumen de la situación del mercado de productos básicos seleccionados, elaboración de un acuerdo general sobre los convenios relativos a los productos básicos y organización internacional del comercio de productos básicos. El Secretario General de la UNCTAD presentó a la Subcomisión un documento sobre la elaboración de un acuerdo

general sobre convenios de productos básicos, sugiriendo que el primer paso debería ser un examen detallado de los problemas que plantea el establecimiento de una política internacional integrada sobre productos básicos. Hubo acuerdo general en que sería prematuro tratar de formular un acuerdo general sobre convenios de productos básicos antes de que se completase el amplio documento sobre política internacional en materia de productos básicos que la secretaría estaba preparando. La Subcomisión Permanente tuvo también ante sí el informe provisional sobre el primer período de sesiones del antiguo Grupo Especial de Trabajo sobre la organización internacional del comercio de productos básicos, cuyas funciones fueron transferidas a la Subcomisión Permanente por decisión de la Junta de Comercio y Desarrollo adoptada en su tercer período de sesiones. Los estudios preparados por el antiguo Grupo Especial de Trabajo, o solicitados por éste (por ejemplo, estudios sobre el cacao, el caucho, un grupo seleccionado de grasas y aceites, los conceptos de relación de intercambio y de poder adquisitivo en importaciones de las exportaciones de los países en desarrollo y los criterios aplicables para la selección de una lista de productos de interés para los países en desarrollo) fueron examinados por la Subcomisión Permanente, que estudió ciertos conceptos y orientaciones generales. En el curso del debate general, se reconoció que los problemas que entrañaba la organización del comercio de productos básicos variaban con cada producto, y que, por tanto, era necesario enfocar la organización de los mercados producto por producto y aplicar los principios de manera pragmática.

La Subcomisión Permanente reanudó su primer período de sesiones en Ginebra el 9 de mayo de 1967, a fin de terminar la preparación del resumen de la situación actual del mercado de los productos básicos seleccionados.

El primer período de sesiones del Comité Asesor de la Junta y de la Comisión de Productos Básicos, cuyos miembros fueron designados por la Junta en febrero de 1966, se celebró del 27 al 30 de septiembre de 1966 en Ginebra. El Comité examinó la cuestión de la formulación de una política internacional de productos básicos e hizo sugerencias acerca de un proyectado documento de la Secretaría sobre este tema para el segundo período de sesiones de la Conferencia. También examinó los temas relativos a productos básicos que figuraban en el proyecto de programa provisional del segundo período de sesiones de la Conferencia, prestando especial atención a los subtemas, relativo uno al funcionamiento y financiación de las reservas de estabilización y otro a la función y financiación de los programas de diversificación. El Comité estudió la posible utilización de las reservas de estabilización y otras técnicas de estabilización del mercado a corto plazo en relación con las estructuras variables de los mercados de productos básicos, así como las probables ventajas de crear una nueva institución financiera internacional encargada de facilitar el funcionamiento de los sistemas de reservas de estabilización. En cuanto a la diversificación, el Comité sugirió que se examinaran las cuestiones siguientes: 1) alguna forma de coordinación internacional destinada a regionalizar las actividades de los países en desarrollo en proceso de industrialización, para que puedan concentrarse en ramas industriales en las que tienen una ventaja relativa; 2) la posibilidad de incluir en los convenios sobre productos básicos medidas para financiar la diversificación; 3) la urgente

necesidad de los países en desarrollo de que se les asegure un grado cada vez mayor de acceso a los mercados de los países desarrollados, incluidos entre otros, el importante rubro de las manufacturas textiles.

Desde 1965, cuando la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Azúcar no pudo llegar a un acuerdo, el Secretario General de la UNCTAD ha venido celebrando consultas por conducto de un Comité Consultivo del Azúcar de la UNCTAD, en cumplimiento de una resolución de la Conferencia. Este Comité Consultivo estableció un grupo de trabajo preparatorio encargado de hacer propuestas sobre el texto general de un amplio convenio internacional del azúcar a largo plazo, y también de estudiar si convenía o no negociar un convenio provisional y, en caso afirmativo, preparar un proyecto del mismo. El Grupo celebró tres periodos de sesiones, en junio, septiembre y noviembre de 1966. Primero se estudió la posibilidad de un convenio provisional de alcance limitado, pero en general no fue considerado aceptable, por lo cual se vienen celebrando desde entonces consultas sobre los aspectos de un convenio a largo plazo.

El Comité Consultivo del Azúcar de la UNCTAD celebró su tercer período de sesiones del 16 al 20 de marzo de 1967, en el cual encareció al Secretario General de la UNCTAD que continuara las conversaciones exploratorias con los gobiernos, estableciendo inclusive, en el momento oportuno, contactos directos en las capitales de los principales países importadores y exportadores de azúcar, a fin de conocer su opinión acerca de los principales problemas pendientes en la negociación de un convenio internacional sobre el azúcar. También le pidió que estableciera, lo más pronto posible, un Grupo de Trabajo sobre evaluaciones estadísticas, encargado primordialmente de determinar las probables necesidades de importación y las disponibilidades de exportación en los años venideros. Una reunión de este Grupo de Trabajo fue convocada en Ginebra del 18 al 20 de abril de 1967. El próximo período de sesiones del Comité Consultivo del Azúcar de la UNCTAD debía celebrarse en Ginebra del 6 al 8 de junio para examinar la adopción de posibles medidas intergubernamentales a la luz del informe del período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre evaluaciones estadísticas. Entre tanto, el Protocolo que prorroga la validez del Convenio Internacional del Azúcar de 1958 hasta el 31 de diciembre de 1968, entró en vigor el 1° de enero de 1967.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cacao se celebró en Nueva York del 23 de mayo al 23 de junio de 1966, bajo los auspicios de la UNCTAD. Aunque la Conferencia hizo algunos progresos, no pudo resolver varios problemas importantes. Según la resolución aprobada el 23 de junio, la Conferencia resolvió que un convenio internacional sobre el cacao adecuado debería contener disposiciones relativas a los cupos, al mecanismo de la reserva de estabilización, a la escala de precios, a los ingresos regulares de las reservas de estabilización y a la transferencia de los excedentes estructurales de cacao a usos no tradicionales. La Conferencia invitó al Secretario General de la UNCTAD a organizar la celebración de consultas bilaterales o multilaterales, o de ambas clases, tanto en el plano técnico como el normativo, con los gobiernos interesados y los correspondientes organismos especializados de las Naciones Unidas, a crear los grupos técnicos de trabajo que juzgara convenientes para estudiar determi-

nadas disposiciones del proyecto de convenio y, basándose en estas medidas, convocar de nuevo la conferencia en fecha posterior. De conformidad con esta resolución, el Secretario General de la UNCTAD celebró consultas de carácter normativo con los principales países importadores y exportadores de cacao en septiembre de 1966, en el curso del primer período de sesiones de un Grupo Técnico de Trabajo en el que se examinaron problemas relativos a cupos y mercados a término. A finales de noviembre de 1966 se celebraron nuevas consultas en Nueva York y, como resultado de las mismas, tuvo lugar en Ginebra, el 22 y el 23 de febrero de 1967, una reunión de un Grupo de Trabajo sobre los obstáculos al comercio del cacao.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Aceite de Oliva de 1967, celebrada en Ginebra del 28 al 30 de marzo, aprobó un Protocolo que prorroga el Convenio Internacional del Aceite de Oliva de 1953 hasta el 30 de septiembre de 1969. El Protocolo entrará en vigor el 1° de octubre de 1967 entre los gobiernos que lo hayan firmado, ratificado, aceptado o aprobado, siempre que entre ellos figuren los de cinco importantes países productores y dos importantes países importadores.

El Tercer Convenio Internacional sobre el Estaño, negociado bajo los auspicios de la UNCTAD en 1965, entró en vigor el 1° de julio de 1966 por un período de cinco años. El Convenio Internacional del Trigo fue prorrogado por un año por un Protocolo que entró en vigor el 16 de julio de 1966; el Consejo Internacional del Trigo, en su 48° período de sesiones, celebrado en Londres en abril de 1967, decidió recomendar a los gobiernos de los países miembros que el Convenio fuera prorrogado por protocolo, por un período que no excediera de un año, respecto de sus disposiciones administrativas.

Los diversos comités y grupos de estudio internacionales sobre productos básicos continuaron estudiando la situación del mercado y examinando las perspectivas a largo plazo de sus respectivos productos. El Grupo Internacional de Estudio sobre el Plomo y el Zinc celebró su décimo período de sesiones en Munich en noviembre de 1966, en el curso del cual estudió la situación actual del mercado y las perspectivas a corto plazo para ambos metales.

El Grupo de Trabajo del Comité sobre el Tungsteno, en su cuarto período de sesiones, celebrado en Nueva York del 6 al 12 de abril de 1967, examinó la situación actual del mercado y estableció un grupo de expertos en estadísticas, encargado de estudiar, en cooperación con la Secretaría de la UNCTAD, el perfeccionamiento de las estadísticas, en particular las relativas al consumo. Se espera que a partir de octubre de 1967 la UNCTAD inicie, en nombre del Comité, la publicación de un boletín trimestral de estadística sobre el tungsteno.

En su segundo período de sesiones, celebrado en Ginebra del 9 al 26 de mayo de 1967, la Comisión de Productos Básicos examinó los acontecimientos recientes y las tendencias a largo plazo del comercio de esos productos, así como las actividades de los órganos de productos básicos, consideró la posibilidad de elaborar una política internacional de productos básicos, inclusive distintas técnicas de estabilización de sus mercados y estudió las formas de liberalizar e incrementar el comercio de los productos básicos que son de interés

para los países en desarrollo. La Comisión también examinó el informe del Comité Asesor de la Junta y de la Comisión de Productos Básicos, así como el informe de su Subcomisión Permanente. Los debates de la Comisión estuvieron centrados en los problemas de productos básicos que serán abordados en el segundo período de sesiones de la Conferencia, que se celebrará en Nueva Delhi en febrero y marzo de 1968.

La Comisión examinó el *Estudio de la UNCTAD sobre los Productos Básicos, 1966* y un documento sobre la presente situación internacional y las perspectivas de los productos básicos, en los cuales se hacen un análisis general de los acontecimientos ocurridos en la primera mitad del Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de los cambios recientes en el comercio internacional de productos básicos, análisis de distintos productos básicos y proyecciones provisionales de las tendencias de las exportaciones de los principales productos básicos no agrícolas procedentes de los países en desarrollo desde la actualidad hasta 1975. En el *Estudio* se concluía que, después de una acusada aceleración en el trienio 1962-1964, la tasa de crecimiento de las exportaciones totales de los países en desarrollo había disminuido en 1965 y 1966, y que en ambos años volvió a ser inferior a la tasa mínima fijada como objetivo. Entre los principales productos básicos estudiados, puede afirmarse que el café y el cobre han sido los únicos que han proporcionado aumentos substanciales de los ingresos de exportación de los países en desarrollo durante el año. Las proyecciones iniciales indican que, entre 1967 y 1975, las exportaciones de todos los productos básicos de los países en desarrollo, inclusive los metales no ferrosos, pueden aumentar a una tasa anual del 4,7% a precios constantes de 1964. Si se excluyen las exportaciones de combustibles, el aumento estimado de las exportaciones de productos básicos es solamente del 2,6% anual. Según estas proyecciones, aun cuando la tasa de aumento de los ingresos de exportación de manufacturas se mantuviera al elevado nivel conseguido en los últimos años, el crecimiento de todas las exportaciones (con exclusión de los combustibles) volvería a ser muy inferior al objetivo de aumento de las exportaciones fijado durante el Decenio para el Desarrollo. Las proyecciones suponen también la continuación de la disparidad entre las tasas de crecimiento de las exportaciones de productos básicos agrícolas y no agrícolas ya observada en el pasado decenio, así como una consiguiente y nueva disminución de la parte correspondiente a las exportaciones agrícolas en las exportaciones totales de productos básicos de los países en desarrollo.

En su primer período de sesiones, la Comisión señaló el cacao, el azúcar, y el café como productos que causan preocupación inmediata, y varios otros como productos que requieren una atención sostenida. En el caso del azúcar y del cacao, se sugirió durante el debate que, al existir la voluntad de negociar sobre una base realista, podría llegarse a un acuerdo eficaz para cada producto. En el caso del café, se reconoció que se habían alcanzado progresos dentro del Convenio Internacional del Café, que los precios habían sido estabilizados en amplia medida y que se habían adoptado medidas iniciales para equilibrar la producción y el consumo mundiales. Se sugirió que el caucho y las fibras duras deberían ser incluidos entre los productos que causan preocupación inmediata, y las especias tropicales, los productos marinos, la fibra del coco y los cues-

ros y pieles entre los productos que requieren una atención sostenida.

La Comisión pidió al Secretario General de la UNCTAD y al Director General de la FAO que organizaran con prontitud un período de sesiones del Grupo de Estudios sobre Semillas Oleaginosas, Aceites y Grasas, que contaría con servicios comunes prestados por esas dos organizaciones, para estudiar urgentemente los problemas especiales de los aceites vegetales y las semillas oleaginosas y hacer recomendaciones sobre medidas en el ámbito nacional e internacional.

También se expresó particular inquietud por los problemas a que da origen la competencia entre los materiales naturales y los sintéticos. A este respecto, la Comisión acordó que el primer período de sesiones del Grupo Permanente encargado de los productos sintéticos y los sucedáneos debería convocarse en fecha breve, posiblemente en agosto de 1967.

Durante el debate sobre los aspectos de la política internacional de productos básicos, la Comisión reconoció la necesidad de relacionar las medidas sobre los distintos productos dentro del marco más amplio de una política sobre productos básicos y centrar la atención en unas cuantas esferas seleccionadas en las que resulta viable y conveniente una acción internacional inmediata, tales como la expansión del volumen del comercio, la estabilización de los mercados de productos básicos y el problema de la financiación en relación con la política sobre esos productos. Se reconoció que la estabilización de los mercados era un objetivo deseable. El debate se dedicó principalmente a estudiar hasta qué punto los sistemas de reservas de estabilización podrían contribuir por sí solos o, de preferencia con mecanismos de apoyo, a conseguir ese fin. Se dijo que un aspecto conexo de la actuación en las esferas del volumen de las exportaciones y la estabilización de los mercados, era la diversificación de las exportaciones. En general se apoyó el punto de vista de que los programas de diversificación deberían formar parte de la política internacional sobre productos básicos. La Comisión examinó diversos aspectos de la financiación, especialmente en relación con el funcionamiento de las reservas de estabilización y los programas de diversificación.

Al abordar el programa de liberalización y expansión del comercio de los productos básicos de interés para los países en desarrollo, la Comisión dio gran prioridad al problema de la liberalización del comercio con los países desarrollados; se hicieron sugerencias para la expansión del comercio de los países en desarrollo con los países socialistas y la del comercio entre los países en desarrollo. Se consideró que una cuestión tan compleja debería ser abordada a un nivel práctico y detallado, producto por producto y país por país. También se consideró la función que la UNCTAD podría desempeñar con provecho en la esfera de la promoción del comercio.

La función coordinadora de la Comisión en el sector del comercio de los productos básicos se vio realzada con la asistencia de representantes de organismos internacionales y de otros órganos interesados en los problemas de esos productos.

La Comisión decidió remitir dos proyectos de resolución al próximo período de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo, uno en que proponía la convo-

catoria de una Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Trigo y el otro relativo a la coordinación de las actividades en la esfera de los productos básicos y la formulación de un acuerdo general sobre convenios de productos básicos.

C. Manufacturas

La Comisión de Manufacturas no se reunió durante el período que abarca este informe. No obstante, los órganos auxiliares de la Comisión han examinado distintos aspectos del programa de trabajo de la misma. Además, la secretaría continúa sus trabajos para que la Comisión pueda llevar a cabo en su segundo período de sesiones, previsto para julio de 1967, los preparativos de los temas relativos a las manufacturas y semimanufacturas incluidos en el programa del segundo período de sesiones de la Conferencia.

En su cuarto período de sesiones, la Junta de Comercio y Desarrollo examinó el informe de la Comisión de Manufacturas sobre la segunda parte de su primer período de sesiones, así como el informe del Grupo de las Preferencias sobre su primer período de sesiones. La Junta examinó también la ejecución de las recomendaciones del primer período de sesiones de la Conferencia sobre medidas gubernamentales e intergubernamentales en la esfera de las manufacturas y semimanufacturas. Representantes de los países en desarrollo expresaron honda preocupación por la falta de progreso en la ejecución de esas recomendaciones, destacando que los países desarrollados no habían suprimido o reducido apreciablemente las barreras arancelarias y no arancelarias, cuyo mantenimiento era una de las causas de la falta de diversificación de las exportaciones de los países en desarrollo y de la lentitud de su ritmo de crecimiento. Se sugirió que la secretaría preparase una evaluación resumida de las principales características de las exportaciones de las manufacturas de los países en desarrollo como parte de su programa ordinario de trabajo. También se consideró que era muy importante que la proporción que corresponde a los países en desarrollo en las exportaciones mundiales de manufacturas se estudiará en el contexto dinámico del crecimiento del comercio mundial de manufacturas y también en relación con el objetivo mínimo del crecimiento del 5% del ingreso nacional global, fijado para el Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Se estuvo en general de acuerdo en la importancia de los estudios por sectores industriales iniciados por la Comisión, expresándose la esperanza de que en los estudios se tuviera en cuenta la experiencia de los países en desarrollo en los sectores objeto de estudio.

La Junta convino en que la promoción comercial constituía una de las medidas importantes para incrementar las exportaciones de manufacturas de los países en desarrollo. A este respecto, un grupo de expertos se reunió en la sede de la UNCTAD del 24 al 28 de octubre de 1966 para asesorar a las secretarías de la UNCTAD y la ONUDI acerca de los sectores en que las Naciones Unidas deberían prestar asistencia técnica para fomentar la expansión de las exportaciones de manufacturas y semimanufacturas de los países en desarrollo. En un período extraordinario de sesiones de los secretarios ejecutivos de las comisiones económicas regionales, celebrado en la Sede de las Naciones Unidas del 25 al 27 de enero de 1967, la UNCTAD se

asoció a un programa destinado a combinar las actividades y recursos de las Naciones Unidas en un plan de fomento de las exportaciones de los países en desarrollo. Como primera medida del plan, se efectuará un análisis de las necesidades concretas de cada región y de las modalidades más adecuadas que podrían reves-tir las actividades y la asistencia de las Naciones Unidas.

El Grupo de las Preferencias, que se reunió del 26 de julio al 5 de agosto de 1966, decidió examinar ciertos aspectos técnicos de la concesión de preferencias, sobre la base de la hipótesis, para fines de trabajo, de que se concederían preferencias generales no discriminatorias y sin reciprocidad. Se convino en que esta discusión oficiosa se celebraría sin perjuicio de la posición que tomara cada país representado en el Grupo respecto de estas cuestiones o de cualquier punto en particular durante los debates. En este contexto se examinaron los temas siguientes: productos incluidos; amplitud de los márgenes preferenciales; qué países concederían preferencias y si todos los sistemas serían idénticos o similares; qué países se beneficiarían y si se aplicarían disposiciones especiales para los países de menor desarrollo; naturaleza de las salvaguardias para proteger industrias particularmente sensibles de los países desarrollados; la cuestión de la supervisión internacional; la relación entre las nuevas preferencias y los sistemas actuales de preferencias; y la duración de las preferencias.

El Grupo de Trabajo Mixto Especial UNCTAD/FAO sobre la Madera y los Productos Forestales se reunió del 31 de octubre al 5 de noviembre de 1966. El Grupo hizo recomendaciones detalladas sobre las medidas que deben adoptarse para reforzar el potencial de exportación de las industrias de productos forestales de los países en desarrollo y aumentar las exportaciones de esas industrias, en particular, de madera aserrada, madera contrachapada y chapa de madera. Entre las recomendaciones adoptadas por el Grupo de Trabajo figuran las siguientes: 1) que se recurra en mayor grado a las organizaciones de la industria de la madera de los países importadores para obtener datos sobre las necesidades concretas de importación, y que se establezcan contactos entre las asociaciones de exportadores de madera de los países en desarrollo y las organizaciones de comercio de madera de los países desarrollados; 2) que se establezca en Europa y en América del Norte una oficina de la madera tropical por un grupo de países en desarrollo exportadores de productos forestales; 3) que se establezcan juntas de asesoramiento industrial para ayudar a las distintas industrias transformadoras a resolver sus problemas de producción y comercialización; 4) que se proporcionen instalaciones de producción modelo para hacer demostraciones y ofrecer formación profesional tanto a los trabajadores como al personal de dirección; 5) que el nivel de las exportaciones de trozas sea adaptado a las necesidades recientes de las industrias nacionales de elaboración para que puedan competir con éxito con las industrias de los países desarrollados. Además, el Grupo de Trabajo instó a que se acelerasen y ampliasen los planes de ayuda multilateral y bilateral en forma de becas, prestaciones de servicios de expertos y organización de centros de demostración, capacitación, e investigación; así como la celebración de seminarios en esta esfera. También pidió que las instituciones financieras internacionales y de otra índole dieran más

amplitud a sus préstamos en materia de silvicultura, para abarcar así la financiación de proyectos de plantaciones y repoblación forestal.

Según lo dispone la resolución 2152 (XXI) de la Asamblea General sobre el establecimiento de la ONUDI, se están tomando disposiciones, a los niveles intergubernamental y de las secretarías, para asegurar una adecuada cooperación y coordinación con la ONUDI.

D. Comercio invisible y financiación relacionada con el comercio

Comercio invisible (seguros y turismo)

De conformidad con la decisión adoptada en el primer período de sesiones de la Comisión del Comercio Invisible y de la Financiación Relacionada con el Comercio, el Secretario General de la UNCTAD convocó del 26 de septiembre al 6 de octubre de 1966, un Grupo de Expertos en Reaseguros que examinó los siguientes asuntos y problemas de los países en desarrollo en el sector de los reaseguros: 1) inversión de los fondos de reaseguros en el país de donde provengan los ingresos derivados de las primas; 2) creación de organizaciones nacionales y regionales de reaseguros con objeto de reducir la salida de divisas del país o de la región en su conjunto; 3) examen de medidas encaminadas a disminuir el costo de los reaseguros para los países en desarrollo, que incluya la evaluación de los tratados y acuerdos de reaseguros, la mejora de sus estipulaciones y condiciones y el estudio de la cuestión de la reciprocidad, y 4) la cooperación internacional en materia de seguros y reaseguros, con inclusión de la asistencia técnica, la formación de personal y el intercambio de información técnica y sobre mercados y estadísticas. Una de las principales recomendaciones del Grupo fue que en los contratos de reaseguros concluidos entre instituciones aseguradoras de países en desarrollo y reaseguradores del extranjero se prevea la participación de los reaseguradores en el establecimiento de reservas técnicas de la compañía cedente, y que cuando la constitución de las reservas técnicas no esté basada en un porcentaje convenido de las sumas efectivas que representan la proporción del reasegurador en las reservas técnicas, dicho porcentaje debe ser del 60% de las primas de reaseguro brutas. El Grupo sugirió varios temas para nuevo estudio.

En su segundo período de sesiones, celebrado en Nueva York del 4 al 19 de abril de 1967, la Comisión del Comercio Invisible y de la Financiación Relacionada con el Comercio examinó el informe del Grupo de Expertos en Reaseguros y expresó su agradecimiento a los expertos por haber aclarado y diagnosticado los problemas que han de resolverse, y por las provechosas recomendaciones que figuran en ese informe. La Comisión encomendó dichas recomendaciones a la atención de los gobiernos de los Estados miembros y a la de la industria de seguros, a fin de que examinaran la posibilidad de ponerlas en práctica. En cumplimiento de otras recomendaciones del Grupo, la Comisión pidió la convocatoria de una reunión de supervisores de seguros y otros expertos de los países en desarrollo para que hicieran un análisis y formularan observaciones sobre los estudios de la secretaría. También tomó nota del texto de un cuestionario relativo a la legislación, a

la supervisión y el mercado de seguros, enviado por la secretaría a los gobiernos de los países en desarrollo, en relación con un estudio sobre la legislación de seguros y reaseguros que forma parte del programa de trabajo de la Comisión. Asimismo pidió al Secretario General de la UNCTAD que, en colaboración con la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas, convocara una reunión de estadísticos de seguros, a efectos de que formularan propuestas de normas estadísticas mínimas y definiciones de las transacciones de seguros y reaseguros. La Comisión pidió además a la secretaría que, por lo menos cada dos años, realizara exámenes de los acontecimientos ocurridos en materia de seguros, con especial referencia a los países en desarrollo.

Para aplicar el programa de trabajo de la Comisión en la esfera del turismo, la secretaría de la UNCTAD inició varios estudios por países sobre la contribución potencial del turismo a la balanza de pagos de los países en desarrollo y la función del turismo en la economía. También preparó un informe amplio sobre las actividades del turismo emprendidas por otros órganos intergubernamentales y no gubernamentales, que la Comisión ha decidido examinar periódicamente. Tomando nota de estos informes, la Comisión pidió al Secretario General de la UNCTAD que convocara una reunión de un pequeño grupo de expertos que examinara las cuestiones de la planificación para el desarrollo del sector turístico en la economía de los países en desarrollo, y decidió examinar, en su tercer período de sesiones, el informe del Grupo de Expertos en estadísticas de viajes internacionales y las recomendaciones que hiciera la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas teniendo en cuenta dicho informe. La Comisión pidió además que, al menos cada dos años, se prepararan informes sobre la evolución del turismo, refiriéndose especialmente a los países en desarrollo, y decidió examinar en su tercer período de sesiones los resultados del Año Internacional del Turismo, prestando especial atención a los países en desarrollo y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Turismo y los Viajes Internacionales, celebrada en Roma en 1963. Decidió igualmente examinar periódicamente la aplicación de las recomendaciones de dicha Conferencia en conformidad con la sugerencia formulada por el Consejo Económico y Social en su resolución 1109 (XL).

La Comisión reafirmó el papel de la secretaría de la UNCTAD en el suministro de apoyo sustantivo a las actividades de asistencia técnica y preinversión de las Naciones Unidas en materia de seguros y turismo en conformidad con la resolución 31 (IV) de la Junta de Comercio y Desarrollo, y recomendó que se pidiera al Secretario General de las Naciones Unidas que estudiara los medios de evitar la duplicación de actividades entre las dependencias de la Secretaría de las Naciones Unidas que se ocupan de las actividades de investigación y otras actividades relativas a esas esferas.

Financiación relacionada con el comercio

El segundo período de sesiones de la Comisión del Comercio Invisible y de la Financiación Relacionada con el Comercio se celebró en Nueva York del 4 al 19 de abril de 1967. La Comisión, al examinar el grado de adecuación de las tasas de crecimiento alcanzadas por los países en desarrollo, estudió las condiciones, coordinación y eficacia de la ayuda y problemas del

servicio de la deuda; los créditos concedidos por los proveedores; el estímulo de la corriente de capital privado; y la movilización de los recursos internos y la corriente de asistencia exterior. También examinó las medidas financieras complementarias, los problemas monetarios internacionales, los acuerdos de pagos entre países en desarrollo y la propuesta Horowitz.

Un hecho destacado del segundo período de sesiones de la Comisión fue la aprobación de una declaración acordada sobre los problemas del desarrollo, en la que se hacen comentarios sobre el contenido de los temas del proyecto del programa provisional del segundo período de sesiones de la Conferencia.

La Comisión reconoció en general que los propios países en desarrollo deben soportar la carga principal de la financiación de su desarrollo, y que, pese a dificultades importantes, un número considerable de países en desarrollo habían hecho tenaces esfuerzos por movilizar sus propios recursos para el desarrollo. Pese a esos esfuerzos, los países en desarrollo en conjunto no lograron alcanzar durante los años 1960-1965 el objetivo del 5% de tasa anual de crecimiento de la producción fijado para el Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Al observar la complejidad de los factores que intervienen en el crecimiento económico, la Comisión expresó la esperanza de que los estudios por países que prepara la secretaría de la UNCTAD contribuyan a esclarecer mejor esta cuestión, en particular la relación entre el crecimiento y la ayuda. Se consideró motivo de preocupación que la corriente de recursos financieros de los países avanzados y de los países en desarrollo no hubiese conseguido mantenerse a la par del crecimiento del ingreso nacional de los países desarrollados, aun cuando la mayor parte de los países en desarrollo podrían utilizar efectivamente un mayor volumen de asistencia exterior. Por tanto, la Comisión acordó que el objetivo de los países desarrollados debería consistir en aumentar la corriente neta de su asistencia al desarrollo con objeto de lograr la meta establecida por la UNCTAD como se define de las recomendaciones y otras disposiciones del Acta Final del primer período de sesiones de la Conferencia.

La Comisión manifestó su honda inquietud ante las crecientes obligaciones del servicio de la deuda de los países en desarrollo y advirtió que las mismas amenazaban con producir una disminución importante de la transferencia neta de recursos a esos países. El aumento de la deuda exterior y de los pagos de servicios de la deuda fue acompañado de un reciente deterioro de las condiciones generales de las corrientes de asistencia financiera a los países en desarrollo, inclusive un mayor condicionamiento de la ayuda que redujo aún más el valor real de la corriente de asistencia. En consecuencia, la Comisión acordó que se requerían nuevos esfuerzos para atenuar las condiciones de la ayuda. La Comisión señaló también la conveniencia de que los países desarrollados hicieran un esfuerzo conjunto por armonizar las condiciones de la ayuda y reducir la carga que entraña la actual disparidad de esas condiciones. La Comisión decidió que la Secretaría llevara a cabo un nuevo estudio sobre el problema del endeudamiento, diferenciando entre los diversos tipos de deuda. También decidió que la Secretaría emprendiera un estudio amplio de los efectos de la ayuda condicionada desde el punto de vista de los países desarrollados y en desarrollo. Además, se pidió a la Secretaría que am-

pliara su estudio de las dificultades de administración de la ayuda e indicara diversas medidas para obviarlas.

La Comisión examinó los estudios sobre los créditos de proveedores preparados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, de conformidad con la recomendación A.IV.14 de la Conferencia. Se reconoció en general que, si bien los créditos comerciales desempeñaban una función importante y útil en el comercio mundial, su empleo excesivo podría originar una crisis en el servicio de la deuda, cosa que ya había sucedido en algunos casos. También se admitió que los créditos de proveedores no eran un sustituto real de la ayuda a largo plazo para el desarrollo. La Comisión pidió la preparación de un nuevo informe sobre esos créditos, que incluiría medidas para promover las exportaciones de los países en desarrollo.

En cuanto a la corriente de capital privado hacia los países en desarrollo, la Comisión examinó un estudio preparado por la Subdirección Fiscal y Financiera del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, en cumplimiento de la recomendación A.IV.12 de la Conferencia. La Comisión consideró que debería prestarse especial atención a un estudio empírico sobre los efectos de las inversiones privadas desde el punto de vista del inversionista y del beneficiario.

La cuestión de las medidas financieras complementarias fue objeto de un estudio anterior del BIRF, que, en cumplimiento de la recomendación A.IV.18 de la Conferencia, propuso un plan para evitar la desorganización de los programas de desarrollo a consecuencia de reducciones persistentes de los ingresos de exportación por debajo de las previsiones razonables. En su 95a. sesión plenaria, la Junta de Comercio y Desarrollo estableció un Grupo Intergubernamental para la Financiación Complementaria. El Grupo, que se reunió en octubre de 1966 y febrero de 1967, ha examinado los problemas importantes suscitados en el estudio preparado por el personal del BIRF y ha llegado a un acuerdo sobre las cuestiones principales que deben ser resueltas antes de la aplicación del plan. Los informes del Grupo fueron examinados por la Comisión en su segundo período de sesiones. Catorce países en desarrollo presentaron una declaración sobre las medidas financieras complementarias, que fue incorporada como anexo al informe de la Comisión sobre su segundo período de sesiones. El Grupo volverá a reunirse para examinar esas cuestiones en octubre de 1967.

La Comisión también examinó el informe del Grupo de Expertos en problemas monetarios internacionales. Además, tuvo ante sí un informe preparado por el Secretario General de la UNCTAD sobre la marcha de las actividades relacionadas con la reforma monetaria internacional. Una declaración sobre los problemas monetarios internacionales presentada por varios países en desarrollo, fue incorporada como anexo al informe de la Comisión sobre su segundo período de sesiones.

La Comisión estudió igualmente el informe del Grupo de Expertos sobre la Propuesta Horowitz y pidió al Secretario General de la UNCTAD que estudiara la importancia que pudieran tener las perspectivas generales de los mercados de capital en el porvenir a más largo plazo, recurriendo para ello, si lo estimaba conveniente, a la asistencia de expertos.

El informe del Grupo de Expertos en acuerdos de pagos entre países en desarrollo fue preparado en cumplimiento de la recomendación A.IV.19 de la Conferencia. El Grupo se reunió en Nueva York del 20 de junio al 3 de julio de 1966. Una de sus principales conclusiones fue que los acuerdos de pagos en general podrían aportar una contribución positiva, en grado diverso, a la expansión del comercio entre los países en desarrollo. También concluyó que la contribución que esos acuerdos puedan aportar a la expansión del comercio dependerá, entre otras cosas, de sus estipulaciones sobre facilidades crediticias. Con ese propósito, el Grupo recomendó que los arreglos crediticios fueran completados con contribuciones a un fondo central aportadas por los propios países miembros, y que las contribuciones de los países desarrollados a dichos fondos constituirían una utilización eficaz de la financiación para el desarrollo. El informe del Grupo fue examinado por la Comisión en su segundo período de sesiones. La Comisión acordó remitir dicho informe a los órganos pertinentes de la UNCTAD y además decidió examinar de nuevo estas cuestiones en su próximo período ordinario de sesiones, junto con el estudio de los aspectos financieros del desarrollo regional.

E. Transporte marítimo

La Comisión del Transporte Marítimo se reunió en período extraordinario de sesiones en julio de 1966 para examinar el enfoque de los métodos que debían utilizarse en un estudio sobre el nivel y estructura de los fletes marítimos, las prácticas de las conferencias y el grado de adecuación de los servicios de transporte marítimo. Al examinar por primera vez su programa de trabajo en su primer período de sesiones, la Comisión solicitó un informe de la secretaría sobre esas cuestiones. En el período extraordinario de sesiones, la Comisión aprobó un programa de trabajo al respecto, cuyos objetivos principales son completar y reforzar los estudios que se hayan de emprender en virtud de otras partes del programa de trabajo que a su vez entrañan el estudio de diversos aspectos de los fletes marítimos. El estudio tiene también por objetivo fomentar la comprensión y la cooperación, facilitando a todas las partes interesadas una mejor comprensión de la organización económica de esa actividad, estudiando los efectos que tiene la actual organización y los actuales costos del transporte marítimo en el comercio y en los pagos internacionales e identificando y analizando los factores que influyen en la fijación de las rutas y de los fletes marítimos. Las investigaciones de la secretaría consistirán en efectuar estudios por países, estudios por productos, estudios por rutas y estudios colectivos, así como estudios sobre otras prácticas de las conferencias y grado de adecuación de los servicios de transporte marítimo.

En agosto de 1966, el Secretario General de la UNCTAD invitó a un grupo de economistas universitarios interesados en problemas del transporte marítimo a un seminario sobre la economía del transporte marítimo, al que también asistieron miembros del personal de las tres comisiones económicas regionales CEPAL, CEPAL y CEPA, que han instituido un programa de trabajo en el sector del transporte marítimo y los puertos. El seminario ofreció una oportunidad

para establecer contactos con economistas del transporte marítimo y celebrar discusiones sobre cuestiones relativas al examen del programa de trabajo de la UNCTAD en esa esfera.

La Comisión del Transporte Marítimo celebró su segundo período de sesiones del 21 de febrero al 8 de marzo de 1967, y examinó el establecimiento sobre una base nacional y regional de un sistema de consultas; el nivel y estructura de los fletes marítimos, prácticas de las conferencias y grado de adecuación de los servicios de transporte marítimo; el desarrollo de los puertos y de las instalaciones conexas y el mejoramiento de las operaciones portuarias; y el estudio de aspectos actuales y a largo plazo de los servicios de transporte marítimo.

El examen del sistema de consultas estuvo basado en un informe de la Secretaría, en el cual se estudiaba el sistema existente en los países desarrollados y en desarrollo y se formulaban ciertas conclusiones respecto a las condiciones que deberían reunirse para que el sistema de consultas alcanzara su propósito. Se convino, con carácter general, en que el sistema de consultas debería ser de naturaleza tal que se amoldara a las diversas circunstancias locales y regionales; también hubo acuerdo general en que, como primer paso para asegurar una estrecha cooperación entre usuarios y conferencias, debería establecerse un sistema de consultas bien organizado, con un procedimiento adecuado para escuchar y atender las quejas, mediante la constitución de consejos de usuarios y de otros organismos pertinentes, sobre una base nacional y regional. Además se destacó la importancia de la función que las autoridades públicas tendrían que desempeñar en los puertos de los países en desarrollo y de la adecuada representación de las conferencias en esos puertos. La Comisión aprobó una resolución sobre este tema, en la que pidió al Secretario General de la UNCTAD que diera la mayor difusión posible al informe de la secretaría entre los círculos del transporte marítimo, las instituciones académicas y otros órganos interesados, e invitó a los gobiernos de los países en desarrollo a que examinaran las sugerencias contenidas en ese informe, con el fin de alentar la creación de consejos de usuarios u organismos equivalentes y de sistemas de consultas. Además invitó a los gobiernos de los países con experiencia en sistemas de consultas, y a través de ellos a las empresas comerciales y de transporte marítimo, a que prestaran asistencia a los gobiernos de los países en desarrollo y a sus empresas comerciales y de transporte marítimo para el establecimiento de consejos de usuarios u organismos equivalentes y de sistemas de consultas, y señaló a la atención de los gobiernos de los países en desarrollo la posibilidad de que obtuvieran asistencia técnica de las Naciones Unidas en este aspecto y la ayuda y orientación técnicas que la secretaría de la UNCTAD podría proporcionar. Instó también a las comisiones económicas regionales a proseguir, en cooperación con la UNCTAD, sus actividades encaminadas al establecimiento de consejos de usuarios u organismos equivalentes y de sistemas de consultas en los diferentes países y, a su debido tiempo, en el plano regional.

La Comisión examinó también durante su segundo período de sesiones, un informe sobre la marcha del desarrollo de los puertos; un informe sobre otros temas del programa de trabajo de la Comisión; un esquema

provisional, solicitado por la Comisión en su primer período de sesiones, para un estudio anual de los aspectos actuales y a largo plazo de los servicios de transporte marítimo, y un informe relativo al seminario sobre la economía del transporte marítimo.

La Comisión pidió a la secretaría que preparara un estudio anual de los aspectos actuales y a largo plazo de los servicios de transporte marítimo e indicó su deseo de que se celebraran seminarios interregionales de la UNCTAD sobre la economía del transporte marítimo en las distintas regiones, con participación, sobre una base geográfica lo más representativa posible, de instituciones académicas, especializadas y técnicas y de otras entidades competentes y personas interesadas en la investigación de los aspectos económicos del transporte marítimo y dedicados a ella. Al examinar las actividades de otras instituciones del sistema de las Naciones Unidas y de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales en la esfera del transporte marítimo y los puertos, la Comisión reiteró que la secretaría de la UNCTAD era competente para prestar apoyo orgánico, en coordinación con otros órganos de las Naciones Unidas cuando procediera, a las actividades de asistencia técnica en materia de transporte marítimo, incluidos los puertos, y recomendó que se pidiera al Secretario General de las Naciones Unidas que estudiara los medios de evitar la duplicación de actividades entre las dependencias de la Secretaría de las Naciones Unidas que se ocupan del transporte marítimo y los puertos.

F. Comercio de tránsito de los países sin litoral

La Convención sobre el Comercio de Tránsito de los Estados sin Litoral entró en vigor el 9 de junio de 1967 en virtud de su artículo 20, que dispone que la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que se hayan depositado los instrumentos de ratificación o de adhesión de, por lo menos, dos Estados sin litoral y dos Estados de tránsito con litoral. Seis Estados sin litoral (Chad, Malawi, Mongolia, Nepal, Níger y Zambia) y dos Estados con litoral (Nigeria y Yugoslavia) han ratificado la Convención o se han adherido a ella.

La Convención fue aprobada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio de Tránsito de los Países sin Litoral, celebrada en 1965 bajo los auspicios de la UNCTAD. La Conferencia había sido convocada en cumplimiento de una recomendación del primer período de sesiones de la UNCTAD, en la que se había destacado la necesidad de proporcionar facilidades adecuadas a los Estados sin litoral, para que pudieran superar las consecuencias que sobre su comercio tiene su situación geográfica.

La Convención consta de un preámbulo y 23 artículos. En el preámbulo se reafirman los ocho principios aprobados por el primer período de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, en los cuales, entre otras cosas, se reconoce que el derecho de todo país sin litoral a gozar de libre acceso al mar es un principio esencial para la expansión del comercio internacional y el desarrollo económico. En los artículos se definen las expresiones "Estado sin litoral", "tráfico en tránsito", "Estado de tránsito" y "medios de transporte" y se regulan cuestio-

nes tales como la libertad de tránsito, la facilitación del tráfico en tránsito por rutas mutuamente aceptables, la no discriminación respecto del tráfico en tránsito, la exención de derechos de aduanas e impuestos de importación o exportación, excepto las tasas que tengan por objeto sufragar los gastos de vigilancia y de administración que suponga ese tránsito, la facilitación del movimiento de las mercancías en tránsito, la simplificación de las medidas administrativas relativas al tráfico en tránsito, el almacenamiento de las mercancías en tránsito y el establecimiento de zonas francas u otras facilidades aduaneras.

G. Medidas tomadas por la Asamblea General

En su vigésimo primer período de sesiones, la Asamblea General examinó el segundo informe anual de la Junta de Comercio y Desarrollo. El Consejo Económico y Social había tomado nota anteriormente del informe y lo había transmitido a la Asamblea. La Asamblea, al tomar nota del informe, reiteró su petición a los gobiernos de los Estados miembros de la UNCTAD de que siguieran examinando sus políticas y de que tomaran medidas, conjunta o separadamente, según procediera, a la luz del Acta Final del primer período de sesiones de la Conferencia, a fin de poner en práctica las recomendaciones de ésta en las diversas esferas de sus programas nacionales e internacionales. La Asamblea expresó su honda decepción ante el hecho de que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cacao, de 1966, no hubiera concertado un convenio sobre el cacao, y afirmó la necesidad de concertar un convenio internacional sobre el cacao lo antes posible. Asimismo, exhortó a todos los interesados, en particular a los principales países consumidores, a que hicieran todo lo posible a ese efecto.

La Asamblea General decidió convocar el segundo período de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en Nueva Delhi, del 1º de febrero al 25 de marzo de 1968, y, a este respecto, entre otras cosas, invitó a los organismos especializados, al OIEA, al PNUD, a la ONUDI, a las comisiones económicas regionales y a la Oficina de Asuntos Económicos y Sociales en Beirut a que, en sus programas, prestaran especial atención a los preparativos para el segundo período de sesiones de la Conferencia y a que adoptaran todas las demás medidas posibles para aportar su plena colaboración con objeto de garantizar el éxito de la misma. También pidió al Secretario General de la UNCTAD que iniciara inmediatamente la labor preparatoria del segundo período de sesiones, en colaboración, siempre que fuera posible, con las comisiones económicas regionales. La Asamblea General reconoció por unanimidad la necesidad de reformar el sistema monetario internacional de manera que responda mejor a los requisitos para el crecimiento económico de los países desarrollados y en desarrollo. Con ese fin, la Asamblea suscribió el principio de que era necesario que los países desarrollados y los países en desarrollo que así lo desearan, estuvieran plenamente representados en las deliberaciones y decisiones que conduzcan a nuevas disposiciones de reforma monetaria internacional, incluso las relacionadas con los problemas de la liquidez internacional, y participarían plenamente en la aplicación de las disposiciones que se adoptaren; pidió también al Secretario General de la

UNCTAD que celebrara consultas con el Director General del Fondo Monetario Internacional acerca de la marcha de las actividades relacionadas con la reforma monetaria internacional y que informara a la Junta de Comercio y Desarrollo, en su quinto período de sesiones, por conducto de la Comisión del Comercio Invisible y de la Financiación relacionada con el Comercio.

La Asamblea General decidió además modificar el párrafo 6 de su resolución 2029 (XX) a fin de que el Secretario General de la UNCTAD fuera incluido entre los miembros de la Junta Consultiva Mixta del PNUD. La Asamblea General hizo suyas las recomendaciones de la Junta relativas a la asistencia técnica en la esfera del comercio y sectores conexos.

REFERENCIAS

A. Examen de las actividades

El Acta Final y el informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo se encontrarán en la Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 64.II.B.11 (E/CONF.46/141, Vol. I); los volúmenes II a VIII de la serie llevan los números de venta 64.II.B.12 a 18.

El informe de la Junta de Comercio y Desarrollo sobre su cuarto período de sesiones (31 de octubre de 1965 a 24 de septiembre de 1966) figura en *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Suplemento No. 15* (A/6315/Rev.1), segunda parte.

Como documentos pertinentes, véanse:

- Expansión del Comercio y Cooperación Económica entre Países en Desarrollo*: Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 67.II.D.2;
- Acuerdos de Pagos entre Países en Desarrollo para la Expansión del Comercio*: Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 67.II.D.6.

Otros documentos pertinentes que pueden consultarse son: *Documentos Oficiales de la Junta de Comercio y Desarrollo, cuarto período de sesiones, Anexos*, tema 3 del programa; *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Anexos*, tema 37 del programa, y *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 41º período de sesiones (continuación), Anexo*, tema 2 del programa.

B. Problemas de productos básicos

El informe de la Comisión de Productos Básicos sobre su segundo período de sesiones (9 a 26 de mayo de 1967) figura en el documento TD/B/120.

Otros documentos pertinentes que pueden consultarse son:

- Documentos Oficiales de la Junta de Comercio y Desarrollo, cuarto período de sesiones, Anexos*, tema 9 del programa;
- Estudio de la UNCTAD sobre los productos básicos, 1966*: Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 67.II.D.9;
- Informe sobre el primer período de sesiones del Comité Asesor de la Junta y de la Comisión de Productos Básicos (27 a 30 de septiembre de 1966): TD/B/109;
- Informe de la Subcomisión Permanente de Productos Básicos a la Comisión de Productos Básicos, sobre su primer período de sesiones (27 de junio a 16 de julio de 1966): TD/B/C.1/21 y Corr.1;
- Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Aceite de Oliva, 1967: TD/B/C.1/31 y Corr.1;
- Informe de la Subcomisión Permanente de Productos Básicos sobre la segunda parte de su primer período de sesiones (9 de mayo de 1967): TD/B/C.1/39.

C. Manufacturas

Como documentos pertinentes, véanse:

- Documentos Oficiales de la Junta de Comercio y Desarrollo, cuarto período de sesiones, Anexos*, tema 4 del programa;

- Informe que el Grupo de Trabajo Mixto Especial UNCTAD/FAO sobre la Madera y los Productos Forestales presenta a la Comisión de Manufacturas: TD/B/C.2/18 y Corr.1;
- Informe sobre la reunión de expertos sobre la asistencia técnica de las Naciones Unidas relacionada con las exportaciones de manufacturas y semimanufacturas de los países en desarrollo: TD/B/C.2/32.

D. Comercio invisible y financiación relacionada con el comercio

El informe de la Comisión del Comercio Invisible y de la Financiación relacionada con el Comercio sobre su segundo período de sesiones (4-19 de abril de 1967) figura en el documento TD/B/118.

Otros documentos pertinentes que pueden consultarse son:

- Documentos Oficiales de la Junta de Comercio y Desarrollo, cuarto período de sesiones, Anexos*, tema 5 del programa;
- Los Problemas Monetarios Internacionales y los Países en Desarrollo*: publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 66.II.D.2;
- Export Credits and Development Financing*: publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 67.II.D.1 (en inglés solamente);
- Nuevo examen del informe del Grupo de Expertos en problemas monetarios internacionales: TD/B/115;
- La propuesta Horowitz: Informe del Grupo de Expertos: TD/B/C.3/23;
- La movilización de los recursos internos por los países en desarrollo: TD/B/C.3/28 y Corr.1;
- Política y operaciones de reaseguros en los países en desarrollo: Informe del Grupo de Expertos en Reaseguros: TD/B/C.3/29;
- Examen del grado de adecuación de las tasas de crecimiento alcanzadas por los países en desarrollo: Crecimiento y financiación exterior del desarrollo: TD/B/C.3/34 y Corr.1 y 2;
- Condiciones, calidad y eficacia de las corrientes financieras y problemas de servicio de la deuda: TD/B/C.3/35 y Corr.1-4;
- Problemas del servicio de la deuda — Las perspectivas en cuanto al servicio de la deuda: TD/B/C.3/36 y Corr.1;
- Problemas del servicio de la deuda — Modificación de los plazos de vencimiento o consolidación de la deuda exterior: documento preparado por el BIRF: TD/B/C.3/37 y Corr.1;
- Grupo Intergubernamental para la Financiación Complementaria: Informe sobre su primer período de sesiones (10 a 14 de octubre de 1966): TD/B/C.3/41;
- Grupo Intergubernamental para la Financiación Complementaria: Informe sobre su segundo período de sesiones (6 a 17 de febrero de 1967): TD/B/C.3/44;
- Créditos de proveedores, estudio de la Secretaría del BIRF sobre los créditos de proveedores de los países industrializados a los países en desarrollo: TD/B/C.3/L.38.

E. Transporte marítimo

El informe de la Comisión del Transporte Marítimo sobre su período extraordinario de sesiones (18 a 25 de julio de 1966) figura en el documento TD/B/83, y el informe sobre su segundo período de sesiones (21 de febrero a 8 de marzo de 1967) en el documento TD/B/116.

Otros documentos pertinentes que pueden consultarse son:

- a) El transporte marítimo y la economía mundial — Informe de un Seminario sobre la economía del transporte marítimo: TD/B/C.4/17;
- b) Consultas en materia de transporte marítimo. Establecimiento de organismos nacionales y regionales de usuarios,

consultas y negociaciones entre usuarios y armadores: TD/B/C.4/20 y adiciones.

- c) Desarrollo de los puertos — Informe sobre la marcha de las actividades, preparado por la Secretaría de la UNCTAD: TD/B/C.4/23;
- d) Esquema de los estudios de los aspectos actuales y a largo plazo de los servicios de transporte marítimo: TD/B/C.4/24.

F. Comercio de tránsito de los países sin litoral

Para el texto de la Convención sobre Comercio de Tránsito de los Estados sin Litoral, véanse *Documentos Oficiales de la Junta de Comercio y Desarrollo, segundo período de sesiones, Anexos*, tema 6 del programa, documento TD/B/18

CAPITULO XI

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

En su resolución 2152 (XXI) la Asamblea General decidió que la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), creada como órgano de la Asamblea General, funcionara como organización autónoma dentro de las Naciones Unidas. En la resolución se establecieron el objetivo y las funciones de la organización, que incluyen actividades operacionales y estudios y programas de investigación orientados hacia la práctica y encaminados especialmente a facilitar dicho objetivo y dichas funciones. La Asamblea General decidió también que la Junta de Desarrollo Industrial, establecida como el órgano principal de la organización, estuviese compuesta por cuarenta y cinco miembros elegidos por la Asamblea General. Las funciones de la Junta de Desarrollo Industrial incluyen la formulación de principios y normas, el examen y la aprobación del programa de actividades de la organización y el examen y la coordinación de actividades dentro del sistema de las Naciones Unidas en la esfera del desarrollo industrial. La Junta se reunirá según se establezca y normalmente celebrará un período ordinario de sesiones por año. Informará a la Asamblea General por conducto del Consejo Económico y Social.

La Asamblea General estableció disposiciones concretas sobre coordinación y cooperación con otros órganos de las Naciones Unidas. En particular, dispuso que la ONUDI ha de desempeñar el papel central y ha de encargarse de revisar y fomentar la coordinación de todas las actividades en materia de desarrollo industrial de los organismos que integran el sistema de las Naciones Unidas. Dispuso también que la ONUDI ejerza sus funciones, cuando sea oportuno, en estrecha cooperación con los organismos especializados interesados y con el Organismo Internacional de Energía Atómica.

Mediante la resolución 2212 (XXI), la Asamblea General decidió establecer la Sede de la ONUDI en Viena.

La Junta de Desarrollo Industrial celebró su primer período de sesiones en abril y mayo de 1967. En su resolución 1 (I) sobre el futuro programa de trabajo y actividades de la ONUDI, la Junta decidió que la organización desempeñe sus funciones esencialmente atendiendo a la necesidad urgente de los países en desarrollo de acelerar su industrialización mediante actividades operacionales y de fomento, respaldadas por las investigaciones necesarias. Estableció también algunas normas con arreglo a las cuales el Director Ejecutivo ha de desempeñar sus funciones. La resolución establece una serie de consideraciones sobre las cuales han de basarse las actividades de investigación de la

ONUDI. Enumera también los diversos tipos de asistencia que la organización ha de proporcionar a los países en desarrollo mediante sus actividades operacionales. La Junta aprobó el programa de trabajo presentado por el Director Ejecutivo con sujeción a los cambios que éste estime apropiados atendiendo a las directivas establecidas por la Junta. En relación con la presentación de los futuros programas de trabajo, la Junta estableció una serie de requisitos que han de satisfacerse, teniendo en cuenta la necesidad de desarrollar gradualmente la función coordinadora central de la ONUDI en materia de desarrollo industrial.

En su resolución 2 (I), la Junta invitó al Secretario General a convocar una conferencia anual para anuncios de contribuciones, de conformidad con el apartado a) del párrafo 23 de la resolución 2152 (XXI) de la Asamblea General. La Junta recomendó también a la Asamblea General que, en su vigésimo segundo período de sesiones, adoptara las medidas necesarias para establecer una sección separada en el título V del presupuesto de las Naciones Unidas para sufragar el programa de asistencia técnica en materia de desarrollo industrial a un nivel apropiado que esté en consonancia con las crecientes necesidades de los países en desarrollo y que modificara su resolución 2029 (XX) de 22 de noviembre de 1965, para autorizar a la Junta de Desarrollo Industrial a examinar y aprobar los proyectos y programas de desarrollo industrial iniciados mediante el uso de los recursos así consignados, y proporcionar normas generales de orientación y dirección respecto a su administración.

En relación con la consideración del informe consolidado sobre las actividades de desarrollo industrial de las Naciones Unidas que había sido presentado por el Director Ejecutivo de la ONUDI, la Junta decidió pedir al Director Ejecutivo que presentara una actualización de ese informe a la Junta en su siguiente período de sesiones, en forma adecuada y que, en consulta con las organizaciones que envíasen materiales para el informe, mejorase el contenido de este último teniendo particularmente en cuenta la necesidad de: 1) reducir al mínimo el texto descriptivo de cada proyecto; 2) revisar la clasificación de los materiales para asignar la importancia adecuada a diversas ramas industriales destinando un capítulo separado en el informe a cada rama de la industria en lugar de agruparlas en un solo capítulo, y un capítulo adicional que contenga una lista de proyectos para cada país; 3) presentar toda la información totalmente clasificada según los diversos epígrafes que abarcan las diferentes zonas de actividad particular y 4) cuidar de que el informe pueda faci-

litarse a los miembros de la Junta lo antes posible, conforme lo dispone el reglamento.

La Junta pidió además al Director Ejecutivo que le presentase en cada período ordinario de sesiones un informe analítico sobre las actividades del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas en la esfera del desarrollo industrial, señalando específicamente a la atención las deficiencias de acción y los sectores de duplicación, si los hubiere; que examinase, en consulta con los directores ejecutivos de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, la posibilidad de incluir en el informe consolidado anual una relación de los futuros programas de actividades en materia de desarrollo industrial que estas organizaciones se propongan ejecutar y que presentase un informe a la Junta en su período ordinario de sesiones siguiente.

A. *Simpósio Internacional sobre Desarrollo Industrial*

Se han terminado los preparativos para el Simposio Internacional sobre Desarrollo Industrial, que se ha de celebrar en Atenas del 29 de noviembre al 20 de diciembre de 1967. El Simposio proporcionará un estudio global de la situación industrial de los países en desarrollo y examinará con cierto detalle los problemas de industrialización comunes. Se espera también que el Simposio proporcione una valiosa orientación para la cooperación internacional en la que participen tanto los países industriales como los países en desarrollo. Se prevé que el Simposio ayudará a todo el sistema de las Naciones Unidas a plantear un programa ampliado y mejorado de asistencia técnica y financiera al sector industrial.

El 19 de diciembre de 1966 la Asamblea General aprobó la resolución 2178 (XXI) en la cual tomó nota con satisfacción de las recomendaciones que figuran en las resoluciones 1180 (XLI) y 1185 (XLI) del Consejo Económico y Social relativas a los preparativos y a la organización del Simposio. Además, la Asamblea hizo suya la decisión del Consejo de convocar el Simposio en Atenas en diciembre de 1967.

En la misma resolución, la Asamblea invitó a los Gobiernos de los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los miembros de los organismos especializados y del OIEA a que se interesasen activamente en la labor preparatoria del Simposio y que procuraran participar eficazmente en el mismo. Los organismos especializados, el OIEA, las comisiones económicas regionales, la Oficina de Asuntos Económicos y Sociales de Beirut y las organizaciones intergubernamentales interesadas fueron también invitados a cooperar en la labor preparatoria. Además, se pedía a la Junta de Desarrollo Industrial que dedicara toda la atención necesaria a la labor preparatoria del Simposio y a que estudiara, oportunamente, las recomendaciones del Simposio y adoptara las medidas pertinentes.

El Consejo Económico y Social había recomendado el programa provisional del Simposio, que figura en el anexo I de la resolución 1180 (XLI) del Consejo, y el proyecto de reglamento que ha de regir las deliberaciones (anexo II de la resolución 1180 (XLI)), con las enmiendas introducidas por la resolución 1185 (XLI)).

En su primer período de sesiones, celebrado en abril de 1967, la Junta de Desarrollo Industrial examinó un informe de la Secretaría sobre los preparativos para el Simposio. Al presentar este tema del programa, el Director Ejecutivo de la ONUDI hizo notar que el 14 de abril se había firmado un acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Grecia referente al Simposio.

La Junta recomendó al Simposio el programa provisional y el proyecto de reglamento propuesto por el Consejo Económico y Social, en el entendimiento de que las reservas expresadas por ciertas delegaciones figurarían en el informe del primer período de sesiones de la Junta.

Los preparativos hechos por la Secretaría para el Simposio han incluido consultas entre la ONUDI y los gobiernos, los organismos especializados, la OIEA y las comisiones económicas regionales, relacionadas con sus planes para participar en la reunión y sus contribuciones a la documentación.

En junio de 1967 se distribuyó a los Gobiernos de los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los miembros de los organismos especializados y del OIEA, así como a los organismos especializados y al OIEA, un *aide-memoire* en el que figuraba un calendario provisional de reuniones e información relacionada con la documentación para el Simposio y con la organización del mismo.

Uno de los principales documentos que ha de presentarse al Simposio Internacional sobre Desarrollo Industrial es el primer número de un "Estudio del Desarrollo Industrial" de alcance mundial, cuya preparación exigió investigaciones considerables durante el año pasado. El estudio pasará revista a la evolución reciente en los países en desarrollo, incluidos la influencia general de la oferta y la demanda, el empleo de mano de obra, los recursos naturales y la tecnología, la utilización y disponibilidad de financiación y otros problemas que afectan la tasa de crecimiento industrial.

B. *Actividades operacionales sobre el terreno*

De conformidad con la resolución 2152 (XXI) de la Asamblea General, la ONUDI se ha hecho cargo de la responsabilidad directa de las operaciones sobre el terreno relacionadas con proyectos de desarrollo industrial ejecutados hasta ahora por la Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica y por la Oficina de Operaciones del Fondo Especial del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. De esta manera, la responsabilidad del apoyo sustantivo y de la programación y ejecución de los proyectos de cooperación técnica se fusionará en la secretaría de la ONUDI, con lo que habrá más oportunidades de emplear con eficacia los posibles programas mencionados más arriba, y se garantizará el desarrollo coordinado de los mismos como instrumentos flexibles para atender la variada gama de solicitudes de los gobiernos en la esfera industrial.

A partir de 1964 casi se ha duplicado la asistencia de las Naciones Unidas en apoyo de la industrialización de los países en desarrollo. En la actualidad, el programa de cooperación técnica de la ONUDI incluye

actividades operacionales de esta clase financiadas con recursos de las siguientes fuentes: 1) el PNUD (sector Asistencia Técnica), 2) el programa ordinario de asistencia técnica de las Naciones Unidas, 3) PNUD (sector Fondo Especial), 4) el Programa de Servicios Industriales Especiales, 5) proyectos financiados con recursos extrapresupuestarios, principalmente fondos fiduciarios que proporcionan los gobiernos beneficiarios.

Las esferas de actividad abarcadas por los programas operacionales sobre el terreno incluyen estudios y políticas en materia de industrialización, programación industrial, formulación y evaluación de proyectos industriales, desarrollo de las industrias orientadas hacia la exportación, la ubicación de industrias y el desarrollo regional, la financiación industrial, las industrias metalúrgicas y metálicas, las industrias químicas y petroquímicas, las industrias textiles y otras industrias de consumo, la normalización industrial y el control de la calidad, la formación y dirección industriales, los aspectos institucionales del desarrollo industrial y los problemas de la pequeña industria.

El programa de servicios industriales especiales, que se había establecido con carácter experimental, cumplió su primer año de operaciones durante el período que se examina. El principal propósito de este programa es proporcionar la asistencia específica y de carácter urgente que pueda necesitarse para facilitar la financiación y ejecución de proyectos industriales. A tal fin es menester una forma más flexible de asistencia que la que puede prestarse por medio de los actuales proyectos a largo plazo financiados por el sector Fondo Especial del PNUD, o de las operaciones a plazo medio no programadas por el sector Asistencia Técnica del mismo PNUD. Más concretamente, puede decirse que el programa abarca la gama de servicios que necesitan los gobiernos para la ejecución de proyectos pertenecientes al sector manufacturero una vez terminado el estudio inicial de viabilidad, pero antes de que se haya asegurado la necesaria inversión de capital. Esta fase final de la realización de los proyectos industriales es especialmente crítica y urgente, y durante ella se requieren una habilidad y unos conocimientos técnicos considerables para recorrer con éxito las diversas etapas necesarias que posibilitan la financiación y la ejecución del proyecto. Para colmar esta falta de continuidad en la acción se requiere cierta flexibilidad de enfoque que con frecuencia no concuerda con los procedimientos formales aplicables a los proyectos en que se basan la mayoría de los programas existentes.

Además de la necesidad de colmar esta falta de continuidad en la acción, existen muchas otras necesidades para cuya satisfacción el programa de Servicios Industriales Especiales puede resultar útil. En la industria manufacturera existe toda una serie de necesidades prácticas, con frecuencia a corto plazo, para las que no se puede programar por anticipado, dado que la eficacia de la asistencia depende en gran medida de la capacidad para satisfacer las necesidades de los gobiernos dentro de un plazo mínimo.

El programa de actividades operacionales sobre el terreno para 1967-1968 muestra la continuación de la tendencia hacia el aumento de las actividades de desarrollo industrial. En particular, se espera que las actividades vinculadas al programa de Servicios Industriales Especiales muestren un notable incremento después de la consolidación de su fase inicial.

C. Actividades por sectores industriales

1. Industrias metalúrgicas y metálicas

La labor diversificada de la ONUDI en materia de industrias metalúrgicas y metálicas ha experimentado un nuevo desarrollo. Aproximadamente treinta países han recibido asistencia técnica en virtud de diversos programas de las Naciones Unidas correspondientes a estos dos sectores. Entre esos programas son importantes los proyectos sobre utilización de los yacimientos de carbón con alto contenido de azufre de Argelia para la producción de hierro, la asistencia a las industrias metalúrgicas y mecánicas de la India y de Chile para procurar mercados de exportación, el establecimiento de una fábrica de acero integrada, de una fábrica de reducción directa para la producción de esponja de hierro y de un complejo de industria mecánica pesada en Irán, de fábricas para la producción de hierro y acero en la República de Corea, en Liberia y en Turquía, y de institutos de desarrollo del diseño de instrumentos en Bulgaria y la República Árabe Unida.

El Centro de Desarrollo Industrial patrocinó la asistencia de diez participantes de los países en desarrollo al 33º Congreso Internacional de Fundición, celebrado en la India en diciembre de 1966, el cual incluyó un programa especial en el cual se ponían de relieve los adelantos técnicos que permiten el aumento de la productividad de la industria de la fundición en los países en desarrollo.

Se están realizando nuevos preparativos para el Segundo Simposio sobre el hierro y el acero, que se ha de celebrar en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1968. Se presentará a este Simposio un texto cuidadosamente revisado del manual de la industria siderúrgica. En septiembre y octubre de 1967 dos grupos de expertos en producción de aluminio y cobre se reunirán en la sede de la ONUDI en Viena.

El Simposio Interregional sobre el fomento de la industria del metal en los países en desarrollo se celebró en Moscú en septiembre y octubre de 1966, y asistieron a él treinta y ocho participantes de veinticinco países en desarrollo. Se están poniendo en práctica las recomendaciones hechas en el Simposio sobre un sistema de clasificación internacional de las máquinas para las industrias metálicas, la adaptación de las pruebas de aceptación de nuevas máquinas — herramientas y el diseño, la manufactura y utilización de matrices y patrones.

Se están efectuando preparativos para un seminario sobre la industria de equipo automotor y para la expansión de las actividades de la ONUDI a nuevas esferas, por ejemplo, las industrias de equipo agrícola y de equipo eléctrico y electrónico, y los aspectos tecnológicos del control de la calidad en la manufactura de productos mecánicos.

Los problemas que obstaculizan la reparación y conservación eficientes del equipo industrial en los países en desarrollo fueron examinados por un grupo internacional de expertos que se reunió en la Sede de las Naciones Unidas en noviembre y diciembre de 1966. Una de las principales recomendaciones hechas en el informe del grupo se refería a la organización de talleres centralizados y diversificados o especializados para realizar las tareas de conservación y reparación e iniciar la producción local de piezas de repuesto.

2. Industrias químicas

Durante el año que se examina se pusieron en práctica las recomendaciones del Seminario Interregional sobre la Producción de Abonos celebrado en Kiev, según se dispuso en las decisiones adoptadas por el Comité de Desarrollo Industrial en su sexto período de sesiones y por el Consejo Económico y Social en su 41º período de sesiones. Se halla en preparación el manual sobre producción de abonos. En diciembre de 1966 un grupo especial de expertos examinó la producción de abonos en países en desarrollo con abundantes disponibilidades de gas natural. El informe del grupo se publicará en 1967. Se ha prestado asistencia técnica para el desarrollo de la producción de abonos a Argelia, Chipre, India, Irán, Jordania, Paquistán, la República Árabe Unida, Sudán, Túnez y Turquía.

Durante los últimos dos años el Centro de Desarrollo Industrial ha recopilado un compendio de información tecnoeconómica sobre la industria petroquímica en forma de encuestas y estudios sobre aspectos de importancia concreta para los países en desarrollo. Se ha publicado la mayoría de las monografías preparadas para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el adelanto de las industrias petroquímicas en los países en desarrollo. En Argelia y Paquistán se ejecutan proyectos importantes de asistencia operacional en el ámbito de las industrias petroquímicas.

Se han realizado investigaciones y estudios sobre las industrias dedicadas a la producción de plásticos, sustancias químicas básicas, productos farmacéuticos y productos químicos varios, con el objeto de poner a los países en desarrollo al corriente de lo necesario para establecer dichas industrias, incluyendo estudios sobre el establecimiento de fábricas experimentales y laboratorios de pruebas. Un grupo de expertos se reunirá a finales de 1967 para examinar la modernización de la producción de sal mediante la evaporación solar. Se está prestando asistencia para este grupo genérico de industrias a algunos países en desarrollo, principalmente mediante el suministro de servicios de expertos técnicos. En el sector de los productos químicos derivados de la madera, varios países han solicitado y obtenido asistencia para la producción de papel. Se envió una misión a Trinidad y Tabago para investigar la producción de resina furfurálica extraída del bagazo de la caña de azúcar. En Rwanda se está instalando una fábrica experimental de elaboración de pelitre como proyecto de las Naciones Unidas.

3. Industrias de consumo

Se ha terminado y se publicará a fines de 1967 el manual sobre la industria textil de los países en desarrollo. En noviembre de 1967 un grupo de expertos se reunirá en la sede de la ONUDI a fin de formular una serie de normas orientadoras sobre la selección de maquinaria textil para los países en desarrollo.

En materia de industrias de elaboración de alimentos, la ONUDI se ha dedicado concretamente a los métodos de organización y técnicas de elaboración modernos. En las actividades de asistencia técnica ha predominado el aspecto relacionado con las manufacturas, pero la ONUDI, en estrecha cooperación con otros organismos de las Naciones Unidas y con las comisiones económicas regionales, tiene en cuenta todas las repercusiones de dichas actividades en el desarrollo de la producción y distribución de alimentos en los

países en desarrollo. Se han preparado proyectos de asistencia técnica en tres sectores que interesan a los países en desarrollo, a saber, la producción de proteínas de pescado, los nuevos métodos de molienda de arroz y la elaboración industrial moderna de alimentos esenciales ricos en almidón.

Los estudios técnicos preparados en 1966 sobre temas de importancia fundamental para las industrias de materiales de construcción y de la construcción, han sido evaluados y revisados por la ONUDI con miras a su presentación al seminario sobre prefabricación en la región de la América Latina, que se ha de celebrar en Dinamarca en 1967, y al curso práctico interregional de expertos en medidas administrativas y de organización para incrementar la productividad en las industrias de la vivienda, la construcción y los materiales de construcción, que se celebrará en la URSS en 1967.

Además de las industrias precedentemente mencionadas, la ONUDI ha prestado asistencia a las industrias de producción de cerillas, azúcar, artículos de cuero y muebles de varios países en desarrollo.

D. Programación y políticas industriales

1. Desarrollo de las industrias de exportación

Sobre la base de la resolución 1081 C (XXXIX) del Consejo Económico y Social y de las recomendaciones del Consejo con respecto a la expansión de las exportaciones de los países en desarrollo, la ONUDI emprendió y terminó durante el año pasado algunos estudios y programas relacionados con el fomento de las industrias orientadas hacia la exportación en los países en desarrollo. Entre esos estudios figuraron varias monografías técnicas sobre los problemas del fomento de las exportaciones, preparadas para el Simposio Internacional sobre Desarrollo Industrial.

Se continuó y se halla a punto de terminarse un estudio importante sobre el papel destacado de las industrias metálicas como posibles industrias orientadas hacia la exportación en los países en desarrollo. Este estudio tiene por objeto suministrar, sobre la base de las conclusiones de la investigación, los procedimientos y las normas de política para el desarrollo del sector de las industrias metálicas, que habitualmente ocupa un lugar crucial en el comercio exterior de los países en desarrollo. Como resultado de este estudio ya se ha iniciado un proyecto de asistencia técnica.

Se ha convenido con la UNCTAD la realización de actividades conjuntas para asegurar la coordinación de las mismas en materia de fomento de las exportaciones. El Secretario General de la UNCTAD y el Director Ejecutivo de la ONUDI convocaron reuniones de expertos para estudiar los medios prácticos de prestar asistencia técnica a los países en desarrollo.

Se ha terminado un estudio sobre las ventajas de las organizaciones mixtas de comercialización de exportaciones. Dicho estudio ha de servir como base para la asistencia técnica destinada a terminar los métodos de organización que permitan aumentar las exportaciones de manufacturas y adaptarlas a las necesidades de los mercados extranjeros.

Se han iniciado los trabajos de evaluación de las posibilidades de encauzar el excedente de capacidad de

manufactura hacia la producción para la exportación. También se halla en preparación una serie de normas para la formulación de programas apropiados de asistencia técnica en materia de industria para la exportación.

En su resolución 1178 (XLI) el Consejo Económico y Social pidió al Secretario General que obtuviera de los países en desarrollo información apropiada sobre las medidas prácticas adoptadas en favor del establecimiento y desarrollo de industrias orientadas hacia la exportación. Las respuestas a un cuestionario que se envió han sido recibidas y evaluadas, y la esencia de la información obtenida ha sido presentada a la Junta de Desarrollo Industrial en su primer período de sesiones y utilizada para formular proyectos prácticos de asistencia técnica.

Se inició un estudio sobre el posible reembolso de créditos exteriores con productos locales con un análisis de las ventajas y desventajas que dicho sistema ofrece para los países beneficiarios.

Se prosiguen también los trabajos de un estudio de los efectos de la ayuda exterior sobre la modalidad y la tasa del crecimiento industrial de los países en desarrollo, que se realiza en colaboración con la Universidad McGill, de Montreal, Canadá. Este estudio incluirá la terminación de las condiciones previas necesarias para que la ayuda externa sea más efectiva y de la manera en que los distintos tipos de ayuda pueden estimular el crecimiento industrial en general.

2. Políticas de fomento industrial

El trabajo de la ONUDI en materia de políticas industriales ha versado principalmente sobre las esferas siguientes: 1) políticas financieras de desarrollo industrial; 2) medidas de incentivos tributarios para fomentar el desarrollo industrial en el sector privado; 3) la función del sector público en el desarrollo industrial; y 4) las políticas de ubicación de industrias.

Se realizó una gran cantidad de trabajo en estas esferas en relación con la preparación de monografías y estudios técnicos para el Simposio Internacional sobre Desarrollo Industrial, que ha de celebrarse en Atenas del 29 de noviembre al 20 de diciembre de 1967, y los temas abarcados fueron los siguientes: 1) ayuda financiera oficial bilateral a la industria manufacturera de los países en desarrollo; 2) incentivos de carácter tributario para el desarrollo industrial; 3) políticas y planes de los países en desarrollo en relación con el sector público de las industrias manufactureras; 4) financiación interna del desarrollo industrial; 5) medidas para incrementar la financiación industrial por los bancos comerciales en los países en desarrollo; y 6) políticas y medidas de ubicación industrial en los países en desarrollo.

Se iniciaron tres proyectos en materia de políticas financieras de desarrollo industrial. Dichos proyectos fueron: 1) servicios de fomento de las inversiones para el desarrollo industrial; 2) cooperación entre las instituciones de financiación del desarrollo industrial, y 3) planificación financiera de empresas industriales. El primer proyecto tiene por objeto proporcionar dos tipos de servicios: ayudará a los países en desarrollo a crear sus propios organismos de fomento y servicios para la inversión industrial, y los ayudará a hacer conocer a los posibles inversionistas extranjeros sus oportuni-

dades definidas de inversión industrial. El segundo proyecto está destinado al fomento e intercambio de información y experiencia entre instituciones de financiación del desarrollo industrial de los países en desarrollo. Tratará también de estimular proyectos conjuntos, tales como empresas mixtas de industrias, investigación y capacitación. Se ha realizado una cantidad considerable de trabajo sobre el tercer proyecto relacionado con una serie de seminarios sobre planificación financiera de proyectos industriales que se celebrarán en algunos países en desarrollo. Dichos seminarios han de abarcar, aparte del material didáctico, el estudio de casos prácticos con ejemplos extraídos del país huésped así como de países desarrollados y de otros países en desarrollo.

Se realizaron nuevos trabajos sobre incentivos tributarios para el desarrollo industrial, la función del sector público en la industria manufacturera y las políticas de ubicación de industrias. Se planea realizar en 1968 un seminario para examinar los aspectos financieros de las empresas manufactureras pertenecientes al sector público.

También se han realizado trabajos preparatorios y de organización de un seminario sobre políticas de ubicación y desarrollo industrial que ha de celebrarse en 1968 en la URSS. Se han preparado también algunos estudios por países y un estudio comparativo de las políticas de ubicación industrial.

3. Programación de industrias y formulación de proyectos

De conformidad con las normas establecidas por el Comité de Desarrollo Industrial, el trabajo en esta materia incluyó: 1) la formulación, evaluación y ejecución de proyectos industriales; 2) la organización de datos de programación industrial; 3) la elaboración de estrategias y métodos de planificación del desarrollo industrial; y 4) la ubicación de industrias y la programación industrial regional. Los trabajos han abarcado alrededor de quince proyectos distintos de apoyo a las investigaciones, a la organización de seminarios de capacitación, a la celebración de reuniones de grupos especiales de expertos, y a la preparación de material técnico para su publicación. Se han preparado también seis documentos técnicos para ser presentados al próximo Simposio Internacional sobre Desarrollo Industrial. Dichos documentos se refieren a los temas siguientes: planificación de la ubicación de industrias; excedente de mano de obra en la agricultura y desarrollo de la industria; función del sector industrial en el desarrollo económico; función de los encargados de determinar la política en la formulación de proyectos industriales; ejecución y actividades complementarias de proyectos industriales; procedimientos de programación y fiscalización de la ejecución de proyectos industriales en los países en desarrollo.

Como consecuencia del Simposio Interregional sobre Evaluación de Proyectos Industriales, celebrado en Praga en 1965, en el período que va de junio de 1966 a enero de 1967 se llevaron a cabo tres cursos prácticos sobre formulación y evaluación de proyectos industriales: uno en México (dos semanas y media), uno en Ceilán (tres semanas) y el otro en la India (cuatro semanas). Se tiene el propósito de organizar tres cursos prácticos más en 1967.

Una misión de la ONUDI que visitó América Central a fines de 1966 comprobó una urgente necesidad de asistencia técnica adicional en esas esferas. Sobre la base de nuevas recomendaciones del Simposio de Praga, se ha iniciado la preparación de un manual de medidas prácticas que han de tomarse para formular y evaluar los proyectos industriales y también se han iniciado los trabajos para un estudio del problema de la ejecución y actividades complementarias de proyectos y sobre el desarrollo de métodos de programación y control que garanticen la ejecución efectiva de los proyectos.

El trabajo sobre datos de programación industrial descrito en el informe anterior se ha proseguido con arreglo a un plan de provisión de servicios de "banco de datos" para aquellas actividades de asistencia técnica que abarcan los estudios de viabilidad previos a los proyectos, la evaluación de lagunas en el rendimiento y los balances de recursos multisectoriales. Los datos sobre "perfiles estructurales de establecimientos manufactureros" reunidos sobre la base de los informes de diagnóstico de establecimientos y empresas en funcionamiento en varios países distintos se publicarán en tres o cuatro volúmenes como parte integrante de la *"Industrial Planning and Programming Series"* de la ONUDI.

El programa experimental de investigaciones relacionado con el sistema de datos interindustriales detallados para fines de programación industrial, que se inició el año anterior, está también a punto de determinarse. Se publicarán en breve las actas de la reunión del primer grupo especial de expertos en datos de programación, celebrada en noviembre de 1965, a las cuales se han añadido varias nuevas contribuciones.

Con respecto a los métodos de programación industrial se han iniciado los trabajos sobre inventarios, índices y evaluación comparativa de estudios de investigación de diversas procedencias tanto nacionales como internacionales, con especial referencia a los problemas prácticos vinculados a la formulación de estrategias de desarrollo a largo plazo y a la integración de un plan global con los programas para industrias y proyectos determinados. Algunas de las monografías examinadas ya han sido aprobadas y se ha previsto su publicación a breve plazo. Al mismo tiempo se han realizado ciertos progresos en la compilación de un manual sobre programación industrial, que se ha de preparar en cooperación con las comisiones económicas regionales y con algunos institutos internacionales. En mayo de 1967 se celebró en Nueva York una reunión de un grupo especial de expertos para examinar la función de las especializaciones y la tecnología avanzadas en el desarrollo industrial como etapa preparatoria de un seminario interregional más amplio sobre un tema semejante, planeado para 1968.

En el ámbito de la ubicación industrial y de la programación industrial regional, se ha organizado, en relación con el proyecto de desarrollo del Delta del Mekong, una misión cuyo traslado sobre el terreno está ya dispuesto. Además de la contribución al seminario interregional sobre política y planificación del desarrollo en relación con la urbanización, celebrado en Pittsburgh en octubre de 1966, se han realizado progresos en la labor preparatoria del seminario interregional sobre ubicación industrial y desarrollo regional, planeado para 1968. Un grupo especial de expertos en la materia se reunió en Ginebra, en mayo y junio de 1967.

E. Formación y dirección industriales

Con respecto a la formación de ingenieros y técnicos, la ONUDI ha desarrollado las actividades siguientes: 1) continuó con la organización y ejecución de programas de capacitación de grupos en la fábrica en diversos ramos industriales de países industrializados seleccionados; 2) inició actividades para organizar en los países en desarrollo programas de corta duración de formación en la fábrica que se desarrollarán con la cooperación de antiguos participantes en los programas ejecutados en los países industrializados y de expertos que ha de proporcionar la ONUDI; 3) ayudar a los países en desarrollo a preparar solicitudes de proyectos de asistencia del PNUD para la creación de centros locales permanentes de formación en la fábrica.

Para los ingenieros y técnicos de los países en desarrollo, la ONUDI está organizando en Francia, Italia, Polonia, la República Socialista Soviética de Ucrania, Suecia y Yugoslavia, programas de capacitación de grupos en la fábrica sobre la industria del hierro y el acero, equipo eléctrico, metales no ferrosos, la industria textil, la metalurgia, la producción de maquinaria textil y la prevención de la corrosión.

Durante el año pasado la ONUDI ha proporcionado aproximadamente 300 becas individuales en la esfera de la industrialización, financiadas en virtud de los programas de asistencia técnica de las Naciones Unidas. En muchos casos, estas becas son independientes de las demás actividades que se llevan a cabo en virtud de los programas de cooperación técnica. En otros casos, la concesión de becas formó parte integrante de otro proyecto de asistencia técnica.

La ONUDI ha iniciado un programa de cursos prácticos sobre consultas industriales para personal de dirección de alta categoría. El objetivo de estos programas de capacitación es determinar los problemas de dirección que encuentran los encargados de las funciones ejecutivas en determinadas situaciones, resolver mediante el debate con el personal directivo los problemas que se le plantean y determinar las decisiones que se han de tomar para lograr el resultado apetecido. Se está tratando de contratar los servicios de personal directivo de categoría superior de los países industrializados para la dirección de estos programas de capacitación. Los cursos prácticos de consultas industriales proporcionan así al personal directivo superior de los países en desarrollo un foro para el examen de sus problemas con especialistas y personal ejecutivo que está en funciones en los países industrializados. Estos programas de capacitación se realizan a pedido de los gobiernos. En el segundo semestre de 1967 se organizarán tres de esos programas.

El informe del Grupo de Trabajo interregional sobre formación en materia de desarrollo industrial de administradores económicos de los países en desarrollo, que se reunió en París en 1965, así como monografías seleccionadas presentadas en la reunión, se publicarán en 1967 bajo el título "Formación de administradores económicos en desarrollo industrial", como primera publicación de la serie "Formación para la industrialización". El Grupo de Trabajo recomendó que las organizaciones internacionales patrocinaran seminarios breves para administradores de categoría superior de los países en desarrollo en los cuales se haga especial referencia a los problemas del desarrollo in-

dustrial, se fomenten los programas de capacitación para los administradores generales de categoría intermedia sobre una base nacional y regional, y se organicen programas de capacitación para administradores técnicos sobre temas especiales de industrialización.

Una parte considerable del trabajo de la ONUDI durante el año ha estado relacionada con la preparación del Simposio Internacional sobre Desarrollo Industrial que se celebrará en Atenas, en diciembre de 1967. En marzo de 1966, la ONUDI convocó en la Sede una reunión de expertos para que asesorara sobre la preparación para el Simposio de la documentación referente al desarrollo de la mano de obra. Sobre la base de las recomendaciones y directivas formuladas por la reunión de expertos, la ONUDI y la OIT han preparado, trabajando en estrecha colaboración, documentos básicos para el debate sobre los temas siguientes: asuntos y problemas relacionados con el desarrollo de la mano de obra para la industrialización; especialidades necesarias para la industrialización; empleo efectivo de la mano de obra para la industrialización; y programa de enseñanza y capacitación para la industrialización.

F. Aspectos institucionales del desarrollo industrial

1. Organización e información industriales

Debido a la importancia de los servicios de consulta en las etapas prácticas de la industrialización, se está estudiando su empleo en los países en desarrollo. Se preparó una monografía general sobre antecedentes de política y se prosigue el trabajo de preparación de una guía práctica para uso de organizaciones tales como los ministerios de industrias o de economía nacional, las corporaciones de desarrollo industrial, las cámaras de industrias y las empresas particulares. Se distribuyó un primer proyecto de la guía a aproximadamente 250 organismos de desarrollo y oficinas de consultores en todo el mundo; se recibieron en respuesta más de 60 comentarios de importancia. El proyecto original, las respuestas, y gran cantidad de material adicional fueron presentados para su examen por un grupo de trabajo de expertos a finales de 1966. Los resultados se publicarán en forma de manual para uso de los consultores de los países en desarrollo. Se han iniciado también los trabajos de preparación de dos cursos prácticos sobre servicios de consulta, que se celebrarán en el otoño de 1967.

Como parte del programa de información industrial, se ha creado un servicio de esa especialidad, destinado a ayudar a los países en desarrollo a lograr acceso a la información técnica e industrial de posible utilidad para ellos. Esta información es el fruto de la investigación industrial o de la experiencia práctica logradas en sectores que ya se han visto frente a problemas similares a los que ahora se plantean a las empresas más nuevas de los países que se están industrializando. Se han contestado aproximadamente 100 pedidos concretos de información. Por ejemplo, al remitente de una pregunta acerca de la producción de aceite de afrecho de arroz se le proporcionó información procedente de los Estados Unidos, los Países Bajos, el Reino Unido y la URSS; un problema planteado en Tailandia en relación con el fundido de precisión a la cera perdida se resolvió con la ayuda de información enviada por el

Canadá, Francia, Italia y la República Federal de Alemania. Se prosiguieron otras actividades de información industrial, incluida la preparación de un estudio sobre el papel, la función y la organización de los servicios de información industrial y los preparativos para el seminario interregional de información industrial que ha de celebrarse en Copenhague en 1967.

La mayor parte de la asistencia técnica proporcionada por la ONUDI en el sector institucional continuó concentrada en torno a la investigación industrial. Expertos internacionales, cuyos servicios fueron financiados con cargo al sector Fondo Especial del PNUD, y que recibieron orientación técnica de la ONUDI, han estado trabajando con el Instituto Centroamericano de Investigaciones y Tecnología Industrial, el Instituto de Investigaciones Tecnológicas de Colombia, el Centro de Investigaciones Industriales de Israel, el Instituto Nacional de Normas Técnicas del Paraguay, el Instituto de Investigaciones Industriales del Sudán y el Instituto de Investigaciones Tecnológicas de Tailandia. Se proporcionó asistencia para investigaciones industriales al Instituto Nacional de Tecnología Industrial de la Argentina y al Ministerio de Industria de Libia con cargo al sector de asistencia técnica del PNUD, lo cual hizo también posible el curso práctico para directores de institutos de investigación industrial, que se ha de celebrar en julio de 1967 en Atenas, y la misión a cargo de un asesor de categoría superior en investigaciones industriales que ayudó al Gobierno de Malasia a formular los planes y programas de un instituto nacional de investigación propuesto.

En virtud del programa de servicios industriales especiales, una misión de expertos formuló recomendaciones al Gobierno de Ghana sobre la reorganización de la Secretaría de Empresas del Estado.

El *Industrial Research News*, publicación establecida originalmente por el Centro de Desarrollo Industrial como medio de comunicación entre los institutos de investigación industrial, abarca ahora nuevos sectores de la especialidad. El Comité de Desarrollo Industrial en su sexto período de sesiones expresó la opinión de que debía darse a dicha publicación mayor circulación y mayor variedad de temas y en la actualidad incluye información sobre el desarrollo industrial. En 1967 ha aparecido tres veces con su nuevo título de *Industrial Research and Development News*.

Se continuaron los trabajos en varios programas de investigaciones interrelacionados con las actividades de asistencia técnica de la ONUDI. Se realizaron estudios por países en la Argentina, Colombia, Chile, Jamaica, México, Puerto Rico, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela. Junto con los informes publicados sobre países africanos y asiáticos seleccionados, completarán el estudio comparativo sobre la organización y administración de organismos públicos y semipúblicos en la esfera del desarrollo industrial. Se continuaron también estudios conexos sobre organizaciones no gubernamentales.

2. Normalización

La ONUDI está plenamente equipada para proporcionar toda la asistencia que necesitan los países en desarrollo en este importante sector de la infraestructura industrial, a saber, institutos nacionales de normalización, expertos para que actúen como ingenieros de nor-

mas en los órganos nacionales o en la industria y el suministro de laboratorios de prueba, centros de capacitación o becas. Las Naciones Unidas han ayudado a la creación de organismos de normalización en América Central y en el Paraguay y han proporcionado otras formas de asistencia a Afganistán, Argentina, Barbados, Birmania, Etiopía, India, Isla Mauricio, Libia, Nicaragua y Tailandia.

Se ha mantenido estrecho enlace con la Organización Internacional de Normalización y con la Comisión Electrotécnica Internacional en un esfuerzo por promover las actividades de normalización en los países en desarrollo e incrementar su participación en todos los planos, internacional, nacional, industrial y de la fábrica.

En colaboración con la Organización Internacional de Normalización y con varios de sus órganos integrantes, la ONUDI patrocinó la participación de quince representantes de países en desarrollo en la asamblea general de la organización celebrada en Moscú en 1967. Una conferencia especial denominada Conferencia sobre desarrollo fue organizada como parte de la asamblea general para examinar las necesidades de los países en desarrollo de establecer programas de normalización y los problemas especiales. Los participantes tuvieron también oportunidad de observar en los comités técnicos la preparación de acuerdos internacionales sobre normas y, en su viaje de regreso de la conferencia, los aspectos prácticos de las actividades de normalización nacionales y de las empresas en la URSS, Dinamarca, Alemania Occidental, Inglaterra, Francia, la República Árabe Unida y la India.

3. Pequeña industria

En la esfera de la pequeña industria y de las conglomeraciones industriales se continuó prestando especial atención a las actividades operacionales incluido el asesoramiento directo a los gobiernos y el apoyo sustantivo a las operaciones sobre el terreno.

A pedido de los gobiernos o con el asentimiento de ellos, funcionarios de la ONUDI visitaron Colombia, Chipre, Ecuador, Ghana, Grecia, India, Irán, Malawi, Nigeria, Sudán, Turquía, Uganda y Venezuela. En la mayoría de esos países hicieron recomendaciones sobre programas y proyectos importantes para el desarrollo de la pequeña industria y de las conglomeraciones industriales y formularon proyectos de cooperación técnica con cargo a los sectores Asistencia Técnica y Fondo Especial del PNUD y al programa de Servicios Industriales Especiales. En la India se hicieron planes para la organización de un programa de capacitación de grupos en conglomeraciones industriales para participantes de países en desarrollo de habla inglesa. Se están preparando programas similares para participantes de habla francesa y de habla española. Se proporcionó apoyo sustantivo a las misiones de expertos en pequeña industria en todas partes del mundo, incluyendo dos proyectos del PNUD (Fondo Especial) para el establecimiento de conglomeraciones industriales en Irán y Uganda.

Como parte del esfuerzo de la secretaría para estimular el establecimiento de conglomeraciones industriales para la pequeña industria en los países en desarrollo, se convocaron dos grupos consultivos sobre conglomeraciones y zonas industriales. El primero de estos

grupos, que se reunió en Ginebra en octubre de 1966, reunió a participantes de Bulgaria, Chipre, España, Grecia, Hungría, Israel, Malta, Polonia, Turquía y Yugoslavia; al segundo, que se reunió en Beirut en 1966, asistieron participantes de Arabia Saudita, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano y Siria. La reunión de Ginebra fue la tercera y la de Beirut la cuarta de una serie de conferencias regionales sobre conglomeraciones industriales organizada por el Centro de Desarrollo Industrial y por la Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica con la cooperación de las secretarías de las comisiones económicas regionales y oficinas y de ciertos organismos especializados. El programa de las reuniones abarcó: un examen de las novedades relativas a conglomeraciones industriales y zonas industriales; la función de las conglomeraciones y de las zonas en las políticas y programas de desarrollo; la planificación, la organización y dirección, los servicios e instalaciones, la financiación y la cooperación internacional y regional.

Otra reunión importante fue el Seminario sobre la pequeña industria latinoamericana, celebrado en Quito, Ecuador, en noviembre y diciembre de 1966 bajo el auspicio conjunto de la CEPAL, el Centro de Desarrollo Industrial y la Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica. Al Seminario, que fue la primera reunión regional sobre la materia realizada para América Latina, asistieron cincuenta y siete participantes de veinticuatro países, veinticuatro observadores del Ecuador y ocho de organizaciones internacionales. El programa del Seminario comprendió: la contribución de la pequeña industria al desarrollo en la América Latina; servicios y asistencia técnicos al desarrollo de la pequeña industria; financiación del desarrollo de la pequeña industria; y cooperación regional internacional en la esfera de la pequeña industria.

Se están terminando los preparativos para un simposio interregional sobre los servicios e instalaciones técnicos para la pequeña industria, que se ha de celebrar en Vedbaek, Dinamarca, en junio y julio de 1967, auspiciado conjuntamente por la ONUDI, la Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica y el Gobierno de Dinamarca.

La mayor parte de los estudios de investigación realizados en el período que se examina adoptó la forma de monografías, para el Simposio Internacional sobre Desarrollo Industrial y para las conferencias precedentemente mencionadas. Las monografías preparadas por la secretaría para el Simposio Internacional se referían a las políticas y a los programas para el desarrollo de la pequeña industria y para el establecimiento de conglomeraciones industriales. Las destinadas a los grupos consultivos incluían diez estudios sobre los aspectos económicos, técnicos, financieros, de dirección y de planificación del medio físico para el desarrollo de las conglomeraciones industriales. Las destinadas al Seminario latinoamericano incluían diez estudios sobre la pequeña industria y sobre el desarrollo de conglomeraciones industriales a la luz de las condiciones y las necesidades de la región. Las que se prepararon para el Seminario celebrado en Dinamarca incluían trece estudios sobre métodos, procedimientos, organización y demás problemas relacionados con la provisión de servicios e instalaciones técnicas para la pequeña industria. Otros proyectos de investigación se relacionaban con los subcontratos entre la pequeña y la gran industria, los planes de venta a plazos, los planes oficiales de compras y un análisis estadístico del lugar que ocupa la pequeña

industria en el ámbito industrial de países desarrollados y en desarrollo seleccionados.

Se publicó un estudio titulado *Conglomeraciones industriales: políticas, planes y progresos realizados — Análisis comparado de la experiencia internacional*. En dicho estudio se examinan los objetivos y políticas, la planificación y organización, la administración y financiación de las conglomeraciones industriales en 56

países de todas las regiones a base de las respuestas a un cuestionario y de otros datos pertinentes. Otra publicación, titulada *Cooperación Técnica para el Desarrollo de la Pequeña Industria*, reseña los problemas de cooperación técnica de las Naciones Unidas, los procedimientos para obtener asistencia, y los tipos de proyectos en la esfera de la pequeña industria y de las conglomeraciones industriales para los cuales puede proporcionarse asistencia.

REFERENCIAS

Para el informe sobre el primer período de sesiones de la Junta de Desarrollo Industrial (10 de abril a 5 de mayo de 1967), véanse *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo segundo período de sesiones, Suplemento No. 15 (A/6715)*.

Para el informe sobre las actividades y los programas de trabajo de la ONUDI, véase el documento ID/B.4 y Corr.1 a 3.

A. Simposio Internacional sobre Desarrollo Industrial

Véanse los documentos pertinentes en:

- Nota del Director Ejecutivo de la ONUDI relativa al Simposio Internacional sobre Desarrollo Industrial: ID/B/5.
- Nota del Director Ejecutivo de la ONUDI sobre problemas y cuestiones de desarrollo industrial: ID/CONF.1/A.3.

B. Actividades operacionales sobre el terreno

Véanse los documentos pertinentes en el informe del Director Ejecutivo sobre el programa de Servicios Industriales Especiales: ID/B.7.

C. Actividades por sectores industriales

1. Industrias metalúrgicas y metálicas

Véanse los documentos pertinentes en el documento ID/1.

2. Industrias químicas

Véanse los documentos pertinentes en:

- Manual on the Fertilizer Industry*: Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 67.II.B.1;
- Studies in Petrochemicals*, presentado a la Conferencia Interregional de las Naciones Unidas sobre las industrias petroquímicas en los países en desarrollo, Teherán, 16 a 30 de noviembre de 1964. Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 67.II.B.2;
- Informe sobre la reunión del Grupo de Expertos en producción de abonos mediante gas natural, 15 a 16 de diciembre de 1966: ID/2;
- Informe del Director Ejecutivo de la ONUDI sobre la aplicación de las recomendaciones del Seminario Interregional sobre la Producción de Abonos, celebrado en Kiev, República Socialista Soviética de Ucrania, del 24 de agosto al 11 de septiembre de 1965: ID/B/9.

D. Programación y políticas industriales

1. Desarrollo de las industrias de exportación

Véanse los documentos pertinentes en: ID/B/8 y Add.1 y Add.1/Corr.1.

2. Políticas de fomento industrial

3. Programación de industrias y formulación de proyectos

Véanse los documentos pertinentes en:

- Industrialización y productividad. Boletín No. 10*: Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 66.II.B.8;
- Report of the Interregional Symposium on Industrial Project Evaluation* (Praga, 1965): Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 66.II.B.11;
- Industrial Planning and Programming Series, No. 1*: Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 66.II.B.17;
- Informe del Director Ejecutivo de la ONUDI sobre la ayuda financiera oficial bilateral a la industria manufacturera de los países en desarrollo: ID/CONF.1/1;
- Ejecución y actividades complementarias de proyectos industriales: ID/CONF.1/3;
- Papel que en la formulación y evaluación de proyectos industriales desempeñan los encargados de determinar la política que ha de seguirse: ID/CONF.1/4;
- Informe del Director Ejecutivo de la ONUDI sobre financiación nacional del desarrollo industrial: ID/CONF.1/7;
- Informe del Director Ejecutivo de la ONUDI sobre planificación de la ubicación de industrias: ID/CONF.1/12;
- Informe del Director Ejecutivo de la ONUDI sobre incentivos fiscales para el desarrollo industrial: ID/CONF.1/22;
- Informe del Director Ejecutivo de la ONUDI sobre políticas de ubicación de industrias y medidas normativas en los países en desarrollo: ID/CONF.1/27;
- Informe del Director Ejecutivo de la ONUDI sobre políticas y planes de los países en desarrollo relacionados con el sector oficial de las industrias manufactureras: ID/CONF.1/B.13;
- Informe del Profesor Dale W. Jorgenson, Consultor de la ONUDI, sobre el excedente de mano de obra en la agricultura y el desarrollo de la industria: ID/CONF.1/B.15.

E. Formación y dirección industriales

Véanse los documentos pertinentes en:

- Informe del Director Ejecutivo de la ONUDI y de la OIT sobre cuestiones y problemas relacionados con el desarrollo de la mano de obra para la industrialización: ID/CONF.1/30;
- Informe del Director Ejecutivo de la ONUDI y de la OIT sobre las especialidades necesarias para la industrialización: ID/CONF.1/31;
- Informe del Director Ejecutivo de la ONUDI y de la OIT sobre la utilización efectiva de la mano de obra en la industrialización: ID/CONF.1/32;

- d) Informe del Director Ejecutivo de la ONUDI y de la OIT sobre programas de enseñanza y capacitación para la industrialización: ID/CONF.1/33.

F. Aspectos institucionales del desarrollo industrial

1. Organización e información industriales

Véanse los documentos pertinentes en:

- a) *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social*, 41° período de sesiones, Suplemento No. 6 (E/4203);
- b) *Industrial Research News*, Vol. I, Nos. 1 y 2: Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 66.II.B.6 y 66.II.B.15;
- Industrial Research and Development News*, Vol. II, No. 1: Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 67.II.B.4.

3. Pequeña industria

Véanse los documentos pertinentes en:

- a) *Conglomeraciones Industriales: políticas, planes y progresos realizados — Análisis comparado de la experiencia internacional*: Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 66.II.B.16;
- b) *Cooperación Técnica para el Desarrollo de la Pequeña Industria*: Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 67.II.B.3;
- c) Segundo informe consolidado sobre las actividades de desarrollo industrial de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas: ID/B/3 y Corr.1 y 2 y Add.1-9;
- d) Informe del Director Ejecutivo de la ONUDI sobre políticas y programas de desarrollo de la pequeña industria: ID/CONF.1/6 y Corr.1;
- e) Informe del Director Ejecutivo de la ONUDI sobre políticas y programas para el establecimiento de conglomeraciones industriales: ID/CONF.1/29 y Corr.1.

CAPITULO XII

Programas de cooperación técnica y programas de otra índole

A. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

1. Sector de Asistencia Técnica

El programa de cooperación técnica para 1965-1966, iniciado en virtud del Programa Ampliado de Asistencia Técnica, quedó terminado el 31 de diciembre de 1966. Este programa, el tercero proyectado con carácter bienal, había sido aprobado por el Comité de Asistencia Técnica del Consejo Económico y Social en noviembre de 1964. Después de la fusión del Programa Ampliado y del Fondo Especial en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), efectuada el 1º de enero de 1966, el Consejo de Administración del PNUD tomó a su cargo esta función y, en un período extraordinario de sesiones celebrado en noviembre de 1966, aprobó un cuarto programa bienal para 1967-1968.

El costo del programa de la categoría I aprobado para 1965-1966 se calculó en 100.900.000 dólares, de los cuales 82.400.000 eran para asistencia a los países y 18.500.000 dólares para proyectos regionales e interregionales. Se asignaron 11.700.000 dólares para los gastos administrativos y de los servicios de ejecución efectuados por los organismos participantes y de ejecución. El Comité de Asistencia Técnica autorizó también giros contra el Fondo de Operaciones y de Reserva, hasta un máximo del 10% para el programa de la categoría I, con objeto de financiar los proyectos urgentes solicitados durante el bienio. Este sistema de financiación de proyectos urgentes de asistencia técnica fue incorporado posteriormente a un Fondo Rotatorio del PNUD establecido en el segundo período de sesiones del Consejo de Administración, celebrado en junio de 1966. También se aprobó un programa de la categoría II por el equivalente de cerca del 50% del programa de la categoría I, a fin de preparar proyectos destinados a sustituir los retirados o cancelados.

Las asignaciones definitivas autorizadas para el bienio (programa de la categoría I más las asignaciones para casos de urgencia) ascendieron a 102.400.000 dólares. A fines de 1966 los proyectos ejecutados por los organismos alcanzaban el 98,9% de estos créditos autorizados. Sin embargo, los desembolsos se distribuían en forma desigual entre los dos años: 42.500.000 dólares en 1965 y 58.900.000 dólares en 1966. La lentitud del comienzo se debió a la demora de la confirmación de los fondos prometidos durante los primeros tres meses del bienio. En 1965 mejoró la situación financiera, pero no a tiempo para permitir la ejecución total del programa aprobado para ese año.

Alrededor del 80% de los gastos totales de los proyectos fueron dedicados a programas por países. El saldo se empleó en proyectos regionales e interregionales; así, pues, los desembolsos correspondientes a programas regionales excedieron un tanto del nivel autorizado del 15%. Se efectuaron también algunos reajustes en los programas por países y 31 países recibieron asistencia por un valor mayor del previsto en el programa aprobado y otros 55 recibieron considerablemente menos del importe asignado. En la mayoría de los casos el déficit correspondió a la prestación de servicios de expertos.

La distribución regional del programa continuó siendo en gran parte la misma que en los dos años anteriores, con excepción de una leve disminución del porcentaje de asistencia proporcionada a Asia y el Lejano Oriente, la cual se debió principalmente a la supresión del programa para Indonesia, pedida por el propio Gobierno. Más de un tercio de la asistencia técnica proporcionada correspondió a África, y un quinto a América.

Los grados de prioridad asignados por los gobiernos a la asistencia a diversos sectores de la economía no experimentaron prácticamente variaciones con relación al año anterior y en 1965-1966 alrededor del 24% de la asistencia suministrada por el sector de Asistencia Técnica del PNUD — antes del 1º de enero de 1966 por el Programa Ampliado — se destinó a la agricultura, un poco más del 16% a la sanidad, el 15% a la enseñanza y cerca del 13% a la industria, y el saldo correspondió a la administración pública y otros servicios.

Como en lo pasado, las principales formas de asistencia fueron la prestación de servicios de expertos y la concesión de becas. Más de 5.520 expertos de 97 nacionalidades proporcionaron 4.000 años-hombre de servicios técnicos a 140 países y territorios. Alrededor de 1.250 de estos expertos procedían de países que recibían asistencia del PNUD; otros 132 fueron enviados en virtud de las disposiciones para el suministro de personal de ejecución, dirección y administración. El costo de los servicios de expertos ascendió a 77.752 dólares, lo cual representa el 77% de los gastos de los proyectos durante el bienio.

La concesión de becas de ampliación de estudios, por un total de casi 50.000 meses-hombre, absorbió el 18,4% de los gastos del programa. Esto no sólo excedió en un 6% de la cifra correspondiente al bienio anterior, sino que excedió en un 20% del importe programado en un principio (incluidas las consiguientes autorizaciones para casos de urgencia).

El costo del equipo y los suministros para demostración e instrucción rebasó la cifra autorizada inicialmente, junto con la autorización para casos de urgencia, y ascendió a 5.100.000 dólares.

Durante el bienio se comunicaron alrededor de 2.500 cambios del programa que afectaron por lo menos a la mitad de los proyectos de la categoría I aprobados. En la mayoría de los casos estas modificaciones se debieron al sistema de programación bienal, el cual entraña la preparación del programa con un año completo de anticipación al comienzo de las operaciones. También obedecieron al deseo de mantener un grado razonable de flexibilidad en la satisfacción de las nuevas necesidades surgidas en el curso del bienio. Sin embargo, en los últimos seis meses del bienio las dificultades experimentadas especialmente en la prestación de servicios de expertos entrañaron alrededor de 900 modificaciones y aumentos considerables en la concesión de becas y la adquisición de equipo.

Como el Consejo Económico y Social había decidido en su resolución 1059 (XXXIX) prorrogar el ciclo de programación bienal, el Consejo de Administración del PNUD aprobó, en su período de sesiones extraordinario celebrado en noviembre de 1966, un cuarto programa bienal del sector Asistencia Técnica para 1967-1968. El nuevo programa de la categoría I, que asciende a 110.700.000 dólares, proporcionará asistencia a 2.500 proyectos en 139 países y territorios. Al mismo tiempo, se autorizaron una cantidad máxima de 12.800.000 dólares para proyectos de urgencia y otra de 16.100.000 dólares para gastos administrativos y de servicios de ejecución.

Los proyectos por países absorben unos 89 millones de dólares, y los proyectos regionales e interregionales 17.100.000 dólares del programa de la categoría I. La ejecución de estos proyectos requerirá alrededor de 4.400 años-hombre de servicios de expertos, calculados en un 81% de los gastos totales; 2.800 años-hombre de becas de ampliación de estudios, que representan alrededor del 16%, y 3.100.000 dólares para equipo y suministros.

Un indicio de que existe una necesidad considerable de asistencia de este tipo a largo plazo lo constituye el hecho de que cerca del 70% del programa de la categoría I consiste en proyectos que se continúan del bienio anterior. El Consejo aprobó también sectores de proyectos para 1969-1970 que se extienden más allá del actual bienio.

Aunque no se ha producido, en relación con el bienio anterior, ningún cambio de importancia en la distribución de actividades por sectores, hay un número considerablemente mayor de proyectos nuevos en las esferas del desarrollo industrial y de los servicios públicos. Estos dos sectores considerados en conjunto representan más de la cuarta parte de la ayuda proporcionada.

La distribución geográfica de la asistencia sigue también estrechamente la pauta de los años anteriores, según la cual todas las regiones quedan favorecidas por igual con el aumento de los recursos. Sin embargo, ha aumentado notablemente el número de proyectos internacionales. En casi todos los países el costo del programa recomendado es mayor, pero Israel, Libia y Yugoslavia han reducido las cifras propuestas como meta en vista de su creciente capacidad para satisfacer sus propias necesidades.

A fin de que el Administrador pudiera negociar un programa para Indonesia, que había reanudado su participación en las Naciones Unidas, y contraer compromisos dentro de la cifra fijada para ese país, el Consejo de Administración, en su período de sesiones extraordinario celebrado en noviembre de 1966, destinó 2.500.000 dólares de los recursos para 1967-1968 en el entendimiento de que este programa se presentaría al Consejo de Administración en junio de 1967 para examen y aprobación oficiales.

Con la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI), que por primera vez toma parte en la ejecución del programa bienal, asciende a once el número de organismos participantes y de ejecución.

2. Sector Fondo Especial

El Sector Fondo Especial del PNUD ayuda a los gobiernos de los países de bajos ingresos a ejecutar proyectos preferentes de preinversión a fin de crear condiciones que permitan atraer inversiones y facilitar el uso eficaz de las mismas. Con tal objeto la mayor parte del presente programa está dedicada a encuestas y estudios de viabilidad encaminados a poner de relieve y evaluar las posibilidades en materia de recursos naturales y materiales, a crear y fortalecer los institutos de investigación que han de introducir prácticas tecnológicas modernas en el mejoramiento de la agricultura y la industria, y a establecer instituciones nacionales permanentes para la formación técnica avanzada, la cual proporcionará la mano de obra calificada necesaria al progreso.

Como resultado de estas actividades, a fines de 1966, primer año de funcionamiento del PNUD, se habían ofrecido inversiones por un total de 1.802 millones para planes de desarrollo recomendados en 35 proyectos, algunos de los cuales estaban todavía en ejecución. En 1966 se informó de la inversión de 722 millones de esa suma. Se calculan en 23.300.000 dólares los gastos del PNUD correspondientes a los proyectos que produjeron estas inversiones complementarias.

A fines de 1966 un total de 165.000 personas habían participado en cursos de formación de jornada completa destinados a preparar ingenieros diplomados, técnicos de categoría intermedia, instructores para programas de capacitación industrial, gerentes y supervisores de fábrica, profesores de escuela secundaria y especialistas en administración pública, planificación, transporte y comunicaciones.

Al 31 de diciembre de 1966 el programa aprobado comprendía 657 proyectos de preinversión. De éstos, 282 correspondían a estudios de recursos y de viabilidad, 233 a formación especializada, 132 a investigación aplicada y 10 a planificación del desarrollo económico.

Se había terminado la labor sobre el terreno en 116 proyectos, a saber, 81 encuestas y estudios de viabilidad, 25 proyectos de formación y 10 de investigación. Cuarenta y cuatro de las encuestas permitieron determinar oportunidades de inversión que requerirían alrededor de 10.800 millones de dólares para el desarrollo durante los dos decenios próximos, y tres revelaron que no convenía proseguir la inversión en determinados planes. Un proyecto fue terminado a solicitud del gobierno beneficiario. Los treinta y tres restantes señalaban la

necesidad de actividades de preinversión adicionales o conexas antes de que se pudieran definir las oportunidades de inversión. Los trabajos de 24 proyectos terminados se están ampliando mediante asistencia de fase II del PNUD o mediante proyectos estrechamente relacionados.

Veintitrés de los 25 proyectos de formación y nueve de los diez proyectos de investigación han cumplido los objetivos previstos y son continuados o ampliados por los gobiernos. Siete de las instituciones de formación reciben asistencia adicional del PNUD o de otras fuentes.

El tercer período de sesiones del Consejo de Administración del PNUD se celebró en la Sede de las Naciones Unidas en enero de 1967. El cuarto período de sesiones se inició en la sede de la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra, el 6 de junio de 1967.

En enero el Consejo aprobó el mayor programa de ayuda aprobado hasta la fecha y añadió 70 proyectos importantes de preinversión, por un valor global de 186 millones de dólares, al programa corriente. De esta suma, 78.800.000 dólares habían de ser provistos por el PNUD y 107.200.000 dólares por los gobiernos beneficiarios. También se autorizaron fondos suplementarios para la continuación de un proyecto. En el cuarto período de sesiones, celebrado en junio, se aprobó un nuevo programa con 54 proyectos y créditos suplementarios para dos proyectos aprobados anteriormente, a un costo calculado en 129.700.000 dólares. Los créditos del PNUD aprobados para este programa ascendían a 49 millones de dólares y las contribuciones de los gobiernos beneficiarios a 80.700.000 dólares. En ese mismo período de sesiones se anularon, a pedido de los gobiernos interesados, dos proyectos que se calculaba costarían al Fondo Especial 1.100.000 dólares.

Con esto el programa total aprobado para el sector Fondo Especial ascendió a 778 proyectos de preinversión para 145 países y territorios de bajos ingresos. Una vez terminados, estos proyectos habrán costado 1.878.700.000 dólares, de los cuales 1.108.100.000 dólares habrán sido suministrados por los gobiernos beneficiarios y 770.600.000 dólares por el PNUD. Dichos proyectos incluyen 328 estudios de recursos y de viabilidad, 274 proyectos de enseñanza técnica y formación avanzada, 161 proyectos de investigación aplicada y 15 de planificación del desarrollo económico.

Como en años anteriores, la mayor parte del programa corresponde a África, a la cual se proporciona asistencia mediante 276 proyectos en gran escala, cuyo costo para PNUD es de 282.400.000 dólares. Luego sigue América, con 199 proyectos para los cuales se han aprobado créditos del PNUD por valor de 198 millones de dólares, y luego Asia y el Lejano Oriente, con 193 proyectos y créditos de 188.700.000 dólares. La ayuda a Europa consiste en 52 proyectos con créditos de 52.800.000 dólares, y la asistencia para el Oriente Medio comprende 57 proyectos con créditos de 44.800.000 dólares y un proyecto interregional para el cual se han aprobado créditos de 3.900.000 dólares.

Ejecutan estos proyectos por cuenta del PNUD los siguientes organismos participantes y de ejecución: las Naciones Unidas llevan a cabo 157 proyectos con un costo de 159 millones de dólares; la OIT, 92 proyectos, por valor de 82.800.000 dólares; la FAO, 308 proyectos, por valor de 295.600.000 dólares; la UNESCO, 111

proyectos, por valor de 132.500.000 dólares; la OMS, 19 proyectos, con un costo de 17.500.000 dólares; el BIRF, 40 proyectos, por 32.500.000 dólares; la OACI, 10 proyectos, por valor de 12.700.000 dólares; la UIT, 21 proyectos, por valor de 20.100.000 dólares; la OMM, 16 proyectos, por valor de 15.400.000 dólares; y el OIEA, 4 proyectos, por 2.500.000 dólares.

Como la terminación del año 1966 señaló el final del primer año de funcionamiento del PNUD, el Consejo de Administración dedicó en su tercer período de sesiones un tiempo considerable a examinar las medidas que se habían adoptado para perfeccionar la fusión del anterior Programa Ampliado de Asistencia Técnica con el Fondo Especial y buscar los medios de establecer vínculos más estrechos entre los programas de preinversión y los de asistencia técnica. Se estudiaron también las relaciones entre el PNUD y las demás organizaciones. Hubo consenso general en que debían celebrarse más consultas entre el PNUD y los demás programas multilaterales y bilaterales para garantizar la coordinación de la asistencia dentro de los planes nacionales de desarrollo.

El acuerdo entre el PNUD y la FAO para la incorporación de los representantes de la FAO en los distintos países a las oficinas locales del PNUD fue señalado como un paso significativo hacia el mejoramiento de la coordinación entre organismos y se expresó la esperanza de que se celebraran acuerdos similares con otros organismos.

Se hizo también referencia a la cooperación entre la UNCTAD y la ONUDI, y el Consejo celebró la adición de estas dos organizaciones a la Junta Consultiva Mixta. Un informe acerca de los progresos de la coordinación sobre el terreno entre el PNUD y los organismos participantes y de ejecución fue presentado al Consejo en su cuarto período de sesiones.

En lo referente a la composición del programa del sector Fondo Especial, el Consejo se mostró particularmente satisfecho por la inclusión de un número creciente de proyectos regionales. Se señaló que el PNUD tenía una función importante que desempeñar en el desarrollo regional, ámbito en el cual la ayuda bilateral a menudo no resultaba apropiada, por razones políticas o financieras. Se hizo particular hincapié en la importancia de los institutos regionales de investigación e información. También se hicieron observaciones favorables sobre las medidas constructivas que se estaban adoptando para establecer agrupaciones económicas como las cuatro dependencias subregionales formadas con el patrocinio de la Comisión Económica para África.

Se examinó detenidamente el desarrollo equilibrado de la agricultura y de la industria; algunos miembros pidieron más proyectos agropecuarios, en vista del empeoramiento de la situación alimentaria mundial, y otros señalaron que la acción eficaz en el sector agropecuario necesitaba los productos de la industrialización, tales como los productos químicos y los abonos. Se expresó la esperanza de que se hiciera un uso cada vez mayor del Fondo de Servicios Industriales Especiales a fin de acelerar el desarrollo industrial.

Al examinar las nuevas esferas de actividad del PNUD, el Consejo se mostró complacido ante el creciente interés por el turismo como medio de aumentar los ingresos de divisas de los países de bajos ingresos, y apoyó las sugerencias relativas a la formulación de

proyectos destinados a crear o reforzar las instituciones de financiación local del desarrollo, como los bancos de ahorro, y de proyectos que ayuden a fomentar las industrias de exportación.

Por lo que hace a la contratación de expertos y a la adjudicación de subcontratas, se encareció que los candidatos y las empresas contratistas se eligieran según la distribución geográfica más amplia posible. Un estudio de las prácticas en materia de adquisición que siguen los organismos participantes y de ejecución con especial referencia a las subcontratas fue presentado al Consejo en su cuarto período de sesiones.

El volumen de los recursos de que dispone el PNUD en relación con la asistencia que solicitan los países en desarrollo decidió al Consejo a hacer suya la petición de contribuciones voluntarias hecha por el Secretario General para llegar a la cifra de 200 millones de dólares en 1967 y elevar gradualmente ese objetivo hasta 350 millones de dólares en 1970. Entre las demás sugerencias encaminadas a complementar los recursos figuraban el reembolso de la asistencia del PNUD con carácter contractual, cuando los países puedan permitirse; la aceptación de compromisos de fondos en depósito y la coordinación más estrecha con la labor de otros organismos internacionales importantes como el BIRF, el UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos, a fin de lograr el máximo apoyo de los programas conexos. Se presentó al Consejo, en su cuarto período de sesiones, un informe sobre la ayuda de otras fuentes suministrada a los gobiernos de los países en desarrollo para proyectos del PNUD.

3. Financiación

CONTRIBUCIONES AL PNUD

Las contribuciones al PNUD para 1966 ascendieron a 154.869.163 dólares, contra 145.629.401 prometidos para 1965. De esa cantidad, 98.584.923 dólares correspondían a promesas para el sector Fondo Especial, y los 56.284.240 restantes eran contribuciones destinadas al sector Asistencia Técnica.

La Conferencia sobre promesas de contribuciones para 1967 se celebró el 6 de octubre de 1966, fecha en que 101 gobiernos anunciaron sus contribuciones al PNUD correspondientes al ejercicio de 1967. Al 31 de diciembre de 1966 las promesas anunciadas para 1967 (más las promesas firmes pagaderas en años futuros con respecto al sector Fondo Especial) ascendían a 196.133.752 dólares, distribuidos entre los dos sectores del modo siguiente: sector Fondo Especial, 136.067.870 dólares; sector Asistencia Técnica, 60.065.882 dólares.

FONDO ROTATORIO DEL PNUD

El Consejo de Administración estableció en su segundo período de sesiones un fondo rotatorio del PNUD de 7.500.000 dólares. El Fondo Rotatorio tenía por objeto proporcionar medios de financiación provisional para actividades de urgente necesidad del PNUD, en forma de: fondos de asistencia técnica para casos urgentes, según criterios establecidos (4.500.000 dólares), asistencia preparatoria (1 millón de dólares) y operaciones preliminares de proyectos del Fondo Especial pendientes de estudio y aprobación formal por el Consejo de Administración (2 millones de dólares).

Estas últimas fueron autorizadas por un período experimental de un año.

SECTOR FONDO ESPECIAL

En 1966 se registraron promesas de contribuciones al sector Fondo Especial del Programa por un total de 115.047.693 dólares, distribuidos del modo siguiente:

	Dólares
Contribuciones prometidas para 1966	854.287
Contribuciones prometidas para 1967	111.067.870
Contribuciones prometidas para 1968 y 1969 ..	3.000.000
Ajustes de contribuciones prometidas en años anteriores	125.536
	<u>115.047.693</u>

Entre otros ingresos registrados en 1966 hay que incluir 9.628.982 dólares por gastos locales de ejecución, 6.213.645 dólares en efectivo por contribuciones de contrapartida recaudadas y administradas centralmente por el PNUD, y 4.914.814 dólares por ingresos varios.

Los créditos abiertos por el Consejo de Administración en 1966 ascendieron a 195.300.000 dólares, lo que supone un aumento de cerca del 50% en relación con el total de 130.200.000 dólares correspondientes a 1965. La suma autorizada se descompone de la siguiente manera: 165.635.900 dólares cubrieron el costo de 137 proyectos aprobados en el primero y el segundo período de sesiones; la suma de 2.306.700 dólares se aprobó para complementar los créditos de cuatro proyectos operacionales; 16.794.260 dólares se aprobaron respecto de las autorizaciones del Administrador para imprevisos (10% de los créditos abiertos para los proyectos); un crédito de 2 millones de dólares se abrió para sufragar operaciones preliminares con cargo al Fondo Rotatorio recientemente creado; se destinó un crédito de 8.417.021 dólares para la parte del presupuesto administrativo del PNUD correspondiente al Fondo Especial; y se destinó un crédito de 120.000 dólares a financiar gastos de asistencia preparatoria para proyectos que luego no fueron aprobados. Tras deducir 1.929.082 dólares por supresión de proyectos y créditos abiertos anteriormente, las aperturas netas de créditos para 1966 sumaron 193.344.382 dólares.

Las asignaciones autorizadas por el Administrador en 1966 para los gastos de proyectos, la asistencia preparatoria y el presupuesto administrativo ascendieron a 139.295.279 dólares, contra 100.075.214 dólares en 1965. Además se asignaron dos millones de dólares con cargo a los recursos de 1966 para constituir el Fondo Rotatorio del PNUD.

SECTOR ASISTENCIA TÉCNICA

El primer año del bienio de 1965-1966 se inició con un saldo de 9.444.891 dólares traspasado en concepto de recursos no comprometidos en el bienio 1963-1964. De dicha suma, 7.589.026 dólares constituyen el saldo de los recursos no comprometidos en la Cuenta Especial de Asistencia Técnica al 31 de diciembre de 1964. Los saldos no utilizados de las asignaciones de 1963-1964, más 411.418 dólares autorizados para reasignaciones en 1965 y destinados a atender obligaciones pendientes del programa de 1961-1962, formaban el resto del saldo traspasado.

De las asignaciones no comprometidas en 1965, los organismos retuvieron 5.169.390 dólares, que pasaron así a formar parte de los recursos de 1966. Además de esa suma, en 1966 se reasignaron 103.931 dólares para cubrir compromisos del programa de 1961-1962. Con esas dos cantidades, más los recursos no comprometidos que se retenían en la Cuenta Especial al 31 de diciembre de 1965, el saldo disponible al 1° de enero de 1966 era de 11.286.503 dólares.

En el proyecto de presupuesto financiero del Programa Ampliado de Asistencia Técnica para el bienio 1965-1966, presentado al Comité de Asistencia Técnica en noviembre de 1964, las contribuciones voluntarias previstas para esos dos años ascendían a un total de 113.088.000 dólares. Las contribuciones prometidas para el bienio fueron ligeramente inferiores a esa estimación; ascendieron a 110.296.205 dólares; 54.011.965 dólares para 1965 y 56.284.240 dólares para 1966. Los ajustes en las contribuciones de años anteriores hechos durante los dos años, más los ajustes por diferencias de cambio en el momento de la recaudación, dieron como resultado una reducción de los ingresos por contribuciones voluntarias, a saber: 53.542.575 dólares (netos) para 1965 y 56.075.016 dólares (netos) para 1966, lo que arroja un total de 109.617.591 dólares para el bienio.

La estimación inicial de los gastos locales de los gobiernos beneficiarios por servicios de expertos arrojó un total de 4.231.630 dólares para el año 1966, con arreglo al presupuesto revisado de los gastos de expertos en el segundo año del programa aprobado de la categoría I. Habida cuenta de los ajustes de las estimaciones de años anteriores (746.868 dólares) y de los ajustes por diferencias de cambio (72.856 dólares), los ingresos netos por cobrar en concepto de gastos locales en 1966 ascendieron a 3.411.906 dólares.

Al 31 de diciembre de 1965 las organizaciones participantes reintegraron un total de 824.828 dólares, tras deducción de los ajustes por diferencias de cambio, que ascendieron a 198.466 dólares. Entre las cantidades reintegradas figuraban unas economías de 549.813 dólares realizadas al liquidar obligaciones de años anteriores, el saldo no comprometido de 159.441 dólares de las asignaciones del Fondo de Operaciones y de Reserva aprobadas en 1965 e ingresos diversos por valor de 314.040 dólares.

Los ingresos varios de 326.799 dólares de la Cuenta Especial de Asistencia Técnica en 1966 (menos 106.853 dólares de ajustes por diferencias de cambio) comprendían una suma de 66.591 dólares (netos), correspondiente a la participación del Sector Asistencia Técnica en las economías realizadas al liquidar obligaciones de años anteriores y a ingresos diversos de la secretaría del PNUD.

De los recursos brutos se restituyeron al antiguo Fondo de Operaciones y de Reserva 1.555.527 dólares en concepto de gastos para casos urgentes en 1965.

Tras la creación del Fondo Rotatorio del PNUD, desapareció el Fondo de Operaciones y de Reserva del sector Asistencia Técnica, que contaba con 13 millones de dólares, y se reintegró dicha cantidad a los recursos del Programa de Asistencia Técnica. De conformidad con la decisión del Consejo de Administración, se transfirieron 4.500.000 dólares de dichos fondos para constituir el Fondo Rotatorio del PNUD.

4. Administración

ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA

La experiencia adquirida durante 1966 en la fusión de las actividades de las antiguas secretarías de la JAT y del Fondo Especial sugirió la conveniencia de introducir ciertos nuevos cambios y se tomaron medidas para combinar todas las funciones operacionales y de programación de ambos programas en una sola dirección: la Dirección de Operaciones y Programación. Las funciones de esta dirección incluyen la coordinación de los programas por países del sector Asistencia Técnica, que se había dejado temporalmente a cargo de la Dirección de Evaluación e Informes. Por otra parte, la Dirección de Operaciones y Programaciones tendrá toda la responsabilidad de la tramitación de las nuevas solicitudes de proyectos, de la preparación de la documentación de los programas para la Junta Consultiva Mixta y el Consejo de Administración, de las actividades complementarias para los proyectos aprobados y de la fiscalización de las operaciones.

Se insistió especialmente en la necesidad y la importancia de mantener relaciones sistemáticas con otros órganos y programas de las Naciones Unidas en esferas de la incumbencia del PNUD y, en consecuencia, se reorganizó la Dirección de Evaluación e Informes como Dirección de Relaciones Externas, Evaluación e Informes. Las actividades de evaluación de programas, que se ampliarán adecuadamente para satisfacer las necesidades actuales, y las funciones relativas a los informes, continúan siendo de la incumbencia de la Dirección reorganizada.

Como hizo en 1966, la Dirección de Gestión Administrativa y Presupuesto continuará asumiendo toda la responsabilidad de la organización, presupuesto, personal y administración de la secretaría del PNUD, tanto en la sede como en las oficinas regionales. Esa Dirección servirá también de centro para la dirección y la supervisión de las actividades sobre el terreno y para la mejora de la coordinación administrativa sobre el terreno entre el PNUD y las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.

Otro elemento importante en el mejoramiento gradual de la organización en la sede fue la mayor atención que se prestó a las actividades financieras complementarias de la labor de preinversión del PNUD. Se asignó al Administrador Auxiliar la responsabilidad especial del enlace y las relaciones con las instituciones financieras para la financiación del desarrollo.

Esta organización de la Secretaría será examinada nuevamente en relación con la experiencia adquirida, de manera que 1967 será un año de transición y de ajuste antes que de consolidación final.

La plantilla aprobada para la sede del PNUD en 1967 consta de 155 puestos del Cuadro Orgánico y categorías superiores y 190 puestos del Cuadro de Servicios Generales.

PLANTILLA DE SERVICIOS LOCALES DEL PNUD

Debido al creciente volumen y complejidad de las actividades de los programas, se establecieron oficinas en Botswana, Lesotho y Swazilandia, bajo la supervisión general de la oficina regional de Lusaka, Zambia. La oficina del PNUD en Indonesia, cerrada a comienzos de

1965, volvió a funcionar a fines de 1966. Por otra parte, tras la reanudación de las operaciones del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Irián Occidental y la decisión del Secretario General de delegar en el PNUD la responsabilidad de su administración, se inauguró recientemente una oficina en Sukarnapura, Irián Occidental, reforzada por una dependencia especial dentro de la secretaría del PNUD en la sede.

El creciente número de proyectos en funcionamiento ha originado un volumen de trabajo adicional que requiere el refuerzo de las oficinas locales del PNUD. La plantilla autorizada de servicios locales del PNUD para 1967 consta de puestos del Cuadro Orgánico y categorías superiores, frente a los 238 de 1966.

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

Con respecto al presupuesto de 1966 — el primero del programa fusionado — el Consejo de Administración aprobó la recomendación del Administrador en el sentido de que la distribución de los gastos del presupuesto del PNUD entre los recursos de los sectores Fondo Especial y Asistencia Técnica se realizará según la distribución de las promesas de contribuciones. El presupuesto de 1966 se financió en un 63,76% con recursos del sector Fondo Especial y en un 36,24% con fondos del sector Asistencia Técnica. Esencialmente, se mantendrá el mismo porcentaje de distribución de gastos en el presupuesto de 1967, que prevé recursos por valor de 9.490.613 dólares del sector Fondo Especial y de 5.394.287 dólares del sector Asistencia Técnica.

COORDINACIÓN SOBRE EL TERRENO

Para complementar las reuniones regionales de Representantes Residentes, se celebró una reunión general en Turín, Italia, en julio de 1966. La reunión, a la que también asistieron funcionarios superiores del PNUD y de los organismos participantes y de ejecución, constituyó una buena tribuna para la discusión minuciosa de los factores que influyen en la eficacia de las operaciones del PNUD, incluida la cuestión de una asociación más estrecha de los organismos con las oficinas locales del PNUD.

En ese sentido se tomó una medida oficial mediante el acuerdo a que llegaron el Director General de la FAO y el Administrador y en virtud del cual los representantes de la FAO en los países se instalarán en las oficinas de los Representantes Residentes y, tras las oportunas disposiciones normativas y la delimitación de las funciones especificadas en el acuerdo, pasarán a depender administrativamente del Representante Residente. Se espera que el proceso de integración se lleve a cabo, por etapas, en un período de unos tres años, y se proyecta aplicar esta medida en diez oficinas en 1967.

En el 43º período de sesiones del Consejo Económico y Social el Comité Administrativo de Coordinación aprobó una nueva declaración de política relativa a la coordinación de programas multilaterales de asistencia técnica. En especial, el CAC destacó que, si bien la función de las organizaciones internacionales consiste en ayudar en todo lo posible al proceso práctico de la coordinación, corresponde a los gobiernos resolver la cuestión de los mecanismos necesarios para mejorar la planificación y coordinación de la ayuda externa. Los principios sentados de común acuerdo en la reunión

destacaron también la importancia de reforzar las consultas entre organizaciones al nivel nacional, bajo la dirección de los Representantes Residentes del PNUD.

CONTRATACIÓN DE EXPERTOS

Este problema, aunque no se origina de la administración normal de las oficinas locales del PNUD, sino de las actividades operacionales sustantivas de los organismos en la ejecución de los proyectos, merece mencionarse en este respecto. En su tercer período de sesiones el Consejo de Administración expresó la esperanza de que el PNUD tomara la iniciativa en la coordinación de la política de contratación, con miras a atraer números suficientes de funcionarios calificados que trabajaran como expertos en los proyectos del PNUD, y a desarrollar posibles fuentes de contratación. Se han encomendado estos asuntos a la Dirección de Gestión Administrativa y de Presupuesto, la cual ha tomado medidas para que un consultor especial estudie los problemas pertinentes.

Como primer paso, se celebrará una serie de consultas entre el Administrador y los jefes de los organismos participantes.

B. Actividades operacionales de las Naciones Unidas

1. Programas de cooperación técnica de las Naciones Unidas

El valor financiero de la asistencia prestada en virtud de los programas de cooperación técnica de las Naciones Unidas fue de 40.400.000 dólares en 1966, en comparación con 34 millones de dólares en 1965 y 32.900.000 dólares en 1964. La cifra de 1966 comprende los fondos desembolsados en virtud del programa ordinario, del sector Asistencia Técnica del PNUD, del sector Fondo Especial del PNUD y las actividades financiadas con cargo a los fondos en depósito, pero no los programas especiales de enseñanza y formación para el África Sudoccidental y para los territorios bajo administración portuguesa. Al igual que en años anteriores, el aumento de los recursos disponibles se debió principalmente a la creciente importancia de las Naciones Unidas como organismo de ejecución de los proyectos del Fondo Especial; a fines de abril de 1967 las Naciones Unidas actuaban como organismo de ejecución en 153 proyectos aprobados con asignaciones corrientes de 153.400.000 dólares, el segundo en orden de importancia entre los organismos participantes. Los desembolsos para proyectos del Fondo Especial a cargo de las Naciones Unidas ascendieron a 17.900.000 dólares en comparación con 14.100.000 dólares en 1965 y 12.300.000 dólares en 1964. Estas cifras incluyen las contribuciones de contrapartida de los gobiernos beneficiarios.

Tomando como base 1960 = 100 para medir el crecimiento de las operaciones de asistencia técnica de las Naciones Unidas entre 1959 y 1966, incluidos el programa ordinario, el sector Asistencia Técnica del PNUD (conocido hasta el 1º de enero de 1966 como Programa Ampliado de Asistencia Técnica) y las actividades financiadas con cargo a los fondos en depósito, los gastos de 1966 representaron un índice de 248,3%; los de 1965, un índice de 218,0, y los de 1964, un

índice de 224,2. Tomando 1962 como base para medir el aumento de los gastos del Fondo Especial a cuyo respecto las Naciones Unidas fueron el organismo de ejecución, los gastos de 1966 tuvieron un índice de 436,5, en comparación con 343,9 en 1965 y 300 en 1964. Además, durante 1966 se firmaron, en virtud del Programa Mundial de Alimentos, veintiún acuerdos de proyectos de interés técnico especial directo o indirecto para las Naciones Unidas, a un costo de 24.700.000 dólares. El descenso del índice registrado de 1964 a 1965 y el aumento de 1966 a 1965 se puede atribuir al ciclo bienal de programación del sector Asistencia Técnica del PNUD. El año 1965 representa el primero del bienio 1965-1966 y la experiencia ha demostrado que la mayor parte del programa se suele ejecutar en el segundo año del ciclo bienal.

Los recursos del programa ordinario (título V del presupuesto de las Naciones Unidas) se mantuvieron en 6.400.000 dólares en 1966, como viene sucediendo desde 1962. El programa ordinario estaba comprometido en un 99,53%, quedando a fin de año un saldo no asignado de sólo 29.976 dólares. El uso casi total de los fondos es una prueba de la eficaz ejecución del programa, cosa que también sucedió en 1965, cuando se comprometió el 99,89%, quedando un saldo de sólo 6.704 dólares. En cuanto a las obligaciones del programa ordinario, el 48,7% se gastó en actividades de desarrollo económico (lo mismo que en 1965), el 30,7% en actividades sociales (un 0,2% más que en 1965), el 16,4% en administración pública (un 0,3% menos que en 1965) y el 4,2% en derechos humanos y fiscalización de estupefacientes (un 0,2% más que en 1965). Por lo tanto, en 1966, igual que en años anteriores, se mantuvieron las mismas proporciones entre las obligaciones contraídas en virtud del programa ordinario, salvo algunas ligeras variaciones respecto de 1965.

Las obligaciones contraídas en virtud del sector Asistencia Técnica del PNUD ascendieron en 1966 a 11.949.933 dólares, lo que representa un aumento de 2.892.688 dólares en comparación con 1965. De los recursos disponibles, el 76,4% se invirtió en actividades de desarrollo económico (1,3% más que en 1965), el 14,6% en actividades sociales (un 0,6% más que en 1965) y el 9% en administración pública (1,5% menos que en 1965).

En comparación con 1965, los gastos de los proyectos del Fondo Especial durante 1966 registraron un aumento considerable, que fue de 3.771.849 dólares. Los gastos en proyectos de desarrollo económico representaron el 91,6% del total (un 0,6% más que en 1965), mientras que los gastos en actividades sociales absorbieron el 6% (1% menos que en 1965) y los gastos en administración pública el 2,4% (un 0,5% más que en 1965).

El total de expertos con cargo a todos los programas, salvo los que trabajaban en proyectos del Fondo Especial, permaneció constante en 1966, siendo de 2.060 en 1966, o sea, dos más que en 1965 y 211 más que en 1964. Había 517 expertos asignados a proyectos del Fondo Especial, en comparación con 306 en 1965 y 284 en 1964. Se utilizaron más expertos en 1966 que en 1965 en las esferas siguientes: cuestiones fiscales y financieras; desarrollo industrial; transporte y comunicaciones; fomento del comercio y comercialización; vivienda, construcción y planificación; desarrollo de la comunidad y tenencia de tierras; servicios sociales.

Las becas con cargo a todos los programas, excluidas las de los proyectos del Fondo Especial, ascendieron a 2.493, o sea, 606 más que en 1965 y 174 más que en 1964. El aumento del número de becas concedidas refleja nuevamente el hecho de que la mayor parte de los programas se ejecutan durante el segundo año de cada bienio, en este caso el bienio 1965-1966. Además, en 1966 se concedieron 105 becas con cargo al Fondo Especial, o sea 21 más que en 1965.

Reviste particular interés el papel de los asesores regionales en la prestación de asistencia a los gobiernos. Las sedes de dichos asesores son las respectivas comisiones económicas regionales y la Oficina de Asuntos Económicos y Sociales de Beirut, y sus misiones suelen clasificarse en varias categorías generales: 1) misiones cortas a un país, en respuesta a una solicitud del gobierno, generalmente de carácter urgente, para ayudar a resolver determinado problema; 2) visitas a varios países contiguos en una parte de la región, en respuesta a solicitudes de los gobiernos, para asesorar sobre diferentes problemas y contribuir a la preparación de proyectos de asistencia técnica regional; 3) ayuda, asesoramiento y capacitación de personal homólogo nacional en virtud del programa de asistencia a largo plazo; 4) ayuda u orientación en la programación de solicitudes de asistencia. También participan en la ejecución de proyectos regionales. Así, durante 1966, treinta y siete asesores regionales fueron enviados por la Comisión Económica para África (treinta y cuatro en 1965), dieciocho por la Comisión Económica para América Latina (veintiuno en 1965), veintidós por la Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente (el mismo número que en 1965), y seis por la Oficina de Asuntos Económicos y Sociales de Beirut (cinco en 1965).

Las solicitudes que envían los gobiernos para pedir la asignación de asesores interregionales son muy parecidas a las que formulan para pedir asesores regionales; la única diferencia importante consiste en que los servicios de aquéllos pueden utilizarse sobre una base global y que sus misiones se tramitan en la Sede de las Naciones Unidas, que mantiene informadas a las oficinas regionales de las actividades de los asesores interregionales en las respectivas regiones. Había veintiocho asesores interregionales en 1966, en comparación con veintinueve en 1965.

Como resultado del establecimiento de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, los países en desarrollo conceden una atención cada vez mayor a la creación de organizaciones y servicios para el fomento del comercio exterior y a la necesidad de una formación apropiada en esta esfera. Por consiguiente, cabe suponer que las Naciones Unidas recibirán un número cada vez mayor de solicitudes para expertos en comercio exterior y comercialización y de becas en fomento del comercio. En relación con la resolución 31 (IV) aprobada por la Junta de Comercio y Desarrollo de la UNCTAD sobre la asistencia técnica en comercio y esferas conexas, la Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica concertó arreglos para obtener el apoyo sustantivo de los servicios disponibles de la UNCTAD en materia de asistencia técnica en las esferas del comercio, la integración comercial, la comercialización y el fomento de la exportación.

En Asia y el Lejano Oriente la asistencia en materia de desarrollo industrial se concentró cada vez más en

industrias concretas o problemas especiales entre los países. Esto puede verse, por ejemplo, en la asignación de expertos en textiles y cerámica a Ceilán y de expertos en diseño industrial y financiación de industrias medianas y pequeñas a la República de China. Se proporcionaron a la India los servicios de asesores en instrumentos eléctricos de medición, pulido de lentes, fundición de acero, curtido y acabado de pieles, diseño de herramientas y talleres de herramientas, normalización entre empresas y sustitución de materiales. Además, un equipo de investigación de las inversiones industriales siguió prestando asesoramiento en la India sobre las perspectivas de diversas industrias basadas en la explotación de minerales y bosques en los Estados de Mysore y Madhya Pradesh. Irán ha recibido también asistencia en varias especialidades, en tanto que Malasia inició, con el auspicio del Majlis Amanah Ra'ayat, un proyecto industrial que incluía asistencia en dirección y servicios de asesoramiento, diseño industrial y curtidos de pieles. En Singapur, con el auspicio de la Junta de Desarrollo Económico, las industrias que contaron con la asistencia de expertos de las Naciones Unidas incluyeron desde los herrajes y accesorios para los edificios, la galvanoplastia y la fundición hasta los productos de caucho y la utilización de la madera. Un experto en sistema métrico prestó asistencia al Gobierno de Afganistán. Un ingeniero mecánico prestó servicios a Birmania en las esferas del diseño industrial y la metrología. Los expertos de las Naciones Unidas prestaron asimismo asesoramiento en cerámica y fundición de acero a Filipinas, en fabricación de muebles a Samoa Occidental y en normas para equipo eléctrico, fundición y vaciado de metales y control de la calidad de la cerámica a la República de Corea. Un asesor en normas industriales prestó servicios en Tailandia. Entre las misiones enviadas a Indonesia al reanudarse la asistencia de las Naciones Unidas por solicitud del Gobierno, se organizó una misión de investigación industrial a corto plazo que prestó asistencia en la formulación de proyectos de las Naciones Unidas para determinadas industrias.

Los proyectos de desarrollo industrial también han sido examinados con prioridad en América Latina. Así, en la Argentina el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, organización autónoma creada por el Gobierno para fomentar y apoyar la investigación tecnológica que contribuya al desarrollo de la industria nacional, solicitó los servicios de nueve expertos en esferas altamente especializadas. A raíz de las consultas efectuadas, se solicitaron otros seis técnicos, o sea, un total de quince expertos a corto plazo, con misiones que variaron entre dos y seis meses. Este proyecto constituye un buen ejemplo de una forma más perfeccionada de asistencia técnica a los países en desarrollo que necesitan técnicos altamente especializados y capacitados que presten asistencia a corto plazo en la realización de una labor técnica que el Gobierno solicitante ya ha planeado y empezado a poner en práctica.

En África la asistencia en la esfera del desarrollo industrial se ha centrado en la prestación de asistencia de expertos. Por ejemplo, en Guinea un ingeniero químico está estableciendo pequeñas unidades extractoras y unidades industriales para la preparación de margarina, carbón y otros proyectos; esta labor se ha emprendido en el marco de un plan de desarrollo de siete años que tiene por objeto fomentar el desarrollo de las industrias químicas del país, particularmente las de elaboración

de aceites vegetales y la producción de aceites esenciales. En Mali, un equipo de tres expertos está haciendo un inventario de los recursos a fin de seleccionar las industrias que mejor pueden desarrollarse en el país, en tanto que en Mauritania un ingeniero industrial está analizando los proyectos propuestos con objeto de establecer un orden de prioridad para el segundo plan cuatrienal del país.

Se examinaron diversos aspectos del desarrollo industrial en tres seminarios y otras reuniones. Funcionarios de nueve países europeos e Israel asistieron a una reunión de un grupo consultivo sobre polígonos industriales y zonas industriales en Ginebra en octubre de 1966 y examinaron diferentes formas de polígono industrial con especial referencia al fomento de la pequeña industria y la planificación conexa, y los problemas financieros y de organización. Un grupo consultivo similar, constituido por funcionarios superiores de seis países del Oriente Medio, se reunió en la Oficina de Asuntos Económicos y Sociales de Beirut en octubre y noviembre. En septiembre y octubre se organizó el Simposio interregional sobre el fomento de las industrias del metal en Moscú, para ayudar a los países en vía de industrialización a aprovechar la experiencia de los países más industrializados en el desarrollo de sus propias industrias metalúrgicas. Asistieron a este seminario treinta y ocho participantes de veinticinco países.

Durante el período examinado se llevaron a cabo siete programas de formación de grupos en la fábrica, en cooperación con los gobiernos y empresas huéspedes en cinco países. Estos programas fueron organizados para dar a ingenieros recién graduados de los países en desarrollo la experiencia práctica que se adquiere normalmente durante varios años de trabajo en la industria. Dos de estos programas fueron organizados en la Unión Soviética para ingenieros siderúrgicos, uno de junio a noviembre de 1966 y otro de mayo a octubre de 1967; participaron treinta y siete ingenieros en el primero de estos programas y cuarenta y cinco en el segundo.

Además de la asignación de asesores y planificadores económicos a título individual a Afganistán, Camboya, las islas Viti, Malasia, Samoa Occidental, etc., puede observarse un nuevo tipo de asistencia en materia de planificación económica en Asia y el Lejano Oriente, en dos proyectos que se realizaron en equipo, uno en Pakistán y otro en Ceilán. En el Pakistán se proporcionaron los servicios de planificadores generales y sectoriales, entre ellos economistas de la industria, los transportes y los recursos hidráulicos, a los dos gobiernos provinciales, así como a la Comisión Central de Planificación. En Ceilán se inició un proyecto ampliado de programación económica y proyecciones para ayudar al Ministerio de Planificación y Asuntos Económicos, no sólo mediante asesores económicos, sino también con un equipo de planificadores constituido por economistas generales y especializados en la industria, los recursos hidráulicos y la planificación del medio físico. Este proyecto de asistencia técnica de Ceilán fue iniciado cuando el Gobierno pidió un proyecto del Fondo Especial en planificación y programación económicas.

Puede citarse como ejemplo de estas actividades en África la asistencia prestada al Gobierno de Marruecos. Con objeto de ayudar al Gobierno a preparar su

Plan Nacional de Desarrollo para 1968-1972, el Ministerio de Desarrollo pidió un equipo constituido por un economista en transportes, un economista industrial, un experto en turismo y un experto en ganadería y veterinaria. El experto en ganadería y veterinaria fue contratado en virtud del programa de la FAO; los otros tres expertos, así como los servicios de un asesor interregional en planificación económica, se proporcionaron al Gobierno con cargo al programa de las Naciones Unidas. Cuando termine la misión de planificación a corto plazo se formularán recomendaciones relativas a la continuación de la asistencia técnica que podrían suministrar las Naciones Unidas para establecer un programa de planificación general y sectorial en Marruecos.

Se celebró en Amsterdam, en septiembre de 1966, el Seminario Interregional sobre Planificación de los Recursos Internos y Externos para las Inversiones, el segundo de una serie de seminarios interregionales sobre la planificación del crecimiento económico en los países en desarrollo. Asistieron al seminario participantes de veintiocho países. Otro Seminario Interregional, sobre Proyecciones Económicas a largo plazo para la Economía Mundial: Aspectos Sectoriales, fue organizado en Elsinore, Dinamarca, el primero de una serie de seminarios internacionales sobre proyecciones económicas a largo plazo para la economía mundial. Asistieron a este Seminario treinta funcionarios de países en desarrollo. Al igual que en años anteriores, jóvenes economistas fuera de Europa participaron, junto con sus colegas europeos, en un programa de formación en el empleo realizado en la sede de la Comisión Económica para Europa en Ginebra. Los que asistieron a este curso participaron en actividades de investigación económica y otras actividades conexas de la CEPE.

En lo que se refiere a recursos naturales, energía y transporte, se prestó muy variada asistencia a los países de Asia y el Lejano Oriente. Por ejemplo, en Afganistán un asesor actúa como Director del Departamento de Electricidad; en Camboya un geólogo prosigue trabajos sobre los depósitos de bauxita; en la República de China un hidrólogo presta asistencia en un proyecto experimental para el establecimiento de una red hidrológica, en tanto que un economista de minas presta asesoramiento sobre las minas de carbón. Se proporcionaron a la India expertos de las Naciones Unidas en exploración de yacimientos petrolíferos y presas de tierra, mientras en la República de Corea se llevaron a cabo investigaciones hidrográficas.

En África el proyecto solar de Níger despertó gran interés por ser el primer proyecto de las Naciones Unidas en esta esfera especializada. Un experto muy original ha sugerido aplicaciones prácticas de esta fuente de energía, así como la coordinación de los esfuerzos de estaciones — hasta ahora aisladas e independientes — cuyas condiciones climáticas presagian los mejores resultados. En Burundi un asesor a corto plazo prestará asistencia en materia de aprovechamiento de los recursos naturales y asesorará al Gobierno en cuestiones de exploración geológica y estudio de los recursos minerales. Colaborará en el estudio gubernamental de un proyecto preliminar de investigaciones minerales, junto con el Fondo Especial. En Malí un ingeniero de minas presta asesoramiento en la explotación de recursos minerales, un cartógrafo contri-

buye a la creación de un centro de reproducción fotográfica y un asesor en energía está preparando recomendaciones sobre la evaluación y explotación de los recursos energéticos y las modalidades de financiación de los proyectos.

En conformidad con la recomendación de un experto de las Naciones Unidas que llevó a cabo un estudio de evaluación de minerales en las islas de Trinidad y Tabago en 1963 y 1964, el Gobierno solicitó asistencia para un levantamiento aeromagnético de la zona marina que separa las dos islas. Este levantamiento tenía por objeto averiguar si había rocas estratiformes y, en caso afirmativo, el espesor y la estructura general de la formación sedimentaria, que podía contener petróleo y gas. El informe de la misión de estudio señala varias anomalías que indican la posibilidad de depósitos sedimentarios y la próxima etapa, que se está examinando ahora con el Gobierno de Trinidad y Tabago, es la correlación de la geología conocida de las islas con los resultados geofísicos del levantamiento, a fin de averiguar, a ser posible, la edad de las formaciones sedimentarias. Posteriormente será necesario emprender un estudio sísmico marino para determinar la estructura de las formaciones sedimentarias en dichas regiones.

Se celebraron seminarios interregionales sobre puertos y transporte marítimo, métodos normalizados de movimiento de fletes, desarrollo de recursos hidráulicos y cartografía.

El séptimo período de sesiones del Centro de Capacitación sobre Puertos y Navegación de las Naciones Unidas fue celebrado en Lima, Perú, en febrero y marzo de 1967, seguido por una gira de estudios de tres días en Guayaquil, Ecuador. La reunión se organizó en colaboración con los Gobiernos de Dinamarca, Ecuador y Perú, y asistieron a ella treinta y un funcionarios de 25 países. Se celebró un Seminario Interregional sobre Utilización Integrada de los Recursos Hidráulicos en Fergana, Unión Soviética, en agosto de 1966. Asistieron al mismo treinta y seis participantes de 35 países, que examinaron las técnicas modernas de dirección, administración, desarrollo y utilización de los recursos hidráulicos. El segundo seminario sobre cartografía para el desarrollo económico se celebró en Humlebaek, Dinamarca, en mayo y junio de 1967, con la asistencia de treinta y un participantes. El seminario fue seguido por una gira de visitas a las instituciones cartográficas de la República Federal de Alemania y Suiza.

Se celebró en Londres, en mayo de 1967, un seminario interregional al que asistieron treinta y seis participantes de países en desarrollo, relativo a los aspectos conceptuales, económicos y técnicos del movimiento normalizado de fletes y a los correspondientes arreglos institucionales y de servicios, en el contexto de la función del transporte en la política de desarrollo. Después del seminario se organizó una gira de estudios de una semana, en la que se visitaron instalaciones de transporte seleccionadas en Inglaterra y los Países Bajos.

En los proyectos estadísticos de Asia y el Lejano Oriente se mantuvo la tendencia hacia una mayor especialización. Así, en la India los expertos prestaron asesoramiento sobre el control de la calidad de las estadísticas y los dispositivos de memoria de núcleo magnético. En el Irán se proporcionaron los servicios de

un asesor en estadísticas de los gastos de hogares rurales y de otro especialista en análisis de sistemas de elaboración de datos, además de los de un estadístico general. Se asignaron expertos en censos o estadísticas demográficas al Afganistán, a Camboya y a Malasia, y un experto en estadísticas comerciales prestó servicios en Nepal. A fines de 1966 se celebró un seminario regional sobre los censos y encuestas por muestreo del sector de la distribución.

En Africa se ha insistido en las estadísticas demográficas y la formación en esta esfera y las Naciones Unidas han atendido solicitudes de este tipo presentadas por el Alto Volta y Malí. En este último país el Asesor prestará asistencia para organizar un servicio estadístico y la reunión, tabulación y utilización de estadísticas económicas y geográficas. En Gambia un experto presta asesoramiento al Gobierno sobre el futuro desarrollo del sistema estadístico y, en particular, de las estadísticas económicas, y sobre la formación de personal en los servicios estadísticos.

En Asia y el Lejano Oriente se facilitaron servicios de asesores en bienestar de la familia y el niño a la República de China, el Paquistán Occidental, Filipinas y la República de Viet-Nam, y un asesor en bienestar social general prestó servicios en la República de Corea. Se asignó un experto en puericultura institucional a Hong Kong y expertos en capacitación para el trabajo social al Irán y a Filipinas. El número de expertos en rehabilitación de impedidos en los países de Asia y el Lejano Oriente demuestra el desarrollo de los proyectos en servicios sociales especializados. En el Irán, con la asistencia de un experto de las Naciones Unidas en fisioterapia, el Gobierno equipó y organizó un centro nacional de prótesis, al que pueden acudir ahora estudiantes de otros países en desarrollo. Un experto en esta materia también prestó servicios en Laos, en tanto que un fisioterapeuta fue destacado en la República de Viet-Nam. Se facilitaron los servicios de un experto en rehabilitación de impedidos al Paquistán Oriental y de un experto de rehabilitación de ancianos e inválidos a Tailandia. Asimismo, se llevó a cabo una misión a corto plazo en la República Popular de Mongolia para asesorar al Gobierno sobre los servicios de rehabilitación de impedidos.

En Marruecos un especialista en educación y rehabilitación de ciegos prestará asistencia para evaluar los servicios de rehabilitación de ciegos y establecer programas de formación para el personal marroquí que se dedica a la enseñanza y rehabilitación de los ciegos. Las Naciones Unidas prestaron los servicios de un asesor en bienestar social general y de un asesor en bienestar de la familia y el niño al Gobierno de Libia.

En julio y agosto de 1966 se celebró en Virum, Dinamarca, un seminario interregional sobre programas y administración de servicios de rehabilitación fundamental. Treinta y un participantes de veintiocho países examinaron las posibilidades de mejorar los programas de rehabilitación fundamental desde los puntos de vista médico, sociológico, psicológico, educacional y profesional, teniendo en cuenta las tendencias modernas en estas esferas.

Se celebró en Pittsburgh, Pennsylvania, en octubre y noviembre de 1966, un Seminario internacional sobre política y planificación del desarrollo en relación con la urbanización. Este seminario, al que asistieron veintisiete participantes de veinticinco países en des-

arrollo, trató de los aspectos económicos, sociales y demográficos del crecimiento urbano y de los problemas conexos de distribución de la población, de la política nacional y regional de desarrollo y del asentamiento urbano y suburbano.

Uno de los principales acontecimientos del año pasado fue la organización, por las Naciones Unidas y la FAO en asociación con la OIT, de una Conferencia Mundial de Reforma Agraria que se celebró en Roma en junio y julio. Asistieron a ella ciento veintiséis participantes de treinta y seis países; treinta y tres países proporcionaron a sus participantes más de cien asesores. La Conferencia permitió un intercambio de experiencias sobre los problemas de tenencia de tierras y reformas estructurales, los aspectos sociales y económicos de la reforma agraria y los problemas conexos administrativos, financieros y de capacitación.

Los países de Asia y el Lejano Oriente demostraron este año creciente interés por la vivienda, la planificación del medio físico y la construcción. Así, pues, un asesor en urbanismo y construcción fue enviado a Camboya y un asesor en investigaciones relacionadas con la construcción a la República de Corea. En Nepal se inició un proyecto de urbanización; en Paquistán un urbanista prestó asistencia al Karachi Development Authority, y un experto en materiales de construcción asesoró al Gobierno del Paquistán Oriental. Se asignaron dos expertos en vivienda y planificación regional a Filipinas.

En Tanzania un asesor en planificación del medio físico está llevando a cabo un curso en esta materia en el Instituto de Administración Pública de Dar es Salaam. El experto aconsejó al Ministerio de Vivienda que concertase los arreglos necesarios para que los quince estudiantes pudieran tener un empleo adecuado durante sus vacaciones; sus tareas serían definidas y supervisadas por el experto y los expertos asociados. Se estima que el curso durará tres años y que luego se dispondrá de un profesor a tiempo completo.

Un experto presta asistencia al Gobierno de Jordania para establecer y dirigir un departamento de urbanismo, proyecto que había sido recomendado por los expertos de las Naciones Unidas enviados a este país en años anteriores. Asimismo, se ha asignado un asesor en urbanismo al Irak para ayudar a las autoridades a planificar y desarrollar la ciudad de Bagdad.

Se celebró en abril de 1967 en Maracay, Venezuela, un Seminario interregional sobre vivienda rural y servicios de la comunidad con objeto de ayudar a los países en desarrollo a lograr un crecimiento urbano-rural equilibrado. Asistieron a este seminario veintiséis participantes de países en desarrollo.

2. Proyectos del sector Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ejecutados por las Naciones Unidas

Al 31 de diciembre de 1966 las Naciones Unidas, como organismo de ejecución, estaban encargadas de la realización de 135 proyectos aprobados por el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sin contar siete que fueron anulados antes de esa fecha. Esto representaba un aumento de 30 proyectos respecto del número aprobado para las Naciones Unidas al 31 de diciembre de 1965.

Las Naciones Unidas recibieron asignaciones de 105.100.000 dólares, suma que no incluye los gastos generales del organismo ni las contribuciones en especie de los gobiernos beneficiarios. De esta cantidad, las asignaciones recibidas en 1966 sumaron 26.700.000 dólares. Las Naciones Unidas comprometieron la suma de 66.900.000 dólares, o sea, el 63,7% de las asignaciones destinadas a sus proyectos. Al 30 de abril de 1967 las Naciones Unidas estaban actuando como organismo de ejecución en 153 proyectos aprobados, se habían firmado los planos de operaciones para 123 de ellos y se habían dado las autorizaciones necesarias para comenzar la ejecución de 114; los créditos abiertos para

estos proyectos ascendían a 153.300.000 dólares, siendo esta cifra la seguida en magnitud entre los organismos participantes.

En el cuadro siguiente se compara la distribución de las cifras acumulativas de proyectos aprobados correspondientes a los años 1964-1967, por esfera de actividad. En las cifras de la columna de 1967 se incluyen 25 proyectos nuevos, que comprenden 18 proyectos aprobados en el período de sesiones de enero de 1967 del Consejo de Administración y siete que se someten al período de sesiones de junio de 1967 para aprobación.

	Cifras acumulativas de proyectos aprobados			
	31 de diciembre de 1964	31 de diciembre de 1965*	31 de diciembre de 1966*	31 de diciembre de 1967*
<i>Campo de actividad</i>				
Estudios económicos	4	7	9	11
Desarrollo industrial	10	13	19	22
Recursos naturales	50	71	86	97
Vivienda y planificación	3	5	8	12
Administración pública	3	4	5	7
Transporte y comunicaciones	2	4	5	7
Estadística	0	1	1	2
Población	—	—	1	1
Desarrollo de la comunidad	—	—	1	1
	72	105	135	160

* Excluidos siete proyectos que fueron anulados antes de comenzar las operaciones o antes de ser terminados.

A continuación se da una distribución comparada de estos proyectos, por región geográfica, para los años 1964, 1965, 1966 y 1967.

	Cifras acumulativas de proyectos aprobados			
	31 de diciembre de 1964	31 de diciembre de 1965*	31 de diciembre de 1966*	31 de diciembre de 1967*
<i>Región geográfica</i>				
América Latina	19	32	40	46
Asia y el Lejano Oriente	25	31	38	41
Europa	3	5	8	10
Oriente Medio	5	8	10	12
África	20	29	39	51
	72	105	135	160

* Excluidos siete proyectos que fueron anulados antes de comenzarse las operaciones o antes de ser terminados.

En otras partes del presente capítulo y en los correspondientes epígrafes del capítulo VIII, Asuntos económicos y sociales, se hallará información más detallada sobre estos proyectos.

C. Evaluación de los programas

En cumplimiento de la resolución 1151 (XLI) del Consejo Económico y Social, el Secretario General presentó al Consejo en su 43º período de sesiones un in-

forme sobre la evaluación de los programas de cooperación técnica.

En relación con el Grupo de Estudio entre organismos sobre Evaluación, establecido por el CAC para examinar los informes de los grupos de evaluación y proponer medidas prácticas encaminadas a hacer más eficaz el funcionamiento de los programas de cooperación técnica — decisión que posteriormente hizo suya el Consejo Económico y Social en su resolución 1151 (XLI) —, el Secretario General señaló a la atención

del Consejo las conclusiones del grupo contenidas en el 33° informe del CAC.

Respecto del estudio de los aspectos de los informes de los grupos de evaluación que se refieren a las actividades operacionales de las propias Naciones Unidas, el Secretario General dio cuenta al Consejo de que la Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica y la Oficina de Operaciones del Fondo Especial se iban a fusionar en la Oficina de Cooperación Técnica. Esta fusión tiene por objeto mejorar la eficacia de los programas de cooperación técnica de las Naciones Unidas mediante la reestructuración de su maquinaria administrativa y la formulación de métodos más precisos para la ejecución del programa y de los proyectos. En cuanto se hayan determinado con detalle las disposiciones del caso, el Secretario General informará al Consejo sobre el particular.

En cumplimiento de la resolución 1151 (XLI) del Consejo, el Secretario General, en cooperación con el Administrador del PNUD y en consulta con los jefes ejecutivos de los organismos especializados y del OIEA, está tomando disposiciones para organizar un nuevo número limitado de misiones experimentales de evaluación. El Gobierno del Ecuador se ha avenido a recibir una de esas misiones en el verano de 1967 y en el último trimestre de 1967 se emprenderá una segunda misión, probablemente en el Irán.

En cuanto al desarrollo de métodos y técnicas de evaluación, se ha iniciado un proyecto de investigaciones con el auspicio del Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas (UNITAR). Además, el Director Ejecutivo del UNITAR se propone convocar un pequeño grupo de expertos que colaboren en la definición de métodos y técnicas perfeccionados para la evaluación de proyectos, la evaluación por sectores y la evaluación de las repercusiones globales del conjunto de los programas de cooperación técnica del sistema de organismos de las Naciones Unidas. Esta actividad debiera resultar de utilidad no sólo para los organismos del sistema de las Naciones Unidas, sino también para los gobiernos que procuran reforzar sus procedimientos de evaluación.

D. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Uno de los principales asuntos examinados por la Junta Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en su período de sesiones anual, celebrado en junio de 1967, fue el de la estrategia, los criterios y el orden de prioridad que han de observarse para emplear lo mejor posible la ayuda del UNICEF. Como se indica en el informe de la Junta presentado al Consejo Económico y Social en el 43° período de sesiones, los debates, basados en un trabajo sobre la política de asistencia del UNICEF preparado por el Director Ejecutivo, versaron sobre las adaptaciones que requería la política del programa del UNICEF en vista de las nuevas posibilidades que existían para facilitar a los niños la protección que necesitan como grupo vulnerable y para prepararlos a contribuir al progreso de su sociedad.

A la Junta le pareció evidente que la situación de los niños de los países en desarrollo debe considerarse como un creciente sentido de urgencia. Se conoció que

la mejor forma de fomentar los objetivos humanitarios del UNICEF consistía en aplicar una política de asistencia que contribuyera no sólo a mejorar el cuidado de los niños, sino también a estimular el desarrollo económico y social a largo plazo de los países en que los niños vivían.

Aun cuando, en términos generales, los gobiernos de los países en desarrollo estaban dedicando, por lo general, una proporción importante de su presupuesto a los programas de ayuda a la infancia y la juventud, la falta de recursos nacionales hacía que, en lo esencial, resultase imposible en un futuro próximo facilitar servicios a escala nacional. No obstante, se podía progresar a condición de que se estimulara y ayudara a la familia, a la comunidad y a la administración local y de que se emplearan más eficazmente los recursos materiales y humanos disponibles. La ayuda externa era a menudo de importancia fundamental en este proceso.

Como las necesidades variaban de unos países en desarrollo a otros y de unas regiones a otras dentro de cada país, y como también variaban con el tiempo, la Junta admitió que el UNICEF no podía establecer un orden de prioridad global entre esferas tales como la salud, la enseñanza y la nutrición. Cada gobierno tenía que formular su política y su orden de prioridad respecto de la infancia según sus circunstancias propias; no obstante, el UNICEF podría intervenir útilmente en este proceso y también facilitar ayuda para proyectos concretos que formaran parte, en lo posible, de una intensa labor de desarrollo.

Se acordó que el UNICEF fomentase en cada país un menor número de proyectos de más alcance, que revisieran importancia actual o futura y estuviesen adaptados a las necesidades más urgentes y a la capacidad de absorción del país; y también se convino en que el UNICEF daría a esos proyectos un apoyo suficientemente vigoroso y durante tiempo suficiente para garantizar su éxito.

Se insistió sobre la necesidad de innovación en los programas, de los nuevos métodos de formación, de nuevos medios de resolver los problemas y de una mayor atención a la cuestión de obtener apoyo oficial local y voluntario. Asimismo debía fijarse mayor atención en el problema de hallar métodos eficaces para conceder una "asistencia especial" más generosa a los países más pobres, así como también a la forma de hacer llegar la ayuda a los niños de las regiones "atrasadas" y poco favorecidas de cada país beneficiario.

El UNICEF debiera emplear sus recursos con miras a producir el máximo efecto multiplicador. Debería continuar actuando como agente catalítico participando en proyectos experimentales o iniciales, los cuales podrían a su vez atraer nuevos recursos del interior del país y de otras fuentes exteriores de ayuda. A este respecto, la Junta creía que debían hacerse mayores esfuerzos para estimular el aumento de la ayuda externa, de fuentes oficiales y particulares, dedicada a programas de desarrollo social en beneficio de la infancia, organizados por conducto del UNICEF o de otros organismos.

Más de la mitad de los 20 millones de dólares asignados a los programas del UNICEF en 1967 correspondió a proyectos de sanidad. La partida más importante, con mucho (14.100.000 dólares), se destinó a servicios sanitarios básicos en los que el elemento principal estaba constituido por la higiene maternoinfantil.

En su período de sesiones de junio de 1967 la Junta estudió una evaluación de la asistencia prestada por la OMS y el UNICEF a los servicios de higiene materno-infantil durante el período 1960-1964. De esta evaluación, que había sido examinada primeramente por el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria, se desprendía claramente que la ayuda había contribuido a progresos notables en cantidad y calidad de los servicios. Se formularon algunas recomendaciones, que la Junta hizo suyas, para acelerar estos progresos. La Junta se mostró preocupada porque era demasiado reducido el número de madres y niños atendidos por los programas de higiene materno-infantil, y también porque era con frecuencia deficiente la calidad de los servicios que recibían. Se reconoció que, además de continuar con los métodos existentes, se necesitaría una mayor flexibilidad e imaginación para hacer extensivos los programas a las madres y niños de las aldeas, que sería preciso buscar nuevos métodos realistas de formar personal paramédico, especialmente auxiliares, y, por último, que en las comunidades rurales se debería dar incentivo y capacitación a los dirigentes para que desempeñaran un papel activo en el fomento de las actividades de la comunidad en materia de sanidad.

La Junta convino en que el UNICEF podía facilitar ayuda para la planificación de la familia como parte integrante de unos amplios servicios de higiene materno-infantil. Al adoptar esta decisión, la Junta aprobó las recomendaciones del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria, en las que se exponía claramente la postura de la OMS en la esfera de la planificación familiar y la medida en que la OMS estaba dispuesta a dar asesoramiento al UNICEF y a los gobiernos cuando éstos lo solicitaran.

En 1967 las asignaciones del UNICEF para programas de lucha contra las enfermedades, principalmente el paludismo, la tuberculosis, el pian, el tracoma y la lepra, se elevaron a cerca de 6 millones de dólares. Más de dos tercios de esta cifra se dedicaron a programas de erradicación del paludismo en lugares donde, debido sobre todo a problemas de financiación, organización y técnica, las campañas se habían prolongado mucho más de lo previsto. Algunos países, especialmente aquellos en que el paludismo había quedado reducido a un nivel bajo, empezaban a perder interés por la continuación de las campañas hasta el final, en vista de los cuantiosos desembolsos que ello requería. La Junta coincidió con el Comité Mixto en recomendar que tanto la OMS como el UNICEF hicieran uso de su influencia para reavivar, llegado el caso, el interés de los gobiernos. La Junta aprobó la conclusión del Comité Mixto de que, si un país dejaba de facilitar los fondos nacionales requeridos para llevar a cabo el programa de erradicación del paludismo, los organismos internacionales no tendrían justificación para continuar su asistencia.

Las consecuencias que para la infancia tiene la carrera entre el aumento demográfico y las existencias de alimentos, carrera que se está perdiendo en muchas partes del mundo, fueron causa de gran preocupación para la Junta en todas sus deliberaciones. En 1967 las asignaciones de ayuda a la nutrición ascendieron a 5 millones de dólares, lo que suponía solamente el 12,8% de todas las asignaciones del programa. Esta situación impartió especial urgencia al examen, por la Junta, de los mejores métodos que el UNICEF podría

emplear para actuar en la esfera de la nutrición. En este contexto la Junta examinó un informe sobre los progresos realizados en la elaboración de alimentos ricos en proteínas y una evaluación de la asistencia a la nutrición aplicada.

La Junta tomó nota de que la FAO, la OMS y el UNICEF llevaban varios años trabajando de consuno en la preparación de concentrados y mezclas ricos en proteínas que pudieran producirse localmente a bajo costo, sobre todo para niños destetados y niños en edad preescolar de las zonas urbanas y periurbanas. Recientemente los organismos habían participado en ciertos aspectos de la labor del Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo. Se necesitaban recursos mucho mayores, que podrían obtenerse si la Asamblea General adoptara medidas favorables basadas en la recomendación del Comité Asesor. La Junta decidió que en lo futuro el UNICEF dedicara mayor atención a la aceptabilidad local de las mezclas alimenticias y a la posibilidad de ampliar el mercado con objeto de determinar la viabilidad económica del proyecto antes de facilitar el equipo requerido para la producción local.

Más de dos tercios de las asignaciones hechas por el UNICEF en 1967 en la esfera de la nutrición se dedicaron a la nutrición aplicada orientada hacia la familia rural, especialmente las dietas de madres y niños, combinando la educación y la formación en materia de nutrición con la producción y consumo de diversos alimentos protectores. La Junta estudió una evaluación de la asistencia a la nutrición aplicada prestada conjuntamente por el UNICEF, la FAO y la OMS. Las principales conclusiones de tal evaluación, que primero fueron examinadas por el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria y por el Comité Mixto FAO/UNICEF de Normas, eran que las ideas básicas del programa eran válidas; que los proyectos habían creado una comprensión mucho mejor, en todas las esferas gubernamentales, de la naturaleza compleja y duradera de los problemas alimentarios y de nutrición, así como de las medidas requeridas para aliviarlos; que habían suscitado un vivo interés por las medidas de nutrición y un apoyo para estas medidas que antes no se observaba; que habían demostrado ser capaces de promover una acción nacional sostenida sobre problemas de nutrición y habían aumentado notablemente el número de personas que recibían formación y que ya trabajaban en la esfera de los alimentos y la nutrición. La Junta reconoció que se precisaba una mayor flexibilidad para que los proyectos se adaptaran con más precisión a las condiciones locales; que era necesario buscar nuevas formas de acción adaptadas a las condiciones urbanas; que debía concederse especial atención al objetivo de ayudar a los países a hacerse cargo de la labor y a ampliarla a medida que disminuyera la ayuda internacional; que debían realizarse intercambios de personal entre países para fines de formación; y que los organismos internacionales debían realizar un estudio por países de los proyectos no incluidos en la evaluación, empleando, siempre que fuera posible, la plantilla de personal existente.

Aunque el UNICEF, en colaboración con la UNESCO y la OIT, sólo comenzó a prestar asistencia a proyectos de enseñanza y formación profesional en 1961, dichos proyectos se habían convertido en una de las esferas principales de ayuda del UNICEF y su

importancia era superada únicamente por los servicios sanitarios básicos. En 1967 la ayuda facilitada en esos proyectos ascendió en total a 9.300.000 dólares, cantidad superior al doble de la aprobada en 1966, y representó el 23,9% de todas las asignaciones para el programa. Esto reflejó los grandes esfuerzos que los países en desarrollo realizaban para elevar el nivel de educación de sus pueblos, establecer una relación más estrecha entre la escuela y la vida y mejorar la eficacia de las actividades docentes. En la ayuda del UNICEF se dio máxima importancia a la formación de maestros y a la mejora de la inspección. A fines de 1966 unos 55.000 maestros, inspectores y otro personal docente habían recibido formación; esta cifra aumentaría considerablemente a medida que los proyectos entraran en pleno funcionamiento. Los proyectos ayudados por el UNICEF también reflejaron el interés de los países por dar más importancia a la enseñanza elemental de las ciencias en las escuelas primarias, a la enseñanza de especialidades prácticas y a la educación sanitaria y sobre nutrición. La aguda escasez de manuales de enseñanza, ayudas didácticas y libros de texto constituía un grave obstáculo al mejoramiento de la calidad de la enseñanza, lo cual en muchos países fue un factor importante de la elevada proporción de alumnos que abandonaron prematuramente la escuela. La ayuda del UNICEF para este elemento esencial de la enseñanza estaba elevándose; las asignaciones aprobadas en 1967 comprendían más de 3 millones de dólares para materiales pedagógicos, papel, tinta, asistencia editorial y de otra índole destinada a la producción local de manuales de enseñanza y libros de texto.

La Junta se mostró muy preocupada por la difícil situación de los niños que no asistían a la escuela: los que nunca han ido a la escuela o los que la han abandonado demasiado pronto para dejar de ser analfabetos. En muchos países estos niños constituían más de la mitad de la población en edad escolar, con una elevada proporción de casos en las zonas rurales con economía de subsistencia. Era evidente que este problema requeriría muchísima más atención por parte del UNICEF y otros organismos del sistema de las Naciones Unidas.

En 1957 la Junta asignó 2.100.000 dólares, o sea, el 5,3% de todas las asignaciones del programa, a la protección maternoinfantil. Se concedió mucha importancia a la formación de trabajadores de primera línea y de trabajadores auxiliares. Al mismo tiempo, la ayuda proporcionada a 17 escuelas de servicio social contribuía a formar personal superior y a determinar la índole de los servicios de asistencia social requeridos en función de las necesidades locales. Entre las tendencias recientes de los proyectos figuraba una mayor atención a las actividades de guarderías diurnas, incluidos los métodos experimentales de satisfacer las necesidades del niño de corta edad, el empleo de centros de la comunidad y la organización de clubes juveniles rurales y otras actividades al servicio de la juventud.

La Junta tuvo ante sí una evaluación preliminar de los resultados de las conferencias regionales sobre la planificación para la infancia y la juventud en el desarrollo nacional celebradas en América Latina en noviembre y diciembre de 1965 y en Asia en marzo de 1966. Ambas conferencias fueron patrocinadas por el UNICEF, las comisiones económicas regionales y los institutos de desarrollo, con la cooperación de las Na-

ciones Unidas y de los organismos especializados. Las actividades complementarias posteriores a las conferencias regionales habían revestido varias formas: formación, nuevos estudios, mejora de las estadísticas, consultas, conferencias nacionales y publicaciones. Se insistió mucho en las conferencias sobre la importancia de considerar los problemas de la infancia no sólo en función de aspectos tales como la salud, la nutrición y la enseñanza, sino también en relación con necesidades específicas de los niños de los diversos grupos socioeconómicos y las distintas zonas geográficas del país, así como sobre la organización de programas adaptados a esas necesidades y mutuamente complementarios y solidarios.

La Junta examinó los progresos logrados en la aplicación de los programas a los niños de 1 a 6 años. En algunos sitios se habían ampliado los servicios de guarderías diurnas; se procuraba atender a más niños de corta edad por medio de centros de higiene maternoinfantil, actividades de desarrollo de la comunidad y programas de nutrición aplicada, así como también mediante el desarrollo de la producción local de alimentos ricos en proteínas. Se reconoció en mayor medida la necesidad de elevar el nivel de los conocimientos sobre el niño de corta edad en la formación de trabajadores sanitarios y de nutrición, y de maestros de escuela. Al parecer, diversas conferencias recientes y seminarios internacionales estaban influyendo en la orientación de algunos administradores, planificadores y expertos respecto de las medidas que podrían adoptarse, dentro de los programas ordinarios de sanidad, nutrición, enseñanza y servicios sociales, para atender efectivamente al niño de corta edad, en particular la educación de la madre sobre la importancia decisiva de estas edades y sobre las medidas prácticas que puede adoptar para satisfacer las necesidades del niño. No obstante, la mejora de la situación del niño de corta edad era muy lenta y requería muchos más esfuerzos.

Un aspecto importante de casi todos los proyectos para los que el UNICEF facilitaba asistencia era la formación de personal dentro del país, lo que reflejaba la alta prioridad asignada por los gobiernos al refuerzo de los servicios nacionales de formación. A fines de 1966 el UNICEF había proporcionado equipo, pensiones de estudio y otras formas de ayuda para la capacitación de más de 220.000 trabajadores destinados a los programas de la infancia. En 1967 unos 11.300.000 dólares, o sea, el 29% de las asignaciones del programa se destinaron a la formación. Se concedió máxima importancia a la formación de trabajadores de categoría intermedia y auxiliar, pero también se prestó asistencia a la formación profesional de nivel superior cuando resultó necesario para proporcionar personal de dirección e inspección a fin de cumplir ciertos objetivos esenciales del programa.

La Junta reafirmó su convencimiento de que el grueso de los recursos del UNICEF debía dedicarse a programas de largo alcance. Reconoció al mismo tiempo que el UNICEF tenía la obligación de mantenerse alerta y de atender favorablemente a las necesidades de ayuda urgente. A fines de 1966 y principios de 1967 la Junta Ejecutiva aprobó en votación por correspondencia asignaciones por valor de 2.500.000 dólares destinadas a niños y madres afectados por la sequía en la India. En su período de sesiones de junio de 1967 la Junta pidió al Director Ejecutivo que estudiara

la forma en que podría hacerse llegar, con la colaboración de las instituciones de la Cruz Roja, la ayuda del UNICEF a las dos partes de Viet-Nam en situaciones de urgencia. La Junta tomó también medidas para proporcionar ayuda a los niños y madres víctimas de las operaciones militares del Oriente Medio. A tal fin, asignó 200.000 dólares a Jordania y autorizó al Director Ejecutivo para que, en caso necesario, hiciera desembolsos adicionales hasta 300.000 dólares en cualquier parte de esta región. Si la situación de urgencia lo justificara, el Director Ejecutivo podría presentar a la aprobación de la Junta, mediante votación por correspondencia, una nueva asignación que podría elevar la participación del UNICEF hasta 1 millón de dólares, aproximadamente, para ayuda de carácter urgente y quizá para el restablecimiento de servicios materno-infantiles esenciales en el Oriente Medio.

Las asignaciones aprobadas por la Junta en 1967 arrojaron un total de 50.400.000 dólares y las obligaciones un total de 55.900.000 dólares. Estas cifras, que representaban el máximo nivel desde el principio de la ayuda de carácter urgente del UNICEF, pudieron alcanzarse gracias a que se recurrió a ciertas reservas, en vista de que la Junta deseaba imprimir un ritmo más rápido al empleo de los fondos del UNICEF. En 1966 los ingresos del UNICEF ascendieron a 35.200.000 dólares. Más del 75% de esta cifra, o sea, 26.600.000 dólares, procedían de las contribuciones de 119 gobiernos; el 20%, aproximadamente (6.900.000 dólares), de contribuciones privadas y del producto de la venta de tarjetas de felicitación, y el resto de procedencias varias. Para 1967 y 1968 se calculaban aumentos de los ingresos de unos 5 millones de dólares anuales, incluidos algunos incrementos extraordinarios. Resultaba evidente que sólo podría mantenerse el nivel de 50 millones de dólares en las asignaciones si se contara con mayor apoyo financiero de fuentes oficiales y privadas y si a fines de 1969 se alcanzara el objetivo de 50 millones de dólares de ingresos anuales.

E. Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas

El segundo año de existencia del Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas se caracterizó por un crecimiento rápido y una actividad cada vez mayor. El interés por el Instituto ha aumentado y, aparte de que sus programas han tomado una forma más concreta, se ha hecho evidente que puede desempeñar un papel útil en la promoción de los objetivos de las Naciones Unidas dentro de sus principales esferas de actividad. En su 41º período de sesiones, celebrado en Ginebra del 5 de julio al 5 de agosto de 1966, el Consejo Económico y Social aprobó por unanimidad la resolución 1138 (XLI), en la cual acogió con satisfacción los progresos realizados hasta entonces por el Instituto en la organización y planificación de su labor, de conformidad con las decisiones de la Junta de Consejeros del Instituto. En la resolución el Consejo también expresó la esperanza de que las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas utilizarían al máximo, dentro de lo adecuado y factible, los medios de que disponía el Instituto y ayudarían a éste a poner en ejecución sus programas y actividades. En los debates del Consejo muchos oradores destacaron el papel que el Instituto podía des-

empeñar para realzar la eficacia de las Naciones Unidas. Con respecto a la formación profesional, varios representantes celebraron que ciertos programas de formación se hubiesen traspasado de la Secretaría de las Naciones Unidas al Instituto, así como los esfuerzos encaminados a evaluarlos y reorientarlos. Muchos representantes subrayaron que convenía que el UNITAR orientase las investigaciones hacia la acción relacionada con problemas concretos en distintas esferas. Las investigaciones del Instituto debían relacionarse con las necesidades básicas de la Secretaría de las Naciones Unidas y tener como objetivo principal la eficacia general de la Organización.

Durante su cuarto período de sesiones, celebrado en Nueva York del 14 al 15 de septiembre de 1966, la Junta de Consejeros, bajo la presidencia del Sr. Kenneth Younger (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), examinó el informe y las propuestas presentadas por el Director Ejecutivo, Sr. Gabriel d'Arboussier, respecto del programa de 1967. La Junta tuvo también a la vista las recomendaciones formuladas por la Comisión Administrativa y Financiera en su primer período de sesiones, celebrado en Nueva York del 22 al 23 de junio de 1966. Con arreglo a dichos informes, propuestas y recomendaciones, la Junta de Consejeros del Instituto expresó su satisfacción ante el programa de investigaciones, que constituía, a su juicio, un buen marco de trabajo, y felicitó al Director Ejecutivo y al Director de Investigaciones por su formulación. La Junta aprobó las consideraciones básicas, presentadas por el Director Ejecutivo, que determinaban el programa de investigaciones del UNITAR. Esas consideraciones quedaron reflejadas en la mayor importancia asignada a los estudios sobre la eficacia de la acción, de las técnicas y del mecanismo de las Naciones Unidas, y en la alta prioridad dada a las necesidades de los países en desarrollo, sobre todo en lo concerniente a problemas que requieren estudio y acción por parte de las Naciones Unidas. La Junta también tomó nota de que los proyectos de investigación se orientarían generalmente hacia lo futuro y responderían a la necesidad "de análisis, de evaluaciones y de planes de operaciones" que el Secretario General mencionara en su nota de febrero de 1964. La Junta, en su cuarto período de sesiones, afirmó asimismo que, al evaluar su función de órgano de investigación de las Naciones Unidas, el UNITAR debía no solamente tratar de colmar las lagunas que subsistían en el campo de la investigación y que los servicios y medios actuales de las Naciones Unidas no bastaban para subsanar, sino también estar dispuesto a emprender estudios en esferas de su elección comprendidas en su mandato.

Además, la Junta decidió que podrían introducirse modificaciones, durante la etapa de ejecución, en los principales campos de investigación y en los estudios concretos que éstos abarcaban, a la luz de los recursos de personal y de expertos, los recursos financieros y la evolución de las necesidades de las Naciones Unidas, así como de otros factores que influían en las posibilidades de realización. De conformidad con las consideraciones básicas que determinaban el programa de investigación del UNITAR, la Junta de Consejeros estimó que, si bien el Instituto podría emprender y dirigir los trabajos relativos a estudios concretos, también secundaría los esfuerzos que proyectaban emprender o que habrían emprendido otros órganos y organismos

de las Naciones Unidas en el campo de la investigación. El programa de investigaciones se había iniciado previa consulta con el Secretario General, quien aseguró que no se superponía a los trabajos que venía realizando ya la Secretaría de las Naciones Unidas. La Junta de Consejeros opinó que entre los métodos y procedimientos diversos mediante los cuales el UNITAR podría abordar su programa de investigación, la organización de seminarios y de simposios contribuiría notablemente a estimular las investigaciones futuras, creando una corriente de intercambio de conocimientos.

El programa de investigaciones del UNITAR incluye estudios que se centran en la estructura, los procesos y el funcionamiento de las Naciones Unidas. En esa esfera se han iniciado ya trabajos sobre los proyectos siguientes: las relaciones entre las Naciones Unidas y las organizaciones intergubernamentales regionales; la evaluación de las consecuencias de la ayuda técnica de las Naciones Unidas; la planificación, la programación y los sistemas presupuestarios relacionados con las actividades económicas y sociales en las Naciones Unidas; la experiencia acumulada por las Naciones Unidas en materia de plebiscitos y elecciones; la investigación del uso de la información pública relativa a las Naciones Unidas y a los problemas de éstas por los medios de información para las masas; los medios de conseguir una aceptación y una aplicación más amplias de los tratados multilaterales; y el estudio de los problemas comunes a los institutos de planificación, de formación y de investigación de las Naciones Unidas.

Varios otros proyectos de investigación tratan de los problemas con que se enfrentan los Estados Miembros, especialmente los que están en proceso de desarrollo y modernización. He aquí ejemplos de tales proyectos de investigación: situación y problemas de los Estados y territorios muy pequeños; estudio comparativo de las medidas adoptadas para luchar contra la discriminación racial; el "éxodo intelectual", o migración internacional de profesionales de los países en desarrollo a los países desarrollados; el traspaso de conocimientos técnicos mediante acuerdos entre empresas, con especial referencia a los países en desarrollo; y la investigación de nuevos métodos y técnicas de formación profesional.

En el informe que presentó a la Asamblea General en el vigésimo primer período de sesiones, el Director Ejecutivo examinó algunos de los métodos y técnicas de estudio que consideró apropiados para el programa de investigaciones. En ciertos temas el estudio por casos y el análisis histórico serán más apropiados. Para otros — o para complementar los métodos tradicionales — se proyecta recurrir a medios de investigación ideados en los últimos años, principalmente en las ciencias del comportamiento. Entre ellos figuran las técnicas especializadas de observación y medición del comportamiento social, económico y político; los conceptos y métodos nuevos de análisis funcional y estructural de organizaciones, los métodos de análisis del contenido, la elaboración de datos por computadoras, la localización de informaciones y el empleo de modelos. Al aplicar esos métodos, el UNITAR espera no sólo sacar partido de los últimos adelantos de los métodos científicos, sino también alentar a los centros de investigación ajenos a las Naciones Unidas a emprender estudios científicos más profundos sobre los problemas que interesan a la Organización.

En su declaración ante la Segunda Comisión, en el vigésimo primer período de sesiones de la Asamblea, el Director Ejecutivo del UNITAR destacó las relaciones existentes entre el programa de investigaciones y las tendencias y los acontecimientos no sólo dentro de las Naciones Unidas, sino también fuera de ellas. Además, dijo que las relaciones entre las dos funciones principales del Instituto — la formación y la investigación — eran orgánicas. Esas funciones se complementan mutuamente no sólo, por ejemplo, porque es preciso investigar los nuevos métodos y técnicas de formación, sino también porque es menester adaptar de continuo los tipos de formación que van surgiendo, puesto que, en el proceso de desarrollo, las necesidades cambian continuamente.

El Director General informó a la Junta de Consejeros, en su cuarto período de sesiones, sobre la continuación, con ciertas modificaciones, de los tres programas de formación que fueron transferidos de la Secretaría de las Naciones Unidas al UNITAR a principios de 1966: el programa de formación destinado a funcionarios de relaciones exteriores, el de formación por grupos en materia de técnicas y procedimientos de asistencia técnica, y el de formación en materia de financiación del desarrollo económico. Además, el Director Ejecutivo informó a la Junta de dos nuevos programas emprendidos por el Instituto en 1966: el seminario sobre los principales problemas relativos a la asistencia técnica de las Naciones Unidas y el programa de formación por grupos para representantes residentes adjuntos. La Junta de Consejeros celebró que el Director General hiciese hincapié, con motivo de la reorientación de los actuales programas de formación, en la regionalización progresiva de algunas de esas actividades, en la importancia de fomentar actividades de formación centralizadas a fin de responder a las necesidades de los funcionarios de categoría superior, y en la relación empírica entre la formación y el trabajo práctico.

Sobre la base de esas decisiones el Director General comunicó a la Asamblea General, en el vigésimo primer período de sesiones, que la reorientación a que se procedería en los "viejos" programas de formación tendía a establecer una distinción entre la formación y la enseñanza, a descentralizar una parte de la formación gracias a institutos regionales o seminarios, a colaborar con las instituciones de formación regionales y locales, a hacer hincapié en las necesidades de los altos funcionarios en materia de actividades de formación centralizadas, a hacer que el UNITAR estuviese en mejores condiciones de ayudar a otros organismos de las Naciones Unidas y a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales a organizar una formación que se armonizase con las necesidades de las Naciones Unidas, a utilizar otras modalidades de formación, como las mesas redondas, y a reducir los gastos que acarrearían para el Instituto esos programas de formación.

Los detalles de los cinco programas de formación del UNITAR que se organizaron en 1966 y continúan en 1967 son los siguientes: conforme al programa de formación para funcionarios de relaciones exteriores, organizado por primera vez en 1962, se dictan cursos en las materias que todos los funcionarios de esa clase deben conocer bien. Además, se ofrece la posibilidad de observar los trabajos de los órganos de las Nacio-

nes Unidas, de los organismos especializados y de ciertos ministerios de relaciones exteriores de la Europa oriental y occidental. A partir de 1967 el curso básico de formación se dictó en Ginebra y se eliminaron los viajes transatlánticos que se efectuaban en años anteriores. Desde 1962 hasta mediados de 1967, ciento veinticinco funcionarios de unos cuarenta países se han valido de ese programa. Además de dicho programa básico, el UNITAR organiza también cursos de nivel superior en esferas especializadas, tales como el derecho internacional, la economía internacional y las organizaciones internacionales, para un mayor número de altos funcionarios, en instituciones y universidades nacionales y regionales, por ejemplo los cursos de la Universidad de las Indias Occidentales y de Trinidad, los seminarios de Dar es Salaam patrocinados conjuntamente por las Naciones Unidas y la UNESCO, el seminario de Manila patrocinado por la Organización Regional Oriental de Administración Pública y los cursos de la Academia de Derecho Internacional de La Haya.

En virtud del programa de formación en materia de financiación del desarrollo económico, que tiene por objeto ayudar a los funcionarios de los países en desarrollo a profundizar sus conocimientos de la estructura y del funcionamiento de los organismos e instituciones públicos y privados que proporcionan ayuda financiera y capitales de inversión para el desarrollo, setenta y nueve funcionarios de cuarenta y dos países han recibido formación desde que el programa se inició en 1963.

El programa de formación por grupos en materia de técnicas y procedimientos de asistencia técnica, que empezó en 1963, tiene por objeto dar a los funcionarios de los países beneficiarios una mejor comprensión de la política, los principios y los procedimientos de la asistencia técnica de las Naciones Unidas. Esto contribuye a establecer relaciones de trabajo más eficaces y armoniosas entre el personal local del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el personal homólogo nacional. Un total de ciento cuarenta y seis funcionarios de unos ochenta países han aprovechado esa formación, que incluye visitas a la Sede de las Naciones Unidas y a las sedes de los organismos especializados. Asimismo, a cada participante se ofrece la oportunidad de visitar la comisión económica regional que funciona en el continente del que procede. El método de formación conforme a este programa se modificó en 1967 gracias a la introducción de un "Manual de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas" publicado por el UNITAR a principios de 1967 y distribuido entre los participantes antes de iniciarse el propio programa. Así se pudo prescindir de varias reuniones de información y sacar mayor partido del examen — de tipo parecido al de los seminarios — de problemas concretos de coordinación de la asistencia técnica en el plano nacional.

El Seminario del UNITAR sobre los principales problemas de la asistencia técnica de las Naciones Unidas, que empezó en 1966 y está financiado totalmente por el UNITAR, tiene por objeto hacer que la asistencia técnica de las Naciones Unidas sea más eficaz, al permitir que ambas partes — las Naciones Unidas y los gobiernos beneficiarios — comprendan mejor los problemas y las opiniones de aquéllas y de éstos.

El programa de formación por grupos para representantes residentes adjuntos, que el UNITAR inició

en 1966 en colaboración con el PNUD y con la participación financiera de este último, consiste en un estudio práctico intensivo de la labor del PNUD. Los cursos comprenden seminarios sobre los diversos aspectos de la planificación del desarrollo económico, que se organizan en la Sede y en ciertos centros académicos.

En su vigésimo primer período de sesiones la Asamblea General dio su aprobación unánime a los programas del UNITAR, que abarcan no sólo actividades de investigación y formación, sino también el primer programa de becas de perfeccionamiento instituido en memoria de Adlai E. Stevenson. En su resolución 2187 (XXI), de 13 de diciembre de 1966, la Asamblea, reconociendo la importancia de la función que puede desempeñar el UNITAR para ayudar a los miembros de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas por conducto de sus diversos programas y actividades, hizo suya la resolución 1138 (XLI) del Consejo Económico y Social, acogió con beneplácito los progresos realizados por el UNITAR y expresó el reconocimiento de la Asamblea a los gobiernos, las instituciones privadas y los particulares que habían aportado o habían prometido aportar contribuciones financieras para el Instituto. Asimismo, la Asamblea aprobó el 16 de diciembre de 1966 la resolución 2204 (XXI), la cual expresó su reconocimiento al UNITAR por las actividades que desarrollaba en la esfera del derecho internacional y expresó la esperanza de que continuase y, de ser posible, ampliase dichas actividades.

En el quinto período de sesiones de la Junta, celebrado en Nueva York los días 29 y 30 de marzo de 1967, el Sr. Kenneth Younger (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) fue reelegido Presidente y el Sr. C. D. Deshmukh (India) Vicepresidente, con un mandato de tres años que terminará el 14 de marzo de 1970, al mismo tiempo que el actual mandato de la Junta de Consejeros.

En relación con el mandato de la Junta de Consejeros, el Secretario General consultó a esta última sobre la posibilidad de enmendar el inciso a) del párrafo 1 del artículo III del estatuto del UNITAR a fin de que el mandato de los consejeros fuese de tres años en vez de dos. La Junta aceptó por unanimidad esta enmienda.

Hablando ante la Junta en el quinto período de sesiones, el Secretario General sugirió que convendría que el Instituto no perdiese de vista, al formular su programa de trabajo, las cuatro causas principales de tirantez internacional: las diferencias de ideología política, las disparidades en la situación económica, el colonialismo y sus secuelas, y las diferencias de raza y de color.

La Junta tuvo a la vista en su quinto período de sesiones no sólo el informe y las propuestas del Director General relativos a los programas actuales y probables de formación, investigación y otras actividades, sino también las recomendaciones formuladas por su Comisión Administrativa y Financiera, que celebró su segunda reunión en Nueva York, el 3 de enero de 1967.

El Director Ejecutivo informó a la Junta de sus planes encaminados a modificar nuevamente en 1968 la forma del programa de formación de funcionarios de relaciones exteriores y el programa de formación por grupos en materia de técnicas y procedimientos de asistencia técnica. El Director Ejecutivo, en consulta con los ministros de relaciones exteriores de los Estados

Miembros, la Secretaría de las Naciones Unidas, el PNUD, los secretarios ejecutivos de las comisiones económicas regionales y los directores de los institutos de planificación del desarrollo regional, está haciendo preparativos para esos dos programas de formación, destinados a funcionarios nacionales de categoría inferior y a funcionarios nacionales que trabajan a nivel operacional, programas que se realizarán en centros regionales.

La Junta también tomó nota de que el Director Ejecutivo había procedido a organizar un curso de formación especial en materia de trabajo en comisión, coordinación de conferencias y documentación para los funcionarios de la Organización de la Unidad Africana; el curso fue dictado en el primer semestre de 1967 por los Servicios de Conferencias y otras dependencias de la Secretaría de las Naciones Unidas. En cuanto a la formación de personal del sistema de las Naciones Unidas, el Director Ejecutivo informó a la Junta de que se había examinado la formulación, en consulta con la Oficina de Personal de las Naciones Unidas, de propuestas destinadas a la Junta acerca de la índole y el alcance de la contribución del Instituto a la formación del personal de las Naciones Unidas. Además, el UNITAR tomó la iniciativa de dirigirse a los jefes de todos los organismos y organizaciones de las Naciones Unidas con miras a una posible colaboración en materia de formación de personal y de posibilidades de carrera en todo el sistema de las Naciones Unidas. En consecuencia en las reuniones de marzo de 1967 del Comité Consultivo en Asuntos Administrativos (CCAA) se acordó organizar, en colaboración con el UNITAR, un grupo de trabajo, compuesto de representantes de todos los organismos participantes, que se encargaría de estudiar la situación actual y considerar las posibilidades de evolución. Esta reunión se realizará en Ginebra en colaboración con la secretaría del CCAA.

La Junta de Consejeros aprobó todas esas medidas, así como las propuestas del Director Ejecutivo encaminadas a organizar, en un plazo superior, un grupo de estudio que se compondría de representantes de los Estados Miembros en las Naciones Unidas y que examinaría ciertos problemas internacionales, junto con la organización de un seminario destinado a permitir que los instructores actualmente encargados de la enseñanza de idiomas en la Secretaría se pongan al corriente de los progresos registrados recientemente en esa materia. Esta última actividad se iniciará en septiembre de 1967. Además, la Junta insistió en que era preciso estudiar las necesidades y los métodos en materia de formación. El programa de investigaciones del UNITAR incluye un proyecto sobre los nuevos métodos y técnicas en dicha materia.

En cuanto a las actividades del UNITAR en materia de investigación, el Director Ejecutivo informó a la Junta de Consejeros, en el quinto período de sesiones, sobre los progresos registrados en el programa. El informe versó sobre la colaboración con las organizaciones académicas y de investigación de diversas partes del mundo. Dentro de las Naciones Unidas el Instituto cooperó estrechamente con las dependencias interesadas de la Secretaría y con el PNUD. El Director Ejecutivo destacó la utilidad de los estudios del Instituto sobre la estructura, los procesos y el funcionamiento de la Organización, como esfera de estudio

relativamente descuidada por las instituciones académicas y los órganos nacionales de investigación. Al elegir sus estudios sobre la modernización, el Instituto optó por los aspectos de la cuestión que no habían sido tratados por los órganos especializados, tanto en las Naciones Unidas como fuera de ellas. En varias esferas los órganos especializados se ocupan de investigaciones técnicas, científicas o económicas, pero dejan de lado los problemas institucionales, jurídicos o de procedimiento propios del progreso tecnológico.

El Director Ejecutivo informó también de las limitaciones y los obstáculos con que tropieza el programa de investigaciones. Los aspectos más difíciles eran la obtención de universitarios calificados o con dotes inventivas y la limitación de los recursos financieros. El presupuesto actual obliga a limitar los proyectos de investigación principalmente a "estudios de oficina". Para ciertos proyectos, el trabajo exige estudios sobre el terreno y la reunión y elaboración de datos en gran escala. Es preciso, pues, hallar apoyo de otra índole para ciertos proyectos, bien gracias a una subvención especial de los gobiernos o de fuentes privadas, tales como el apoyo financiero que la Fundación Volkswagenwerk presta al estudio comparativo de las medidas contra la discriminación racial, bien asegurando la colaboración de las instituciones nacionales en los países que sean objeto del estudio. En ciertos casos, el UNITAR tendrá interés en reunir grupos y simposios a fin de abrir nuevas vías a la investigación y organizar encuentros entre especialistas y altos funcionarios para cambiar opiniones. La participación activa en el UNITAR de altos funcionarios internacionales garantizará cierto realismo y pragmatismo, al paso que la colaboración entre especialistas y administradores de diversas disciplinas promete nuevos enfoques de muchos problemas de las Naciones Unidas.

La Junta dio su apoyo general al programa de investigaciones reconociendo que la cuestión del papel y las funciones de las Naciones Unidas estaba también ligada al segundo polo del programa, a saber, el proceso de desarrollo y modernización en el mundo entero. La Junta aprobó las propuestas del Director Ejecutivo relativas a los futuros trabajos de investigación sobre los problemas de cooperación y de reglamentación internacionales propios de los progresos rápidos de la ciencia y de la tecnología. La Junta aprobó el proyecto del Director Ejecutivo relativo a la aplicación, a los organismos de las Naciones Unidas, de las técnicas de recuperación de informaciones y elaboración de datos que implican el empleo de computadoras para la documentación de las Naciones Unidas. La Junta aprobó también la creación de un comité de investigación que estará compuesto por seis miembros de la Junta.

En enero de 1967 el UNITAR empezó a aplicar su primer programa de becas Adlai E. Stevenson, para el cual el Gobierno de los Estados Unidos aportó 100.000 dólares. Se eligieron nueve jóvenes de ambos sexos de los países siguientes: Argentina, Bolivia, Estados Unidos de América, Italia, Kuwait, Liberia, República Unida de Tanzania, Tailandia y Yugoslavia. Las becas, de un monto de cerca de 10.000 dólares y con una duración de diez meses, fueron otorgadas por un comité de selección constituido por el Director Ejecutivo. Los becarios están ahora ejecutando tareas diversas comprendidas en el marco de los programas del Instituto y correspondientes a sus respectivas esferas de interés en el plano académico y profesional.

El Instituto espera que se amplíe la base del apoyo financiero prestado a ese programa de becas gracias a contribuciones de diversas fuentes oficiales y privadas. Además, el Director Ejecutivo se propone diversificar las actividades del programa de becas añadiéndole, siempre que sea posible, otros tipos de becas conforme al estatuto del UNITAR.

En su cuarto período de sesiones la Junta de Consejeros aprobó el proyecto de presupuesto para el ejercicio de 1967 preparado por el Director Ejecutivo y fijó su cuantía en 1.216.300 dólares. Después, en su quinto período de sesiones, la Junta tomó nota de que las estimaciones habían sido reducidas de 1.216.300 dólares a 1.209.000 dólares. Sin embargo, posteriormente accedió a aumentar las estimaciones de 1.209.000 a 1.227.000 dólares en total, para cubrir los gastos de la reunión en Ginebra, en julio de 1967, de la Comisión de Investigación de la Junta y la celebración de un nuevo período de sesiones de la Junta en Nueva York en octubre de 1967. El UNITAR también recibe unos 200.000 dólares con cargo a fondos suplementarios procedentes principalmente de las Naciones Unidas y del PNUD.

Al 15 de junio de 1967 el UNITAR contaba en total con veintiséis funcionarios y consultores del cuadro orgánico, asistidos por veintidós oficiales del cuadro de servicios generales. Esos funcionarios están especializados en diversas disciplinas y poseen una experiencia variada, y han sido trasladados de la Secretaría de las Naciones Unidas o son titulares de contrato a plazo fijo o de contratos a corto plazo correspondientes a la duración de proyectos determinados. Los funcionarios del Instituto y los consultores ejecutan tareas muy variadas, por el hecho de que pueden, en ciertos casos, pasar de un servicio a otro gracias a la flexibilidad del aparato administrativo. Los nombramientos ordinarios del cuadro orgánico cuya duración pasa en total de un año de servicio se someten a examen de la Junta de Nombramientos y Ascensos del UNITAR, que hace recomendaciones al Director Ejecutivo. Esa Junta está compuesta de altos funcionarios de la Secretaría de las Naciones Unidas.

Para costear sus gastos, el Instituto cuenta con las contribuciones voluntarias de fuentes oficiales y privadas. Desde diciembre de 1963, fecha en que el Secretario General lanzó su primer llamamiento de recaudación de fondos, hasta el final del período examinado, las promesas de contribuciones de todas las fuentes ascendieron en total a 3.794.204 dólares, de los cuales 2.077.071 han sido ya abonados al UNITAR. Sin embargo, el Instituto necesitará más asistencia financiera, así como nuevos pagos con cargo a las cantidades ya prometidas, a fin de que pueda ejecutar sus programas actuales de la manera más eficaz posible, ampliar el alcance de sus actividades y planificar sobre una base sólida para el porvenir. La Junta de Consejeros, teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas por la Comisión Administrativa y Financiera en su segunda reunión, pidió que el Director Ejecutivo intensificase las solicitudes de fondos en favor del UNITAR. A este respecto, la Junta sugirió distintos modos de aumentar los recursos financieros del Instituto, incluso anuncios de contribución y de pagos para determinados proyectos previstos en el programa aprobado del Instituto.

Al tratar de la aplicación del programa ya se ha hecho referencia a las relaciones que el Instituto man-

tiene con organismos e instituciones de las Naciones Unidas o ajenos a ellas. Por otra parte, dos organismos especializados, uno de los cuales debe ser la OIT o la UNESCO, están representados oficialmente en la Junta de Consejeros. Además, en respuesta a una invitación del Secretario General, en calidad de Presidente del Comité Administrativo de Coordinación, los directores de nueve institutos de planificación, formación e investigación de las Naciones Unidas celebraron su primera reunión anual en Ginebra, en julio de 1966, bajo la presidencia del Director Ejecutivo del UNITAR. En esas reuniones anuales de los directores, a las cuales el UNITAR presta servicios de secretaría, se examinan cuestiones institucionales, constitucionales y operacionales, y se estudian las posibilidades de emprender actividades de colaboración. A dichas reuniones concurren representantes principales del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Oficina del Subsecretario de Asuntos entre Organismos.

F. Programa Mundial de Alimentos

El Programa Mundial de Alimentos continúa ampliando sus actividades en las cuales utiliza la ayuda alimentaria como inversión en favor del desarrollo económico y social. El Programa, que está dirigido por el Comité Intergubernamental ONU/FAO y presidido por un Director Ejecutivo que informa al Secretario General de las Naciones Unidas y al Director General de la FAO, siguió intensificando sus esfuerzos para coordinar sus proyectos con los de otros programas de ayuda bilateral o multilateral y con los de las comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas.

Se recordará que los recursos que se pusieron a disposición del Programa en su segundo período de promesas de contribuciones (1966-1968) fueron inferiores en 275 millones de dólares al objetivo fijado. La cantidad registrada anteriormente fue de 153 millones de dólares, constituidos por 101 millones de dólares en productos y 52 millones de dólares en efectivo y servicios; desde entonces, con los nuevos recursos prometidos al Programa, el total ascendió a 167.200.000 dólares, a saber: 109.900.000 dólares en productos y 57.300.000 dólares en efectivo y servicios.

Irlanda, el Paquistán, la República Árabe Unida y Suecia, países elegidos por el Consejo Económico y Social para integrar el Comité Intergubernamental durante un año, fueron reelegidos por un nuevo período de tres años. Al vencer el período de un año de Colombia, Jamaica, Nigeria y los Países Bajos, el Consejo de la FAO eligió a Colombia, Nigeria, los Países Bajos y la República de Corea para integrar el Comité Intergubernamental por un período de tres años.

Con el patrocinio conjunto de las Naciones Unidas y del Programa Mundial de Alimentos, se realizó un seminario en Bogotá (Colombia) en diciembre de 1966. Treinta y ocho delegados gubernamentales y ocho administradores de proyectos de dicho Programa procedentes de Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Jamaica, México, Paraguay, Perú y Surinam, deliberaron provechosamente sobre las distintas fases de las operaciones del Programa. Asistieron al seminario funcionarios de las Naciones Unidas y del Pro-

grama Mundial de Alimentos, así como observadores del PNUD, la OIT, la OMS, la FAO, la UNESCO, la United States Agency for International Development y de organizaciones no gubernamentales interesadas.

En el año transcurrido el Comité Intergubernamental celebró dos períodos de sesiones. En su décimo período de sesiones, celebrado en Roma en octubre de 1966, el Comité aprobó ocho proyectos nuevos que suponen un gasto total de 16.600.000 dólares para el Programa Mundial de Alimentos. En su 11° período de sesiones, celebrado en Roma en abril de 1967, el Comité aprobó doce proyectos nuevos que suponen gastos de 30.500.000 dólares para el Programa. Durante ese período el Director Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, en virtud de los poderes en él delegados, aprobó otros 45 proyectos, por valor de 15.800.000 dólares. El costo total de los proyectos

aprobados durante el período asciende, pues, a 62.900.000 dólares. De ese total global, 37 proyectos, con un importe de 24.100.000 dólares, se refieren a esferas de actividad que merecen sumo interés a las Naciones Unidas.

Se han tomado también medidas para acelerar la firma de acuerdos sobre proyectos aprobados del Programa Mundial de Alimentos. Así, pues, durante el período examinado, se han firmado con los gobiernos beneficiarios acuerdos relativos a 64 proyectos, por valor de 89.100.000 dólares. Esa cifra incluye también algunos de los proyectos que se habían aprobado antes del período estudiado.

En su 11° período de sesiones el Comité Intergubernamental también examinó y aprobó un nuevo objetivo de 175 millones de dólares para las promesas de contribuciones correspondientes al período 1966-1970.

REFERENCIAS

A. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Véase el informe del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre sus períodos de sesiones segundo y tercero en *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social*, 42° período de sesiones, Suplemento No. 11A (E/4219); e *ibid.*, 43° período de sesiones, Suplemento No. 6 (E/4297).

Véanse otros documentos pertinentes en *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social*, 41° período de sesiones, Anexos, tema 14 del programa; y *Documentos Oficiales de la Asamblea General*, vigésimo primer período de sesiones, Anexos, tema 49 del programa.

B. Actividades operacionales de las Naciones Unidas

Véase el informe del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre sus períodos de sesiones segundo y tercero en *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social*, 41° período de sesiones, Suplemento No. 11A (E/4219); e *ibid.*, 43° período de sesiones, Suplemento No. 6 (E/4297).

Véanse otros documentos pertinentes en DP/RP/2 y DP/RP/3 y adiciones.

C. Evaluación de los programas

Véanse los documentos relativos a esta cuestión y la lista de las actas pertinentes en los *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social*, 41° período de sesiones, Anexos, tema 15 del programa.

Véanse otros documentos pertinentes en E/4312 y E/4337 y Add.1.

D. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Véase el informe de la Junta Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (12 a 20 de junio de 1967) en *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social*, 43° período de sesiones, Suplemento No. 8 (E/4403).

Véanse otros documentos pertinentes y la lista de las correspondientes actas en *Documentos Oficiales de la Asamblea General*, vigésimo primer período de sesiones, Anexos, temas 12 y 72 del programa.

E. Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas

Véanse los documentos pertinentes y la lista de las correspondientes actas en *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social*, 41° período de sesiones, Anexos, tema 28 del programa; y *Documentos Oficiales de la Asamblea General*, vigésimo primer período de sesiones, Anexos, temas 48 y 86 del programa.

Véase el informe del Director Ejecutivo al Consejo Económico y Social en su 43° período de sesiones en el documento E/4356.

F. Programa Mundial de Alimentos

Véanse los documentos pertinentes y la lista de las correspondientes actas en *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social*, 41° período de sesiones, Anexos, tema 16 del programa; y *Documentos Oficiales de la Asamblea General*, vigésimo primer período de sesiones, Anexos, tema 50 del programa.

CAPITULO XIII

Asuntos jurídicos

A. Corte Internacional de Justicia

COMPETENCIA DE LA CORTE

Aceptación de la jurisdicción obligatoria

Desde la presentación de la última memoria anual, tres Estados han depositado nuevas declaraciones por las que reconocen como obligatoria la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con el párrafo 2 del Artículo 36 del Estatuto de la misma; se ha retirado y anulado una declaración; y ha expirado y no se ha renovado una declaración.

Por declaración de fecha 14 de junio de 1966, recibida el 22 de junio de 1966 para su depósito por el Secretario General, el Gobierno de Gambia reconoció como obligatoria la jurisdicción de la Corte, con sujeción a ciertas reservas.

Por declaración de fecha 29 de noviembre de 1966, recibida el 6 de diciembre de 1966 para su depósito por el Secretario General, el Gobierno de Malta reconoció como obligatoria la jurisdicción de la Corte, con sujeción a ciertas reservas.

Por declaración de fecha 22 de noviembre de 1966, recibida el 12 de diciembre de 1966 para su depósito por el Secretario General, el Gobierno de Malawi reconoció como obligatoria la jurisdicción de la Corte con sujeción a ciertas reservas.

Por carta de fecha 12 de abril de 1967 dirigida al Secretario General, el Gobierno de Sudáfrica notificó que retiraba y anulaba con aquella misma fecha la declaración de Sudáfrica.

Durante el período que se examina, la declaración de Turquía expiró por haber terminado su plazo de validez, y no ha sido renovada.

Nuevas partes en el Estatuto de la Corte

En el período que se examina, los cuatro Estados admitidos como Miembros de las Naciones Unidas, a saber, Barbados, Botswana, Guyana y Lesotho, pasaron *ipso facto* a ser partes en el Estatuto de la Corte de conformidad con el Artículo 93 de la Carta.

Instrumentos que confieren competencia a la Corte

Los siguientes tratados y otros instrumentos registrados en la Secretaría de las Naciones Unidas contienen cláusulas que confieren competencia a la Corte Internacional de Justicia en ciertos casos:

Convenio consular entre el Reino Unido y España (firmado en Madrid el 30 de mayo de 1961);

Acuerdo entre Suiza y Liberia para el establecimiento y funcionamiento de servicios aéreos entre sus respectivos territorios y más allá de ellos (firmado en Monrovia el 31 de agosto de 1961);

Convenio consular entre el Reino Unido y Dinamarca (firmado en Copenhague el 27 de junio de 1962);

Convenio consular entre el Reino Unido y el Japón (firmado en Tokio el 4 de mayo de 1964).

Competencia de la Corte en materia consultiva

Desde la presentación de la última memoria anual, la Asamblea General no ha autorizado ninguna nueva solicitud de opinión consultiva de la Corte.

ASUNTOS PLANTEADOS ANTE LA CORTE

Asuntos relativos al Africa Sudoccidental (Etiopía-Sudáfrica; Liberia-Sudáfrica)

El 18 de julio de 1966, la Corte Internacional de Justicia pronunció su fallo en la segunda fase de los asuntos relativos al Africa Sudoccidental (Etiopía-Sudáfrica; Liberia-Sudáfrica).

Estos asuntos, que se refieren a la continuación del Mandato del Africa Sudoccidental y a los deberes y la actuación de Sudáfrica como Potencia mandataria, fueron promovidos mediante solicitudes de los Gobiernos de Etiopía y de Liberia presentadas en el registro el 4 de noviembre de 1960. En virtud de una providencia de 20 de mayo de 1961, la Corte unió los procedimientos de los dos asuntos. El Gobierno de Sudáfrica formuló excepciones preliminares a la competencia de la Corte para conocer del fondo del asunto, pero la Corte desestimó esas excepciones el 21 de diciembre de 1962 y acordó que era competente para conocer del fondo de la controversia.

En el fallo que pronunció en la segunda fase, la Corte recordó que los demandantes, actuando como Estados que habían sido Miembros de la antigua Sociedad de las Naciones, habían formulado diversas alegaciones de infracciones del Mandato de la Sociedad de las Naciones para el Africa Sudoccidental por parte de la República de Sudáfrica.

Los argumentos de los litigantes habían abarcado, entre otras, las cuestiones siguientes: si el Mandato del Africa Sudoccidental estaba aún en vigor y, en caso afirmativo, si la obligación de la Potencia mandataria de presentar informes anuales sobre su administración al Consejo de la Sociedad de las Naciones se había transformado en una obligación de informar igualmente a la Asamblea General de las Naciones Unidas; si, de conformidad con el Mandato, la parte demandada había fomentado al máximo el bienestar material y moral y el

progreso social de los habitantes del territorio; si la Potencia mandataria había infringido la prohibición, estipulada en el Mandato, referente a la "instrucción militar de los indígenas" y al establecimiento de bases militares o navales o a la construcción de fortificaciones en el territorio; y si Sudáfrica había infringido lo estipulado en el Mandato en el sentido de que éste sólo podía modificarse con el consentimiento del Consejo de la Sociedad de las Naciones, al tratar de modificar el Mandato sin el consentimiento de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual, según afirmaban los demandantes, había sustituido al Consejo de la Sociedad para ese y otros fines.

Sin embargo, antes de examinar estas cuestiones, la Corte consideró que había dos cuestiones de carácter previo, concernientes al fondo del asunto, que podrían hacer innecesaria la investigación de otros aspectos del mismo. Una de las cuestiones consistía en determinar si el Mandato subsistía aún en modo alguno, y la otra era la cuestión de la posición de los demandantes en esta fase de los procedimientos, es decir, su derecho o interés jurídico en relación con la cuestión objeto de sus demandas. Como la Corte basó su fallo en la conclusión de que los demandantes no poseían ese derecho o interés jurídico, no se pronunció sobre la cuestión de si el Mandato estaba aún en vigor. Además, la Corte subrayó que su decisión de 1962 acerca de la cuestión de la competencia se había adoptado sin afectar a la cuestión de la supervivencia del Mandato, cuestión que formaba parte del fondo del asunto, y que no se había tratado en 1962 excepto en el sentido de que debía suponerse la supervivencia con objeto de determinar la cuestión puramente jurisdiccional, que era la única que la Corte tenía entonces ante sí.

Refiriéndose a la base de su decisión en los procedimientos actuales, la Corte recordó que el sistema de mandatos se había instituido en virtud del Artículo 22 del Pacto de la Sociedad de las Naciones. Había tres categorías de mandatos, "A", "B" y "C", aunque éstos tenían diversos aspectos comunes en lo referente a su estructura. El elemento principal de cada instrumento de mandato consistía en los artículos que definían los poderes de la Potencia mandataria y sus obligaciones con respecto a los habitantes del territorio y a la Sociedad y sus órganos. La Corte calificó a estas normas de disposiciones de "administración". Además, cada instrumento de mandato contenía artículos que conferían ciertos derechos relativos al territorio bajo mandato directamente a los Miembros de la Sociedad como Estados considerados separadamente, o a sus súbditos. La Corte se refirió a los derechos de este tipo como "intereses especiales", comprendidos en las disposiciones de los mandatos relativos a los "intereses especiales".

Además, en cada mandato figuraba una cláusula jurisdiccional, que, con una sola excepción, estaba formulada en términos idénticos y disponía que se sometiesen las controversias a la Corte Permanente de Justicia Internacional y que, según determinó la Corte en la primera fase de los procedimientos, debía entenderse ahora, en virtud del Artículo 37 del Estatuto de la Corte, en el sentido de que las controversias debían someterse a la Corte actual.

La Corte estableció una distinción entre las disposiciones de los mandatos relativas a la "administración" y las referentes a los "intereses especiales". Como la controversia actual se refería exclusivamente a las primeras, la cuestión que había que decidir consistía en

determinar si los Miembros de la Sociedad de las Naciones estaban investidos individualmente de algún derecho o interés jurídico en relación con las cláusulas sobre "administración" de los mandatos, es decir, si los diversos mandatarios tenían alguna obligación directa con respecto a los otros Miembros de la Sociedad considerados individualmente, en lo tocante a la ejecución de las disposiciones sobre "administración" de los mandatos. Si se respondía que no se podía considerar que los demandantes poseyesen el derecho o interés jurídico alegado, entonces, aun cuando quedasen demostradas las diversas alegaciones de infracciones del Mandato del Africa Sudoccidental, los demandantes seguirían sin tener derecho a los pronunciamientos y declaraciones que, en sus demandas finales, pedían a la Corte que hiciera.

Los demandantes comparecían ante la Corte en su capacidad de antiguos Miembros de la Sociedad de las Naciones; y los derechos que alegaban eran aquellos de los que se decía que habían sido investidos los Miembros de la Sociedad en los tiempos de la misma. Por consiguiente, para determinar los derechos y obligaciones de las partes en relación con el Mandato, la Corte tenía que colocarse en el tiempo en que se implantó el sistema de mandatos. Cualquier investigación de los derechos y obligaciones de las partes debía desarrollarse principalmente basándose en el examen de los textos de los instrumentos y disposiciones dentro de la circunstancia de su época.

Análogamente, debía prestarse atención al carácter y estructura jurídicos de la institución en cuyo marco se organizó el sistema de mandatos, es decir, de la Sociedad de las Naciones. Un elemento fundamental era que el Artículo 2 del Pacto estipulaba que "la acción de la Sociedad, tal como queda definida en el presente Pacto, se ejercerá por una Asamblea y por un Consejo auxiliados por una Secretaría permanente". Los Estados Miembros no podían actual individualmente de un modo diferente en relación con los asuntos de la Sociedad a menos que se dispusiese especialmente de otro modo en algún artículo del Pacto.

En el Artículo 22 del Pacto se especificaba que "el mejor método para realizar prácticamente (el) principio" de que "el bienestar y el desenvolvimiento" de los pueblos de las antiguas colonias del enemigo "aún no capacitados para dirigirse por sí mismos" constituía "una misión sagrada de civilización" sería el de "confiar la tutela de dichos pueblos a las naciones más adelantadas, que... consientan en aceptarla", y añadía específicamente que "estas naciones ejercerán la tutela en calidad de mandatarias y en nombre de la Sociedad". Los mandatarios habían de ser agentes de la Sociedad y no de cada uno de los miembros de la misma individualmente.

El Artículo 22 del Pacto estipulaba que convenía "incorporar al presente Pacto garantías para el cumplimiento" de la misión sagrada. En virtud de los párrafos 7 y 9 del Artículo 22, cada mandatario debería "enviar al Consejo una memoria anual concerniente al territorio"; y una comisión permanente de los mandatos estaría encargada de "recibir y examinar" estas memorias anuales y de "dar al Consejo su opinión acerca de las cuestiones relativas al cumplimiento de los mandatos". Además, se estipulaba en los propios instrumentos de mandato que las memorias anuales deberían enviarse "a satisfacción del Consejo".

Cada uno de los Estados Miembros de la Sociedad sólo podía participar en el proceso administrativo me-

dante su participación en las actividades de los órganos por cuya mediación estaba autorizada a funcionar la Sociedad. No tenían ningún derecho de intervención directa en relación con los mandatarios: esta prerrogativa correspondía a los órganos de la Sociedad.

La forma en que se redactaron los instrumentos de mandato no hizo más que subrayar la opinión de que no se consideraba que los Miembros de la Sociedad en general tuviesen ninguna relación directa con el establecimiento de los diversos mandatos. Además, aunque se necesitaba el consentimiento del Consejo de la Sociedad para cualquier modificación de las cláusulas del mandato, no se especificó que se necesitase además el consentimiento de Miembros individuales de la Sociedad. Los distintos Miembros de la Sociedad no eran partes en los diversos instrumentos de mandato, aunque éstos si les investían de derechos hasta cierto punto y en ciertos aspectos solamente. Sólo podían obtener de los instrumentos los derechos que los mismos les confiesen inequívocamente.

Si los diferentes Miembros de la Sociedad hubiesen poseído los derechos que los demandantes afirmaban que habían tenido, habría sido insostenible la situación de un mandatario cercado por las diferentes expresiones de opinión de unos cuarenta o cincuenta Estados. Además, la Sociedad tenía como regla normal de votación la unanimidad, y como el mandatario era miembro del Consejo en las cuestiones que afectaban a su mandato, esas cuestiones no podían decidirse con el voto en contra del mandatario. Este sistema no coincidía con la situación que los demandantes reclamaban para los distintos Miembros de la Sociedad, y si, como Miembros de la Sociedad, no poseían los derechos alegados, no los poseían en la actualidad.

Se había intentado deducir un derecho o interés jurídico en la administración del Mandato de la simple existencia, o principio, de la "misión sagrada". Se había dicho que la misión sagrada era una "misión sagrada de civilización" y que por lo tanto todas las naciones civilizadas estaban interesadas en que se llevase a cabo. Pero, a fin de que este interés pudiese adoptar un carácter específicamente jurídico, la propia misión sagrada tenía que ser o llegar a ser algo más que un ideal moral o humanitario. Para generar derechos y obligaciones jurídicas, debía dársele expresión jurídica y enmarcarlo en una forma jurídica. El ideal moral no debía confundirse con las reglas jurídicas destinadas a ponerlo en práctica. El principio de la "misión sagrada" no tenía ningún contenido jurídico residual que, en lo que afectase a cualquier mandato determinado, pudiese operar *per se* para originar derechos y obligaciones jurídicas fuera del sistema en su conjunto.

La Corte tampoco podía aceptar la sugerencia de que, aun en el caso de que la situación jurídica de los demandantes y de otros miembros de la Sociedad fuera la que sostenía la Corte, esto era así solamente durante la existencia de la Sociedad, y que, al disolverse ésta, los derechos que correspondían previamente a la propia Sociedad o a sus órganos competentes pasaron a los diferentes Estados que eran Miembros de la misma en la fecha de su disolución. Aunque la Corte había sostenido en 1962 que podía considerarse que los miembros de una organización internacional disuelta, aunque ya no fuesen miembros de ella, conservaban derechos que, como miembros, habían poseído individualmente cuando la organización existía, esto no se puede ampliar para adjudicarles, al ocurrir la disolución y con motivo de la

misma, derechos que nunca habían poseído individualmente, ni siquiera anteriormente en su calidad de miembros. Y cualquier cosa que hubiese ocurrido después de la disolución de la Sociedad tampoco podía investir a los Miembros de la misma de derechos que no poseían previamente como Miembros de la Sociedad. La Corte no podía interpretar las declaraciones unilaterales, o declaraciones de intención, formuladas por los diversos mandatarios con motivo de la disolución de la Sociedad, expresando su voluntad de seguir guiándose por los mandatos en su administración de los territorios pertinentes, en el sentido de que concedían individualmente a los Miembros de la Sociedad cualesquiera nuevos derechos o intereses jurídicos de un tipo que no poseían anteriormente.

Cabría decir que la opinión de la Corte, en cuanto conducía a la conclusión de que no había actualmente ninguna entidad capacitada para exigir la debida ejecución del Mandato, tenía que ser inaceptable, pero si la correcta interpretación jurídica de una situación determinada mostraba la inexistencia de ciertos derechos alegados, debían aceptarse las consecuencias de esto. Pretender la existencia de esos derechos para evitar tales consecuencias equivaldría a emprender una labor fundamentalmente legislativa, al servicio de fines políticos.

Refiriéndome a la alegación de que el derecho o interés jurídico de los demandantes había quedado establecido por el fallo de 1962 y no podía discutirse de nuevo en la actualidad, la Corte señaló que una decisión sobre una excepción preliminar nunca podría excluir una cuestión perteneciente al fondo, tanto si se la había examinado efectivamente en relación con la excepción preliminar como si no se la había examinado. Cuando la parte demandada en un asunto oponía excepciones preliminares, se suspendían los procedimientos sobre el fondo del asunto en virtud del párrafo 3 del Artículo 62 del Reglamento de la Corte. Desde entonces, y hasta que se reanudase el examen del fondo del asunto, no podía adoptarse ninguna decisión que determinase o juzgase definitivamente cualquier aspecto del fondo del asunto. Un fallo sobre una excepción preliminar podía afectar a un aspecto del fondo del asunto, pero esto sólo podía hacerlo de un modo provisional, en la medida necesaria para decidir la cuestión planteada por la excepción preliminar. No podía considerarse como una decisión definitiva sobre el aspecto pertinente del fondo del asunto.

Aunque el fallo de 1962 decidió que los demandantes tenían derecho a invocar la cláusula jurisdiccional del Mandato, les faltaba demostrar, en cuanto al fondo del asunto, que tenían un derecho o interés tal en la ejecución de las disposiciones que invocaban que les daba derecho a los pronunciamientos y declaraciones que solicitaban de la Corte. No había ninguna contradicción entre una decisión en el sentido de que los demandantes tenían capacidad para invocar la cláusula jurisdiccional y una decisión en el sentido de que los demandantes no habían demostrado la base jurídica de su demanda en cuanto al fondo del asunto.

Con respecto a la alegación de que la cláusula jurisdiccional del Mandato confería un derecho sustantivo a exigir la Potencia mandataria que ejecutase las disposiciones de "administración del Mandato", había que señalar que sería notable que un derecho tan importante se hubiese creado de un modo tan fortuito y casi incidental. En realidad, esta cláusula jurisdiccional concreta no contenía nada que la diferenciase de otras mu-

chas, y era un principio casi elemental del derecho procesal el de que debía hacerse una distinción entre el derecho a recurrir a un tribunal y el derecho de un tribunal a examinar el fondo de una demanda, por una parte, y el derecho jurídico del demandante con respecto al asunto objeto de su demanda, que debería demostrar a satisfacción del tribunal, por otra parte. Las cláusulas jurisdiccionales eran adjetivas, no sustantivas, en su naturaleza y efecto: no determinaban si las partes tenían derechos sustantivos, sino únicamente si, en caso de que los tuviesen, podían reclamarlos mediante el recurso a un tribunal.

La Corte examinó seguidamente los derechos de los miembros del Consejo de la Sociedad en virtud de las cláusulas jurisdiccionales de los tratados referentes a las minorías firmados después de la primera guerra mundial, y distinguió estas cláusulas de las cláusulas jurisdiccionales de los instrumentos de mandato. En el caso de los mandatos, la cláusula jurisdiccional tenía por objeto dar a los diferentes Miembros de la Sociedad los medios para proteger sus "intereses especiales" relativos a los territorios bajo mandato; en el caso de los tratados relativos a las minorías, el derecho de acción de los miembros del Consejo en virtud de la cláusula jurisdiccional sólo se destinaba a la protección de las poblaciones minoritarias. Además, cualquier "diferencia de opinión" se definía de antemano en los tratados relativos a las minorías como enjuiciable, porque había de "considerarse como una controversia de carácter internacional". Por consiguiente, no podía surgir ninguna cuestión de carencia alguna de derecho o interés jurídico. Por otra parte, la cláusula jurisdiccional de los mandatos no tenía ninguna de las características o efectos especiales de las cláusulas de los tratados relativos a las minorías.

La Corte examinó a continuación lo que se había llamado el amplio e inequívoco lenguaje de la cláusula jurisdiccional: el significado literal de su alusión a "cualquier controversia" unida a las palabras "entre [el Mandatario] y otro Miembro de la Sociedad de las Naciones" y la expresión "acerca de... las disposiciones del Mandato", que, según se decía, permitía someter a la Corte una controversia acerca de cualquier disposición del Mandato. La Corte no opinaba que la palabra "cualquiera" que figuraba en el párrafo 2 del artículo 7 del Mandato hiciera algo más que dar énfasis a una expresión que habría significado exactamente lo mismo sin ella. La expresión "cualquier controversia" no significaba intrínsecamente nada diferente de "una controversia"; y tampoco la mención de "las disposiciones" del Mandato, en plural, tenía ningún efecto diferente del que se habría obtenido diciendo "una disposición". Una proporción considerable de las aceptaciones de la jurisdicción obligatoria de la Corte en virtud del párrafo 2 del Artículo 36 de su Estatuto estaban redactadas en un lenguaje análogamente amplio e inequívoco, e incluso más amplio. No podía suponerse en ningún caso que, basándose en este lenguaje amplio, el Estado aceptante quedaba dispensado de demostrar un derecho o interés jurídico en el asunto objeto de su demanda. La Corte no podía sostener la proposición de que una cláusula jurisdiccional, al conceder competencia a la Corte, confería por consiguiente y por sí misma un derecho sustantivo.

La Corte se refirió seguidamente a la cuestión de la admisibilidad. Señaló que el fallo de 1962 se había limitado a afirmar que tenía "jurisdicción para conocer del fondo del asunto" y que si se planteaba cualquier cues-

tión de admisibilidad tendría que decidirse ahora, como había ocurrido con la fase del examen del fondo del asunto del *Nottebohm*; en tal caso, la Corte determinaría la cuestión exactamente de la misma manera. En otras palabras, considerando el asunto desde el punto de vista de la capacidad de los demandantes para formular su demanda actual, la Corte sostenía que no poseían esa capacidad, y por consiguiente la demanda era inadmisibile.

Por último, la Corte examinó lo que se había denominado el argumento de "necesidad". En esencia, éste consistía en que, como el Consejo de la Sociedad carecía de medios para imponer sus opiniones a la Potencia mandataria, y como ninguna opinión consultiva que pudiese obtener de la Corte sería obligatoria para esta última, se podría haber despreciado libremente el Mandato. Se alegaba que por eso era fundamental, como salvaguardia o seguridad última para la misión sagrada, que se considerase que cada Miembro de la Sociedad tenía un derecho o interés jurídico en aquel asunto y podía adoptar medidas directas en relación con el mismo. Pero en la práctica del funcionamiento del sistema de mandatos se habían hecho grandes esfuerzos para llegar, mediante argumentos, deliberaciones, negociaciones y esfuerzos de colaboración, a conclusiones generalmente aceptables y para evitar situaciones en las que se obligase al mandatario a acatar las opiniones del resto del Consejo sin llegar a emitir un voto en contra. En estas circunstancias, la existencia de derechos substantivos que los diversos Miembros de la Sociedad podrían ejercer independientemente del Consejo, en relación con el desempeño de los mandatos, habría estado fuera de lugar. Además, dejando a un lado la inverosimilitud de que, si los creadores del sistema de mandatos hubiesen pretendido que fuera posible imponer una política determinada a un mandatario, hubiesen dejado esto a la acción fortuita e incierta de los distintos Miembros de la Sociedad, era muy poco probable que un sistema que hacía deliberadamente posible que los mandatarios obstruyesen las decisiones del Consejo mediante el uso de su veto (aunque, por lo que sabía la Corte, esto no se hizo nunca) invistiera simultáneamente a los diferentes Miembros de la Sociedad del derecho a formular una demanda si el mandatario hacía uso de este veto. En la esfera internacional, la existencia de obligaciones que no podían imponerse por ningún procedimiento jurídico había sido siempre la regla y no la excepción, y esto había sido aún más cierto en 1920 que en la actualidad.

Además, el argumento de "necesidad" equivalía a una alegación de que la Corte debía consentir el equivalente de una *actio popularis*, o derecho de cualquier miembro de una comunidad a adoptar medidas jurídicas en defensa de un interés público. Pero ese derecho no se conocía en el derecho internacional en su forma actual, y la Corte no podía considerarlo como dimanante de "los principios generales de derecho" mencionados en el inciso C del párrafo 1 del Artículo 38 de su Estatuto.

En definitiva, todo el argumento de "necesidad" parecía basarse en consideraciones de carácter extrajurídico, que eran consecuencia de un proceso de conocimiento *a posteriori*. Fueron los acontecimientos posteriores a la época de la Sociedad, y no algo inherente al sistema de los mandatos según su concepción original, lo que originó la "necesidad" alegada, la cual, si existía, pertenecía al terreno político y no constituía necesidad desde el punto de vista jurídico. La Corte no era un órgano legislativo. Las partes en una controversia

siempre podían pedir a la Corte que emitiese una decisión *ex aequo et bono*, de acuerdo con el párrafo 2 del Artículo 38. Fuera de eso, el deber de la Corte era claro y consistía en aplicar el derecho tal como existía, no en crearlo.

Se podría argumentar que la Corte estaba autorizada a "llenar las lagunas", aplicando un principio teleológico de interpretación según el cual debe darse a los instrumentos su máximo efecto con objeto de garantizar el logro de sus fines fundamentales. Este principio era sumamente polémico y, en todo caso, podía carecer de aplicación en aquellas circunstancias en las que la Corte tuviese que ir más lejos de lo que podría considerarse razonablemente como un proceso de interpretación y hubiera de emprender un proceso de rectificación o revisión. No podía suponerse que existían los derechos simplemente porque pareciese conveniente que existieran. La Corte no podía suplir una deficiencia si, para ello, tenía que sobrepasar los límites de la acción judicial normal.

También se podría argumentar que la Corte estaría autorizada a subsanar una omisión ocasionada por el hecho de que los interesados no hubiesen previsto lo que podría suceder y tener en cuenta lo que cabía suponer que los autores del Mandato habrían deseado, o incluso habrían dispuesto expresamente, si hubiesen sabido de antemano lo que iba a ocurrir. Sin embargo, la Corte no podía suponer cuáles habrían sido los deseos e intenciones de los interesados en el caso de que se produjesen acontecimientos que no habían sido previstos ni eran previsibles; y, aun si pudiera hacerlo, sería ciertamente imposible hacer las suposiciones que alegaban los demandantes con respecto a cuáles eran dichas intenciones.

Habida cuenta de estas diversas consideraciones, la Corte decidió que no podía considerarse que los demandantes hubiesen demostrado poseer ningún derecho o interés jurídico en el asunto objeto de sus demandas. Por consiguiente, con el voto decisivo del Presidente — por estar divididos por igual los votos (siete a siete) — la Corte decidió rechazar las demandas.

La Corte emitió su fallo estando formada del modo siguiente: Presidente, Sir Percy Spender; Vicepresidente, Wellington Koo; Magistrados, Winiarski, Spiropoulos, Sir Gerald Fitzmaurice, Koretsky, Tanaka, Jessup, Morelli, Padilla Nervo, Forster, Gros; Magistrados *ad hoc*, Sir Louis Mbanefo, van Wyk.

El fallo de la Corte iba acompañado de una declaración de Sir Percy Spender, y los magistrados Morelli y van Wyk hicieron constar sus opiniones por separado. Los magistrados Wellington Koo, Koretsky, Tanaka, Jessup, Padilla Nervo, Forster y Sir Louis Mbanefo hicieron constar sus opiniones disidentes.

Asunto relativo a la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Nueva demanda: 1962) (Bélgica-España)

Este asunto se inició con una demanda presentada el 19 de junio de 1962 por el Gobierno de Bélgica, en la que éste pedía reparación para los daños que, según se decía, había ocasionado a nacionales belgas, accionistas de la empresa canadiense Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, la conducta de varios órganos del Estado español. En un fallo de 24 de julio

de 1964, del que se dio un resumen en la memoria del Secretario General a la Asamblea General en su vigésimo período de sesiones, la Corte Internacional de Justicia rechazó dos de las cuatro excepciones preliminares opuestas por España, y dispuso que las otras dos se unieran a los autos para ser examinadas con el fondo del asunto, reanudándose seguidamente el examen del mismo. Antes de que terminase el año 1965, tras haberse prorrogado por seis meses a petición del Gobierno español el plazo fijado originariamente, España presentó su contramemoria. El Presidente de la Corte, por providencia de 12 de enero de 1966 y tras verificar las opiniones de las partes, fijó el 30 de noviembre de 1966 como plazo para la presentación de la réplica de Bélgica, y el 30 de abril de 1967 para la presentación de la réplica de España. Bélgica solicitó posteriormente una prórroga de seis meses. Como el Gobierno español no opuso ninguna objeción al principio de una prórroga, el Presidente de la Corte, el 23 de noviembre de 1966, dictó una providencia por la que se prorrogaba el plazo para la presentación de la réplica de Bélgica hasta el 24 de abril de 1967 y se aplazaba la fecha para la presentación de la réplica de España hasta el 2 de octubre de 1967. Por haberse recibido una solicitud del Gobierno de Bélgica para una nueva prórroga, la Corte, el 12 de abril de 1967, dictó otra providencia por la que prorrogaba hasta el 16 de mayo de 1967 el plazo para la presentación de la réplica y, en consecuencia, hasta el 24 de octubre de 1967 el plazo para la presentación de la réplica de España. La réplica de Bélgica se presentó dentro de esta prórroga del plazo.

Plataforma continental del Mar del Norte (Dinamarca-República Federal de Alemania) (República Federal de Alemania-Países Bajos)

El 20 de febrero de 1967, el Ministro de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, previo acuerdo entre los Estados interesados, presentó a la Corte dos compromisos especiales, uno para someter a la Corte una diferencia entre Dinamarca y la República Federal de Alemania y el otro para someter a la Corte una diferencia entre la República Federal de Alemania y los Países Bajos en relación con la delimitación, entre las partes respectivas de cada compromiso especial, de la plataforma continental del Mar del Norte. Estos compromisos se firmaron en Bonn el 2 de febrero de 1967 y entraron en vigor el mismo día. Se pide a la Corte que decida qué principios y reglas de derecho internacional son aplicables a la delimitación entre las partes respectivas de las zonas de la plataforma continental del Mar del Norte que pertenecen a cada una de ellas más allá de los límites parciales determinados por los convenios existentes. En los compromisos especiales se expone que los Gobiernos de las partes respectivas delimitarán la plataforma continental del Mar del Norte entre sus países mediante acuerdo establecido de conformidad con la decisión de la Corte.

El 8 de marzo de 1967, el magistrado encargado de desempeñar las funciones de Presidente de la Corte en virtud del Artículo 12 del Reglamento de la misma, teniendo en cuenta lo acordado entre las partes según se exponía en los respectivos compromisos especiales, fijó el 21 de agosto de 1967 como plazo para la presentación de la memoria de la República Federal de Alemania en cada uno de los dos asuntos, y el 20 de febrero de 1968 como plazo para la presentación de las contra-

memorias de Dinamarca y los Países Bajos en los asuntos en los que estos países son partes respectivamente.

OTRAS ACTIVIDADES

En varios de los instrumentos registrados o depositados en la Secretaría de las Naciones Unidas durante el período que se reseña, figuran estipulaciones por las que se confiere al Presidente de la Corte la facultad de efectuar ciertos nombramientos en los casos previstos en dichos instrumentos. Esta facultad suele ser la de nombrar árbitros o miembros de los tribunales de arbitraje que han de constituirse en caso de surgir controversias entre las partes.

COMPOSICIÓN DE LA CORTE Y DE LA SALA DE PROCEDIMIENTO SUMARIO

El 3 de noviembre de 1966 la Asamblea General y el Consejo de Seguridad eligieron a cinco magistrados para cubrir las vacantes que habrían de producirse al expirar, el 5 de febrero de 1967, el mandato del Presidente, Sir Percy Spender; del Vicepresidente, Wellington Koo y de los magistrados Winiarski, Spiropoulos y Ammoun. Fueron elegidos el magistrado Fouad Ammoun, el Sr. Cesar Bengzon, el Sr. Sture Petré, el Sr. Manfred Lachs y el Sr. Charles D. Onyeama.

El 5 de abril de 1967 la Corte eligió Presidente al magistrado Bustamante y Rivero y el 6 de abril Vicepresidente el magistrado Koretsky. El 6 de abril, la Corte constituyó su Sala de Procedimiento Sumario para el año siguiente. Resultaron elegidos para constituir esta Sala los siguientes magistrados de la Corte:

Miembros titulares: Presidente, Bustamante y Rivero; Vicepresidente, Koretsky; magistrados, Sir Gerald Fitzmaurice, Jessup y Morelli;

Miembros suplentes: Magistrados Tanaka y Lachs.

B. Comisión de Derecho Internacional

18º PERÍODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN

La Comisión de Derecho Internacional celebró su 18º período de sesiones en Ginebra del 4 de mayo al 19 de julio de 1966. La siguiente información complementa la contenida en la memoria del año pasado sobre la fase inaugural de ese período de sesiones.

Habiendo decidido finalizar su estudio sobre el derecho de los tratados durante su 18º período de sesiones, la Comisión concedió prioridad a esta materia y dedicó únicamente un período limitado de tiempo al estudio del tema 2 de su programa, a saber, las misiones especiales. A base del sexto informe de Sir Humphrey Waldock, Relator Especial, la Comisión examinó de nuevo el resto del proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados, revisó algunos artículos anteriores, decidió la ordenación de todos los artículos, estudió algunas cuestiones generales de terminología, y aprobó los comentarios sobre todos los artículos. Seguidamente, la Comisión aprobó el texto definitivo de su proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados y, de acuerdo con su Estatuto, lo presentó a la Asamblea General junto con la recomendación de que ésta convocara una conferencia internacional de plenipotenciarios con objeto de estudiar el mencionado proyecto y redactar una convención sobre este tema. Asimismo, de conformidad con

sugerencias formuladas por representantes ante la Sexta Comisión, en el vigésimo período de sesiones de la Asamblea General, la Comisión examinó los problemas de organización y de procedimiento que supondría una posible conferencia sobre el derecho de los tratados.

Los 75 artículos que integran el proyecto sobre el derecho de los tratados aprobados por la Comisión, el cual constituye a la vez una codificación y un desarrollo progresivo del derecho internacional, se dividen en siete partes, algunas de las cuales se encuentran subdivididas en secciones. El proyecto de articulado se ocupa principalmente de las siguientes materias: alcance de los artículos, términos empleados, celebración y entrada en vigor de los tratados, reservas a los tratados multilaterales, observancia, aplicación e interpretación de los tratados, los tratados y los terceros Estados, enmienda y modificación de los tratados, nulidad, terminación y suspensión de la aplicación de los tratados y sus consecuencias, procedimiento que deberá seguirse en caso de nulidad o terminación de un tratado, retirada de él o suspensión de su aplicación, casos de sucesión de Estados y de responsabilidad de un Estado, y caso de un Estado agresor, así como depositarios, notificaciones, correcciones y registro de los tratados. El alcance del proyecto de articulado se limita a los acuerdos internacionales celebrados entre Estados en forma escrita. Según explicó la Comisión, el proyecto de artículos no se ocupa de los efectos que la ruptura de las hostilidades puede tener sobre los tratados, ni de la llamada "cláusula de la nación más favorecida", ni de la aplicación de los tratados que prevén obligaciones o derechos que han de cumplir o de que gozan personas particulares. Análogamente, en el proyecto de artículos no figuran normas acerca de la sucesión de Estados respecto de los tratados, ni sobre la cuestión de la responsabilidad internacional de un Estado derivada del incumplimiento de una obligación convencional, ya que la Comisión estimó más adecuado examinar ambas cuestiones en relación con los temas de su programa relativos a su sucesión de los Estados y gobiernos y a la responsabilidad de los Estados, respectivamente.

A base del tercer informe del Sr. Milan Bartoš, Relator Especial, la Comisión examinó determinadas cuestiones preliminares de naturaleza general referentes a las misiones especiales, que se habían suscitado a causa de los comentarios de los gobiernos sobre el proyecto de 44 artículos relativo a las misiones especiales, aprobado con carácter provisional en el 16º período de sesiones y en la primera parte del 17º período de sesiones de la Comisión. A raíz de dicho examen, la Comisión llegó a ciertas conclusiones sobre algunas de estas materias y dio instrucciones al Relator acerca de la forma en que debería realizar su labor ulterior en relación con estos aspectos de la materia.

Sin intención de coartar la libertad de acción de los miembros que habrían de elegirse durante el vigésimo primer período de sesiones de la Asamblea General, la Comisión, en cuanto organismo permanente, tomó disposiciones para garantizar la continuación de los trabajos sobre los temas elegidos para su codificación y desarrollo progresivo. A este respecto, se convino en que el programa provisional del 19º período de sesiones de la Comisión, en 1967, debería incluir temas sobre las misiones especiales, las relaciones entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales, la responsabilidad de los Estados y la sucesión de Estados y de gobiernos.

EXAMEN POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LOS INFORMES DE LA COMISIÓN SOBRE LA LABOR REALIZADA EN LA SEGUNDA PARTE DE SU 17° PERÍODO DE SESIONES Y EN SU 18° PERÍODO DE SESIONES

En su vigésimo primer período de sesiones, la Asamblea General remitió a la Sexta Comisión los informes de la Comisión de Derecho Internacional sobre la segunda parte de su 17° período de sesiones, así como sobre su 18° período de sesiones. Por recomendación de la Sexta Comisión, la Asamblea aprobó las resoluciones 2166 (XXI) y 2167 (XXI), de 5 de diciembre de 1966. La resolución 2166 (XXI), titulada "Conferencia internacional de plenipotenciarios sobre el derecho de los tratados", será objeto de examen en la sección C del presente capítulo. Por la resolución 2167 (XXI), la Asamblea General tomó nota del informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en la segunda parte de su 17° período de sesiones y de los capítulos I, III y IV del informe sobre la labor realizada en su 18° período de sesiones; tomó nota con aprobación del programa de trabajo para 1967 propuesto por la Comisión, y formuló determinadas recomendaciones a la Comisión acerca de su labor futura sobre las misiones especiales, la sucesión de Estados y de gobiernos, la responsabilidad de los Estados y las relaciones entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales. La Asamblea recomendó, en particular, que la Comisión continuara la labor de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional relativo a las misiones especiales, con objeto de presentar un proyecto definitivo sobre la materia en el informe sobre la labor realizada en su 19° período de sesiones. La Asamblea expresó también el deseo de que, en combinación con futuros períodos de sesiones de la Comisión, se organizaran seminarios sobre derecho internacional análogos a los celebrados en mayo de 1965 y mayo de 1966 en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra para estudiantes especializados en la materia y jóvenes funcionarios encargados en sus respectivos países de asuntos relacionados con el derecho internacional.

ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL

De conformidad con el Estatuto de la Comisión de Derecho Internacional, la Asamblea General, en su 1460a. sesión plenaria, celebrada el 10 de noviembre de 1966, eligió a los 25 miembros de la Comisión de Derecho Internacional por un período de cinco años, desde el 1° de enero de 1967 al 31 de diciembre de 1971. Fueron elegidos los siguientes candidatos: Sr. Roberto Ago (Italia), Sr. Fernando Albónico (Chile), Sr. Gilberto Amado (Brasil), Sr. Milan Bartoš (Yugoslavia), Sr. Mohammed Bedjaoui (Argelia), Sr. Jorge Castañeda (México), Sr. Erik Castrén (Finlandia), Sr. Abdullah El-Erian (República Árabe Unida), Sr. Taslim O. Elias (Nigeria), Sr. Constantine Th. Eustathiades (Grecia), Sr. Louis Ignacio-Pinto (Dahomey), Sr. Eduardo Jiménez de Aréchaga (Uruguay), Sr. Richard D. Kearney (Estados Unidos de América), Sr. Alfred Ramangasoavina (Madagascar), Sr. Paul Reuter (Francia), Sr. Shabtai Rosenne (Israel), Sr. José María Ruda (Argentina), Sr. Nagendra Singh (India), Sr. Abdul Hakim Tabibi (Afganistán), Sr. A. J. P. Tammes (Países Bajos), Sr. Senjin Tsuruoka (Japón), Sr. N. A. Ushakov (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), Sr. Endre Ustor (Hungría), Sir Humphrey Waldock (Reino Unido de Gran Bretaña e

Irlanda del Norte) y Sr. Mustafa Kamil Yaseen (Irak).

DECIMONOVENO PERÍODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN

El 19° período de sesiones de la Comisión se inauguró en Ginebra el 8 de mayo de 1967. En el programa de reunión figuraban los temas siguientes: misiones especiales; relaciones entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales; responsabilidad de los Estados; sucesión de Estados y de gobiernos; colaboración con otros organismos; organización de los trabajos futuros; y lugar y fecha del 20° período de sesiones.

La Comisión eligió la siguiente Mesa: Sir Humphrey Waldock, Presidente; Sr. José María Ruda, Primer Vicepresidente; Sr. Endre Ustor, Segundo Vicepresidente; Sr. Abdullah El-Erian, Relator General.

C. Conferencia Internacional de Plenipotenciarios sobre el Derecho de los Tratados

Por su resolución 2166 (XXI), de 6 de diciembre de 1966, la Asamblea General decidió, según recomendación de la Comisión de Derecho Internacional, que convocase una conferencia internacional de plenipotenciarios para que examinara el derecho de los tratados e incorporara los resultados de su labor en una convención internacional y en los demás instrumentos que estimase pertinentes. Dicha resolución remitía a la conferencia, como propuesta fundamental para su consideración, el proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados aprobado por la Comisión de Derecho Internacional y que figura en el capítulo II del informe sobre la labor realizada en su 18° período de sesiones. La Asamblea pidió al Secretario General que convocara, en Ginebra o en cualquier otro lugar adecuado para el cual se enviara una invitación al Secretario General antes del vigésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General, el primer período de sesiones de la conferencia a principios de 1968 y el segundo período de sesiones a principios de 1969. Los Estados invitados a participar en la conferencia son los Estados Miembros de las Naciones Unidas, los Estados miembros de los organismos especializados, los Estados Partes en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y los Estados a los que la Asamblea General decida especialmente invitar. La Asamblea invitó a dichos Estados a que, en lo posible, incluyeran entre sus representantes a expertos competentes en el derecho de los tratados. Asimismo, invitó a los organismos especializados y a las organizaciones intergubernamentales interesadas a que enviaran observadores a la conferencia. Además, con el fin de facilitar la preparación y organización de la conferencia, la Asamblea pidió al Secretario General que presentara a aquélla toda la documentación pertinente y recomendaciones relativas a sus métodos de trabajo y procedimientos, y que dispusiera lo oportuno para que la conferencia contara con el personal y los servicios necesarios; invitó a los Estados Miembros, al Secretario General y a los directores generales de los organismos especializados que actuaran como depositarios de tratados a que presentaran por escrito sus comentarios y observaciones acerca del proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados preparado por la Comisión de Derecho Internacional; y decidió incluir en el programa provisional de su vigésimo segundo período de sesiones un tema titulado "Derecho de los tra-

tados", a fin de proseguir el examen del proyecto de artículos y facilitar así la celebración de una convención sobre el derecho de los tratados en la conferencia.

D. *Examen de los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas*

La labor del Comité Especial (1966) de los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados, que se reunió en la Sede del 8 de marzo al 25 de abril de 1966, quedó resumida en el informe del año pasado. El informe del Comité Especial fue presentado a la Asamblea General, en su vigésimo primer período de sesiones, y remitido a la Sexta Comisión. Por recomendación de la Sexta Comisión, la Asamblea aprobó la resolución 2181 (XXI), de 12 de diciembre de 1966, en la cual tomó nota del informe del Comité Especial, así como de los textos formulados por el mismo acerca de los principios del arreglo de controversias internacionales por medios pacíficos y de la igualdad soberana de los Estados, y de su decisión de que, con respecto al principio de la no intervención, se atendería a la resolución 2131 (XX) de la Asamblea General, de 21 de diciembre de 1965. La Asamblea expresó su agradecimiento al Comité Especial por la valiosa labor que había realizado y le pidió que prosiguiera con ella, reuniéndose en Ginebra o en cualquier otro lugar adecuado. La Asamblea pidió al Comité Especial que completase con prioridad la formulación de los cuatro principios sobre los que no se había llegado a un consenso y que examinase las propuestas sobre el principio de la no intervención, con miras a ampliar los puntos de acuerdo ya enunciados en la resolución 2131 (XX) de la Asamblea General, y que, seguidamente, examinara cualesquiera nuevas propuestas encaminadas a ampliar los puntos de acuerdo expresados en los textos formulados por el Comité Especial acerca de los principios del arreglo de controversias internacionales por medios pacíficos y de la igualdad soberana. En la resolución se pidió al Comité Especial que presentara a la Asamblea General, en su vigésimo segundo período de sesiones, un informe completo y un proyecto de declaración sobre los siete principios. En cumplimiento de esta resolución, el Comité Especial se reunirá en Ginebra para celebrar un período de sesiones a partir del 17 de julio de 1967.

E. *Cuestión de los métodos para la determinación de hechos*

De conformidad con la resolución 2104 (XX) de la Asamblea General, de 20 de diciembre de 1965, la Asamblea tuvo ante sí, en su vigésimo primer período de sesiones, un informe del Secretario General, así como las opiniones expresadas por los Estados Miembros sobre esta cuestión. El tema fue remitido a la Sexta Comisión y, por recomendación suya, la Asamblea aprobó la resolución 2182 (XXI), de 12 de diciembre de 1966, por la cual invitó a los Estados Miembros a que presentaran las opiniones o los puntos de vista complementarios que pudieran tener sobre la materia, y decidió incluir en el programa provisional de su vigésimo se-

gundo período de sesiones un tema titulado "Cuestión de los métodos para la determinación de hechos", a fin de considerar las medidas futuras que pudieran ser apropiadas.

F. *Proyecto de declaración sobre el derecho de asilo*

En el vigésimo primer período de sesiones, la Sexta Comisión se ocupó de nuevo del tema relativo al proyecto de declaración sobre el derecho de asilo que había sido transferido de la Tercera Comisión a la Sexta en el vigésimo período de sesiones de la Asamblea General, ya que el recargado programa de aquélla le había impedido completar el proyecto de declaración.

En el vigésimo primer período de sesiones, la Sexta Comisión celebró un debate general sobre el proyecto de declaración. En el curso de este debate se decidió establecer un grupo de trabajo de veinte miembros con el fin de que preparase un anteproyecto de declaración sobre el derecho de asilo territorial. A este objeto, la Sexta Comisión remitió al Grupo de Trabajo el texto del proyecto de declaración sobre el derecho de asilo aprobado por la Comisión de Derechos Humanos el 15 de marzo de 1960, así como del texto del preámbulo y del artículo 1 del proyecto de declaración aprobados por la Tercera Comisión en el decimoséptimo período de sesiones de la Asamblea General, las enmiendas y observaciones presentadas en forma escrita por los Estados Miembros, las sugerencias concretas formuladas durante el debate del tema en el vigésimo primer período de sesiones de la Asamblea General y los instrumentos internacionales existentes sobre la materia.

El 7 de diciembre de 1966, el Grupo de Trabajo presentó a la Sexta Comisión un informe en el que se resumían sus deliberaciones y se exponía el texto de un proyecto de declaración sobre el asilo territorial, junto con algunos puntos reservados para un posible examen ulterior. A la luz de este informe, la Sexta Comisión recomendó a la Asamblea General un proyecto de resolución que esta última aprobó por unanimidad el 16 de diciembre de 1966, como resolución 2203 (XXI). Por esta resolución, la Asamblea, entre otras cosas, pidió al Secretario General que transmitiera a los Estados Miembros el texto del proyecto de declaración preparado por el Grupo de Trabajo, junto con el informe de la Sexta Comisión sobre el mismo. La Asamblea decidió también incluir en el programa provisional de su vigésimo segundo período de sesiones un tema titulado "Proyecto de declaración sobre el asilo territorial", con miras a la adopción definitiva de una declaración sobre esta materia.

G. *Programa de asistencia de las Naciones Unidas para la enseñanza, el estudio, la difusión y una comprensión más amplia del derecho internacional*

El Secretario General presentó a la Asamblea General, en su vigésimo primer período de sesiones, un informe en el que se describían las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la resolución 2099 (XX), de 20 de diciembre de 1965, que estableció un programa para fomentar la enseñanza, el estudio, la difusión y una comprensión más amplia del derecho internacional.

El informe contenía también las recomendaciones del Comité Consultivo establecido en virtud de dicha resolución para asesorar al Secretario General sobre los aspectos de fondo del programa. El Secretario General aceptó en su totalidad las recomendaciones del Comité Consultivo. Las recomendaciones para 1967 eran que el curso regional de formación y de repaso que había de celebrarse en África debería administrarse conjuntamente con la UNESCO; que se concediese hasta un máximo de 15 becas a personas procedentes de países en desarrollo; que se proporcionasen servicios de asesoramiento de expertos, a petición de los países en desarrollo, dentro del cuadro de los programas de asistencia técnica existentes; que se enviara una colección de publicaciones jurídicas de las Naciones Unidas a instituciones de los países en desarrollo, hasta un máximo de 15; y que la Asamblea General acogiese con beneplácito los planes del Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas relativos a la codificación y al desarrollo progresivo del derecho internacional dentro del marco de las Naciones Unidas, con arreglo al anexo a la resolución 2099 (XX). El Secretario General informó posteriormente de que la UNESCO había aceptado la propuesta de que el curso regional de formación y de repaso se celebrara bajo los auspicios de ambas organizaciones y fuera financiado conjuntamente.

La Sexta Comisión, después de examinar el informe del Secretario General, recomendó a la Asamblea General un proyecto de resolución, que ésta aprobó por unanimidad el 16 de diciembre de 1966, como resolución 2204 (XXI). En dicha resolución, la Asamblea autorizó al Secretario General a desarrollar en 1967 las actividades específicas en su informe; aceptó la oferta de la República Unida de Tanzania de proporcionar servicios e instalaciones para el curso regional de formación y de repaso; expresó su reconocimiento a la UNESCO por su participación en el programa y al Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas por las actividades que desarrolla en la esfera del derecho internacional; y decidió que el programa establecido en virtud de la resolución 2099 (XX) se denominaría en lo sucesivo Programa de asistencia de las Naciones Unidas para la enseñanza, el estudio, la difusión y una comprensión más amplia del derecho internacional.

En 1967, el Secretario General se ha ocupado en la aplicación de los puntos del programa que fue autorizado a ejecutar por la resolución 2204 (XXI). El curso regional de formación y de repaso va a celebrarse en Dar es Salaam entre el 14 de agosto y el 9 de septiembre. De conformidad con la misma resolución, el Secretario General informará a la Asamblea General, en su vigésimo segundo período de sesiones, sobre la preparación y ejecución de los puntos del programa que han de cumplirse en 1967 y 1968, y, previa consulta con el Comité Consultivo, presentará recomendaciones respecto de la ejecución del programa en años subsiguientes.

H. *Establecimiento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional*

El 17 de diciembre de 1966, la Asamblea General aprobó por unanimidad la resolución 2205 (XXI), por

la que decidió establecer una Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional al objeto de promover la armonización y unificación progresivas del derecho mercantil internacional.

La Asamblea General examinó por primera vez esta materia en su vigésimo período de sesiones, a petición de Hungría, en relación con el tema titulado "Examen de las medidas que se deberán adoptar para impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional privado con miras, en particular, a fomentar el comercio internacional". Por su resolución 2102 (XX), de 20 de diciembre de 1965, la Asamblea pidió al Secretario General que le presentara, en su vigésimo primer período de sesiones, un amplio informe sobre la materia.

En su vigésimo primer período de sesiones, la Asamblea General remitió este tema a la Sexta Comisión, la cual lo debatió sobre la base de un informe del Secretario General sobre el desarrollo progresivo del derecho mercantil internacional, de las observaciones formuladas acerca del mismo por el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado y por la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado, y de una resolución sobre la materia aprobada por el Consejo de la Cámara de Comercio Internacional, el 16 de noviembre de 1966.

El informe del Secretario General fue preparado por la Oficina de Asuntos Jurídicos a base de un estudio preliminar elaborado por el Profesor Clive M. Schmitthoff, del City of London College, cuyos servicios había contratado el Secretario General, y en consulta con la Dra. Margarita Arguás (Argentina), el Dr. Taslim O. Elias (Nigeria), el Profesor Gyula Eorsi (Hungría), el Profesor Willis L. Reese (Estados Unidos) y el Profesor Mustafa Kamil Yaseen (Irak). Se celebraron también consultas con órganos y dependencias de las Naciones Unidas, así como con organismos especializados y otras organizaciones que estaban interesados directamente en esta materia.

En su informe, el Secretario General afirmó que la labor realizada hasta ahora para la unificación y armonización del derecho mercantil internacional muestra un cuadro en el que se aprecian algunos progresos y, al propio tiempo, importantes lagunas. La relativa modestia de los resultados obtenidos podía atribuirse en parte a las dificultades inherentes a cualquier intento de introducir modificaciones en las legislaciones y prácticas nacionales. Otro factor era que sólo un reducido número de gobiernos se había dedicado activamente al proceso de unificación del derecho o le había concedido suficiente prioridad. Los países en desarrollo, y en especial los que habían adquirido recientemente la independencia, no habían tenido prácticamente oportunidad de participar en esta labor. Se observaba también que ninguna de las organizaciones que desarrollaban actividades en esta esfera contaba con aceptación mundial; en ninguna de ellas existía una representación equilibrada de los países de economía de libre empresa y de los países de planificación económica centralizada, de los países desarrollados y de los países en desarrollo. Por último, no había habido cooperación ni coordinación suficientes. Por ello, sus actividades habían solidado resultar inconexas y se había producido un grado considerable de superposición. En consecuencia, se sugería que resultaría deseable que las Naciones Unidas participaran de forma más activa en los esfuerzos encaminados a eliminar o reducir los obstáculos jurídicos que se oponen a las corrientes del comercio internacional.

Habiendo sido informado de que, en atención a su abultado calendario, la Comisión de Derecho Internacional no deseaba asumir responsabilidades en esta esfera, el Secretario General hizo notar que no existía ningún órgano de las Naciones Unidas que fuera a la vez técnicamente competente y pudiera dedicar suficiente tiempo a un programa de armonización y unificación del derecho mercantil. Por ello, se sugería que quizás la Asamblea General estimara pertinente examinar la posibilidad de crear una nueva comisión, que se llamaría Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

Durante el debate de este tema en la Sexta Comisión se expresó un acuerdo general con el contenido y las conclusiones del informe del Secretario General. Muchos oradores mencionaron la valiosa contribución que había sido efectuada ya en esta materia por el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado y por la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado, así como las funciones y responsabilidades de la UNCTAD en materia de comercio internacional.

El 14 de diciembre, la Sexta Comisión recomendó a la Asamblea General un proyecto de resolución, que esta última aprobó por unanimidad el 17 de diciembre de 1966, como resolución 2205 (XXI).

Conforme a dicha resolución, la Comisión estará formada por veintinueve Estados, que elegirá la Asamblea General para un período de seis años. La distribución de puestos en la Comisión será la siguiente: siete para Estados de África; cinco para Estados de Asia; cuatro para Estados de la Europa oriental; cinco para Estados de la América Latina; y ocho para Estados de la Europa occidental y otros Estados. Con el fin de garantizar determinado grado de continuidad en la composición de la Comisión, la Asamblea dispuso un sistema rotatorio en virtud del cual los mandatos de catorce de los miembros elegidos en la primera elección, que tendría lugar en el vigésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General, expirarían en un plazo de tres años.

Se pidió expresamente a los Estados elegidos para formar parte de la Comisión que designaran a sus representantes escogiéndolos, en lo posible, entre personalidades destacadas en el campo del derecho mercantil internacional.

La resolución dispone que la Comisión fomentará la armonización y unificación progresivas del derecho mercantil internacional mediante: 1) la coordinación de la labor de las organizaciones que realizan actividades en este campo y el estímulo de la colaboración entre ellas; 2) el fomento de una participación más amplia en las convenciones internacionales existentes y una mayor aceptación de las leyes modelo y las leyes uniformes ya establecidas; 3) la preparación o el fomento de la aprobación de nuevas convenciones internacionales, leyes modelo y leyes uniformes, así como el fomento de la codificación y de una aceptación más amplia de las condiciones, disposiciones, costumbres y prácticas comerciales internacionales, en colaboración, cuando corresponda, con las organizaciones que actúen en esta esfera; 4) el fomento de métodos y procedimientos para asegurar la interpretación y aplicación uniformes de las convenciones internacionales y de las leyes uniformes en el campo del derecho mercantil internacional; 5) la reunión y difusión de información sobre las legislaciones nacionales y sobre la evolución jurídica moderna,

incluida la jurisprudencia, del derecho mercantil internacional; 6) el establecimiento y mantenimiento de una estrecha colaboración con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo; 7) el mantenimiento de un enlace con otros órganos de las Naciones Unidas y con los organismos especializados que se ocupan del comercio internacional; y 8) la adopción de cualquier otra medida que pudiera considerar útil para desempeñar sus funciones.

La Comisión celebrará normalmente un período ordinario de sesiones cada año. Si no surgen dificultades técnicas se reunirá, alternativamente, en Nueva York y en Ginebra. Se espera que el primer período de sesiones de la Comisión se celebre en 1968.

La Comisión presentará a la Asamblea un informe anual, que se enviará simultáneamente a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo para que ésta formule sus comentarios. Asimismo, se autorizó a la Comisión a que celebrara consultas con organizaciones competentes o recabara sus servicios, y a que estableciera relaciones de trabajo con las organizaciones interesadas en la armonización y unificación progresivas del derecho mercantil internacional.

La Asamblea pidió al Secretario General que, mientras no se elija a los miembros de la Comisión en el vigésimo segundo período de sesiones, llevara a cabo el trabajo preparatorio necesario y, en particular, que invitara a los Estados Miembros y a los órganos y organizaciones interesadas en el comercio internacional a que presentaran por escrito, antes del 1º de julio de 1967, sus observaciones acerca del programa de trabajo que deberá iniciar la Comisión.

I. Arbitraje de litigios de derecho privado surgidos en el comercio internacional

Los trabajos del Centro de las Naciones Unidas para el Fomento del Arbitraje Comercial, que fue establecido en 1962 dentro de la secretaría de la Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente, han continuado en esta región.

Asunto de especial interés en el año pasado fue la preparación y publicación por el Centro del Reglamento de la CEPALO sobre Arbitraje Comercial Internacional y de las Normas de la CEPALO sobre Conciliación. El Reglamento y las Normas fueron preparados por la secretaría sobre la base de los principios detallados aprobados por la Conferencia de la CEPALO sobre Arbitraje Comercial Internacional, que se reunió en Bangkok en enero de 1966. La Conferencia, al recomendar la preparación y aprobación del Reglamento y las Normas por el Centro, propuso que se diera amplia difusión a los mismos en toda la región, y, en particular, que su texto fuera señalado a la atención de las cámaras de comercio, asociaciones jurídicas y comerciales, universidades y demás órganos y personas competentes interesados en el comercio internacional y en las actividades de desarrollo económico con él relacionadas.

El Reglamento sobre Arbitraje Comercial Internacional se aplicará cuando quienes se dediquen al comercio internacional en la región, acepten su aplicación al arbitraje de sus litigios. El Reglamento comprende disposiciones sobre las diferentes fases del procedimiento de arbitraje, tales como la designación de los árbitros, la determinación del lugar del arbitraje, la dirección

del procedimiento arbitral y el laudo. El Reglamento establece además un procedimiento para la designación de los árbitros y la determinación del lugar del arbitraje cuando las partes no lleguen a un acuerdo al respecto; dicho procedimiento consiste en remitir el asunto a un comité especial para que éste decida. Según el Reglamento, los miembros de este comité especial serían escogidos por el Secretario Ejecutivo entre los representantes en la Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente.

Las Normas sobre Conciliación servirán de orientación a quienes, dedicados al comercio internacional en la región, deseen recurrir a la conciliación para la solución de sus litigios. Las Normas prevén, entre otras cosas, que cada parte es libre de aceptar o rechazar las condiciones de arreglo propuestas por el conciliador o los conciliadores y que, de no llegarse a un acuerdo, nada de lo que haya ocurrido durante el procedimiento de conciliación tendrá efecto alguno sobre los derechos de cualquiera de las partes en el litigio.

J. Tratados y convenciones multilaterales

REGISTRO Y PUBLICACIÓN DE TRATADOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES

En el año que terminó el 15 de junio de 1967 fueron registrados en la Secretaría 579 tratados y acuerdos internacionales: 413 por 25 gobiernos, 111 por siete organismos especializados y seis organizaciones internacionales, y 55 de oficio. Fueron archivados e inscritos un total de ocho tratados y acuerdos: tres a instancia de dos organismos especializados y cinco por la Secretaría. Con ello se eleva a 12.636 el total de tratados y acuerdos registrados o archivados e inscritos desde el 14 de diciembre de 1946 hasta el 15 de junio de 1967. Además, se registraron o se archivaron e inscribieron 569 declaraciones certificadas, lo que hace ascender a 5.236 el total de declaraciones certificadas que han sido registradas o archivadas e inscritas hasta el 15 de junio de 1967.

Durante el período que abarca la presente memoria, la Secretaría ha publicado 34 tomos de la colección de tratados (*Treaty Series*) (tomos 508, 509, 512, 513, 517; 520 a 539; y 541 a 549).

Además, se encuentran en diversas fases de impresión, esperándose que aparezcan a fines de 1967, otros 36 tomos de la colección (hasta el tomo 586), relativos a documentación registrada o archivada e inscrita hasta fines de 1966.

NUEVOS TRATADOS MULTILATERALES CONCERTADOS CON LOS AUSPICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS Y RESPECTO DE LOS CUALES EL SECRETARIO GENERAL ES DEPOSITARIO

Desde que se publicó la memoria anterior, se han redactado los siguientes tratados: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, abierto a la firma en Nueva York el 19 de diciembre de 1966; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, abierto a la firma en Nueva York el 19 de diciembre de 1966; Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, abierto a la firma en Nueva York el 19 de diciembre de 1966; Protocolo por

el que se prorroga nuevamente la validez de la Convención del 6 de abril de 1950 sobre Declaración de fallecimiento de personas desaparecidas, abierto a la adhesión en Nueva York el 15 de enero de 1967; Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967; Artículos de asociación para el establecimiento de la Comunidad Económica del África Occidental, hechos en Accra el 4 de mayo de 1967.

SITUACIÓN EN LO QUE RESPECTA A LAS FIRMAS, RATIFICACIONES Y ADHESIONES: ENTRADA EN VIGOR

El número de tratados multilaterales respecto de los cuales el Secretario General desempeña las funciones de depositario ha aumentado a 178.

Durante el período objeto de la presente memoria, se han añadido 82 firmas a estos tratados, y se han remitido al Secretario General 331 instrumentos de ratificación, adhesión o aceptación, así como varias notificaciones y comunicaciones relativas a los mismos. De esos tratados, han entrado en vigor 136, entre ellos los siguientes, a partir del 16 de junio de 1966:

Acuerdo por el que se creó el Banco Asiático de Desarrollo, concertado en Manila el 4 de diciembre de 1965 (entró en vigor el 22 de agosto de 1966);

Convención relativa a la unificación de ciertas disposiciones sobre los abordajes en la navegación interior, hecha en Ginebra el 15 de marzo de 1960 (entró en vigor el 13 de septiembre de 1966);

Protocolo por el que se prorroga nuevamente la validez de la Convención del 6 de abril de 1950 sobre Declaración de fallecimiento de personas desaparecidas, abierto a la adhesión en Nueva York el 15 de enero de 1967 (entró en vigor el 24 de enero de 1967);

Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, hecha en Viena el 24 de abril de 1963 (entró en vigor el 19 de marzo de 1967);

Protocolo de Firma Facultativa sobre Adquisición de Nacionalidad, hecho en Viena el 24 de abril de 1963 (entró en vigor el 19 de marzo de 1967);

Protocolo de Firma Facultativa sobre Jurisdicción Obligatoria para la Solución de controversias, hecho en Viena el 24 de abril de 1963 (entró en vigor el 19 de marzo de 1967);

Artículos de asociación para el establecimiento de la Comunidad Económica del África Occidental, hechos en Accra el 4 de mayo de 1967 (entró en vigor el 4 de mayo de 1967);

Convención sobre el Comercio de Tránsito de los Estados sin Litoral, hecha en Nueva York el 8 de julio de 1965 (entró en vigor el 9 de junio de 1967).

Además, el 1º de julio de 1966 entraron en vigor las enmiendas a los anexos 3 y 6 de la Convención aduanera relativa al sistema del Carnet TIR para el transporte internacional de mercaderías, hecha en Ginebra el 15 de enero de 1959, que fueron introducidas por acuerdo entre las administraciones competentes de todas las Partes Contratantes; la enmienda propuesta por los Países Bajos a la Convención sobre facilidades aduaneras para el turismo, hecha en Nueva York el 4 de junio de 1954, fue aceptada el 6 de marzo de 1967 y entró en vigor el 6 de junio de 1967.

REFORMA DEL ARTÍCULO 109 DE LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS

Al 15 de junio de 1967, los 67 Estados siguientes habían ratificado la enmienda aprobada por la Asamblea General en su resolución 2101 (XX): Afganistán, Albania, Alto Volta, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Birmania, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Ceilán, Congo (República Democrática del), Checoslovaquia, China, Chipre, Dhomey, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos de América, Etiopía, Finlandia, Gambia, Ghana, Guatemala, Hungría, India, Irak, Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Jamaica, Jordania, Kenia, Laos, Malasia, Malawi, Malta, Marruecos, México, Nepal, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Paquistán, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Árabe Unida, República Dominicana, República Socialista Soviética de Bielorrusia, República Socialista Soviética de Ucrania, República Unida de Tanzania, Rumania, Rwanda, Singapur, Suecia, Tailandia, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

La enmienda entrará en vigor una vez que haya sido ratificada por dos tercios de los Miembros de las Naciones Unidas, incluidos los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

ACTA GENERAL REVISADA PARA EL ARREGLO PACÍFICO DE LAS CONTROVERSIAS INTERNACIONALES

Las siguientes listas, correspondientes a las tres modalidades de adhesión previstas en el artículo 38 del Acta General Revisada para el Arreglo Pacífico de las Controversias Internacionales, aprobada por la Asamblea General el 28 de abril de 1949, se publican de conformidad con las disposiciones del párrafo 3 del artículo 43 de dicha Acta:

Adhesiones

a) *A todas las disposiciones del Acta (capítulos I, II, III y IV)*

Bélgica	23 de diciembre de 1949
Noruega	16 de julio de 1951
Dinamarca	25 de marzo de 1952
Luxemburgo	28 de junio de 1961
Alto Volta	27 de marzo de 1962

b) *A las disposiciones sobre conciliación y arreglo judicial (capítulos I y II), junto con las disposiciones generales referentes a estos procedimientos (capítulo IV)*

Suecia	22 de junio de 1950
--------------	---------------------

Con las reservas previstas en el inciso a) del párrafo 2 del artículo 39, a fin de excluir del procedimiento descrito en el Acta las controversias que tengan su origen en hechos anteriores a la adhesión.

c) *A las disposiciones sobre conciliación (capítulo I) y a las disposiciones generales concernientes a ese procedimiento (capítulo IV)*

Ninguna.

K. Privilegios e inmunidades

CONVENCIÓN SOBRE LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LAS NACIONES UNIDAS

Durante el año que se examina, Irlanda se adhirió a la Convención sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas. Además, Gambia notificó al Secretario General que se consideraba obligada por la Convención, cuya aplicación se había hecho extensiva a su territorio antes de la independencia. En la actualidad son partes en la Convención 96 Estados.

CONVENCIÓN SOBRE LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

Checoslovaquia e Irlanda se adhirieron a la Convención sobre los privilegios e inmunidades de los organismos especializados, y Gambia, a la cual se aplicaba la Convención antes de que alcanzara la independencia, notificó al Secretario General que se consideraba obligada por ella. En la actualidad son partes en la Convención 62 Estados.

ENMIENDA AL ACUERDO ADICIONAL ENTRE LAS NACIONES UNIDAS Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA RELATIVO A LA SEDE DE LAS NACIONES UNIDAS

Por intercambio de cartas, de fecha 8 de diciembre de 1966, entre el Secretario General y el Representante Permanente de los Estados Unidos de América, se hizo una enmienda al acuerdo adicional entre las Naciones Unidas y los Estados Unidos de América relativo a la Sede de las Naciones Unidas, que fue concertado el 9 de febrero de 1966. Este acuerdo hacía extensiva la aplicación del Acuerdo de 26 de junio de 1947 sobre la Sede a las oficinas que ocupa el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el Alcoa Plaza Associates Building, 866 United Nations Plaza, y a las oficinas del Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas, situadas en 801 United Nations Plaza, ambas en la vecindad inmediata del distrito de la Sede. A su vez la enmienda al acuerdo adicional hizo también extensiva la aplicación del Acuerdo sobre la Sede a los otros locales situados en el mismo Alcoa Plaza Associates Building arrendados para oficinas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

ACUERDO ENTRE LAS NACIONES UNIDAS Y LA REPÚBLICA DE AUSTRIA RELATIVO A LA SEDE DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

El 13 de abril de 1967, las Naciones Unidas y la República de Austria celebraron un acuerdo relativo a la Sede de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Por su resolución 2212 (XXI) del 17 de diciembre de 1966, la Asamblea General había decidido establecer la sede de esa Organización en Viena. Como se dice en el propio Acuerdo, éste es "complementario" de la Convención sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea General, en la que Austria es parte. En consecuencia, el Acuerdo no repite las

disposiciones de la Convención, sino que, más bien, llena ciertas lagunas y aclara determinadas disposiciones de la Convención. También regula cuestiones surgidas como consecuencia del establecimiento de la Sede de la ONUDI en Viena, entre ellas las relativas a control y protección, instalaciones y servicios públicos y derecho de entrada en el distrito de la Sede y de salida del mismo. En el Acuerdo también se procuró aclarar un aspecto ambiguo del régimen de los privilegios e inmunidades de los representantes de los Estados Miembros, pues en él se afirmó en efecto que, con respecto a los privilegios e inmunidades de los representantes de los Estados, el llamado principio de reciprocidad entre los Estados no es aplicable a las relaciones entre un Estado huésped y un Estado Miembro de las Naciones Unidas. Así se hizo estableciendo que las disposiciones del Acuerdo que, en esencia, conceden a los representantes de los Estados Miembros los mismos privilegios e inmunidades que a los enviados diplomáticos, "se aplicarán independientemente de que... el Estado correspondiente... conceda privilegios e inmunidades similares a los enviados diplomáticos o a los ciudadanos de la República de Austria" (Sección 39). Respecto a los funcionarios de la ONUDI, el Acuerdo les concede una inmunidad cuya necesidad se había hecho cada vez más patente últimamente: la exención de impuestos sobre las pensiones pagadas por la Caja de Pensiones de las Naciones Unidas. El Acuerdo fue acompañado de un canje de notas, de la misma fecha, que aclaró algunas de sus disposiciones. El Acuerdo está sujeto a ratificación, que se espera tendrá lugar en breve.

OTROS ACUERDOS QUE CONTIENEN DISPOSICIONES SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

Entre las Naciones Unidas y los Estados Miembros se han concertado también durante el año varios otros acuerdos en los que figuran disposiciones relativas a los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas. Además de los acuerdos modelo relativos a la asistencia técnica, el Fondo Especial, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Programa de suministro de personal de ejecución y dirección, cabe mencionar al respecto un acuerdo con Finlandia relativo al Seminario de las Naciones Unidas sobre la educación cívica y política de la mujer, que se celebrará en Helsinki; un acuerdo con Jamaica relativo al Seminario de las Naciones Unidas sobre la realización efectiva de los derechos civiles y políticos en el plano nacional, que se celebrará en Kingston; un acuerdo con Polonia relativo al Seminario de las Naciones Unidas sobre la realización de los derechos económicos y sociales enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se celebrará en Varsovia; un acuerdo con Túnez relativo a los arreglos para la Segunda Conferencia Cartográfica Regional de las Naciones Unidas para África, que se celebrará en Túnez; un acuerdo con Venezuela relativo a los arreglos para el 12º período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, que se celebrará en Caracas; un acuerdo con Ghana relativo a los arreglos para la primera reunión de ministros de la Comunidad Económica del África Occidental, que se celebrará en Accra; y un acuerdo con Grecia relativo a los arreglos para el Simposio Internacional sobre Desarrollo Industrial, que se celebrará en Atenas.

L. Reglamentos de órganos de las Naciones Unidas

ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

En su resolución 1193 (XLI) del 20 de diciembre de 1966, el Consejo Económico y Social, tomando en consideración el aumento del número de sus miembros, decidió aumentar de dos a tres el número de Vicepresidentes del Consejo y aprobó las siguientes enmiendas a los artículos 20, 22 y 23 de su Reglamento: 1) el artículo 20 fue enmendado con objeto de establecer tres Vicepresidentes, cada uno de los cuales presidirá, según decida el Consejo previa recomendación del Presidente, uno de los comités constituidos para el período de sesiones; 2) el artículo 22 fue enmendado a fin de establecer que el Presidente designará a uno de los Vicepresidentes para que desempeñe sus funciones si aquél se viera obligado a ausentarse durante una sesión o parte de ella; y 3) el artículo 23 fue enmendado para regular la sustitución del Presidente o de uno de los Vicepresidentes mediante elección por el Consejo para el resto del mandato. Un anexo a la resolución dispone: 1) que, al elegir al Presidente del Consejo, se tendrá en cuenta la rotación geográfica equitativa de este cargo entre los grupos regionales siguientes: Estados de África; Estados de Asia; Estados de la América Latina; Estados de la Europa occidental y otros Estados; y Estados socialistas de la Europa oriental; y 2) que los tres Vicepresidentes también se elegirán a base de la distribución geográfica equitativa entre los grupos regionales, exceptuando aquel al que pertenece el Presidente.

En su resolución 1156 (XLI) del 5 de agosto de 1966 sobre la revisión y reevaluación de las funciones y mecanismos del Consejo Económico y Social, éste decidió considerar en un próximo período de sesiones, teniendo en cuenta las sugerencias que habría de presentar el Secretario General, las enmiendas a su reglamento que pudieran ser necesarias como resultado, en especial, de la ampliación del número de miembros y de los cambios en el sistema de sus reuniones. Habiendo examinado las sugerencias hechas por el Secretario General en cumplimiento de esa resolución, el Consejo decidió, el 29 de mayo de 1967: 1) enmendar el segundo párrafo del artículo 4 sustituyendo la expresión "dos Vicepresidentes" por la expresión "tres Vicepresidentes"; 2) enmendar el artículo 19 reemplazando la palabra "representantes" por la palabra "representante" en la última frase, a fin de ajustarse a lo dispuesto en el artículo 18, según el cual cada miembro del Consejo estará representado por un representante acreditado; 3) enmendar los artículos 26 y 27 disponiendo que los comités del Consejo podrán ser comités plenarios o comités de composición limitada, y que solamente los miembros de estos últimos serán designados por el Presidente, con sujeción a la aprobación del Consejo, a menos que éste decida otra cosa; y 4) enmendar asimismo el artículo 26 incluyendo en él una referencia al artículo 20, modificado por la resolución 1193 (XLI) del Consejo, y dejando así claramente establecido que los comités constituidos para el período de sesiones están excluidos de la regla según la cual cada comité del Consejo elegirá los miembros de su Mesa.

También cabe indicar que, en su resolución 1231 (XLII) del 6 de junio de 1967, el Consejo Económico

y Social decidió enmendar los artículos 15, 17 y 18 del reglamento de sus comisiones orgánicas. Estas enmiendas consistieron en lo siguiente: 1) sustituir la expresión "uno o dos" por la expresión "uno o más" en relación con los Vicepresidentes de las comisiones; 2) la designación por el Presidente, si no pudiera estar presente en una sesión o parte de ella, de uno de los Vicepresidentes para que lo sustituya; y 3) la sustitución del Presidente, si su puesto queda vacante, por uno de los Vicepresidentes, con arreglo al orden alfabético inglés de los países a que representen.

INSTALACIÓN DE UN SISTEMA MECÁNICO DE VOTACIÓN

El 7 de diciembre de 1966, la Asamblea General, por recomendación del Secretario General, aprobó el empleo permanente del sistema mecánico de votación en el salón de la Asamblea General y decidió aplazar hasta su vigésimo segundo período de sesiones la decisión sobre la posible ampliación del sistema a otras salas de comisión.

Durante el vigésimo primer período de sesiones de la Asamblea General se estableció una práctica conforme a la cual se utilizó la "votación registrada" como segundo procedimiento para efectuar las votaciones nominales. En una votación registrada no es necesario decir los nombres de las delegaciones. El Presidente pide a los representantes que estén en favor de una propuesta, luego a los que se opongan a ella y por último a los que se abstengan, que aprieten el botón correspondiente, y el mecanismo automático de impresión registra el voto en el panel. A continuación, el Presidente, de conformidad con el artículo 35, anuncia los resultados de la votación, los cuales son registrados en las actas siguiendo el orden alfabético inglés de los nombres de los Miembros. Este sistema de votación permite un ahorro considerable de tiempo, a la vez que garantiza el registro completo de la votación.

M. *Estatuto de la soberanía permanente de los pueblos y las naciones sobre sus riquezas y recursos naturales*

De conformidad con la decisión tomada por la Asamblea General en su vigésimo período de sesiones, la cuestión de la soberanía permanente sobre los recursos naturales fue incluida en el programa del vigésimo primer período de sesiones de la Asamblea, encomendándose su examen a la Segunda Comisión.

En la Segunda Comisión, Argelia, Birmania, Irak, Irán, Panamá, Polonia, la República Árabe Unida, la República Socialista Soviética de Ucrania, la República Unida de Tanzania, Siria y Yugoslavia presentaron un proyecto de resolución, que se revisó dos veces, y que posteriormente también fue patrocinado por Libia, Mauritania, Marruecos, Afganistán, Ceilán, Ecuador, Líbano y Kenia. La Comisión aprobó, por 99 votos contra ninguno y 8 abstenciones, el proyecto de resolución con las modificaciones finalmente introducidas. Por recomendación de la Comisión, la Asamblea General lo aprobó, por 104 votos contra ninguno y 6 abstenciones, como resolución 2158 (XXI).

En esta resolución la Asamblea General: 1) reafirmó el derecho inalienable de todos los países a ejercer una

soberanía permanente sobre sus recursos naturales en interés de su desarrollo nacional; 2) declaró que las Naciones Unidas debían emprender un esfuerzo concertado máximo para encauzar sus actividades de modo que todos los países pudieran ejercer plenamente ese derecho; 3) afirmó que dicho esfuerzo debía contribuir a lograr el máximo aprovechamiento posible de los recursos naturales de los países en desarrollo y a fortalecer su capacidad para emprender ese aprovechamiento por sí mismos, de manera que pudieran ejercer efectivamente su libertad de elección decidiendo la forma como deberán llevarse a cabo la explotación y la comercialización de sus recursos naturales; 4) confirmó que la explotación de los recursos naturales de cada país se sujetará siempre a las leyes y reglamentos nacionales; 5) reconoció el derecho de todos los países, y en particular de los países en desarrollo, a asegurar y aumentar su participación en la administración de empresas que trabajan total o parcialmente con capital extranjero y a tener una participación mayor y equitativa en las ventajas y beneficios derivados de ellas, habida cuenta de las necesidades y objetivos de los pueblos interesados en materia de desarrollo, así como de las prácticas contractuales mutuamente aceptables, y pidió a los países exportadores de dicho capital que se abstuvieran de todo acto que obstaculizara el ejercicio de ese derecho; 6) consideró que, cuando los recursos naturales de los países en desarrollo fueran explotados por inversionistas extranjeros, éstos debían encargarse de la formación adecuada y acelerada de personal nacional de todas las categorías y en todos los campos relacionados con esa explotación; 7) pidió a los países desarrollados que proporcionaran asistencia, incluidos bienes de capital y conocimientos técnicos, a los países en desarrollo que la solicitaran, para la explotación y comercialización de sus recursos naturales, a fin de acelerar su desarrollo económico, y que se abstuvieran de colocar en el mercado mundial reservas no comerciales de productos básicos que pudieran perjudicar los ingresos en divisas de los países en desarrollo; 8) reconoció que las organizaciones nacionales e internacionales creadas por los países en desarrollo para la explotación y comercialización de sus recursos naturales desempeñaban una función importante en la tarea de garantizar el ejercicio de la soberanía permanente de esos países en esta esfera, y que, por lo tanto, se las debía alentar; y 9) recomendó a la Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente, a la Comisión Económica para América Latina, a la Comisión Económica para África y a la Oficina de Asuntos Económicos y Sociales de Beirut que examinaran constantemente la cuestión de la soberanía permanente sobre los recursos naturales en los países de las regiones correspondientes, así como el problema de la utilización económica de estos recursos al servicio de los intereses nacionales de sus pueblos.

En la sección II de la misma resolución, la Asamblea pidió al Secretario General que coordinara las actividades de la Secretaría en la esfera de los recursos naturales con las de otros órganos y programas de las Naciones Unidas, con inclusión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, las comisiones económicas regionales, la Oficina de Asuntos Económicos y Sociales de Beirut, los organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica, y, en particular, con las de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Industrial; que adoptara las medidas necesarias para facilitar, mediante la labor del Centro de Planificación, Proyecciones y Política del Desarrollo, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y del Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo, la inclusión de la explotación de los recursos naturales de los países en desarrollo en los programas de aceleración de su crecimiento económico; y que presentara a la Asamblea General, en su vigésimo tercer período de sesiones, un informe sobre los progresos realizados en el cumplimiento de la resolución.

N. Aspectos jurídicos de la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos

En una carta de fecha 16 de junio de 1966 dirigida al Secretario General, el Representante Permanente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas transmitió un proyecto de tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes, para su examen por la Asamblea General en el vigésimo primer período de sesiones, en relación con el tema del programa propuesto por la URSS el 30 de mayo de 1966.

En una carta de fecha 16 de junio de 1966 dirigida al Presidente de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos, el Representante Permanente de los Estados Unidos de América transmitió un proyecto de tratado sobre la exploración de la Luna y otros cuerpos celestes y, tras referirse a su comunicación del 9 de mayo y a sus consultas posteriores con miembros de la Comisión, propuso que se convocase a la Subcomisión de Asuntos Jurídicos de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos el 12 de julio de 1966 para examinar este asunto.

La Subcomisión de Asuntos Jurídicos celebró su quinto período de sesiones en Ginebra del 12 de julio al 4 de agosto y en Nueva York del 12 al 16 de septiembre de 1966. Se ocupó de la preparación de un proyecto de tratado sobre la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, utilizando para sus trabajos los proyectos de tratados presentados por la URSS y por los Estados Unidos, así como las propuestas hechas por miembros de la Subcomisión con respecto a determinados artículos.

En el quinto período de sesiones de la Subcomisión, se llegó a un acuerdo sobre una serie de artículos del tratado propuesto que cubren, en resumen, los siguientes principios: 1) que el espacio ultraterrestre es de libre exploración y utilización por todos los Estados; 2) que el espacio ultraterrestre no puede ser objeto de apropiación nacional; 3) que las actividades en el espacio ultraterrestre se deben llevar a cabo de conformidad con el derecho internacional; 4) que ningún Estado debe establecer en el espacio ultraterrestre ninguna clase de armas nucleares y que los cuerpos celestes deben utilizarse exclusivamente con fines pacíficos; 5) que se debe dar toda la ayuda posible a los astronautas y que en caso de aterrizaje forzoso se los debe devolver rápidamente al Estado de registro de sus vehículos

espaciales; 6) que los Estados son internacionalmente responsables por sus actividades en el espacio ultraterrestre; 7) que los Estados son internacionalmente responsables por los daños causados por el lanzamiento de objetos al espacio ultraterrestre; 8) que los Estados mantienen su soberanía sobre los objetos que lanzan al espacio ultraterrestre y sobre las personas que viajan en los mismos y que esos objetos deben devolverse al Estado que ha efectuado el lanzamiento si se encuentran fuera de sus límites; y 9) que al realizar actividades en el espacio ultraterrestre se deben respetar los intereses de todos los Estados. Sin embargo, no se logró acuerdo algunos sobre otros aspectos del proyecto de tratado que se discutieron en la Subcomisión, y más concretamente sobre los siguientes puntos: 1) que debería haber libertad de acceso a las instalaciones en los cuerpos celestes; 2) que se debería suministrar información sobre las actividades llevadas a cabo en el espacio ultraterrestre; 3) que el tratado debería aplicarse a las organizaciones internacionales; 4) que se deberían conceder iguales condiciones a otros Estados para seguir el vuelo de los objetos espaciales.

El 17 de septiembre, el Representante Permanente de los Estados Unidos dirigió al Secretario General una carta solicitando que se incluyera en el programa provisional del vigésimo primer período de sesiones de la Asamblea General un tema titulado "Tratado sobre la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, inclusive la Luna y otros cuerpos celestes", a la que acompañaba el texto del tratado propuesto.

El 19 de septiembre de 1966, la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos examinó los resultados de los trabajos del período de sesiones de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos. Con las diferencias considerables de opinión que subsistían sobre los artículos del proyecto del tratado acerca de los cuales no se había logrado un acuerdo, la Comisión tomó nota del informe de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos.

El 4 de octubre de 1966, el Representante Permanente de la Unión Soviética, en una carta dirigida al Secretario General, transmitió un texto revisado del proyecto de tratado de la URSS, para su examen por la Asamblea General en el vigésimo primer período de sesiones, en relación con el tema del programa que había propuesto el 30 de mayo de 1966.

La cuestión de los problemas jurídicos que plantean la exploración y utilización del espacio ultraterrestre fue examinada en el vigésimo primer período de sesiones de la Asamblea General en relación con tres temas de su programa: 1) el tema titulado "Cooperación internacional para la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos: informe de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos", incluido por el Secretario General en el programa provisional de conformidad con la resolución 2130 (XX) de la Asamblea; 2) el tema titulado "Concertación de un tratado internacional sobre los principios que han de regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, de la Luna y de otros cuerpos celestes", propuesto por la URSS el 30 de mayo de 1966, habiéndose modificado la formulación del tema en la Mesa de la Asamblea General; y 3) el tema "Tratado sobre la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, inclusive la Luna y otros cuerpos celestes", propuesto

por los Estados Unidos de América el 17 de septiembre de 1966.

La cuestión del tratado sobre los principios que han de regir las actividades de los Estados en el espacio ultraterrestre se discutió en la Primera Comisión los días 16 y 17 de diciembre. Aun cuando la Unión Soviética y los Estados Unidos habían presentado sus respectivos proyectos de tratados para su examen, éstos no se discutieron. Antes de que la Comisión empezara el debate sobre el proyecto de tratado, las cuestiones sobre las que no se había logrado antes un acuerdo se habían resuelto como resultado de consultas celebradas entre los miembros de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos, y el 15 de diciembre se presentó el texto del Tratado sobre los principios que han de regir la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, para su examen por la Primera Comisión en un anexo a un proyecto de resolución patrocinado por cuarenta y tres países.

A tenor del proyecto de resolución, la Asamblea General, 1) se felicitaba por el Tratado sobre los principios que han de regir la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes; 2) pedía a los Gobiernos depositarios que abrieran el Tratado a la firma y ratificación lo más pronto posible; 3) expresaba la esperanza de que se prestara la adhesión más amplia posible al Tratado; y 4) pedía a la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos, a) que continuara sus trabajos relacionados con la preparación de un acuerdo sobre responsabilidades por daños causados por el lanzamiento de objetos al espacio ultraterrestre, y de un acuerdo sobre asistencia a los astronautas y vehículos espaciales y sobre devolución de los mismos; b) que iniciara el estudio de las cuestiones relativas a la definición del espacio ultraterrestre y a la utilización de éste y de los cuerpos celestes, y c) que informara a la Asamblea General en su vigésimo segundo período de sesiones sobre la marcha de sus trabajos. En el curso del debate, se presentó una enmienda que proponía la ampliación del alcance del estudio de las cuestiones relativas a la definición del espacio ultraterrestre y a la utilización del espacio ultraterrestre y de los cuerpos celestes para incluir las diversas consecuencias de las comunicaciones espaciales. La enmienda fue aceptada por los patrocinadores del proyecto de resolución.

El Tratado estipula, en resumen, lo siguiente: 1) la utilización del espacio ultraterrestre y de los cuerpos celestes en provecho de toda la humanidad; libertad de exploración y utilización del espacio ultraterrestre y de los cuerpos celestes por todos los Estados de conformidad con el derecho internacional; libertad de acceso a todas las regiones de los cuerpos celestes; libertad de investigación científica en el espacio ultraterrestre; 2) el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, no podrá ser objeto de apropiación nacional; 3) las actividades en el espacio ultraterrestre, incluso en la Luna y otros cuerpos celestes, se deberán realizar de conformidad con el derecho internacional y con la Carta de las Naciones Unidas y en interés del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales; 4) prohibición de establecer armas nucleares u otro tipo de armas de destrucción en masa en el espacio ultraterrestre; utilización de la Luna y de los demás cuerpos celestes exclusivamente con fines pacíficos;

prohibición del establecimiento de bases, instalaciones y fortificaciones militares, así como ensayos con cualquier tipo de armas y realización de maniobras militares en los cuerpos celestes; autorización para utilizar personal militar para investigaciones científicas o para cualquier otro objetivo pacífico; y autorización para utilizar cualquier equipo necesario para la exploración de la Luna y de otros cuerpos celestes con fines pacíficos; 5) prestación de ayuda a los astronautas que se encuentren en peligro en el territorio de otro Estado, en alta mar o en el espacio ultraterrestre o en cuerpos celestes, y obligación de devolverlos sanos y salvos al Estado de registro de su vehículo espacial; suministro de información sobre los fenómenos observados que pudieran constituir un peligro para la vida o la salud de los astronautas; 6) responsabilidad internacional de los Estados por las actividades que realicen en el espacio ultraterrestre y en los cuerpos celestes los organismos gubernamentales o las entidades no gubernamentales de su país, y responsabilidad de toda organización internacional y de los Estados que participen en ella por las actividades que puedan realizar en el espacio ultraterrestre; 7) responsabilidad internacional de los Estados por los daños causados por los objetos lanzados al espacio ultraterrestre; 8) mantenimiento por el Estado de registro de la jurisdicción sobre todo objeto que lance al espacio ultraterrestre, así como sobre todo el personal que vaya en él, mientras se encuentre en el espacio ultraterrestre o en un cuerpo celeste, y del derecho de propiedad de tales objetos, incluso de los que hayan descendido o se construyan en un cuerpo celeste; devolución de los objetos que se encuentren fuera del Estado de registro, el cual deberá proporcionar los datos de identificación que se le soliciten antes de efectuarse la restitución; 9) respeto de los intereses correspondientes de los demás Estados en el espacio ultraterrestre; realización de la exploración del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, de forma tal que no se produzca una contaminación nociva ni cambios desfavorables en el medio ambiente de la Tierra; compromiso de celebrar consultas internacionales si una actividad o un experimento proyectado por un Estado o por sus nacionales en el espacio ultraterrestre pudiera crear un obstáculo capaz de perjudicar las actividades de otros Estados; 10) examen por los Estados partes en el Tratado, en condiciones de igualdad, de las solicitudes formuladas por otros Estados partes en el Tratado para que se les den facilidades a fin de observar el vuelo de los objetos espaciales lanzados por dichos Estados; la determinación por acuerdo entre los Estados interesados de la naturaleza de tales facilidades y las condiciones en que podrán ser concedidas; 11) acuerdo para suministrar información al Secretario General de las Naciones Unidas, así como al público y a la comunidad científica internacional, acerca de la naturaleza, marcha, localización y resultados de las actividades en el espacio ultraterrestre; y difusión de esa información por el Secretario General; 12) libertad de acceso, a base de reciprocidad, a todas las estaciones, instalaciones, equipo y vehículos espaciales situados en la Luna y otros cuerpos celestes; notificación anticipada de la intención de hacer una visita, a fin de permitir que se tomen las precauciones necesarias para velar por la seguridad y evitar toda perturbación del funcionamiento normal de la instalación visitada; 13) aplicación del tratado a las actividades efectuadas en el espacio ultraterrestre, tanto en el caso de que esas actividades

las lleve a cabo un Estado por sí solo o junto con otros Estados, incluso cuando se efectúan dentro del marco de organizaciones intergubernamentales internacionales; resolución de los problemas prácticos que puedan surgir en relación con las actividades de las organizaciones internacionales, dentro del marco de la organización internacional pertinente o mediante negociaciones con uno o varios Estados miembros de dicha organización; 14) la firma, ratificación o adhesión de todos los Estados; designación de los Gobiernos de la URSS, el Reino Unido y los Estados Unidos como Gobiernos depositarios; y entrada en vigor cuando hayan depositado los instrumentos de ratificación cinco gobiernos, incluidos los designados como Gobiernos depositarios.

Durante el debate, varias delegaciones pusieron de relieve que la concertación del Tratado contribuiría a fortalecer la paz y a reducir los peligros de conflictos internacionales. Con referencia al Tratado Antártico de 1959 y el Tratado por el que se prohíben los ensayos con armas nucleares en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y debajo del agua, firmado en 1963, se señaló que el Tratado era el tercero de una serie de acuerdos para fomentar la paz y se expresó la esperanza de que esta serie continuaría aumentando. Varias delegaciones opinaron que el Tratado contribuiría a la solución de cuestiones urgentes en la esfera del desarme. Algunas delegaciones sostuvieron que el Tratado fomentaría la colaboración internacional en el espacio ultraterrestre y daría impulso a los esfuerzos para impedir una carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre. Muchas delegaciones recalcaron la importancia del artículo que prohíbe el estacionamiento de armas nucleares en el espacio ultraterrestre y que estipula que la Luna y otros cuerpos celestes deben utilizarse exclusivamente para fines pacíficos; sin embargo, se deploró que esta última disposición aludiese sólo a la Luna y a otros cuerpos celestes y no se aplicase al espacio ultraterrestre en general. Se expresó la opinión de que el Tratado constituiría un paso importante en la preparación del derecho del espacio y establecería una base sólida para pactar acuerdos más detallados sobre problemas jurídicos específicos resultantes de la exploración y utilización del espacio ultraterrestre. Se señaló que el cumplimiento del Tratado causaría dificultades, a menos que se diferenciase lo más rápidamente posible el espacio ultraterrestre del espacio atmosférico.

El 17 de diciembre, la Primera Comisión aprobó el proyecto de resolución de los cuarenta y tres Estados, que la Asamblea General aprobó a su vez por unanimidad como resolución 2222 (XXI).

La Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos se reunió los días 17 y 19 de abril de 1967 para examinar las cuestiones relativas a la organización y a los futuros trabajos de su Subcomisión de Asuntos Jurídicos, teniendo en cuenta las disposiciones de la resolución 2222 (XXI) de la Asamblea General. Se acordó que la Subcomisión de Asuntos Jurídicos continuaría la preparación de los acuerdos sobre la responsabilidad por los daños causados por el lanzamiento de objetos al espacio ultraterrestre y sobre la ayuda a los astronautas y su devolución, y que empezaría al mismo tiempo el estudio de las cuestiones referentes a la definición del espacio ultraterrestre y a la utilización del mismo y de los cuer-

pos celestes, incluso las diversas consecuencias de las comunicaciones espaciales. Al lograr este acuerdo, quedó entendido que la Subcomisión decidiría por sí misma la organización de sus trabajos. La Comisión decidió también que el próximo período de sesiones de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos sería convocado en Ginebra en una fecha que habrían de convenir los miembros de la Comisión. Como resultado de las consultas celebradas de conformidad con esta decisión, se acordó que la Subcomisión de Asuntos Jurídicos se reuniría el 19 de junio de 1967 para un período de tres a cuatro semanas.

En la sección C del capítulo III se describen los demás aspectos de la cuestión de la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos.

O. *Cuestión de la definición de la agresión*

En las memorias anuales del Secretario General para 1958-1959, 1961-1962, 1964-1965 y 1965-1966 se da cuenta de la labor de los tres primeros períodos de sesiones de la Comisión establecida en virtud de la resolución 1181 (XII) de la Asamblea General, de 29 de noviembre de 1957, para determinar cuándo conveniría que la Asamblea General examinara de nuevo la cuestión de la definición de la agresión. El 3 de abril de 1967 la Comisión, abrió su cuarto período de sesiones. Después de celebrar siete reuniones, el 26 de mayo de 1967 decidió aplazar los debates hasta una fecha que habrá de fijar el Presidente, a fin de dar tiempo suficiente a los Miembros para que estudien los diversos proyectos de resolución presentados.

P. *Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas*

El Tribunal Administrativo se reunió en Nueva York del 22 de septiembre al 11 de octubre de 1966 y en Ginebra del 3 al 21 de abril de 1967. En Nueva York el Tribunal examinó tres asuntos y celebró su período anual de sesiones plenarias para elegir Presidente y Vicepresidentes y ocuparse de las cuestiones relativas a su funcionamiento. En Ginebra el Tribunal estudió cuatro asuntos. Seguidamente se resumen los fallos dictados por el Tribunal.

FALLO No. 101, DICTADO EL 5 DE OCTUBRE DE 1966, EN EL ASUNTO DE RAU CONTRA EL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

La demandante, que había entrado al servicio de la Organización en mayo de 1961 en virtud de un nombramiento a corto plazo en el UNICEF en calidad de operadora de máquina IBM, fue nombrada en agosto de 1961 para un período de prueba en el mismo puesto. A causa de las modificaciones previstas en la utilización de las máquinas contables, al término del período de prueba, en mayo de 1963, recibió un contrato a plazo fijo por un año que, en febrero de 1964 fue prorrogado por un año. En abril de 1964, la demandante, calificada de "funcionaria eficiente" en los informes periódicos para los períodos de mayo de 1961 a abril de 1963 y de mayo de 1964 a abril de 1965, fue informada

de que su conducta y trabajo eran objeto de crítica por parte de sus superiores jerárquicos. La demandante negó el fundamento de esa crítica, solicitó que se la cambiara de servicio y recibió sucesivamente varios otros destinos. A su expiración en abril de 1965, el contrato no fue renovado, por lo que recurrió en vano ante la Junta Mixta de Apelación y más tarde sometió el asunto al Tribunal, al que pidió en particular, sea que anulase la decisión en virtud de la cual su nombramiento por un período de prueba había sido transformado, en mayo de 1963, en un nombramiento a plazo fijo y no permanente o regular, sea, a título subsidiario, que se anulase la decisión en virtud de la cual se le había negado, en mayo de 1965, la renovación de su nombramiento a plazo fijo.

El Tribunal estimó que la conclusión principal era inadmisibles, puesto que se refería a una decisión que había sido tomada en 1963, época en que no había sido impugnada por la demandante siguiendo el procedimiento de recurso aplicable. El Tribunal considera igualmente sin fundamento la demanda subsidiaria y recordó que, conforme a la disposición 104.12 b) del Reglamento del Personal, los nombramientos a plazo fijo no dan derecho a su titular a esperar una prórroga ni un nombramiento de tipo diferente. En cuanto a las condiciones en las cuales habían sido juzgados los servicios de la demandante, el Tribunal observó que el demandado había sido informado de ellas por la Junta Mixta de Apelación, y que, por lo tanto, la decisión que había tomado finalmente dependía de su facultad de apreciación.

FALLO No. 102, DICTADO EL 10 DE OCTUBRE DE 1966, EN EL ASUNTO DE FORT CONTRA EL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

El demandante, que había entrado al servicio de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra en julio de 1964 con un nombramiento a corto plazo que no le daba derecho a ninguna indemnización, pidió que este nombramiento se transformara en un contrato a plazo fijo de un año con efecto retroactivo a la fecha de su entrada en funciones, lo que le habría dado derecho a subsidio de instalación y, sobre una base anual, a subsidio de educación, ajuste por lugar de destino oficial, a pago de subsidio por misión y a prestaciones por familiares a cargo. La administración sólo le concedió un nombramiento a plazo fijo por seis meses, que entrañaba el pago de subsidio de instalación y solamente la mitad del importe anual de las otras prestaciones. El demandante pidió al Tribunal, a título principal, que anulase esta decisión y, a título subsidiario, que ordenase el pago de los subsidios y prestaciones correspondientes al nombramiento por él solicitado.

El Tribunal rechazó estas pretensiones. Después de haber examinado las circunstancias relativas a la situación contractual del demandante, comprobó que en ningún momento había recibido este último de ningún funcionario competente a estos efectos comunicación alguna en la que se le asegurara o se le diera la menor esperanza de que se daría curso a su demanda. El Tribunal llegó por ello a la conclusión de que el demandante no tenía ningún título jurídico para solicitar un nombramiento a plazo fijo por un año y que, por lo tanto, no tenía derecho a las prestaciones y demás subsidios que habrían resultado del otorgamiento de ese nombramiento.

FALLO No. 103, DICTADO EL 11 DE OCTUBRE DE 1966, EN EL ASUNTO DE AZZU CONTRA EL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

El demandante había sufrido una caída en el ejercicio de sus funciones y en diciembre de 1961, por recomendación de la Junta Consultiva de Indemnizaciones, el Secretario General le había declarado inválido total y le había otorgado las prestaciones e indemnizaciones correspondientes. Como su estado de salud pareció mejorar, en enero de 1963 la Junta volvió a examinar su caso y recomendó que se suspendieran todos los pagos. El Secretario General aprobó esta recomendación y el demandante presentó un recurso ante la Junta, que, en febrero de 1965, la confirmó. En marzo de 1965 el Secretario General decidió aprobar de nuevo la recomendación de la Junta, por lo que el demandante sometió el asunto al Tribunal, pidiéndole, como demanda principal, que anulase la decisión del Secretario General, alegando la irregularidad del procedimiento seguido por la Junta.

El Tribunal comprobó que no se había ofrecido al demandante ninguna posibilidad de explicar debidamente su posición sobre las cuestiones que habían servido de base a la Junta Consultiva de Indemnizaciones para pronunciarse. En consecuencia, decidió que el procedimiento seguido por la Junta para dictar la recomendación aprobada por el demandado en marzo de 1965 no fue regular y, sin pronunciarse sobre el fondo, remitió el asunto a la Junta para que se siguiese el procedimiento adecuado.

FALLO No. 104, DICTADO EL 14 DE ABRIL DE 1967, EN EL ASUNTO DE GILLEAD CONTRA EL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

El demandante, que había sido destituido sumariamente por falta grave (despido que por definición dispensa de consultar al Comité Mixto de Disciplina) por haber hecho distribuir a las delegaciones de los Estados Miembros, en el curso del vigésimo período de sesiones de la Asamblea General y a través de los servicios de distribución de la Organización, ejemplares de un informe anónimo que tenía la apariencia de un documento de la Asamblea General y contenía información referente a cuestiones administrativas internas, así como una propuesta de que la Asamblea tomase ciertas medidas, pidió al Tribunal que anulase la decisión que había tomado contra él el Secretario General.

El Tribunal rechazó la demanda, y recordó que, según su jurisprudencia, el concepto de falta grave fue introducido para castigar hechos incompatibles con la pertenencia del individuo interesado al personal, y que la supresión del procedimiento disciplinario debe limitarse a los casos en los que la falta es manifiesta y en que el interés del servicio exige la salida definitiva e inmediata. Del examen de los hechos, el Tribunal llegó a la conclusión de que había habido falta a la vez manifiesta y grave, y de que no podía desaprobarse la destitución sumaria ordenada por el demandado.

FALLO No. 105, DICTADO EL 17 DE ABRIL DE 1967, EN EL CASO DE FRANCIS CONTRA EL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

La demandante presentó un recurso ante la Junta Mixta de Apelación contra la decisión de destituirlo del puesto que ocupaba en la secretaría de la Oficina de

asistencia técnica en Rangún. La Junta declaró que el recurso era inadmisibile por haber sido presentado después de los plazos establecidos en la disposición 111.3 del Reglamento del Personal, por lo que la demandante pidió al Tribunal que anulase la decisión de la Junta.

El Tribunal estimó que la parte de la disposición 111.3 del Reglamento del Personal relativa a los plazos sólo es aplicable a los funcionarios de la Sede. Basándose en un acuerdo concertado entre el demandado y la demandante por el que se invitaba a la Junta a examinar el recurso en cuanto al fondo, el Tribunal estimó ser competente para conocer el fondo de la cuestión y decidió que, no habiéndose llegado a un arreglo amistoso entre las partes, la demandante podría presentarle una memoria explicativa y conclusiones tanto sobre el fondo del litigio como sobre los plazos aplicables en su caso.

FALLO No. 106, DICTADO EL 20 DE ABRIL DE 1967, EN EL ASUNTO DE VASSEUR CONTRA EL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

A consecuencia del retiro por razones presupuestarias de una oferta de empleo, hecha al demandante y aceptada por él, el demandado había otorgado a este último una indemnización igual a la que habría recibido si hubiese entrado en funciones y hubiese sido despedido inmediatamente, es decir, el equivalente aproximado de tres meses y medio de sueldo. El demandante pidió al Tribunal que anulase esta decisión y que fijase como indemnización la totalidad del sueldo y de las prestaciones que habría recibido durante toda la vigencia de su contrato.

El demandado opuso una excepción de inadmisibilidad, haciendo notar que el demandante no había pasado nunca a ser funcionario de la Organización, pero el Tribunal rechazó la excepción haciendo constar que había habido un verdadero contrato entre las partes, a tenor del cual el demandado se comprometía a dar empleo al demandante, y que, puesto que este contrato se relacionaba con el procedimiento de nombramiento establecido por el Estatuto y el Reglamento del Personal, era indiscutible que el litigio se debía resolver basándose en normas jurídicas cuya aplicación corresponde al Tribunal. En cuanto al fondo, para determinar con arreglo a qué bases se debía fijar la indemnización, el Tribunal examinó el alcance de los compromisos contraídos,

las condiciones en las que no habían sido cumplidos y los daños causados efectivamente, al que otorgó 1.000 dólares más de la indemnización ofrecida por el demandado.

FALLO No. 107, DICTADO EL 21 DE ABRIL DE 1967, EN EL ASUNTO DE LA SRTA. B. CONTRA EL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

La demandante pidió al Tribunal, como demanda principal, que anulase la decisión del Secretario General a tenor de la cual su nombramiento a plazo fijo no había sido prorrogado por razones médicas y que ordenara que se estableciese un procedimiento médico regular, en virtud del cual el funcionario interesado y la Administración designasen cada uno a un médico, y estos dos médicos designasen a su vez a un tercero, a fin de formar un grupo encargado de examinar los casos de despido por razones de salud.

El Tribunal rechazó la demanda, hizo constar que el Director del Servicio Médico, que es el responsable de la aplicación de las normas médicas que los funcionarios deben cumplir antes de su nombramiento, había considerado a la demandante apta, desde el punto de vista médico, para su nombramiento por un período de corta duración solamente, y consideró que no era de su competencia examinar el valor de la conclusión a la que había llegado el Director del Servicio Médico. En cuanto al procedimiento médico solicitado por la demandante, el Tribunal recordó que en fallos anteriores había subrayado la necesidad de establecer un procedimiento médico regular en los casos en que el funcionario interesado impugnase el dictamen médico de la Administración, pero aceptó la distinción hecha por la Junta Mixta de Apelación entre una decisión médica que afecta a los derechos adquiridos de un funcionario, como cuando, por razones de salud, se rescinde un nombramiento de carácter permanente, y una decisión médica cuyo objeto es permitir determinar si un candidato es apto para ser contratado o para obtener una prórroga de contrato. En el primer caso, el procedimiento regular puede requerir que se pida un dictamen médico independiente, mientras que en el segundo caso el candidato no tiene ningún derecho a ser contratado.

Por orden del Tribunal, el nombre de la demandante no figura en las versiones del fallo que se hacen públicas.

REFERENCIAS

A. Corte Internacional de Justicia

I. C. J. Yearbook, 1966-1967.

South West Africa, Second Phase, Judgment, I. C. J. Reports 1966, pág. 6.

Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Order of 23 November 1966, I. C. J. Reports 1966, pág. 507.

North Sea Continental Shelf (Dinamarca/República Federal de Alemania), Order of 8 March 1967, I. C. J. Reports 1967, pág. 3.

North Sea Continental Shelf (Países Bajos/República Federal de Alemania), Order of 8 March 1967, I. C. J. Reports, 1967, pág. 6.

Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Order of 12 April 1967, I. C. J. Reports 1967, pág. 9.

B. Comisión de Derecho Internacional

C. Conferencia Internacional de Plenipotenciarios sobre el Derecho de los Tratados

Para los informes de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en la segunda parte de su 17° período de sesiones (3 a 28 de enero de 1966) y en su 18° período de sesiones (4 de mayo a 19 de julio de 1966), véase *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Suplemento No. 9 (A/6309/Rev.1).*

Para otros documentos pertinentes y una lista de las actas correspondientes, véase *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Anexos, tema 84 del programa.*

Para los documentos pertinentes y las actas relativas a la elección de los miembros de la Comisión de Derecho In-

ternacional, véase *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Anexos*, tema 19 del programa; e *ibid.*, vigésimo primer período de sesiones, *Sesiones Plenarias*, 1460a. sesión.

D. Examen de los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas

E. Cuestión de los métodos para la determinación de hechos

Para los documentos pertinentes y una lista de las actas correspondientes, véase *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Anexos*, tema 87 del programa.

F. Proyecto de declaración sobre el derecho de asilo

Para los documentos pertinentes y una lista de las actas correspondientes, véase *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Anexos*, tema 85 del programa.

G. Programa de asistencia de las Naciones Unidas para la enseñanza, el estudio, la difusión y una comprensión más amplia del derecho internacional

Para los documentos pertinentes y una lista de las actas correspondientes, véase *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Anexos*, tema 86 del programa.

H. Establecimiento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional

Para los documentos pertinentes y una lista de las actas correspondientes, véase *Documentos Oficiales de la Asamblea*

General, vigésimo primer período de sesiones, Anexos, tema 88 del programa.

L. Reglamentos de órganos de las Naciones Unidas

Para los documentos pertinentes y una lista de las actas correspondientes, véase *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 41º período de sesiones, Anexos*, tema 4 del programa; *ibid.*, 41º período de sesiones (continuación), *Anexos*, tema 15 del programa; *ibid.*, 42º período de sesiones, *Anexos*, temas 11 y 21 del programa; y *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Anexos*, tema 25 del programa.

M. Estatuto de la soberanía permanente de los pueblos y las naciones sobre sus riquezas y recursos naturales

Para los documentos pertinentes y una lista de las actas correspondientes, véase *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Anexos*, tema 45 del programa.

N. Aspectos jurídicos de la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos

Para los documentos pertinentes y una lista de las actas correspondientes, véase *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Anexos*, temas 30, 89 y 91 del programa.

O. Cuestión de la definición de la agresión

Para los proyectos de resoluciones, véase A/AC.91/L.19, L.20 y L.21.

P. Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas

Fallos números 101 a 107 del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas: AT/DEC/101 a 107.

Actividades de información pública

Con arreglo a sus atribuciones, la Oficina de Información Pública continuó colaborando estrechamente con los medios informativos nacionales e internacionales, facilitándoles en todo momento información completa sobre las actividades de las Naciones Unidas.

Se adoptaron medidas para suministrar información sobre las reuniones celebradas en Africa por el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, y también se concertaron arreglos especiales para informar sobre la labor del Seminario Internacional sobre Apartheid que se celebró en Brasilia en agosto de 1966.

Se hicieron planes para la prestación de servicios de información relativos a la celebración del Año Internacional del Turismo (1967) y del Año Internacional de los Derechos Humanos (1968). Entre las conmemoraciones especiales en relación con las cuales se publicó material informativo, figuraron el Día de las Naciones Unidas, que se dedicó en 1966 a la causa de los refugiados, el Día de los Derechos Humanos y el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial (21 de marzo).

De Conformidad con la resolución 1176 (XLI) del Consejo Económico y Social se preparó un informe, para su consideración en el 43º período de sesiones de dicho Consejo, sobre las medidas que deberán adoptarse a fin de hacer más eficaces las actividades de las Naciones Unidas en materia de información sobre su labor en las esferas económicas, social y de derechos humanos. También fue publicado un informe que pidió igualmente el Consejo mediante su resolución 1176 (XLI), en el que figuran sugerencias sobre la forma en que los programas de información de los Estados Miembros y, según proceda, de las instituciones docentes, agrupaciones cívicas o de la comunidad podrían prestar apoyo a las Naciones Unidas por medio de la prensa, la radio, la televisión y el cinematógrafo.

La Oficina de Información Pública ha emprendido asimismo un examen y reevaluación de sus políticas, procedimientos y prácticas, en función de la experiencia obtenida en el curso de los veinte últimos años y de las necesidades y posibilidades existentes. Ese informe, después de ser considerado por la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, será presentado a la Asamblea General en su vigésimo segundo período de sesiones.

Figuran a continuación detalles sobre estas y otras actividades correspondientes a 1966-1967.

SERVICIO DE ENLACE CON LA PRENSA

El Servicio de Enlace con la Prensa continuó proporcionando información sobre las actividades de las Naciones Unidas a los corresponsales de prensa y facilitando su acceso a reuniones, documentos, conferencias y charlas informativas, así como a otras fuentes de información.

Durante el año pasado se publicaron unos 3.452 comunicados para los corresponsales acreditados ante la Sede y en los centros de información de las Naciones Unidas. Entre ellos figuraban informaciones generales sobre las reuniones de las Naciones Unidas, textos de discursos, transcripciones de las conferencias de prensa del Secretario General y del Presidente de la Asamblea General, anuncios de actividades relativas a la esfera económica y social, documentos especiales de consulta y demás material básico sobre temas de interés actual. El *Resumen Semanal de Noticias* en ediciones inglesa, francesa y española, apareció también regularmente.

Entre los documentos básicos preparados y distribuidos por el Servicio de Enlace con la Prensa figuraron el programa anotado del vigésimo primer período de sesiones de la Asamblea General, para su utilización tanto por los corresponsales como por las delegaciones, y un documento de conjunto sobre las resoluciones adoptadas en ese período de sesiones.

Los funcionarios de la Oficina de Información Pública celebraron sesiones informativas diarias en la Sede y los Servicios de Enlace con la Prensa ayudaron a preparar conferencias de prensa de miembros de las delegaciones y altos funcionarios de la Secretaría y de otros órganos de las Naciones Unidas. En el curso del año pasado se celebraron unas 85 conferencias de esta índole, además de buen número de sesiones informativas a cargo de funcionarios de prensa de las delegaciones.

SERVICIO DE PUBLICACIONES

La publicación *ONU — Crónica Mensual*, que aparece en inglés, francés y español informó durante el curso del año acerca de los debates y las decisiones de los principales órganos de las Naciones Unidas, así como de las actividades de los comités especiales. La *Crónica* publicó asimismo varios artículos especiales sobre los trabajos de la Organización así como sobre la labor de los organismos especializados. Algunos de esos artículos se reimprimieron en forma de folletos.

Se publicó la decimonovena edición de la obra principal de referencia sobre la Organización, el *Anuario de las Naciones Unidas*, 1965. El *Anuario* describe con

la necesaria autoridad y en forma resumida los debates y las decisiones de diversos órganos de las Naciones Unidas así como las actividades principales que efectúan durante el año las organizaciones intergubernamentales relacionadas con las Naciones Unidas, y ofrece un índice completo de sus materiales. Han comenzado los trabajos de preparación de la edición de 1966.

Durante el año se publicaron, en ediciones en inglés, dos importantes libros de consulta: *The United Nations and Disarmament, 1945-1965*, y *The Work of the International Law Commission*. Además, se está terminando de preparar la octava edición de la obra *Everyman's United Nations*. Se están preparando versiones de esos libros en español, francés y otros idiomas.

El Servicio de Publicaciones siguió editando folletos, hojas sueltas y volantes de carácter general sobre las actividades de la Organización, en unos 50 idiomas. A fin de conmemorar el Día de las Naciones Unidas de 1966, que se dedicó a la causa de los refugiados, el Servicio publicó dos folletos titulados respectivamente, *UNHCR: What It Is, What It Does* y *UNRWA and the Palestine Refugees*. Se publicó un folleto en relación con la celebración del Año Internacional de Turismo. Se están preparando diversas publicaciones para el Año de los Derechos Humanos, 1968, entre las que figuran *The United Nations and Human Rights* y *Questions and Answers on Human Rights*. Los textos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos y de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial fueron impresos o reimprimos en forma de folletos.

En relación con la política de la República de Sudáfrica se hicieron dos reimpresiones de artículos de la *Crónica: The Effects of Apartheid on Education, Science and Culture* y *Repressive Measures in South Africa — Action by the Commission on Human Rights* — además de otro artículo titulado "*The United Nations and Apartheid — Review of Recent Developments*".

En 1967 se inició la publicación de una nueva serie de folletos titulada *Decisiones de la Asamblea General*, en la que figuran los textos de las resoluciones más importantes de la Asamblea General en las esferas política, económica, social y de derechos humanos.

Entre otros folletos publicados durante el período de referencia se encuentran los siguientes: *Basic Facts About the United Nations*; *Naciones Unidas — Qué son — Qué hacen — Cómo trabajan*; *Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: Qué es, Qué hace, Cómo funciona*; *Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo: Documentos básicos relativos a su establecimiento y actividades*; *Símpoio Internacional sobre Desarrollo Industrial*; *Declaración sobre el fomento entre la juventud de los ideales de paz, respeto mutuo y comprensión entre los pueblos*.

Se prestó ayuda a escritores ajenos a la Organización y a editoriales privadas en la preparación de libros y artículos sobre las Naciones Unidas.

SERVICIOS DE TELEVISIÓN Y DE CINEMATOGRAFÍA

La televisión se ha convertido ahora en un medio básico para proporcionar información y las organizaciones nacionales de televisión están utilizando en forma creciente los programas e instalaciones de las Nacio-

nes Unidas. En la actualidad hay unos 200 millones de receptores de televisión en unos ciento diez países. Al estar ya en funcionamiento dos sistemas de comunicación mediante satélites y al estar estableciéndose un número cada vez mayor de estaciones terrestres en todo el mundo, es de esperar que en el curso de los dos o tres años próximos prácticamente todas las organizaciones de televisión estarán en condiciones de informar directamente sobre lo que ocurre en las Naciones Unidas. Los servicios de televisión de las Naciones Unidas han organizado más de treinta emisiones de televisión a Europa y al Lejano Oriente mediante satélites. Una sola emisión, como una reunión del Consejo de Seguridad sobre la crisis del Oriente Medio, es recibida por más de treinta organizaciones de televisión de otros países. Por lo tanto, los Servicios de televisión de las Naciones Unidas están llamados a aceptar responsabilidades cada vez mayores, si bien el hecho de poseer equipos anticuados e inadecuados dificulta gravemente a las organizaciones nacionales el acceso a las deliberaciones de las Naciones Unidas.

El rápido aumento de la demanda de películas y emisiones de televisión en color plantea también nuevos problemas relacionados con lo inadecuado de los equipos. La televisión en color lleva ya muchos años de utilización en Norteamérica y en el Japón, y se espera que a fines de 1967 transmitan también en color otros países como Alemania, Francia, México, los Países Bajos, el Reino Unido y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

En el curso del año, los Servicios de televisión y de cinematografía de las Naciones Unidas proporcionaron nuevos materiales y programas documentales a un gran número de organizaciones de televisión. Se distribuyó al mundo entero, en forma directa o en películas, por intermedio de agencias internacionales de noticias que sirven a prácticamente todas las organizaciones de televisión existentes material informativo sobre el vigésimo primer período de sesiones de la Asamblea General, las sesiones del Consejo de Seguridad y, en particular, las actuaciones del Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales y las del Seminario Internacional sobre el Apartheid, que se celebró en Brasilia. Con destino a las organizaciones nacionales de televisión interesadas se preparó un juego especial de materiales informativos relacionados con el vigésimo aniversario de la Comisión Económica para Europa.

En 1966 continuaron produciéndose y distribuyéndose programas corrientes televisados y programas documentales, llevados a cabo en virtud del acuerdo de distribución de los gastos. Diversas organizaciones de televisión de veintiséis Estados y territorios produjeron diez o más programas documentales sobre las Naciones Unidas en virtud de ese acuerdo. También se transmitieron programas de las Naciones Unidas a otros doce Estados y territorios. Aunque algunas organizaciones de televisión produjeron sus propias adaptaciones a sus idiomas, los Servicios de televisión de las Naciones Unidas produjeron de acuerdo con la demanda, programas en árabe, español, francés e inglés.

A petición de los interesados se produjeron ocho programas de las Naciones Unidas destinados a emisiones escolares y a fines docentes generales. En el curso del vigésimo primer período de sesiones de la Asamblea General se produjeron programas de noticias de interés

regional, en forma de revista, entre los que figuró una revista árabe a la que se suscribieron nueve organizaciones de televisión del África del Norte y del Cercano Oriente, además de un boletín semanal de noticias televisadas en español, que se distribuyó en las regiones de habla española. Los centros de producción de materiales informativos y visuales de las Naciones Unidas organizaron, contando con recursos locales, transmisiones periódicas y entrevistas de interés general.

La serie de películas informativas básicas sobre la estructura del sistema de las Naciones Unidas siguió distribuyéndose ampliamente y algunas de las películas se hicieron en color. Esas películas y determinados programas informativos de televisión se distribuyeron para su exhibición ante grupos y escuelas en más de 110 puntos establecidos en los centros de información y en oficinas del PNUD y además se pusieron a la disposición de distribuidores comerciales en ochenta y cuatro Estados y territorios. Los informes relativos a la distribución a partir de los puntos indicados, muestran la existencia de un interés muy alentador en esos programas por parte de muy amplios auditorios.

SERVICIOS DE RADIO

Los Servicios de radio de las Naciones Unidas siguieron prestando ayuda a las organizaciones nacionales de radio, así como a determinadas estaciones de radio del mundo entero, en sus esfuerzos para ofrecer a sus oyentes información sobre las actividades de la Organización.

Se proporcionaron facilidades técnicas y de otro tipo a los corresponsales de radio acreditados. El número de corresponsales de radio permanentemente acreditados ante la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York fue de cien como promedio, siendo varios centenares los que se valieron de los Servicios de las Naciones Unidas en ocasiones informativas especiales.

Las sesiones del Consejo de Seguridad y del vigésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General, así como de su quinto período extraordinario de sesiones fueron objeto de transmisión directa y completa en América del Norte, y por onda corta a Europa, el Cercano Oriente, África y a la América Latina.

A petición de las organizaciones de radio continuó suministrándose material grabado procedente de la fonoteca y se efectuaron esfuerzos especiales para fomentar la producción de programas relativos a las Naciones Unidas por las cadenas nacionales de radio y por las estaciones no afiliadas. Además, los Servicios de radio de las Naciones Unidas produjeron, tanto en sus propios estudios como en los de algunas organizaciones nacionales de radio, diversos programas en unos treinta idiomas que se transmitieron a todas las partes del mundo. Noventa y ocho Estados y territorios utilizaron materiales de radio de las Naciones Unidas al menos dos veces por semana, mientras otros catorce Estados y territorios los utilizaron semanalmente; por último catorce Estados y territorios más los usaron ocasionalmente.

Los programas producidos por los Servicios de radio de las Naciones Unidas consistieron en resúmenes ordinarios de noticias, revistas radiofónicas, reportajes y documentales. Si bien se mantuvo, como en años pasados, el mayor volumen posible de información acerca de las cuestiones políticas, se dedicó especial atención a los trabajos de las Naciones Unidas en las esferas de

la descolonización, del apartheid y del desarrollo económico y social.

Se dio gran publicidad a las reuniones del Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, tanto en la Sede como en África y en el Cercano Oriente. Se suministró información especial sobre las deliberaciones de la Asamblea General relativas a la cuestión del África Sudoccidental y al Seminario Internacional sobre apartheid. Con ocasión de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial fueron ampliamente usados por las organizaciones de radio y las estaciones de todo el mundo el mensaje radiodifundido del Secretario General y un programa especial preparado al efecto por los Servicios de radio.

En el primer semestre de 1967 se produjeron programas especiales destinados a conmemorar, respectivamente, los vigésimos aniversarios de la CEPE y de la CEPALO. Se produjeron también otros dos programas especiales cuyo tema fue la cooperación económica en América Central y en América Latina. Por último, se está produciendo una serie de siete programas sobre diversos aspectos del desarrollo económico y social en los que se utiliza material muy reciente reunido, sobre todo, por funcionarios de información de las Naciones Unidas en Asia, África y América Latina.

Durante el año se produjo también otra serie de siete programas titulada "Coat of Many Colours" (traducida al español con el título "Emblema para muchas Banderas") destinada a auditorios que deseen adquirir un conocimiento básico de los trabajos de las Naciones Unidas.

SERVICIOS FOTOGRÁFICOS Y DE EXPOSICIONES

Además de producir material informativo corriente acerca de las reuniones de órganos de las Naciones Unidas en la Sede y en la Oficina Europea, se adaptaron disposiciones en el curso del año para ofrecer información gráfica sobre otras importantes reuniones y conferencias de las Naciones Unidas celebradas en el mundo entero. Se enviaron misiones fotográficas especiales a varios países de África del Norte y Occidental, Asia, América Central y América Latina, para obtener información visual sobre las actividades de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en la esfera del desarrollo.

Se dieron facilidades a fotógrafos de agencias, periódicos y revistas para recoger información fotográfica de los acontecimientos en la Sede; y asistieron a conferencias informativas en las que se les explicaron las actividades de las Naciones Unidas sobre el terreno.

Siguieron distribuyéndose fotografías procedentes de los archivos fotográficos de las Naciones Unidas entre los servicios de información de los gobiernos, y entre editores de periódicos, revistas y libros, para su utilización en diversos medios de información, lo que se hizo principalmente mediante los centros y oficinas de información de las Naciones Unidas. En el curso del año el personal de la Sede atendió a un gran número de solicitudes directas de material.

Las fotografías procedentes de los archivos de las Naciones Unidas constituyen la base de las actuales producciones visuales. Se tiraron y distribuyeron en unos cuarenta y cuatro idiomas — localmente en mu-

chos casos — 17.000 ejemplares en total de la serie de fotografías de la exhibición anual, compuesta por diecisiete carteles en los que se describen los trabajos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados. Se produjeron murales con títulos en inglés, francés y español, y además en versiones sin títulos destinadas a ser impresas en otros idiomas, sobre la CEPE y la asistencia prestada por las Naciones Unidas a los refugiados. Estos últimos murales se prepararon en cooperación con el ACNUR y el OOPS para su distribución en relación con las actividades del Día de las Naciones Unidas. Se prepararon y distribuyeron ediciones puestas al día de los murales sobre la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Se han utilizado con regularidad fotografías de las Naciones Unidas en la sección fotográfica de *ONU — Crónica Mensual*, que es preparada por los servicios.

Se imprimió en forma de cartel la Declaración Universal de Derechos Humanos en versiones árabe, china, española, francesa, inglesa y rusa, para su distribución en el curso del Año de los Derechos Humanos.

CENTROS DE INFORMACIÓN

Los cincuenta centros de información que funcionan actualmente suministraron información sobre las Naciones Unidas y los organismos relacionados con ellas a unos ciento veintiocho países y territorios. Figuran ese total de centros los servicios de información de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y los de las comisiones económicas regionales en Addis Abeba, Bangkok y Santiago. A fin de satisfacer las necesidades de la prensa, la radio y la televisión en sus respectivas zonas, los centros de información mantienen estrecho contacto con los medios informativos oficiales y privados, así como con organizaciones no gubernamentales y grupos de carácter profesional. Los centros colaboran también estrechamente con las autoridades e instituciones académicas en la preparación de programas relacionados con la enseñanza acerca de las Naciones Unidas y con los trabajos de los organismos especializados. Además, los centros envían a la Sede información sobre las actividades de las Naciones Unidas que se desarrollan en sus regiones respectivas, para su redistribución.

En mayo de 1967 se inauguró un centro de información en Lagos, para prestar servicios a la República Federal de Nigeria.

SERVICIOS DE ENLACE CON EL PÚBLICO

En octubre de 1966 y después de haberse realizado un estudio acerca de las funciones de la Oficina de Información Pública que estaban estrechamente relacionadas entre sí, el Servicio de Visitantes fue trasladado de la División de Prensa y Publicaciones a la División de Relaciones Externas. El Servicio de Visitantes, la Sección de Organizaciones no Gubernamentales y la Sección de enlace en materia de educación se agruparon bajo los Servicios de Enlace con el Público.

Programas de estudio y pasantías

El sexto programa triangular de estudios, que se celebró en la Sede del 12 de septiembre al 7 de octubre de 1966, adoptó la forma de seminario para autores de libros de texto y otros medios didácticos para uso en los programas de enseñanza sobre las Naciones Uni-

das en los Estados Miembros, agrupados en función del idioma. Asistieron al mismo dieciocho participantes de países de habla castellana, entre los que figuraban diecisiete de América Latina y uno de España. La UNESCO participó en la selección de candidatos y colaboró en la realización del programa; otros organismos facilitaron conferenciantes, documentos de trabajo y documentación en general. Los materiales de enseñanza que resulten del seminario serán editados por las adecuadas autoridades docentes, editores comerciales y otros editores de los Estados Miembros, sin ocasionar gastos a las Naciones Unidas.

Como en años anteriores, se desarrollaron dos programas de pasantías para estudiantes universitarios en el verano de 1966: uno en la Sede y el otro en la Oficina Europea de las Naciones Unidas en Ginebra. Cuarenta y siete estudiantes y trece observadores, procedentes de veintidós países, participaron en el programa de la Sede, y noventa y tres estudiantes y seis observadores de cuarenta países participaron en el programa de Ginebra, que coincidió con el período de sesiones de verano del Consejo Económico y Social. Ambos programas pretenden dar a grupos selectos de estudiantes destacados de diversos países, que se interesen por los asuntos internacionales, la economía, el derecho y materias afines, la oportunidad de estudiar las Naciones Unidas y sus organismos directamente mediante conferencias, discusiones de grupo, asistencia a sesiones de órganos de las Naciones Unidas y proyectos concretos de estudio. Ambos programas se llevan a cabo sin gastos directos para las Naciones Unidas.

Enseñanza acerca de las Naciones Unidas

Como en años anteriores, se mantuvo estrecha cooperación con los organismos especializados, sobre todo con la UNESCO y con las autoridades académicas nacionales y las organizaciones no gubernamentales, a fin de alentar y ayudar a los programas de enseñanza sobre el sistema de organizaciones de las Naciones Unidas en instituciones educativas de todos los niveles y entre los grupos de enseñanza de adultos. En la Sede y en los centros de información de las Naciones Unidas se facilitaron instalaciones, material y servicios.

Los centros mantuvieron contactos permanentes con las autoridades académicas de sus sectores para ampliar e intensificar el estudio de temas de las Naciones Unidas en escuelas, instituciones de formación de maestros, colegios universitarios y universidades.

Se prestó especial atención a la ayuda a los seminarios para personal docente, sobre todo a los celebrados en los planos nacional y provincial, organizados generalmente por ministerios de educación o universidades en colaboración con la Asociación de las Naciones Unidas del país interesado. Durante el período que se examina fueron organizados seminarios de ese tipo en Afganistán, Argentina, Ceilán, Colombia, Italia, Japón, Tailandia y Uruguay.

Organizaciones no gubernamentales

Se solicitó la activa cooperación de más de 200 organizaciones internacionales y nacionales inscritas en la Oficina de Información Pública, para contribuir a la celebración del Año Internacional del Turismo y del Año Internacional de los Derechos Humanos, de conformidad con las resoluciones de la Asamblea General.

Muchas de estas organizaciones habían comenzado ya los preparativos para la celebración del Año Internacional de los Derechos Humanos y diversas e importantes publicaciones de algunas de esas organizaciones habían contribuido a centrar la atención pública en los objetivos y actividades del Año, así como en otras materias de interés de las Naciones Unidas. La Oficina de Información Pública proporcionó servicios informativos y otros tipos de asistencia.

Los representantes de las organizaciones no gubernamentales manifestaron gran interés en las sesiones semanales informativas que fueron preparadas para ellos en la Sede sobre materias de interés de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, sobre todo en las esferas económica y social.

Servicio de visitantes

Las actividades de promoción que se llevaron a cabo hicieron que aumentase el número de personas que visitaron la Sede en el curso del año. No sólo fue mayor el número de personas que tomaron parte en las visitas con guías, sino que también muchas organizaciones influyentes encontraron sus primeras visitas lo suficientemente satisfactorias como para programar visitas anuales para otros grupos de sus miembros y empleados. Es especialmente digno de notar el aumento del interés manifestado en las diversas actividades de las Naciones Unidas, particularmente en las relativas a las esferas económicas y social. Ese aumento de interés se ha manifestado en solicitudes de sesiones de información así como de documentación y materiales informativos sobre cuestiones concretas relativas a asuntos como las negociaciones arancelarias del GATT y los períodos de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo.

Durante el segundo semestre de 1966 y el primero de 1967 se produjo un 15% de aumento en el número de visitantes que tomaron parte en las visitas guiadas de la Sede. El aumento registrado en los meses de invierno, en los que habitualmente disminuye el número de visitantes, se elevó al 50% en comparación con los mismos meses (enero y febrero) del año anterior. En 1966 el número total de visitantes fue de 1.064.208.

También en 1966 se organizaron programas especiales para 1963 grupos, compuestos en total de 110.119 personas. En 1965 se atendió a 1.844 grupos, compuestos por un total de 105.690 personas. El número de espectadores que acudieron a las proyecciones de películas en 1966 ascendió a 109.738, en tanto que en 1965 el total fue de 105.000.

En 1966, la Sección de Información al Público recibió más de 76.500 solicitudes de información. La mayoría de las consultas se refería a problemas de asistencia y de desarrollo económico y a la situación en Viet-Nam, Rhodesia del Sur y África Sudoccidental. También se manifestó interés especial acerca de la situación en el Cercano Oriente. Fueron también objeto de gran número de solicitudes de información los problemas de desarrollo de África, América Latina y Asia.

Ceremonias especiales

Al observar el día de las Naciones Unidas en 1966 se dedicó atención especial a la causa de los refugiados, de conformidad con la resolución 2038 (XX). En la preparación y distribución de los materiales producidos a este efecto por la Oficina de Información Pública, se

mantuvo estrecha colaboración con el ACNUR y el OOPS. En los programas celebrados en muchos países, y en los materiales especiales producidos en ellos, se reflejó ampliamente el hecho de que esas ceremonias coincidían con el vigésimo aniversario de la UNESCO.

En varios países, la coordinación de las ceremonias estuvo a cargo de comités nacionales en los que figuraban representantes del gobierno junto con representantes de los principales medios de información y de las organizaciones no gubernamentales. Entre las ceremonias hubo mensajes o declaraciones de los Jefes de Estado o de Gobierno, reportajes especiales de prensa y programas especiales de radio y televisión. Además, las organizaciones no gubernamentales, escuelas, colegios universitarios y universidades celebraron otros actos tales como seminarios, conferencias, discursos, exhibición de películas, programas de estudio, exposiciones y reuniones modelo de las Naciones Unidas. Entre el material especial producido por la Oficina de Información Pública figuraron hojas sueltas sobre el Día de las Naciones Unidas en 41 idiomas, una exhibición fotográfica con títulos en 30 idiomas, un volante para las escuelas y un folleto en el que se ofrecían sugerencias para oradores, en español, francés e inglés. La radio de las Naciones Unidas distribuyó programas y materiales especiales a más de cien países y territorios, incluido un documental de media hora titulado *En último análisis*. El Secretario General, el Presidente de la Asamblea General y el Presidente del Consejo de Administración Fiduciaria pronunciaron alocuciones para celebrar el Día de las Naciones Unidas. En la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York en la Sala Pleyel de París y en el Palacio de las Naciones en Ginebra se celebraron conciertos conmemorativos que en parte fueron televisados o transmitidos por radio a treinta y cinco países.

La Oficina de Información Pública, en estrecha colaboración con otras oficinas, estuvo constantemente dedicada a preparar las ceremonias conmemorativas del Año Internacional del Turismo (1967) y del Año Internacional de los Derechos Humanos (1968). Se pidió a los directores de los centros de información que, en colaboración con los Gobiernos Miembros, medios informativos, organizaciones no gubernamentales, e instituciones docentes, fomentasen medidas locales adecuadas para difundir información sobre los objetivos de esos dos años. Se enviaron también cartas a las organizaciones no gubernamentales relacionadas con la Oficina de Información Pública invitándolas a participar en las ceremonias relativas al Año Internacional del Turismo y el Año Internacional de los Derechos Humanos y se les envió información acerca de los materiales disponibles producidos por la Oficina de Información Pública y por los centros de información para ser distribuidos durante 1967 y 1968.

Los centros de información de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales en contacto con la Oficina de Información Pública participaron en la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.

Como en años anteriores, recibió gran atención la celebración del Día de los Derechos Humanos de 1966. Entre las ceremonias figuraron la publicación y transmisión de los mensajes especiales del Presidente de la Asamblea General y del Secretario General, así como la utilización por parte de muchas organizaciones nacio-

nales de radio y televisión de los programas especiales preparados por la Oficina de Información Pública. En el plano nacional, las ceremonias cubrieron una amplia gama, desde las proclamas y declaraciones oficiales de dirigentes nacionales, hasta los conciertos, reuniones públicas, artículos de periódicos y revistas, programas de radio y televisión producidos por las propias organizaciones emisoras, y programas de estudio y acción en agrupaciones cívicas y escuelas. Entre el material especial producido por la Oficina de Información Pública, con la colaboración de la División de Derechos Humanos, figuraron una hoja suelta sobre el Día de los Derechos Humanos, una reseña histórica titulada "*Human Rights: A Challenge and an Opportunity*" y otros materiales. Se dio amplia difusión a las versiones en varios idiomas de la Declaración Universal de Derechos Humanos y a materiales relacionados con las cuestiones del apartheid y la descolonización.

DEPENDENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

A fin de contribuir a dar efecto a la petición del Consejo Económico y Social en el sentido de lograr los mayores comprensión y apoyo posibles de los programas de las Naciones Unidas que contribuyen al progreso económico y social en todo el mundo, la Dependencia de Información Económica y Social intensificó sus esfuerzos destinados no sólo a producir un material más significativo acerca del alcance cada vez mayor de dichos programas, sino también a conseguir una utilización mayor de ese material por los medios de información.

Se hicieron esfuerzos especiales para poner de relieve la actuación de la recientemente creada Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y la celebración del Año Internacional del Turismo y, al mismo tiempo, para aumentar el conocimiento público de las actividades permanentes de las Naciones Unidas relativas, por ejemplo, a la corriente internacional de capitales, la planificación del desa-

rollo, a la ciencia y la tecnología, a los problemas demográficos, a los asuntos de comercio y desarrollo, a la explotación de los recursos naturales, a las cuestiones de vivienda y urbanización y a la reforma agraria. Gran parte de esa información reflejó la aceleración de las actividades de los trabajos operacionales sobre el terreno llevados a cabo en virtud del PNUD o con cargo al presupuesto ordinario, si bien la Dependencia también procuró alcanzar a un auditorio más amplio en cuanto a los estudios de investigación y publicaciones técnicas de las Naciones Unidas sobre problemas fiscales, cuestiones de administración pública, servicios de estadísticas, etc. La Dependencia trabajó en estrecha relación con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, la UNCTAD, el PNUD y la ONUDI.

Se hicieron experimentos de carácter técnico encaminados a satisfacer la necesidad de las revistas especializadas de contar con información más profunda y detallada de la que desean obtener los medios de comunicación de masas. En ese sentido, la producción adoptó dos formas: en primer lugar, a fin de proporcionar información de interés general a los medios informativos, la unidad preparó unos 140 comunicados de prensa; en segundo lugar, a fin de proporcionar material de interés primordial para los lectores especializados o interesados en asuntos regionales, la Dependencia aumentó su publicación de notas generales y de antecedentes, artículos, notas bibliográficas y notas sobre proyectos en desarrollo, distribuyendo durante el año unas 120 en total. Se intensificó la relación personal con directores de publicaciones y corresponsales especializados y se efectuaron esfuerzos concretos para suministrar a los centros de información materiales que pudieran ser de interés para sus regiones respectivas. Además, la Dependencia organizó unas veinte conferencias de prensa o sesiones informativas que estuvieron a cargo de funcionarios especializados en asuntos económicos y sociales, proporcionó oradores para diez grupos y preparó material de carácter económico y social con destino a la ONU — *Crónica Mensual* y otras publicaciones de la Oficina de Información Pública.

Asuntos administrativos y financieros

A. Administración del personal

Durante el último año fueron objeto de estudio y revaluación minuciosos dos de los factores fundamentales que intervienen en la administración de la Secretaría, a saber, la política de contratación de personal y los principios en que se basa la fijación de salarios y dietas de los funcionarios de la administración pública internacional. El examen de la política de contratación fue emprendido en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 2241 (XXI), aprobada por la Asamblea General el 20 de diciembre de 1966, y entrañó el estudio de ciertos aspectos de la labor de la Secretaría en cada uno de los departamentos y oficinas. En cambio, el estudio de los principios en que se basan los sueldos se realizó a consecuencia de una recomendación formulada por la Junta Consultiva de Administración Pública Internacional en el contexto de las propuestas de aumento de sueldos que hizo en 1965, y exigió la celebración de consultas entre todas las organizaciones que integran el sistema de las Naciones Unidas.

En lo que respecta a la administración cotidiana, se registraron dos acontecimientos que afectaron a gran número de funcionarios. El primero tuvo su origen en la resolución 2212 (XXI) de la Asamblea General, por la que se decidió establecer la sede de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) en Viena, mientras que el segundo se produjo a consecuencia del conflicto en el Oriente Medio. Se adoptaron disposiciones especiales para asegurar el traslado del personal de la ONUDI de Nueva York a Viena dentro de un período relativamente breve. En cuanto al Oriente Medio, inmediatamente después del retiro de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas (FENU) se tomaron medidas de urgencia para que el personal que prestaba servicios en la región — ya fuese en misiones políticas o en proyectos de cooperación técnica — pudiese evacuar a sus familias a países vecinos o a su propio país de origen.

CONTRATACIÓN

Los programas especializados de desarrollo económico y social, la situación de la oferta de servicios de personas calificadas y experimentadas en esta esfera y los principios de política establecidos por la Asamblea General ejercieron influencia en las actividades de contratación de personal del año pasado.

En lo que respecta a la plantilla de la Secretaría, la demanda de personal adicional dimanó principalmente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la ONUDI y el Centro de Planificación, Proyecciones y Políticas de Desarrollo

del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. En los órganos subsidiarios, las necesidades en materia de personal continuaron siendo determinadas por los diversos programas de cooperación técnica.

En los países en desarrollo se obtuvo un número cada vez más elevado de candidatos altamente calificados para prestar servicios en las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, la búsqueda de personal dotado de calificaciones especiales se tornó más difícil por ser necesario competir con los programas de asistencia, cada vez más amplios, patrocinados por gobiernos y organizaciones privadas.

Para hacer frente a los problemas planteados por estas condiciones se procuró obtener la cooperación de los gobiernos de los Estados Miembros. Se consultó con regularidad a las Misiones Permanentes ante las Naciones Unidas con respecto a los posibles candidatos y se enviaron anuncios periódicos a todos los Estados Miembros, enumerando las vacantes existentes y previstas en la Secretaría y poniendo de relieve que se daría prioridad en la contratación a los nacionales de países que aún no estaban representados adecuadamente en el personal. Además, funcionarios superiores de la Oficina de Personal visitaron varios países con miras a acelerar los métodos de contratación y preparar fuentes de candidatos para el futuro. En respuesta a una invitación de una de las comisiones económicas regionales, un funcionario superior de esa Oficina participó en las reuniones de un comité de contratación y capacitación de personal establecido por dicha comisión.

Entre el 1º de junio de 1966 y el 31 de mayo de 1967, en la Secretaría se hicieron en total 1.215 nombramientos para el cuadro orgánico y categorías superiores, de los cuales 322 pasaron a formar parte de la plantilla de la Secretaría y 893 se destinaron a programas de cooperación técnica. De los 322 nombramientos, 243 eran puestos sujetos a distribución geográfica, mientras que el resto consistía en cargos para los que se requieren conocimientos lingüísticos especiales. De los 893 nombramientos para los programas de cooperación técnica, 25 correspondieron al programa operacional, ejecutivo y administrativo y 122 recayeron en el programa de fondos fiduciarios.

MEDIDAS ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL

Durante el vigésimo primer período de sesiones, la Quinta Comisión examinó en detalle las normas aprobadas en 1962 por la Asamblea General para la contratación de personal, y su aplicación práctica. Los debates de la Comisión giraron en torno a tres cuestiones principales: 1) el mayor empleo de los nombramientos a plazo fijo, como medio de acrecentar la partici-

pación en la Secretaría de nacionales de los países con representación inadecuada, en especial de los países en desarrollo; 2) la posible modificación de las normas para asegurar una distribución equitativa de los puestos entre nacionales de los diversos países, teniendo en cuenta no sólo el número de puestos asignados a cada país sino también la categoría de los puestos; 3) la introducción de un factor lingüístico en las normas, para lograr un mejor equilibrio entre los idiomas de trabajo de la Organización.

En su informe a la Asamblea General sobre la composición de la Secretaría, que sirvió de base para los debates de la Comisión, el Secretario General recordó que la política de contratación fundada en una distribución geográfica lo más amplia posible tiene por finalidad permitir que la Secretaría refleje y aproveche al máximo los méritos de las diversas culturas y la competencia técnica de todos los Estados Miembros. Como resultado de sus esfuerzos se habían realizado notables progresos hacia la meta de una Secretaría plenamente representativa de todos los Miembros de la Organización. Sólo quedaban diez Estados Miembros cuyos nacionales aún no figuraban entre el personal. De las siete regiones en que fue dividida la composición de la Organización a efectos de contratación de personal, seis ya estaban a punto de completar sus cuotas. Al mismo tiempo, hubo un ligero aumento en la proporción de personal con nombramientos a plazo fijo, que era el 29,7% en comparación con el 28,1% registrado un año antes. El desaprovechamiento inherente al servicio supernumerario comenzaba a ser compensado por una extensión progresiva de los plazos iniciales de nombramiento, por una mayor aceptación de prórrogas de esos plazos iniciales y por una disminución del número de renunciaciones entre el personal nombrado a plazo fijo.

En la Comisión se expresaron opiniones divergentes sobre éste y otros aspectos afines de la política de contratación. Algunas delegaciones se inclinaban hacia un mayor uso de los nombramientos a plazo fijo para lograr que aumentase con más rapidez la participación de nacionales de los países que aún están "insuficientemente representados" en la Secretaría. Otros consideraban que al recurrir en gran medida a nombramientos a plazo fijo se formaba una base endeble para la organización de un personal eficaz e independiente. También difirieron las posiciones adoptadas en la Comisión por las delegaciones acerca de una propuesta de modificar las normas de contratación definiendo las respectivas cuotas nacionales de tal manera que se estableciera una distinción entre los cargos que entrañaban deberes y responsabilidades de carácter directivo y los puestos de categoría subalterna.

La cuestión del equilibrio lingüístico en la contratación del personal fue planteada por algunas delegaciones en el contexto de observaciones sobre la aparente diferenciación practicada por la Secretaría entre los candidatos de habla francesa e inglesa. Se sugirió que el exigir que los candidatos de habla francesa tuviesen conocimientos de inglés sin aplicar una condición equivalente a los candidatos de habla inglesa equivalía a una discriminación contra el francés como idioma de trabajo de la Organización. Otras delegaciones expresaron su aprensión por la introducción del elemento lingüístico en el examen de la política de contratación. Más adelante la cuestión fue ampliada hasta abarcar los tres idiomas de trabajo que se citan en el artículo 51 del re-

glamento de la Asamblea General, a saber, el español, el francés y el inglés.

Al terminar el debate, la Quinta Comisión aprobó un proyecto de resolución, posteriormente aprobado por la Asamblea General, tras enmienda, como resolución 2241 (XXI). En dicha resolución la Asamblea, aunque reconocía la necesidad de que hubiese una proporción importante de nombramientos permanentes y nombramientos a plazo fijo de mayor duración para dar estabilidad y eficacia a la Secretaría, 1) estimaba que, como medida temporal, un aumento de la contratación del personal a base de nombramientos a plazo fijo podría ayudar a lograr una distribución geográfica equilibrada; 2) pedía al Secretario General que diese preferencia a candidatos pertenecientes a países insuficientemente representados; 3) pedía al Secretario General que estudiase la cuestión de determinar los límites convenientes de puestos para cada país, teniendo en cuenta la categoría del nombramiento junto con el número de puestos; y pedía además al Secretario General que estudiase los métodos que convendría emplear para aplicar un criterio más equitativo en el uso de los idiomas de trabajo de la Organización y establecer un mejor equilibrio entre esos idiomas en la contratación de personal en todos los niveles.

CONDICIONES DE SERVICIO

En su vigésimo primer período de sesiones, la Asamblea General tomó nota de dos asuntos que fueron señalados a su atención en relación con las condiciones de servicio del personal, y aprobó varias enmiendas a los Estatutos de la Caja Común de Pensiones del Personal. Dichos asuntos se relacionaban con la ampliación del plan de seguro médico del personal para abarcar períodos subsiguientes a su separación del servicio, y el reembolso parcial de los pagos hechos por concepto de seguro social por el personal de la Sede de nacionalidad estadounidense. Las enmiendas a los Estatutos de la Caja Común de Pensiones del Personal tuvieron por principal resultado la eliminación de la afiliación parcial y el retiro de ciertas restricciones médicas aplicadas a las prestaciones.

En conformidad con la cláusula 6.2 del Estatuto del Personal de las Naciones Unidas, los planes de seguro médico, a los que contribuyen tanto el funcionario como la Organización, amparan a todo el personal de la Sede y de otras tres oficinas principales de la Organización y gran parte del personal de otras oficinas. Estos planes son optativos para el funcionario mientras éste presta servicios en la Organización, pero su aplicación cesa cuando deja de prestar esos servicios. El Secretario General estimó que la terminación automática de la protección al producirse la separación del servicio era demasiado restrictiva y no podía justificarse por referencia a las prácticas nacionales o internacionales. Por consiguiente, propuso que los actuales planes de seguro médico se ampliasen de manera que continuaran protegiendo a los funcionarios y a las personas a su cargo o supérstites cuando aquéllos se jubilaran o cesaren de prestar servicios debido a incapacidad o muerte. En las propuestas se esbozaban condiciones en virtud de las cuales esto sería factible sin alterar los principios fundamentales que rigen el funcionamiento de los planes.

La Asamblea General tomó nota de las propuestas del Secretario General. En consecuencia, a partir del 1º de enero de 1967, los funcionarios que así lo soliciten

y que hayan sido afiliados contribuyentes a un plan de seguro médico de las Naciones Unidas durante diez años antes de su jubilación o durante tres años antes de dejar de prestar servicios por incapacidad o muerte, podrán seguir gozando de la protección del seguro mientras reciban prestaciones periódicas con arreglo a los Estatutos de la Caja Común de Pensiones o a los artículos del reglamento del personal que rigen el pago de indemnizaciones por muerte, lesiones o enfermedades sufridas en comisión de servicio. Los ex funcionarios o las personas a su cargo o supérstites pueden disfrutar de la protección ampliada con arreglo a condiciones análogas.

De acuerdo con la legislación de los Estados Unidos, todo funcionario de nacionalidad estadounidense que preste servicios dentro de los Estados Unidos debe abonar un impuesto de seguridad social que se aplica al funcionario de las Naciones Unidas a una tasa superior a un 50% a la que deben abonar las otras personas empleadas en los Estados Unidos. Esta diferencia obedece a que la cuota del impuesto correspondiente al empleador no puede ser cobrada a la Organización. En 1966, el Secretario General decidió reembolsar a esos funcionarios el importe de la contribución pagadera por los mismos con arreglo a la cláusula 3.3 del Estatuto como un descuento de sus sueldos comparable a un impuesto a la renta, equivalente a la diferencia entre el importe que el funcionario debería pagar si estuviese al servicio de un empleador nacional y el importe que ha abonado como funcionario de las Naciones Unidas.

La Asamblea General tomó nota de la interpretación dada a la cláusula 3.3 por el Secretario General. El reembolso, con efectividad al 1º de enero de 1967, se efectuaría en lo que respecta a 1966 y años subsiguientes con cargo al Fondo de Nivelación de Impuestos sobre la base del sistema establecido por la Asamblea General en virtud de su resolución 973 A (X).

En conformidad con lo dispuesto en la resolución 2050 (XX) las nuevas tasas de contribución del personal aprobadas por la Asamblea entraron en vigor en Nueva York, en lo que respecta a los funcionarios del Cuadro de Servicios Generales, el 1º de octubre de 1966, cuando sus sueldos fueron aumentados por primera vez desde la aprobación de la resolución.

En su resolución 2191 (XXI), la Asamblea General aprobó una serie de enmiendas a los Estatutos de la Caja Común de Pensiones del Personal de acuerdo con las recomendaciones formuladas por el Comité Mixto de Pensiones del Personal. Las enmiendas tuvieron por efecto principal reemplazar el plan de afiliación parcial a la Caja, en vigor desde 1958, por una forma modificada de afiliación con plenos derechos que se aplicará uniformemente a todo el personal contratado a partir del 1º de enero de 1967 con nombramientos de un año o más, o quienes completen un año de servicios a base de nombramientos de menor duración. Las contribuciones de los participantes y las organizaciones miembros siguieron consistiendo en el 7% y el 14%, respectivamente, de la remuneración pensionable. El sistema de prestaciones permaneció inalterado salvo en lo tocante a que la elegibilidad de tales funcionarios para optar a pensiones pasó a depender de la prestación de servicios con pago de contribuciones durante por lo menos cinco años. En las enmiendas figuraban disposiciones transitorias a fin de que los que eran afiliados parciales al 31 de diciembre de 1966 continuasen en esa condición.

Las enmiendas eliminaron además el requisito de que todos los afiliados y afiliados parciales llenasen las normas médicas establecidas por la Caja, como condición para tener derecho a prestaciones por invalidez y muerte durante los primeros cinco años de servicios con aporte de contribuciones. Todo el personal que previamente no había sido elegible para tales prestaciones pasó a tener derecho a las mismas, con excepción de todo funcionario que se negare a someterse al reconocimiento médico necesario.

En esa misma resolución, la Asamblea General decidió mantener hasta el 31 de diciembre de 1969 el sistema de ajuste de las pensiones, pensiones vitalicias en curso de pago y pensiones vitalicias diferidas establecido en su resolución 2122 (XX) de 21 de diciembre de 1965.

COMPOSICIÓN DE LA SECRETARÍA

Al 31 de mayo de 1967, el personal de la Secretaría de las Naciones Unidas constaba de 9.437 funcionarios, de los cuales 6.625 prestaban servicios en los principales órganos de las Naciones Unidas y 2.812 en determinados órganos auxiliares. En estas cifras se incluyen los funcionarios con contratos por un año o más, así como los que tienen contratos ordinarios, permanentes o por períodos de prueba, pero no el personal nombrado para conferencias u otros servicios a corto plazo, ni tampoco cierto personal local.

De los 6.625 funcionarios que prestaban servicios en los órganos principales, 2.347 pertenecían al Cuadro Orgánico y categorías superiores, 4.063 al Cuadro de Servicios Generales y categorías afines, y 215 al Servicio Móvil. Estaban distribuidos entre los distintos órganos y oficinas, según el siguiente detalle: Sede de las Naciones Unidas, 3.388; Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (con excepción de la CEPE), 706; Comisión Económica para Europa, 193; Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente, 310; Comisión Económica para América Latina, 353; Comisión Económica para África, 334; Oficina de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas en Beirut, 24; Centros de Información de las Naciones Unidas, 253; Misiones especiales, 576; Corte Internacional de Justicia, 30; Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 280; Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, 178.

De los 2.812 funcionarios que prestaban servicios en determinados órganos auxiliares de la Organización, 698 pertenecían al Cuadro Orgánico y categorías superiores y 978 al Cuadro de Servicios Generales y otras categorías, según el siguiente detalle: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 730; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 538; Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 272; Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas, 39; Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (con exclusión del personal local), 97.

Otros 1.075 funcionarios prestaban servicios como expertos en asistencia técnica en proyectos administrados por la Secretaría, y 61 personas desempeñaban funciones en virtud de programas operacionales, ejecutivos y administrativos de la Organización en condiciones equivalentes a las de los funcionarios nacionales.

COORDINACIÓN ENTRE LOS ORGANISMOS

La Junta Consultiva de Administración Pública Internacional, que con arreglo a lo dispuesto en la resolución 1981 B (XVIII) asesora al Comité Administrativo de Coordinación (CAC) en asuntos relacionados con la administración del personal de las Naciones Unidas y los organismos conexos, celebró su 14º período de sesiones en Nueva York, del 30 de junio al 15 de julio de 1966. En su informe al CAC, la Junta formuló ciertas observaciones acerca de la revisión de los principios en que se basa la fijación de los sueldos del personal de la Administración Pública Internacional y la determinación de las condiciones en que presta servicios el personal del Cuadro de Servicios Generales. Recomendó, como medida provisional, que se aumentara el importe del subsidio de educación y se revisaran las normas que rigen los viajes por vía aérea. Luego de examinar el informe de la Junta, el CAC, en su 42º período de sesiones celebrado en Nueva York los días 11 y 12 de octubre de 1966, decidió sobre las propuestas que debían presentarse a la Asamblea General.

El Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas del CAC celebró su 28º período de sesiones en Nueva York del 1º al 14 de marzo de 1967. En su informe, que fue aprobado por el CAC en su 43º período de sesiones, que tuvo lugar en Ginebra los días 5 y 6 de abril de 1967, el Comité se manifestó de acuerdo, entre otras cosas, con los textos de los informes que serían presentados a la Junta Consultiva de Administración Pública Internacional para que ésta efectuara la revisión del sistema de sueldos de las Naciones Unidas, con las nuevas medidas destinadas al establecimiento de normas comunes de clasificación, y con la cooperación con el Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas (UNITAR) en estudios destinados a mejorar los programas de formación de personal y desarrollo de su carrera.

El Comité de Expertos encargado de estudiar los ajustes por lugar de destino, establecido en 1958 para asesorar al CAC sobre la administración del sistema de ajustes por lugar de destino, celebró su noveno período de sesiones en Roma en mayo de 1967.

El Comité de Expertos examinó nuevos estudios del costo de vida en Roma y Viena en relación con el índice utilizado como base para el sistema de sueldos (105, señalado para Ginebra en diciembre de 1965) y propuso ciertas revisiones a los índices de ajustes por lugar de destino correspondientes a esas dos sedes. También propuso que se revisara el índice de ajuste por lugar de destino correspondiente a Montreal en relación con el básico de Ginebra para tener en cuenta los resultados de un nuevo estudio del costo de la vivienda, y confirmó los índices de ajuste por lugar de destino fijados para otras ciudades en que hay oficinas de la Organización.

El Comité de Expertos revisó un informe sobre los progresos realizados en lo que respecta a establecer un nuevo índice especial para Ginebra destinado a medir las variaciones del costo de la vida que afectan al personal internacional.

El informe, en el que figuran las recomendaciones del Comité de Expertos, fue presentado al CAC.

B. Servicios de reuniones y documentos

Los Servicios de Conferencias en la Sede, los Servicios de Conferencias y Servicios Generales de la Oficina Europea de las Naciones Unidas en Ginebra y los servicios competentes de las secretarías de las comisiones económicas regionales facilitan intérpretes, traductores, redactores de actas y revisores, así como el concurso de diversos servicios de edición, conferencias y documentación para todas las reuniones de las Naciones Unidas y otras que se celebran con el patrocinio de la Organización.

En los últimos años se ha señalado a la atención de los gobiernos de los Estados Miembros el hecho de que la demanda de servicios de reuniones y de documentos rebasa constantemente la capacidad de la Secretaría. Esto no sólo se hizo en los proyectos de presupuesto y otros documentos pertinentes presentados por el Secretario General, así como en los informes de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, sino también en los informes sobre el plan de conferencias presentados a la Asamblea General en su vigésimo primer período de sesiones.

SERVICIOS DE CONFERENCIAS Y REUNIONES

Como indica el siguiente cuadro, el número total de reuniones celebradas (del 1º de junio al 31 de mayo) ha ido aumentando constantemente entre los años 1964/1965 y 1966/1967:

	1964/1965	1965/1966	1966/1967
Sede	1.722	2.326	2.602
Ginebra	1.798	2.510	2.674
Organismos especializados y organizaciones intergubernamentales	1.701	2.153	888

El constante aumento del número de reuniones ha dado lugar a que las diversas dependencias que prestan servicios de conferencias se viesen recargadas hasta su máxima capacidad — y frecuentemente, en exceso de ella — no sólo para proporcionar instalaciones físicas sino también para prestar servicios de interpretación y documentos.

SERVICIOS DE DOCUMENTOS

Los servicios de control editorial colaboraron con los respectivos departamentos de la planificación y redacción de sus documentos, ayudándoles a evitar duplicaciones y a producir textos claros y sucintos. También siguieron desempeñando la función que les corresponde en lo que respecta a controlar y limitar la documentación, asesoraron a la Junta de Publicaciones en asuntos de redacción y prepararon originales para los distintos medios de reproducción.

Las necesidades globales en materia de documentación continuaron aumentando a medida que se solicitaba un uso más amplio de todos los idiomas oficiales para la documentación y las publicaciones corrientes: esto afectó a todos los servicios de producción y distribución y, en particular, a los de traducción y mecanografía. Fue necesario recurrir en grado considerablemente mayor a las traducciones por contrata y, aunque por este método se tradujeron unas 30.000 páginas y, además se lograron ciertos progresos en cuanto a reducir los atrasos en las traducciones, no fue posible eli-

minar el problema que plantea la documentación atrasada en chino, español y ruso. A causa de la constante tendencia a aumentar el número de reuniones — y también, en ciertos casos, debido al plan de reuniones — durante algunos períodos los departamentos sustantivos o los servicios de documentación, o ambos, no pudieron presentar a tiempo los documentos en todos los idiomas de trabajo de los órganos interesados.

A fin de reducir los gastos de impresión por contrata, se hizo mayor uso de los servicios internos de reproducción. El volumen de trabajo así realizado representó, a los precios vigentes en el exterior, un valor de 468.727 dólares en 1966, contra 465.000 dólares en 1965, sin tener en cuenta las economías resultantes de la reproducción interna de la mayor parte de la documentación preparada para conferencias internacionales, así como para la UNCTAD y la ONUDI.

También se hizo mayor uso de los servicios internos para preparar diversas monografías sobre cuestiones económicas y sociales, así como algunas sobre estadística. El valor del trabajo realizado en relación con todas estas actividades, calculado a base de precios externos, representó 102.090 dólares en 1966 frente a 58.300 dólares en 1965.

Los gastos de imprenta en la zona de la Sede representaron un 34,28% del total, contra un 35,09% el año anterior.

El programa de ventas fue ampliado nuevamente y se calcula que en 1967 alcanzará un valor bruto de 1.510.000 dólares, contra 1.247.350 dólares en 1966.

SERVICIOS DE BIBLIOTECA

Al igual que las demás secciones de la Oficina de Servicios de Conferencias, la Biblioteca Dag Hammarskjöld debió luchar con los problemas que plantean el volumen y la complejidad crecientes de la documentación de las Naciones Unidas. Fueron especialmente afectadas la Sección de Consulta de Documentos, que tiene a su cargo esta documentación, mantiene un catálogo-índice de la misma y proporciona servicios de consulta de documentos, y la Sección de Índices, que reúne los documentos, los registra y los incluye en los índices. De tiempo en tiempo se produjeron retrasos en los trabajos de archivo, preparación de índices y encuadernación que amenazaron con disminuir la eficacia de ambas secciones. Al mismo tiempo se hizo evidente que los lectores deseaban un control bibliográfico más completo y mejor de la documentación, como lo atestiguan las respuestas recibidas al cuestionario sobre servicios de biblioteca que se envió durante el año a las misiones permanentes y al personal de la Secretaría.

Era evidente que, aunque con un modesto aumento del personal, se lograría impedir los retrasos y proporcionar servicios adecuados, para poder ampliar y mejorar los servicios de índices y referencias por medios convencionales sería necesario aumentar en gran número ese personal. Por consiguiente, se hizo un estudio profundo de la posible utilización de elementos mecánicos en los trabajos de archivo y retiro de documentos. De este estudio, que aún se encuentra en su etapa preliminar, se desprende cada vez más claramente que la mejor solución reside en el uso de una computadora para preparar índices y bibliografías y almacenar la documentación en un microformato fácilmente manejable.

Las adiciones a la biblioteca — basadas en donaciones y canjes —, que cada año constituyen aproximadamente las dos terceras partes de las entradas totales, aumentaron ligeramente en 1966; el número de publicaciones periódicas compradas se mantuvo al nivel de 1965 (aproximadamente 111.000 ejemplares); sin embargo, el número de libros comprados disminuyó marcadamente, de 5.105 en 1965 a 3.623 en 1966. Esto se explica porque, mientras la partida destinada a libros y publicaciones en serie aumentó en un 3%, los precios aumentaron en un 6% y, dado que las publicaciones en serie eran las de más inmediata demanda, las consecuencias del aumento de los precios repercutieron principalmente en los fondos destinados a libros.

La cooperación entre las diversas bibliotecas de las organizaciones pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas, incluso las comisiones económicas regionales y los organismos especializados, fue más estrecha que nunca. Se publicó, a título de esfuerzo cooperativo, un opúsculo titulado *The Libraries of the United Nations*; el informe anual sobre las bibliotecas de la Sede y de Ginebra fue ampliado incluyendo los correspondientes a las bibliotecas de las comisiones económicas regionales; en junio de 1967 se celebró en Roma una reunión mixta de los organismos para examinar los problemas de la preparación de índices.

El uso de la Biblioteca por estudiosos ajenos a la Organización fue más intenso que nunca; se expidieron pases a 709 lectores en (comparación con 624 en 1965 y 547 en 1964) y las cabinas de estudio estuvieron en constante demanda.

C. Asuntos financieros

1. Aspectos presupuestarios y conexos

PRESUPUESTO ORDINARIO

En su vigésimo primer período de sesiones, por su resolución 2195 (XXI) de 16 de diciembre de 1966, la Asamblea General consignó créditos revisados para 1966 por un valor bruto de 121.080.530 dólares y aprobó un presupuesto revisado de ingresos por valor de 20.405.200 dólares (incluidos 12.450.000 dólares por concepto de contribuciones del personal). Por su resolución 2242 (XXI), de 20 de diciembre de 1966, la Asamblea consignó créditos para 1967 por un valor bruto de 130.314.230 dólares y aprobó un presupuesto de ingresos de 13.249.800 dólares por concepto de contribuciones del personal y de 8.392.626 dólares de ingresos varios, con lo que el presupuesto total de ingresos ascendió a 21.642.426 dólares.

El presupuesto bruto de gastos, incluso las obligaciones pendientes de pago correspondientes a 1966 ascendió a 119.593.680 dólares. Los ingresos por concepto de contribuciones del personal fueron de 12.658.216 dólares y los de otras fuentes de 8.389.832 dólares, con lo que los gastos netos sumaron 98.545.632 dólares.

El saldo en cuenta de superávit al 31 de diciembre de 1966 era de 6.265.555 dólares después de haberse deducido, de conformidad con la recomendación de la Asamblea, la suma de 1.151.915 dólares por concepto de gastos de la Misión de Observación de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán correspondientes a 1965.

En el proyecto inicial de presupuesto para 1968, que forma parte de la documentación que ha de presentarse a la Asamblea en su vigésimo segundo período de sesiones, se prevén gastos brutos por valor de 141.619.300 dólares. Los ingresos por concepto de contribuciones del personal se calculan en 15 millones de dólares y los ingresos de otras fuentes en 8.936.700 dólares, lo que deja unos gastos netos calculados en 117.682.600 dólares. Estos cálculos deberán ser revisados si se incorporan nuevas partidas de gastos como consecuencia de las decisiones del Consejo Económico y Social en su 42° y 43° períodos de sesiones y de la Asamblea General en su vigésimo segundo período de sesiones.

FONDO DE OPERACIONES

En sus resoluciones 2240 (XXI) y 2244 (XXI), la Asamblea General fijó el Fondo de Operaciones para el ejercicio económico de 1967 en 40.148.000 dólares y resolvió que los Estados Miembros efectuarían anticipos al Fondo con arreglo a la escala adoptada para determinar las cuotas correspondientes al presupuesto de 1967.

A fines de mayo de 1967, quedaban todavía por percibir 64.000 dólares por concepto de anticipos de los Estados Miembros.

Al 31 de mayo de 1967, el Secretario General, haciendo uso de la autorización concedida por la Asam-

blea General en el párrafo 4 de la resolución 2244 (XXI), había anticipado con cargo al Fondo las siguientes cantidades, por un total de 40.084.000 dólares: 12.742 dólares para gastos imprevistos y extraordinarios; 252.142 dólares para adquisiciones y actividades autoamortizables; 10.759.823 dólares para financiar la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas; y 29.059.293 dólares para la ejecución del presupuesto ordinario en espera del pago de las cuotas de los Estados Miembros.

CUOTAS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO ORDINARIO

Las cuotas de los Estados Miembros destinadas a sufragar el presupuesto ordinario de las Naciones Unidas para 1967 fueron establecidas según las resoluciones 2242 C (XXI), de 20 de diciembre de 1966, sobre la base de las escalas de cuotas para 1967 aprobadas por la Asamblea General en su resolución 2118 (XX), de 21 de diciembre de 1965, y la resolución 2240 (XXI), de 20 de diciembre de 1966. La resolución 2240 (XXI) también establecía las cuotas correspondientes a los nuevos Miembros admitidos en la Organización en 1966 para el ejercicio económico correspondiente.

Al 31 de mayo de 1967, la situación con respecto a las cuotas destinadas a sufragar el presupuesto ordinario de 1967 y años precedentes era la siguiente:

	1967	1966	1965	1964	1963
<i>(En dólares de los EE. UU.)</i>					
Total neto de las cuotas	109.413.985	105.129.231	91.897.565	85.194.632	82.499.193
Pagos efectuados	29.355.433	83.785.509	87.415.437	85.115.914	82.491.388
Saldo debido	80.058.552	21.343.722	4.482.128	78.718	7.805

CUENTA ESPECIAL DE LA FUERZA DE EMERGENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS

El importe bruto de los gastos presupuestarios para el mantenimiento y funcionamiento de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas en 1966, último ejercicio económico cerrado, incluidas las obligaciones pendientes de pago, ascendió a 16.145.984 dólares.

En su vigésimo primer período de sesiones, la Asamblea General aprobó en la resolución 2194 (XXI), de 16 de diciembre de 1966, los cálculos presupuestarios revisados presentados por el Secretario General para el año 1966 por un total de 16.146.000 dólares, y autorizó al Secretario General a sufragar los gastos efectivos que excedan el crédito de 15 millones de dólares, y dentro de la cuantía de 16.146.000 dólares, utilizando la cuenta de superávit de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas.

En la misma resolución, la Asamblea General consignó un crédito de 14 millones de dólares para el año 1967 y decidió, como arreglo especial y sin perjuicio de las posiciones de principio que adopten los Estados Miembros en el examen que pudiera hacer la Asamblea de los arreglos para financiación de las operaciones de mantenimiento de la paz, decidió prorratear la cantidad de 740.000 dólares para 1967 entre los Estados Miembros menos desarrollados económicamente, con arreglo a la escala de cuotas para 1967, y la can-

tidad de 13.260.000 dólares para 1967 entre los Estados Miembros económicamente desarrollados, con arreglo a la escala de cuotas para 1967, a la que se agregará, para poder contar con una reserva, una cantidad adicional que aportará cada contribuyente de este último grupo y que equivaldrá a un 25% de su cuota, quedando entendido que estas contribuciones adicionales serán reembolsables a prorrata cuando la Asamblea General determine que ya no son necesarias, en su totalidad o en parte.

La Asamblea General expresó al mismo tiempo la esperanza de que los arreglos especiales previstos no tendrían que repetirse en años futuros y que la Asamblea podría llegar a un acuerdo sobre un método aceptable para distribuir equitativamente el costo de las operaciones de mantenimiento de la paz que ocasionasen gastos considerables.

Al 31 de mayo de 1967, la situación con respecto a las cuotas destinadas a sufragar los gastos autorizados para 1967 era la siguiente: total neto de las contribuciones, 17.315.000 dólares; pagos efectuados, 4.734.199 dólares; saldo pendiente de pago, 12.580.801 dólares.

Las consecuencias financieras de la retirada de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas, ordenada el 19 de mayo de 1967, no se conocerán hasta dentro de cierto tiempo.

CUENTA *ad hoc* PARA LA OPERACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN EL CONGO

En su resolución 1885 (XVIII), de 18 de octubre de 1963, la Asamblea General decidió que, en lo concerniente a cualesquier otros gastos que fuere necesario efectuar después del 30 de junio de 1964 para la liquidación del equipo y los suministros pertenecientes a las Naciones Unidas y para la terminación de la Operación, incluido el cierre de las cuentas, el Secretario General, con el asentimiento de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, quedaba autorizado a utilizar para esos fines, en la medida necesaria, cualquier saldo remanente en la Cuenta "ad hoc". La suma utilizada para el año 1966 fue de 65.166 dólares.

El saldo de la cuenta de superávit al 31 de diciembre de 1966 ascendía a 37.495.903 dólares, es decir 30.248.724 dólares de los saldos no utilizados de los créditos de 1960 a 1964 inclusive, más las asignaciones de 1965 y 1966, que junto con los ingresos varios acumulados de 1961 a 1966, totalizaba 11.620.929 dólares, menos una suma de 4.373.750 dólares que había sido transferida para financiar la liquidación de la Operación durante 1964, 1965 y 1966 de conformidad con la resolución 1885 (XVIII) de la Asamblea General.

CUENTA ESPECIAL DE LA FUERZA DE LAS NACIONES UNIDAS EN CHIPRE

En su resolución 186 (1964), de 4 de marzo de 1964, el Consejo de Seguridad recomendó que se estableciera en Chipre una Fuerza de las Naciones Unidas por un período de tres meses. El mandato de la Fuerza fue ampliado posteriormente varias veces, la más reciente de ellas en la resolución 231 (1966) de 15 de diciembre de 1966, por la que se prolongó dicho mandato hasta el 26 de junio de 1967.

Tal como se prevé en la resolución 186 (1964), los gastos de la Fuerza son sufragados por los gobiernos que proporcionan contingentes, por el Gobierno de Chipre y mediante contribuciones voluntarias de varios Estados Miembros y no miembros.

En un informe publicado el 8 de diciembre de 1966, el Secretario General hacía constar que los gastos calculados de las Naciones Unidas por concepto de mantenimiento de la Fuerza, desde su creación el 27 de marzo de 1964 hasta el 26 de diciembre de 1966, ascendían a 59.430.000 dólares, y que los gastos calculados de la Organización por el período adicional de seis meses del 27 de diciembre de 1966 al 26 de junio de 1967 ascendían a 10.285.000 dólares. En consecuencia, el cálculo total de los gastos de la Organización desde el 27 de marzo de 1964 al 26 de junio de 1967 ascendía a 69.715.000 dólares. Estos cálculos incluían el costo de la repatriación final de los contingentes y los gastos de liquidación ulteriores. No incluían, en cambio, los gastos adicionales que absorbían a expensas propias los Estados Miembros que proporcionaban a la Fuerza contingentes y unidades, a saber Australia, Austria, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Nueva Zelanda, el Reino Unido y Suecia.

El total de promesas de contribuciones voluntarias recibidas hasta el 31 de mayo de 1967 para el período que expira el 26 de junio de 1967 sumaba 63.715.630 dólares. La suma adicional necesaria para satisfacer

obligaciones contraídas y mantener la Fuerza hasta el 26 de junio era, por tanto, 5.999.370 dólares.

2. Procedimientos administrativos y presupuestarios de las Naciones Unidas

COMITÉ ESPECIAL DE EXPERTOS ENCARGADO DE EXAMINAR LAS FINANZAS DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

El Comité Especial de Expertos, establecido en virtud de la resolución 2049 (XX) aprobada por la Asamblea General el 13 de diciembre de 1965, terminó su tarea y presentó su segundo informe a la Asamblea General en su vigésimo primer período de sesiones.

En dicho informe, las recomendaciones del Comité Especial de Expertos abarcaban cuestiones tales como preparación, presentación y ejecución del presupuesto: ciclo presupuestario; unificación de nomenclatura; auditorías e inspecciones; planificación y evaluación de programas; coordinación; conferencias, reuniones y documentación; ubicación de los servicios de las Naciones Unidas; gastos administrativos de los programas extrapresupuestarios; distribución geográfica del personal de la Secretaría de las Naciones Unidas.

En su resolución 2150 (XXI), la Asamblea General aprobó por unanimidad el 4 de noviembre de 1966 las recomendaciones del Comité Especial de Expertos. El 20 de diciembre de 1966, el Presidente de la Asamblea General anunció que, en conformidad con el párrafo 67 del segundo informe del Comité Especial de Expertos, había designado a los siguientes Estados Miembros para que presentaran candidatos para la propuesta dependencia de inspección. Estados Unidos de América, Francia, India, México, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Unida de Tanzania, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

En su 43º período de sesiones, el CAC declaró que ya se estaba aplicando un número bastante elevado de las recomendaciones del Comité Especial de Expertos respecto de los métodos y procedimientos presupuestarios, y que estaban en consideración otras que eran de competencia de los jefes ejecutivos de los organismos especializados y del OIEA para ser aplicadas en el momento oportuno. Otras medidas sugeridas, en cambio, requerirían decisiones por parte de los órganos directivos o legislativos de las organizaciones interesadas. Entre tanto, el CAC informó que se habían realizado considerables progresos para llegar a un acuerdo sobre las modalidades de la creación y el funcionamiento de una dependencia conjunta de inspección, y previó que dicha dependencia podía entrar plenamente en actividad al 1º de enero de 1968.

D. Servicios generales

Desde hace años, la expansión de las actividades de las Naciones Unidas en la Sede ha creado dificultades respecto de los locales de oficina, así como de espacio para depósito, reproducción de documentos y estacionamiento de automóviles. Después del traslado del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a locales alquilados, en 1966 también se mudó fuera del edificio de la Sede el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. La Organización de las Naciones

Unidas para el Desarrollo Industrial se trasladará a Viena en 1967. Aunque estos cambios han aliviado temporalmente la escasez de locales de oficina en la Sede, a fines de 1967 no habrá prácticamente locales disponibles, dado que el número de funcionarios cuya contratación está autorizada para el año está muy cerca del número de miembros del personal de la ONUDI que irá a Viena.

Esta situación se pronosticó repetidas veces, y aunque se han hecho varios estudios no se ha encontrado una solución a largo plazo para el problema. Están en estudio nuevas propuestas y, en su vigésimo segundo período de sesiones, se presentará a la Asamblea General un informe detallado sobre la cuestión.

Entre las mejoras de los edificios y los terrenos se incluye el aumento del número de asientos en la sala del Consejo de Seguridad, la ampliación de las instalaciones de energía eléctrica y de iluminación de emergencia y la automatización de los ascensores en el edificio de la Secretaría. Se han terminado los trabajos correspondientes a las dos primeras actividades, y la automatización de los ascensores se habrá completado en 1968. En algunas salas de conferencias se reemplazaron las instalaciones de telecomunicaciones por equipo mejorado y más eficiente. La Oficina de Servicios Generales prestó asistencia en la planificación de los proyectos de construcción para los edificios de las Naciones Unidas en Ginebra, La Haya y Santiago, y para la Escuela Internacional de las Naciones Unidas en Nueva York.

La expansión de las actividades de cooperación técnica impuso nuevas exigencias a los servicios administrativos auxiliares que proporciona la Oficina de Servicios Generales, en particular las actividades de compra y contratación y los servicios de comunicaciones. En el período que se examina se hicieron pedidos de bienes y servicios por un total de unos 19.500.000 dólares. Se introdujeron mejoras en las disposiciones para la transmisión radial a fin de atender al incremento del tráfico de radiogramas, y se reorganizó el servicio de valija diplomática.

Si bien continuaron prestándose servicios administrativos al Organismo de las Naciones Unidas encargado de la Vigilancia de la Tregua en Palestina, la Comisión

de las Naciones Unidas para la Unificación y la Rehabilitación de Corea, el Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán y la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre, se han cerrado las oficinas de la misión de observación en Santo Domingo y del representante técnico de la Comisión de Conciliación de las Naciones Unidas para Palestina. El retiro de la FENU exigió disposiciones administrativas especiales. En agosto de 1966 se estableció una pequeña misión de observación para el Representante Especial del Secretario General en Camboya y Tailandia. Además, se proporcionaron servicios administrativos y financieros al Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, a las misiones visitadoras y a las misiones especiales, en relación con sus visitas a diferentes territorios.

En el curso del año pasado la Administración Postal de las Naciones Unidas obtuvo un ingreso bruto de más de 3.500.000 dólares procedente de la venta de sellos. Se hizo un arreglo con el Gobierno del Canadá en virtud del cual se vende en el Pabellón de las Naciones Unidas de EXPO 67, en Montreal, una emisión especial de cinco sellos con fines filatélicos y postales. Esta es la primera vez que los sellos de las Naciones Unidas han tenido valor para franqueo fuera de la Sede de Nueva York. Otros sellos conmemoraron las actividades de mantenimiento de la paz de observadores de las Naciones Unidas, el vigésimo aniversario del UNICEF, el Convenio Internacional del Café, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la independencia de anteriores territorios en fideicomiso y territorios no autónomos. La Administración Postal continuó dando publicidad a la labor de las Naciones Unidas mediante la distribución mundial de exposiciones, películas cinematográficas y material de promoción. La gira de una exposición filatélica móvil especial por veinticinco ciudades de diecinueve Estados Miembros europeos fue un proyecto de importancia. Esta exposición, que dio publicidad no sólo a los sellos de las Naciones Unidas sino a toda la gama de actividades de la Organización, fue vista por más de 180.000 personas.

REFERENCIAS

A. Administración del personal

Para los documentos pertinentes, véase:

- a) *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Anexos*, temas 73, 74, 81 y 82 del programa;
- b) E/4337.

B. Servicios de reuniones y documentos

Para los documentos pertinentes y una lista de las actas correspondientes, véase *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Anexos*, tema 75 del programa.

C. Asuntos financieros

Para los documentos pertinentes, véase:

- a) *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Anexos*, temas 21, 73, 74 y 80 del programa;
- b) *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Suplemento No. 5 (A/6305), Suplemento No. 5A (A/6305/Add.1) y Suplemento No. 7 (A/6307)*;
- c) *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo segundo período de sesiones, Suplemento No. 5 (A/6705); Suplemento No. 5A (A/6705/Add.1) y Suplemento No. 7 (A/6707)*;
- d) E/4337.